PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

Causa nro. 1.140/19

Orden interno 3424

Nro. de Orden

Libro de Sentencia

En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la fecha que se indica junto a la firma que obra al pie de la presente, habiendo sido designado por sorteo el Dr. Eugenio Casas del **Tribunal en lo Criminal n° 2**, para integrar el órgano jurisdiccional en calidad de Juez unipersonal en virtud de lo establecido en los arts. 22 y concordantes del Código Procesal Penal, en esta **causa N° 1140/19, número de orden interno 3424, (I.P.P. n° 17215/17) caratulada: "MONTEROS, HUMBERTO ARNALDO, JOSÉ BERNARDO BURGOS, PABLO DAVID GUTIERREZ, MARIO MATÍAS GONZALEZ, GUILLERMO ESTEBAN MOLINA, SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES, WALTER RAFAEL PAIZ, RAUL ERNESTO ERBIN, ROBERTO SABINO RIOS, CARLOS ARIEL CARRILLO, NELSON DAMIÁN CABRERA, DAVID EZEQUIEL MUÑOZ, ARANDA ANÍBAL ALEJANDRO y SERGIO DANIEL VASQUEZ por los delitos de asociación ilícita,**

extorsión y otros” y habiéndose realizado el debate oral, corresponde pasar a resolver.

ANTECEDENTES

PRIMERO:

Que el Sr. Agente Fiscal, Dr. Gustavo Zorzano, al momento de formular los alegatos comenzó señalando que desistía de formular acusación con relación al señor José Bernardo Burgos con relación a los hechos identificados como número 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 30, 34, 39 y 40.

Que acusó al imputado José Bernardo Burgos como co-autor penalmente responsable de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA -en calidad de jefe- (HECHO 1) y EXTORSIÓN REITERADA (hechos consumados identificados como los números 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29; y un hecho de extorsión en grado de tentativa, identificado con el número 8), todos ellos en concurso real de delitos y en los términos de los artículos 210, 168, 55, 42 y 45 todos del Código Penal.

Acusó el señor Agente Fiscal al señor Mario Matías Gonzalez como co-autor en los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA -en calidad de

miembro- (HECHO 1), EXTORSIÓN REITERADA -en calidad de coautor- (hechos identificados con los números 16, 22, 32, 33 y 35) y ATENTADO AGRAVADO A LA AUTORIDAD -en calidad de coautor- (HECHO 44), en concurso real de delitos y en los términos de los artículos 210, 168, 238 -inciso 2°-, 55 y 45 todos del Código Penal.

Acusó al señor Guillermo Esteban Molina como co-autor en los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA -en calidad de miembro- (HECHO 1) y EXTORSIÓN REITERADA -en calidad de coautor- (hechos identificados con los números 12, 15, 17, 21, 22, 23, 34 y 40), en concurso real de delitos y en los términos de los artículos 210, 168, 55 y 45 todos del Código Penal.

Acusó al señor Walter Rafael Paiz como co-autor en los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA -en calidad de miembro- (HECHO 1), EXTORSIÓN REITERADA -en calidad de coautor- (hechos identificados con los números 9, 20, 21, 25, 30 Y 38), DAÑO -en calidad de coautor- (HECHO 43) y ATENTADO AGRAVADO A LA AUTORIDAD -en calidad de coautor- (HECHO 44), en concurso real de delitos y en los términos de los artículos 210, 168, 183, 238 -inciso 2°-, 55 y 45 todos del Código Penal.

Acusó al señor Roberto Sabino Ríos como co-autor en los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA -en calidad de miembro- (HECHO 1), ATENTADO AGRAVADO A LA AUTORIDAD -en calidad de coautor- (HECHO 44) y AMENAZA -en calidad de coautor- (HECHO 45), en concurso

real de delitos y en los términos de los artículos 210, 238 -inciso 2°-, 149 bis -primer párrafo-, 55 y 45 todos del Código Penal.

No mencionó eximentes.

Computó como atenuante con relación a todos los acusados que carecen de antecedentes penales.

En cuanto a las circunstancias agravantes señaló:

Respecto del señor Burgos la pluralidad de delitos y la proclividad delictiva que esto demuestra y que indica mayor peligrosidad, al haber participado en 17 hechos en el marco de la asociación ilícita; la extensión en el tiempo de las maniobras delictivas por más de una década cometiendo delitos en Bahía Blanca y la región; la utilización de una entidad gremial como medio para los ilícitos; la mezquindad puesta de manifiesto por la contratación de empresas a nombre de hijos del acusado, logrando así empresa y bienes por ser jefes de la asociación como 500.000 dólares y 5.000.000 de pesos secuestrados cuando se detuvo al señor Monteros; y la cantidad de integrantes de la asociación ilícita, al menos 14 personas, lo que permitía más facilidad para concretar los ilícitos y distinta participación de los integrantes.

Con relación al señor Molina, computó como agravantes la formación profesional, no solo dirigente sindical sino licenciado en Trabajo Social, docente, y Concejal electo en la ciudad de Bahía Blanca, formación

que le da herramientas para evitar incurrir en los delitos y no obstante los concretó; el papel protagónico dentro de la asociación ilícita, de la cual los señores Burgos y Monteros eran los jefes, y hoy no se la puede el señor Fiscal asignar esa condición a Molina, pero si ha queda claro el papel protagónico, su tarea como si fuera jefe igual que Burgos, al haberse demostrado que tenía ascendencia sobre el resto de los integrantes de la asociación y tenía asignada una zona como tenía Burgos; la pluralidad de maniobras delictivas, proclividad y mayor peligrosidad, al haber intervino en 8 hechos; la extensión en el tiempo de las maniobras; el uso del gremio para cometer los hechos; y la cantidad de integrantes de la asociación ilícita.

Con relación a los acusados señores Paiz y Gonzalez, el señor Agente Fiscal postuló como agravantes la pluralidad de maniobras en las que intervinieron -8 hechos Paiz y 6 hecho Gonzalez-, la extensión en el tiempo de las maniobras; el uso del gremio para cometer los hechos; y la cantidad de integrantes de la asociación.

En lo que respecta al señor Ríos, señaló el doctor Zorzano que postulaba como agravantes la extensión en el tiempo de las maniobras delictivas; el uso del gremio para cometer los hechos; la cantidad de integrantes de la asociación ilícita; y la proclividad delictiva por los tres hechos por los que resultó acusado.

Peticionó se imponga al señor Burgos la pena de 16 años de prisión, 10 años de inhabilitación para actividades gremiales, 90.000 pesos

de multa según lo previsto por el artículo 22 bis del Código Penal, por el ánimo de lucro evidenciado en relación al delito de asociación ilícita; accesorias legales y costas.

Requirió se imponga al señor Molina la pena de 14 años de prisión, 10 años de inhabilitación para actividades gremiales, 80.000 pesos de multa por el ánimo de lucro evidenciado en el delito de asociación ilícita, accesorias legales y costas.

Postuló para el señor Paiz la pena de 10 años de prisión, 10 años de inhabilitación para actividades gremiales, 70.000 pesos de multa por el ánimo de lucro evidenciado en el delito de asociación ilícita, accesorias legales y costas.

Peticionó se imponga al señor Gonzalez la pena de 7 años de prisión, 7 años de inhabilitación para actividades gremiales, 60.000 pesos de multa por el ánimo de lucro evidenciado en el delito de asociación ilícita, accesorias legales y costas.

Por último, solicitó es imponga al señor Ríos la pena de 4 años y 6 meses de prisión, y 6 años de inhabilitación para actividades gremiales, accesorias legales y costas.

También requirió el decomiso de los bienes secuestrados, según las fojas 428, 429, 472/500 del legajo fiscal principal, y el decomiso

de los 5.000.000 de pesos y los dólares (más de 500.000) secuestrados en el domicilio de Monteros en el momento de la detención.

SEGUNDO:

La doctora Alicia Busteros, representante legal de los particulares damnificados adhirió a lo solicitado por el señor Agente Fiscal.

TERCERO:

El doctor Sebastián Martinez, defensor del señor José Burgos, postuló la absolución de su asistido en todos los hechos.

Señaló que el hecho identificado como número dos habría quedado en grado de tentativa, al no existir disposición patrimonial por parte de la víctima.

Sostuvo que los delitos debían concurrir en forma ideal con la asociación ilícita.

Que no podían prosperar ninguno de los agravantes propuesto por el Agente Fiscal, por ser cuestiones ya valoradas por el legislador al regular la asociación ilícita, dado que ahí se contempla la extensión en el tiempo y la pluralidad de maniobras que se puedan ejecutar; que el uso del gremio fue mencionado en la descripción del hecho por el fiscal, por lo que no constituía agravante; que no se acreditó las contrataciones de las empresas de servicios de familiares como acto mezquino; y que al computar

la cantidad de personas (más de 14 integrantes) se incurre en una arbitrariedad manifiesta porque el artículo 210 bis agrava por la pluralidad de intervinientes y si estaba probado esto debió así acusarlo y no ser considerado como agravante genérico.

Mencionó que además de la carencia de antecedentes penales como atenuante, debía computarse el buen concepto que surgía de los incidentes.

Requirió, de no hacerse lugar a la absolución, se condene a su asistido al mínimo legal de pena de 5 años de prisión.

CUARTO:

La doctora Bárbara Sager y el doctor Leonardo Gomez Talamoni, quienes asisten a los señores Paiz, Gonzalez y Ríos, peticionaron la libre absolución de sus pupilos en todos los hechos, según los argumentos que se detallan en el acta de audiencia.

QUINTO:

El doctor Mariano Jara, defensor del señor Molina, solicitó la absolución del mencionado en relación a todos los hechos.

Cuestionó los agravantes propuestos por el Agente Fiscal señalando que no se le puede adjudicar como agravante el papel protagónico por su condición de jefe, si no fue juzgado como tal por omisión

del fiscal, que no se puede usar el artículo 41 para subsanar eso; que no se acreditó la cantidad de integrantes de la asociación dado que las condenas en los juicios abreviados no fueron incorporadas al debate por decisión del Juez; que no se demostró la cantidad de delitos cometidos, por lo que esta circunstancia agravante no prospera; y que la capacitación y formación con al que contaba su asistido no puede ser valorada porque no indicó el Agente Fiscal como esa formación se había utilizado para la comisión de los delitos.

Señaló como atenuantes la falta de antecedentes penales; el comportamiento durante el proceso y en forma previa al haber renunciado al gremio para facilitar la investigación; y el buen concepto al dar clases en la unidad penal y de las personas que declararon en el debate.

Sostuvo que se trataba de un concurso ideal de delitos.

Peticionó que de no hacerse lugar a la absolución se imponga el mínimo de 5 años de prisión.

En el acta de debate se han consignado los argumentos y fundamentos expuestos por las partes para sostener sus pretensiones, a ella me remito, dado que en la misma se observan de forma extensa los términos en que se expidió cada una.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

ANÁLISIS DE CUESTIONES ESENCIALES

Primero:

Al momento de realizar las líneas iniciales de acusación (y en los alegatos finales), el señor Agente Fiscal, Dr. Gustavo Zorzano, contando con el expreso consentimiento de los letrados Defensores, se remitió para la descripción de los hechos materia de acusación a lo expuesto en la requisitoria de elevación a juicio, aclarando la calificación que correspondía asignarle a cada uno de ellos, según los distintos hechos acusados a cada uno de los imputados presentes en el debate.

En la requisitoria de elevación a juicio se describieron los siguientes hechos, identificándolos con los números correspondientes:

HECHO 1): Desde el 11 de noviembre de 2005 (fecha en que Humberto Arnaldo Monteros fue designado por primera vez Secretario General de la UOCRA) hasta el 11 de enero de 2018, los señores: HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, JOSÉ BERNARDO BURGOS, GUILLERMO ESTEBAN MOLINA, WALTER RAFAEL PAIZ, PABLO DAVID GUTIERREZ, SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES, NÉLSON DAMIÁN CABRERA, CARLOS ARIEL CARRILLO, MARIO MATÍAS GONZALEZ, RAÚL ERNESTO ERBÍN, ROBERTO SABINO RÍOS, SERGIO DANIEL VÁZQUEZ, ANIBAL ALEJANDRO ARANDA y DAVID EZEQUIEL MUÑOZ, junto a otras personas, valiéndose de los cargos dirigenciales, de la función

de delegados del gremio, o simplemente de la condición de colaboradores y afiliados que ejercieron en la SECCIONAL BAHÍA BLANCA y DELEGACIÓN CORONEL SUÁREZ, de la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOCRA), conformaron una ASOCIACIÓN ILÍCITA destinada a AMENAZAR, COACCIONAR y/o EXTORSIONAR a profesionales independientes y directivos o representantes de empresas que realizaban obras civiles, viales, eléctricas y de infraestructura en general, para OBLIGARLOS a: 1)- suscribir "acuerdos" o "convenios" que establecían a favor de los trabajadores aumentos de sus remuneraciones por encima de los acuerdos salariales vigentes y/o "premios" para todos los dependientes por igual sin que el empleador pueda considerar el desempeño o productividad del trabajador; 2)- aceptar condiciones laborales no exigidas por la legislación vigente (servicios gastronómicos, transporte, etc); 3)- contratar a trabajadores de una "bolsa de trabajo" impuesta por el sindicato sin posibilidad de elección; 4)- abonar injustificadas sumas de dinero en beneficio personal de los integrantes de la asociación ilícita, y 5)- contratar servicios gastronómicos, vestimenta de trabajo, servicios de baños químicos y transporte para los dependientes, a comercios pertenecientes a los dirigentes sindicales Humberto Arnaldo Monteros y José Bernardo Burgos, y/o a familiares y/o personas vinculadas con éstos, como: "STRADI-VIANDAS S.A.", "EIS EVENTOS" y/o "ZABALLA ARIEL EDGARDO", "SGT SOLUCIONES EN GRUPOS DE TRABAJOS S.A.",

"ESTEFANÍA BURGOS" y/o "ACQUA SERVICIOS S.R.L." y "FLOR DE LIRIO S.R.L., respectivamente.

Asimismo, esta organización delictiva impidió a dirigentes de otras organizaciones gremiales relacionadas con la industria de la construcción (como el SITRAIC) ejercer libremente la actividad sindical, mediante amenazas, coacciones y daños a la propiedad.

Los señores HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto de la U.O.C.R.A, respectivamente) actuaban como JEFES de dicha organización criminal.

En el marco de la citada ASOCIACIÓN ILÍCITA, se cometieron los siguientes hechos delictivos:

HECHO 2): Entre los meses de enero y marzo de 2016, cuando el señor JULIÁN ALEJO ALLENDE -empresario dedicado a la realización de obras civiles- se encontraba construyendo un galpón para la futura instalación de un supermercado, ubicado en la calle Alemanes del Volga s/número del Pueblo San José (Colonia 2) del Partido de Coronel Suárez, los integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, señores NELSON DAMIÁN CABRERA y ANIBAL ALEJANDRO ARANDA (Delegado Gremial y Primer Vocal Suplente,

respectivamente), se constituyeron en dicha obra y, luego de realizar una supuesta inspección, le exigieron al señor ALLENDE que se presente en la sede del sindicato, advirtiéndole: "vamos a llegar a un arreglo porque así no podés trabajar".

Cumpliendo con el requerimiento, el señor ALLENDE se constituyó en la sede gremial -sita en calle Hipólito Yrigoyen N° 701 -entre calles Sixto Rodriguez y Sargento Cabral- de la localidad de Coronel Suarez-, donde CABRERA y CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplente), lo recibieron e indicaron que debía reunirse con el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la UOCRA, a cargo de la Delegación Coronel Suárez).

Posteriormente, el señor JULIÁN ALEJO ALLENDE, acompañado por la señora NANCY GARCÍA -maestro mayor de obras a cargo de la construcción-, fueron recibidos en la entidad obrera por el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS, quien le exigió al empresario el pago de la suma de DIEZ MIL PESOS, como condición para que la referida obra pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Así también, durante dicha reunión, BURGOS EXIGIÓ a ALLENDE que contrate el servicio de BAÑOS QUÍMICOS para la obra a la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." (con domicilio en calle Río Atuel 780 de esta ciudad).

Con posteridad, se presentaron en varias oportunidades en la obra los señores CABRERA y ARANDA reclamando el dinero espuriamente exigido por BURGOS, y ante la negativa de ALLENDE a cumplir con la indebida exigencia, paralizaron la obra con la colaboración de otras personas, mediante actos violentos e intimidantes como el encendido de cubiertas, que impedían continuar el normal desarrollo de las tareas laborales. Dicho proceder continuó durante el plazo de tres días, hasta que el señor JULIÁN ALLENDE -padre del damnificado- formuló la respectiva denuncia penal.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir que la empresa cumpliera con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 6): A comienzos del año 2013, mientras el señor FERNANDO SCHRO se encontraba realizando tareas de construcción de

una vivienda ubicada en calle Baigorria -a la altura catastral del 400- de la localidad de Coronel Suárez, los señores CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplente y Delegado Gremial), NELSON DAMIÁN CABRERA (Delegado Gremial) y DAVID EZEQUIEL MUÑOZ (Delegado Gremial), invocando el carácter de integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, se constituyeron en el lugar, donde hicieron entrega a SCHRO de una nota que indicaba todos los recaudos que el gremio exigía respecto de la obra, ordenándole CARRILLO al empresario que se constituyera en la sede de dicho gremio.

En la sede gremial (sita en calle Hipólito Yrigoyen N° 701, entre calles Sixto Rodriguez y Sargento Cabral, de la localidad de Coronel Suárez), el señor SCHRO fue recibido por CARRILLO, CABRERA y MUÑOZ, quienes le EXIGIERON que debía abonarles la suma de UN MIL PESOS POR MES durante el tiempo que durara la obra, para que ésta pudiera continuar sin inconvenientes (paralización) ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Así también, para lograr las espurias disposiciones patrimoniales, CARRILLO, CABRERA y MUÑOZ extorsionaron a la víctima, a quien amenazaron con comunicar a la Secretaría de Trabajo de Coronel Suárez que tenía contratado personal sin la correspondiente registración laboral, lo que motivaría la clausura de la obra a su cargo.

Ante la amenaza de los sindicalistas, para evitar represalias y el perjuicio económico que podría generarle la paralización de la obra, el señor SCHRO abonó mensualmente la suma de UN MIL PESOS, durante un período de aproximadamente cinco meses que demandó la obra. Los pagos fueron realizados en dinero en efectivo a NELSON DAMIÁN CABRERA, quien los recibió en la sede del sindicato. El dinero fue exigido y percibido por el señor CABRERA con conocimiento y bajo las órdenes de JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto), quien era el jefe de la Delegación Coronel Suárez.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 7): A fines del año 2013, en circunstancias en que el señor FERNANDO SCHRO se encontraba realizando la refacción de la

confitería de la estación de servicio YPF ubicada en avenida San Martín de Coronel Suárez, se constituyó en la obra el señor NELSON DAMIÁN CABRERA (Delegado Gremial) junto con otra persona, quienes invocando la condición de integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, comunicaron a las personas que se encontraban realizando tareas laborales en el lugar, que el señor SCHRO -a cargo de la obra- debía presentarse en el sindicato.

En respuesta a la directiva, el señor SCHRO se presentó en la sede gremial donde fue recibido por CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplente y Delegado Gremial), quien le EXIGIÓ la suma de DOS MIL PESOS POR MES durante el plazo de ejecución de la obra, para que ésta pudiera continuar sin planteos ni inconvenientes (como la paralización de la obra) por parte de los integrantes de la UOCRA.

En cumplimiento de dicha imposición, FERNANDO SCHRO debió abonar DOS MIL PESOS POR MES, durante los dos meses que demandó la obra (un total de cuatro mil pesos). Los pagos fueron realizados en dinero en efectivo a NELSON DAMIÁN CABRERA, quien los recibió en la sede del sindicato.- El dinero fue exigido por CARRILLO y percibido por el señor CABRERA con conocimiento y bajo las órdenes de JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto), quien era el jefe de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 8): En el mes de febrero de 2012, en circunstancias que el señor LUIS ALBERTO SIMÓN se encontraba realizando la AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CORONEL SUÁREZ, se constituyó en la obra el señor CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal y Delegado Gremial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), quien invocando la representación y órdenes de JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto del sindicato), le EXIGIÓ a SIMÓN que abonara la suma de CINCO MIL PESOS POR MES, como condición para que la referida construcción pudiera continuar sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes del sindicato. A pesar que la exigencia le generaba gran temor por su integridad física y por los

daños patrimoniales que pudiera sufrir, el señor Simón no abonó las sumas indicadas.

Meses más tarde, durante el año 2013, en circunstancias que el señor SIMÓN estaba realizando la obra de REFORMAS A UN EDIFICIO DE CORONEL SUÁREZ, el señor CARRILLO se presentó en la obra y le requirió que se presente en la sede del sindicato porque "tenían que hablar con él". En el lugar, CARLOS ARIEL CARRILLO, invocando nuevamente el mandato de BURGOS, le dijo: "tenés que venir a pagar y te vamos a dejar tranquilo, no es mucha plata", exigiéndole nuevamente que abonara la suma de CINCO MIL PESOS POR MES durante el plazo de duración de la obra.

Posteriormente, en el año 2014, cuando SIMÓN estaba realizando la CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO EN AVENIDA CASEY, A LA ALTURA DEL PASO A NIVEL DE VILLA BELGRANO, DE LA LOCALIDAD DE CORONEL SUÁREZ, se presentaron en la obra los señores CARLOS ARIEL CARRILLO y NELSON DAMIÁN CABRERA, quienes le exigieron nuevamente la suma de CINCO MIL PESOS POR MES, como condición para no tener problemas con ellos, no pararle la obra y dejarlo trabajar tranquilo. A pesar que la víctima sentía miedo por la situación, no cumplió la exigencia extorsiva, motivo por el cual continuaron los planteos intimidantes de los dirigentes de la UOCRA. Finalmente, en mayo del año 2015, cuando el señor LUIS ALBERTO SIMÓN se encontraba construyendo UN GALPÓN SOBRE EL CAMINO DE CINTURA DE LA

LOCALIDAD DE CORONEL SUÁREZ (Ruta Provincial N° 85), de propiedad de una persona de apellido Schmidt, fue citado por JOSÉ BERNARDO BURGOS a la sede de la Delegación Coronel Suárez de la UOCRA. En dicho lugar, el señor BURGOS le exigió la suma de CINCO MIL PESOS para poder continuar con la obra sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Al no abonar dicha suma, los integrantes de la UOCRA le hicieron una manifestación frente a la obra, de la que participaron BURGOS y CABRERA, oportunidad en que le exigieron la suma de DIEZ MIL PESOS, amenazándolo con la realización de una nueva manifestación ("un piquete"), en el que incendiarían gomas y no los dejarían trabajar.

Luego de ello, la víctima sufrió una enfermedad que lo alejó de su actividad laboral y, consecuentemente, cesaron las exigencias extorsivas de los integrantes de la U.O.C.R.A.-

HECHO 9): A partir del mes de febrero de 2017 -aproximadamente-, en circunstancias en que la empresa "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L." se encontraba abocada a la realización de obras civiles en el "Predio Bahía Blanca", ubicado al Sudoeste de la Ruta 33 y al Noroeste de la calle Mariano Reynal, correspondientes al proyecto "Barrio PRO.CRE.AR" y consistentes en infraestructura de red de agua potable, infraestructura de red cloacal e infraestructura de gas (cuyo comitente era el Banco Hipotecario Nacional en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso

Administrativo y Financiero PRO.CRE.AR.); los señores FABIÁN HÉCTOR GURRADO y GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA (socio gerente y apoderado de la citada constructora, respectivamente), fueron extorsionados por JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto) y SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Delegado Gremial y Segundo Vocal Titular), entre otros integrantes de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, quienes les EXIGIERON abonar a los operarios que trabajaban en la obra, UN AUMENTO SALARIAL DEL TREINTA Y CINCO POR CIENTO DEL SALARIO que percibían dichos trabajadores según el convenio salarial vigente aplicable al sector. Ante la coactiva exigencia, los representantes de la empresa constructora debieron suscribir el día 16 de marzo de 2017, en el marco del expediente administrativo n° 21507-1001-17-00 de trámite por ante la Delegación Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, UN CONVENIO con Walter Rafael Paiz -en su carácter de Tercer Vocal titular de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca-, aceptando el pago de las sumas indebidamente demandadas.

Como consecuencia de la imposición, los directivos de las empresas constructoras pagaron a cada trabajador las sumas indicadas junto a la liquidación de los respectivos salarios.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los

empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

HECHO 10): Durante el año 2017, cuando la empresa "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L." se encontraba abocada a la realización de obras civiles en el "Predio Bahía Blanca", ubicado al Sudoeste de la Ruta 33 y al Noroeste de la calle Mariano Reynal, correspondientes al proyecto "Barrio PRO.CRE.AR" y consistentes en infraestructura de red de agua potable, infraestructura de red cloacal e infraestructura de gas (cuyo comitente era el Banco Hipotecario Nacional en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero PRO.CRE.AR.), el ingeniero GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA -gerente técnico de la citada empresa- fue citado a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (ubicada en calle Saavedra 470 de esta ciudad). En el lugar, el señor SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Colaborador Gremial y Segundo Vocal Titular del sindicato), le

EXIGIÓ a EVANGELISTA la suma de CINCUENTA MIL PESOS POR MES durante el plazo de ejecución de la obra, como condición para que la misma pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Con posterioridad, fue citado a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el ingeniero FABIÁN HÉCTOR GURRADO -en su carácter de socio gerente de la citada empresa y a quien Evangelista había transmitido el requerimiento-, en esta oportunidad el señor SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES le exigió al empresario la suma total de QUINIENTOS MIL PESOS, los cuales debían ser abonados en mensualidades, durante la ejecución de la referida obra, como condición para que la misma pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Finalmente, el ingeniero GURRADO le ABONÓ al señor SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES, en la sede de la UOCRA, la suma de VEINTE MIL PESOS. El dinero fue exigido y percibido por el señor CANALES con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades

laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

En esas mismas circunstancias, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS EXIGIÓ a FABIÁN HÉCTOR GURRADO y a GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA, que contraten para la referida obra los servicios de transporte a la empresa "FLOR DE LIRIO S.R.L.", el servicio gastronómico de viandas a la empresa "EIS EVENTOS" y el servicio de baños químicos a la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L.", como condición para que la misma pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Como consecuencia de dicha imposición, los empresarios debieron abonar un costo superior al valor que por esos servicios ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades

laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 11): Desde el año 2007 hasta la actualidad, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca), EXIGIÓ a FABIÁN HÉCTOR GURRADO -representante legal-, a GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA -gerente técnico- y a otros directivos de la empresa "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L.", el pago de sumas de dinero en forma mensual, como condición para que la referida constructora pudiera realizar las obras a su cargo sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. El monto de dichas sumas era variable -de acuerdo a la cantidad de obras a cargo de la empresa-, siendo en un principio de CINCO MIL PESOS hasta llegar a la suma de DIEZ MIL PESOS POR MES.

Como consecuencia de dicha imposición, desde el mes de enero de 2007 -aproximadamente- y hasta la actualidad, el ingeniero

EVANGELISTA y otros integrantes de la empresa damnificada ABONARON mensualmente las sumas exigidas a JOSÉ BERNARDO BURGOS, en dinero efectivo, en la sede de la U.O.C.R.A. (Saavedra 470 de Bahía Blanca). El dinero fue exigido y percibido por Burgos con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la Delegación local de la UOCRA.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 12): En circunstancias en que la empresa "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L." se encontraba realizando obras de pavimentación contratadas por la Municipalidad del Partido de Patagones, el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca), EXIGIÓ al ingeniero

GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA (gerente técnico de empresa), el pago de sumas de dinero en forma mensual, como condición para que la citada constructora pudiera continuar sin inconvenientes ni planteos las obras que estaba realizando la citada constructora en dicho ámbito.

Dichas sumas de dinero fueron pagadas desde el año 2014 hasta diciembre de 2017 por el ingeniero EVANGELISTA a MOLINA, en la sede del sindicato local (Saavedra n° 470 de esta ciudad), en dinero efectivo, incrementándose el monto abonado -por decisión del imputado- hasta alcanzar la suma de DIECINUEVE MIL PESOS POR MES. El dinero fue exigido y percibido por el señor MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto).

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su

calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 13): A comienzos del año 2015, en circunstancias en que la empresa "CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A." comenzaba la ejecución de tres obras civiles en la ciudad de Coronel Suárez (consistentes en la construcción del Jardín de Infantes B° El Rosario; el jardín de infantes N° 913 y la Escuela Secundaria N° 5 -ex E.S. N° 6-, de las que resultaba comitente la Unidad Ejecutora Provincial y que fueron adjudicadas por licitaciones públicas N° 4/14, N° 147/13 y N° 3/14 -respectivamente-), el ingeniero LUIS GUSTAVO CARCERENY -representante legal de la citada empresa- fue citado a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la U.O.C.R.A. (ubicada en calle Saavedra 470 de esta ciudad). En dicha entidad gremial, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS -Secretario General Adjunto del sindicato-, exigió a CARCERENY la suma de DIEZ MIL PESOS MENSUALES por cada una de las referidas obra.

Como consecuencia de la exigencia extorsiva del dirigente sindical, los ingenieros LUIS GUSTAVO CARCERENY y MANUEL CARCERENY debieron abonar a BURGOS la suma de TREINTA MIL PESOS POR MES, durante los diez meses que demandaron las obras (totalizando la suma de trescientos mil pesos).

Así también, en dicha oportunidad, BURGOS les exigió que debían contratar el servicio de baños químicos para las obras a la empresa

"ACQUA SERVICIOS S.R.L." y que la totalidad de los obreros contratados para la obra debían ser afiliados a la UOCRA y resultar de la "bolsa de trabajo" de dicho sindicato.

Como consecuencia de dicha imposición, los empresarios debieron abonar por los baños químicos un costo superior al valor que por ese servicio ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

El cumplimiento de dichas exigencias (pago de las sumas de dinero y alquiler de los baños) eran impuestos extorsivamente como condición para que las referidas construcciones puedan continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

El dinero fue exigido y percibido por Burgos con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la Delegación local de la UOCRA.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales entre ellos ANIBAL ALEJANDRO ARANDA-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso

y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

Como consecuencia del accionar desplegado por los sindicalistas y las coactivas exigencias de éstos -que generaron conflictos gremiales que tornaron imposible la ejecución de las obras-, a principios del año 2016 la empresa debió rescindir de mutuo acuerdo los contratos de obra suscriptos con la Unidad Ejecutora Provincial, quedando las obras inconclusas.

HECHO 14): Durante el año 2017, en circunstancias que la empresa "CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A." se encontraba ejecutando la obra de ampliación de la red cloacal en la localidad de Carhué (cuyo comitente era la Municipalidad del Partido de Adolfo Alsina), el ingeniero LUIS GUSTAVO CARCERENY -representante legal de la citada empresa- fue citado a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (ubicada en calle Saavedra 470 de esta ciudad). En dicha sede gremial, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la entidad), le exigió al ingeniero CARCERENY la suma de CUARENTA MIL PESOS POR MES,

para que la referida construcción pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Como consecuencia de la exigencia coactiva del citado dirigente sindical, los ingenieros LUIS GUSTAVO CARCERENY y MANUEL CARCERENY debieron realizarle a Burgos TRES PAGOS MENSUALES DE CUARENTA MIL PESOS CADA UNO, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2017.

Dichos pagos eran retirados de la sede de la empresa "Carcereny Construcciones" por CARLOS ARIEL CARRILLO.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplente y Delegado Gremial de la UOCRA) amenazó a Manuel Carcereny, advirtiéndole a Martín Alejandro Schtargloff (empleado de la empresa constructora "Carcereny Construcciones S.A."): "A Carcereny lo vamos a reventar", "decile que él me conoce bien a mi".

Asimismo, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y,

en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

El dinero abonado por la víctima fue exigido y percibido por Burgos con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la Delegación local de la UOCRA.

HECHO 15): Durante el año 2017, cuando la empresa "CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A." construía instalaciones destinadas al Jardín de Infantes N° 910 de la localidad de Pedro Luro e instalaciones destinadas al edificio de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 2 de la localidad de Mayor Buratovich (ambas ordenadas por la Municipalidad del Partido de Villarino y adjudicadas por Licitaciones Públicas N° 11 y N° 12 de 2014), el ingeniero LUIS GUSTAVO CARCERENY fue convocado a la sede de la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) Seccional Bahía Blanca, por el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca). En dicho lugar, el señor MOLINA le EXIGIÓ al señor LUIS GUSTAVO CARCERENY, la suma de VEINTE MIL PESOS POR MES, como condición para que la empresa "CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A." pueda continuar desarrollando

las referidas construcciones sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Como consecuencia de la exigencia extorsiva del citado dirigente sindical, el señor CARCERENY le ABONÓ a MOLINA la suma de VEINTE MIL PESOS POR MES (diez mil por cada obra), durante el lapso de diez meses (totalizando en consecuencia la suma de doscientos mil pesos), que fueron recibidos por MOLINA en la sede de la empresa (sita en calle Pablo Acosta n° 87 de esta ciudad), en forma personal o a través de colaboradores.

El dinero fue exigido y percibido por MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación,

ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 16): Durante el año 2015, el señor MARIO MATÍAS GONZALEZ (Colaborador gremial y Primero Vocal Titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca), invocando directivas de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente), EXIGIÓ al señor ROBERTO GAVEGLIO (socio de la empresa "COINCE BAHÍA S.A."), la suma de OCHO MIL PESOS POR MES, como condición para que la referida constructora pudiera realizar las obras a su cargo sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Como consecuencia de dicha imposición, desde el mes de enero de 2015 -aproximadamente- y hasta el mes de septiembre del 2017, el señor ROBERTO GAVEGLIO y otros integrantes de la citada empresa, debieron ABONAR mensualmente las sumas exigidas, las cuales eran recibidas en dinero efectivo por el señor MARIO MATÍAS GONZALEZ y otros sujetos enviados por éste, a cuyo fin se constituían en la sede de la constructora (sita en calle 25 de Mayo n° 2772, intersección con el Acceso a Puertos, de Bahía Blanca) o requerían el envío del dinero a la sede gremial.

Asimismo, se le exigió a los representantes de la firma "COINCE" la contratación de los servicios de baños químicos de la empresa

"ACQUA SERVICIOS INDUSTRIALES SRL", debiendo abonar los empresarios como consecuencia de dicha imposición, un valor superior al que por ese servicio ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca. La contratación así exigida, se concretó entre el 21 de febrero de 2017 hasta el 02 de noviembre de dicho año.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 17): En el año 2016, en circunstancias en que la empresa "COINCE BAHÍA S.A." se encontraba realizando una obra de CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE PEDRO LURO -Partido de Villarino-, la cual se desarrolló entre los meses de febrero de 2016 y febrero de 2017, el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la Unión Obrera de la Construcción,

Seccional Bahía Blanca), convocó al ingeniero DIEGO RAFAEL SALGUERO -socio que también se desempeñaba como supervisor de obra de la citada constructora-, al sindicato (ubicado en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad), para "hablar de la obra".

En dicha sede gremial, el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA le EXIGIÓ al señor SALGUERO la suma de DIEZ MIL PESOS POR MES para que la citada obra pudiera continuar sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la U.O.C.R.A.

Como consecuencia de dicha imposición, el ingeniero SALGUERO ABONÓ mensualmente a MOLINA las sumas exigidas, en dinero efectivo, durante un periodo de nueve meses -aproximadamente-, concretándose las entregas en distintos lugares de la vía pública que previamente indicaba el imputado.

El dinero fue exigido y percibido por MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de

cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 18): Durante los años 2015 y 2016, en circunstancias en que la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS conformada por las firmas: "CARRETERAS 2000 S.A.", "COINCE BAHÍA S.A.", "CERRA Y MORO S.R.L." y "OBRAS ABEDUL S.R.L.", se encontraba realizando la obra de BACHEO DE LA RUTA NACIONAL N° 3, contratadas por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (expediente n° 2410-98/2014), el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS -Secretario General Adjunto de la entidad- EXIGIÓ a los representantes legales de dichas empresas, señores CRISTIHAN HORACIO FERRERO (quien también actuaba de coordinador de la UTE), NÉSTOR JULIO TEPLITZ, DIEGO MARTÍN CERRA y LUIS MARÍA MEDÚS, respectivamente, la suma de CIEN MIL PESOS POR MES como condición para poder continuar la obra sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Posteriormente, el señor NÉSTOR JULIO TEPLITZ -presidente de "Coince Bahía S.A."-, se reunió en la sede de la UOCRA. Seccional

Bahía Blanca (sita en calle Saavedra n" 470 de esta ciudad) con los dirigentes HUMBERTO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente), quienes finalmente le exigieron el pago de CUARENTA MIL PESOS POR MES. Como consecuencia de dicha imposición, los representantes de las empresas integrantes de la U.T.E. debieron ABONAR mensualmente las sumas exigidas durante los siete meses que demandó la realización de la obra.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 19): En fecha no determinada, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), citó al señor CRISTIHAN

HORACIO FERRERO -en su carácter de presidente de "CARRETERAS 2000 S.A."-, a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la citada entidad sindical (ubicada en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad).

En dicho lugar, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS EXIGIÓ al señor FERRERO, la suma de OCHO MIL PESOS POR MES, como condición para que la empresa que representa pueda continuar las obras que por entonces estaba ejecutando, sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Como consecuencia de la imposición, el señor CRISTIHAN HORACIO FERRERO abonó mensualmente las sumas exigidas, mediante entregas en dinero en efectivo en la sede de la empresa "CARRETERAS 2000 S.A." (sita en calle O´Higgins número 408 de la ciudad de Bahía Blanca). Así también, BURGOS exigió a FERRERO que contrate para las obras a cargo de la empresa "CARRETERAS 2000 S.A.", los baños químicos de la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." (con domicilio en calle Río Atuel 780 de esta ciudad), debiendo abonar el empresario como consecuencia de dicha imposición un costo superior al valor que por ese servicio ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

El dinero fue exigido y percibido por BURGOS con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la Delegación local de la UOCRA.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 20): En el mes de diciembre de 2015 -aproximadamente-, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca (sita en calle Saavedra n" 470 de esta ciudad), el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto del sindicato) con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General del sindicato), EXIGIÓ a los señores LUIS MARÍA MEDUS, CRISTIHAN HORACIO FERRERO, DIEGO MARTÍN CERRA Y MAURICIO GIQAUX, NÉSTOR JULIO TEPLITZ, FABIÁN HÉCTOR GURRADO y GUSTAVO EVANGELISTA y PABLO QUANTÍN, quienes representaban a las empresas: OBRAS ABEDUL S.A., CARRETERAS 2000 S.A., CERRA Y MORO S.R.L., COINCE BAHÍA S.A.,

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L. y VIAL AGRO S.A., respectivamente, y al representante legal de CV1 (Concesionaria Vial 1), que realizaran el MOVIMIENTO DE SUELO, CONSTRUYERAN LA CARPETA ASFÁLTICA, CORDÓN CUNETA Y BADENES CORRESPONDIENTES AL ACCESO Y CALLE INTERIOR DEL PREDIO RECREATIVO QUE EL SINDICATO TIENE SOBRE LA EX RUTA NACIONAL N° 3 NORTE, en el tramo conocido como Calderón, dentro del Partido de Bahía Blanca.

También, durante el mes de diciembre del año 2015, WALTER RAFAEL PAIZ (Tercer Vocal Titular), EXIGIÓ a MARTÍN DARIO SÁNCHEZ, presidente de la firma "KARPA S.A." el aporte de materiales para la construcción de la citada obra.

Respondiendo a las extorsivas exigencias de BURGOS, PAIZ y otros dirigentes gremiales, dichas obras debieron ser concretadas por las empresas damnificadas, las cuales distribuyeron la realización de las tareas y afrontaron los costos que demandó la misma, a excepción de "KARPA S.A.", que no participó en las tareas, aunque sí aporto para la obra, medio pallet de cemento, que fue entregado el 04 de diciembre del 2015 a Héctor De La Torre, persona enviada a la empresa por WALTER RAFAEL PAIZ a retirar el material requerido.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los

empresarios con la paralización de las obras que por entonces estaban realizando y/o con la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a las empresas cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 21): A fines del año 2016, en sede de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (sita en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad), los señores JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto), GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas), SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Segundo Vocal Titular y Delegado Gremial) y WALTER RAFAEL PAIZ (Tercer Vocal Titular y Secretario de Organización y Asuntos Gremiales), entre otros dirigentes del sindicato, EXIGIERON a LUIS MARIA MEDÚS, en representación de "OBRAS ABEDUL S.R.L."; NÉSTOR JULIO TEPLITZ y ROBERTO GAVEGLIO, ambos de "COINCE BAHÍA S.A."; GUSTAVO EVANGELISTA, apoderado de "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L.", CRISTIHAN FERRERO representante de

"CARRETERAS 2000 S.A."; MAURICIO GIQAUX y DIEGO MARTÍN CERRA, ambos de "CERRA Y MORO S.R.L." y al señor JORGE LUIS FONSECA -representante de MARCALBA S.A., que abonen a todos los empleados de sus respectivas empresas la suma de OCHO MIL PESOS, que era impuesta por los citados dirigentes gremiales como supuestos "PREMIOS", circunstancia que no era real, pues fueron exigidas coactivamente por los sindicalistas para todos los trabajadores por igual y sin considerar la opinión de los empresarios en función del mérito y rendimiento de cada uno de sus dependientes.

Dicha exigencia coactiva era condición para que las tareas en las obras que estaban desarrollando cada una de las referidas empresas pudieran continuar sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la U.O.C.R.A.

Finalmente, los imputados resolvieron que se abone a cada obrero un monto de CUATRO MIL PESOS, que debió ser aceptado por los representantes legales de las citadas empresas, a través de un supuesto "acuerdo" en el marco del expediente administrativo número 21507-24904-16, que tramitó por ante la Delegación Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en fecha 23 de noviembre de 2016 y que fuera suscripto en carácter de representantes gremiales por José Bernardo Burgos y Walter Rafael Paiz.

Como consecuencia de la imposición, los directivos de las empresas constructoras pagaron a cada trabajador las sumas indicadas junto a la liquidación de los respectivos salarios.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir que la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 22): Desde el año 2006, dirigentes de la Seccional Bahía Blanca de la UOCRA, exigieron a integrantes de la firma "OBRAS ABEDUL S.R.L." el pago de sumas de dinero para que la empresa constructora pudiera desarrollar sus tareas laborales sin inconvenientes ni planteos por parte del sindicato, las cuales fueron abonadas hasta la actualidad en forma habitual, mediante entregas en efectivo y cheques, que fueron cobrados -entre otros- por: Raúl Ernesto Erbín, Guillermo Esteban Molina, Humberto Arnaldo Monteros y Mario Matías González.

Así también, en dicho marco, a partir del año 2012, en circunstancias en que la empresa "OBRAS ABEDUL S.R.L." se encontraba ejecutando las obras de MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 3, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CIUDADES DE BAHÍA BLANCA Y VIEDMA, el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) EXIGIÓ al ingeniero LUIS MARÍA MEDUS (gerente de la citada constructora) el pago de SUMAS MENSUALES DE DINERO, las cuales inicialmente fueron de SEISCIENTOS PESOS hasta llegar -con sucesivos aumentos- a TRES MIL QUINIENTOS PESOS POR MES, canceladas por la damnificada mediante dinero efectivo y cheque, como condición para que pudiera continuar desarrollando sus tareas laborales sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la U.O.C.R.A.

El dinero fue exigido por MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente).

Como consecuencia de las referidas imposiciones, MEDÚS y otros integrantes de la firma damnificada, abonaron las siguientes sumas: 1)- cheque de fecha 14/07/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Riffo"); 2)- cheque de fecha 26/07/06, por la suma de $250,00 (recibido por

"Peralta"); 3)- cheque N° 56336730, de fecha 29/08/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 4)- cheque Nº 58114153, de fecha 04/10/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 5)- cheque Nº 59138637, de fecha 30/10/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 6)- cheque Nº 61673111, de diciembre de 2006, por la suma de $250,00; 7)- cheque Nº 63597764, de fecha 29/12/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 8)- pago en efectivo de fecha 15/01/07, por la suma de $400,00 (recibido por "Peralta"); 9)- pago en efectivo realizado con fecha 20/02/07, por la suma de $300,00 (recibido por "Peralta"); 10)- pago en efectivo, de fecha 21/03/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 11)- pago en efectivo, de fecha 13/04/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 12)- pago en efectivo, de fecha 14/05/07, por la suma $350,00 (recibido por "Peralta"); 13)- pago en efectivo, de fecha 19/06/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 14)-pago en efectivo, de fecha 09/08/07, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"); 15)-pago en efectivo, de fecha 21/09/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 16)-cheque Nº 6782918, de fecha 25/09/07, por la suma de $450,00 (recibido por "Peralta Riffo"); 17)- pago en efectivo, de fecha 10/10/07, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"): 18)- cheque Nº 77540040, de fecha 24/10/07 por la suma de $450,00 (recibido por "Peralta"); 19)- pago en efectivo, de fecha 16/11/07 por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"); 20)- pago en efectivo, de fecha 07/12/07, por la

suma de $200,00 (recibido por "Peralta"), 21)- pago en efectivo, de fecha 20/12/07 por la suma de $450,00 (recibido por "Peralta"); 22)- pago en el año 2008 -abono en concepto de "SALDO 2007"- por la suma de $600,00; 23)- pago en efectivo, de fecha 11/01/08, por la suma de $300,00 (recibido por "Peralta"); 24)- pago en efectivo, de fecha 28/02/08, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"); 25)- pago en efectivo en el mes de marzo del año 2008, por la suma de $500,00 (recibido por "Peralta"); 26)- cheque Nº 83419166, de fecha 11/03/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 27)- cheque Nº 86718776, de fecha 08/04/08, por la suma de $450,00 (recibido por "Montero"); 28)- pago en efectivo, de fecha 08/04/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 29)- cheque Nº 87330442, de fecha 15/05/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 30)- cheque N.º 89441535, de fecha 13/06/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 31)- Cheque Nº 90338281, de fecha 18/07/08, por la suma de $1.350,00 (recibido por "Montero"); 32)- pago en efectivo, de fecha 11/08/08, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Montero"); 33)- cheque Nº 424974, con fecha 04/02/09, abonó la suma de $1.000,00 que indica fuera recibido por "Montero"; 34)- cheque Nº 3159388, con fecha 18/03/09, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Montero"); 35)- cheque Nº 3808597, con fecha 22/04/09 pagó la suma de $1.400,00 que indica fuera recibido por "Montero"; 36)- cheque Nº 5478733, con fecha 22/05/09 abonó la suma de $1.000,00 que indica fuera recibido por

"Montero"; 37) cheque Nº 7792082, de fecha 01/07/09 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Montero"); 38)- cheque Nº 9908700, de fecha 28/08/09 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Sepulveda"); 39)- cheque Nº 12462090, de fecha 17/11/09 por la suma $1.000,00 (recibido por "Montero"); 40)- cheque N.º 99663831, de fecha 23/12/09 por la suma de $1.300,00 (recibido por "Montero"); 41)- cheque Nº 1618041, de fecha 17/01/10, por la suma de $600,00 (recibido por "Montero"); 42)- cheque Nº 307611746, de fecha 03/11/10 por la suma de $1.500,00 (recibido por "Riffo"); 43)- cheque N.º 307611756, de fecha 05/11/10 por la suma de $1.500,00 (recibido por "Riffo"); 44)- cheque Nº 32470024, de fecha 02/12/10 por la suma de $700,00 (recibido por "Riffo"); 45)- cheque Nº 22903402, de fecha 04/12/10 por la suma de $600,00 (recibido por "Riffo"); 46)- pago en efectivo, de fecha 14/12/10 por la suma de $370,00 (recibido por "Riffo"); 47)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 07/01/11, por la suma de $1.591,00 (recibido por "Riffo"); 48)- pago en efectivo, de fecha 07/01/11, por la suma de $110,00 (recibido por "Riffo"); 49)- cheque Banco Provincia de Buenos Aires, de fecha 07/01/11, por la suma de $1.591,00 (recibido por "Riffo"); 50)- pago en efectivo, de fecha 07/01/11, por la suma de $110,00 (recibido por "Riffo"); 51)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 36313648, de fecha 04/02/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Lara Cristian Alexis, DNI 29360563); 52)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº

381117731, de fecha 15/03/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 53)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 39188149, de fecha 12/04/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 54)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 39917956, de fecha 09/05/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 55)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 42441440, de fecha 16/06/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 56)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 43286798, de fecha 08/07/11 por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Troya Juan D., DNI 17908504); 57)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 45442815, de fecha 05/08/11, por la suma de $500,00 (recibido por "Geo Juguetes"); 58)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 45442821, de fecha 09/08/11, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Riffo"); 59)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 46978575, de fecha 09/09/11, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura DNI 26333396); 60)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires N.º 48147601, de fecha 08/10/11 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 61)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 49205870, de fecha 07/11/11, por la suma de $1.900,00

(recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 62)- cheque Nº 52963523 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/01/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 63)- cheque Nº 52963540 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/02/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 64)- pago en el mes de febrero del año 2012, por la suma de $1.900,00; 65)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 55302440, de fecha 12/04/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 66)- pago en el mes de abril del año 2012 por la suma de $1.900,00; 67)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 56613559, de fecha 19/05/12, por la suma de $1.900,00 (cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 67)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 56613560, de fecha 24/05/12, por la suma de $600,00 (recibido por Molina y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 68)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 56613574, de fecha 14/06/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 69)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 65513575, de fecha 21/06/12 por la suma de $360,00 (recibido por Molina y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 70)- Cheque de fecha 21/06/12, por la suma de $240,00 (recibido por "Molina"); 71)- cheque Nº 56613954, de fecha 18/07/12 por la suma de $1.900,00 (recibido por

"Erbin"); 72)- cheque Nº 56613599, de fecha 23/07/12 por la suma de $600,00 (recibido por "Molina"); 73)- cheque Nº 60216456, de fecha 23/08/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin"); 74)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 60216457, de fecha 23/08/12, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin p/ Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 75)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 60216472, de fecha 30/09/12 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Hermano Erbin" y cobrado por Cangelosi César DNI 31611430); 76)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66388980, de fecha 17/10/12, por la suma de $600,00 (recibido por "Molina" y cobrado por López Daniel, DNI 8397007); 77)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66388986, de fecha 29/10/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Grupo Argos Bahía SA - Casajuana Jorge); 78)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66388995, de fecha 16/11/12, abonó la suma de $600,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 79)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66389005, de fecha 05/12/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 80)- cheque del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Nº 73210343, de fecha 27/12/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin y herm" y cobrado por Erbin Sandro, DNI 20903741); 81)- cheque del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Nº 73210344, de fecha 27/12/12,

por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin p/Molina"); 82)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253482, de fecha 06/02/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 83)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253483, de fecha 06/02/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Esteban Guillermo, DNI 11343112); 84)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 71253489, de fecha 28/02/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 85)- cheque Nº 71253490 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 28/02/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado

por Molina Guillermo, DNI 11343112); 86)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253508, de fecha 05/04/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Packaging Argentina SA); 87)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253509, de fecha 05/04/13 por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 88)- cheque N.º 72532429, de fecha 11/05/13 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin"); 89)- cheque Nº 72532430 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 11/05/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 90)- cheque Nº 72532447 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 04/06/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y

cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 91)- cheque Nº 72532448, de fecha 04/06/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin"); 92)- cheque N.º 72532455, del Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 29/06/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 93)- cheque Nº 72532456 del Banco de la Prov. de Bs. As, de fecha 29/06/13 por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112 según informe del Banco de la Prov. de Bs. As); 94)- cheque Nº 72532459, de fecha 15/07/13, por la suma de $500,00 (recibido por "Gonzalez"); 95)- cheque Nº 75517084, de fecha 23/07/13, por la suma de $3.500,00 (recibido por "Gonzalez"); 96)- cheque Nº 78340137, de fecha 31/07/13, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina"); 97)- cheque Nº 78340143 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 06/08/13, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 98)- cheque Nº 81664411 del Banco de la Prov. de Bs. As, de fecha 11/09/13 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 99)- cheque Nº 81664412, de fecha 11/09/13, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin hno medio"); 100)- cheque Nº 81664412, de fecha 24/10/2013, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 101)- cheque Nº 81664426 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 30/10/13, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 102)- cheque Nº 81664427 del Banco de la Provincia de Buenos

Aires, de fecha 17/10/13, por la suma de $450,00 (recibido por "17 de Octubre" y cobrado por Tévez Marcos, DNI 25947799); 103)- cheque N.º 81664433 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 22/11/13, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl DNI 14595367); 104)- cheque Nº 81664443, de fecha 30/11/13, por la suma de $800,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 105)- cheque N.º 82995898, en el mes de diciembre de 2013, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 106)- pago de fecha 17/12/13 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina"); 107)- Mediante cheque Nº 88179735 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 20/01/14, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 108)- cheque N.º 88179774 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 21/02/14, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Gili y Cia. SRL); 109)- pago en efectivo, de fecha 25/02/14 por la suma de $1.700,00 (recibido por "Marcos (Gerardo)"); 110)- cheque Nº 89216988 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 27/02/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 111)- cheque Nº 89217010, de fecha 28/03/14 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina"); 112)- pago de fecha 03/04/14 por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 113)- cheque Nº 90560859 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 09/04/14, por la suma de $1.700,00 (recibido por

"Gerardo" y cobrado por Martínez Héctor J., DNI 27407959); 114)- cheque Nº 90560866 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 21/04/14 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 115)- cheque Nº 90560873 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/05/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 116)- cheque Nº 90560875, de fecha 09/05/14, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Gerardo"); 117)- cheque Nº 90560877 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 03/06/14, por la suma de $800,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 118)- cheque Nº 90560885 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 05/06/14, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Gerardo" y cobrado por Genchi Rodrigo, DNI 35101779); 119)- cheque Nº 90560886 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/06/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Taegu Automotores SA); 120)- cheque Nº 92779370 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 02/07/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Hermano Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 121)- cheque Nº 92779399, de fecha 16/07/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina"); 122)- pago de fecha 15/07/14, por la suma de $1.000,00 "Viaje de suelo a pedio UOCRA" (recibido por "Gerardo"); 123)- cheque Nº 96762603 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 06/08/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Hermano Erbin" y cobrado

por Erbin Raúl DNI 14595367); 124)- cheque Nº 96762625 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 11/08/14, por la suma de $4.000,00 (recibido por "Mario Gonzalez"); 125)- cheque Nº 9733476, de fecha 14/08/14, por la suma de $1.500,00 (recibido por "Gerardo"); 126)- cheque Nº 97334793 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 23/09/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 127)- cheque Nº 79347506 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 27/08/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 128)- cheque Nº 98654261 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 23/09/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 129)- cheque Nº 325972 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/11/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 130) cheque Nº 325973 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/11/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Gonzalez, DNI 22670556); 131)- cheque Nº 326000, de fecha 09/12/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Erbin"); 132)- cheque Nº 2216842, de fecha 29/12/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina"); 133)- cheque Nº 5394822 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 05/02/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 134)- cheque Nº 5808343, de fecha 18/03/15 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"

y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 135)- cheque Nº 81491012 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 27/04/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 136)- cheque Nº 11260101 del Banco Provincia de Buenos Aires, de fecha 18/06/15 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 137)- cheque N.º 11260119 del Banco Provincia de Buenos Aires, de fecha 27/07/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 138)- cheque Nº 14701341, de fecha 28/08/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 139)- cheque N.º 17137990 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 04/11/15, por la suma de $6.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 140)- cheque N.º 18698792, de fecha de 10/12/15 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 141)- cheque Nº 18698820, de fecha 14/01/16, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 142)- cheque Nº 86007799 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 11/03/16 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 143)- cheque Nº 23507842 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 04/04/16, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 144)- cheque Nº 23507872, de fecha 26/04/16 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 145)- cheque Nº 13849736, de fecha 06/06/16 por la suma de $2.900,00 (recibido por

"Molina"); 146)- pago en efectivo, de fecha 06/06/16 por la suma de $600,00 (recibido por "Molina"); 147)- cheque Nº 24855139 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 01/07/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 148)- cheque N.º 88492705 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 02/08/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 149)- cheque Nº 89238220 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 30/09/16, por la suma de $3.300,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 150)- cheque Nº 89763969 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 30/10/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban DNI 11343112); 151)- cheque Nº 29059353 del Banco de la Prov. de Bs. As, de fecha 25/11/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 152)- cheque N.º 90481688 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 27/12/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 153)- cheque N.º 35827717 del Banco de la Prov. de Bs. As., de fecha 09/02/17, por la suma de $3.500,00 (cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 154)- cheque Nº 39058335 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 03/04/17, por la suma de $7.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Bazan DNI 28068181); 155)- cheque Nº 30538613, de fecha 31/05/17, por la suma

de $3.500,00 (recibido por "Molina"); 156)- cheque N.º 31135246 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 04/07/17 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina"); 157)- cheque Nº 32428763 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 19/09/17, por la suma de $11.000,00.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 23): Con posterioridad al inicio de la obra de "PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES TRES SARGENTOS, ENTRE PILMAYQUEN Y FRAGATA SARMIENTO - CHARCAS ENTRE FRAGATA SARMIENTO Y FORTALEZA PROTECTORA ARGENTINA - SAN LORENZO ENTRE NECOCHEA Y MISIONEROS (21 CUADRAS)" (el día 05 de junio de 2017), licitada según expediente N° 417R-200-2017, el señor

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

LUIS MARÍA MEDUS, socio gerente de la empresa "OBRAS ABEDUL S.R.L." que estaba a cargo de dicho emprendimiento, fue citado por el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) a una reunión en el ámbito de la estación de servicio YPF ubicada en avenida Colón y calle 9 de Julio de esta ciudad, oportunidad en que el citado dirigente sindical le EXIGIÓ al empresario -como "colaboración a la U.O.C.R.A."- un monto equivalente al TRES POR CIENTO DEL PRECIO DE LA OBRA, para finalmente compelerlo al pago de la suma de VEINTICINCO MIL PESOS POR MES durante el periodo de duración de la obra, como condición para poder continuar su ejecución sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor MEDÚS ABONÓ a MOLINA las siguientes sumas: DOCE MIL PESOS, el día 26 de julio de 2017, mediante cheque Banco Provincia de Buenos Aires número 41640077, de fecha 04/08/2017; la suma de DIEZ MIL PESOS, mediante cheque Banco Provincia de Buenos Aires número 41640099, de fecha 10/08/2017; la suma de ONCE MIL PESOS, mediante cheque cargo Banco Provincia de Buenos Aires n° 44684883, de fecha 14/09/2017 y la suma de ONCE MIL PESOS, mediante cheque Banco Credicoop n° 32428764, de fecha 19/09/2017.

Todos estos cartulares fueron entregados a MOLINA -quien actuó con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto respectivamente y jefes de la Delegación Bahía Blanca de la UOCRA)- en la sede de la empresa (sita en calle Rega Molina n° 816 de esta ciudad) y fueron cobrados por el señor Omar Roca (DNI 18.027860), según constancias remitidas por las entidades bancarias.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 25): Entre fines del año 2016 y principios del año 2017, cuando la empresa "KARPA S.A." se encontraba realizando una obra contratada por la firma "Pampa Energía S.A." (ex Petrobrás), consistente en la COLOCACIÓN DE POLIDUCTOS QUE CONECTAN EL DEPÓSITO DE

DICHA EMPRESA PETROLERA Y EL "SITIO 7" DE PUERTO GALVÁN, el señor WALTER RAFAEL PAIZ (Tercer Vocal Titular y Secretario de Organización y Asuntos Gremiales de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca), se presentó en el lugar y, luego de realizar una inspección, requirió a los representantes de la firma que se constituyan en la sede del gremio (ubicada en calle Saavedra n" 470 de esta ciudad).

En la sede gremial, el señor PAIZ, invocando directivas del Secretario General HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, le EXIGIÓ a MARTÍN DARIO SÁNCHEZ -en su carácter de presidente de la empresa constructora- una suma equivalente al TRES POR CIENTO DEL VALOR DE LA OBRA que estaban realizando, como condición para poder continuar la misma sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Posteriormente, ante la insistencia de PAIZ, el empresario acordó abonar la suma total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, que sería abonada en pagos parciales, en forma mensual, durante la ejecución de la obra.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor SÁNCHEZ ABONÓ las sumas exigidas en dinero efectivo, en cinco mensualidades, que fueron recibidas por WALTER RAFAEL PAIZ (las dos primeras) y por una persona que se identificó como un hermano de éste (las tres restantes).

Para lograr la indebida disposición patrimonial, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidó al empresario con la

paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 26): Con posterioridad a que el dirigente Humberto Arnaldo Monteros asumiera como Secretario General de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Segundo Vocal y Secretario General Adjunto del sindicato), EXIGIO a los representantes legales de la firma "CERRA Y MORO S.R.L.", el pago de sumas de dinero que debían abonarse en forma mensual, para que la citada empresa pudiera ejecutar las obras a su cargo sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la U.O.C.R.A.

Por decisión del señor JOSÉ BERNARDO BURGOS, a partir del año 2010, dicho monto era actualizado todos los años hasta alcanzar la suma de CINCO MIL PESOS MENSUALES que fue abonada durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Como consecuencia de la extorsiva

imposición, dichas sumas eran abonadas en dinero efectivo, aproximadamente entre los días 15 a 20 de cada mes, al señor JOSÉ BERNARDO BURGOS o al señor CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplente y Delegado Gremial), en la sede de la empresa damnificada (sita en Ruta Nacional N° 3 Norte, kilómetro 678, del partido de Bahía Blanca).

El dinero fue exigido por Burgos con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General de la UOCRA).

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 27): A partir del año 2014, con posterioridad al inicio de la obra de CONSTRUCCIÓN DE LA ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN

DE AVENIDA CABRERA Y CALLE PILMAYQUEN DE ESTA CIUDAD, cuyo comitente era la Municipalidad de Bahía Blanca (y tramitó bajo expediente administrativo n° 417R N° 2952/2014), el señor DIEGO MARTÍN CERRA, apoderado de la firma "CERRA Y MORO S.R.L." a cargo de dicho emprendimiento, fue citado por una persona identificada como NÉSTOR "Cucha" RIVAS (colaborador de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca), a una reunión en la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de las avenidas Cabrera y Pilmayquen de esta ciudad, oportunidad en que Rivas le exigió la suma de TREINTA MIL PESOS POR MES, durante el lapso que durara la realización de la citada obra vial. Días más tarde, al no cumplir la víctima con la exigencia, el señor Rivas se constituyó en la obra y dispuso la paralización de la misma a través de una supuesta "asamblea", comunicándole al damnificado -por intermedio del jefe de obra Raúl Porras- de manera prepotente e intimidante: "acá, hasta que no arreglemos no trabaja nadie".

En virtud de la exigencia coactiva de RIVAS, se acordó finalmente el pago de la suma de QUINCE MIL PESOS POR MES para poder continuar las tareas sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la UOCRA. En cumplimiento de dicha imposición, el señor DIEGO CERRA ABONÓ a RIVAS las sumas exigidas, en dinero efectivo, durante el periodo de seis meses -aproximadamente- que demandó la construcción de la obra.

El dinero fue exigido y percibido por Rivas con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente).

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaron a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 28): Así también, en los años 2014 y 2015, durante la construcción de la ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS CABRERA Y PILMAYQUÉN DE LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA (cuyo comitente era la Municipalidad de Bahía Blanca, tramitando la respectiva contratación en expediente administrativo número 417R N° 2952/2014), el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS EXIGIÓ al señor DIEGO MARTÍN CERRA, como condición para que la obra pueda continuar desarrollándose

sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la UOCRA, que la firma "CERRA Y MORO S.R.L." contrate los baños químicos que ofrecía la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." (con domicilio en calle Río Atuel 780 de esta ciudad), debiendo abonar el empresario como consecuencia de dicha imposición un valor superior al que por ese servicio ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 29): En el año 2016, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca), EXIGIÓ al señor DIEGO MARTÍN CERRA (apoderado de la firma "CERRA Y MORO S.R.L.") las sumas de QUINCE MIL PESOS y de TRES MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y TRES PESOS, que -según le indicó el requirente- serían destinadas a FINANCIAR LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LA LISTA QUE INTEGRABAN HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y EL CITADO BURGOS EN LAS ELECCIONES A AUTORIDADES DE LA U.O.C.R.A., SECCIONAL BAHÍA BLANCA.

En cumplimiento de dicha imposición, el señor DIEGO MARTÍN CERRA abonó las sumas exigidas mediante los cheques del Banco Provincia de Buenos Aires, correspondientes a la cuenta corriente número 6202-03974/1 de titularidad de "Cerra y Moro S.R.L.", número 23264786, de fecha 25/04/2016, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.910,50), y número 31380627, de fecha 11/11/2016, por la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON NUEVE CENTAVOS ($14.690,09). Este último cartular fue endosado en primer término por "LAURA BURGOS - ACQUA SERVICIOS S.R.L." y finalmente por IGNACIO IGLESIAS en su carácter de presidente de "LOGÍSTICA ALFREDITO S.A.".

Para ocultar el carácter espurio de dichos pagos, BURGOS dispuso la emisión de las facturas número 00000130 de fecha 19/04/2016 y número 00000188 de fecha 11/11/2016, correspondientes a la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." con domicilio en calle Río Atuel 780 de esta ciudad (vinculada a José Bernardo Burgos y a su familia), documentando de esta manera servicios que nunca fueron prestados a la empresa

damnificada. El dinero fue exigido y percibido por BURGOS con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 30): Durante el año 2016, en circunstancias en que se desarrollaba la obra "INTERVENCIÓN URBANA EN AVENIDA GUILLERMO TORRES DE INGENIERO WHITE - 1ra. ETAPA", la cual estaba a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por "SCHLOSSER INGENIERÍA" y "OBRAS ABEDUL S.R.L.", el señor CARLOS SCHLOSSER fue citado a la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca (sita en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad), donde fue recibido por el señor WALTER RAFAEL PAIZ (Tercer

Vocal Titular y Secretario de Organización y Asuntos Gremiales), que le dijo que tenía que "colaborar", exigiéndole un monto de dinero que finalmente se estableció en la suma de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS POR MES, como condición para que las tareas laborales puedan continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la U.O.C.R.A.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor SCHLOSSER abonó las sumas exigidas durante ocho meses -como mínimo-, mediante entregas en dinero efectivo y los siguientes cheques correspondientes a la cuenta corriente en pesos n° 053497/0 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 6229: 1)- número 026994902, de fecha 10/06/16, por la suma de $7.500; 2)- número 026994914, de fecha 02/08/16, por la suma de $7.500; 3)- número 026994941, de fecha 23/08/16, por la suma de $7.500; 4)- número 026994978, de fecha 27/10/16, por la suma de $7.500; 5)- número 026994999, de fecha 02/12/16, por la suma de $7.500; 6)- número 034590851, de fecha 30/12/16, por la suma de $7.500. Dichos pagos -realizados en efectivo o cheque- fueron recibidos por un colaborador de Paiz, en la sede de la empresa (sita en calle O´Higgins n° 2096 de esta ciudad).

Los pagos fueron exigidos y percibidos por PAIZ con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y

JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr la indebida disposición patrimonial, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban al empresario con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la UTE cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de la obra, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 32): Posteriormente, en circunstancias en que la firma "ENTEGRO S.U.R.L.S.E." se encontraba realizando las tareas de REPARACIÓN DE LA TURBINA 30 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA LUIS PIEDRABUENA de INGENIERO WHITE (obra que comenzó a mediados del año 2016 y finalizó a comienzos del año 2017), los señores MARIO MATÍAS GONZÁLEZ y PABLO DAVID GUTIERREZ (Delegado Gremial y Colaborador Gremial y Secretario de Difusión y Actas de la U.O.C.R.A., respectivamente), quienes invocaban la representación y órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General del

sindicato), EXIGIERON a los señores MIGUEL IWANYNIUK y RUBÉN EDGARDO ALMADA (representante legal y administrador de la firma "Entegro S.U.R.L.S.E.", respectivamente) la suma total de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000), para que la obra se desarrollara sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la U.O.C.R.A. La espuria exigencia de los sindicalistas se concretó en reuniones que se realizaron en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) - Seccional Bahía Blanca, oportunidad en que ALMADA pidió que aceptaran el pago en cuotas para evitar a la citada compañía perjuicios patrimoniales aún mayores.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor MIGUEL IWANYNIUK (representante legal de "Entegro S.U.R.L.S.E."), abonó la suma exigida mediante tres entregas de dinero efectivo: la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000) en la sede de UOCRA QUILMES y, posteriormente, las sumas de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) y DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000) en Bahía Blanca, las cuales fueron recibidas durante el desarrollo de la obra por GONZÁLEZ y GUTIERREZ. Así también, MARIO MATÍAS GONZALEZ y PABLO DAVID GUTIERREZ (Delegado Gremial y Colaborador Gremial - Secretario de Difusión y Actas de la U.O.C.R.A., respectivamente), siguiendo directivas de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, EXIGIERON a RUBÉN EDGARDO ALMADA, que ajustara los sueldos de los trabajadores de la firma "ENTEGRO S.U.R.L.S.E.", que por entonces

realizaban tareas de reparación de la turbina 30 de la CENTRAL PIEDRABUENA, a las pautas de dicho acuerdo, imponiendo nuevamente un indebido aumento salarial. Durante la reparación de la referida turbina 30, los citados imputados exigieron a ALMADA la contratación de trabajadores que no contaban con la capacitación técnica necesaria para realizar las obras que "ENTEGRO SURLSE" se encontraba desarrollando en la central termoeléctrica.

HECHO 33): Finalmente, durante la obra indicada y relativa a la reparación de la turbina 30 en la TERMOELÉCTRICA LUIS PIEDRABUENA, MARIO MATÍAS GONZÁLEZ y PABLO GUTIERREZ GUTIERREZ (Delegado Gremial y Secretario de Difusión y Actas -respectivamente), quienes actuaban siguiendo órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General de la U.O.C.R.A.), EXIGIERON a MIGUEL IWANYNIUK y RUBÉN EDGARDO ALMADA, que la firma "Entegro S.U.R.L.S.E." contrate el servicio de transporte para los empleados a la empresa "FLOR DE LIRIO S.R.L.", y el servicio de viandas a la empresa "STRADI VIANDAS S.A." y, posteriormente, a "ZABALLA ARIEL EDGARDO".

Dichos servicios fueron impuestos como condición para que la obra pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos de parte de los dirigentes de la U.O.C.R.A., debiendo en razón de ello, abonar

la firma damnificada un costo superior al valor que por esos servicios ofrecían otras empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 34): Durante el año 2017, cuando la empresa "GEOMAC S.A." se encontraba realizando la obra "DESAGÜES PLUVIALES EN CALLE ROSALES ENTRE HAITÍ Y RAWSON DE VILLA AMADUCCI" (expediente N° 417R-3501-2016, contratada por la Municipalidad de Bahía Blanca), se presentaron en dicha obra dos personas que se identificaron como integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, quienes le manifestaron al señor ALEJANDRO CÉSAR COWPER -apoderado y representante técnico de la citada empresa constructora- que la obra estaba paralizada hasta que se constituya en la sede del sindicato.

Cumpliendo con el requerimiento, durante esa jornada, el ingeniero Cowper se presentó en la sede de Seccional Bahía Blanca de la UOCRA (sita en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad), donde fue recibido por el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas del sindicato), quien le EXIGIÓ el pago de la suma de ONCE MIL PESOS POR MES, durante el tiempo que durara la obra, como condición para que ésta pudiera continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos de integrantes de la U.O.C.R.A.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor COWPER ABONÓ al señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA las sumas exigidas en dinero efectivo, los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2017, en que se realizó la obra.

El dinero fue exigido y percibido por el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidó al empresario con la paralización de la obra o la imposición de más trabajadores en la misma y la consiguiente designación de un delegado gremial, circunstancias que

afectaban el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y ocasionaban costos no presupuestados.

HECHO 35): A partir del mes de febrero de 2017 -aproximadamente-, en circunstancias en que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por "PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F" y "TECMA S.A.", se encontraba abocada a la construcción de la planta de "TRATAMIENTO BIOLÓGICO SECUNDARIO CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES - PLANTA DEPURADORA CLOACAL. 1° CUENCA - BAHÍA BLANCA", PERTENECIENTE A LA EMPRESA PROVINCIAL "AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANÓNIMA" (ABSA), ubicada sobre la Ruta Provincial N° 252 (en cercanías de Ingeniero White), el señor HUGO ALBERTO DRAGONETTI -presidente de "Panedile Argentina S.A.I.C.F."-, fue extorsionado por los integrantes de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, señores HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General), PABLO DAVID GUTIÉRREZ (Secretario de Difusión y Actas) y MARIO MATÍAS GONZÁLEZ (Delegado gremial y Colaborador Gremial), quienes le EXIGIERON que abonara a los operarios que trabajaban en la obra, UN AUMENTO DEL VEINTE POR CIENTO DEL SALARIO QUE PERCIBÍAN DICHOS TRABAJADORES según el convenio salarial vigente aplicable al sector (C.C.T. 76/75 y sus modificatorias).

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los dirigentes sindicales paralizaron la obra en reiteradas oportunidades, mediante supuestas "asambleas", las cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la UTE cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

Ante la coactiva exigencia, en fecha 29 de mayo de 2017, los directivos de la empresa constructora debieron suscribir un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires- Delegación Regional Bahía Blanca, en el marco del expediente administrativo n° 21507-711-17-00, aceptando el pago de las sumas indebidamente demandadas.

Como consecuencia de la imposición, los directivos de las empresas constructoras pagaron a cada trabajador las sumas indicadas junto a la liquidación de los respectivos salarios.

HECHO 38): A principios del mes de noviembre del año 2016, en circunstancias en que el ingeniero JUAN MANUEL MORENO se encontraba realizando -con personal a su cargo- la obra de colocación y reparación de veredas en calle Mitre -entre calles Rodriguez y Sarmiento-

del ejido urbano de esta ciudad (tareas contratadas por Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima -ABSA-), se presentó en la misma personal de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, EXIGIENDO la presentación en esa sede de documentación relativa a la obra.

Posteriormente, cuando el ingeniero MORENO se apersonó en la sede local de la UOCRA (sita en calle Saavedra número 470 de esta ciudad), a fin de acompañar la documentación requerida por representantes del sindicato, fue recibido por el señor SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Segundo Vocal Titular del sindicato). En esa oportunidad, CANALES le EXIGIÓ que suscribiera un convenio a través del cual el empresario se obligaba a abonar a sus dependientes una suma mensual que equivalía a un aumento de un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) DEL SALARIO que percibían los trabajadores de acuerdo al convenio salarial vigente.

Así también, le EXIGIÓ al damnificado la prestación a sus operarios del servicio de transporte hasta la obra, la entrega de viandas, el pago de un bono a fin de año de SEIS MIL PESOS por trabajador y la contratación de una determinada cantidad de empleados de la bolsa de trabajo de la referida entidad sindical. Ante la negativa de MORENO a suscribir el convenio y aceptar las imposiciones de CANALES, el imputado junto a otros integrantes de la UOCRA, dispusieron arbitrariamente el día 02 de noviembre de 2016 la paralización de las referidas obras a cargo del

citado profesional, intimándolo a que se constituyera en la sede local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para suscribir aquel convenio. Al reunirse en la delegación Ministerial el día 04 de noviembre de 2016 y ante la negativa de JUAN MANUEL MORENO a suscribir dicho convenio en los términos abusivos en que le habían sido impuestos, SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES ordenó telefónicamente que representantes del sindicato paralizaran las obras. Estas circunstancias obligaron al damnificado a cesar su actividad laboral en esa obra.

Con posterioridad, al retomar la actividad en esa obra a fin de cumplir con lo convenido contractualmente con la empresa ABSA, se constituyó nuevamente en la obra personal de la referida organización sindical, advirtiéndole de que si quería continuar sus tareas en esa obra con normalidad, debía suscribir el convenio que le fuera indicado por CANALES.

Así las cosas, ante las amenazas recibidas, el señor JUAN MANUEL MORENO se vio obligado a suscribir con fecha 20 de enero de 2017 el convenio en cuestión, en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (interviniendo en representación de la UOCRA el señor Walter Rafael Paiz), ello como única posibilidad de poder continuar las tareas y evitar mayores perjuicios económicos.

En el referido acuerdo se documentó de manera arbitraria que JUAN MANUEL MORENO debía abonar una suma equivalente a un

incremento del treinta y cinco por ciento del salario a favor de sus trabajadores y brindarles los servicios de gastronomía (viandas) y transporte.

Para lograr dichas disposiciones patrimoniales, el damnificado fue presionado por el imputado y otros integrantes del sindicato, quienes en caso de que no cumpliera con el pago de la suma exigida, paralizaban las obras o disponían la realización de supuestas "asambleas informativas", que sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir que la empresa pueda cumplir con el plan de tareas y plazos previstos para la realización de las obras, circunstancias que afectaban su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte del comitente.

HECHO 40): Durante el transcurso del mes de mayo del año 2017, en circunstancias en que el ingeniero JUAN MANUEL MORENO se encontraba realizando -con personal a su cargo- una obra de recambio de cañerías en la zona comprendida por las calles Lavalle, España, Villarino y General Paz -todas de Bahía Blanca- y cuyo comitente era la empresa ABSA, los señores GUILLERMO ESTEBAN MOLINA y SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Secretario de Finanzas y Segundo vocal titular (respectivamente) de la Seccional Bahía Blanca de la UOCRA) convocaron a JUAN MANUEL MORENO a una reunión en ese organismo sindical. En esa oportunidad, MOLINA EXIGIÓ al damnificado la suscripción de un

convenio abusivo y de similares características al que le fuera obligado a suscribir el día 20 de enero de 2016 en relación a la obra de reparación de veredas que Moreno se encontraba realizando en calle Mitre -entre calles Sarmiento y Rodriguez- de Bahía Blanca; mientras que CANALES le EXIGIÓ el pago de una suma dineraria de entre veinte mil y veinticinco mil pesos mensuales, durante todo el plazo que durara la obra de recambio de cañerías y para provecho de aquellos.

A partir de las exigencias recibidas, JUAN MANUEL MORENO efectuó a GUILLERMO ESTEBAN MOLINA, en la vía pública, un sólo pago de la suma exigida, en dinero en efectivo.

El dinero fue exigido por CANALES y percibido por MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente).

Para lograr dichas disposiciones patrimoniales, el damnificado fue presionado por el imputado y otros integrantes del sindicato, quienes en caso de que no cumpliera con el pago de la suma exigida, paralizaban las obras o disponían la realización de supuestas "asambleas infomativas", que sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir que la empresa pueda cumplir con el plan de tareas y plazos previstos para la realización de las obras, circunstancias que

afectaban su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte del comitente.

HECHOS 42), 43), 44) y 45): En la ciudad de Bahía Blanca, el día 21 de marzo de 2017, entre las 09:00 y las 09:30 horas -aproximadamente-, en circunstancias en que se realizaba una inspección de la obra a cargo de la empresa "COINCE BAHIA S.A.", ubicada en avenida Alem a la altura catastral del 5.000 -aproximadamente- de la ciudad de Bahía Blanca, a cargo de los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires: LUIS ALBERTO DIEZ (legajo 260537) y ALEJANDRA NORA MOLINA (legajo 601152), junto a una comitiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, integrada por los Delegados Coordinadores: Martín Ariel Parada, Benjamín César Unibaso, Cristian Adrián García, Walter Mario Soules, Jorge Cuevas y Damián Mayor; se constituyeron en el lugar un grupo de dirigentes y colaboradores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, que empezaron a agredir a los presentes.

Entre esas personas se encontraba el señor MARCOS TEVEZ -delegado de obra-, quien en esas circunstancias le manifestó al señor CRISTIAN ADRIÁN GARCÍA, los siguientes términos amenazantes: "con vos, voy a hablar en el barrio", "no se te olvide que andás siempre con los pibes en la moto".

Posteriormente, durante esa misma jornada, entre las 09:30 y las 10:30 horas -aproximadamente-, los citados inspectores del Ministerio de Trabajo y los representantes del SITRAIC nombrados anteriormente, se trasladaron a otra obra a cargo de la empresa "COINCE BAHIA S.A.", ubicada en la intersección de las calles Carmen Ledesma y Sargento Iturra de la ciudad de Bahía Blanca, y en circunstancias que los funcionarios iniciaban la diligencia de inspección, se hicieron presentes en dicho lugar los señores: JORGE DÍAZ, MARCELO ORTÍZ, WALTER RAFAEL PAIZ, SEBASTIAN OCTAVIO CANALES, ROBERTO SABINO RÍOS y MARIO MATÍAS GONZÁLEZ, junto a MARCOS TEVEZ (que había convocado telefónicamente a los nombrados), todos dirigentes, colaboradores y delegados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, quienes junto a un grupo de aproximadamente cincuenta personas no identificadas, mediante la colocación de los rodados en que se transportaban obstruyendo el paso, impidieron que las víctimas se retiraran del lugar en los vehículos en que se habían trasladado (pertenecientes a Walter Mario Soules y a Benjamín César Unibaso).

En esas circunstancias, los señores JORGE DÍAZ, MARCELO ORTÍZ y WALTER RAFAEL PAIZ, golpearon la camioneta marca Toyota, Modelo Hilux, dominio INQ-698, de propiedad de Walter Mario Soules, ocasionándole los siguientes daños: hundimiento del lateral derecho de la caja y de la superficie de la chapa de la puerta de la caja de la camioneta.

Asimismo, en las mismas condiciones descriptas, el señor JORGE DÍAZ -siguiendo la indicación de SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES- arrancó con sus manos el espejo retrovisor externo de la puerta del conductor de la camioneta marca Chevrolet, modelo S10, dominio BUU-152, que conducía Benjamín César Unibaso.

Acto seguido, el señor JORGE DÍAZ arrinconó contra un alambrado a BENJAMÍN CÉSAR UNIBASO, a quien tomándolo del cuello le profirió los siguientes dichos amenazantes: "esto lo va a pagar tu hermano Gerardo y tu padre, ya sabemos todo sobre vos", causándole gran temor por lo que le pudiera ocurrir a su persona y familia.

La conducta amenazante de los imputados y los hechos indicados anteriormente, fueron concretados con el propósito de amedrentar a los presentes y evitar que se realicen las inspecciones que estaban programadas en dichas obras de construcción.

Como consecuencia de los actos de violencia, de las manifestaciones intimidantes advirtiendo que no podían realizar la diligencia y de las agresiones indicadas precedentemente por parte de los representantes de la UOCRA, los inspectores del Ministerio de Trabajo -Luis Alberto Diez y Alejandra Nora Molina- debieron suspender la realización del acto funcional que estaban desarrollando, pues no estaban garantizadas las condiciones mínimas de seguridad para los presentes y sus bienes.

En virtud de ello, se trasladaron junto a los representantes del SITRAIC indicados precedentemente, a la sede de la Delegación Regional Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (sita en calle O'Higgins Nº 247 de esta ciudad). Cuando arribaron a dicho lugar, JORGE DÍAZ, ROBERTO SABINO RÍOS, MARCELO ORTIZ y el masculino no identificado que fue individualizado como "Diego" (todos de la UOCRA), abordaron a Martín Parada y a Cristian Adrián García (delegados del SITRAIC), a quienes amenazaron de muerte.

Más tarde, dentro de las dependencias del Ministerio de Trabajo, cuando Martín Parada y Cristian Adrián García estaban con el titular de la Delegación Bahía Blanca del referido organismo -señor Sergio Bozzi- los señores ROBERTO SABINO RÍOS y JORGE DÍAZ amenazaron nuevamente a los presentes, refiriendo RÍOS a viva voz: "de acá nos vamos, pero estos dos de acá no salen, y vos vas a ser el responsable" (en referencia a Bozzi), tras lo cual se retiraron del lugar ante la presencia policial.

Aclaro que se han dejado de lado en este detalle descriptivo hechos que no se analizan en esta decisión porque se corresponden con otros acusados, que han optado por el procedimiento de juicio abreviado (habiendo intervenido en distintos acuerdos y por diferentes acusados, la Sra. Jueza Dra. Claudia Fortunatti –imputado Muñoz-, el señor Juez Dr.

Ricardo Gutierrez –imputados Aranda, Vasquez, Erbin, Canales y Gutierrez-, el señor Juez Dr. Cristian Yesari –imputado Carrillo- y el señor Juez Dr. Eduardo A. d'Empaire –imputado Cabrera-), o por tratarse de hechos acusados sólo al señor Humberto Monteros –fallecido-.

No obstante ello, para un mejor orden de la resolución y debida comprensión por las partes, atento que las mismas, tanto durante las audiencias de juicio, como en los alegatos iniciales y finales, se han expresado haciendo referencia a los hechos de conformidad con la numeración indicada en su momento por el Ministerio Público Fiscal, es que en la presente, se seguirá ese mismo criterio.

Como primera cuestión corresponde adelantar un pedido de disculpas a todo lector de la presente que se dispone a analizar la misma, dado que por las características y las situaciones acontecidas durante las audiencias de debate (que comenzaron en el mes de marzo y culminaron en el mes de septiembre), me he visto obligado a realizar un extenso detalle de los distintos testimonios que he tenido en consideración para adoptar la decisión, ello debido a las plurales constancias en actas que han dejado las partes, y al uso que se ha realizado de ellas; las que por sí solas reflejan unas palabras, frases u oraciones de los dichos de una persona, y analizadas fuera del contexto en el que se habrían vertido, en el momento del relato del testigo en que fueron efectuadas y en atención a las

cuestiones sobre las cuales estuviese siendo consultado en ese momento, podrían llevar a conclusiones u opiniones incorrectas.

Por lo recién expuesto, en la valoración de cada uno de los testimonios que se analizarán a continuación, he tratado de consignar de forma pormenorizada los dichos a partir de los cuales sustento mi posición y las conclusiones que de ellos he extraído.

En lo que respecta al hecho señalado como número uno por la acusación fiscal, entiendo que el mismo se encuentra acreditado con la prueba producida en las audiencias de debate, con la aclaración que en cuanto a la descripción del mismo se efectuará en su momento.

Computo lo señalado por el testigo Pablo Quantín quien dijo en la audiencia ser empresario de la construcción, titular de Vial Agro S. A., con sede en la localidad de Tres Arroyos, ocupando desde el año 90 diferentes cargos, siendo hoy presidente del directorio. Que la empresa es socia de la Cámara Argentina de la Construcción, en la que desempeñó cargos tanto en Bahía Blanca, como en la sede central en Buenos Aires. Que en Bahía sigue estando, alternando como presidente y vicepresidente hasta el día de su declaración. Que tomó conocimiento de inconvenientes con la UOCRA. Que como empresario tiene relación con el gremio que nuclea a sus operarios, tiene contacto con el gremio desde el 90 donde han trabajado en el país.

Contó que no eran asiduos en obras en Bahía hasta el año 2.012 o 2.013, donde comenzaron a realizar obras en la zona y empezaron a tratar con la sede de la UOCRA Bahía Blanca, teniendo una relación normal hasta que a partir del 2.014 o 2.015 en adelante tuvieron inconvenientes, cuando la UOCRA pretendía mejorar el salario de los operarios en una cifra que las empresas no tenían posibilidad de pagar, que ahí empezaba la discusión, que no llama la atención porque esto pasa en todo el país.

Apuntó que no estaban en condiciones porque hacen infraestructura pública, no privada, se cotiza una obra que tiene un convenio año tras año con el gremio, se accede al contrato y por eso tiene parámetros que no se pueden alterar, porque sino se perjudica el monto del ingreso. Que eso pasa en todos lados y siempre se llegó a un punto de encuentro, cosa que no pasó en Bahía Blanca, y por eso tenían grandes inconvenientes para desarrollar las obras.

Contó que los del gremio no tenían flexibilidad en su pedido, fijaban un valor y no había manera de acordar otra cosa. Que como su cliente es el estado, tienen obligaciones de ejecución, y en las obras empezaban las protestas, se realizaban asambleas irregulares porque no estaban dentro de la reglamentación, lo que tornaba inviable desarrollar las obras, los hacían ingresar en severos incumplimientos donde las penas contractuales eran gravísimas.

Relató que él era presidente de la delegación Bahía Blanca de la Cámara de la Construcción, y ahí había quejas similares de todos los asociados; que son una veintena de empresas, y todos tenían los mismos inconvenientes, pedidos, dificultades, por lo que ha ido a reuniones para llegar a puntos de encuentro y ahí se evidenciaba que no había manera de llegar a un punto de encuentro.

Que tomó conocimiento a partir de su función y de su empresa que había solicitudes de contratación de determinadas empresas, relacionadas con comidas para los trabajadores, cuestiones de sanidad y baños químicos, transporte de los operarios a las obras, utilización de transportes en las obras, que esto era en esos rubros, aunque no recuerda el nombre de las empresas. Que no sabe por qué pedían contratar a esas empresas.

Expuso que en su empresa todos los años hay pedidos de ese tipo, con el inicio de cada obra, en todas las jurisdicciones. Que en Trelew hicieron el aeropuerto y se convinieron sumas diferentes a las del convenio colectivo; pero en Bahía no lo pudieron hacer esto de tener un acuerdo de salarios para poder desarrollar las obras con normalidad, y tenían protestas con modalidad diferente, asambleas de forma imprevista con paralización de las obras, con el deterioro patrimonial que ello genera.

Comentó que las veces que fue a reuniones institucionales representando a la Cámara fueron dos en el gremio y una en la CGT. Que

ahí estaban Burgos, Gonzalez, Canales, Paiz, Molina y algunos más, y que en una obra cerca de Pringles se reunió con Canales y Gonzalez, y que en las obras de acá el trato era con Burgos.

Contó que tuvo muchos inconvenientes en su empresa y por eso hicieron una denuncia en el Ministerio de Trabajo que los citó a audiencia en Tres Arroyos sin resultado positivo, que esto debe haber sido por la obra de Pringles.

Que siguieron con los problemas hasta que se desmembró la seccional, cambió la gente y pudieron comenzar a trabajar con normalidad.

Comentó que participó de la obra en el predio de la UOCRA en la ruta 3 vieja, que como estaban haciendo trabajos en el aeropuerto de Bahía cedieron materiales y equipos para hacer una obra en la sede de la UOCRA que quedaba cerca. Que esto fue un pedido del gremio y "…a veces podés decir que sí, otras veces que no, son pedidos que a veces decir que no son inconvenientes, dado que cuando te hacen un pedido y decís que no y no traen consecuencias no hay problema, pero en este caso sí traía consecuencias…" –sus expresiones-

Mencionó que no participó en las reuniones, que lo manejó su socio eventual que era la gente de Ingeniería y Arquitectura, pero los equipos que mandaron eran de su empresa; que definió el trato Ingeniería y

Arquitectura. Que los trabajos consistieron en pavimentación dentro del predio.

Al doctor Jara le contestó que cuando comenzaron a trabajar en la zona de Bahía Blanca no tenían inconvenientes, que luego sí comenzaron a tenerlos, no siendo esto normal, ya que no es normal tener una asamblea día mediante en una obra para discutir no se sabe qué. Que poder trabajar todos los días es lo normal, lo de las asambleas no lo era y estos problemas fueron en los años 2.015, 2016 y 2017, que incluso están las actas por escribano donde se documentaba todo.

Dijo que como funcionario de la Cámara no tenía noticias de ese tipo de asambleas, con esa frecuencia, que hayan ocurrido con anterioridad. Que en las asambleas consultaba cual era el motivo y le decían que no había acuerdo en las pretensiones salariales, pero sin más precisiones. Que con los abogados de la empresa a los que consultó les decían que ellos cumplían lo que correspondía por ley, y por eso hacían la denuncia en el Ministerio de Trabajo y no pasó nada. Que hubo una decisión del Ministerio de Trabajo que dictaminó a la asamblea como ilegal, no tiene el dato acá para aportarlo.

Señaló que las protestas terminaban generalmente en las denominadas asambleas, y él escuchaba lo que se reclamaba, pero ellos cumplían.

Le contestó al letrado que la redeterminación de precios no es para esos fines, no son para cubrir costos que se anexen a un contrato ya firmado; que con la redeterminación se verifica la variación, no el incremento del valor original. Que en la época de pandemia no se hizo redeterminación de precios.

Que un aumento de acuerdo de salarios puede impactar en el contrato y no suscribió convenio de esa naturaleza.

Reiteró que le consta lo que le dicen los empresarios, que todos tenían los mismos reclamos, incrementos de salarios, contratar determinados proveedores y pedidos de dinero.

Refirió que no le consta que la gente del gremio esté detenida por la denuncia de la Cámara, que sabe que están detenidos, y que él no invitó a nadie a denunciar.

Contestó que no conoce a Julia Pugnanoni.

Que los materiales para el predio supone que los sacaron de los acopios de la obra que estaban ejecutando. Que tiene que estar en la contabilidad registrado a donde fue ese material. Que ese costo se cargaba a sus bolsillos, no va a ningún otro lado.

Al doctor Martínez le contestó que la obra del aeropuerto duró unos 10 meses.

Que la mano de obra se actualiza por los organismos pertinentes por ejemplo en Indec; que si en el medio de la obra hay nuevo convenio, el Indec lo registra y eso se refleja en el costo del contrato. Que en la obra de Trelew en el acuerdo salarial se dio un incremento sobre lo previsto porque no perjudicaba la ecuación económica de la obra. Que en Bahía se perjudicaba la ecuación económica y por eso no se llegó a un acuerdo.

Que acá en Bahía no se hizo acuerdo, pero el aeropuerto es un lugar de acceso restringido, por lo que no admite el mismo tipo de protestas que se pueden hacer en otros lugares y por eso se terminó la obra.

Contó que en la ruta 35 y otra obra también se terminaron, que esto no quiere decir que el resultado sea el que se esperaba, y durante ese tiempo no se llegó a ningún acuerdo salarial.

Expresó que las solicitudes son por encima de los convenios colectivos homologados, las conversaciones de la UOCRA y los empresarios están todo el tiempo presente, se consulta lo que pide el gremio para sus afiliados y un aumento salarial no sucede en la totalidad de los casos, hay jurisdicciones que lo hacen y otras que no.

Que no compartían varias cosas, que lo de los salarios era una partecita, que había tres puntos. Que en cuanto a los salarios era ilógico el

porcentaje. Que en los otros dos puntos, por más que se arreglara el primero del sueldo, seguían los inconvenientes porque no se accedía a la contratación de operadores de servicio y pagar sumas.

Al señor Fiscal le contestó que a la gente de la UOCRA se le explicaban los motivos por los cuales no se accedía al nuevo salario, también a los operarios, porque los valores no eran convenientes según el mercado, y no se ponían de acuerdo.

Que en el tercer punto, los pedidos de dinero, él habla en su rol institucional, en su rol de empresario nunca le tocó, nunca le fueron a pedir dinero. Que en el rol institucional hubo muchos socios que manifestaban que les iban a pedir dinero para poder trabajar. Que les decían que las problemáticas se podían subsanar entregando sumas de dinero, que más no puede describir porque no son cosas que él hiciera.

Al doctor Jara le contestó que el señor Molina estaba en las reuniones de las que él participó, que eran varias personas y Molina conformaba el grupo que solicitaba los dos primeros puntos, incremento salarial y contratación de determinados proveedores. Que no recuerda si Molina personalmente habló, era una reunión de dos o tres empresarios y 6 o 7 personas del gremio, en esa reunión el interlocutor puede ser uno, pero se entiende que la finalidad que persiguen es la misma, que Molina nunca

dijo que lo que se requería estaba mal, y esto demuestra que estaba con esas personas.

Dijo que luego del cambio de autoridades no se volvieron a pactar, según recuerda, convenios por encima de la pauta salarial.

Al doctor Zorzano le refirió que había empresarios que manifestaban que los inconvenientes que se generaban en las obras se podían subsanar con la entrega de dinero, que entregando dinero sus obras se desarrollaban con total normalidad. Que no puede señalar un hecho puntual porque no recuerda las formas, pero es algo que alguien le dice y por eso no le parece serio que lo diga él.

El señor Jorge Omar Ferrari, al ser consultado por las generales de la ley, indicó que conoce al señor Mario Gonzalez. Luego señaló que su actividad es Ingeniero electricista en sistemas de potencia, siendo su empresa 400 fríos s.a. Que esa empresa la creó para la central termoeléctrica Guillermo Brown, que ese fue el primer trabajo en el año 2.014. Que cuando se deciden construir los edificios modulares de la central, los directores de Siemens creyeron en el proyecto que presentó y por eso fue su primer trabajo en relación a la central. Que así empezó con el gremio de la construcción al cual no conocía y le dijeron que tenía que hablar con el gremio para contarles que iba a hacer eso. Que habló con ellos y le dijeron que tenía que colaborar con el gremio, y en su inocencia de novato les dijo que con todo gusto y que les hacía una cámara frigorífica

-que es a lo que se dedica desde siempre-para el gremio, para que lo disfruten los asociados, acotando que no era ese el sentido de la colaboración que pedían.

Que lo llaman a otra reunión y ahí estaban Monteros y Vazquez, y le dicen que no había entendido el mensaje y luego le anota Monteros que la colaboración que tenía que darle, con el dólar que estaba a 8 pesos, era algo de 80.000 pesos por mes, unos 10 mil dólares. Que el declarante le dijo a Monteros y Vazquez que venía de un taller modesto y les explicó que la empresa la había creado para cumplir un sueño y que “no podía darle ni aire”. Que le dijeron que se figara si cambiaba de idea, y ahí se fue con el papel y se lo mostró a la gente que colaboraba en el proyecto, se lo mostró a la dirección de Siemens de Alemania y le dijeron que tratara de solucionarlo.

Que la gente que colaboraba con él era una empresa italiana denominada Armec argentina, los que estaban a cargo de la facturación y la financiación, dado que era un proyecto de un millón y medio de dólares. Esa empresa es de Rosario, ellos le dijeron que “ni loco cuando les mostré el papel”, y por eso también se lo contó a la gente de Siemens.

Apuntó que esa parte del proyecto la había ganado Armec, pero en realidad Armec puso la materia prima y para financiar el proyecto

que había creado y construido él con su empresa hasta ese momento; que por eso Armec lo contrató al declarante.

Señaló que no hubo más diálogo hasta que un miércoles tipo 10 de la noche, cuando iba a buscar a su hija a Villa Mitre en la camioneta, lo llama Monteros al celular y Le dice: “Jorgito te olvidaste de mi”, que él le contesta que no, que para él eso era inalcanzable y ahí Monteros le dijo que “entonces mañana no trabajaba más”. Que al otro día empezaron a trabajar y a eso de las 8 de la mañana comienza el hermano de Mario Gonzalez a decir que era una asamblea. Apuntó que Mario Gonzalez le había pedido personalmente que incorporara a su hermano, que nunca le pidió dinero ni nada, solo que pusiese a trabajar a su hermano en el equipo. Que a Mario lo conoce y no lo acusa de nada. Que fue por esto que aceptó al hermano de Mario, quien le dijo que se quedara tranquilo, que él respondía por la conducta del hermano; pero en realidad éste y otras personas más eran el brazo ejecutor de las medidas que mandaban del gremio. Señaló que estas personas que habían contratado del gremio llegaban cuando querían a trabajar, no con el resto del personal que iba en las combis, sino más tarde en autos particulares; que esto era una situación atípica que había que aceptar.

Regresó en su relato indicando que ese miércoles, luego de la llamada de Monteros, el hermano de Gonzalez empezó a “arrear” a la gente y les decía que estaban en asamblea. Que el declarante se acercó al

obrador y en la puerta Gonzalez le pega un empujón y le dice que saliese porque era de la patronal. Que a partir de eso tuvo una semana de asamblea, a la gente la buscaba la combi pero se quedaban adentro del obrador, acotando que el obrador era muy bueno porque es lo que fabrican en su empresa, muy cómodo para estar adentro.

Señaló que habló con sus empleados, dado que tenía buen trato y confianza, ya que él era uno más junto a sus empleados de 20 años, y que estos le decían que se tenían que quedar adentro del obrador porque sino los que estaban a través del gremio no conseguían trabajo nunca más, y los empleados suyos históricos decían lo mismo, que no podían hacer otra cosa, que no los iban a dejar trabajar.

Contó que lo raro de esto era cual era el motivo de la presión que tenían para que no se pudiese trabajar, nadie sabía cual era el motivo, el único aviso era el llamado telefónico de Monteros, no había otra razón. Que a los dos o tres días, luego de hablar con Brenstentein que era Ministro de Producción, con BebilAcqua que era el intendente, con Batakis que era Ministra, con concejales y con Larraburu, fue este último el único que le dio una mano, aunque no lo conocía personalmente. Mencionó que Larraburu le dijo que llamó a Monteros para que los dejase trabajar, dado que era una empresa chica de Bahía, y que Monteros le contestó que no se metiese en eso, según dichos de Larraburu. Que Brensteintein le había dicho que Monteros no le había atendido el teléfono.

Indicó que continuó la situación, que él se tenía que hacer cargo de los jornales caídos, lo que era terrible porque no podía trabajar e igual había que pagar. Que por esto fue a hablar con los alemanes de Siemens, a los que conoce por ser contratista directo de ellos desde el año 2013, manteniendo conversación con Jobani Campos, director, a quien le explicó la situación, comentándole que si Siemens o Armec no lo solucionaban él se iba de la obra. Que Armec entonces negocia, él no tuvo más contacto con la UOCRA, que cree que el interlocutor del gremio era Vazquez, y luego le depositan en su cuenta 80.000 pesos para que los retire y se los lleve. Que el declarante les avisó que no iba a tener contacto con ese tipo de gente, por lo que sacó el dinero y se lo dio a un empleado de Armec, quien se lo llevó a la UOCRA, y a partir de ahí le mandaban la plata a este empleado de Armec.

Le contestó al señor Fiscal que la parte de contratación de servicios determinados era una costumbre, no se charlaba, todo el mundo sabía que las combis eran de Flor de Liz, la ropa de SGT y las viandas de la otra empresa que contrataban todos, que eso era por defecto, ni se lo imponían, que en la charla era “acordate que el transporte es de acá, la ropa de acá y las viandas es esta”. Que Sgt es la empresa de ropa que está a la vuelta de su oficina, son muy atentos, al igual que los muchachos choferes de Flor de Liz, y las viandas estaban bien, no tiene objeciones que marcar.

Que la empresa Flor de Liz todos comentaban que era de la mujer de Monteros o algo así, que estaba relacionada con la dirección del gremio, lo mismo que la ropa SGT y no sabe nada de la empresa de viandas, no tiene evidencias.

Que en su momento le pidieron la contratación de personal, que era luego las personas que llamaron a la asamblea, los que apilaron a la gente, fue el hermano de Mario Gonzalez, que le dicen garrafa, otro muchacho Erbín, y otro que habían contratado, todos digitados por el gremio, y eran los que realizaron esa asamblea que duró una semana, por la que tuvo que pagar los dos turnos de sueldo del personal.

Señaló que no había motivo para la asamblea, que cuando les dijo que no les podía dar el dinero lo llaman a una reunión, y ahí estaba Vazquez y otro muchacho más, quienes decían que el declarante había conversado con ellos y había acordado que luego de la primer quincena de trabajo su empresa le ibas a dar de premio a los obreros el equivalente a una quincena. Que esto no era así, recién empezaba la obra y el valor de una quincena era muy alto, era imposible cumplir con eso.

Dijo que esa asamblea terminó cuando Armec puso la plata y de su parte le hicieron firmar en el Ministerio de Trabajo que aceptaba esas condiciones, esto es, darle el equivalente de una quincena de sueldo de premio. Que como él no tenía ese dinero eso lo pagó Armec a sus

empleados, todo lo que figuraba en los recibos de sueldo, dado que tiene todo en blanco, siendo su vida transparente.

Que no recuerda quien estaba en el Ministerio cuando se firmó, pero todo está en el acta.

Que como consecuencia de esta asamblea, además del valor de una quincena a los empleados, más la que se llevó Monteros por mes que no sabe en total cuanto fue, pero eran 8 o 10 meses, y en todos los meses hubo un sobre. Además de las amarguras, angustias y obligarlo a trabajar de una manera muy distinta; ocurrió que cuando terminan el proyecto le quedaba cobrar un millón trescientos treinta mil pesos, esto es, con el dólar a 10 pesos, unos 130.000 dólares, los que fue a cobrar a Rosario y ahí le dan tres cheques por 110.000 cada uno y faltaba un millón, y ahí Armec le dice que el millón es lo que les costó por afuera la obra, que si bien él tenía el derecho de pedírselos no se lo podían dar, y le pelaron así 100.000 dólares, por lo que terminó esa parte de la obra con deudas, compromisos, créditos bancarios y otras cosas. Que “el millón ese se lo debo, y los 16 kilos que adelgacé al amigo Monteros y sus secuaces” –así sus palabras-.

Relató que luego pasó a hacer trabajos como contratista directo del proyecto, sin Armec. Que los directores lo llamaron para hacerse cargo como Ingeniero electricista, para controlar que todos los cables estén

bien conectados, eso le permitió resarcirse de las deudas contraídas, y entre medio surgieron otras cosas más, trabajos menores.

Que en un momento, cuando estaban las turbinas en marcha se rompe un enfriador de agua, por lo que le piden que lo repare. Que trajeron material de Chile, armaron los andamios y cuando suben los empleados de su empresa para soldar, lo llama un empleado desde arriba, quien le dice que estaba en comunicación Queco Vazquez, quien les decía que no podían trabajar porque no había arreglado con él primero.

Que le pidió que le pasara el teléfono y le consultó a Vazquez sobre cuál era el problema, y que Vazquez le dijo que no podía trabajar sin haber hablado con él. Que como para ese momento él no era la misma persona, tenía más recurso para enfrentar problemas, llamó al director de Siemens y sacó a su gente del trabajo. Que los dueños del proyecto lo podrían haber echado por la actitud que tomó, pero tuvo suerte, dado que saben como trabaja.

Dijo que Vazquez era como el encargado de la UOCRA en el proyecto, que en una reunión en una asamblea hizo juntar a todos los gerentes, como Electro Ingeniería, Milisic y otras contratistas y les dijo que no se podían desentender, que había que hablar con él, era la cara visible del gremio en el proyecto.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

El testigo Diego Omar Perrín refirió ser contratista vial, habiendo trabajado cortando pasto desde el año 1995 hasta hoy con distintas empresas a cargo de la concesión de la ruta 3. Que en un momento lo contrató Vial1, con la cual trabajó desde el 2.010 hasta el 2018, realizando el corte de pasto desde Bahía Blanca hasta Benito Juarez.

Que también hacía balizamiento cuando había bacheo, y en eso ocurrió que dos personas se ponen al pie del camión cuando estaban sus empleados trabajando y “no los dejaban seguir con la actividad si no llegaban a un arreglo, a una coima”. Que se les pidió poder continuar porque era asfalto caliente, se terminó el trabajo y por eso se comprometió Jorge Panero, gerente de CV1, quien viajó en avión a Bahía Blanca para tener una reunión con Monteros.

Consultado por el señor Fiscal dijo que con coima se refiere a “poner plata cuando no corresponde, dame plata a cambio de nada”.

Contó que en ese momento él no estaba en el lugar, que lo llama por teléfono el encargado y le cuenta, y por eso habló con el gerente; que lo usaban como intermediario al declarante porque la gente de la empresa era de Buenos Aires. Que luego del arreglo de la gente de la UOCRA con la empresa le pasaban los cheques o el efectivo y el testigo se los tenía que pasar a ellos.

Que cree que Panero se reunió con Monteros, tuvieron la reunión y llegaron a un arreglo de 15.000 pesos por mes y que ocupen a dos personas del gremio para no hacer nada, no trabajar. Que no se llegó a contratar a las dos personas, pero sí entregar los 15.000 en efectivo todos los meses. Que eso se lo contó Panero y luego todos los meses iba con la plata el declarante y se la daba a Néstor Rivas de la UOCRA.

Que no puede precisar bien cuanto fue que se entregó dinero todos los meses, sí que duró bastante tiempo, dos años y medio o tres, y que en un momento Néstor le dijo que había cambiado el personal de UOCRA y que se iban a poner en contacto y que iban a tener otro arreglo. Que al tiempo se pone en contacto Pablo Gonzalez –aclarará más tarde que en realidad es Pablo Gutierrez-, lo llama, le pide que fuese a la sede de UOCRA y ahí empezaron a pedirle cosas a él que era mensajero nada más y no tomaba decisiones. Que le decían que tenía que poner gente de UOCRA, echar a los que tenía y poner los que ellos le decían, y además darle transporte y viandas, como también una plata que era una suma más importante. Que se retiró de la reunión y le avisó al gerente nuevo de CV1, de nombre Martín y él le dijo que querían negociar, bajar la cuota, no echar a toda la gente, por lo que lo llamó a Gutierrez y éste le dijo que no, mostrándose como enojado, nervioso. Que volvió a llamar al gerente y este decidió seguir los trabajos en la zona de Dorrego, casi Tres Arroyos, para poder seguir trabajando, dado que en ese tramo de concesión no intervenía

la UOCRA de Bahía, y ya luego vino este caso, en que detienen a los de la UOCRA.

Expuso que la empresa CV1 realizó tareas en el predio de la UOCRA. Que eso fue posterior al primer arreglo de los 15.000, que lo llaman a Panero y luego este lo manda a la reunión en las oficinas de Ingeniería y arquitectura, y ahí se hizo un arreglo y CV1 pagó en efectivo para que ellos puedan asfaltar un pedazo en la zona recreativa de la ruta 3 vieja. Que CV1 le hacía facturar a él esa suma, la retiraba del banco y se la daba a Néstor Rivas, que a Pablo Gutierrez –a quien antes se refiriera como Gonzalez- nunca llegaron a darle nada.

Indicó que en la obra del predio se puso al frente la gente de Ingeniería y arquitectura, y el encargado era Evangelista. Que esto fue por pedido de la gente de UOCRA, se sentaron, estaba Burgos cree, a quien vio esa vez y una más antes del arreglo con CV1, cuando le preguntó que hacía y a qué se dedicaba. Que esta reunión fue antes de lo del predio y tuvieron una muy buena charla.

Que la charla con gente de la UOCRA cuando pidieron la realización de las obras en el predio fue en Ingeniería y arquitectura. Que eso lo pidió Burgos, si no recuerda mal, que el declarante se sentó a escuchar, no habló ni dijo nada, y luego se lo trasladó a CV1 diciéndoles que tenían que aportar plata.

También tengo en consideración para tener por debidamente demostrados estos hechos lo expuesto por el testigo Rubén Edgardo Almada en cuanto dijo que conoce al señor Molina un poco y al señor Gonzalez, y que es administrador de Entegro srl, empresa griega que reparaba las turbinas 29 y 30 de la central Piedra Buena.

Expuso que esas obras se hicieron entre el 2015 y el 2017. Primero la turbina 29 a fines del 2015, obra que se hizo hasta finales del 2016; y a los dos o tres meses comenzó la reparación de la turbina 30. Que las reparaciones eran para cambiar los componentes, el eje y varias partes, todo lo cual requiere personal especializado, dado que los planos están en rusos y los empleados son especializados, siendo el personal ruso convocado porque así estaba dentro de la garantía. Que había unos 40 extranjeros y unos 100 empleados argentinos, y había que desmantelar y volver a armar con componentes nuevos.

Relató que en el 2.015 no hubo trato con la UOCRA, que cuando arrancaron con los trabajos en la turbina 29 se contactó el director de la empresa y luego el declarante se enteró que aportaron 400.000 en dos cuotas, que esto era un canon como para trabajar tranquilo, que el sindicato no los moleste. Que esto se le requirió a Miguel Iwanyniuk y se lo pidió Monteros, y fueron dos cuotas de 200.000 cada una. Que el pago se efectuó en la estación de servicio que está en calles Maldonado y Don Bosco al señor Sergio Vazquez autorizado por el señor Monteros.

Refirió el testigo que estaba en la camioneta y por eso lo observó; y en el segundo pago también fueron los dos, junto a Iwanyniuk y se le hizo la entrega a Sergio Vazquez. Que esos pagos se acordaron con el señor Monteros, fueron a requerimiento de él.

Expuso que además les solicitaron utilizar el comedor, el transporte y la ropa de empresas que ellos les indicaron. Que para el comedor compraban en calle Charlone, que ropa no acordaron porque ya estaba contratado con una empresa de Buenos Aires, y en el transporte se contrató a Flor de Lirio. Que Monteros fue quien pidió que se contratara eso, que les impuso las empresas, no se podía contratar en otro lado, aun cuando se habían evaluado varias empresas de transporte de costo menor. Pero igual no se podía había que usar esas empresas.

Comentó que el costo de las viandas y del transporte eran un 200 por ciento arriba de lo que cotizaban otras empresas, que Flor de Lirio cotizaba a 1500 cuando otras lo hacían a 500, y las viandas eran 120 el costo afuera de la planta, pero había otro problema que era que la concesión era dentro de la central, si se quería comprar viandas afuera no se podía, había que usar el servicio de adentro. Estos servicios eran obligatorios por el gremio y les salían aproximadamente 250 pesos dentro de la planta, cuando afuera salía unos 100 pesos, más el costo de un local acondicionado para comedor.

Expuso que a Sergio Vazquez le dicen Queco, que él acompañó a Iwanyniuk a la estación de servicio, vio la suma de dinero porque la retiró el declarante del banco a pedido de Iwanyniuk, y éste la llevó en un sobre o bolsa de papel madera de los grandes, envuelto.

Le dijo al Fiscal que cuando comenzó la reparación de la turbina 30 el trato fue con Pablo Gutierrez y Mario Gonzalez. Que antes se produjo una reunión en el sindicato con Monteros, se habían convocado a todas las empresas, no solo a ellos, y tenían un turno para ir a la reunión que era individual, donde les plantearon que el canon era de 750.000 por inicio de obra, porque los anteriores 400.000 no los habían pagado; y ahí ellos dijeron que sí lo habían pagado y hubo como un enojo diciendo que no habían recibido nada y que por eso ahora el canon era 750.000 pesos. Que además les dieron una lista de personal argentino para tomar en la obra. Que ellos se opusieron porque tenían el personal adecuado y no podían conseguir de esa lista operarios en tecnología pesada.

Expuso que luego de esta reunión él le comentó al personal de la empresa lo que les habían pedido, que los echaran, y ahí uno lo comentó en el sindicato y luego le impidieron al testigo entrar a la planta y lo amenazaron en su casa particular.

Que por este motivo la empresa le alquiló una oficina en calle Fitz Roy porque tenía prohibido el acceso a planta y además por eso luego fueron a negociar, coordinaron una reunión en la CGT en calles Mitre y

Rodríguez con Gutierrez y Gonzalez donde se negociaba el dinero y la dotación, y llegaron a un punto que el dinero se pagaba en tres cuotas de 250.000 cada una, que el personal lo podían mantener pero que había que ingresar a 20 personas de un listado que les daba la UOCRA, y que luego acordaron que ellos contrataban a 10 o 15 y otros 10 la central termoeléctrica.

Que por esto tomaron 10 personas, que sólo un par trabajó en la obra y el resto hacía quehaceres sindicales. Que luego tuvieron muchos inconvenientes porque les pedían que acomodaran los sueldos muy por encima del convenio y ellos ya pagaban por arriba del convenio, no obstante lo cual querían más aumento, a un valor que no sabe si gana un oficial de convenio al día de hoy. Que por esto hubo rispideces porque eran valores que excedían el presupuesto de la obra.

Apuntó que como han reflejado las noticias se sabe que tuvieron piquetes en el acceso a planta, donde cortaban unas 50 o 60 personas, de las cuales cree que sólo un 10 por ciento era personal propio.

Que se fue avanzando en la obra, tuvieron muchos parates, pararon varias veces, se terminó más o menos, la empresa tuvo inconvenientes con la Central Piedra Buena, se dio de baja al personal y por la certificación que quedaba la empresa dejó que lo pagara la Central Piedra Buena.

Indicó que contrató trabajadores indicados por el gremio, que el declarante trataba con Gonzalez y Gutierrez, que ellos eran los que les decían las pautas que tenían que seguir para poder continuar con las tareas normalmente, sino les paraban la obra, no los dejaban trabajar. Que ese personal que se contrató no era especializado, no conocía de turbinas, no sabía ruso. Que unas cuantas personas de esas directamente no iban a la planta, hacían trabajos en un predio del sindicato, y esto está demostrado por la ficha magnética de personal la que indica que no iban, y a estas personas le pagaban una quincena con horas normales básicas.

Relató que en la reunión de la CGT cuando le piden 750.000 estaban Gonzalez y Gutierrez, que primero el pedido fue solo de Monteros a quien le dijeron que lo iban a estudiar porque era excesivo y luego acordaron el pago de tres cuotas de 250.000 cada una. Que en esa primera oportunidad la reunión fue solo con Monteros y esa vez, a las empresas que habían sido citadas al gremio, las hacían pasar de a una a la oficina de Monteros. Que a ellos los recibieron Gonzalez y Gutierrez y luego los hicieron pasar con Monteros.

Refirió que a la segunda reunión fue invitado por Gonzalez y Gutierrez porque habían pedido una reunión para hacer una contrapropuesta y había que dar respuesta al pedido que habían recibido. Que la empresa no quería pagar nada, pero la presión era tal que tenían que llegar a un arreglo para poder trabajar, que como le pagaban en dólares

a los extranjeros mientras estaba la planta parada las pérdidas eran importantes.

Contó que a Gonzalez y Gutierrez le pidieron pagar menos, que estos consultaron con Monteros y luego dijeron que lo único que podían hacer era mantener el monto pero que fuera en cuotas, que el monto no se modificaba.

Relató que mientras la empresa estaba parada no podían iniciar tareas porque no se los permitía el sindicato, que pagaron horas caídas al personal argentino para que vaya y cumpla horario.

Dijo que las cuotas de 250.000 las pagó Iwaninuk y él no tuvo participación, desconoce quien las recibió, aunque por comentarios cree que fue Monteros, pero no lo puede afirmar.

Que cuando le alquilaron una oficina en el centro de la ciudad fue porque no le permitían ingresar a la planta, el motivo era porque querían querer hacer un cambio de personal, echar al contratado y poner los que acercaba la UOCRA, y además, para entorpecer las negociaciones, porque el declarante se lo había comentado al personal cuando yo les explicó lo que ocurría y fue ahí que lo filmó uno que lo acercó a la UOCRA.

Apuntó que luego de esto le hicieron un piquete en su vivienda, por lo cual hizo una exposición, fue a denunciar y en la comisaría sexta le tomaron una exposición por amenazas. Que el día del piquete no estaba el

testigo en su casa, sino su señora y sus hijos, y hasta ahí se acercaron unas 40 o 50 personas reclamando su presencia y haciendo reclamos por diferencias de haberes que la empresa no había pagado. Que esto no era verdad y no era un reclamo legítimo. Que según comentarios varios de los sujetos tenían la campera del sindicato y alguno era gente conocida del gremio.

Refirió que al personal contratado por imposición del gremio y que no iba a trabajar le dejaban los recibos con el dinero en el sindicato al señor Gutierrez. Que cree que a Gonzalez no le ha dejado dinero.

Relató que un montón de veces lo han llamado Gonzalez y Gutierrez para reclamarle el pago de los 250.000 pesos, pero como los pagos los hacía Iwanyniuk que vivía en Lanús, se demoraban y el declarante coordinaba para que cuando viniese a Bahía los efectuase. Reiteró que no los presenció, aunque sí le dio el dinero a Iwanyniuk dado que él lo retiró del banco.

Que también hacía los pagos a los proveedores, entre ellos Flor de Lirio y por el comedor.

Indicó que en los primeros pagos por la reparación de la turbina 29 sí acompañó a Iwanyniuk porque el mencionado no conocía la ciudad, además de que el declarante conocía a Vazquez de otras obras, y en la segunda oportunidad lo acompañó porque estaba utilizando un

vehículo de la empresa y por eso lo llevó a realizar el pago y luego a donde se alojaba Iwanyniuk.

Al doctor Jara le respondió que no le dijeron para que era esa plata; que no preguntó para que era; que el pago lo entregó Iwanyniuk y él sólo lo acompañó en las dos primeras veces de la turbina 29.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que en la primer reunión con Monteros, dónde éste les dijo que le tenían que entregar 750.000, fue que Monteros les manifestó que no había cobrado los 400.000 anteriores. Acotó que ahí luego estaba el rumor que Vazquez se había quedado con ese dinero; pero en definitiva el aumento de la cuota era por la falta de pago que les adjudicaban a la empresa. Que en esa primera reunión estaban en la oficina Monteros, Iwanyniuk y el declarante, que hasta ese despacho los llevaron Gonzalez y Gutierrez. Que no dieron respuesta en esa primera reunión. Que la exigencia de los 750.000 fue de Monteros y no sabe a quien le hizo los pagos Iwanyniuk.

Al doctor Zorzano le dijo que contraprestación del gremio o de las personas que pidieron el dinero no se recibía, la contraprestación era trabajar tranquilo y que no paren la obra, “era o pagás o no trabajás, que se manifestaban de esa manera”.

Computo lo expuesto por el testigo Fabián Héctor Gurrado quien mencionó que es Ingeniero Civil, y desde hace 40 años socio de la

constructora vial Ingeniería y Arquitectura srl., con sede en el Parque industrial, realizando obras en esta localidad y otras provincias y obras nacionales en cualquier parte del país. Que forma parte de la Cámara Argentina de la construcción e integró la mesa ejecutiva a nivel nacional, siendo presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca hasta el 20 de diciembre del año pasado.

Contó que en reiteradas ocasiones le llegaron quejas en las que decían que gente del gremio pedía colaboraciones, en un principio para el funcionamiento normal de las obras, y que eso escaló a otras situaciones, cuando llegaron las grandes obras nacionales, que ahí subieron las pretensiones y se usaron prácticas que tenían que ver más con otras cosas que con la seguridad e higiene y las condiciones de trabajo para los compañeros. Que concretamente pedían colaboración mensual y en forma coercitiva, exigiendo convenios de trabajo por encima de los salarios de convenio, lo que afectó la situación económica de las empresas. Indicó que no había manera de negociar nada, las condiciones eran impuestas por el gremio, a ellos se los hacía concurrir a las oficinas del gremio y sino paralizaban todas las obras que tenía la empresa.

Que la colaboración era que se le entregaba dinero, dependiendo de la zona de la ciudad, a alguno de ellos una suma mensual que era exigida por ellos en función del tamaño de las obras. Que con el correr del tiempo se llegó a incrementar y exigir un porcentaje del contrato,

no solo se pedía un plus para que el obrero ganara por encima del convenio, sino que tras ello venía el pedido de la cúpula.

Apuntó que no se convenía nada, que se imponía y atrás de la imposición del porcentaje en más de la mano de obra, venía el pedido del encargado del sector que pedía algo, sino no se podía trabajar.

Que cualquier convenio en salarios por encima no es reconocido por los comitentes, la empresa no se lo puede trasladar a nadie y eso es en perjuicio de la empresa; a diferencia de las obras privadas donde uno podría repetir contra el particular comitente. Que aparte del extra para el trabajador venía la contratación de la combi, ropa, catering, sino se paralizaba la obra.

Relató que su empresa tenía obras en dos o tres sectores de la ciudad y tenían que hablar con cada encargado del sector. Que en la obra del Procrear, era Canales el encargado de pedir para que la obra avance. En Suarez era Burgos, en Patagones era el señor Molina. Que un obrero cobraba distinto según a la obra a la que iba, según el encargado.

Dijo que no había un acuerdo, era una imposición. Que les decían "…nosotros queremos para que la obra funcione 10, 15, 20, o 50 mil pesos por mes y había que llevarlo al gremio a quien recolectaba…" –así sus palabras-.

Señaló que los aumentos salariales iban por recibo como todo lo que indica la ley, que "…esto es otra cosa, era una dádiva para poder trabajar, no eran colaboraciones…" –según sus dichos-.

Que en el barrio Procrear licitaron la obra, el valor de la mano de obra está en el pliego, y cuando se arranca la obra ellos piden reunión, querían que la gente gane más, y obligadamente firmaron un convenio con una suba del 35 por ciento sobre el valor convenido, y no le podían exigir a su comitente, el Banco Hipotecario, para trasladarlo. Que si no aceptaban la obra se paraba, ralentizaba, quedaba en asamblea cuando no pagaban. Que por eso agacharon la cabeza y firmaron el convenio, con el plus de mano de obra porque sino los iba a multar su comitente.

Contó que el señor Canale le insistía y lo citaba al gremio, que él se negaba a concurrir, pero tuvo que ir y en una oficina que está al frente le pasó un papelito con lo que pretendía por mes, para no decirlo en forma oral por si se lo estaba grabando. Comentó que tomaban en esto todas las precauciones del caso. Que lograban así pedir un número y esto lo hicieron con muchas empresas a lo largo de las obras. Que intentaron hablar con el gremio para marcar que esto no era correcto, pero no obtuvieron respuesta.

Señaló que la obra del Procrear a la que hace referencia estaba en la ruta 35, en las tierras del Ejército Argentino, la que comenzó a mediados del 2.016.

Que cuando la situación no daba para más, el gremio pedía hablar con el dueño y ahí trataban de mitigar el impacto de las condiciones, pero en la parte operativa estaba el ingeniero Gustavo Evangelista.

Relató que "…Canales le pidió el 3 por ciento del monto de la obra, que es algo muy importante, pero terminamos en algo así como 50 mil por mes, que era en relación al monto de la obra y el tiempo de duración, y era una obra de 6/7 meses…" –esas sus expresiones-.

Que además le requerían el sistema de combis Flor de Lirio, las viandas de Eis u otro lugar y los baños Acqua. Que al obrero no le daban la chance de recibir el concepto en el recibo y le daban la bandeja con la comida; que a muchos le interesa que le paguen el ítem para así poder decidir, pero acá esta posibilidad no existía. Dijo que Flor de Lirio es de Monteros, Acqua es de Burgos o alguien de su familia y el de las viandas desconoce. Que su empresa contrató estos servicios, y solo terminaron con estos servicios cuando llegó la intervención al gremio luego de todos estos acontecimientos por todos conocidos.

Aclaró el testigo que nombra esa obra, pero que esto era en todas las obras, que en las obras de pavimentación había que ir a tributar un dinero que variaba según ellos consideraban la obra más chica o más grande, más importante. Que además había pedidos por bonos de fin de año, de distintos elementos para la época escolar o día del niño, que eso es

más de uso y costumbre, pero no tuvimos rendición de nada de eso que se hizo.

Recordó que en el año 2.015 les realizaron un pedido grande para la construcción del predio del gremio donde 5 empresas hicieron cordones, bases y otras cosas y eso no fue acordado. Que estaban en el aeropuerto de Espora y "…tuvimos que ir a colaborar, entre comillas, por trabajos que fueron ejecutados en forma gratuita, no es una colaboración, es una extorsión, no se negociaba nada, era necesito esto y si no se hacía se paraba la obra…" –sus palabras-.

Que las empresas que tuvieron que hacer eso eran las que estaban trabajando en el aeropuerto, y eran Cerra y Moro, Coince, Carreteras 2.000, Abedul y la de él, que le parece que en el predio de recreación había otra empresa Bulwar. Dijo que él no participaba de las reuniones porque le hacía mal, que sí estaba en la reunión pero en la ejecución estaba Evangelista.

Apuntó que en la reunión estaban Burgos, Monteros, que no recuerda si estaba Molina, y distintas personas del gremio y de las empresas, dueños, supervisores de obra y ahí "…no se convino –eso es hablar mal- se nos obligó a hacer esas obras para el predio lindero al aeropuerto..." –sus dichos-; luego dijo que cree que estaba Paiz también en la reunión.

Que en cuanto a la contratación de las empresas para los distintos servicios no recuerda quien las exigió porque él no se dedicaba al día a día de eso, pero era voz populi que había que contratar con esas empresas de Burgos, Monteros y algún otro. Que si no recuerda mal aportaron al expediente la documentación de la contratación de su empresa de esos servicios.

Sostuvo con relación a los premios anuales, que se juntaba la cúpula del sindicato, las principales autoridades y mandaban nota a las empresas en la que les decían que era un buen año y que querían firmar un acuerdo por 4000 pesos, que esto fue en los años 2.017 y 2.018, y que ellos se oponían, pero "…era firme y marche preso…", que nunca hubo negociación en ninguna situación, siempre fueron imposiciones. Que pagaron esos premios porque se homologaban en el Ministerio de Trabajo. Que recuerda uno de 4000 y lo mismo los convenios que se hacían por encima de la tabla acordada a nivel nacional, que eso está documentado en los recibos. Que estos premios no estaban vinculados con nada. Que normalmente se puede convenir previo al inicio, y capaz no tenía obra y había que pagar igual, acá no estaba vinculado con nada, salvo por el interés de tener gente contenta que les conviene. Los premios era por el solo hecho de estar en una obra que se consideraba más importante, que ellos no sabían si podían pagar o no, porque en esa época no había licitaciones y sí muy poco trabajo.

Que estos convenios impuestos se suscribían en el Ministerio de Trabajo, esa negociación era en el gremio luego de varias idas y vueltas en el que trataban de bajar el monto de las pretensiones, pero nunca tuvieron éxito. Que José Burgos era el que generalmente suscribía esos convenios, puede haber alguna otra persona que no recuerde el nombre, puede ser algún delegado de obra.

Al doctor Jara le contestó que no realizó antes ninguna denuncia similar, que antes de la denuncia tenía conocimiento de este tipo de colaboraciones impuestas, pero la escalada de la situación hacía inviable el trabajo de las empresas y por eso se hizo la denuncia.

Apuntó que las empresas antes preferían estar trabajando, porque están para trabajar, no generar conflictos. Que quisieron trabajar aun aceptando imposiciones e igual vinieron los conflictos, y es por eso que se hizo la denuncia. También por el modus operandi, se tomaban las obras, se paralizaban las obras; antes eran los mismos, que cambiaron la modalidad.

Que se enteró en simultáneo de las declaraciones de Vidal, que no hicieron esta denuncia por ninguna cuestión mediática ni mucho menos, ya lo habían hablado con Burgos y Monteros diciéndoles que no se podían sostener estas situaciones. Que hay declaraciones antes de que hablara la gobernadora.

Que cuando habla de funcionamiento anormal se refiere a que hagan asambleas en la obra y no se pueda trabajar, se pagan los sueldos igual y no cumple con el comitente que la sanciona a la empresa.

Que le han "…parado la obra con asamblea por haberme atrasado en llevar la cuota al gremio, porque no le gustaba la vianda, no sólo paraban la obra en cuestión sino todas las obras de la empresa…" –sus palabras-. Que indagaba por los motivos y las respuestas eran disuasivas, pero el fin era ir al gremio para arreglar. Pedían mejoras salariales, premio por finalización de obra, mejoras en las condiciones, pero además ir al gremio a arreglar.

Le contestó al letrado a cargo de la defensa de Molina que en seguridad hay un protocolo que se debe seguir, que por eso tienen ingenieros y la UOCRA puede controlar y hacer observaciones.

Que en alguna asamblea el motivo era que la vianda estaba fría si era de otra empresa y que la combi no los llevaba a su casa si era de otra empresa.

Dijo que desde la formalidad la UOCRA puede inspeccionar, pero estos temas se arreglaban cuando llevaba la cuota al gremio, mientras tanto estas asambleas crecían. Que lo tenía que hacer porque sino estás dos meses sin trabajar y el comitente le aplica una multa, y eso pasaba si hacía una conciliación obligatoria.

Apuntó que las herramientas legales siempre son la negociación, pero acá no se hacía eso, siempre se impuso. Que algunas negociaciones se hacían en el gremio y otras en el Ministerio de Trabajo, e iba el abogado de su empresa. Que la relación del Ministerio de Trabajo con el gremio es excelente, que no le consta si el delegado lo sabía o no todo esto que pasaba, pero era voz pópuli. Que al delegado de ese momento no le contó, a otros delegados sí. Que él va una sola vez y luego va su asesor letrado.

Ante la consulta del doctor Jara contestó que la redeterminación de valores es la variación de precios de la obra a partir de la ley de convertibilidad, el gobierno estableció distintos mecanismos para que las ecuaciones económicas no se vean afectadas, pero que no hay posibilidad con valores firmados por encima del convenio, esos cambios de valores no se podían repetir contra el comitente. Que demanda de su empresa por estos aumentos, cree que en alguna obra han presentado, pero no hay posibilidad, la obra pública es contrato de adhesión, no se puede modificar nunca. Que si se le aplica una multa a la empresa no se puede realizar explicación y no hay posibilidad de que algo que sea por fuera del convenio sea reconocido en la obra pública.

Contestó al letrado de la defensa que durante la pandemia se pararon las obras, que esto le ha generado perjuicio, pero hasta ahora no ha

reclamado nada, es todo demasiado reciente y no se sabe si se vuelve a parar todo.

Que cuando ha hecho referencia a las grandes obras se refiere a las obras viales que rodeaban la ciudad y que venían del presupuesto nacional. Es la obra pública del kirchnerismo, que hoy es parte de una coalición.

Que quejas de otras empresas recibió, trató de hablar con Monteros que lo derivó con Burgos porque Monteros no estaba mucho en Bahía por problemas de salud. Que le decían que tenían muchísimas quejas, que se hacía imposible trabajar por las condiciones que se le imponían a las empresas.

Que no sabe si son 5 empresas las denunciantes, no miró el expediente. Que a él no lo llamó nadie, ni invitó a nadie para sumarse a la denuncia.

Que a Julia Pugnanoni no la conoce.

Que participación de los trabajadores en las utilidades de la obra no sabe si se pactó por alguna empresa. Que reconocimiento luego del final de obra sin intervención de la UOCRA no se pactó. Que en forma previa a la intervención de la UOCRA no se pactó beneficio para los trabajadores.

Volvió a reiterar ante las consultas del Dr. Jara que tenía que "…ir a arreglar, llevar la cuota solicitada, era plata de mi cuenta particular, era dinero en efectivo de mi cuenta particular, es parte de mi cuenta corriente, es plata blanca mía, está debidamente registrada, dinero sacado de mi empresa en blanco; que el dinero de mi cuenta es producto de mi trabajo, que es la construcción…" –así sus expresiones-. Que no tiene socios en esa empresa, y que no procuró recuperar el dinero.

Expresó que normalmente se contrata a gente de la zona, que esto depende de la tipología de obra, si no hay gente capacitada en el lugar se trae de afuera, sino se prioriza a los del lugar. Que ha contratado gente de Viedma, maquinistas especializados, y es una comarca donde está el gremio SITRAIC que no tiene relación con este gremio UOCRA. Que antes las relaciones de las distintas seccionales de la UOCRA fueron cordiales en Viedma y Patagones, trabajaban juntos, con la llegada de SITRAIC a Viedma, que es nuevo, esto cambió.

Al doctor Martinez le contestó que en la reunión con Canales, cuando le entrega el papelito, estaba él solo, y que no dijo Canales para quien era el dinero, se limitó a pedir un monto.

Que la ciudad estaba dividida en cuadrantes y según la zona tenía que llevarle el aporte dinerario a Burgos porque era su zona, o a Canales porque era la suya. Que no le entregó dinero personalmente en manos a Burgos y que a Monteros no lo recuerda. Que generalmente todo

era a través de Burgos y Canales. Reiteró que no le entregó dinero a Burgos, pero que le parece que en una oportunidad sí le entregó a Canales.

Refirió que él arreglaba alguna situación por ser el titular de la empresa, pero luego no iba a ejecutar la entrega, salvo la situación de Canales. Que dinero en mano probablemente al señor Burgos le ha dado una vez, no está seguro, y al señor Monteros no recuerda.

Explicó nuevamente que todo lo que tiene que ver con el salario por encima del convenio no entra en una redeterminación del valor de obra, sí una suba de materiales y otros parámetros. Que las paritarias se abren una vez por año, por pedido de la UOCRA o la Cámara de la construcción y se fijan los valores salariales, que generalmente hay revisión cada seis meses siguiendo la inflación y siempre hay acuerdo.

Que el aumento del 35 por ciento por encima del convenio fue obra por obra, que no vio los convenios que firman otras empresas, pero diría que fueron para la mayoría de las obras. Que no fue un acuerdo marco, se negoció con cada empresa. Que en el caso de su empresa fue la primera vez, en el caso de otras empresas sabe que tuvieron que firmar ese tipo de convenios en otras oportunidades. Que después de la intervención lo mantuvieron en el tiempo hasta la finalización de esas obras donde estaban acordadas esas sumas. Luego en otras obras depende de la empresa, que ellos pagan paritarias o algún punto más por encima del convenio.

Con relación a la reunión por el predio camino al aeropuerto dijo que una se hizo en la CGT y otras en el gremio con las líneas inferiores de las empresas. Que él fue a una reunión, cree que en la CGT, donde estaban presentes dos o tres titulares de empresas y líneas intermedias, y también Burgos, Molina, Paiz y otra gente del gremio. Que no había nadie de la CGT, que cree que estaba Monteros a cargo de la CGT, pero no recuerda si estaba en la reunión.

Que la charla fue en términos coloquiales fue "…muchachos nos tienen que dar una mano para hacer esta obra…", a lo que las empresas le contestamos "…pero como hacemos es mucha guita…", y nos respondieron, "…hay que hacer esto o hay que hacerlo, sino va a haber problemas…". Que el mal en concreto era no poder trabajar, no terminar las obras, hacer que se encarezcan los precios. Parar la obra era el mal concreto. Que en su caso personal no hubo otra conducta, salvo los modales.

Indicó que en seguridad e higiene dentro de la obra hay control de la UOCRA, que siempre encontraban algo y el Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación. Que tiene inspectores el Ministerio y han ido junto con el gremio, que es de uso y costumbre que vayan con el gremio y se levantan actas por esos temas, que a veces el gremio dice que hay una cuestión y el Ministerio dice que no es así.

Que ha tratado con varias gestiones, que antes de esta también era de práctica y costumbre llevar dinero; pero fue la escalada, la prepotencia y la pretensión de manejarte la empresa lo que llevó a hacer la denuncia. Que antes no denunció, pese a que era casi igual durante 40 años, bajo el mismo modelo de extorsión, pero no lo denunció.

Al doctor Jara le contestó que luego de esta denuncia no hizo otra contra la nueva dirección, que cesaron las retribuciones impuestas desde la intervención, y no volvió a pagar más.

Que conoce a Molina, habló pocas veces con él y no le pidió dinero a él. Que no se ha reunido a solas con Molina, quien sí ha estado en esas reuniones en la CGT por el tema del predio, que cree que estaba Molina. Que no lo puede precisar puntualmente porque en algunas sí estaba y en otras no, que a veces entraba y salía gente del gremio de la reunión. Que Molina no le pidió a él en persona una contribución.

Al señor Fiscal le contestó que las asambleas interrumpían la obra y no estaban autorizadas por el Ministerio de Trabajo; que supone que no sabía el Ministerio, y que a él nunca lo notificaron, que nunca la UOCRA o el Ministerio le solicitaron llevar a cabo la asamblea. Que en esas oportunidades se quedaban sentados sin hacer nada durante la asamblea, era un quite de colaboración, permanecían en la obra sin hacer nada.

Apuntó que cuando se refirió a escalada de prepotencia esto se daba con modales y formas que tienen que ver más con aprietes que con diálogos. Que esto hacía que se le tuviese temor a los miembros de la UOCRA, temor a que puedan accionar contra uno, su familia, o las máquinas que son un patrimonio muy valioso. Que el temor se lo generaban algunos más que otros, que con algunos se puede hablar más que con otros. Que de los presentes cree que uno de los más combativos era el señor Molina, que con Monteros tuvo poco trato en los últimos tiempos porque estaba en Buenos Aires en un tratamiento. Que Burgos tenía fijado el objetivo y tenía que lograrlo.

Apuntó que el supervisor de obra era Gustavo Evangelista, quien se encargaba de llevar el dinero; es socio gerente de la empresa. Que sí sabe que se reunía con la gente de la UOCRA.

Ante nuevas consultas del doctor Jara, le indicó que Molina era de posición más dura, según el recuerda. Que está hablando de las reuniones en las que había más gente. Que no lo vio pedir algo, que si lo vio mantenerse muy firme en la posición. Que en las reuniones que estuvo presente Molina no pidió nada, que defendía con más vehemencia las pretensiones del sindicato. Que en las reuniones que estuvo él no recuerda si Molina pidió algo que fuera por fuera de un beneficio de los trabajadores. Que era combativo por las formas, que por lo menos con él tenía esa

posición, por la intransigencia que mostraba en todo, era el más combativo, era la persona que no quería aflojar en nada.

Culminó señalando que luego de la intervención no tuvo asamblea, medida de fuerza y no sabe si inspección, que no le consta.

El testigo Cristian Horacio Ferrero contó en la audiencia que es empresario, presidente de Carreteras 2000, empresa que se dedica a construcciones viales en Bahía y la región, originalmente con domicilio en La Plata y luego en Carhue, y desde el 2004 trasladaron las oficinas a Bahía donde está hoy. Señaló que en Carhue desde el 2001 no había relación con la UOCRA, alguna visita del gremio para fiscalizar algo pero no más que eso. En el 2004 cuando se trasladaron a Bahía, y al estar el sindicato acá y al hacer obras acá hubo más relación asidua, fiscalizando y visitando las obras.

Contó que en el año 2014, en una obra en Suarez se presentó gente del gremio, el señor José Burgos e hizo una parada de obra, indicando que no se podía seguir trabajando porque no estaban dadas las condiciones; que le preguntó cuáles eran esas condiciones y no le contestó nada, simplemente le dijo que no se podía seguir trabajando, y luego hicieron un papel con un montón de cosas para presentar en la delegación del Ministerio de Suarez, cosa que así hizo y luego los dejaron trabajar; pero al tiempo vuelven con el papel y les dicen que tenían que llevar la

documentación a la sede de la UOCRA, cuestión que también cumplieron, pero ahí le hacen saber que Burgos quería hablar con él en la sede.

Expuso que ya en la sede Burgos le dice que había que colaborar con el gremio, que la forma de trabajar que ellos tenían con las empresas era esa, que como él era nuevo y la empresa había llegado hacía poco a Bahía tenía que dejar el equivalente a un sueldo de un oficial especializado por mes. Que ese monto tenía que llevarlo a la sede y dejárselo ahí; que hizo eso una o dos veces y luego lo pasaban a buscar por la oficina de la empresa. Que esto fue así desde el 2014 hasta el 2017, hasta el inicio de la causa penal. Que el monto que se entregaba mensualmente en el último tiempo era de 8.000 pesos.

Indicó que en la reunión con Burgos en la sede de la UOCRA, éste no le hizo referencia alguna a la documentación que había presentado.

Expuso que en una obra de bacheo de varias rutas cercanas a Bahía Blanca, no al testigo en particular, sino a uno de los integrantes de la ute, se lo convocó a reunión y le pidieron unos 90.000 pesos por mes a la ute, que estaba conformada por empresas de Bahía, y ese pago era aparte de lo que cada empresa pagaba. Que luego se accedió a pagar 40.000 por mes, aportando 10.000 cada empresa de la ute, integrada por Coince, Abedul, Cerra y Moro y Carreteras 2000. Que fue Tepliz, de la empresa Coince, quien se encargó de eso, que no sabe con quién habló.

Dijo que no había forma de no efectuar el pago, que “uno sentía que si quería trabajar tranquilo lo tenía que pagar, veníamos con experiencia de paradas de obra y requerimientos de documentación de la noche a la mañana, uno tenía que trabajar 48 horas para presentar la documentación y se hacía luego otro parate u otra cuestión, que por eso entendimos que no había otra forma que pagar; lo que anhelábamos es que esto fuese lo menos posible” –así sus expresiones-.

Expuso que estas situaciones se conversaban en las reuniones de la Cámara, que se trataba porque el tema que salía era siempre era este de los pedidos de dinero de la UOCRA a cada una de las empresas.

Que en el año 2016 se pidió sobre fin de año un premio, que convocaron a las empresas viales a una reunión en la CGT y se les manifestó, solicitó el pago de un premio de fin de año a todos los trabajadores por igual, unos 8.000 por trabajador. Recordó que no era una situación muy buena para las empresas en ese momento, que ellos además manifestaron que le daban el premio a quien consideraban se lo merecía, no a todos igual. Que no se definió nada en esa reunión y luego se los citó a todos al Ministerio de Trabajo, un día a la mañana, y lo llamativo de esa reunión fue que se reunieron 15 minutos antes y en ese momento les avisaron los supervisores de cada empresa que las obras estaban paradas, que en su caso el encargado de la planta de Pigué le comentó que no podía

salir ningún camión hasta tanto no lo dijesen desde el sindicato. Que en ese estado entraron a la reunión para conciliar el premio de fin de año.

Contó que la reunión fue en el primer piso, se discutió el por qué, cómo, las formas, el monto, el por qué a todos igual, por qué la imposición de un premio cuando el declarante entiende que lo da al empleado cuando corresponde y terminaron que debían pagarle 4.000 pesos a cada uno de los trabajadores. Que el pago se efectuó en dos veces, cree que en el mes de diciembre y luego en enero, por 2.000 cada uno, bajo recibo de sueldo a los trabajadores.

Consultado por el señor Fiscal sobre si correspondía pagar ese premio, contestó que no estaba en los convenios, no correspondía. Que las empresas pagaban de conformidad a la legislación y esos premios no estaban incluidos. Mencionó que no corresponde pagarle a todos por igual un premio, que de acuerdo a los usos y costumbres se pagan por producción, desempeño, no a todos por igual, que esa era otra de las discusiones que tenían, dado que eso generaba problemas entre el personal porque no todos trabajan de la misma forma.

Dijo que firmaron un acta en el Ministerio y en forma inmediata se pudo continuar con el trabajo. Que en ese momento no había asambleas, la directiva del gremio era que se paran las actividades, no se hacía ninguna asamblea, el llamado telefónico era “se paran las actividades hasta tanto les

avisaran desde el gremio". Que luego de la firma comunicaron que se podía seguir trabajando.

Refirió que en el Ministerio de Trabajo estaba la gente de la UOCRA, de las empresas y entró alguno del Ministerio que no sabe quien era, pero luego salió enseguida. La reunión era a puertas cerradas, no había gente del Ministerio que coordinara la reunión.

Que en la reunión en la CGT de la UOCRA recuerda a Burgos y otros más, pero no los conoce de nombre. Que el pago de los 8.000 los pidió José Burgos que era el que más manejaba la reunión, aunque hablaban otros de la UOCRA también, hablaban entre todos.

Que en la reunión en el Ministerio estaba de la UOCRA Burgos, Molina a quien conoce y no recuerda a otro.

Consultado por obras en el predio de la UOCRA, dijo que se les exigió hacer el acceso del predio. Que en su caso llegó esa exigencia a través de un integrante de otra empresa, el señor Evangelista, a quien habían llamado para que organice y coordine la pavimentación entre las empresas de Bahía; que Carreteras 2000 hizo los cordones cuneta y un badén, otras empresas la base y pavimentación.

Que en su momento se charló del por qué de esta obra, pero accedieron todos a hacerla y como venía demorada la cosa porque todos tenían obras y para hacer esa del predio tenían que disponer de personal y

recursos, fue que en un momento dado se puso áspero para el señor Evangelista porque el sindicato lo llamaba reclamándole que no estaban haciendo las cosas. Que se los citó a una reunión a la cual fueron las 5 empresas y ahí tuvieron una reunión con Burgos y otros más que no conoce, y se les manifestó que tenían premura por el acceso, que tenía que ser terminado para fin de año porque venía gente de Buenos Aire. Indicó que fue una reunión áspera porque les decían que tenían que terminar en tiempo porque se les iba a poner feo.

Señaló que el que exigía era Burgos; y exigía, no era una colaboración en la que uno dice “a ver, si podés”, ahí era una cuestión de cómo y en qué tiempo tenían que hacer las cosas.

Que esa obra fue a fines del 2016 y sería un monto de 350 o 400 mil pesos, lo que en aquel momento era un monto importante. Que para su empresa era como una obra ganada en otro lugar y que les tenían que pagar, era una obra normal para el estado, para un municipio, por lo que destinó una cuadrilla y puso hormigón para hacer esos cordones, pero la UOCRA no pagó nada.

Que las empresas viales de Bahía hicieron aportes, no recuerda bien qué cosas cada una, cree que Abedul aportó equipos, Ingeniería la mezcla, que no recuerda Cerra y Moro, cree que la base. Que se comunicaban para ver cómo iban y quien tenía que entrar. Que Coince también participó, y Vial Agro también aportó, es una empresa de Tres

Arroyos y estaba haciendo el aeropuerto, esa empresa puso el hormigón que él usaba para los cordones cunetas.

Al doctor Jara le contestó que no recuerda que en la reunión en el gremio se mencionara el motivo del premio, que tampoco recuerda que alguna de las empresas consultaran por el motivo del premio. Que tiene una abogada a quien consulta por cuestiones civiles y administrativas, pero no le consultó a la abogada por esto.

Le indicó al letrado que mientras sucedía esta medida de “parate de obras”, cuando estaban en el Ministerio, no le consultó a la abogada si eso era legal. Que no le consultó a la abogada ese día del parate de las obras, que había muy poco para consultar, no les daban los motivos para parar la obra; la pararon porque alguien llamaba y decía acá no se trabaja más; que no les decían artículo de ley o convenio, y además era una llamada telefónica, no había acta ni documentación que entregaran por ese “parate” de obra o la prohibición de salida de los camiones.

Que ese día llamaron a la obra y dijeron que no salía ningún camión, sin tener ningún tipo de papel, esto era “no podés salir hasta tanto tengamos la reunión”. Que ellos sabían que la reunión era por los premios, y el declarante entendió que ese “parate” era por los premios, no tenían otra cuestión para tratar.

Le respondió al doctor Jara que sabe por arriba de qué se trata la conciliación laboral obligatoria, que entiende que es cuando las partes no se ponen de acuerdo el juez determina que se continúe la actividad hasta que se pongan de acuerdo. Que no le consultó a la abogada si se podía pedir eso. Que en el Ministerio ninguna empresa solicitó el dictado de una conciliación obligatoria.

Que no conoce el móvil sanitario de la UOCRA, que en su empresa no recuerda que haya ido un móvil de ese tipo.

Ante nuevas consultas del doctor Zorzano dijo que él estaba en Bahía cuando le avisa su jefe de planta que no podían salir los camiones, que el declarante estaba afuera del Ministerio de Trabajo, próximo a ingresar a la reunión. Que cuando recibió la noticia todavía no estaban en contacto con el gremio en el Ministerio. Que esta reunión se hace a los pocos minutos. Que la paralización duró dos horas. Que en el Ministerio duró la reunión como dos horas o dos horas y media; y que esto fue el mismo tiempo que se paralizó la obra. Fueron coincidentes temporalmente el parate y la reunión.

Que no recuerda que Burgos cuando le pedía el dinero hiciese referencia o comparase la situación con la modalidad de UOCRA La Plata. Que sí una vez le comparó con lo que pasaba con el “Pata Medina” en La Plata, que le dijo que acá eran mucho más tranquilos. Que no recuerda si le explicó por qué decía eso, que uno infería que en La Plata eran más

violentos, se veían las noticias de La Plata de la UOCRA y era como que “acá estás mejor”.

Ante otra consulta del doctor Jara dijo que en la reunión en la CGT no les dijeron que pasaba si no se pagaban los premios.

También tomo en cuenta para tener por acreditados estos hechos lo expuesto por el señor Hugo Alberto Dragonetti, quien en su declaración a través del sistema informático Microsoft Teams, dijo que conoce al señor Monteros por haber tenido trato con él. Que en el 2016 era presidente de la empresa Panedile –que ahora no lo es-, la que se dedica a la construcción. Que hizo una obra en una ute junto a Tecma en Bahía Blanca para la construcción de una planta de tratamiento de efluentes, cuyo comitente era ABSA.

Expresó que la obra empezó en julio del 2016, que la primera etapa es de carácter intelectual, poco trabajo, y la obra va creciendo a medida que empiezan las tareas físicas, y ahí se tomaba personal. Que en el primer tiempo no hubo inconvenientes y luego, cuando la obra tenía un movimiento importante, empezaron a sufrir presiones y si no las aceptaban habían dificultades en la obra, como paradas, asambleas, amenazas, todo lo cual dificultó el avance, hasta que luego se presentó una situación difícil, que Monteros los llevó a una situación extrema y tuvieron que aceptar algunas cosas para poder continuar el trabajo.

Apuntó que en el primer momento la exigencia se centró en algo que parecía normal, que era una mejora salarial, que dado el convenio colectivo que se aprueba nacionalmente, había exigencias para mejorar ese convenio, lo cual si bien no era normal porque para eso está el convenio, igual podía tomarse como algo propio de la actividad sindical.

Expresó que luego los pedidos de este señor ya fueron luego en su interés personal, no para los obreros, y eran varios pedidos de materiales para entregar, o contratar a las empresas que ellos les dijeran, las que cotizaban por encima del valor de mercado, pero que igual había que contratar.

Indicó que las empresas eran Flor de Liz, otra no recuerda el nombre, una de transporte y otra de comida. Que los valores de estas empresas eran más caros. Que normalmente en su empresa hacían concurso de precios, se averiguan los proveedores y se lo daban a la oferta más conveniente; pero en este caso había un pedido para dárselo al que ellos decían.

Expresó que esto no fue una sola vez, que transcurrió durante un plazo largo.

Dijo que primero fue lo que señaló como lógico por el valor del jornal, luego contratar empresas a mayor valor y posteriormente los pedidos de dinero que eran para Monteros. Que en la empresa le pedían que trajera

alguna factura porque no tenían dinero en negro para darle, y ahí este señor les mandaba una factura de alguna de estas empresas y luego ellos hacían la transferencia. Que en su opinión seguramente tenía algún contacto con estas empresas.

Recordó que Ariel Savalla era la empresa encargada de la comida.

Refirió que él autorizaba el pago a la empresa Flor de Liz o Savalla, que el declarante le decía a su personal “pagale un adicional de tantos pesos que está autorizado” y el empleado obedecía lo que él le decía, que no hubo un solo empleado a cargo de esa tarea, pero uno fue Ale Herrera. Que el recién mencionado era el que tenía el contacto con la gente de la UOCRA, que desde la presidencia de la empresa el declarante sólo lo había conocido a Monteros.

Que al día de hoy no recuerda los nombres de la gente del gremio que se presentaba o contactaba con la empresa, que en su momento, cuando fue a declarar a la fiscalía sí los recordaba y los aportó, pero ahora pasó mucho tiempo.

Expuso que los materiales eran pedidos por Monteros, que eran para una construcción, y como ellos tenían una cuenta corriente el declarante le daba la orden al jefe de obra para que entregara lo que fuese, que se anotaba en la cuenta corriente y luego la empresa lo pagaba. Que no

recuerda hoy el monto que se abonó por los materiales, que cuando declaró en la fiscalía los mencionó porque fue preparado para eso, que eran cifras importantes, y por eso generaron esta crisis, y ellos en su momento perdieron fuerza por el estado público del tema.

Refirió que esta gente tuvo temor de que se conociera lo que hacían. Que este modus operandi no era solo en Bahía Blanca, que en otros lugares del país estaba sucediendo, y cuando se informó esto periodísticamente se fueron retrayendo teniendo temor de que se conociera lo que ellos hacían. Que tomó estado público el tema en La Plata, donde tenía más repercusión.

Manifestó que todo derivó que les dijeron a las empresas que no querían sus servicios salvo que adecuaran los precios a los de mercado, que les mostraron las ofertas que tenían de otras empresas, y ahí hubo un tironeo y aceptaron hacer las notas de crédito, y luego en las facturas que quedaban aceptaron el precio de mercado, y más tarde rescindieron el contrato.

Dijo que no recuerda bien cuando fue, pero acompañaron las notas de crédito que les hicieron estas empresas porque sino no cobraban, que adjuntó en fiscalía la documentación.

En el mismo sentido computo lo declarado en el juicio por el testigo señor Diego Rafael Salguero, quien contó que es Ingeniero Civil,

dirigiendo obras desde hace varios años para la empresa Coince, siendo desde hace un tiempo atrás socio minoritario de la misma.

Expuso que ha trabajado en Pedro Luro y la zona en distintas obras. Que una de ellas fue la construcción de desagüez plubiales en los años 2.016 y 2.017, una obra bastante grande contratada por hidráulica de la provincia. Que comenzó la obra en febrero del 2.016, y luego de pasar un par de meses se presentó gente de la UOCRA para pedir un aporte dinerario mensual de 10.000 pesos y que se tomara gente de la bolsa de trabajo de la UOCRA, cuestiones ambas que hicieron.

Indicó que el pedido lo hizo Guillermo Molina, que era el encargado zonal, de la zona de Villarino. Antes de este planteo se presentó gente de la UOCRA en la obra y les dijeron que tenían que ir a la sede del sindicato a calle Saavedra al 400. Que el declarante fue al sindicato y lo recibió Molina, no habiendo otra persona en la reunión. Que esto fue en una oficina entrando a la derecha.

Relató que los 10.000 pesos se tenían que pagar mensualmente en efectivo. Que esos pagos se hicieron. Una vez por mes le daban un sobre desde la empresa con el dinero para que él se lo acerque a Molina en algún lugar en el cual quedaban para encontrarse, en la vía pública, una estación de servicio u otro lugar.

Reiteró que estos pagos no fueron desde el inicio de la obra, sino que fueron luego de pasados al menos dos meses hasta el final de la obra.

Mencionó que en la parte de las obras de Villarino trató él con el gremio, pero que la empresa trabajaba desde siempre con la UOCRA, y no era él parte de este trato, pero sabe que la empresa le pagaba a la UOCRA 8.000 por mes para trabajar en Bahía Blanca, como aporte a la UOCRA. Que esto se lo comentaba Roberto Gabeglio, aunque no sabe a quién la pagaba Gabeglio, dado que no participó de esas reuniones y negociaciones, pero entiende que era para trabajar sin recibir amenazas o que les frenen las obras el motivo por el que se pagaban estas sumas.

Señaló que en la obra a su cargo no vio nada mal, se desarrolló naturalmente, tomaron gente de la bolsa de la UOCRA y ese personal trabajó normalmente y correctamente, y no hubo actos de violencia en esas obras. Que no tomaron a todos los de la bolsa, sino a un par de empleados para ayudante y tareas menores, y los maquinistas eran los empleados permanentes de la empresa.

Refirió que la empresa Coince participó en la obra del predio del gremio, cree que aportó mezcla asfáltica para hacer algo en el lugar. Sabe que participaron en eso varias empresas viales para hacer cordón cuneta y asfalto. Acotó que fue una negociación entre el gremio y las distintas empresas, y empezó como un pedido del gremio a las distintas

empresas. De las negociaciones por la empresa participó Tepliz, su presidente.

Al doctor Jara le contestó que le dijeron que tenía que ir a la sede de la UOCRA para hablar de la obra. Que no recuerda si llevó alguna documentación. Que no le hicieron ninguna amenaza. Que no se habló de otra solicitud de parte de la UOCRA. Que esas dos cosas fueron las que solicitaron en relación a la obra.

Dijo que no recuerda nada en particular que no tenga algo que ver con una obra como la que era, las condiciones de seguridad y ese tipo de cuestiones no se hablaron, pero no había nada fuera de lo normal que él recuerde. Que en obras de esas características siempre se habla de las particularidades de la obra, la normativa apunta especialmente a cuestiones de seguridad e higiene, a la seguridad en las excavaciones y zanjeos, en lo que uno tiene que tener cuidado en ese tipo de trabajo. Que justamente por eso en esa charla, al tener la empresa al conductor y capataz de mucho tiempo y confianza, cuestión que hace no sólo a la ejecución sino al cuidado de la gente que trabaja aquí, que fue que se contrató sólo a personal para tareas menores.

Le respondió al doctor Jara que no le dijo Guillermo Molina para que era el dinero que se pedía como colaboración.

Que luego del 2.015 se hicieron muchas obras en Pedro Luro, que no recuerda cuantas, que se hicieron obras de cordón cuneta, pavimentación, algo de cloaca, por lo que han sido más de 5 obras seguramente. Que normalmente se hacen licitaciones y se le adjudican. En los casos de privados se contrata directamente. En las licitaciones se compite con otras empresas, que se repita la competencia es lo normal, son empresas de la zona casi siempre, las locales y de la región, capaz que viene alguna de más lejos de acuerdo con la magnitud de la obra. Que en Bahía y la región hoy están Esuco, Centro, otras en la ruta 33, Ingeniería y arquitectura, Carreteras 2000, Abedul y otras más.

Que en las obras de Pedro Luro intimidación, amenazas o aprietes por parte del señor Molina no recibió.

Ante nuevas consultas del señor Fiscal dijo que Molina no le dijo adonde iban los 10.000 mensuales. Que no lo consultó a Molina por el destino del dinero. Que la suma se abonaba porque al requerimiento de los 10.000 y tomar gente lo charlaron en la empresa, y para evitar que se pongan trabas a la hora de trabajar o se realicen asambleas que entorpezcan el trabajo en sí sin ninguna justificación, fue que se decidió pagar. Que por experiencias que antes estos requerimientos la forma que se podía trabajar sin asambleas sin sentido, es que había que acceder a este tipo de situaciones, de pagos.

Relató que se coordinaba con Molina la entrega del dinero en efectivo. Que Molina le decía “dónde nos podemos encontrar por la documentación a entregar o los planos”, que eso era lo que decía, pero era el dinero lo que le daba. Que cree que usaba la palabra documentación o planos porque tenía miedo de ser grabado, que por eso cree que hablaba de documentación y no de dinero.

Refirió que entiende que no era legítimo el pedido de dinero porque la única contraprestación era no generar molestias a la hora de trabajar o no entorpecer las obras.

Ante consulta del doctor Jara contestó que no le dijo Molina que el dinero era para evitar molestias o no entorpecer la obra.

Al doctor Zorzano le dijo que la reserva de su testimonio la solicitó por una cuestión de protección de la familia y seguridad personal, por ese resguardo. No miedo en particular, pero al no estar habituado a este tipo de situaciones y teniendo una familia, por estas cosas que aparecen en las noticias como violentas fue que lo hizo.

Valoro especialmente lo expuesto en la audiencia de debate por el señor Diego Martín Cerra, quien contó que conoce a los señores Molina, Burgos y Monteros. Que es apoderado de la empresa Cerra y Moro, empresa que hace 50 años se dedica a la construcción, integrando diferentes cargos en la misma desde el 2005 hasta la actualidad.

Relató que hasta el año 2010, 2011 se trabajaba normalmente, que luego “empiezan a realizar pedidos de dinero mensuales a cambio de nada, de poder trabajar”.

Contó que se los citó personalmente a la delegación de la UOCRA, que los citó José Burgos, y se realizó una reunión en su oficina donde dijo que “…había que ponerla, nos pidió un monto colaboración y terminamos arreglando por 3.000 pesos que le pagaba mensualmente, que luego se fue actualizando anualmente hasta llegar a los 5.000 pesos…”, que esto no era colaboración había que pagar, sino te volvían loco, como le pasó a Carcereny que no lo dejaban trabajar.

Refirió que por ejemplo, con el asfalto, si te paran un camión cargado, se enfría y no sirve para trabajar, si hacen una asamblea con el camión cargado se genera un perjuicio económico muy grande, y por eso era mayor el perjuicio que pagar esa suma, por ello se pagaba esa suma y trabajaba. Que la suma era el jornal quincena de un oficial especializado, eso se lo daban a Burgos mensualmente. Que se pagó desde el 2010 hasta el 2017 cuando empezó todo este tema y se pagaba mensualmente.

Señaló que en dos oportunidades se lo entregó personalmente a Burgos y sino concurría Carlos Carrillo a retirarlo de la oficina. Que una vez se lo llevó al gremio, salió afuera y no le gustó que le pasara el sobre así desde el auto; que otra vez le pidió que fuese a calle Alvarado entre 19 de

mayo y 11 de abril y ahí lo estaba esperando y le entregó el sobre desde el auto.

Refirió que si además la empresa tenía un trabajo o una obra más grande o en una UTE había que hacer otro aporte extraordinario.

Que el sobre que le entregaba tenía dinero en efectivo. Que él lo preparaba, le ponía el dinero, le escribía Burgos, Carrillo o UOCRA, y luego su empleado Adriano se lo entregaba cuando iban a la oficina. Que Carrillo llamaba preguntando si estaba la documentación y lo pasaban a retirar. Que si se atrasaban recibían los llamados, que por eso no se atrasaban porque conocían las consecuencias.

Refirió que Burgos fue empleado de la empresa, trabajó uno o dos años con ellos, pero no tenía trato con él y luego pasó a la actividad sindical.

Que su empresa integró una UTE junto con Coince, Abedul, Arquitectura e Ingeniería y Carreteras 2000, para ejecutar una obra de la provincia en la ruta tres vieja y otras obras de bacheo, y ahí les pidieron 100 mil pesos y el Ingeniero Tepliz consiguió negociar en 40 mil que es lo que terminaron pagando, que hacían un aporte cada empresa a la UTE para poder pagarlo. Que esto era muchísimo dinero y era una obra que duró unos 10 meses, durante los cuales se abonó esa cifra, por lo que son 400 mil

pesos que incluso hoy en día es un montón si se tiene en cuenta que esto ocurrió en el 2014 aproximadamente.

Dijo que el señor Tepliz es de la empresa Coince, que la UTE la administraba Carreteras 2000 y Tepliz era el encargado de tratar con el gremio.

Contó que él estuvo en la reunión con Burgos en su oficina, que estaba Ferrero, Tepliz, cree de Medús de Abedul y ahí se les hizo el pedido de 100 mil pesos, que ellos le contestaron que no porque era una locura imposible de pagar, sobre todo porque la provincia paga a los 6 meses. Que ellos sabían lo que sucedía si no pagaban, no tenían que apretarlos porque sabían que tenían que arreglar, que esto "…no fue voluntario, jamás fue voluntario, por favor…". Que luego el señor Tepliz les dijo que había llegado a 40 mil, y lo festejaron, entre comillas acotó, porque al lado del pedido inicial se consideraba un buen arreglo. Que posteriormente ellos le llevaban el dinero a Tepliz, la parte de su empresa, y el mencionado entregaba el dinero. Que esto fue durante lo que duró toda la obra, unos 6/8 meses por lo menos entre el 2014 y 2015.

Recordó que Burgos decía siempre la frase "…el que avisa no traiciona…", eso para referirse a las consecuencias que uno podía tener. Que esto se lo dijo varias veces.

Expresó que un una obra de la rotonda de calle Pilmaiquen, pagaban la mensualidad a Burgos, y como eso era una obra municipal tendría que estar cubierta; pero igual lo llamó un señor Rivas, alias Cucha, que lo citó en la estación de servicio y apareció junto con otro hombre grandote y ahí le pidió por el tamaño de la obra 30 mil pesos, que él le contestó que no iba a pagar por eso, y Rivas le dijo que eran 30 mil mensuales, que hablara con Burgos. Que más tarde lo llamó el señor Porras, jefe de la obra y le avisó que les habían parado la obra, que uno de los sujetos que fue se subió y apagó una máquina y que les dijo que hasta que no arreglaran no trabajaba nadie. Que ante esto lo llamó a Rivas y accedió al pago de 15 mil mensuales para seguir la obra, la que duró 7 u 8 meses. Que ese dinero se dejaba en un sobre, que no recuerda si le escribía al sobre Rivas, pero que sí lo iba retirar él a la oficina.

Expuso que luego de terminada la obra, al tiempo, Burgos lo llamó para avisarle que Rivas no manejaba más esa zona, que la manejaba Gutierrez y que se lo iba a presentar, pero como su empresa no tomó ningún trabajo más en esa zona, no le presentaron a Gutierrez.

Que fue Porras, su empleado y jefe de obra, quien le contó que estaba parada la obra, que estuvo parada una hora más o menos hasta que habló con Rivas y arregló. Que el declarante trataba de solucionar el problema lo antes posible por los perjuicios de tener la obra parada, ya que

se le generan problemas como apuntó con el asfalto que se seca, y otros perjuicios.

Señaló que le exigieron contratar en esa obra los baños de Acqua, que fue la única vez, cree que se tuvieron un mes o mes y medio y hubo problemas con la limpieza, se lo manifestó a Rivas que los empleados no estaban contentos y luego los cambiaron. Que fue Rivas quien le exigió esos baños, que la empresa Acqua era de la hija de Burgos, y esto lo sabe por la facturación, porque antes de ser Acqua facturaba como Estefanía Burgos.

Contó que en otra oportunidad les pidieron un aporte extraordinario para la campaña de reelección de Burgos y Monteros, que le pidieron la suma de 15 mil pesos y él se negó porque era mucho dinero y no lo podía tener en efectivo y sacarlo de la empresa; que ahí Burgos le dijo que le podía hacer un cheque y él le daba una factura, y entonces les mandaron una factura de Acqua y la empresa le hizo el cheque, que la factura era para justificar esa salida de dinero. Que al principio además se negó para ver si podía zafar, pero ellos insistieron y le dijeron que le mandaban una factura y los tuvo que pagar porque sabían las consecuencias que se venían si no pagaba. Fue una factura de la empresa Acqua contra entrega de un cheque.

Exhibido que le fue el legajo fiscal H, hojas 29/30, señaló el testigo que observa la factura y el cheque al que hiciera referencia, que el

monto del cheque es un poco menor por las retenciones de ganancias e ingresos brutos. Que por esa época un baño costaba mucho menos, se pagaba 1.500 por mes por un baño con el servicio de limpieza. Que los 15 mil del cheque no respondían al concepto de la factura.

Relató que varias veces les pedían equipos para tareas en el predio de la UOCRA, para hacer movimiento de suelo, cosas que hacían los fines de semana, y esto era un gran costo, dado que una máquina cuesta más o menos 5.000 pesos por hora y si se trabajaba unas 10 horas el costo era de 50 mil; que esto no se hacía de buena gana ni de voluntad, había que hacerlo. Lo mismo cuando pidieron el asfalto, y ahí hubo varias empresas involucradas, se realizó una reunión en la CGT, donde estaba Vial Agro, Ingeniería y Arquitectura, Cerra y Moro, Abedul y cre que CB 1. Que estaban en una mesa rodeados de gente de la UOCRA y se les pidió colaborar con el asfalto, que era una obra muy grande y cara. Que era "…una clásica que te rodeaban con una cantidad de gente que te asustaba, no porque te dijeran nada, la situación era intimidante de por sí…". Que se les pidió colaborar, dijeron que sí, pasó el tiempo y como la colaboración no se hizo efectiva lo volvían loco a Evangelista, lo apretaban y por eso luego hicieron el trabajo. Que se hizo movimiento de suelo y carpeta asfáltica, obra de mucho dinero si se tiene en cuenta el costo en la actualidad de una cuadra de 100 metros es 1.7 millón o 1.8 y eso han sido unos 200 metros o más, que por eso es un monto elevado. Que su empresa mandó bateas y algunos

viajes de piedras para hacer la carpeta asfáltica, Vial Agro puso los equipos, Carreteras la mezcla, que colaboraron todas las empresas entre sí para hacerlo. Que no sabe quién aportó el asfalto, puede ser Ingeniería y Arquitectura o Carreteras 2000, que Evangelista fue el que administró esa obra y debe tener más precisiones. Que la gente de la UOCRA no se hizo cargo de ningún costo de esto. Que en la reunión en la CGT estaba Burgos y muchos más, que no recuerda bien con precisión quienes estaban. Que ha participado de otras reuniones con la misma gente.

Dijo que Monteros y Burgos era la lista oficial para esa campaña que aportó. Que Burgos lo llamó por teléfono diciéndole que había que colaborar, y como los tenían amenazados, accedieron a los pedidos porque sabían las consecuencias, una parada de una obra era un problema, por eso accedían. Que no recuerda quien llevó el cheque, supone que él, y no sabe quién acercó la factura a la empresa, que pudo haber llegado por mail.

Expresó que cuando los veían trabajando en algún lado les pedían que mandasen alguna máquina, tosca para una calle, que recuerda de una vez que le indicaron algo para un terrero en calle Suiza, que Burgos se lo dio en una tarjetita que entregó en la Fiscalía. Que han sido varios los pedidos cuando los veían trabajando cerca.

Contó que para la época de las elecciones les exigieron el pago de un premio, que los citaron a la CGT un jueves por la tarde, que ahí

estaba Gurrado, gente de Abedul, Tepliz y les pidieron 8.000 pesos como bono de fin de año, que ellos contestaron que no, que ofrecieron 2000 y no se pusieron de acuerdo. Que más tarde los llamaron y les pidieron de ir al Ministerio de Trabajo al día siguiente, y cuando llegó al Ministerio lo llama el delegado que le habían avisado que tenían la orden de parar las obras, que no cargara los camiones, y por eso negociaron con todas las obras paradas, y ahí Paiz les dice que arreglaran ahora porque luego ellos se juntaban con las empresas de afuera y si se acordaba más ése iba a ser el piso; que por eso se arregló por 4 mil, que en ese momento su empresa estaba sin trabajos importantes y fue un gran perjuicio económico, pero tuvieron que arreglar igual para conservar ese poquito trabajo.

Refirió que ellos pagan los sueldos, aguinaldos, horas extras, distancia, plus cuando es hormigón, pero no tenían previsto premio de fin de año, que no se pagaba eso habitualmente. Que en este caso lo tuvieron que hacer porque la obra estaba parada, los costos que eso implicaba ya los comentó. Que en ese momento estaban haciendo un cordón cuneta muy chico y manteniendo a toda la planta, que por eso necesitaba 4 empleados pero estaba manteniendo los 20, por lo que cargar con el premio se les hacía muy difícil.

Reiteró que fue Paiz quien les dijo de arreglar antes de acordar con las empresas de afuera, que en la reunión también estaba Molina y José Burgos, Evangelista, el abogado de esa firma, Roberto Gaveglio y

Andrés Medús, Mauricio Chicon y el declarante de Cerra y Moro, que esta reunión fue en el Ministerio de Trabajo. Que en la reunión del día anterior en la CGT estaban Paiz y Burgos. Que Paiz habló cuando entraron a la reunión, dijo que luego tenían la reunión con las empresas de afuera y ahí se cerró en 4000 y tuvieron que afrontar el gasto. Que luego del arreglo volvieron a trabajar normalmente, su delegado recibió el llamado de volver a trabajar. Que les habían comentado que tenían que pagar los aguinaldos, que les ofrecieron pagar los 2.000 antes del aguinaldo, pero no accedieron, y tuvieron que pagar las empresas los 4.000.

Al doctor Jara le contestó que en el Ministerio de Trabajo el delegado estaba, no entró a la reunión, que sólo ingresó después para firmar el acta, y no le manifestaron nada al delegado. Que él no fue con abogado, que fue con su socio, que había un abogado de Ingeniería y Arquitectura pero no recuerda si dijo algo en la reunión.

Que la UOCRA tenía un móvil sanitario que fue a la obra una vez para aplicar vacunas, pero no le pidieron a él dinero para eso.

Que el dinero mensual no le dijeron para qué era, que no sabía que hacían con el dinero.

A la doctora Stacco le respondió respecto del arreglo de la UTE que no observó cuando Tepliz entregaba la plata.

De fundamental importancia para tener por constatados estos hechos resulta lo expuesto en la audiencia de juicio por el señor Juan Manuel Moreno quien indicó ser Ingeniero civil, y estar trabajando en Bahía Blanca desde el 2006, realizando obras a partir de las cuales se vinculó con gente de la UOCRA.

Mencionó que realizaba obras para ABSA, en el 2.016, fines del año, en reparación de veredas en el centro, y ahí se acercó personal de UOCRA solicitando documentación y que fuera al sindicato para presentar documentación. Refirió que a esa gente de la UOCRA no la conocía, que sí luego conoció a Sebastián Canales.

Indicó que pedían documentación de rutina, recibos de sueldo, pagos 931, por lo que fue al sindicato a calle Saavedra, llevó la documentación y a partir de ahí en la reunión Canales le dijo que estaba bien, pero que para poder realizar esas tareas tenía que firmar un convenio que ya habían firmado otras empresas, pero con ciertos requisitos.

Le señaló al señor Fiscal que esa reunión fue con Canales en el sindicato en calle Saavedra, en una oficina; que previo a eso lo hicieron esperar en una sala y luego lo hicieron pasar a una oficina separada donde estaban los dos solos.

Que con relación a la documentación Canales no dijo nada, ya que estaba todo como correspondía. Que lo primero que le dijo era que

hacía falta que firme un convenio que otra empresa lo había firmado, y en el que pedían un sobresueldo del 35 por ciento más en el recibo por sobre el convenio colectivo, que además pedían viandas, darles medio de transporte y pagarles a fin de año o al final de la obra un monto de 6.000 pesos a cada trabajador. Que esto era mucha plata. Que le pareció una exageración, un despropósito, que no estaban contemplados esos gastos extras. Que se fue de la reunión y ahí quedó el tema, pero luego Canales lo llamaba y lo presionaba con la amenaza de que si no se firmaba se paraba la obra. Que en una oportunidad fue Canales a la obra y le dijo que si no firmaba se paraba la obra.

Relató que era Canales quien hablaba con él, pero cuando iba a la obra lo hacía acompañado con algunos más, a los que no conoce; que en el sindicato la reunión sí fue solo con Canales. Que le dijo que si no se firmaba el convenio en el Ministerio de Trabajo no podía seguir trabajando.

Agregó que luego coordinaron una cita en el Ministerio y antes de entrar a la sala se pusieron a charlar y ahí Canales le dijo que se firmaba así o no se hacía nada, y acto seguido llamó por teléfono y le dijo a uno que fuesen a la obra y parasen todo porque no se iba a firmar nada.

Contó que hizo una denuncia con su abogado, presentaron una nota en el Ministerio de Trabajo para que fueran a ver la obra ya que estaba todo en orden. Que fueron al obrador varios de la UOCRA y les dijeron a sus empleados que estaban en asamblea, que tenían que parar

todas las actividades, y al llegar la gente del Ministerio sus empleados les comentaron que estaban en ese paro contra su voluntad.

Relató que por este motivo levantó todo y no siguió con ese trabajo, que esto fue a fines del 2016, y luego ABSA le pidió como comitente que concluyera las tareas, por lo que en enero volvió a retomar la reparación de las veredas y al día siguiente se apareció esta gente de la UOCRA para que frenara, diciendo que no podía trabajar sin explicar el motivo.

Refirió que fueron a los tres días al Ministerio “bajo obligación era una extorsión que quede claro, me obligaban que si no firmaba no trabajaba, era una extorsión” –así sus expresiones-, y firmó en enero del 2.017. Que como estaba Canales de vacaciones fue Paiz a firmar el convenio en representación de la UOCRA.

Dijo que la obra duró un mes y medio, y en la mitad de la misma, cuando volvió Canales, lo citó al sindicato y le pidió dinero, le dijo que si quería seguir trabajando tenía que poner una suma importante, y luego de eso tuvo que pagar 20 mil pesos por una obra corta, a la que le quedaba un mes. Que se encontraron en la vía pública y le dio el dinero en mano a Canales.

Señaló que la obra era en calle Mitre, entre Sarmiento e Irigoyen, en pleno centro, donde pasan todos los micros por el lugar y el convenio decía que tenía que haber transporte, pero no se podía negociar

nada aun cuando los empleados podían ir por transporte público y llevar su propia vianda, cosa que tampoco permitía el convenio. Reiteró que no se podía negociar nada, que había que firmar así el convenio, obligados.

Mencionó que el aumento del 35 por ciento era mucho dinero, que la tarea de reparación de obras es de mano de obra importante, por lo que 35 por ciento más es significativo. Que además los 6.000 pesos a cada operario al finalizar la obra, que serían como 60.000 mil pesos de ahora a cada uno, sin importar la categoría del empleado, era una erogación muy importante que no se tenía contemplada.

Indicó que en esa obra tendría entre 8 y 9 empleados y le exigieron que tomara dos empleados más de una bolsa de trabajo que le informaron; y esto era perjudicial porque estos dos empleados tenían beneficios, ya que faltaban, Canales mandaba mensajes diciendo que no iban a ir a trabajar, pero que no le descuente nada, ni presentismo, ni salario, porque los necesitaba para una movilización o para hacer otra cosa.

Contó que una empresa tiene que tener 10 empleados para nombrar un delegado. Que cuando se hace un plan se calcula la cantidad de gente, si necesitaba 8 empleados, entiende que no tiene por que tomar a la fuerza dos o tres más.

Que cuando se firmó el convenio los dejaron trabajar y la obra duró un mes más. Que luego le adjudicaron un recambio de cañería para

ABSA en calles Lavalle y España, y Brandsen, Villarino y General Paz, y al empezar la obra volvieron a visitarlos los de la UOCRA, pidiéndole que fuera al sindicato. Que fue a la sede y en la reunión estaban Canales y Guillermo Molina; que ellos tenían dividido por sectores como manejaban geográficamente la ciudad, cada persona de la UOCRA tenía un sector y en este caso parte de la obra era de Canales y el otro sector de Molina, y por eso estaban los dos en la reunión. Que en la reunión le pidieron que firmara el convenio porque esta era otra obra y Canales le dijo del tema del dinero, le volvió a pedir dinero, entre 20.000 y 25.000 pesos por mes mientras durara la obra.

Que el dinero se lo dio a Guillermo Molina, que coordinaron y en la vía pública le dio el dinero a Molina, no a Canales. Cree si no recuerda mal que fue una sola entrega de dinero en el mes de mayo del 2.017.

Que antes de eso todos los meses lo llamaban para que les alcance el dinero; que luego de esa entrega pasó el tiempo y no lo llamaron, porque por ese tiempo fue que comenzó esta investigación de este juicio y no lo volvieron a llamar y tampoco llegó a firmar el convenio.

Reiteró que la entrega del dinero no fue en la sede de la UOCRA, que no recuerda bien si Molina vivía en calle San Martín o cerca y le dio en la vía pública, en la calle, y fue dinero en efectivo. Que no habló nada con Molina esa vez.

Dijo que en sede de la fiscalía adjuntó el convenio que le hicieron firmar en la primera obra y el acta del Ministerio de Trabajo.

Que en la segunda obra la reunión fue en sede de la UOCRA, y ahí estaban Molina y Canales. Que le dijeron que tenía que suscribir el convenio. Que esto “era una exigencia, no era voluntario, no daban posibilidad de que fuera voluntario, era una condición que te imponen para que puedas trabajar, además tenía el antecedente que ya me habían parado la anterior obra” –así sus palabras-.

Que ahí también le pidieron la entrega del dinero, que eso lo pidió Canales, aunque no recuerda si fue de forma verbal, porque tenían como práctica común que los montos los escribían en un papel, que supone que lo hacían por si uno estaba grabando algo porque ellos estaban pidiendo dinero. Que ese dinero fue luego lo que le dio a Molina en la vía pública.

Al señor Fiscal le contestó que ninguno de los dos dijo que el convenio fuese incorrecto o ilegal.

Al doctor Jara le respondió que la documentación que llevó a la fiscalía fue para corroborar lo que estaba diciendo, que llevó copia del convenio que le hicieron firmar y la inspección que hizo el Ministerio de Trabajo.

Que el dinero le dijeron que era como colaboración, pero “lo exigieron, que quede claro” –así sus palabras-, aunque no recuerda cual de los dos. Acotó que “no sabe para quien era el dinero, no sabe que hacían con eso, si se lo quedaban ellos, lo repartían adentro de la UOCRA o lo regalaban” –esos sus términos-. Que los 20 o 25 mil pesos que le pidieron los sacó de su trabajo, que era dinero para gastos de él, y contablemente era plata que “yo me metía en el bolsillo para la Afip, y por esos gastos tuve que tributar”. Que para la Afip queda registrado como que la sacó para él, dado que “no se puede diferenciar en la Afip la plata que le di a Molina de la que sacaba para mí, para la Afip fue ganancia mía y yo tuve que pagar impuestos sobre eso” –sus expresiones-.

Le contestó al Dr. Jara que el motivo por el cual firmó y pagó era porque le paraban la obra si no lo hacía, que el único incumplimiento que ellos le decían era que no firmaba el convenio.

Ante las consultas del Dr. Gomez Talamoni señaló que cuando fue a firmar al Ministerio de Trabajo el convenio ya estaba impreso, que antes se lo adelantaban por correo electrónico diciendo que eso era lo que hay que firmar. Ya estaban escritos y no se podía modificar ni una coma. Que al señor Paiz solo lo vio al firmar el convenio.

Ante nuevas consultas del señor Fiscal dijo que no se podía discutir nada del convenio en el Ministerio de Trabajo. Que cuando uno iba a la sede de la UOCRA el ambiente era bastante intimidante, que él no tenía

experiencia en esas situaciones y era intimidante porque uno iba solo y tenías unos patovicas en la entrada o adentro, y te hacían anunciar, esperar y pasar a otra sala adentro, y luego más tarde a una oficina, y no era grato en lo más mínimo.

Le reiteró al Fiscal que la entrega del dinero y la firma del convenio no era voluntaria, que si no pagabas te hacían problemas.

Por su parte, el señor Roberto Gaveglio, al declarar como testigo dijo que conoce a Mario Gonzalez y al señor Burgos. Que es Electrotécnico e integra Coince S. A. junto con el señor Néstor Tepliz y tres socios minoritarios Salguero, Botazzi y Porcelli.

Relató que hace 30 años que tienen la empresa, que al principio no tenían ningún problema, trabajaban cordialmente, y últimamente sí exigencias en las que pedían a modo de colaboración una cuota mensual. Que tenían que abonar una suma mensual por las obras que estaban haciendo en Bahía, y esto era una exigencia en la que no estaban de acuerdo. Que se pagaba porque de otra manera les entorpecían el avance de las obras, hacían asambleas y otras cosas. Que no eran justificadas las asambleas.

Mencionó que el aporte mensual últimamente era de 8000 pesos, que se empezaron a pagar esas sumas alrededor del 2015 y luego se actualizaron a 8000. Que el pago lo efectivizaba él en la empresa y

lo buscaba Mario Gonzalez o mandaba a otra persona para que le den el sobre. Que supone que Mario Gonzalez sabía que se trataba de dinero porque lo venía a buscar. Que durante los años 2015 al 2017 fueron estos pagos mensuales. Que no recuerda cuando le dijeron que empezara a pagar, y en agosto/septiembre del 2017 se cortó el pago.

Indicó que para una obra en Villarino se les pidió la suma de 10 mil pesos, que la obra era de desagüe cloacal en Pedro Luro. La obra la encomendó la municipalidad de Villarino. Que esto de los 10 mil mensuales fue durante lo que duró la obra 4 o 5 meses y se lo entregaba al ingeniero Salguero que estaba encargado de esa obra y él lo entregaba en la obra. Que ese pedido lo hizo Molina. Salguero se lo daba a Molina, y esto se lo dijo Salguero.

Que esto es lo mismo que lo que aportaban en Bahía, que como era una obra afuera había que hacer otro aporte aparte, que no correspondía a Bahía y si no se pagaba se entorpecía el avance de la obra; que, por el contrario, si se pagaba se trabajaba normalmente.

Acotó que en Villarino se hicieron varias obras menores pero no se hizo ningún aporte.

Señaló que Coince integró una ute con Cerra y Moro, Ingeniería y Arquitectura, Abedul y Carreteras 2000, esta ute tenía a cargo obras de pavimentación asfáltica en la zona donde se re-asfaltó ruta

existente. En esa obra la ute pagó 40 mil por mes, ese dinero lo manejó Tepliz, que negoció con Burgos, porque pedían más y llegaron a convenir que fueran 40 mil pesos. Que no sabe cuánto pedían. Que de esos 40 mil aportó 10 mil cada empresa, y la administración de la ute la manejaba Carreteras 2000, y esto fue durante toda la obra.

Relató que se hizo una carpeta, camino de entrada y un cordón cuneta por parte de las empresas de la ute en un predio del gremio cerca del aeropuerto. Que eso fue una exigencia del sindicato para que aportaran a esa obra sin cobrar, y ahí participaron todas las empresas de la ute. Que esa obra cree que la dirigió Ingeniería y Arquitectura.

Al doctor Jara le contestó que Molina sí le pidió dinero a él, que primero habló con el declarante y luego después el dinero se lo llevaba Rafael Salguero. Que era el aporte que les obligaban a hacer para poder realizar obras, que no le dijo para qué era el dinero. No le dijo que iba a hacer con el dinero. Que no le dijo Molina que pasaba si no pagaba, pero siempre los amenazaban haciendo asambleas y entorpeciendo el ritmo normal de obras.

Indicó que no les hicieron asambleas porque conocían la metodología y por eso empezaron pagando sin que se produjeran esos hechos. Que Molina no le dijo que si no pagaba iban a hacer asamblea. Que ya había pasado con otras empresas, tenían conocimiento que era esa la metodología. Que cuando había una exigencia así se hacían asambleas

todos los días para entorpecer la obra y perder tiempo. Que en algún caso lo habían hecho en la empresa suya también, en Bahía Blanca. Que en la zona de Villarino no hicieron ninguna asamblea. Que en algunas obras no se pagó, como tampoco se pagó cuando la empresa empezó a trabajar, en el año 87.

Al doctor Martinez le contestó que conoce a Monteros, que no ha hablado personalmente con él, que generalmente hablaba su socio. Que Monteros no le hizo ningún pedido.

Que desde el 2015 venía lo de la cuota mensual, y aumentó sobre el final a 8000 pesos. Que era una cuota fija de dinero mensual, más allá de las obras en Bahía.

Respondió que "…esto convenido no fue, era una imposición que ellos no estaban de acuerdo pero lo pagaban para evitar conflicto…". Que no recuerda cómo lo impusieron, que capaz su socio lo sabe más.

Mencionó que una vez con la vestimenta les dieron los presupuestos de lo que ellos cobraban los elementos de seguridad y no lo contrataron porque era más caro y no pasó nada. Que servicio de comida no tenían y la gente se llevaba su comida a la obra. Que no les dijeron de contratar a nadie, no tenían traslado tampoco, ni les aconsejaron contratar a nadie en particular. Que en cuanto a los elementos de seguridad estaban

junto con el presupuesto de la ropa de trabajo y contrataron a otro que era más conveniente.

Que personal de la bolsa de trabajo han usado en Villarino; pero ellos tienen un staff propio que lo llevan a las distintas obras, y cuando necesitaban contratar ellos les daban la lista, pero eso no era imposición y no han tenido problemas.

Que en el 2016 les exigieron premios de fin de año para los obreros, que querían 8000 por obrero pero se terminó acordando 4000 pesos. Que no recuerda otra exigencia. Que del 2015 para acá no recuerda conflictos gremiales en las obras. Que no recuerda cómo fue el momento del aumento a 8000.

Computo lo expuesto en la audiencia de juicio por el señor Luis Gustavo Carcereny, en cuanto el mencionado relató que es Ingeniero Civil, titular de Carcereny Construcciones que es su empresa, dedicada a obras civiles de escuelas y jardines, agua, gas, infraestructura, escuelas para la provincia y las obras de infraestructura para los municipios, en Bahía Blanca y la zona.

Que en la localidad de Suarez realizó obras, dos jardines y una escuela. Que arrancaron a principios del 2.015 y se paralizaron en noviembre o diciembre del mismo año. Que antes de arrancar las obras los citan de UOCRA y les dicen que tenían que usar personal afiliado a UOCRA,

que no podían tomar a otros, que por eso tomaron a esa gente y empezaron a trabajar. Que primero arrancó una obra y luego las otras dos. Que les ponen un delegado y un sub delegado como marca la ley y corresponde, acotando que su empresa cumplía con todas las reglamentaciones que exigía la ley. Que los delegados nunca trabajaron y luego empezaron los problemas cuando ya empezaron con las obras.

Relató que lo citó Burgos a las oficinas de UOCRA en calle Saavedra y los apretaron diciéndoles que tenían que pagar 10 mil pesos por cada obra, y tuvieron que acceder porque era eso o no se podía trabajar.

Indicó que hacían asambleas permanentes sin aviso, que el día se perdía y los jornales los tenían que pagar. Que su hijo estaba a cargo de esas obras y lo sufrió bastante.

Que "…en la UOCRA nos citaban y había 15 o 20 personas grandecitos afuera y había que pasar a través de esa gente que no se sabe si son empleados buscando trabajo o matones que tienen ahí. En el salón de la UOCRA había otros 15 matones y nos hacían esperar para demostrar que estábamos en un medio hostil y luego nos hacían pasar a una oficina donde estaba Burgos y ahí nos imponían las condiciones…" –así sus dichos-.

Expresó que los hacían llevar toda la documentación legal pero cuando entraban decían esto lo dejamos al costado y les decía son 10 “lucas” por obra, por lo que pagaban 30 “lucas” por las obras.

Que jamás vio que revisaran algo y nunca le reclamaron que le faltara algo. Que ha llevado biblioratos de documentación que le daba a Burgos o a Molina, con los que arreglaban después, “…teníamos que terminar arreglando...” –afirmó-.

Que le decían “para que trabajes y no tener problemas ahora tenés que poner 10 mil pesos”. Que la reunión no era para una revisión de la documentación legal de la gente, era una excusa para que vayan y pedirles plata. Que les hacían la asamblea y un acta con toda la documentación que tenían que llevar e iban y no les importaba, quedaba a un costado y nunca les dieron un recibo de esa documentación, quedaba al costado y les decían “tenés que poner 10 lucas por mes”.

Que las asambleas lo que buscaban era dilatar el plazo de obra, como se pagaba mensual lo que ellos buscaban era dilatar, estar cobrando durante más tiempo 30.000 pesos.

Que había momentos en que el delegado Aranda (el sub era Hoyos) decía qué era lo que se hacía en la obra, todo era patoterismo, que ellos decían de hacer la pared aquella en vez de la que se le indicaba. Que

cuando echaban a alguien por algún problema tenían una cadena de sucesos en el Ministerio de Trabajo en Suarez.

Apuntó que los atrasos generan perjuicio porque les aplican multa por incumplimiento del plazo de obra. Pagan además los jornales caídos y todo se encarece, "…por eso la solución más barata es agachar la cabeza y hacerle caso a esta gente, se pagaba porque estábamos presionados y era la única forma de seguir trabajando…" –sus palabras-.

Relató que los 10.000 por cada obra por mes fue hasta septiembre u octubre, que empezaron a tener problemas financieros porque la provincia dejó de pagar. Que cuando pagaban atrasados la quincena, le avisaban a UOCRA. Que luego pararon las obras porque no daba para más y ahí tuvieron muchos roces con Burgos, sobre todo su hijo.

Indicó que los pagos eran en efectivo en las oficinas de su empresa en calle Pablo Acosta. Lo ponían en un sobre cerrado y se lo dejaban a la secretaria, le ponían "Burgos" y le mandaban un mensaje de "legajos a disposición", "documentación a disposición", y alguien aparecía diciendo que era de parte de Burgos, que conocían y le daban el sobre. Que Paiz ha ido, y también otro con la cara quemada que no recuerda el nombre.

Dijo que llamaba la atención que el delegado y sub delegado no iban a trabajar, que eran Aranda y Hoyos. Que eso lo pone el gremio por la cantidad de obreros que hay. Normalmente el delegado cumple función

sindical pero tiene que estar en la obra, pero estas personas no iban. Dijo que las asambleas deben ser fuera de los horarios de trabajo o en la comida, y dar aviso, y esto no ocurría.

Que se cobra sueldo de oficial por ser delegado y Aranda exigía cobrar unos pesos más personalmente para que no haya lío.

Expuso que en el caso de Suarez les impusieron la contratación de baños Acqua, que tiene entendido que era de la hija de Burgos, que tenían que alquilar esos baños. Dijo que no fue una decisión voluntaria, "…era ese o ese, que Burgos, Aranda y los delegados fueron los que impusieron alquilar esos…". No podían poner otro, si ponían otro tenían problemas. Que el servicio era malo, no cumplían con el proceso semanal de limpieza del baño, que ellos reclamaban y no venían. Dijo que él hubiese optado por otro servicio, hubiese pedido dos o tres precios y ver cual le convenía y si no cumplía lo podía echar, pero en este caso no lo podía echar. Que estos baños químicos estaban en las tres obras durante todo el tiempo que duraron, unos 7/8 meses.

Consultado sobre por que señaló que el ambiente en la UOCRA era hostil contestó que "…cuando usted llega a un lugar y encuentra a 15 personas en la vereda interponiéndose en la puerta, pide permiso y no se corren, lo miran despectivamente o amenazantemente, entra, encuentra otras 15 personas que lo miran y lo hacen esperar unos

15/20 minutos, parece para ablandarlo y que sintamos en el ambiente en que estamos, esto resulta totalmente hostil…" –así sus expresiones-.

Relató que en Suarez las reuniones del Ministerio de Trabajo cada vez que echaban a alguien se notaba que el encargado era muy allegado a Burgos. Que a la mayoría de las reuniones fue su hijo; pero cuando echaron a todos cuando se paralizaron las obras empezó a ir con su hijo, recordando que en una reunión la delegación estaba cerrada, que estaba a cargo de Freitas que era de Mar del Plata, y llegó Burgos y abrió con la llave la delegación del Ministerio, prendió las luz y los hizo pasar y les dijo que iban a esperar que llegara el delegado. Que eso demostraba que la imparcialidad estaba rota, que si este hombre tenía la llave era difícil negociar. Además, si querían hacer constar algo en el acta y Burgos no quería, no se ponía.

Contó que en Carhué estaban haciendo una obra de cloacas para la municipalidad, que se arrancó en el 2017 a mediados de año, y que Burgos lo citó en las oficinas de UOCRA en Bahía blanca y le exigió el pago de 50.000 pesos, lo escribió en un papelito, opinando que no lo decía por si lo estaban grabando, que le dijo que era una locura, y entonces escribió 40 y cerró en eso y lo pagó 3 o 4 veces, con la misma modalidad en sobre cerrado en efectivo y él mandaba alguien a buscarlo, le decían "legajo documentación" por mensaje.

Recordó que cuando iniciaron la obra llegaron dos autos y se cruzaron delante de la máquina y uno se baja y les dice que vayan a hablar con Burgos. Que ese era el mecanismo, siempre patoteando. Que luego lo llamaron a Burgos, y le dijo al testigo: "…che José estuviste por Carhue, venite tal día a tal hora y ahí arreglábamos eso…", acotando "…en realidad no arreglábamos nada, estaba yo obligado a pagar…".

Que tenían obras en el partido de Villarino, en Pedro Luro, Buratovich que era la terminación de una escuela técnica, y en Luro un jardín y una escuela. Que esas obras se ejecutaron en la misma época que Suarez, se pararon un tiempo y luego se terminó el jardín en el 2016, la escuela no, esa quedó parada.

Dijo que tenían delegados, pero era Molina el que estaba a cargo de ese sector, era Molina el que manejaba la parte sur y Burgos la parte de Suarez, porque no se metía el uno con el otro. Era lo mismo, la misma temática, "…vení al gremio…". Que Burgos decía eso lo maneja Molina y al revés.

Señaló que a Molina le pagaban 10.000 pesos por cada obra, igual que en lo de Suarez.

Refirió que cuando ya pararon la obra les atravesaron un auto en la puerta de la escuela en construcción porque tenían un camión cargado porque retiraban materiales porque la obra se paralizaba y no lo dejaron

salir, por lo que el camionero estuvo dos noches durmiendo en el camión. Que para esa época a la gente ya la habían echado. Que esto no era una asamblea, que, en su opinión, deberían querer cobrar algo más.

Que en el 2015 se pararon todas las obras, el estado no pagaba las obras y no podían seguir. Que el jardín se siguió en el 2016 porque tenía financiación a través de un organismo internacional que financia, por el cual iban a cobrar a Buenos Aries. Luego del parate del 2.015 se terminó la escuela de Burato y el jardín de Luro.

Volvió a reiterar que el mecanismo era el mismo, los citaban a la UOCRA en calle Saavedra, los citaba Molina, iban a una habitación solos y les decían son 20, diez por cada obra. Que también Molina lo ha citado en alguna estación de servicio, en calle Colón y 9 de julio, una YPF.

Expresó que preparaba un sobre con los 20 mil pesos, le ponían Molina e iba él o mandaba a alguien, que a veces se lo entrega el testigo si estaba en la oficina. Que fueron unos 7/8 meses que le pagó, coincidente temporalmente con la obra, que durante la obra tenían que pagar. Que "…no pagar era no trabajar, eran asambleas permanentes, eran amenazas de no vas a poder trabajar, tanto con Burgos como con Molina era o pagás o no trabajás, o te hacemos la vida imposible para no trabajar…" –así sus palabras-.

Que entonces pagaban y no tenían grandes conflictos adentro de la obra, si no pagaban los tenían.

Dijo que con Molina no llegaron a una situación en el Ministerio de Trabajo, que le parece que no, que no se acuerda.

Nuevamente volvió a señalar que a Molina le daban el dinero en un sobre en efectivo, lo cerraban, le escribía Molina y lo dejaba en la oficina, y si estaba se lo daba el declarante y sino su secretaria. A Molina o a quien venía mandado por Molina. Que en la zona sur de Molina no se le pidió la contratación de servicios, tenían a uno de Pedro Luro.

Al doctor Jara le contestó que nunca las personas que estaban en la sede lo amenazaron verbalmente, tanto los que estaban afuera, como los que estaban adentro. Que cuando lo citaba Molina también iba con documentación, que hay un formulario de UOCRA cuando visitan una obra que indican que hay que presentar pagos de recibo de sueldo, desempleo, plan de seguridad, que ellos llevaban toda la documentación pero no le daban recibo, lo dejaban ahí. Que no hizo ningún planteo al Ministerio de Trabajo porque no le daban recibo de la documentación que entregaba; que pagaban para no tener represalias, por lo que hacer una denuncia en el Ministerio le generaba más roces y por eso pagaba y no hizo denuncia.

Que no pasó más nada porque lo que los obligaban a pagar siempre se lo daban. Que no le decían para que era la plata. Que han tenido

algunas asambleas pero no le pararon nunca la obra. Que el atraso en el pago fue de unos días, lo hablaban con los trabajadores y le avisaban a Molina, y por eso no tenían problemas con los trabajadores y a los días cumplían con el pago.

Comentó que cuando le cruzaron los autos porque habían echado a la gente fue después de pagarle a Molina, que la construcción tiene un fondo de desempleo, pero les cruzaban los autos porque no querían que los trabajadores queden afuera.

Dijo que en la localidad de Suarez tuvieron 45 días de conciliación obligatoria y pagaron igual aunque los delegados no los dejaban trabajar a los empleados.

Contestó al doctor Jara que pagaron de acuerdo a la ley al echar a los trabajadores, que no les debía nada, se hace una liquidación y se cumplió con eso. Que no recuerda tener un reclamo o demanda por eso, que pagar pagaban todos los jornales. Que gente en negro no empleaba, sí gente de nacionalidad paraguaya y estaban en blanco, que el encargado de la obra era paraguayo, era de Villa Gesell el capataz y otros eran de la zona, que tendría que mirar el legajo de cada uno; pero que no recibió reclamo por incumplir el artículo 9 del convenio colectivo que dispone contratar a gente de la zona. Que se tomaba a gente que estaba ahí, en la localidad, donde

también hay bastantes paraguayos y bolivianos por el tema de la cebolla y el ajo.

Reiteró que "…el único reclamo importante era que paguemos los 20 mil pesos…", que le pagó 6 u 8 veces a Molina.

Dijo que a Monteros lo vio una o dos veces en la delegación pero nunca arregló con él nada.

Expresó "…que no sabe para quién era el dinero, era para ellos, que pagaban para que no les hagan kilombo en las obras, por la tranquilidad para poder trabajar, está mal lo que nos hacían, era una extorsión, les importaba tres cominos si la gente estaba en blanco, negro, si tenía la ropa o no…".

Contestó que puede ser que me haya reunido con Molina en el Ministerio, pero no lo recuerda, porque han pasado varios años. Que con Molina en la CGT cree que lo vio, pero no recuerda por qué, no recuerda que pasó en la CGT, fue pero no sé si por Molina u otra persona.

Que para las fiestas han puesto algo, pero eso le parece hasta que está bien, como empresarios que colaboren con algo, pero eso es normal, eso no es una extorsión, pero otra cosa no. Que no le pidieron dinero para otra cosa.

Que además, el delegado de la obra de Pedro Luro le pedía al capataz 2.000 pesos por mes por encima del salario, que el capataz se lo

pedía a él y se lo daba; que es el mismo delito que se comete con los 20.000 pesos. Que eso lo tiene más en claro su hijo. Que no recuerda cuantas veces fue lo de los 2.000 pesos del delegado.

Relató que previo a denunciar tenía reuniones semanales en la Cámara de la construcción y en líneas generales se ha tratado este tema. Ha expuesto como expusieron casi todas las otras empresas su situación particular, por eso tienen una Cámara he hicieron frente a esta situación.

Apuntó que hace 35 años que está en construcción en obras. Que en otra oportunidad le pidieron dinero en otra obra, no fue Molina, él no estaba. Que en esa oportunidad pagó, pero eran cifras más bajas, y era por la misma razón, para evitar problemas, compraban tranquilidad. Que también eran extorsivas, que no puede precisar bien el tiempo, eran conducciones anteriores, años anteriores. Que hubo épocas en que no pasaba y otras en que sí. Que no hizo denuncias de esos pagos por el mismo motivo que explicó antes, hacer una denuncia de esas sin pruebas es muy difícil, es más lograron estas denuncias porque la Cámara los respaldó, por eso fue esta denuncia masiva, que antes una empresa quiso hacer la denuncia y tuvo problemas, no llegó a nada.

Indicó que de esto no existen pruebas, no se puede ir al Ministerio de Trabajo si no existen pruebas. Que no tiene un recibo de Molina que le dio 20 mil pesos, se lo dieron el dinero 6/8 veces, lo mismo

que hicieron con Burgos y que lo hicieron muchas empresas en Bahía Blanca.

Sostuvo que se incrementaban las quejas y comentarios de las empresas, que en la Cámara comentaban el tema, lograron juntarse y arrancó con la denuncia de la gobernadora Vidal cuando vino a Bahía Blanca. Que no recuerda que decía la declaración de la Cámara, que expresaba toda esta situación, por eso la firmó, pero no recuerda puntualmente lo que decía.

Indicó que en la Cámara se desahogaban unos con otros, no lograban nunca llegar a esto, estaban muy mal, era una situación demasiado extorsiva, se había tornado inmanejable y quizás eso fue el detonante, que no sabe por qué lo hizo la gobernadora, pero luego de eso firmaron la declaración y expusieron ante el Fiscal la situación. Que nadie se comunicó con él para que haga la denuncia. Que lo otro no lo denunciaron porque era muy viejo, la gente esa ya no estaba, y en este caso era tal la extorsión que ponía en peligro sus empresas, porque era mucho el dinero que había que pagar, era una suma importante. Que se juntaron todos para poder declarar, que el señor de Suarez declaró y no le fue muy bien.

Agregó que le molesta tener que pagar por algo que no corresponde, que antes también le molestaba, pero no podía ir al Ministerio de Trabajo porque no tenía prueba o recibo de Molina.

Que no invitó a empresa o empresario a sumarse a esta denuncia ni individual ni general. Que Julia Pugnanoni era compañera de la universidad de su hijo, charló con ella de estas situaciones porque sufría lo mismo, la conoce más su hijo, le dijo que fuera a la Cámara y haga lo que tenga que hacer, le comentó que en la Cámara estaba este tema. Que no le sugirió a Pugnanoni que haga la denuncia.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que Paiz era uno de los que Burgos mandaba a buscar el sobre porque él no estaba en Suarez, que lo recuerda al apellido, que si no se lo hubiesen mencionado en esta causa no lo recordaría, como también debe haber a alguno más que no recuerda el nombre. Que Paiz venía a buscar el sobre y ha estado en algún piquete. Que está seguro que ha ido alguna vez a buscar Paiz un sobre, también ha estado en las presentaciones que hacían en las obras. Que no sabe si lo atendió él a Paiz.

Consultado por el doctor Martínez dijo que Burgos escribió primero 50 y luego puso 40, no llamó a nadie, ni habló con nadie. Que le dijo que era una locura, le dijo que le daba la llave de la empresa y puso 40, que también era una locura.

Que en Suarez no recuerda si tuvo medidas gremiales, recuerda más su hijo.

Que el apellido Aranda le suena, que cree que le hizo un juicio a su empresa, cree que no hay resultado, lo puede saber la doctora Valle que es su abogada. Que estaban bien echados, y no recuerda haber pagado luego de un tiempo a varios más, que sí se pagaron los fondos de desempleo. Que en Luro cree que algunos conflictos hubo, pero sabe más su hijo, él le va a poder explicar mejor.

Al doctor Jara le dijo que Paiz retiraba a nombre de Burgos, no sabe si de Molina, que cree que a veces han retirado los dos sobres juntos. Que no recuerda si Molina le hizo algún pedido por seguridad para los trabajadores. Que inspección del Ministerio cree que hubo, pero no recuerda bien.

He tenido en consideración también con relación a estos hechos lo expuesto por el señor Alejandro César Cowper, quien manifestó ante el Tribunal que es Ingeniero civil, representante técnico de Geomac SA desde hace unos años, empresa que siempre ha tenido unos 8 operarios, que es la cantidad de gente que requieren para las obras que contratan. Que siempre han trabajado en Bahía Blanca contratados por la municipalidad o Absa en alguna ocasión.

Relató que en el año 2017 hicieron una obra de desagües pluviales en calle Rosales al 1900, consistente en la colocación de caños de

hormigón por el eje de la calle, que era una obra de 300 metros de longitud y la misma inició en el mes de mayo.

Que el contrato era con la municipalidad, la obra comenzó normalmente y duró el plazo del contrato sin ningún inconveniente por 4 meses de obra.

Expuso que al segundo día de trabajo llegaron dos personas en auto, cuando su empresa estaba en el trabajo preliminar; que no los conocía, ni recuerda que se presentaran, pero que sí representaban a la UOCRA, y consultaron al personal por el encargado. Que el declarante se presentó y ahí le comentaron que tenía que parar la obra porque las condiciones no estaban para poder seguir trabajando; que con consultó el motivo y le dijeron que tenía que conversar. Que le manifestaron que no podían seguir, que había asamblea, y él les explicó que los empleados no estaban afiliados a la UOCRA, que ninguno de los 8 empleados de su empresa eran de la UOCRA. Que estas personas no le decían cuáles eran las objeciones, ya que estaba todo en regla, estaba el baño químico, las medidas de seguridad, tenían la comida en la obra, el personal en blanco y en regla, todo lo de la ART y servicios cubiertos, y ahí estos sujetos le dijeron que tenía que presentarse en el gremio en calle Saavedra, ante lo cual el testigo les dijo que iría por la tarde.

Continuó relatando que por la tarde, tipo 5 horas, fue al gremio sede de la UOCRA, y ahí había gente afuera, y luego aparecieron esos

sujetos que habían estado en la obra y le dijeron que tenía que preguntar por Guillermo Molina, y así lo hizo. Que lo recibió alguien en la puerta, le dijo el nombre y este señor le dijo que esperara unos minutos y luego lo hizo pasar a una oficina que está entrando a la sede a mano derecha, la última oficina y ahí lo recibió Guillermo Molina y le planteó los problemas que tenía dado que no veía razón por la cual querían paralizar la obra, no estaba cometiendo ninguna irregularidad, y Molina no sabía decirle el motivo.

Que Molina le dijo que tenían que conversar, que le hizo un comentario con respecto a la continuación de la obra, concretamente quería que tomara dos personas de la bolsa de trabajo de la UOCRA. Que el declarante le indicó que eso no era necesario, que tenía la gente justa para la obra; y Molina le decía que era condición imprescindible que tomara esa gente. Que el declarante le dijo que no, porque no podía pagar esos costos, no tenía necesidad y Molina le insistía con eso. Que fue categórico el pedido y él no accedió a tomar más gente de “prepo”, porque no era necesario.

Acotó que además, como tenía 8 empleados, si tomaba los dos que le exigían, se convertía esto en un problema para la empresa, porque al ser una empresa chica en caso de 10 empleados automáticamente se exige un delegado en la obra que es un costo improductivo, porque generalmente los delegados no realizan funciones operativas. Que al menos en ese momento era de esa forma.

Dijo que el delegado por lo general trabaja de una forma distinta, más leve y trata de hacer lo menos posible en una obra y al ser delegado es como un elemento que trabaja un 50 por ciento o en algunos casos no se puede contar con él porque presenta excusas para no ir a trabajar. Que en ese momento era un tema muy complicado, de mucho costo asumir un delegado y dos personas más.

Refirió que luego de la exigencia y ante su negativa, le propone que si no accedía al pedido por lo menos que haga un aporte de una plata equivalente a un jornal de sueldo de un oficial mensual. Que esto era juntar todos los meses el equivalente al sueldo de un oficial, que serían unos 11.200 pesos en ese entonces, y ese dinero le contó Molina que estaba destinado a uno de los operarios de la bolsa de trabajo que estaría sin trabajo.

Contó que tuvo que pagar y la primera vez fue a la sede y le entregó la plata personalmente a Molina en sede de la UOCRA. Que esto fue durante los meses que duró la obra y el segundo pago se lo hizo a Molina en la esquina del Automovil Club, en calle Chiclana y Fitz Roy, luego en otra oportunidad frente a donde estaba la CGT en calle Mitre y Rodríguez, en otra en la calle San Martin al 500. Que esto fue siempre en forma personal, que en un sobre le entregaba ese dinero y fueron 4 veces.

Relató que el pedido que Molina le hizo en esa primera charla fue que tenía que aportar eso mensualmente para evitar tener

inconvenientes de presencia y objeciones en cuanto al avance de la obra. Que el temor del declarante era que la obra se parara, que tenía miedo que le pararan la obra porque esto le generaba problemas en el plazo de la misma que eran solo 4 meses y había que aprovechar día por día, no se podía perder tiempo, era fundamental cumplir con el plazo.

Indicó que no había ningún motivo para hacer esa contribución dado que en la obra estaba todo en regla, no había que cubrir ningún inconveniente de falta de documentación, comida, ropa o algo a la gente, estaba todo en regla, el transporte también, con los elementos de seguridad y todo; que esto era un adicional no previsto y no había motivos para poder solicitar ese dinero para poder cubrir algún faltante en que hubiese incurrido la empresa.

Señaló que la municipalidad manda inspectores, la ART inspecciona la obra y estaba todo en regla, tenían además una Ingeniera en seguridad y estaba todo cubierto. Que no se entregaba el dinero por faltante o falencia de la empresa.

A la doctora Staco le contestó que tiene entendido que si una empresa llega a 10 empleados se designa delegado, que al menos esa era su sensación, que uno llegaba a los 10 y la UOCRA podía pedir un delegado, que puede estar incluido ese delegado dentro de los nombrados o

te pueden incorporar uno más, pero como nunca tuvo ese problema, nunca llegó a los 10 operarios, no está seguro.

Que cuando tenés un delegado este operario no se cuenta en la empresa como empleado fiel, porque tiene otras reuniones o situaciones que disminuyen su tiempo de trabajo. Que si el delegado es maquinista, por ejemplo, se para la obra cuando él no está.

Le indicó a la letrada que lo que pagó no estaba en el contrato con la municipalidad, que como era una obra pública licitada a principios del 2017, ellos calcularon que con los 8 empleados cubrían la obra perfectamente, de acuerdo a la capacidad técnica de su empresa, por lo que no contaron con tomar mayor personal.

Dijo que el dinero que pagó no estaba dentro del presupuesto porque cuando se hace el ítem para la licitación no hay un renglón que diga “aporte de la UOCRA”.

Al doctor Jara le contestó que cuando aparecen en la obra las personas del gremio le dicen que no podían seguir con los trabajos porque había asamblea. Que al comienzo de la obra había una plaza, llegó un auto, se bajan dos personas que no sabe quienes eran y empiezan a hablar con el personal, diciéndoles que no se trabajaba más. Que ante eso, el personal por temor se empieza a arrimar hacia donde estaba el declarante, para consultar que hacer, por los motivos por los cuales no se podía trabajar; y

luego ahí se acerca la gente de la UOCRA para hablar con el deponente como jefe de la obra. Que él conversó con estas personas, quienes le dijeron que no podía seguir trabajando, que tenía que ir a hablar a la sede. Que les explicó que estaba todo en orden, les mostró la carpeta con el plan de seguridad que se le muestra a la Secretaria de Trabajo y a la UOCRA cuando pasan a inspeccionar, les ofreció la documentación de la ART, las relacionadas con cuestiones de seguridad, que si querían podían consultar al personal si tenían la comida, el agua, el baño químico –que también se los mostró-. Que les volvió a mostrar que estaba todo como correspondía y que si tenían duda la plantearan, dado que no había argumento o motivo para parar la obra, estaba todo en orden; y estos sujetos insistieron en que tenía que ir a hablar.

Le contestó al letrado que cuando fue a la UOCRA llevó una carpeta con la documentación.

Ante la consulta del Dr. Jara en cuanto a que si había pagado esa suma que era como un salario por qué no contrató a una persona, le respondió que no necesitaba una persona más, que pagó porque necesitaba continuar con la obra. Que el dinero que entregaba, esto es unos 11.200 pesos, cree que es lo que cobraría de bolsillo un oficial, que ese fue el pedido. Que no recuerda precisamente si tenía oficiales trabajando en la obra que ganaran el equivalente a eso.

También le señaló -respondiendo las consultas del letrado- que los aportes patronales los paga la empresa todos los meses, que si hubiese contratado a un trabajador es más lo que hubiese pagado, a grandes rasgos es un 100 por 100 o más que se paga por aporte patronal, art, seguro y otras cosas.

Reiteró que fue categórico con Molina y que le dijo que con los 8 operarios bastaba y eran necesarios todos para participar en la obra, que no necesitaba más personal, que no conversó con Molina con respecto al nombramiento de un delegado.

También le contestó al letrado que no recuerda que Molina le haya dicho que tenía una denuncia por empleados en negro.

Ante nuevas consultas del señor Fiscal dijo que el salario de oficial de obra al día de hoy, una quincena sería más o menos por 88 horas que es la jornada normal de la quincena, y cree que está entre 15 y 20 mil pesos neto de bolsillo. Que ninguno de sus empleados está afiliado a la UOCRA.

Reiteró que las personas de la UOCRA que fueron a la obra, ni Molina posteriormente, le dieron explicación de por qué paraban la obra. Que “entiendo que es una forma de presión, si no hubiese estado yo capaz que era un golpe mayor para la empresa, es una forma de presencia y presión hacia la empresa y los operarios tienen temor a seguir trabajando

cuando llega alguien de la UOCRA y da la orden de parar; que por lo general cuando llega gente de la UOCRA los empleados dejan de trabajar y esperan la decisión del jefe de obra o que la UOCRA se retire. En ese momento cuando llegó esta gente los operarios dejaron de trabajar y quedaron a la expectativa de las directivas, por eso se reunieron con estos dos y luego intervine. Esa fue la forma de presionar para evitar que se siga trabajando" –así sus palabras-.

Consultado nuevamente por el Dr. Jara dijo que lo de las cargas sociales, art, y otros rubros, se sigue dando ese 100 o más que tiene que pagar el empleador.

Que la plata que le dio a Molina era suya y la destinó para ese fin, la retiró de sus haberes y le pagaba con su plata buscando la manera de continuar la obra. Que él tiene contrato con Geomac, que es quien le paga y de ahí destinó esa plata que le entregaba a Molina y no tiene factura ni nada. No había un asiento contable que dijese esto va para tal lado, era plata de sus honorarios que cobró y se la entregó a Molina. No está registrado contablemente porque no había respaldo, factura, ni nada. Que él le pagaba para destrabar el problema.

Que en la empresa no se hace nada sin respaldo documental, todo va con factura a y así se registra.

Muy importante resulta lo que ha contado en el juicio el señor Luis María Medús. De sus dichos se puede extraer información para recrear estos eventos que estamos analizando, por cuanto contó en el Tribunal que conoce a los señores Burgos, Molina, Paiz y Gonzalez. Que es Ingeniero civil y socio gerente de la empresa Obras Abedul.

Dijo que la relación en un principio con el gremio era normal, los intereses de ellos eran velar por los compañeros, y les pidieron colaboraciones que eran razonables, y luego de un tiempo eso pasó a una exageración y ahí se vieron con muchos problemas.

Mencionó que la colaboración era la entrega de dinero de forma mensual para nafta o necesidades de la gente del gremio para su actividad, que eso era lo que decía la gente del gremio cuando pedía el dinero. Pero que luego la proporción de los montos pedidos empezaron a ser parte de sus ganancias como empresa, que era un porcentaje de su facturación, cosa que se les hacía imposible cumplir sin tener problemas financieros en las empresas.

Indicó que desde que trabaja han hecho colaboraciones con el gremio para nafta y otras cosas, pero que los pedidos abusivos empezaron cerca del 2016 más o menos. Que esos pedidos de la UOCRA los hacían Rifo, Erbin, Molina, Gerardo Gonzalez, Mario Gonzalez y Burgos. Que a veces era entrega de dinero en efectivo, en otras oportunidades cheques, y

que pasaban a buscarlo por la oficina, lo llevaban al gremio o acordaban encuentros en una estación de servicio o en la vía pública.

Sostuvo que su empresa tenía una planilla donde anotaba todo lo que iba entregando, también identificaba a la persona, el lugar, el monto, a quien se lo daba, y si era cheque el monto del mismo y el banco, que podía ser Provincia o Credicoop.

Relató que junto con otras empresas (Cerra y Moro, Carreteras 2000 y Coince) conformaron una ute para realizar una obra de bacheo y repavimentación en algunos sitios localizados en la ruta 3. Que en esa oportunidad les pidieron dinero, que la cifra que pagaban era de 40.000 pesos por mes, que los recibía Burgos y lo llevaba la gente de Coince o Carreteras 2000. Que él sabía de la existencia del pacto, pero la ute la gerenciaba Carreteras 2000, de la cual Cristian Ferrero es su titular. Apuntó que cree que fue el titular de Coince, Néstor Tepliz, quien habló en esa oportunidad con la UOCRA, aunque no sabe como eran las entregas, si pasaban por la empresa o lo entregaban en el gremio. Dijo que los 40.000 lo ponían del fondo de la ute, para el cual aportaban en partes iguales 10.000 cada empresa. Que lo que pagaban eran menos de lo que le habían pedido al inicio, que habían pedido mucho más y arreglaron por eso.

Contó luego que su empresa también realizó una obra en calle Tres Sargentos, haciendo cordón cuneta y asfalto de diez cuadras, por un monto de 20 millones de pesos en el año 2016. Que ahí venía conversando

con Molina por los pagos mensuales, ya que estaba dividida la ciudad en cuartos entre la gente de la UOCRA, y en este caso en particular Molina lo llamó para decirle que debían pagar el 3 por ciento del monto de la obra. Señaló que desconoce para que era el dinero pedido, que no era justificable con los gastos de un gremio para nafta. Que con motivo de este pedido se llamaron algunas veces, fue a la estación de 9 de julio y colón, y cree que Molina le reclamaba 80.000 por mes durante lo que durara la obra; lo cual era mucho, y le manifestó su problema. Que el 3 por ciento del monto total de la obra serían un total de 600.000 pesos, que le dijo que no podía cumplir.

Acotó que en su forma de actuar Molina siempre fue respetuoso pero duro en el comentario, diciendo que se iba a tener que atener a las consecuencias, que ellos sabían lo que tenían que hacer. Dijo que nunca le gustó la relación con la UOCRA, que siempre le dio medio ir al gremio, sentir la presión que le hacían y nunca lo sintió o consideró a lo que entregó como una colaboración.

Que en ese momento le dijo a Molina que no sabía si podría cumplir, que le dijo que iba a hacer algo aún cuando no lo iba a aceptar y quedó en que iba a hacer algunos pagos, y realizó algunos pagos luego de eso. Que Molina le mandaba los mensajes, y que él le contestaba por como iba la obra, y ahí la situación se había puesto complicada porque los montos eran altos y no era razonable si cabe la palabra –acotó-. Que Molina lo

consultó qué iba a hacer, por lo que le hizo un cheque con algo, que no era lo pactado, para ver qué pasaba, con cuanto menos se conformaba de lo que le había pedido.

Que así, no llegó a pagar el total del primer mes, cuando surgieron estas denuncias que terminan en este juicio y por eso no tuvo que avanzar más con los pagos.

Señaló que los pagos al final eran todos con cheques, que eran al portador.

Consultado por el señor Fiscal si en esa obra tuvo algún inconveniente dijo que no, porque la obra recién empezaba, hizo los primeros pagos y luego no hubo más relación porque saltó la denuncia.

Contó que en otra obra de pavimentación de 10 cuadras en Punta Alta lo llamó Gonzalez (más tarde corregiría el apellido) cuando empezaba la obra para solicitarle un pago mensual de 10 o 15 mil por mes; que él le contestó que tenía problemas de pago, cree incluso que Gonzalez le pidió más, y el declarante le dijo que no sabía si iba a cumplir el plazo. Que entonces lo citó al gremio, se reunió con él, y arreglaron en 14.000 o 15.000 por mes. Que ahí le comentó que estaba pagando lo de calle Tres Sargentos y que Gonzalez le contestó que eso era una obra separada. Que lo comentó para que supieran que estaban pagando por demasiados lados y no se sentía cómodo. Que luego dejó un valor en un sobre para Gonzalez

en el gremio y más tarde surgieron las denuncias y no tuvo más relación con nadie.

Ante la consulta del Dr. Gomez Talamoni indicó que no fueron ninguno de los dos Gonzalez los que les pidieron el dinero, que fue Gutierrez.

Contestando preguntas del Fiscal dijo que hicieron obras en el predio del gremio, a partir de una exigencia del gremio a la Cámara de la construcción para que se hiciese un acceso en el predio de la ruta 3 vieja, unos 200 metros de pavimento y cordones.

Que les pidieron a las empresas de la cámara hacerlo, entre ellas, Carreteras 2000, Ingeniería y Arquitectura, Vial Agro, Cerra y Moro, CV1, Abedul y otras más, y entre todos lo hicieron. Apuntó que nadie quería hacer eso gratis, que no era su obligación, pero Burgos los intimó a que lo hicieran y así tuvieron que hacerlo, terminando antes de navidad o fin de año. Que fue un monto importante que tuvieron que aportar las empresas.

Que recuerda una reunión en el gremio en la sala grande del fondo, donde los intimaron a terminar porque no estaban haciéndolo en tiempo, e hicieron una especie de compromiso para terminar la obra.

Señaló que “no era por deseo propio, nunca hice nada de lo que hice por deseo propio, era por una presión y prefería aceptarlo que atenerme a las consecuencias, no era voluntario” –así sus palabras-.

Que el señor Burgos junto a tres o más de la UOCRA estaban en la reunión a la que se refirió, y también los empresarios.

Contó que en el año 2015 les reclamaron el pago de un premio de 8.000 por trabajador, cosa que no estaba prevista en ningún lado, no se lo podían trasladar a nadie, y además premio no era porque no había nadie que hubiese hecho algo más que los demás. Que los citaron y hablaron de eso. Que luego los citaron en el Ministerio de Trabajo para confirmar el tema del premio y por el delegado de la obra les decían que si no aceptaban pagar el premio iban a hacer asambleas en la obra; que fue por eso que en vez de 8.000 tuvieron que acceder a pagar 4.000, que fue lo que lograron bajar, y tuvieron que aceptar esa presión teniendo que darle el premio a todos los trabajadores, no a los que se los merecían.

Que en esa oportunidad estaban además de Abedul, Cerra y Moro, Carreteras 2000, Bulwar, Ingeniería y Arquitectura, y alguna más de afuera, que trabajaban en Bahía Blanca y la sección.

Expresó que junto con Schlosser hicieron una obra de peatonalización de la calle Guillermo Torres, consistente en levantar adoquines, hacer veredas, muebles urbanos, iluminación, era semipeatonalización de dos cuadras y media; y ahí ocurrió lo mismo de siempre, hablaron con Schlosser y él le pagaba 10.000 por mes a Mario Gonzalez de la UOCRA. Que esto se lo contó Schlosser, quien era el que administraba la ute y por eso se encargaba de hacer el pago. Que si no

recuerda mal pagaron 6 meses esa suma, que fue lo que duró la obra; que seguramente Schlosser sabe más de esos pagos.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que lo de la plata para Mario Gonzalez lo sabe por dichos de Schlosser y porque gente de su empresa lo ha visto a Gonzalez en la obra.

Al doctor Jara le contestó que los pedidos de colaboración al principio eran razonables y luego no, como ya expuso. Que esos pagos que hacía eran un retiro de la empresa que no se podía imputar de ninguna forma, no había ningún comprobante. Que los pagos los realizaban desde la empresa y no lo podían computar como gastos de la empresa, aparecía como un beneficio, porque no tenía ningún comprobante.

Le explicó al letrado que al principio pagaban un monto, era un poco de gasto y listo, pero luego todo fue mayor, y no se computaba contablemente. Que esos son pagos que se hacen sin comprobante, como si va a una gomería y no le dan comprobante, igual el gasto está. Que por eso las colaboraciones a la UOCRA no se computaron contablemente.

Señaló que los cheques salen de caja, es una extracción que sale como retiro de socio, es como ganancia de la empresa aunque realmente no lo sea. Que todos los gastos sin comprobante quedan en el balance como egreso sin comprobante y queda como ganancia. Todos los gastos que no tienen comprobante pasan a ser como ganancia de la

empresa aunque no lo sean. Que esto es la ganancia de la empresa que puede o no ser de los socios.

Indicó que en la construcción como empresa está desde el año 1992, que es el dueño de la empresa junto a otras personas.

Le contestó al doctor Jara que no se puede diferenciar la ganancia de los socios y dueños con lo que se destinaba a colaboración. Que de ese dinero, lo que se dio en colaboración no lo tiene él, que sí se ha quedado con lo que se llevaba al bolsillo como ganancia. Que el balance es una aproximación de la realidad de la empresa, es una buena imagen.

Sostuvo que acompañó el listado de cheques y pagos que se dieron como colaboración a la UOCRA. Que acompañó en la fiscalía unas impresiones de unas planillas Excel que contenían la fecha, el pago, el lugar y a quien se habían realizado, y que esto lo realizaba él o su hermano, según el caso. Que estos pagos se hicieron a distintos integrantes de la UOCRA. Que en ese detalle de pagos no había ninguno que fuese como ganancia del declarante, son los pagos que se le hicieron a integrantes de la UOCRA.

Dijo que no sabe que es el móvil sanitario de la UOCRA, que no tienen conocimiento de eso.

Que Molina era respetuoso, no le decía para que era la colaboración, y el declarante no le preguntó. Que sí le dijo qué pasaba si no cumplía.

Que no recuerda si en una reunión en la estación de servicio le pidiese la contratación de algún empleado. Que alguna vez alguien de la UOCRA se lo ha pedido, pero no recuerda si esa vez y en ese lugar Molina se lo pidió.

Que hubo un tiempo que la colaboración era razonable, luego cuando la UOCRA hablaba con Vale y Siemens fue que sintieron ellos que esa presión de demanda se las trasladaron a ellos y en cada obra era un pedido, un monto y cada vez les pedían más plata por todas las obras y que fue ahí cuando habló con Gutierrez por la obra de Punta Alta que le dijo que no les podían cobrar más, que ahí fue que hizo referencia a eso de englobar, para tratar de argumentar para pagar menos, que fue lo que quiso hacer, por eso le dijo que juntaran todo, como un descuento. Que no lo pudo lograr, que en realidad justo se dio que cuando comenzó a pagar surgió todo lo de las denuncias y esto se suspendió.

Que luego de las denuncias no lo llamaron más.

Que a Molina cree que solo le entregaron cheques.

Que sabe de la existencia de la bolsa de trabajo de la UOCRA, que puede ser que haya hablado con Molina de ello, pero no lo recuerda;

que puede ser que le pidiera que tomara alguien para la empresa, pero no lo recuerda.

Que los premios del año 2015 eran para el trabajador, que no tiene presente si fueron consignados como remunerativo o no remunerativo.

Le respondió al doctor Jara que no calculaban la colaboración para la UOCRA, porque si hoy te piden 4 o 5 mil pesos se pueden afrontar, ahora si te piden 80.000 en el año 2016, eso no era un monto aceptable.

Que en la obra pública va todo por licitación y la gana el que tiene el precio más barato, o puede ganar el segundo si existe algún inconveniente; pero para la licitación no se tiene en cuenta la colaboración, menos los montos que se empezaron a pedir después. Que nunca se contabilizó una colaboración para la UOCRA en una oferta.

Que las 5 empresas de Bahía que hacen obra pública son competencia suya, que se ha juntado como ute, ha ganado licitaciones y ha perdido. Que no se ponía en contacto con las empresas para presentar la oferta.

Al doctor Martinez le contestó que no tuvo muchas reuniones con Burgos, alguna vez en la Cámara de la construcción con la obra del predio del gremio.

Que directamente Burgos no le pidió dinero. Que no le entregó a Burgos dinero.

Que asistió a una reunión en el gremio por el predio, porque habían demandado a la cámara que en la obra que habían pedido había pasado tiempo y Burgos los convocó para decirles que tenían que hacerlo. Que fueron a la reunión porque el gremio les pedía de hacerlo y a poner la cara, que a él no le gustaba mucho, y ahí les dijeron que tenían que hacer la obra, y ellos sintieron la presión, reorganizaron sus actividades y empezaron a trabajar.

Le indicó al letrado defensor que el declarante no tenía obligación de hacer la obra, “que fue el llamado y decirles que iban a parar la obra, que fijate que hacen asambleas, las situaciones que en una empresa se sienten como presión”.

Ante la consulta de si en la reunión en el gremio hubo manifestaciones o amenazas?, dijo que no recuerda, que no necesariamente cada vez que lo llamaban lo amenazaban, que la presión estaba sobreentendida, porque ya se lo habían dicho.

Preguntado si Burgos en esa reunión dijo algo? Señaló que no lo recuerda específicamente, que tampoco recuerda que fuera una reunión amena, porque la sensación de estar en esa reunión no fue placentera para él, pero no recuerda las palabras que se usaron.

Señaló que cuando estaban en el Ministerio de Trabajo le dijeron que paraban la obra y lo hicieron, no dejaban salir a los camiones de la planta, ni trabajar a su personal. Esa fue la vez que no hacían caso, cuando se discutía el premio, si hacían caso no había problema.

Que cada vez que empezaban una obra aparecían con un papelito pidiendo documentación e implícitamente era que si no iba al gremio y arreglaba iban a empezar los problemas, era una amenaza velada.

Que a una reunión en la CGT local fue, cree que fue previa a la del Ministerio de Trabajo, que luego los citaron al Ministerio porque la reunión de la CGT no era suficiente. Que en esa reunión les pedían el premio. Que ellos no querían pagar nada, que lo que corresponde sí lo pagaban, y lo que no no.

Que de la UOCRA pedían 8.000, ellos ofertaron 2.000 y arreglaron por 4.000. Que en su opinión no correspondía pagar nada. No querían pagar nada porque los premios se ganan, no obligados por el gremio a pagarle a todos.

Que existe un convenio de la UOCRA con la Cámara que es el que respetan ellos, todo lo que se exige demás no está pactado. Que hay veces que se pactan nuevas cosas y están en el convenio, como premios que en realidad se llaman de otra manera.

Mencionó que a la reunión asistió solo, sin asesoramiento legal, que no recuerda si alguna otra empresa fue con abogado. Por parte del Ministerio había una persona que entraba y salía de la reunión, la gente de la UOCRA y las empresas. Que de esos 4.000 que se acordaron cree que se firmó un acta, supone que luego fueron pagados. Que después de eso no hubo parate de obras, ni asambleas.

Expresó que mientras negociaba lo llamaban de la planta que el camión no podía salir, por lo que no era una negociación libre, era con coerción, si no arreglaba la situación seguían parados en asamblea. No era que sus empleados estaban en huelga, la directiva del gremio era que no trabajen y sus empleados no tienen posibilidad de hacer otras cosas.

Dijo que por fuera de los premios no tuvo otra situación de similares características; que era bastante conciliador y aceptaba las cosas.

Al doctor Jara le contestó que luego de la denuncia tiene entendido que la UOCRA fue intervenida. Que luego de la intervención no pagó más colaboraciones, no hubo asambleas en sus obras, y no le dio dinero, ni contraprestación a gente de la UOCRA.

Que mientras las colaboraciones eran razonables no impactaban. Que al no existir colaboraciones las utilidades nunca fueron menores.

Dijo que luego de la intervención pagó premios de fin de año, que esto lo arregló la Cámara con la UOCRA a nivel nacional, que es el convenio que siguen, viene homologado por el Ministerio de Trabajo a nivel nacional.

Que el convenio de premios que firmaron más de 5 empresas no se volvió a firmar luego de la intervención. Que cada empresa puede tener algún arreglo particular y pagarle más a sus empleados.

Que no tiene empleados a los que no les esté realizando el aporte de ley.

Que un cien por cien es la incidencia de lo que se paga por aportes y demás por cada trabajador. Que no tiene abogado que asesore a la empresa, sí ha consultado a abogados. Que cuando fue al Ministerio no consultó a ningún abogado antes de ir.

De interés resulta el testimonio del señor Julián Alejo Allende quien declaró que conoce al señor Burgos de la localidad de Coronel Suarez, por su actividad como constructor, rubro en el cual está desde muy chico, dado que va a las obras desde los 15 años para acompañar a su padre (Víctor).

Mencionó que habitualmente contratan a los mismos empleados, con los que realizan contratos temporales, dependiendo de la magnitud de la obra. Que en el año 2015 o 2016, no lo puede precisar bien,

estaban haciendo un tinglado tipo galpón para un supermercado chino en la Colonia n° 2 cercana a Suarez, que era una obra grande de 600 metros cuadrados. Que ahí comenzó a advertir que la gente de la UOCRA se acercaba a la obra y pedía hablar con él, que uno de ellos era el delegado Damián Ezequiel Cabrera –si no recuerda mal su nombre- a quien conocía de la localidad de Suarez, ya que es una comunidad de 38.000 habitantes. Que en un principio el diálogo con Cabrera era tranquilo, no había punto de violencia, que iban a ver las condiciones de la obra. Que le llamó la atención que pedían hablar con él permanentemente, que el declarante les decía que tenían que hablar con los empleados, que ellos les iban a comentar si tenían algún problema, que tenían que defender al trabajador; acotando que no observó ni tuvo conocimiento de una charla previa con sus empleados por parte de gente de la UOCRA.

Señaló que con sus empleados, en la mayoría de los casos, tiene un vínculo excelente, que come asados, juega a la pelota, dado que los conoce desde siempre, porque trabaja con gente que siempre ha estado vinculada a él y su padre, y son de la localidad.

Indicó que Cabrera le hablaba de reuniones por condiciones laborales de los empleados y como buscando llegar a un arreglo, que era como que querían que pasase algo, un soborno, una plata para poder trabajar tranquilo.

Señaló que tuvo encuentros ocasionales en otras obras, como en el barrio del polo, donde hay un club de polo y se construían viviendas. Que había mucha cantidad de obras, estaba lo del procrear y se habían iniciado muchas obras, por lo que no recibía visitas del gremio seguido porque tenían muchas obras para andar visitando. Que fue así que en la obra del barrio del polo cortó la relación con ellos, les dijo que ya no tenía que hablar con ellos. Que ahí terminó la obra del polo y empezó la del supermercado. Que los contactos que tuvo en otras obras no llegaron a mayores, ni pasó nada. Que con sus empleados arregla en la obra, que "labura" con ellos revocando una pared en un andamio y en otras tareas, y luego en el obrador salían las cuestiones y se arreglaba, no intervenía el sindicato.

Refirió que a principios de año, verano, hacía calor y sería enero o febrero, fue que comenzó con el replanteo de la obra del tinglado, que era una obra que llamaba la atención por la magnitud en la Colonia 2 y llega esta gente, Cabrera y un grupo más de personas de la UOCRA. Que le preguntaron qué iban a construir en el lugar y les contó y ahí empezaron a decirle "…que tenía que ver cómo me iba a manejar…" –así sus palabras- y empezaron a ser más exigentes en un montón de cuestiones, excesivas exigencias para hacer una obra dado que pedían cosas que parecen lógicas pero son inabordables para una obra de esas características. Que luego lo llaman por teléfono y le consultan "…cómo íbamos a seguir con la obra…"

–sus términos-. Que él les contestó que si faltaba algo se lo dijeran y ahí le pedían cosas que no tenían mucha coherencia.

Refirió que luego Cabrera le organizó una reunión con Burgos en la sede, donde le iban a decir todo lo que necesitaba. Que ya en unas ocasiones le habían pedido plata por eso. Que él no lo quería llevar a la justicia porque no quería involucrarse en algo así como lo que está viviendo ahora, pero como es ciudadano y necesita que lo que está mal en su pequeño pueblo tratar de solucionarlo no quedarse de brazos cruzados. Que por eso decidió grabarlos, para contarle a un par constructor lo que le estaba pasando. Que nunca pensó que esta grabación iba a ser un aporte para la justicia, era para decirle a un colega suyo como estaba actuando esta gente.

Apuntó que Nancy García es Maestra Mayor de Obra y trabaja con ellos, que ella no estaba al tanto que él iba a grabar con el teléfono. Que lo hizo porque necesitaba un respaldo, pero no estaba seguro de que lo que estaba haciendo estaba bien o mal. Que le escribió a Nancy para encontrarse y se juntaron fuera de la sede del gremio en Alsina al 700 y pico, que ya tenía su dispositivo grabando, los atendió abajo Cabrera y los hizo pasar arriba a una oficina chica para hablar con el señor Burgos.

Expresó que en la reunión Burgos insistía mucho en la seguridad de los empleados, como que con eso no iba a negociar, pero ya en algunas ocasiones le habían pedido dinero y como no iba a pagar por nada fue que decidió grabar. Que en la grabación lo estaba incitando a que

él le diga que es lo que él quería. Que en reiteradas ocasiones Burgos le decía que no iba a negociar la seguridad y luego de seguir hablando, termina escribiendo en un papel arriba de la mesa la cifra de 10.000 pesos, como si él supiera que lo estuviera grabando. Que se fueron con Nancy y al salir ella preguntó que iban a hacer, contestándole que para él eso era una locura.

Señaló que luego de esto tuvo hechos en la obra por este motivo, porque no accedía a ese pedido, hasta llegaron a prender gomas afuera de la obra como si fuese una gran empresa en la que se explotara a los empleados.

Que le realizaron un piquete y cuando acudieron los medios de comunicación para saber qué pasaba y consultaban, él les contó que todos sus empleados estaban trabajando, que no había ninguno de sus empleados prendiendo las cubiertas. Que el piquete duró dos días, primero una mañana y luego volvieron al otro día. Que en el piquete estaba gente del sindicato y trabajadores que utilizaban para ir a hacer reclamos a otras obras, que no conoce los nombres de las personas, pero algunos eran gente de trabajo que se manejaban dentro de la UOCRA porque conseguían trabajo a partir del gremio.

Comentó que esto no deterioró su vínculo con los empleados, quienes hasta lo tranquilizaban y entendían su situación. Que son siempre los mismos 4 o 5 que comparten la obra, charlan, toman mate.

Consultado refirió que el papel era rectangular, blanco, estaba arriba de la mesa y Burgos lo escribió con números y lo dejó arriba de la mesa. Que él le dijo 10.000 pesos y que "…Burgos asintió, dijo si sí, no sé si con palabras o con un gesto en la cabeza, dado que pasó mucho tiempo…" –así sus dichos-.

Contó que luego del piquete hubo intervenciones en la obra, Cabrera se acercó y le habló de las condiciones laborales que tenía que tener y que recuerda que le dijo que venía con zapatillas a una obra y exigía condiciones de vestimenta y seguridad que no las tenían ellos cuando venían a la obra. Que los que los acompañaban para estar en los reclamos eran gente de trabajo pero que además andaban en un vehículo y siempre iban acompañados.

Sostuvo que siempre le pedían muchas cosas, entre ellas baños químicos, que esto le parece bien para las condiciones laborales de un empleado, por lo que no había problema, pero "…el tema es que un día llegué a la obra y no había contratado nada, y estaba el baño químico ahí, ya instalado, era de una empresa Acqua…". Dijo que no sabe a quién pertenece la empresa, que después dio con el supuesto dueño, cuando se desencadenó el lío y lo fueron a retirar y le quisieron cobrar el uso del baño.

Que los llamó y les dijo que no había contratado nada y que quien lo atendió le dijo que era de apellido Burgos. Que no sabe si tiene vínculo familiar con el señor Burgos –en referencia al aquí acusado-, que fue una charla telefónica, y que luego le comentaron que era uno de los hijos de él. Que no habló con esta persona nunca cara a cara.

Expresó que Burgos le había dicho que le podía conseguir el baño, que esto se lo dijo en la oficina, pero no lo contrató y luego el baño apareció. Que nunca lo fueron a limpiar, y los empleados decían que era un adorno, que no lo podían usar porque no se limpiaba.

Que cuando lo llamó esta persona reclamando el pago del baño era un costo elevado, no recuerda la cifra, le pedía un valor similar a alquilar la casa del vecino, era más o menos el mismo valor.

Recordó que la denuncia la arranca su padre, quien vio que estaban haciendo las cosas mal, y tuvo, entre comillas, siempre algún conflicto con Burgos, que es él quien denuncia públicamente en los medios, que no se acercó a la justicia, que se acercaron a la justicia luego de los medios, porque Burgos, con abogados del sindicato, le inician un juicio a su padre porque sostenían que lo que estaba diciendo era mentira. Que son ellos los que los llevaron a la justicia.

A la doctora Busteros le contestó que no puede afirmar quien es titular o dueño de la empresa Acqua, que por el nombre de fantasía es

difícil saber quién es el titular; que sólo recibió un llamado telefónico en su momento y luego la sociedad de Suarez decía que a esa empresa la estaba manejando el hijo de Burgos. Que el nombre Acqua estaba inscripto en el baño, que por eso suponía que era el nombre de la empresa. Que por casualidad nunca estaba en la obra cuando llevaron el baño y luego cuando lo retiran. Que además había un baño paralelo a ese, dado que ese no se podía usar, estaba inutilizable, y que por eso contrató otro. Que no tenía contacto con quien lo había dejado para llamarlo y reclamarle por la limpieza.

Al doctor Martinez le contestó que no pagó el servicio del baño. Que no lo llamaron más por el pago. Que la obra del supermercado duró 5 meses o medio mes más.

Señaló que además de las medidas de fuerza el gremio denunciaba a la Secretaría de Trabajo y la secretaría hacía un acoso permanente, que iban los dos juntos. Que además del piquete de dos días no tuvo otra medida de esas características. Que falleció una persona en una obra similar. Un accidente de un operario que cayó al vacío y se murió, en un supermercado chino similar. Que esto pasó justo cuando la chica de la Secretaría de Trabajo de Tres Arroyos estaba revisando su obra. Que recuerda que en esa oportunidad le comentó a su padre que no podría haber pasado ese accidente si hubiesen cumplido todo lo que él cumplía, que eso hacía pensar como que hubiesen pagado la coima. Que cree que el

operario pisó una chapa traslúcida y cayó al vacío, por lo que no tendría muchas medidas de seguridad.

Refirió que el Ministerio le labró infracciones, que esta chica de seguridad e higiene de Tres Arroyos le pidió una jabalina de seguridad, que él tenía todo y lo infraccionó.

Que la obra se terminó y no pagó ninguna suma de dinero a ningún integrante de la UOCRA.

Volvió luego a señalar que no sabe si incitó a que Burgos diga, que fue llevándose el diálogo, y que lo mismo le sucedió en actos anteriores que le pedían plata. Que con Burgos habló una sola vez; y que en la grabación cree que se escucha, porque el testigo le dice 10.000 mil. Que de esa reunión luego se retiró y se saludaron cordialmente, que la charla fue cordial.

Contestó a las consultas de la defensa que en el piquete se decía que los empleados no estaban con las condiciones laborales que se necesitaban, pero que esto no era así, que no le sabría decir cuáles son las que reclamaban. Que el piquete fue en esas fechas cercanas a la muerte de la persona, que él diría que antes del fallecimiento de la persona en el otro super chino.

Refirió que seguro, si él hubiese entregado la suma de dinero, estarían bien las condiciones laborales.

Que reclamo de la UOCRA a nivel salarial no hubo, no hablaron de lo que tenía que ganar una persona.

Agregó que ellos pedían infinidad de cosas, que no podía cumplir todas porque no eran necesarias para el trabajo que estaban haciendo, que se iban sobremanera para la seguridad, que sería casi trabajar como en una burbuja, pero a veces es imposible por comodidad o por las características del mismo trabajo que no se pueden utilizar.

Al Dr. Zorzano le contestó que usó su celular para grabar la conversación. Que participó de una rueda por fotografías cuando vinieron a Bahía Blanca e individualizó a Burgos entre las fotografías.

Agregó que la jabalina era una exigencia que no podía pedir el Ministerio, que lo debe exigir la empresa que le da el servicio eléctrico. Que él tenía un pilar aprobado por una empresa que era la Cooperativa Eléctrica, que con esa aprobación trabajaba, y eso se lo explicaba a la secretaria de seguridad de Tres Arroyos, indicándole que le hacían perder tiempo en su obra, que no se lo podían pedir a él, sino a la empresa de electricidad, que era la que había aprobado la obra. Que la jabalina es innecesaria, que él no es experto en electricidad, pero que hay térmica y disyuntor y eso es suficiente.

En el mismo sentido considero como prueba de estos hechos lo expuesto por el señor Gustavo Alejandro Evangelista quien comenzó

señalando que es Ingeniero Civil, empleado y apoderado en algunas obras de la empresa Ingeniería y Arquitectura desde el 2005 a la actualidad. Que esa empresa integra la Cámara de la construcción.

Relató que al inicio de cada obra eran convocados por el gremio, dependiendo la zona era quien lo convocaba, porque estaba diagramada en sectores y dividida entre la gente de la UOCRA, para hacerles un pedido de dinero por el período de duración de la obra; que se los convocaba al gremio, se escuchaban las exigencias, luego hablaba con los socios, se evaluaba el monto, se hacía en algunos casos una contra-oferta y luego de eso era habitual su visita mensual al gremio para entregar el monto solicitado.

Que en la Cámara de la construcción conversaban entre las empresas, entre ellas las 5 dedicadas a cuestiones viales, de las exigencias y esto era una cuestión natural y rutinaria del trabajo suyo.

Dijo que la convocatoria era para establecer un monto fijo que si la obra era muy grande se iba a ir actualizando.

Que en una obra por el plan Procrear cuyo comitente era el banco Hipotecario, y que se ejecutó en el año 2017 en terrenos del ejército y ruta 33, su empresa se encargó de la parte de agua, cloaca y electricidad, siendo en ese momento 3 las empresas contratistas.

Que, como dijo antes, cuando se iniciaba una obra era convocado por la persona del sector del gremio para ver el tema de la mensualidad. Que en ese sector estaba Canales Sebastián y cuando se inició la obra lo convocó al gremio, que el declarante asistió y ahí le pidió dos cosas: que se le otorgue a la gente el 35 por ciento de aumento de jornal y la suma de 50.000 pesos mensuales mientras durara la obra. Que esta reunión se produjo en el gremio, estando sólo el testigo y Canales.

Refirió que se negó porque las dos cosas no tenían nada que ver con lo que hacían ellos, que por eso habló con Gurrado que es uno de los socios de la empresa para explicarle la situación, porque se le iba de las manos ese requerimiento excesivo. Que sabe que Gurrado se ocupó y ante la insistencia de Canales estuvo con él y arregló una suma de dinero, pero no sabe cuánto, ni participó de la entrega; y además a la gente se le sumó el 35 por ciento durante todo el tiempo de la obra.

Le contestó al señor Fiscal que la suma que exigía Canales no correspondía, que lo que pasa es que esto era habitual, y si no se pagaba se paraba la obra. Que el 35 por ciento sobre salarios no estaba en el convenio, que la empresa siempre paga lo que corresponde por convenio colectivo, y eso no estaba previsto en ningún lado. Que ese 35 por ciento afectaba la ecuación de la empresa, fue un gran perjuicio de la obra, la obra de infraestructura requiere mucha mano de obra, por eso el perjuicio es

mayor y no se pudo reclamar al comitente porque era obra pública y no se podía reclamar porque no estaba en el arreglo con el banco Hipotecario.

Que acompañó documentación en la fiscalía del contrato con el banco Hipotecario.

Dijo que a Burgos lo conoció. Que debido a que la empresa cumplía con todo lo que exige la ley el trato con Burgos era cordial.

Reiteró que a cada inicio de obra era convocado al gremio para estipular el monto a entregar. Que a Burgos le llevó dinero mensualmente, la suma era variable, hace varios años que le entregó dinero, y fue algo así como 5.000 mensuales y en el último momento estaba en 10.000 pesos la obra, lo que pagó hasta que se produjo la desafectación del gremio, cuando renunciaron o tomaron licencia. Que una vez convenido el monto lo llamaba por teléfono y el declarante iba al gremio con el sobre que le daban en la empresa o se lo entregaba al delegado de la empresa cuando Burgos no estaba en Bahía Blanca. Que mensualmente se entregaba dinero. Que desconoce para que era el dinero, que no había ninguna contraprestación hacia la empresa. Que la entrega de dinero mensual equivalía a que la empresa trabajaba sin ningún contratiempo durante toda la obra, más allá que la empresa siempre cumplió con los requisitos que están en la ley.

Comentó que en el aeropuerto de Espora, donde participaron en una obra en una ute y en la obra del Procrear en los terrenos del ejército,

tuvieron que contratar a la empresa de viandas, el servicio de combis y al de baños que eran propiedad o de amigos de la gente del gremio. Que el servicio de combis lo prestaba la empresa Flor de Lirio, los baños eran de Acqua y las viandas de Eis eventos. Que no sabe de quien era Eis y Flor de Lirio, pero que Acqua era vinculada a Burgos.

Comentó que en las obras locales no se provee la comida porque así lo indica el convenio, en el barrio del Procrear fue una imposición que tenían que entregar las viandas, y además, aunque ya tenían otro servicio de combis, les fue impuesto Flor de Lirio y también los baños, dado que ellos siempre trabajaron con Bassani y tuvieron que sacarla cuando les impusieron esta empresa. Dijo que la relación con Bassani era muy buena, no tenían problemas, incluso es amigo desde chico del dueño; pero esto fue una imposición que tenían que sacar las empresas que habían contratado para empezar a trabajar con estas que les decían.

Señaló que con respecto a las viandas de la empresa Eis no tiene referencia de los costos porque su empresa no entregaba vianda a la gente; que en lo que respecta a las combis el precio de la empresa Flor de Lirio era mayor pero no había más alternativa que contratarla. Que sobre esta cuestión entregó facturas en el Ministerio Público Fiscal y ahí están los valores que abonaban a las empresas anteriores y lo que se abonaba a las nuevas, que ahí están los valores expuestos.

Expresó que en la zona de Patagones, Stroeder, Villalonga han realizado muchas obras de pavimentación, que incluso tienen una planta de asfalto en Viedma para ello. Que como el gremio tenía dividida las zonas de trabajo, cuando se iniciaban las obras en Patagones, lo convocaba Guillermo Molina al gremio, dado que el mencionado tenía asignada esa zona. Que la mecánica era la que ya relató, empezaba la obra, lo convocaban al gremio, escuchaba la propuesta, se reunía con los dueños y hacía una contrapropuesta o les pagaban lo que pedían. Que las últimas cuotas cuando finalizó este tema eran de unos 19.000 mensuales que abonaba en el gremio; que fue por el inicio de esta causa que se terminaron estos pagos.

Indicó que la empresa no recibía contraprestación por los pagos, simplemente que la obra no se pararía nunca, y ello a pesar de que la empresa cumplía todo lo que exige la ley. Los montos se pagaban desde inicio de cada obra, la zona estaba dividida en sectores donde cada uno era el encargado de esa obra, Molina era el encargado de Patagones, Stroeder, Villalonga, y el declarante iba al gremio a pagar a la UOCRA.

Que el monto de 19.000 era mensual, ese pago lo recibía el encargado de cada sector; en el caso del Procrear era Canales, en Bahía y Suarez el señor Burgos y en la zona sur era el señor Molina.

Consultado por el Ministerio Fiscal por un premio de fin de año en el año 2.016, dijo que los convocaron a la sede de la Secretaria de

Trabajo, que el declarante asistió en representación de Ingeniería y Arquitectura y ahí hubo una reunión para exigir el pago de un premio de fin de año, cuestión que excedía el convenio colectivo. Que se pagaron 4.000 pesos y la UOCRA pedía 8.000. Que para fijar este monto hubo una sola reunión que recuerde el deponente, entre el gremio y las empresas, que los empleados de la Secretaría de Trabajo no participaron.

Que la reunión había sido convocada a la Secretaría de Trabajo, pero los integrantes de la misma no participaban, una vez que las empresas y el gremio se ponían de acuerdo se hacía el acta correspondiente, pero en las negociaciones la Secretaría nunca participó.

Que no correspondía el pago del premio porque está fuera del convenio, la empresa paga lo que corresponde según el convenio colectivo. Que un premio nunca han pagado salvo esa vez, que no sabe lo que es un premio, dado que no tenía experiencia en pagar eso. Que ese monto se les pagó a todos los obreros. Que en la reunión por la UOCRA estaba Burgos y alguno más que no recuerda su nombre.

Consultado por obras en el predio de la UOCRA, respondió que en el año 2015 estaban trabajando en la repavimentación del aeropuerto de Espora junto a Vial Agro y por ese momento fueron convocadas a una reunión en el gremio todas las empresas viales, a los efectos de ponerlos en conocimiento que tenían que colaborar en la finalización del predio. Que de esa reunión recuerda, entre otros, a Burgos.

Que tuvieron varias reuniones porque no se ponían de acuerdo, que las empresas no entendían porque tenían que hacer esa obra gratuitamente, que no querían, y tampoco en el período para ejecutarla porque era una obra muy cara, con mucha mano de obra y materiales, dado que era una obra de asfalto y cordón cuneta.

Que participaron Vial Agro, Ingeniería y Arquitectura, Carreteras 2000, Abedul, Cerra y Moro, Coince, CV1. Que algunos aportaron más y otros menos, que su empresa llevó la parte más grande porque tenían equipamiento y personal muy cerca, junto a la empresa Vial Agro.

Consultado por el señor Fiscal de por qué hicieron la obra? Dijo que por una exigencia del gremio, porque sino se paralizaban las obras que tenían en Bahía y la zona.

Que como las empresas no querían hacer esta obra, porque era una erogación muy grande, se fue pasando el tiempo y como venía alguien de la seccional del gremio de Buenos Aires, cree que Gerardo Martinez, y la tenían que terminar para una fecha, fue que por eso las exigencias fueron mucho mayores a medida que transcurría el tiempo que dejaban pasar las empresas porque no estaban de acuerdo en hacerla.

Consultado por el doctor Jara dijo que normalmente les pedían del gremio que llevasen la documentación del personal, el 931, recibos de

sueldo, art. Que siempre llevaban todos los papeles antes de iniciar la obra, o a los pocos días de iniciada, y ahí era el pedido de dinero. Que este pedido de documentación era a los efectos de convocar al gremio para después pedirles el dinero. Que esto no es una apreciación, que esto era así siempre. Que al iniciar la obra lo convocaban telefónicamente con el pedido de la documentación, lo cual se hizo durante varios años y siempre se entregaba todo, con todo al día, y ahí luego venía el pedido de dinero. Que los pagos al personal es quincenal, la empresa tiene cada 15 días los recibos de sueldo, y esa documentación no era controlada, el declarante iba mensualmente a entregar dinero, no documentación. Que su empresa siempre tenía todo en regla, por lo que no sabe que pasaba si no se cumplía con algún requisito.

Le respondió al doctor Jara que el encargado de controlar los sueldos, la seguridad y la higiene en la obra es el Ministerio de Trabajo, que no sabe si la UOCRA tiene facultad de controlar, pero que llevaban la documentación que les pedían al gremio para que no les pararan la obra.

Refirió que en el año 2015 fueron convocados para entregar una suma de dinero para la compra de bicicletas para un sorteo en el gremio o para la entrega a los chicos.

Que el gremio tiene una bolsa de trabajo de gente desocupada y les recomendaba alguna persona de acuerdo al puesto que necesitaran. Que en la zona de Molina el gremio tenía un delegado en Patagones, no

recuerda su nombre, que era la mano derecha de Molina en Patagones y les recomendaba alguna gente cuando iniciaban la obra, a veces la tomaban si convenía según el currículum y si no convenía no se la tomaba.

Consultado por el móvil sanitario de la UOCRA, dijo que tiene entendido que es un servicio de enfermería y demás que lo han implementado. Que en la zona de Molina no recuerda si estaba el móvil sanitario, en las obras de la empresa alguna vez ha ido alguna enfermera del gremio a vacunar a la gente del gremio, pero no tiene más registro que eso.

Expuso que le daban el sobre con el dinero y él lo llevaba al gremio, que no sabe como se contabilizaba, no tiene idea de eso, no participa de eso ni es su función. Que la empresa factura todo en blanco y tiene a todo el personal en blanco, por lo que eso eran retiros de caja o ganancias. Que como está todo en blanco eso se pone como retiro de socios, que no es contador pero entiende que no hay posibilidad de sacar el dinero cuando una empresa está en blanco, la única manera es como honorarios de socio, que además paga el 35 por ciento de ganancias, entre otras cosas. Que no sabe si había algún otro retiro de socio. Que en la empresa cada pago es contra factura o comprobante, pero no los de la UOCRA.

Dijo que reclamos por empleados no registrados en la zona de Molina no recibió.

Que la empresa consulta con abogados en temas legales. Que antes de la reunión por el premio no consultó a un abogado, dado que no podían evitarlo porque era la exigencia como la de las mensualidades que llevaban por obra, si no se pagaba se para.

Que no sabe que es una conciliación obligatoria. Que en virtud de que cumplían en todo no tiene recuerdo de que le pararan la obra.

Que casi exclusivamente hacen obra pública, participan de licitación pública, y en la licitación son dos sobres, el uno con la documentación de las empresas y en el dos la parte técnica, análisis de precios, plan de trabajo y precio final que uno ofrece. Gana normalmente la del mejor precio, si no ocurre ningún inconveniente en la que saca el precio mejor por el tema de antecedentes o demás. El mejor precio es el más bajo de los contendientes. Para el costo de la mano de obra se hace un estudio de cada ítem y se ve el personal, la calificación del personal para la tarea, para sacar el valor del ítem y luego el global. Que además está el costo de los materiales, etc.. Que si en el curso de la obra alguno de los costos varía la herramienta es la redeterminación de precios que son los índices que refleja el nivel de la construcción, eso lo fija el comitente, son índices del gobierno y se calcula para las empresas para los certificados según el ítem. Que el gobierno elabora los índices, los comitentes redeterminan el precio y

uno tiene que aceptar esa redeterminación, no se puede no aceptar un aumento de precios, “como no se van a aceptar” apuntó. Que hay índices y el gobierno los aplica para las empresas, y normalmente esos índices no reflejan el aumento real de los precios.

Contestó que una paritaria a nivel nacional sí influye en la redeterminación, ya que esta incluye la mano de obra, valor dólar, materiales, combustibles, insumos, etc. Que la mano de obra se fija en la paritaria, cuando aumenta la paritaria aumentan los índices, no así con respecto a algún otro convenio, él único que rige es la paritaria.

Al doctor Martinez le contestó que estos pagos mensuales comenzaron hace mucho tiempo, que puede ser que sea en el año 2007, dado que el declarante regresó a Bahía en el 2005. Que se daban las llamadas por teléfono habituales, la convocatoria al gremio, y se pagó hasta el inicio de la causa o que se tomaron licencia o renunció la cúpula, hasta esa fecha. Que no hicieron antes una denuncia, que no denunciaron porque era habitual, era una costumbre mensual por cada obra nueva que se iniciaba.

Que no sabe, no recuerda que se abonara un bono de fin de año en el 2014 y 2015. Que si a nivel nacional se acordaba eso y estaba homologado lo hubiesen pagado, lo que estaba homologado se pagaba.

Al doctor Zorzano le contestó que la contratación de las empresas las exigió Burgos.

Ante nuevas consultas del doctor Jara dijo que ahora no se realizan pagos mensuales, no se pactaron premios ni aumentos de sueldo por fuera de la paritaria. Que no sabe si hay bolsa de trabajo y el gremio no está pidiendo nada ahora. Que no se contrató gente de la bolsa de trabajo.

Que lo que se paga por fuera del convenio incide en la empresa, lo que está en convenio no incide. Que sin duda, si no se pagan cosas por fuera de lo previsto tiene un impacto positivo en la economía de la empresa. Que la empresa por cada trabajador paga entre un 80 a 85 por ciento más de lo que sale el empleado, estimativamente dado que es difícil de calcular. Que este costo por trabajador no ha cambiado desde la denuncia.

Que no sabe para que era la plata que llevaba a la UOCRA, que solamente llevaba el sobre y a la empresa no le traía ninguna contraprestación. Que no sabe para que usaba la plata la UOCRA, no preguntó para que era esa plata y no le dijeron para que era la plata. Que tampoco le dijeron que la plata fuera para la persona que recibía el dinero.

Deben considerarse además para dar por debidamente demostrados estos hechos lo expuesto en la audiencia por el testigo Luis Alberto Simón quien dijo que trabaja desde hace más de 30 años como

albañil en la localidad de Coronel Suarez y la zona. Que por lo general trabaja con sus dos hijos y en ocasiones con algún ayudante. Que antes del 2016 ha tenido problemas con la gente de la UOCRA. Que como responsable de las obras esta gente del gremio lo iba a ver y le exigía pagos irregulares, pagos en concepto de coimas.

Relató que lo visitaban en las obras de buenas maneras, te hacían preguntas, te sondeaban como quien dice, te analizaban hasta que los conocieron; y después era el planteo de lo que se necesita para trabajar en forma independiente, de la ropa, de la seguridad e higiene; y "…es obvio que uno no siempre está en regla con eso y eso ellos lo aprovechaban para pedir coima, presionaban…" –sus palabras-.

Mencionó que siempre se negó de buena forma, poniendo excusas para no entrar al choque, porque pensaba que negándose de buena forma iban a desistir y luego dejarlo tranquilo. Pero pasado el tiempo y los años, 3 o 4 años que estuvieron los mismos sujetos empezaron a presionar cada vez más, y amenazaban con pararte la obra, con denunciarte al Ministerio del Trabajo, o con hacer un piquete en la obra, o molestar al cliente; que, de hecho, al declarante lo han denunciado por cosas insólitas en el Ministerio.

Contó que a él le daba miedo porque trabajaba con sus hijos, vive del trabajo, y esta gente cumplía otra función, actuaba como una banda

de delincuentes, se movían con impunidad, se reían y te presionaban para pagar una coima.

Dijo que no llegaron a hacerle un piquete en alguna de sus obras, pero una vez le hicieron un piquete a un cliente en su lugar de trabajo, se pararon un grupo de la delegación de Suarez adelante del portón del comercio de Juan Carlos Smith y le cantaban que sabían quien era, donde estaba haciendo la obra, y se veía que la mano venía más pesada. Que en esa ocasión el declarante estaba trabajando sobre la ruta 85 para este cliente, haciéndole un depósito, y el cliente lo llamó para que parara la obra, porque esta gente no lo dejaba salir. Que lo llamaron los chicos y estaban asustados. Que esta era la forma de presionar para que uno arreglase con ellos.

Precisó que en esa oportunidad la manifestación de la UOCRA fue en un depósito que el cliente, el señor Smith, tenía alquilado; que previo a esto fue que se hicieron presentes los del gremio en la obra en nombre de Burgos y luego lo citaron a él a la sede del gremio porque el jefe quería hablar con el declarante. Que fue hasta la oficina de calle Irigoyen y habló con Burgos en su oficina a solas y le dijo que todos tenían que pagar, que había que colaborar con una suma de 5.000 pesos. Que le contestó que no podía, que estaba mal de dinero y trabajando con sus hijos, para sacárselo de encima de forma tranquila, sin chocar diciéndole no quiero pagar, que

siempre trataba de terminar en buenos términos y le dijo que más adelante cuando se acomodara iba a pagar.

Refirió que a los pocos días de esa reunión ahí fue donde fueron a hacer el piquete en el galpón distribuidora de este cliente, y luego fueron otra vez un par de integrantes de la UOCRA a decirle que el arreglo no iba más, que querían 10.000 pesos, que había que pagar sí o sí, sino le iban a hacer un piquete a él en la obra, como le habían hecho un piquete en otra obra de Suarez al que mencionaban como “el otro gil”, en referencia al señor Allende. Que le decían que le iban a hacer a él lo mismo que al otro gil.

Manifestó que les contestó que lo iban a dejar sin trabajo, y que ahí insistieron en que al otro día iban a hacer un piquete; por lo que al día siguiente fue él solo a trabajar, sin sus hijos, y no aparecieron para hacer el piquete.

Aclaró que fue primero la reunión con Burgos a la que lo citaron, luego el piquete en el depósito al cliente y luego la presencia de esta gente en su obra amenazando con hacer un piquete.

Que en esa obra que hacía para el señor Smith recuerda haber visto a Cabrera, quien era el que se bajaba a hablar siempre con el testigo; que por lo general Cabrera bajaba con una par de acompañantes, pero no les conoce sus nombres, sólo los ubicaba de vista. Que por lo general era

como que se repartían las obras, que en esa obra era Cabrera quien iba, pero dependía de la ubicación.

Relató que en la obra del depósito de la avenida Casey, en el 2014, fue que se presentó Carrillo con algún otro más de la UOCRA, que no recuerda si era Cabrera, con las mismas exigencias, diciéndole que iba a tener que pagar un arancel. Que él siempre les lloraba la carta, les decía que la cosa no estaba bien, que necesitaba más tiempo; y bueno, pasaban un par de veces y te presionaban. Que siempre en esa época te pedían 5.000 pesos por obra.

Indicó que realizó una obra de ampliación en el Hospital Municipal en el año 2012, y que fue ahí cuando empezó la era Burgos, que ahí empezó a escuchar de Burgos. Que esa obra la manejaba Carrillo en la calle, era el encargado de pasar a pedir coimas, siempre con el mismo método de presionarte, amenazarte con pararte la obra, de aparecer con un montón de gente. Que en esa obra una vez fueron un montón, como 4 o 5 integrantes de la UOCRA todos juntos a presionarlo, y que ahí empezó su problema con esta gente, con Carrillo y Burgos.

Refirió que era una obra estatal e igual iban a pedir coimas. Que por ser una obra estatal si uno ocupaba a una persona la tenía que tener en blanco; que así tenía a su personal, pero siempre iban a encontrar algo por seguridad o higiene para presionar y pedir una coima.

Que en esa época se manejaba entre 3.000 y 5.000 pesos de coima; todo dependiendo si te veían cambiando una puerta o haciendo un tapial dado que mucho no molestaban, pero si la obra era importante como un depósito te iban a ver para que pagues.

Contó que en otra obra en un edificio de Suarez en calle Belgrano, que estaba a cargo de su hermano en el año 2013, y consistía en reformas y ampliaciones de departamentos también lo visitaron, porque era una obra grande y se veía el movimiento. Que lo visitó Carrillo con dos personas más de la UOCRA, que se los presentó pero no recuerda los nombres, que le dijo que era gente de Bahía que estaba haciendo un relevamiento de las obras en Suarez, con planillas y demás. Que esa vez Carrillo le pidió que pasara por la oficina, que cree que ese año se hacía cargo el mencionado de la oficina, y en nombre de José Burgos te tenías que reunir con él. Que fue a la oficina y ahí le pidió alrededor de 5.000 pesos.

Apuntó que en el 2016 tuvo una enfermedad oncológica y se tuvo que mudar a la ciudad de La Plata, por lo que dejó más de dos años de trabajar. Que recién volvió a trabajar a fines del 2018 con cosas livianas, y desde esa fecha hasta la actualidad no tuvo experiencias como las que contó.

Le contestó al señor Fiscal que a él no le pidieron que contratara baños u otros servicios, pero que sí ha escuchado a otros

constructores comentar de esos pedidos. Que escuchó también que esta gente tenía servicios de alquiler de baños químicos, y que cuando la obra lo requería había que alquilarle el baño a ellos; pero aclaró que a él no le dijeron nunca que alquile un baño, ni nada por el estilo.

A la doctora Busteros le contestó que siempre te iban a encontrar algo, o por la marca de botines o el tipo de andamios, ellos si quieren te encuentran el problema, porque uno no está totalmente en regla con lo que son las normas; la construcción en la argentina no está bien normalizada para que se cumplan todas las reglas; que, por ejemplo, estar con zapatillas comunes iba a ser causa de un cuestionamiento. Que si te querían encontrar algo, alguna falencia para hacer una infracción como la ropa, el andamiaje, cerco de la obra, te hacían las observaciones como para presionarle porque sino te venía la infracción.

Relató que una denuncia que le hicieron en el Ministerio fue por falta de jabalina en un pilar de luz nuevo. Que el declarante construyó el pilar bajo las normas de la Cooperativa Eléctrica que no pedía jabalina, y lo denunciaron ante el Ministerio de Trabajo y le vino la sanción, que era todo una forma de presionar.

Mencionó que en esa obra en Pueblo San José la cooperativa no pedía la jabalina y por eso le colocaron el medidor; pero el punto de esta gente no era la jabalina o no, sino dar a entender que te podían infraccionar

por cualquier cosa si no pagabas. Que la presión era para conseguir la coima.

Refirió que el Ministerio de Trabajo le aplicó una multa, que se la alcanzó un representante de la secretaria de trabajo de Suarez, Darío Graf, el mencionado le alcanzó la notificación, y no recuerda bien la plata si eran 7.000 de multa, porque le dio bronca y la rompió, dado que no la pensaba pagar. Que luego le llegó una notificación a la casa de su madre y le quedó una deuda con el Ministerio de Trabajo.

Señaló que cree que a nadie le deben haber hecho una multa por falta de jabalina para una vivienda unifamiliar, que la cooperativa en Pueblo San José te daba todos los requisitos y formas de lo que había que construir, sino no te daban suministro y en ese pueblo no pedían jabalina.

Sostuvo que el dinero que pedían era mensual mientras durara la obra, una vez por mes. Todo el tiempo que estuviese la obra duraba la coima.

Que en esa obra que era una vivienda unifamiliar para el plan procrear el señor Carrillo era el que lo iba a ver; que ya lo había visto unas cuantas veces, y el declarante lo había pateado para adelante, y Carrillo le había dicho que lo “estaba boludeando”, y una tarde llegó una camioneta del Ministerio de Trabajo de Tres Arroyo con dos mujeres y en otro auto Carrillo con Cabrera, tipo 4 de la tarde, cuando estaba tomando mate con su hijo y

un ayudante, y ahí Carrillo le dijo “viste que te caímos”. Que esa vez fue la primera vez en su vida que llegaba una inspección del Ministerio de Trabajo para una casita de 60 metros. Que era raro que el Ministerio de Trabajo se moleste para hacer un acta en ese tipo de obras, pero viendo con quien habían concurrido no lo sorprendió mucho.

Comentó que luego salió al exterior y le llamó la atención que en el barrio que estaba en construcción, que eran como dos manzanas y eran todas viviendas para el procrear, unas 20 a 30 obras de casas en construcción, no había nadie trabajando, y por eso asoció que él era uno de los pocos que no pagaba lo que le pedían y que a los demás les habían avisado que iban a llegar del Ministerio.

Expuso que Carrillo, luego de decirle “viste que te caimos”, le dijo que pasara por la oficina de la sede de la UOCRA en Irigoyen, a lo que le contestó que sí porque lo preocupó la visita del Ministerio de Trabajo, que lo había sorprendido que estuviesen todos juntos. Que fue a la oficina del sindicato y ellos tenían un entrepiso, con escalera, que abajo no había nadie y para su sorpresa, mientras se quedó esperando abajo, escuchó que estaban las dos mujeres del Ministerio de Trabajo con Carrillo haciendo recuento de ese día de la recaudación de Coronel Suarez. Que ahí pensó que esto no tenía más arreglo. Que como no se dieron cuenta que estaba se fue. Que luego lo llamaron, les dijo que iba a ir, pero no pasó.

Le contestó a la letrada que supone que algo del dinero sería para ellos, en referencia a Carrillo, pero seguramente algo era para Burgos.

Al señor defensor, doctor Martinez, le contestó que nunca abonó ni pagó lo que le pedían, que por eso tuvo esos problemas. Que nunca le hicieron un acta de constatación por parte del Ministerio de Trabajo por tener empleados no registrados.

Que en la obra del Pueblo San José no impugnó la resolución del Ministerio que le impuso la multa, no la pagó, no la podía arreglar en ese momento, no la respondió ni hizo el descargo. Que cuando le llegó la notificación no la leyó toda, que era una vergüenza, que sabía como venía la mano, no hiso el descargo, ni nada. Que en esa obra le habían pedido dinero y siempre se negó a pagar.

También computo lo expuesto por el testigo Carlos Schlosser quien mencionó que es Ingeniero civil y hace 38 años que ejerce, teniendo una empresa constructora unipersonal que tiene de nombre de fantasía Schlosser ingeniería, trabajando desde el 2001 en Bahía Blanca.

Contó que junto con Obras Abedul tomaron un trabajo en Ingeniero White, tratándose de una intervención urbana en la avenida Guillermo Torres, que a esos efectos conformaron una ute, por 9 meses de trabajo. Que la obra era renovación del pavimento, iluminación y mobiliario

urbano, y reparación de veredas y desagües pluviales, como también reemplazo de cañería de servicios.

Dijo que en esa obra el tema fue que recibió a gente de la UOCRA solicitándole colaboración, según decían ellos, porque consideraban que el tipo de obra, por el monto que era, resultaba importante para el tipo de empresa. Que solicitaron el aporte de una colaboración que no terminó siendo así, que se solicitó un aporte mensual en función del monto de la obra en sí, se solicitó que concurrieran a la UOCRA y ahí se pactó la cifra y eso fue lo que se tuvo que aportar todos los meses hasta la finalización.

Mencionó que la reunión fue en la sede del gremio, y ahí estuvo presente Paiz. Que fue Paiz quien lo citó, creo que lo llamó por teléfono o se presentó en la obra, pero no lo recuerda bien. Que en el sindicato, en esa reunión con Paiz, se terminó negociando una cantidad porque la inicial era superior y se pactó 7.500 pesos mensuales. Que el monto inicial cree que fue más del doble de esa cifra.

Que el deponente le dijo a Paiz que era excesivo, que no era posible, porque el monto se sacaba del beneficio de la obra y era imposible disponer de ese dinero, por lo que luego llegaron a ese número, y todos los meses se contactaban con el declarante, quien en representación de la ute pagaba entregando el dinero a alguien que mandaban, de los que desconoce identidad. Que les avisaban que en tal momento pasaban a

retirarlo, que el dinero era en efectivo y en algunos casos, como no tenían, se entregaron cheques al portador. Que estos cheques eran de la ute, la que abrió una cuenta en el Banco Provincia, y los cheques los firmaba gente de Abedul o el testigo. Que si no recuerda mal fueron 8 o 9 pagos, durante el plazo de ejecución de la obra, y abarcaron todo el período.

Relató que Paiz no recibió esos pagos en forma personal, siempre era alguien enviado por él, de los que no conoce los nombres. Que no se firmaba nada, era dinero que pasaba de sus manos a las manos de ellos. El pago se hacía en su oficina, le decían vengo de la UOCRA a retirar lo pactado y se lo entregaban en un sobre, no existiendo constancia ninguna. Que los datos de los cheques los aportó en la fiscalía en su momento.

Le señaló al Fiscal que “no era un pago voluntario, era intimidatorio el sistema, podíamos llegar a tener problemas en la obra, a tener inspecciones difíciles por parte del Ministerio de Trabajo, a pesar de que somos una pyme que cumple con todos los requisitos laborales; pero a veces uno ante el temor y pensando en que uno quiere trabajar y que su personal de años en la empresa (alguno más de 20), se pensaba más en ellos y en que la obra no se pare, porque cuando la obra se para el personal no cobra, ante eso uno llega a decir tengo que hacer este pago aunque sea en contra de mi voluntad” –esas sus palabras-.

Relató que ha tenido otras experiencias, solicitudes en algunos casos a las que no accedió pensando que se tenía que atener a las consecuencias, pero el caso más concreto es el que está relatando.

Que otro caso fue en una obra por el PROCREAR, donde le exigieron que firmara un convenio como tenía la empresa principal, no accedió y logró eludir la situación. Explicó que la empresa de la cual era sub-contratista era Ingeniería y arquitectura, que la sub-contrató para hacer una red de gas en el barrio del procrear ubicado en los terrenos traseros del Quinto Cuerpo del Ejército. Que en esa obra fue presionado para aceptar las condiciones de la empresa principal, pero logró después de discusiones no aceptarlas. Que las condiciones que le querían imponer eran en algunos casos más caras que las que él contrataba de baños y comida.

Que como ha participado de las reuniones de la cámara y su empresa es miembro, sabe que había comentarios que en muchos casos hubo presiones para contratar una determinada empresa para el transporte de personal, alquiler de baños y comida del personal.

Dijo que les propuso a los que lo citaban en la UOCRA ir a otro lugar y no hubo forma de convencerlos; porque en la UOCRA uno se siente intimidado, presionado, era la manera que ellos buscaban de lograr que se acepte lo que ellos le pedían.

Que los cheques se descontaron todos de su cuenta corriente.

Al doctor Gomez Talamoni le dijo que no recuerda las palabras exactas que Paiz utilizó en la reunión, pero que hizo mención al monto de la obra pública, el plazo de obra y que en función de eso la UOCRA exigía esos pagos. Que si la ute tiene esta obra es que se pedía esa suma de pago no voluntario, y fue en función del ambiente intimidatorio y conociendo otros casos comentados dentro de la misma cámara, que se termina accediendo a estos pagos.

Dijo que “era implícito, no hubo una amenaza de decir o pagan o les rompemos un equipo, le prendemos fuego un equipo, lo que sucede es que cuando uno está trabajando tiene que analizar esas ideas de cómo sigue esto si no accedo a esta situación. Uno las piensa, las analiza, hay ejemplos donde han pasado cosas, uno se pone en situación de autodefensa que afecta hasta la salud personal de uno por estar bajo este estado de presión” –esos los términos en que contestó-.

Reiteró que cree que pagaban 7.500 por mes y cree que era Paiz el que los mandaba a buscar, porque el contacto anterior al pago era de él.

Al señor Fiscal le señaló que margen para no pagar no había, los pagos eran religiosamente mensuales, que “no sufrí una amenaza frontal por parte de él, debo decir, pero si teníamos retraso un día nos pedía el cumplimiento, nos exigía el cumplimiento” –sus dichos-. Que en esa obra, sobre el final, los visitó el Ministerio de Trabajo, que hubo algún retraso en

los pagos en esa época, pero no lo puedo asegurar totalmente que haya sido producto de esa situación, pero es coincidencia.

Se suma a lo expuesto por los testigos que se han valorado anteriormente, lo relatado en la audiencia por el señor Néstor Julio Teplitz, quien comenzó señalando que es Ingeniero Civil, socio de la empresa constructora Coince, habiéndose dedicado desde hace 39 años a la construcción, habiendo integrado también la comisión directiva de la Cámara Argentina de la construcción.

Indicó que por esa actividad interactuaban con la dirigencia local y nacional de la UOCRA, existiendo un acuerdo de colaboración mutua entre las entidades por tener temas en común y para generar oportunidades de buscar puestos de trabajo y obras; como así también, para atender otras cuestiones como las paritarias anuales, en las cuales la cámara es un referente, dado que si bien hay otras cámaras más regionales en el país, las paritarias que ellos acuerdan son las que se tienen como referencia, como pautas salariales para el sector.

Relató que se tiene una buena relación desde lo institucional, siempre con alguna situación, pero en general resulta bastante cordial el trato; pero que en el último tiempo, entre el 2016 y el 2017, se generaron situaciones que tensaron la relación y la hicieron más compleja.

Apuntó que se debe distinguir entre dos tipos de obra, la pública y la privada, la obra pública se rige por los pliegos y cuando se oferta se rige por las leyes de obra pública y en esa instancia cuando se cotiza para formar un precio se pone el componente de mano de obra que es el homologado por las paritarias.

Indicó que a partir de determinado momento en la delegación Bahía Blanca de la UOCRA se empezaron a pedir la firma de convenios específicos que los remitían a valores muy superiores a los establecidos por las paritarias; valores que iban del 20 al 35 por ciento por arriba de lo establecido. Que las cláusulas que pedían eran específicas y no están contempladas en los pliegos de licitación, por lo que les querían hacer entender eso a la gente de la UOCRA, pero no podían, y cuando ganaban una obra tenían que hacer uso de estos convenios particulares que hacían inviable la obra, al modificar los costos.

Expuso que hay obras de arquitectura de viviendas u hospitalarias en las que la mano de obra es significativa, cerca del 40 o 50 por ciento y si ahí se aplican coeficientes tan altos no se podía ejecutar la obra. Que esto empezó a generar polémica y no se encontraba punto de equilibrio con la UOCRA.

Señaló que les informaron a los gobiernos de nación y provincia avisando que no los podían contemplar a esos convenios, y que si se querían homologar los acuerdos tenía que ser oficial, situación que

colocó a las empresas en situación de tensión. Que además del salario había otras variables que estaban en esos convenios, como la provisión de comida, que no estaba en la licitación original, lo que generó situaciones complejas.

Acotó que es por eso que el declarante habla de dos etapas, una hasta el 2.016 y otra luego cuando entró a jugar esto. Que los años 2.015 y 2.016 fue duro para el sector, y cuando empezaron a salir obras de saneamiento y viales fue que empezaron a aparecer este tipo de intenciones de aplicar estos convenios específicos. Que para él no se podían admitir estas exigencias descabelladas que llevasen a paralizar las obras.

Apuntó que tuvo exigencias de premios a fin de año en su empresa Coince. Que el primer problema fue un convenio específico cuando hacían un trabajo de saneamiento y recambio de cañerías para ABSA y fueron convocadas casi la totalidad de las empresas que trabajaban para ABSA para firmar el convenio, del cual les habían dado un borrador con lo que se exigía y cada empresa tomaba la decisión que le parecía oportuno. Que ellos no lo aceptaron y no lo firmaron.

Relató luego que los premios es una cuestión habitual en el sector de la construcción. Que la gratificación de fin de año ellos no la tenían como sector, pero sobre fines del 2.016 fueron invitadas las empresas a que diesen un premio generalizado de 8.000 pesos por persona; pero como era una época crítica, luego de un par de años con bastantes problemas de

trabajo en la obra pública, les pareció desmedido, no obstante lo cual, para acompañar una petición para que la gente pasara mejor las fiestas aceptaron dar un premio más bajo que lo solicitado, ofreciendo 2000 pesos, pero esta suma no fue aceptada y se tornó muy compleja la situación porque estaban en diálogo y de buenas a primeras los llamaban del Ministerio de Trabajo para buscar una salida en este tema, y ahí fue problemático porque muchas obras tuvieron ese mismo día de la reunión asambleas y paradas transitorias, por lo que les daban a entender que si no acordaban iban a tener más problemas, y al final acordaron dar algo por operario.

Refirió que en representación de la UOCRA en estas gestiones estaba Burgos, que se reunió en la CGT y otras veces en sede de la UOCRA. Que recuerda alguna reunión con una mesa en la que estaban Molina, Paiz y algunos más, que de la Cámara estaba Quantin, el gerente Lopez de su empresa, Gurrado, siendo unos 4 o 5 que fueron para acordar eso. Que luego, en la reunión en el Ministerio de Trabajo había más gente, como los representantes de Carretera 2000, Ferrero y empresas que no eran de Bahía Blanca y otras que hacían obras viales por la zona que habían sido invitadas pero no se acercaron. Que en esa reunión en el Ministerio de Trabajo por la UOCRA estaba Burgos y alguien más, pero no recuerda quien.

Señaló que a las empresas viales de Bahía, que eran unas 5 (Ingeniería y Arquitectura, Carreteras 2000, Cerra y Moro, Coince, Obras Abedul), y empresas viales que trabajaban en la jurisdicción, como CV1, Vial Agro y alguna más, se les hizo un planteo por el gremio que había que hacer determinadas obras en el predio de la ruta vieja, obras que para algunas empresas chicas eran significativas, porque estaban haciendo obras de poco monto y era muy injusto dividir en partes iguales un esfuerzo de tal magnitud, que ellos sostenían que podían colaborar con una cuota parte según las posibilidades de las empresas. Que para esto hubo muchas reuniones y les dijeron que había que hacerlo y no tuvieron más opción que hacerlo, sino iba a llegar a una situación conflictiva y si lo que querían era colaborar con los obreros de la construcción, y por eso accedieron, y ahí las empresas más chicas que eran las de Bahía tuvieron que hacerse cargo de eso.

Comentó que sabían de la obra que se estaba haciendo en ese predio, que ellos les mostraban el proyecto que estaban ejecutando, que era algo que veían beneficioso para los obreros, incluso los de su empresa, y eso es real. Que las empresas locales afrontaron la ejecución, hizo un aporte alguna empresa de afuera, pero mayormente lo hicieron las 5 locales. Que la obra consistía en unos 2500 metros cuadrado de pavimento, movimiento de suelo, cordones cuneta, curvas, como si hoy hubiese que

hacer 3 cuadras en la ciudad, que estos son números importantes, no era algo que tuviesen previsto como empresa.

Expuso que por ese tiempo había poco trabajo, las empresas padecían esa situación y como su empresa tiene personal estable y si no hay trabajo les dan tareas menores, para no despedir gente, es que estaban haciendo un esfuerzo para mantener su personal, cuestión que le plantearon a la UOCRA y por eso les decían que no podían hacerse cargo de tamaña inversión, que querían colaborar pero a largo tiempo, y tras eso les dieron un ultimátum que ese trabajo tenía que estar terminado para tal fecha, dentro de unos 60 días y ahí se puso tenso el asunto, no tuvieron muchas opciones, terminaron haciendo la obra para mantener una relación, pero fue tenso.

Contó que estuvo en dos reuniones y el gerente de una vial de Bahía, Gustavo Evangelista, fue como designado para coordinar la relación entre todas las empresas con la UOCRA para poder llevar a buen puerto esto. Que cuando se los convocó a reunión en la UOCRA estaba Evangelista, el de Obras Abedul, Cerra y Moro y de la UOCRA el señor Burgos y no recuerda si otros más, y esa fue la última reunión donde se les impuso una fecha cierta de terminación y había que hacerlo. Que esta fue la última reunión, que antes gente de la UOCRA y Evangelista venían gestionando y hablando sobre el particular durante algún tiempo, pero que del momento del ultimátum lo recuerda a Burgos, que lo recuerda a él como

el vocero, capaz que había otro integrante de la UOCRA que hoy se le escapa.

Consultado por el señor Fiscal sobre pedidos de dinero, contestó que a muchas empresas les pedían colaboración mensual, y como era razonable para hacer frente a viáticos y combustibles para movilizarse o hacerse cargo de bolsa de alimentos para obreros sin trabajo, ellos ponían como una cuota de aporte pero que nunca fue significativa y era bastante habitual. Que por eso colaboraban con presentes y regalos para el día del niño o para hacer una bolsa para las fiestas o para cuando empezaban las clases para chicos de padres que no tenían trabajo. Que estas solicitudes las hacían habitualmente de la UOCRA y no veían con problema esas colaboraciones y rondaban el equivalente a una quincena de un operario de la construcción por mes, esto era lo que significaban estas cuotas. Pero luego tuvieron un inconveniente en algún momento que le tocó participar en negociación en una oportunidad que conformaron una ute entre cuatro empresas bahienses en una obra de bacheo para vialidad de la provincia de Buenos Aires, y a la empresa que administraba se le solicitó que se haga un aporte significativo mensual, sin entender el declarante el por qué, dado que las empresas tenían la misma gente, no era una obra importante o extraordinaria, ni había motivos. Que se realizó una reunión de la ute y lo comisionaron para que explicara que les parecía fuera de lugar y no correspondía, que en ese momento les pedían 80.000 pesos por mes a esa

ute, integrada por 4 viales de Bahía (Cerra y Moro, Coince, Abedul y Carreteras 2000), que no eran nuevas empresas y además estaban ya colaborando en forma individual cada empresa.

Contó que se reunió con Burgos y le explicó esta situación y que él le dijo que entendía pero que había que hacer la colaboración. Que ahí el declarante le dijo que quería reunirse con Monteros, y así lo hicieron los tres y luego de explicaciones terminaron acordando un número de 40.000 pesos, 10.000 por cada empresa que se sumaba a lo que además colaboraban cada una por su cuenta. Que no le encontraban explicación a esto, pero esta fue una de las primeras veces que vivieron algo muy violento y fuera de lugar, pero que igual tuvieron que aceptar.

Reiteró que la gente de la UOCRA no entendía del todo que esto no era una nueva empresa, que estas personas les decían que era algo de magnitud la obra y eso no era así, eran los mismos equipos y operarios, y las mismas empresas, pero que ellos insistían en que era algo aparte.

Comentó que estos costos eran significativos para cada empresa. Que era muy complejo administrativamente sacar esos fondos, la contabilidad se respalda en facturas y certificados de obra y esto había que sacarlo como retiro de socios y era complejo.

Que la obra que llevaban adelante era de bacheo en rutas provinciales dentro del distrito de vialidad provincial y duró un plazo de entre

7 a 9 meses, habiéndose realizado los pagos a través de su persona una vez por mes, que el declarante se ocupaba de gestionar el aporte de cada empresa y luego se lo llevaba a la UOCRA al señor Burgos. Que no recuerda exactamente cuantos meses pagaron, que lo tienen seguramente documentados pero habrán sido la cantidad de meses que duró la obra. Que cuando fue a declarar a la Fiscalía llevó un detalle, pero no lo recuerda en este momento.

Mencionó que su empresa realizó también por esa época una obra de desagües en la localidad de Pedro Luro, estando encargado el ingeniero Salguero, siendo una obra contratada por hidráulica provincial. Que conflicto no hubo, pero sí dos exigencias que los sorprendieron, por un lado que tenían que contratar personal de una bolsa de trabajo y su empresa dudaba si estaban calificados o no, por lo que acordaron tomar en forma parcial, no a todos los operarios porque había equipos que no podía manejar cualquiera. Que por eso tuvieron que tomar gente de una bolsa de trabajo, que no les gustó la idea al principio pero luego no tuvieron conflicto gremial ni laboral con esos operarios a pesar de que se les impuso ese personal. Por otro lado se les pidió una asignación porque era un contrato extraordinario y se les pidió aporte monetario de un dinero, y luego de negociación quedó de 10.000 mensuales mientras transcurra el plazo de obra. Que de eso dio un detalle cuando hizo la declaración en fiscalía.

Que estos 10.000 pesos los pidió Molina, que era el que tenía diálogo en temas gremiales en esa obra con Salguero, que no habló con el declarante, que el manejo lo tuvo Salguero, pero él estaba al tanto. Que el pago de los 10.000 mensuales se los alcanzaba Salguero en persona al señor Molina, pero no sabe en qué lugar.

Agregó que esto era un monto significativo por esa época y además era lo mismo que antes comentó, dado que era complicado manejar dinero en efectivo y era todo engorroso.

Le señaló al señor Fiscal ante sus consultas que a Mario Gonzalez lo conoce de la UOCRA. Que tiene un delegado de obra en la empresa y desde la comisión de la UOCRA habían instrumentado que el vocero interlocutor que hablaba con los delegados y el personal técnico era el señor Gonzalez, para los reclamos, planteos o situaciones que corregir de obra, entrega de ropa y otras cosas.

Aseveró que era Gonzalez quien retiraba la suma de colaboración que mencionó al principio, y que era habitual y se correspondía con una quincena más o menos de un operario, que lo retiraba él de la empresa dado que era el nexo que seguramente lo llevaría a la UOCRA. Que el declarante no se ocupaba de eso, dado que la administración la llevaba su socio. Que esos pagos eran una colaboración y el argumento que ellos decían era que se utilizaba para viáticos, combustible o ayuda a algún desocupado, que esto no era algo institucional. Que esto era lo que ellos

decían como argumento, pero no les consta que hacían con ese dinero. Que estas sumas de dinero se pagaron muchísimos años.

Acotó que no fue Gonzalez quien lo solicitó, que fue en la época que Humberto Monteros estaba en forma presencial en la UOCRA y les hizo estas solicitudes que luego permanecieron en el tiempo.

Al señor defensor, Dr. Jara, le contestó que en su momento le explicaron a la gente de la UOCRA el margen de ganancia por cada obra y también le dijeron que era una situación irregular lo que significaban estos pedidos.

Que en una licitación pública donde no está establecido por pliego y les dicen que van a aplicar un convenio en el que van a pedir 20 por ciento por arriba de lo acordado, y a otra la llaman y le dicen el 25, y a la otra el 30, y ese llamado invoca a una institución gremial, torna a esto en una situación irregular porque puede hacer que uno gane o pierda una obra, si es así esto también es irregular.

Le explicó al letrado que en una obra vial la parte proporcional de mano de obra es de aproximadamente el 25 por ciento del monto contractual y si a eso se lo incrementa en un 25 o 30 por ciento lo lleva a un número que no se puede afrontar. Que el margen de utilidad va entre 8 y 10 por ciento en la obra, por lo que si se distorsiona ese número, no hay de donde sacarlo.

Le contestó al Dr. Jara que no podían poner un margen de ganancia del 50 por ciento porque no ganarían ninguna obra; que hace 30 años que se dedica a esto, y a veces van con el 4 o 5 por ciento de utilidad, dado que es una cuestión de oferta y demanda.

Señaló que las leyes de redeterminación de precios ajustan el 90 por ciento del contrato aproximadamente, porque no lo hacen en las utilidades que habitualmente son hasta el 10 por ciento.

Agregó que los premios de fin de año, comidas cuando no corresponde que las den, transporte a obras cuando no es habitual o cuando los obreros se pueden manejar particularmente, son todos gastos que hacen inviable y desfasan los números de la cotización de la obra.

Reiteró que se debe diferenciar obra pública con la privada, que en su empresa nunca se opusieron a si querían mejorar el salario porque ellos decían que los convenios eran un piso y no un techo, pero que desde su empresa les contestaban que tenían que tener contratos previstos para pagar esas diferencias, si al cotizar en la obra pública no lo tienen previsto no lo pueden afrontar.

Señaló que todo esto arrancó en obras privadas, donde su empresa habitualmente no participa, pero por sus colegas sabía que cuando se hacían paradas de planta en el polo petroquímico era habitual que se abonase el salario caído y que además existiesen valores distintos en los

convenios de las empresas que trabajan en eso. Que hay una cámara específica vinculada a las empresas que trabajan en ese sector donde se establecían valores que iban en más en 20 por ciento en el salario, pero que esto ya estaba en los contratos y los comitentes lo sabían y se hacían cargo.

Señaló que cuando comenzaron los parques eólicos se pretendió por la UOCRA hacer lo mismo, pero las empresas que habían agarrado esas obras no tenían previsto eso, por eso se generaron muchos conflictos, las empresas se quejaban en la cámara, comentaban que tenían la obras paradas.

Reiteró que el 35 por ciento de aumento no lo pactaron, no lo firmaron, su empresa Coince nunca firmó y no sufrieron represalias por no firmar.

Le contestó al Dr. Jara que los 4.000 pesos que pagaba eran retiro de dividendos. Que no maneja la parte contable pero es un retiro de los directores o los socios de la empresa para hacer frente a esto. Que debe haber maneras de visualizarlo, pero no maneja la parte contable administrativa. Que se les pedía una colaboración y aducían esos argumentos que antes indicó, y lo habían “aceptado, póngale el término que quiera” –así sus dichos-, y eso se registraba igual como ganancia, salidas de cajas chicas en las empresas que tienen que ver con esas cosas. Son fondos que no salen ni facturados, ni con un concepto específico, por lo que todos esos pagos se consignaban como ganancias, porque no se tiene

forma de justificar un gasto al no haber factura, y eso además tributa ganancias ya que así se lo entiende impositivamente. Que no pagaron nada más sin documentación respaldatoria.

Reiteró que desde lo institucional hacían énfasis para lograr más fuentes de trabajo y estaban saliendo de una crisis con una desocupación muy grande, había gente haciendo cola en la empresa pidiendo trabajo que no tenían. Cuando empezó alguna licitación pasaba que se generaban conflictos en obras que se paraban y en las reuniones con la UOCRA se apuntaba a eso, al sentido común, que las obras se hagan y se concreten.

En el mismo sentido valoro el testimonio del señor Manuel Carcereny quien dijo que conoce a los señores Molina, Burgos, Carrillo, Cabrera y Aranda, por su actividad como Ingeniero Civil de la empresa Carcereny Construcciones, siendo el señor Gustavo Carcereny su padre.

Expresó que por el año 2015 tenían varias obras en ejecución, a saber en Coronel Suarez dos jardines y una escuela, en Saavedra un jardín, en Buratovich una escuela técnica, en Carhue una red cloacal, en Pedro Luro un jardín, una escuela técnica y varias obras de infraestructura en Bahía Blanca.

Relató que estando en una obra en Suarez, “…cae esta gente, 4 o 5 personas grandotes, te piden documentación y sin revisar para ellos

está mal, y esto no es así; te increpan, te tratan con metodología de apriete y no diálogo, te piden documentación para presentar en el gremio que luego no les importa, que no les importan los derechos de los trabajadores…". Que estas personas dependen de Bahía Blanca, pero había una seccional en Suarez y otra en Luro, pero pertenece todo a Bahía Blanca. Que en Suarez estaba Aníbal Aranda que era el delegado, que Hoyos era el sub delegado y que también estaba siempre Cabrera, que ellos eran los que llama soldaditos de Burgos que manejaba la zona de Suarez y alrededores.

Que le llevaban la documentación al gremio en Bahía Blanca, pero eso era una entrada para hablar de otra cosa, para pedir dinero para poder seguir trabajando, los papeles no les importaban a nadie. Que él fue a algunas reuniones, aunque generalmente ha ido su padre, se reunía con Molina y con Burgos en la sede de la UOCRA y tanto Burgos como Molina le pedían dinero. Que la zona de Suarez la manejaba Burgos, la del sur, Luro y Buratovich la manejaba Molina.

Apuntó que lo ha acompañado a su padre a llevar la documentación, luego de charlar se pasaba a lo importante para ellos "…nos pedían una extorsión para poder seguir trabajando, si no cumple con esas cosas corre el riesgo de que lo apreten, que le prendan fuego un vehículo o una máquina, no hay diálogo con esa gente…". Dijo que nunca estuvo en reunión con Burgos y Molina a la vez, que nunca estuvo con los dos juntos a la vez.

Refirió que "…el pedido de dinero se materializaba escribiendo en un papel, creo que tenían miedo de que los estuviésemos grabando, pero no nos animábamos a eso porque el ambiente al entrar al gremio era tremendo, había gente afuera y luego adentro para aflojarlo a uno. Que luego pasás a una oficina donde ellos escriben en un papel la suma, lo sé porque me la comentó mi padre…" –así sus palabras-. Reiteró que el ambiente era tremendo, que lo del papel se lo contó su padre. Que de Molina también le dijo. Que Burgos le pidió 10 mil por obra en Suarez, de aquella época el dinero no de ahora –acotó-, y era muchísimo dinero, que les costaba mucho juntarlo, no había recibo ni justificación de esto y para el estado era plata que ellos se ponían en el bolsillo y de la cual tenían que pagar impuestos.

Mencionó que en la obra de Carhué le pidió primero 50 y luego 40 mil porque era imposible. Que no se arreglaba nada, te lo imponían, que en esa reunión no estuvo, que se lo contó su papá.

Que si no pagabas no podías trabajar, te hacían asambleas y te paraban la obra. Que se pagó durante el tiempo que duraron las obras.

Señaló que en las obras de Buratovich y Luro era con Molina, que se juntaba con "Peter" Martinez que era el cabecilla de Molina en Luro. Que en una oportunidad les paró un camión tres noches en una obra cuando le habían puesto fin porque no cobraban.

Refirió que era Molina el que manejaba ahí, y que "…yo creo que Molina estaba en concordancia con Burgos, porque cuando tuvimos problemas en Suarez luego los problemas se trasladaron a Luro. Que Molina pedía 10 mil por obra por el transcurso del tiempo que estuvimos trabajando…".

Que Molina un par de veces ha ido hasta la oficina y se reunían también en la UOCRA. Que los 10 mil pesos por mes era por el tiempo de duración de la obra. Pasaban por la oficina a cobrar, Molina generalmente iba él en un auto Toyota Corolla 0 km, que a veces estaba el declarante y le entregaba el sobre y otras se lo daba la secretaria. Que Burgos ha ido alguna vez, pero generalmente mandaba a alguien. Que Carrillo y Paiz han ido a buscar, los tiene de cara porque iban a las obras a hacer los aprietes.

Que entrado el mes ya preguntaban si los legajos o planillas ya estaban, refiriéndose de esa forma a ese pago que estaban obligados a hacer.

Que Mariela Gonzalez era la empleada que estaba en la oficina. Que Molina ha ido a buscar alguna cuota o charlar sobre esto a la oficina. Que a ellos les interesaba que la obra continúe para poder seguir cobrando su cuotita.

Expresó que tuvieron que contratar en Suarez el baño Acqua, que Cabrera le entregó una tarjetita y le dijo "…acá están los baños…". Que el servicio era bastante malo. Que no le obligaron a contratar otro servicio.

Contó que acompañó a la Fiscalía los mails reclamando por la limpieza de los baños. Que la gente se quejaba, pero el delegado que era Aníbal Aranda no decía ni hacía nada. Que Aranda respondía a Burgos.

Que Cabrera no era empleado pero estaba presente en los momentos de inicio de las obras, y ahí le dio la tarjeta de los baños. Que luego fue designado Aranda y Hoyos como delegados, en teoría se hizo una votación, pero no estuvieron presentes, ni el encargado de obra que era un chico de Suarez, lo mismo que cuando hacían otro tipo de asambleas, no los dejaban participar.

Refirió que una vez lo citó Aranda en la delegación de Suarez y fue porque Aranda no iba a la obra, solo aparecía para hacer alguna asamblea, a trabajar no se presentaban. Que lo citó y fue a la delegación de Suarez, fue al entrepiso y estaba Aranda solo y le pidió un extra arriba de la quincena para no tener problemas, que le dijo "…vamos a arreglar algo más para no tener problemas en los trabajos, era un extra que tenía que agregar en su quincena…" –esas sus palabras-.

Contó que al Ministerio de Trabajo en Suarez fue muchas veces, que tenían 35 empleados, siempre pueden surgir problemas, si no

hace bien el trabajo se le paga y lo echa y se reemplaza por otro. Generalmente se le avisaba al delegado y se mandaba el telegrama y cada vez que se despedía a alguien se paraban las tres obras, se hacían asambleas y lo citaban en el Ministerio de Trabajo, luego llegaba Aranda y Burgos y lo hacían esperar, llegaba Burgos, lo atendía Freizer, charlaban ellos y luego lo hacían pasar a él. Que esa reunión terminaba con que tenía que volver a tomar al empleado, pagar todos los jornales caídos y pagar a todos los que estaban en asamblea sin trabajar. El del Ministerio sólo anotaba lo que decía Burgos, no se podía hacer otra cosa, no se puede dialogar con esta gente, es mafia, esto pasó después también.

Mencionó que a fines del 2.015 no se cobraban los certificados de obra, por lo que lo llamó a Burgos y le dijo que tenían problemas con los certificados de obra, que tenían que reducir el personal porque no daban los números y la respuesta de él fue que si sacaba gente iba a tener kilombo, iba a tener problemas y le cortó el teléfono. Que luego tuvo que reducir al personal porque se paró la obra, tuvo que ir al Ministerio y le fijaron 45 días de conciliación obligatoria en los que tuvo que pagar los sueldos.

Expresó que cuando "…yo digo que la pasamos mal, fue así, la pasamos muy mal. Aranda y Burgos dijeron que iban a pasar las fiestas con mi familia, son gente que amenaza, eso te da un poco de miedo. Nos hicieron piquete en la oficina por 5 días…" –sus términos-.

Indicó que luego quedaron paralizadas las obras por falta de pago del estado.

En cuanto al partido de Villarino dijo que Martinez le pedía que contrate a gente de la UOCRA, que ellos en Luro tenían un 70 por ciento de gente que era de la localidad y en Buratovich casi el 100 por 100 era de ahí, pero Peter Martínez le pedía que contrate otra gente de Luro y Buratovich, y respondió contratando gente de esos lugares.

Al doctor Jara le contestó que no lo amenazaron en la sede de la UOCRA. Que con Molina "…tuve reuniones, pero no fui amenazado, ni fui agredido, fui extorsionado, nada más…". Que en la zona de Molina no le pidieron la contratación de algún servicio. Que Martínez le pidió la contratación de los baños químicos del lugar, pero no hubo un apriete ahí.

Señaló que el dinero que entregaban era un retiro en efectivo. Era como retiro de la empresa y su padre manejaba eso. Que le ha entregado el sobre con ese dinero a Molina cuando ha estado en la oficina, dos o tres veces, y a veces estaba Mariela. Que esos pedidos de dinero los arregló Molina con su padre, a veces estuvo en esas reuniones. Que si no se le daba el dinero no se podía continuar con la obra, venían los paros y las asambleas, que esa era la amenaza. Que no le dijo Molina para qué era el dinero, no sabe para qué ellos lo usaban.

Reiteró que la parálisis de las obras fue por falta de cobro de certificados, que en el 2.015 se paralizó y en el 2016/2017 retomaron la obra de Burato y luego la de Luro. Que ahí seguía presente la extorsión, pero no ha tenido conflictos.

Indicó que el último conflicto grande, del cual hay fotos, fue cuando les cruzaron dos autos blancos, y esa foto luego la tenía como un cuadrito colgada en la pared, como una suerte de trofeo, orgullosos de eso. Que Martinez le dijo "…vos de acá no te vas…", y eran mandados por Molina. Que en esa oportunidad se habían mandado los telegramas y la obra no seguía, que él entendía que querían continuar con la obra para poder seguir cobrando. Que los autos se los cruzaron delante de un camión en el cual querían sacar material y herramientas de la empresa, la obra se cerraba y no iban a dejar nada. Que no recuerda si hablaron con Molina en ese momento y el camión lo lograron sacar tres días después. Que cree que hubo un arreglo de su padre con Molina, que se pagó a la gente lo que correspondía.

Refirió que los 10 mil pesos en salarios no recuerda a cuanto equivalía, pero que se puede averiguar observando los recibos de sueldo. Que el pedido de tomar gente fue cuando se inicia la obra, que en toda obra hay que tomar un 30/35 por ciento de gente de la zona, eso está en los pliegos, y ellos siempre están por encima de ese porcentaje.

Comentó que "…pedían dinero decían para mantener la paz social, en mi opinión era para que nosotros podamos trabajar. No le pregunté al que decía paz social qué significaba, pero me han dicho para no tener problemas, los problemas eran las asambleas, no avanzar con la obra…". Que cuando van de la UOCRA siempre van dos autos, 4/5 personas en cada uno y les dicen muchachos paren de trabajar y la gente tiene miedo; dejan de trabajar y hacen una asamblea. Que a él no lo dejan entrar y la obra se paraliza.

Señaló que con los salarios se han atrasado dos o tres días y le han avisado al gremio, que esto les ha ocurrido cuando no les pagaban en tiempo los certificados, que a veces han tenido problemas y a veces no. Que cuando tenían problemas era que la gente hacía asamblea y no trabajaba, y esto se resolvía cuando se pagaba a los 2 o 3 días. Que cuando se terminó de pagar a los empleados, se terminó la asamblea y se continuó la obra. Que no le pidieron más nada. Si Molina cobraba su cuota mensual estaba todo bien. Que no le dijo Molina que fuera para él, no sabe (volvió a indicar) para qué era el dinero.

Refirió que él se recibió en el año 2012 y empezó a trabajar en el 2013, que siempre se tuvo problemas con la UOCRA, siempre existieron este tipo de extorsiones. Que este grupo trabaja como mafia, y sólo no se puede denunciar. En Suarez uno denunció solo y le fue muy mal, gracias a Dios tuvieron el apoyo político, se juntaron en la Cámara y por eso se anima

a venir. Que en los medios salió la gobernadora Vidal y el intendente, hicieron una denuncia pública, y a partir de eso, ellos que pertenecían a la Cámara, empezaron a ir uno por uno a contar lo que pasaba. Que uno de los determinantes de la denuncia fue el apoyo de la gobernadora Vidal en los medios. Que no llamó a nadie para que se sume a esta denuncia.

Contestó al doctor Jara que la conoce a Julia Pugnanoni, que le comentó por teléfono que iba a hacer la denuncia, le contó lo que iba a hacer, que le compró hormigón en algunas oportunidades. Que no sabe si ella hizo algo, que no sabe si es víctima de esto o no.

Adiciono a estas declaraciones lo que contó en la audiencia de debate el señor Héctor Orlando Alé Herrera, quien comenzó señalando que entre los acusados conoce al señor Mario Gonzalez.

Narró el testigo que se desempeñó en Bahía Blanca entre el 2.017 al 2019, como jefe administrativo y apoderado de la ute Panedile-Tecma, dedicada a la construcción, la cual estaba ejecutando una obra de tratamiento de líquidos cloacales, siendo el comitente la empresa ABSA.

Refirió que tenían una relación de gremio empresa, que ellos manejaban lo que es la bolsa de empleados que iban a tener que contratar en la obra.

Indicó que de la UOCRA trataba con Pablo Gutierrez o Mario Gonzalez.

Que en cuanto a salarios en la empresa se manejaban por el convenio nacional más un acuerdo impuesto por UOCRA Bahía Blanca por sobre el salario, un aumento del 20 por ciento. Mencionó que dijo “impuesto” porque normalmente no firmaban acuerdos por encima del convenio, pero acá era una de las condiciones con las cuales venían a Bahía Blanca.

Refirió que no se podían continuar los trabajos si no se firmaba el convenio; y fue Humberto Monteros el que impuso ese aumento. Que en su caso trataba con Pablo y Mario, pero todas las órdenes eran impuestas por Monteros, ellos les trasladaban cual era la petición.

Que ese 20 por ciento se firmó el acuerdo por un año y luego se volvía a negociar si se incrementaba o seguía el mismo porcentaje. Que por el tema de la firma del acuerdo no pararon la obra, se aceptó y tuvieron que firmarlo, pero por otros conflictos han tenido asambleas y demás, se frenaba la obra directamente.

Señaló que a través de los delegados se bajaba línea y se paraba la obra en caso de que la empresa no aceptara lo que ellos pedían.

Dijo que en la obra que él representaba no hubo otro pedido, pero no sabe a nivel directivos de la empresa. Que requerimiento dinerario sabe que le pidieron a otro representante y consistían en un porcentaje de la

obra, pero desconoce cuánto era. Que eso se abonó a través de facturaciones, les daban los proveedores a los cuales deberían transferirles por diversos servicios o trabajos. Que tenían un par de razones sociales que emitían la facturación, como Flor de Lirio, y había que transferirle a ellos, a una casa de catering y una casa de elementos de seguridad, cree que de nombre SGT. Que era su tarea cancelar esas facturas, que en realidad eran para justificar las salidas de dinero, porque la empresa no puede emitir dinero si no existe un comprobante. Que estas empresas emitían facturas y se pagaban.

Apuntó que las empresas pertenecían a Humberto Monteros. Que a la empresa de catering Savalla también se le pagó. Que ellos recibían la directiva de transferir y como los tenían dados de alto como proveedores, cuando los autorizaban transferían a esas cuentas.

Expuso que como en la empresa tenían que contratar el traslado de personal, comida, baños químicos y no recuerda si algo más, desde la UOCRA les indicaron cuales eran los proveedores que iban a ejecutar esos servicios, que no se podía contratar a otros.

Dijo que no se podía llamar a licitación y por eso no era negociable el precio por lo que se contrataba.

Que les impusieron a Flor de Lirio para el transporte. Que esta empresa ya estaba contratada cuando él arribó a la obra, pero sabe que siempre fue bajo la directiva de Humberto Monteros.

Que de la empresa de baños químicos cree que el propietario era Burgos, dado que el declarante tenía contacto con las hijas del mencionado.

En cuanto a la empresa de catering Savalla refirió que se contactaba con el señor Savalla, que era quien les facturaba. Apuntó que desconoce si Savalla sabía que su empresa era impuesta por la UOCRA. Reiteró que él llegó un año después a la obra y estos servicios ya estaban contratados.

Le indicó al Fiscal, ante sus consultas, que tenían la obligación de sí o sí manejarse con la bolsa de empleados de la UOCRA; que el gremio imponía la contratación, y el declarante siempre conversaba a través de Pablo o Mario.

Relató que no tuvieron inconvenientes con despidos de personal, porque tomaban a los que ellos les decían. Que el pedido era ahí, sobre a quienes debían tomar.

Refirió que a la sede de la MUOCRA lo citaron a una reunión cuando fue la intervención del gremio de la UOCRA; y que les dijeron que era para seguir el lineamiento de Humberto Monteros.

Que fue solo a la sede de la MUOCRA y ahí estaban Pablo Gutierrez, Mario Gonzalez y Sabino Ríos, se reunió con ellos y le dijeron que debían seguir el lineamiento de la agrupación que respondía a Humberto Monteros y que la bolsa de trabajo la iban a seguir manejando ellos, que no debían depender del gremio intervenido, y que eso lo dijo Sabino Ríos.

Indicó que les informó que no se pueden manejar como empresa bajo las condiciones de una agrupación, que ellos interactúan con el gremio, por lo que les dijeron que tenían que manejarse con el gremio intervenido, no con una agrupación. Que la respuesta de Sabino Ríos fue que iba a estar a cargo de la agrupación, y exigió no de una manera muy amable, que el lineamiento bajaba desde ellos sí o sí, que “se calentó e impuso eso” –así sus palabras-, y que se lo traslade al comité directivo de la empresa.

Manifestó que el dinero lo transferían desde casa central, que se transfería de la cuenta de la ute a los proveedores.

Dijo que el primer problema fue cuando arrestan a Humberto Monteros, que ese día tomaron la obra y no podía entrar ni salir gente de la misma, por lo que se expuso esa situación en el Ministerio porque estaban en pleno conflicto.

Indicó que el presidente de la empresa Panedile era Dragoneti. Que no sabe si alguien de la UOCRA lo llamó para pedirle dinero o por la

contratación de las empresas. Que SGT era una empresa de venta de elementos de protección personal.

Relató que los servicios los tuvieron contratados hasta el día del arresto de Humberto Monteros, luego llamaron a licitación en esos tres rubros y siguieron con otras empresas.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que asistió a varios asados con gente de la UOCRA, que no recuerda si en la casa de Mario puntualmente; y que ha compartido partidos de futbol con la gente de la UOCRA.

Que a nivel personal de Mario Gonzalez no recibió ninguna exigencia; que venía bajada de línea de Humberto Monteros, porque ellos le decían que no hacían nada que no lo dispusiese Monteros.

Refirió que siempre la exigencia fue de tomar gente de la bolsa de trabajo y a los proveedores a los que se debían dirigir.

Expresó que no le dijo Gonzalez que le ocurriría algo si no tomaba gente de esa bolsa, porque siempre lo que ellos les dijeron lo hicieron. Que no le dijo Mario que iba a tener consecuencias si no tomaba gente de la bolsa.

Que sí Monteros cuando fue a la obra les dijo que si no tomaban gente de la bolsa les paraban la obra.

Al señor Agente Fiscal le contestó que esa vez que fue Monteros a la obra sólo se refirió a eso de la toma del personal, esa vez Monteros estaba acompañado de otras personas pero no las conoce.

Refirió que una vez les pidieron comprar materiales y dejarlos en la sede de la UOCRA por indicación de Monteros, o en su casa. Que les hacían llegar un listado de materiales a la obra, se lo daban los delegados a esos listados, ellos lo compraban en Codimat y lo dejaban en la casa de Humberto Monteros de la cual no recuerda la dirección. Aclaró que el transporte lo hacía Codimat. Que en su momento compraron mercaderías por cerca de 400.000 pesos. Que no recuerda bien el monto, pero cree que había que comprar cerca de un millón de pesos en materiales.

Sostuvo que en el caso de la empresa Flor de Lirio hablaba con la esposa de Monteros, y que si no recuerda mal había una persona que atendía la parte de logística, pero todo se manejaba mucho por mail.

Que Lucía Sanabria es la esposa, que sólo tenía contacto telefónico por el tema de SGT y a veces de transporte, y han cruzado un par de whatsapp por el tema de SGT.

Refirió que presentó en la fiscalía el registro de esas comunicaciones y documentación que acreditaba los pagos, y la copia de las facturas porque las tenían identificadas.

Contestó que no recuerda que le hayan hecho una nota de crédito luego de la detención de Monteros.

Ante una nueva consulta del doctor Gomez Talamoni indicó que cuando asumió la intervención de la UOCRA siguieron con los mismos acuerdos.

Con relación a estos hechos también tengo en consideración lo expuesto por el testigo Martín Dario Sanchez quien contó que es Ingeniero y empresario, socio de Karpa, dedicada a obras de infraestructura en todo el país. Señaló que a Paiz lo conoció en el sindicado, a donde fueron citados por una obra que empezaba en Galván para la empresa Petrobras, una obra de cambio de ductos hacia el sitio 7; que ahí se hizo presente gente del sindicato y les dijo que llevaran documentación a la sede, a donde fueron con la documentación y ahí conoció a Paiz.

Que les dejaron la notificación en la obra, era documentación laboral referida a los empleados, la juntaron y la llevaron al sindicato en calle Saavedra sede de la UOCRA. Dijo que ahí siempre hay gente afuera, que preguntó por Walter Paiz y estaba en su oficina con más gente que hizo salir y lo hizo pasar a él, observando un escritorio grande en el medio y fotos en las paredes. Que Paiz le comentó que para poder seguir con la obra ellos pedían un 3 por ciento del monto de obra, lo cual es muchísimo, dado que a veces ellos no ganan un 3 por ciento en la obra, que esto depende de muchos factores, y por eso ese pedido era imposible de cumplir; que le dijo

que no podía y Paiz le dijo que lo iba a charlar con el superior, porque eso no era para él sino para su superior, que el testigo supone que era Monteros. Que Paiz le dijo que volviese en otro momento y así fue varias veces hasta que le pidió entregar 50 mil pesos en 5 cuotas mensuales, haciendo un total de 250 mil, por el tiempo que duró la obra, que más o menos fue ese tiempo la parte principal.

Refirió que estos pagos se los llevaba a la sede de la UOCRA, que ha ido él un par de veces y se lo dejó a Walter Paiz, y otras veces lo pasaron a buscar por la empresa, que ahí él lo dejaba en portería y lo pasaba a retirar alguien, no recuerda quien.

Dijo que los 250.000 era una suma muy importante, que esto fue en el 2016 o 2017 y pagó porque sino no podían hacer la obra, que “la versión era pagar o no hacer la obra”, y evaluaron muy seriamente no hacer la obra, porque les costaba más a ellos hacer la obra por este pedido que por lo que iban a ganar, dado que también había un pedido de descuento de la empresa Petrobrás y eran muchas cosas a evaluar.

Mencionó que pagó los 5 meses y no tuvo inconvenientes. Que no le hicieron planteo por la situación de los empleados, solo tuvo algún reclamo del personal por falta de hielo y cosas menores de ese tipo que se subsanan inmediatamente.

Que la documentación laboral la tomó Walter Paiz y no comentó nada, no recordando si la revisó.

Indicó que le dieron algo de cemento para el predio que estaban construyendo. Que esto se lo pidió Walter, y era un palet o menos que les pidió el mencionado, era un sobrante y lo fueron a retirar de la empresa algo así como De la Torre, que Walter Paiz le dijo por mensaje de texto que iba a ir este señor a retirarlo.

Exhibido por el señor Fiscal el legajo J, hojas 10 y 8, señaló que los dos últimos mensajes se los mandó Walter y la respuesta es suya -hoja 10-, y que el último mensaje de la hoja 8 él no estaba en la empresa, que él no vio a las personas que allí se mencionan, que el mensaje dice están en la empresa los de la contra, sacalos cagando, no les des el listado de personal. Que el mensaje es para él, pero el declarante no estaba en la empresa en ese momento.

Expresó que supone que las bolsas fueron para el centro recreativo, pero él no lo vio al destino que le dieron.

Al doctor Jara le respondió que el móvil sanitario de la UOCRA estuvo en la obra, que él no estaba en ese momento pero le pidieron un día para llevar el móvil, que no sabe qué hacía.

Al doctor Zorzano le indicó que el pago por supuesto no era voluntario, que había una ecuación económica, eso no lo esperaban, y lo pagó porque sino no podía continuar trabajando.

A la doctora Sager le contestó que Paiz no lo amenazó, que fue cordial el trato con Paiz.

Al doctor Martinez le dijo que esta reunión ocurrió con la obra recién iniciada, que no había tenido conflictos y luego no los tuvo. Que Walter se lo decía todo cordialmente, los tratos eran cordiales, pero el contenido no, decían que paraban la obra.

Sobre estos hechos también declaró como prueba propuesta por el señor Fiscal el testigo Víctor Manuel Allende quien aportó información que permite extraer elementos para reconstruir el hecho analizado, ya que señaló que a Burgos lo conoce porque representaba a la UOCRA, porque vive en Suarez y por su actividad de constructor contratista.

Comenzó relatando que con Burgos aparece en una obra mucho antes de que ellos reaccionen, que sabían por eso del accionar de ellos y luego, cuando se meten en la obra de su hijo, que eso sobrepasa la tranquilidad de uno. Que decidieron ver de qué manera frenar el atropello que tenían de parte de ellos.

Contó que se presentan en la obra de su hijo en pueblo San José exigiéndole cosas que era imposible hacer en poco tiempo; pero que

no les interesaba eso, sino pedir a cambio un dinero para no exigir lo que realmente tenían que cumplir, era dinero a cambio de no denunciar la falta.

Que su hijo dijo que esto era insostenible, siempre les pedían dinero a cambio, aunque nunca le pagaron nada, y les habían hecho una manifestación en la vereda de la obra.

Que a su hijo le habían dicho "…te pido casco blanco hoy y si quiero mañana te pido casco amarillo…", y eso era como un apriete a cambio de dinero.

Expresó que por esto ellos hicieron pública la denuncia y luego de eso convocaron al gremio de la construcción para ver qué iban a seguir haciendo, dado que la UOCRA apretaba a los constructores. Que se reunieron en el Concejo Deliberante y se decidió hacer una denuncia penal, que les aconsejaron que había que hacer una denuncia penal y la hicieron en la Ayudantía de Coronel Suarez.

Recordó que al Concejo fueron más de 100 personas, todo el gremio de la construcción y algunos concejales, y se quería convocar al gobierno para que ellos los apoyen. Fueron con su hijo y otros colegas del gremio de la construcción, eran varios y se notó que había mucha gente en la misma situación.

Contó que tiene una denuncia por injurias de parte de Burgos, que así reaccionó la UOCRA en base a esa denuncia pública. Que luego la

denuncia de Burgos se cayó por estos actos, fue convocado por una Jueza para desistir de la denuncia por la injuria y “le dije que no iba a desistir porque era la verdad no era una injuria lo que estaba haciendo” –así sus palabras-.

Mencionó que él lo nombraba a Burgos como el que iba a pedir dinero a la obra cuando faltaba algún elemento de seguridad o algún chico en blanco. No iba al empleado, iba a decirle a él.

Agregó que la primera vez que lo conoció fue a la obra y le dijo que pasara por la oficina, que estaba todo bien y en blanco, y era una obra en calle Harriet. Que luego le dijo “…mirá Víctor -él creía que había confianza porque mi hermano era secretario del sindicato municipal-…”, me dijo que había que arreglarlo de alguna manera, que para que no vaya una inspección a la obra había que ponerle plata a Darío Graf que es inspector y le pidió 500 pesos para darle a él, para que no fuese Graf a la obra. Acotó el declarante que nunca puso un peso. Que en esa oportunidad fue a la oficina de Burgos para corroborar lo que le decían los colegas, quienes contaban que también sufrían aprietes, y le decían que de acuerdo a la obra era el monto que había que pagar.

Manifestó que la UOCRA no existió en Suarez hasta que no apareció Burgos, que apareció sólo y le dijo que era un empleado de una empresa que construía un barrio llamado Islas Malvinas, que le dijo que estaba trabajando ahí y que por eso representaba a los trabajadores de la

construcción. Que antes de Burgos a la UOCRA la conoció cuando era peón de albañil, que había un representante pero luego falleció y nunca hubo otro en el gremio. Que en la UOCRA primero apareció Burgos y luego había 5 personas que eran los que los visitaban en la obra, que no era Burgos en persona quien iba, sino que eran mandados por él, en cada obra que había aparecían, y al que más conoce era Cabrera que trabajó con él de chico, y a Muñoz que era un vecino del barrio, conocido de la familia. Del resto sabe los nombres indicando Carrillo y Aranda, pero acotando que lo sabe por los colegas los nombres, que él no los conocía.

Señaló que su hijo grabó una reunión con Burgos y se la hizo escuchar. Que de esa reunión escuchó el audio y le contó que fueron porque le dijeron que tenía que arreglar el tema de la obra con él. Que su hijo quería grabarlo, que le diga cuánto dinero le estaba pidiendo para hacer la denuncia y que su hijo le dijo que sabía o sospechaba, porque le escribió en un papel 10 mil pesos a cambio de su silencio, y debe haber pensado que lo podían grabar.

Dijo que el piquete en la obra ocurrió cuando la obra se estaba por techar, que fue anterior a lo de la grabación. Acotando luego que pensando un poquito más, no sabría sinceramente si fue anterior o posterior.

Refirió que lo que sentía por su hijo fue lo que lo movilizó a hacer la denuncia. Que García lo llamó a él porque estaba la manifestación y le querían parar la obra, y ahí decidió que había que hacer algo.

Al doctor Martinez le contestó que Burgos le pidió 500 pesos la primera vez que lo conoció para darle a Darío Graf funcionario de la Secretaría de Trabajo. Que nunca le dio dinero, pero que luego lo denunciaba. Que no le pidió dinero otra vez, pero que le decía que si no arreglaba con ellos venían de la Secretaría de Trabajo para inspeccionar la obra. Que esto de Graf fue en el 2010; y en la misma obra haciendo Islas Malvinas se produce manifestación de UOCRA, llegan delegados de Bahía Blanca y ahí Burgos le dice "…vos no me alcanzaste lo que te pedí, llevámelo porque viene la gente de Bahía Blanca y se lo iban a pedir…" –así sus dichos-. Que como él le había dicho que no le iba a dar un peso, por eso no le pedía más plata.

Expresó que a la gente de la Secretaría le decía que iban a inspeccionar las obras donde no pagaban. Que lo sancionaron dos veces. Que con Monteros nunca habló, y nunca le pidió dinero.

Ante nuevas consultas del señor Fiscal indicó que Burgos le decía "…Víctor si no pagás te tengo que denunciar…", y que ahí se refería a que faltaba algo o algún empleado que no estuviese en blanco porque recién empezaba a trabajar. Que si pagaba no había denuncia, que ese era

el comentario de él. Que para que no aparezca la Secretaría de Trabajo en su obra había que pagarle a Burgos.

Al doctor Martinez le volvió a señalar que la única vez que le dijo de dinero fue los 500 pesos, pasó por segunda vez en la obra, cerca del 2010. Luego no le dijo más.

Computo con relación a estos hechos lo expuesto en la audiencia de debate por el señor Fernando Ariel Scrho, quien contó que trabaja en obras en Suarez como albañil desde hace 15 años. Que recuerda que había iniciado una obra en calle Baigorria al 400, la construcción de una casa nueva, que demandaría unos tres meses de trabajo o más y apareció gente de la UOCRA, tres integrantes con chaleco de la UOCRA, siendo uno Carrillo, el otro Cabrera y el restante Muñoz, quienes le consultaron por la obra, sobre cuánto tiempo iba a demandar, cuántos empleados tenía (que en ese momento eran dos), y si los tenía en blanco. Que les contestó que no porque no podía, no le daban los números y que ellos le manifestaron que la idea era blanquear gente, que le dijeron que pase por la sede.

Contó que fue a la sede y Carrillos lo hizo pasar para el fondo, a la parte de arriba donde subió por una escalera y ahí le explicó Carrillo que si blanqueaba a los chicos le salía plata y que ellos buscaban solucionar de otra forma, si le daba un dinero no le salía más caro. Que él le contestó de ponerlos en monotributo y Carrillo le dijo que no le convenía, porque a la larga le iban a encontrar algo e iba a tener que pagar, que si hacía

cooperativa también, que no les iba a ganar. Que por eso, al tener miedo porque esa gente te rompe todo, pagó, y así arrancó todo, "…aboné 4000 pesos o 5 mil mensuales, dependía de cómo les pintaba a ellos, era lo que iban pidiendo.".

Señaló que le habían pedido el número de teléfono y cuando veían un empleado suyo en alguna obra lo llamaban y lo hacían pasar por la sede del gremio; acotó que así hicieron el circuito más rápido y ya ni iban a la obra. Que esto ocurrió en noviembre del 2012, y estos empleados estuvieron en alguna otra obra más.

Refirió que conocía a Cabrera y Muñoz porque eran de Suarez y a Carrillo porque iba cada tanto, dos o tres veces por mes; que supone que vendría a buscar la plata, cuando supuestamente esta gente eran los delegados como para normalizar la gente. Que a Burgos no lo conoció, que lo vio una vez cuando arrancó lo de Allende en una foto en un diario.

Dijo que tenía que ir a la sede una vez por mes, que el 90 por ciento de las veces le dio la plata a Cabrera. Que una vez estaba Carrillo y "…le hice la consulta por si tenía dos o tres obras y Carrillo me dijo que me hacían un paquetito para que no me saliese tanto, pero que cuando fuese a presupuestar pensara en ellos, que siempre me iban a caer…", agregó que por miedo hasta quiso dejar la albañilería, dado que siempre era con la

misma modalidad, él quería ayudar a los empleados y ellos le decían que más le iban a sacar si los ponía en monotributo.

Contó que en una obra de una estación de servicio de YPF, en la que estaban ampliando un bufet, en el año 2013, en calle avenida San Martín, cae esta gente, él no estaba, preguntaron quien la ejecutaba y le dijeron a un empleado que le dijese que pase por la sede que querían charlar. Que fue hasta la sede, Carrillo le preguntó cuánto había pasado por la obra y le dijo que "…estaba bueno, que le ponga yo el precio porque sino lo ponía él…", que no le dijo la verdad, que le dijo menos y accedieron a 6000 pesos por mes porque sino le iba a sacar más, que era una obra de dos meses. Que recuerda que le dijo como en todo reclamante "vos ya la arrancaste la obra", molesto porque era como que se durmieron. Que luego le cayeron a la otra obra más grande y se la pararon. Que era una obra en un campo a 12 kilómetros de Suarez, que el dueño Santiago los dejó entrar y ahí empezaron a reclamar porque los tenía en negro, que había que regularizar, y este dueño paró la obra, porque no lo iba a manejar un gremio.

Señaló que ellos querían plata y arreglar con el dueño Monaterre y el mencionado los mandaba con el declarante y los del gremio no querían hablar con él. Que se paró la obra, pasaron unos meses, pusieron a toda la gente en blanco y luego pudieron empezar a trabajar; y eso está mal, se puso todo como debería ser.

Indicó que luego de que pagaba mensualmente no le pidieron que pusiera a los empleados en blanco, que si andaban en patas no les importaba, si tenían casco o no, no los defendían, no iban a hablar con los obreros. Que sí le preguntaban al declarante si tenía más obras.

A la doctora Busteros le contestó que no los podía poner en blanco porque cuesta un dinero, que él podía acceder a ponerlos en monotributo, pero ellos le decían que no servía.

Al doctor Martinez le señaló que los 8000 pesos los pagaron por única vez en la obra de Monterre. Que luego pusieron en blanco a todo el personal y no les pidieron más plata, la obra continuó y se terminó. Que la obra de la estación de servicio tenía gente en negro, era una obra más chica. Que en esa obra de YPF no le pagaba seguro a la gente, en la obra chica tampoco. Que a la UOCRA no le importaba la gente, que a él sí porque les da trabajo, y que ante un accidente se haría cargo porque son empleados suyos. Que no tenía seguro por accidentes para el personal. Que ha tenido gente que lo ha denunciado, le han hecho juicios laborales.

De interés resulta lo relatado por el señor Raúl Alberto Porras, persona que al declarar como testigo indicó que conoce al señor Burgos porque trabajó como empleado y él era encargado.

Expresó que trabajó como encargado de obra en la rotonda de Pilmayquen. Que de ahí recuerda un episodio donde aparecieron un día,

dirigidos por una persona que él no lo conocía pero que le dijeron que le decían Cucha y era de apellido Rivas, quien les paró un tractor y les dijo que tenían que parar las máquinas y que la obra no seguía adelante hasta que recibieran una llamada. Que a él le dio bronca pero acató. Que le avisó de esto a Diego Cerra y él se comunicó con estas personas. Que luego que hablaron la cosa se normalizó y volvieron a las tareas. Que él hace 28 años que trabaja en las obras y siempre se dice lo mismo, que el declarante no lo presenció, pero le dijeron que se pagó lo que había que pagar y siguieron las cosas.

Sostuvo que siempre tenían contratada a la empresa Bassani para la provisión de baños, pero en esa obra tuvieron otro servicio, algo como Eco, que eran baños plásticos químicos pero de menor nivel que Bassani, más simples y su mantenimiento era escaso, por ejemplo en Bassani pasan una vez por semana y acá pasaban una vez cada 15 días o más y casi no se limpiaban. Que este cambio de servicios de baño fue cuando empezaron a trabajar en la rotonda.

Al doctor Martinez le respondió que no le consta el pago, que él se termina enterando por otra persona, el dueño de la empresa, que es quien dice que se paga, pero que él no lo sabe. También señaló que luego de ese paro no pasó más que eso en la obra.

Tengo en cuenta también lo expuesto por la testigo Nancy García quien dijo que conoce al señor Burgos por su actividad, que es Maestra Mayor de Obra y ejerce en Coronel Suarez desde el año 2.012.

Apuntó que trabajó con Julián Allende cuando hicieron un supermercado chino y en alguna casa particular. Que compartió con él una entrevista y nada más. Que los habían citado por una denuncia de cosas para cumplir, y fueron a la entrevista en la sede de la UOCRA de Suarez. Que ahí les presentaron las irregularidades que tenían. Que en el lugar los recibieron unos chicos de la UOCRA, un par de personas pero no sabe quiénes eran. Que en la sede se entrevistaron con Burgos y les presentó las cosas que tenían que regularizar, y como la obra recién comenzaba ellos sabían que tenían cosas para acomodar, pero les dio un tiempo que era imposible que pudiesen juntar todo, comprar ropa y hacer el papelerío.

Dijo que recordaba eso y que les pidió una colaboración para ver cómo podían solucionarlo, que quedaron con charlarlo con Julián afuera para ver lo que decidían. Que Burgos hablaba con Julián, eran cosas de la obra que tenía que hablar con él. Que le pidió una colaboración porque estaban haciendo la sede de la UOCRA que se estaba construyendo. Les escribió en un papel un número, no contaban con ese dinero y por eso quedaron que al otro día le daban la respuesta. Que escribió en el papel un número 10. Que Allende le preguntó si eran 10 mil pesos y Burgos le dijo que sí. Que le dijeron que no tenían ese dinero, tenían que hablar con el

cliente y la respuesta al otro día se la iba a dar Julián. Que luego le parece que Julián se reunió nuevamente con él y acordaron como iban a manejarse, que ella no fue a otra reunión, y que esto le parece que fue así.

Refirió que en rueda de fotografías participó y ahí reconoció a Burgos.

La testigo Mariela Mercedes Gonzalez trajo datos que corroboran estas situaciones ya que indicó que lo conoce a Molina de Carcereny construcciones, por ser empleada administrativa de esa empresa donde trabajó 5 años en la oficina de recursos humanos y tareas administrativas en general.

Relató que ella no confeccionaba los sobres, veía que estaban y los entregaba a la persona que lo venía a buscar, y tenían el nombre de Guillermo Molina o José Burgos y pasaba gente con los chalecos de la UOCRA para retirarlos. Que tenían dinero adentro. Dijo que el contacto con ellos era a través de la ventana, decían que venían a retirar documentación a nombre de José Burgos, agarraban el sobre y se lo daban por la ventana.

Que por dichos de los Carcereny sabe que eran coimas para poder trabajar, continuar con las obras.

Indicó que Molina ha ido a la empresa, venía y se reunía con Gustavo Carcereny, no sabe qué cosas hablaban.

Al doctor Martínez le contestó que a Burgos no lo vio en la empresa. Que en los sobres decía José Burgos, pero no lo vio.

El doctor Martínez le señaló al señor Monteros en la sala y la testigo dijo que tampoco lo vio.

Al doctor Jara le contestó que han ido a buscar sobres y que Molina se reunía con Carcereny, pero no sabe si se llevaba sobres, que ella se limitaba a darle el sobre a quien venía a retirarlo a nombre de ellos. Dijo que Molina no retiró en forma personal un sobre que le dejaran a la testigo.

Que los pagos eran para poder continuar con las obras, para poder trabajar, eso se lo dijo el dueño de la empresa. Que además se escuchan las conversaciones, hablan delante de uno y sabe de lo que se trata. Que ella escuchaba en la oficina que había problemas con la UOCRA, los ingenieros decían que hacían algún paro y pedían algunas cosas de más. Que les hicieron un piquete en la puerta de la oficina. Que paro y asamblea es lo mismo, no trabajan y el empleador paga el día. Que le parece que en Villarino se hizo asamblea, y en Suarez seguro, aclarando luego que en Villarino no lo sabe precisamente.

Mencionó que en algunos sobres había 30 mil pesos, en otros 20, en otros 40 mil. Que el dinero del sobre podría llegar a ser más o menos dos quincenas de un oficial especializado.

Volvió a reiterar que los retiraba gente que venía con los chalecos de la UOCRA. Venían y decían que venían a retirar un sobre con documentación para Molina o a nombre de Burgos. Que no sabe quién los mandaba, no la llamaron de la UOCRA, que sabían el día que iban a venir, les dejaban los sobres y les decían que en el transcurso de la semana iban a pasar.

Apuntó que esto lo documentaban como salida de caja de las ganancias de los socios, que de otra manera no se puede documentar porque no tiene una factura. Que la testigo lo ponía como salida de caja, como si fuese una caja chica y se lo pasaba al contador. Que en la caja chica es donde se ponen los insumos para oficina, viáticos de la oficina, son gastos de salida de caja, algunos insumos están facturados y otros un ticket que no se puede descargar el iva. Que no había otras salidas de caja sin respaldo documental.

Contestó al doctor Jara que a Julia Pugnanoni la conoce a través de mails para solicitarle insumos, no la conoce personalmente, es una persona que tiene una hormigonera, y no habló de esta situación con Pugnanoni. Que no sabe si los Carcereny hablaron con ella.

También con relación a estos hechos debe tenerse en consideración, para reconstruir la existencia de los mismos, lo señalado por el testigo Adriano Giusti, quien contó que trabaja en la empresa Cerra y

Moro en tareas administrativas, contables y de facturación. Que conoce al señor Burgos por haber trabajado en esa empresa.

Dijo que le entregó sobres a la gente de la UOCRA; que su jefe Diego Cerra le daba un sobre y le decía que iba a ir gente de la UOCRA y que se lo entregara, que generalmente le decía que venía Carrillo. Que le consulté a la persona que se presentó si era Carrillo y le hizo entrega del sobre. Que en alguna oportunidad apareció con la campera con el logo estampado de la UOCRA, que sabía que había dinero por comentarios de su jefe, pero los sobres los preparaba Diego Cerra y esto era una vez al mes.

Al doctor Martinez le indicó que esto era una vez al mes por un año, entre el 2015 o 2016, por ahí. Que puede ser que no haya sido la entrega en algún mes y luego eran dos veces en el mismo mes. Que la empresa tiene obras durante todo el período, no eran obras específicas.

Agrego a este testimonio lo señalado en la audiencia por el testigo Facundo Nicolás Orazi quien contó que trabaja para la empresa Carreteras 2.000 S. A., en el sector de facturación, cobranzas y ventas. Que no ha mantenido trato con las personas que le mencionaron como acusadas pero sí las ha visto dentro de la empresa, iban a la empresa, sabe de los nombres que se mencionaron por escucharlos, pero no sabe quién es cada uno.

Dijo que el presidente de la empresa es Cristian Ferrero y que con él han estado estas personas. Que también les ha dado sobres con documentación a gente de la UOCRA, que le dejaban el sobre y le avisaban que lo iban a retirar por las oficinas, que esto era mensualmente. Que no sabe qué tenían los sobres, cree que documentación, se los entregaba el declarante o alguno de sus compañeros.

Debe también considerarse lo expuesto por la señora Sandra Lucía Dolabaras, quien contó que es la esposa del señor Almada, quien trabaja para la empresa Entrego. Expuso que era habitual escuchar comentarios y ver en la televisión que la gente de la UOCRA hacía piquetes en la planta, pero no tuvieron problemas hasta un hecho puntual, cuando se presentó un grupo de la UOCRA en su casa a reclamar por unos pagos.

Indicó que eran unas cuantas personas en la puerta a los gritos, por lo que luego su marido hizo una exposición en la comisaría sexta de Villa Rosas. Que serían entre 20 a 30 personas o más y tenían las camperas que los identificaban como de la UOCRA, que estaban exaltados por unos pagos porque decían que no eran lo que habían arreglado; habiéndole generado temor la situación.

También de interés resulta lo expuesto por el testigo Martín Ariel Parada quien comenzó señalando que conoce a los acusados como integrantes de la UOCRA, por ser el declarante dirigente del SITRAIC, sindicato que nuclea a trabajadores de la construcción, y como entidad

sindical realiza afiliaciones a los trabajadores de la construcción, montaje. Relató que el sindicato puede participar en inspecciones de obra, hablar fuera del horario laboral con los compañeros y tomar nota y tratar de hablar con la empresa ante lo que le falta al personal o por riesgos en la obra, y si no toman recaudos se dirigen al Ministerio de Trabajo donde vuelcan la inquietud y el Ministerio va a la obra a constatar esta situación.

Manifestó que han acompañado al Ministerio luego de las denuncias para constatar lo que se denunciaba.

Dijo que en el parque industrial intervinieron en la empresa Sidepa, donde los compañeros requerían su presencia, se hizo asamblea y los compañeros se afiliaron al gremio SITRAIC y a partir de eso los pasaron a representar gremialmente. Que esa asamblea se avisó a la empresa y se hizo asamblea informativa, y que a los compañeros desde que se pasaron al sindicato, la empresa luego toma como represalia despedirlos. Que por eso se juntaron con la empresa para decirle que respete la libertad sindical y ese día se presentó la UOCRA reclamando el sector, no por los trabajadores despedidos. Que ahí tuvieron un intercambio de palabras, pero el señor Erbin actuó con violencia y fuera de lugar, con un nivel de violencia bastante importante.

Expresó que fueron amenazados por Erbin, los del sindicato y los trabajadores, que lo amenazaron al declarante, a Unibaso y a los que estaban en la asamblea informativa.

Dijo que la cuestión era que había que ver los compañeros despedidos, pero a ellos no les importaba demasiado. Que Erbín les decía que tenían que salir de ahí, que era una quintita de él que manejaba esa empresa, que de ahí comía él como de otras dos empresas, y que si no se retiraba el declarante le iba a dar un tiro.

Expuso que el reclamo era por la reincorporación de los muchachos, que por eso hicieron una asamblea a un costado, no impidieron que siguieran trabajando, que todo fue un normal desarrollo de la asamblea en lo que respecta a lo sindical. Que respetaron a los otros compañeros que estaban trabajando adentro, por eso la asamblea se hizo afuera, nunca se cortó el acceso para que ellos pudiesen trabajar.

Relató que en una obra de la empresa Coince en el barrio Los Chañares, los muchachos estaban afiliados al sindicato, por lo que habían hecho una visita y advirtieron que corrían riesgo, sacaron fotos y filmaron un video porque en una zanja que pasaba por debajo de una garita apuntalada había gente trabajando, por lo que decidieron que interviniera el Ministerio para su clausura por el riesgo para el trabajador y eso fue lo que hicieron.

Que se acompañó al Ministerio a la inspección de esa obra. Que fueron en dos camionetas, una S10 de Unibaso y una Toyota blanca de Soules. Que la gente del Ministerio fue con ellos porque no tenían vehículos.

Expuso que mientras el Ministerio inspeccionaba y tomaba los datos a los operarios, irrumpen en el lugar una cantidad de vehículos con unas 40 personas identificadas como de la UOCRA, y ahí empezaron los problemas, amenazas, agresiones, y agarraron del brazo a la señorita del Ministerio de Trabajo en forma de amenaza.

Mencionó que se sintió temor, que no es normal que uno haga su trabajo y aparezcan 40 personas gritando de todo, pegando a los vehículos, agarrando del brazo a una mujer y diciendo amenazas, que sintió miedo por él y por la chica del Ministerio, que se sintió mucho temor por todo. Que no recuerda el nombre de la chica del Ministerio.

Dijo que entre los 40 que fueron al lugar de la UOCRA estaban Paiz, Mario Gonzalez, Jorge Diaz, Sabino Ríos y varios más. Que recuerda verlo a Paiz agarrar del brazo a esta señorita y que intervino Mario Gonzalez tranquilizando las cosas, y nada más que eso. Que alrededor era un grupo que se veía exaltado, violento.

Apuntó que esta chica estaba muy asustada, llorando por lo que le decían; que ha salido en varias oportunidades con ellos, por eso no entendía ella la agresión de esta persona tomándola del brazo.

Que cree que la chica le habló a Mario Gonzalez para que se tranquilizaran. Luego subieron a los vehículos y recibieron patadas y golpes que dañaron los vehículos. Que se aportaron datos y fotos de los daños; y al salir fue filmado todo, creo que por Mario Soules o García, que cree que éste último hizo la filmación.

Refirió que observó la filmación y sale Paiz en todas, y luego estaban todos ahí, aparecen todos, que no es una filmación muy clara pero salen todos.

Contó que después se fueron para el Ministerio de Trabajo para hacer el acta y hablar con Bossi, el delegado del Ministerio. Que cuando entraron al Ministerio fueron recibidos por Sabino Ríos y Diaz, y otro más que no recuerda el nombre, los que los increpaban, gritaban barbaridades, amenazaban, y no los dejaban llegar a la oficina de Bossi; que ante esta situación intervino un policía que había ahí de custodia y lograron llegar a la oficina. Que ahí estos muchachos amenazaron a Bossi, y luego ellos pudieron hablar poco, dejaron los papeles y se retiraron.

Expresó que Sabino Ríos y Diaz eran los que amenazaban, le decían a Bossi que no les podían abrir las puertas a ellos, que ellos no tenían papeles, y otras barbaridades e insultos. Que no recuerda que lo responsabilizaran a Bossi por lo que les podía pasar al declarante y sus acompañantes. Que luego se retiraron del lugar y los de la UOCRA se quedaron ahí. Que al menos ese día no pasó más nada; pero que ese día

se iban a realizar más inspecciones en obras de Coince pero solo pudieron hacer la mitad porque se hicieron presentes amenazando a los compañeros de las obras.

Sostuvo que luego de esta situación no volvieron a salir para hacer inspecciones con el Ministerio. Que de las inspecciones lo taparon todo, que la obra se clausuró pero minimizaron todo y luego siguió sin más. Que los afiliados fueron amenazados por la empresa y se quedaron tranquilos, taparon todo enseguida y siguieron trabajando así.

Indicó que previo a la inspección, esa denuncia se demoró unos días en el Ministerio, pero que no sabe por qué.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que en la obra del barrio los Chañares recuerda a Mario Gonzalez interviniendo y a Paiz tomándole el brazo a la señorita del Ministerio de Trabajo, y que Paiz le decía que ya se iban a ver en otra ocasión mientras la tomaba del brazo.

Que en el Ministerio los estaban esperando abajo, ahí estaba Sabino Ríos, Diaz y otro más en la puerta, que el declarante llegó con García y en la escalera los empezaron a amenazar diciéndoles que los iban a cagar a palos, que los iban a buscar, a matar, que eso lo decía Sabino Ríos y Jorge Díaz. Que en su opinión lo decían porque se ve que les molestaba lo que estaban haciendo.

Que cuando llegaron a Bossi le entregaron la denuncia y le hicieron saber lo que había pasado. Que cuando se retiraron ellos se quedaron arriba discutiendo con Bossi.

Que el SITRAIC tenía personería gremial no jurídica, que tiene un solo sindicato y es la UOCRA.

La testigo Nora Alejandra Molina conto que es inspectora del Ministerio de Trabajo, motivo por el cual conoce a todos los acusados por su actividad, consistente en realizar inspecciones en las obras. Indicó que ante una denuncia en el Ministerio o pedido de inspección por el sindicato es el coordinador del Ministerio quien le da la orden de realizar la inspección, visitando la obra en el lugar, habitualmente junto con personas del sindicato, que tienen más conocimiento de cada rubro específico, para verificar cómo se hace la tarea, cuales son los riesgos y si están las medidas de seguridad.

Señaló que ha realizado inspecciones junto con todos los sindicatos, esto es, SMATA, UOCRA, SITRAIC, el del puerto. Que en cuanto al rubro de la construcción ha salido tanto con UOCRA como con SITRAIC para realizar su labor. Que ha realizado inspecciones en obras en Bahía de la empresa Coince SA en la zona del barrio Los Chañares, que eso fue en el año 2.017, no recordando mayores detalles porque realiza unas 60 inspecciones por mes. Contó que fue a realizar una inspección junto con Luis Diez y gente del sindicato SITRAIC, en calle Alem al 5000, donde estaba trabajando la empresa Coince. Que su especialidad es seguridad y

Diez iba por la cuestión laboral. Que en el lugar no los querían dejar hacer la inspección porque les decían que el personal era de la UOCRA, por lo que ella les explicó a los trabajadores que ella miraba la parte de seguridad independientemente del sindicato. Que no recuerda quien era el delegado gremial que estaba en ese momento y que se opuso a la inspección. Que además le explicó que si no podía realizar la inspección se hacía un acta de obstrucción por no poder hacerlo; que cualquier persona o el sindicato puede presentar una denuncia y ellos van para relevar al personal y las condiciones de trabajo, que le explicó esto y luego esta persona le permitió hacer la inspección correspondiente, que este sujeto estaba en la matera que era una casilla rodante, buscó el programa de seguridad que le pidió y luego llamó al sindicato, porque enseguida aparecieron tres chicos de la UOCRA. Señaló que luego se retiraron hacia otro domicilio que no recuerda si era una obra de la misma empresa, pero era por el barrio los Chañares o Villa Bordeu, donde estaban haciendo un tendido de red de gas, y ahí constató que no tenían programa de seguridad, que había una perforación y la garita que estaba al costado se estaba por caer; que por eso fue que suspendió las tareas, en las cuales estaban trabajando unos tres empleados.

Conto que ella estaba con Luis, cuatro o cinco personas del sindicato SITRAIC y luego llegaron al lugar unos 30 o 40 trabajadores de la

UOCRA, no sabiendo que hablaron entre ellos, que la declarante estaba haciendo su trabajo.

Dijo que la discusión era acalorada. Que del SITRAIC estaba Adrián que es el abogado y dos más que no recuerda el nombre. Que entre los 30 o 40 de la UOCRA recuerda que saludó a Mario Gonzalez, quien le entendió que estaba bien hecho su trabajo porque la obra tenía un problema de seguridad. Que también advirtió que estaba Walter Paiz y algunas personas más cuyos nombres no recuerda.

Le señaló al señor Fiscal que sintió temor por su integridad porque en un momento llegó mucha gente, se empujaban, no sabe si se golpeaban. Que ella estaba al lado de Mario y le dijo que la dejara ir porque a ella la mandaba su jefe y era su tarea hacer la inspección. Que no recuerda si terminó esa inspección, que el acta no la confeccionó en ese momento porque lo hacía en el Ministerio.

Refirió que al lugar fueron con la gente de SITRAIC en una camioneta doble cabina blanca y cree que otra negra. Que siempre que les presentan la denuncia o pedido de inspección, se comunican con el sindicato y coordinan un día para hacer la inspección, siempre saliendo de la delegación del ministerio.

Reiteró que le pidió a Gonzalez poder retirarse. Que al hacerlo la gente que estaba ahí golpeó la camioneta, pero que no pasó nada más.

De ahí no hicieron más inspecciones y se fueron para el Ministerio. Que si no recuerda mal el abogado del SITRAIC estaba filmando lo que pasaba, todo lo que pasó cuando se iban.

Que no sabe si sufrieron daños las camionetas producto de los golpes, que no las observó luego. Que ese día tenían previsto realizar 4 inspecciones, donde se suscitó esta última cuestión fue en la segunda, y no siguieron haciendo inspecciones porque la declarante no se sentía segura, que por eso fue hasta el Ministerio y le devolvió todo a Sergio Bossi, que era el delegado. Dijo que las 4 inspecciones fueron a archivo, que hizo el informe devolviéndolas. Dejó constancia que nos las iba a verificar porque no se sentía segura.

Mencionó que cuando llegaron al Ministerio había afuera 3 chicos de la UOCRA esperándolos, que le dijeron que los dejaran entrar, que ella le dijo a los chicos que fuesen adelante, y que a los otros les dijo que la dejaran pasar al Ministerio, que no iba a hacer más inspecciones y por eso devolvió los expedientes y luego se fue a su casa porque se sentía mal emocionalmente. Que durante la diligencia se asustó.

Le contestó al señor Fiscal que sabe que tanto la gente de la UOCRA, como la del SITRAIC, hablaron con el delegado, pero nada más, porque no estuvo presente.

Refirió que luego de esto siguió saliendo con los chicos de la UOCRA para realizar inspecciones, que nunca le faltaron el respeto, ni pasó nunca nada; que su trabajo es la seguridad de los trabajadores, y tanto salgo con UOCRA como con SITRAIC. Que en un momento le dijeron en forma chistosa como que los estaba engañando.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que tanto Paiz como Gonzalez se portaron bien con ella, no se opusieron a que suspendiese la obra.

El señor Cristian Adrián García relató ante el Tribunal que conoce a algunos de los acusados, por su actividad, por ser delegado coordinador del SITRAIC, sindicato de industria, construcción y afines, desde el 7 de marzo del 2017.

Señaló que su trabajo es hacer relevamiento de obras, ante falencias en seguridad e higiene o laboral se eleva la denuncia al Ministerio de Trabajo. Que cuantos más afiliados se tiene, más crece el sindicato, que su función es defender los derechos de los trabajadores.

Que las tareas de inspección en obras se realizan, en ocasiones, con funcionarios del Ministerio de Trabajo, que a veces acompañan a los inspectores a realizar las inspecciones.

Que en una oportunidad, en obras de la empresa Coince en Villa Bordeu se autoconvocaron los compañeros y les plantearon las

inquietudes, se hicieron las denuncias en el Ministerio de Trabajo y luego cuando sale la inspección los acompañaron. Que cuando se empezaron a labrar las actas hubo un inconveniente con la UOCRA, llegó el delegado de UOCRA y de obra Marcos Tevez acompañado por dos más que no conoce, se refirió al declarante diciéndole que “iba a pasar por su casa, que sabía donde vivía”, que le dijo “fijate que andás en la calle con tus hijos”, lo que el testigo tomó como una amenaza personal hacia él y sus hijos. Que luego Tevez se dirigió al obrador, tuvo un cruce de palabras con el inspector e inspectora y empezó a realizar llamadas por teléfono. Que cuando terminaron las actas, no hubo necesidad de clausurar la obra y se retiraron del lugar. Que de ahí fueron al barrio Los Chañares a realizar otra inspección y ahí la inspectora al ver trabajando a la gente en profundidad paró la obra, llamó a los dos o tres muchachos que había y les dijo que la obra se clausuraba porque no estaba en condiciones de seguridad, tras lo cual llegó al lugar Marcos Tevez en auto blanco, acompañado de una buena cantidad de vehículos con muchachos de la UOCRA, identificando a Paiz, Gonzales, Jorge Días, Marcelo Okio, los que empezaron a los gritos y amenazas. Que Jorge Diaz agarró del cuello a su compañero Unibaso, y ahí Alejandra Molina y el inspector se bajan de los vehículos para calmar los ánimos. Que la intercepta Paiz y le dice que ella no podía estar ahí, que no se lo podía hacer a ellos, por lo que se tornó en una situación difícil. Que lograron subir a los vehículos y luego estas personas les dan golpes y

patadas a los autos.

Refirió que primero Paiz intercepta a Alejandra Molina y luego cree que la inspectora habla con Mario Gonzalez, y que alguno de los dos es que le dice que no podían estar haciendo eso de hacer inspecciones con la gente de SITRAIC.

Que toda la situación era agresiva, de insultos, te voy a matar, traidores; que eran 30 o 40 de la UOCRA aproximadamente.

Que fueron al lugar en camioneta, una era de Unibaso y la otra de Mario Soules, compañeros del sindicato, una Chevrolet s 10 negra la de Unibaso y la de Mario una Toyota Hilux blanca.

Que Alejandra Molina iba con el declarante en la camioneta de Solues, junto al inspector Diez y Martín Parada también. Que en la de Unibaso iban el mencionado, Damián Mayor que es el abogado del sindicato y cree que Cuevas.

Que la notó a la inspectora asustada, al igual que todos los compañeros, dado que fue una situación muy atemorizante. Que ellos no están acostumbrados a esas cosas, son trabajadores. Que en el momento quería llamar a la policía y no se acordaba ni el número que estaba marcando.

Dijo que el sindicato SITRAIC está en condiciones de hacer las inspecciones, es un sindicato avalado por el Ministerio de Nación, lo único

que no pueden hacer es pelear paritarias porque la mayor cantidad de afiliados las tiene UOCRA. Que pueden hacer un acuerdo mejor y ser avalado por el Ministerio de Trabajo, lo único que no pueden hacer –reiteró- es pelear paritarias.

Mencionó que a las camionetas les dieron golpes con fierros, cabos de pico o hacha, patadas, que de todo eso hay prueba, hay un video al respecto que filmó con un celular Martín Parada que iba adelante. Que ahí se ven los golpes y las amenazas de lo que estaba pasando.

Dijo que cuando lograron salir de la situación informaron al Ministerio de Trabajo lo que estaba pasando, y Sergio Bossi les pidió que se reunieran con él. Que en el Ministerio el delegado los reúne en su oficina, que el sube al despacho con Parada y luego irrumpen en el despacho Jorge Díaz, “el soldado” Sabino Ríos y Marcelo Ortiz. Que ahí empiezan con insultos y amenazas hacia el delegado regional, lo insultaba “el soldado”. El delegado le dice que ya había llamado “el jefecito”, que lo estaba amenazando, pero que el SITRAIC podía hacer inspecciones. Que en ese cruce de palabras entre los que estaban ahí, “el soldado” le dice a Sergio que él era responsable de lo que les pudiese pasar a ellos si les seguían permitiendo participar de las inspecciones. Que luego llegó el policía de custodia y retiró a los de la UOCRA por pedido de Sergio Bossi, junto con más personal policial que había convocado.

Que luego Bossi le pidió que fuese al otro día para charlar, le pidió una escolta policial que los acompañó dos o tres cuadras. Que al otro día charlaron con Sergio y él decidió hacer que todas las inspecciones que hiciesen con el SITRAIC las iban a hacer los del Ministerio trasladándose en su vehículo y que por seguridad para los inspectores y la gente del sindicato iban a estar acompañados por la policía. Que así se hicieron varias inspecciones acompañados por el grupo GAD.

Al doctor Gomez Talamoni ante la consulta de si escuchó a Paiz o a Gonzalez amenazar, le contestó que fue uno de los dos quien le dijo a Alejandra Molina “vos no podés estar acá”. Que no escuchó amenaza puntual por Paiz o Gonzalez.

Consultado sobre lo que dijo Sabino Ríos, contestó que “el soldado” tiraba letra de algo, pero la amenaza concreta fue decirle a Bossi que sería responsable de lo que les podía pasar a ellos.

Ante nuevas consultas del doctor Zorzano dijo que dentro del grupo de la UOCRA que llegó al lugar estaban Paiz y Gonzalez. Que la interceptan a Molina ni bien se baja el vehículo, que esto lo hicieron los dos.

El testigo Damián Mayor, convocado por los doctores Gomez Talamoni y Sager, dijo que conoce a los acusados desde hace varios años. Que con algunos tiene amistad, pero esto no le impide decir la verdad. Indicó que es abogado desde el año 2016 y que en el año 2011, necesitaba

trabajo y tenía un amigo que estaba adentro de la UOCRA, quien le presentó a Monteros y luego empezó a trabajar en la obra social OSPECON, que es la del personal de la construcción. Que trabajó dos años ahí y luego lo hicieron renunciar por una cuestión interna; que luego entró en una obra y tomó contacto nuevamente con gente de la UOCRA.

Comentó que junto a otras personas decidieron formar una agrupación y presentar una lista en las últimas elecciones antes de la intervención. Que la lista era la “22 de abril” que era opositora a Monteros, y por eso se alejó y no tenía el mismo trato con gente que conocía de antes. Que la elección fue a finales 2016 o 2017 y era para asumir en el 2018, y en la lista estaban Gerardo Gonzalez, Martín Parada, Unibaso, García y él colaborando. Que esa lista perdió y ante eso –salvo su líder- decidieron traer a SITRAIC como sindicato nuevo.

Que vino el secretario general de SITRAIC, se realizó una reunión con gente local y se formó el sindicato SITRAIC en esta zona, con Unibaso, Soules, cuevas, García y Parada.

Mencionó que estuvo en el episodio que ocurrió en la obra que cree era de la empresa Coince, una obra en el barrio Los Chañares, y la recuerda porque era su primera inspección, a la cual habían ido con dos miembros del Ministerio de Trabajo.

Apuntó que era una obra en la vía pública y asistieron junto a una mujer y un varón del Ministerio. Que ellos fueron además a presentarse como sindicato nuevo a los trabajadores, y ni bien se enteraron llegó una facción de UOCRA de 4 personas. Que como era la primera inspección que hacían se iban a presentar a los obreros dado que la idea era buscar que la gente se adhiriese a su sindicato.

Dijo que llegó un Megane blanco con 4 personas, una de ellas Marcos Tevez y otras 3 a quien no conoce; y que Tevez los increpó, diciéndoles que hacían ahí. Que no pasó que eso hasta que llegaron más autos con gente del gremio de la UOCRA para intimidar, hacerse más presente que ellos y ganar terreno en esa obra. Que era una situación intimidante, les cerraron las salidas, no podían salir. Que estaba el auto de Soules, una Hilux blanca con los inspectores y ellos atrás en otro vehículo con Cuevas y Unibaso.

Expuso que había llegado mucha gente de la UOCRA, que bajó alguno de los autos intimidándolos, a quien no conocía, pero que sí logro identificar en la obra a Gonzalez, Paiz, Tevez, Pacheco y alguno más que no recuerda. Que estas personas no lo saludaron cuando llegaron, pese a que lo conocen, cree que por una cuestión de códigos, por ser en ese momento de otro sindicato.

Comentó que logró divisar que estaba Gonzalez hablando con la inspectora y Paiz pasivo en un costado. Que luego la inspectora salió y le

dijo que la empresa podía comerse una multa importante por unas deficiencias, y nada más.

Apuntó que se podrían haber ido antes del lugar, antes de que arribara el grupo grande de la UOCRA, si un ingeniero no los hubiese retenido, hecho esperar en la obra, ya que no quería recibir el acta de infracción hasta que no llegase el jefe de obra. Que por eso los retuvieron un poco más y ahí llegó la gente de la UOCRA. Que en ese momento el delegado del Ministerio dijo que no necesitaba entregarle el acta a nadie en especial, pero igual se demoró.

Le indicó a los letrados que para salir se tuvo que correr un vehículo, dado que había una construcción bloqueando la calle, los autos con la gente de la UOCRA estacionaron detrás de ellos, eran unos 12 vehículos o más y por eso no se podía salir. Que el que manejaba la camioneta en la que estaba el declarante se bajó y les dijo a los de la otra camioneta que se dieran la vuelta; que cuando hacía esto se acercó a su compañero el mismo sujeto que lo increpó al declarante y lo increpó a su compañero, luego algún auto se corrió y pudieron salir.

Sostuvo que de la obra fueron al Ministerio de Trabajo y ahí cruzó a Adrián García sentado abajo quien le dijo que estaba arriba Martín Parada. Que luego observó bajar a Rios y otros 4 muchachos con la pechera de la UOCRA, que no lo saludan y se van. Que no advirtió más que

eso en el Ministerio, que luego un policía les ofreció una compañía hasta afuera, pero no tenía sentido, le dijo que no y se fueron solos.

Apuntó que saliendo del Ministerio había gente de la UOCRA y estaba entre ellos Tevez, por lo que le preguntó si iba a ser así esto siempre, que le contestó que sí, y por eso decidió dejar de participar en las inspecciones, no quiso participar más de las inspecciones; y luego realizó algún trabajo más para el SITRAIC, como carta documento o algo así y dejó de participar.

Respondió que a Rios en la obra no lo vio, que lo vio recién en el Ministerio. Que a Paiz, Rios y Gonzalez no los vio amedrentar a nadie. Que Paiz no se acercó a nadie, estaba pasivo, y a Gonzalez lo observó hablar con la inspectora, pero bien, que estaba a 15 metros y no advirtió un apriete a nadie.

Refirió que lo ha cruzado a Gonzalez luego de ese evento y con él no ha tenido problemas.

Al doctor Zorzano le comentó que cuando el delegado del Ministerio quiso entregar el acta fue que el ingeniero le dijo que esperaran al jefe de obra. Que la inspección la habían pedido ellos como sindicato, pero que está a cargo del inspector, al cual ellos pueden acompañar. Que la lleva adelante el inspector y él es quien dice cuando se termina. Que fue por esto

que el inspector dijo que dejaba el acta en el tractor y se iba, pero no se pudieron ir porque llegaron los otros autos.

Reiteró que no vio ninguna amenaza ni de Gonzalez, ni de Paiz; que a él sí le dijeron que “si era tan abogado, si tenía tantos huevos”, que así lo increpa alguien a quien no conocía, que capaz eso es amenaza, pero desconoce. Que gesto de tener un arma no vio, ni escuchó ni en la obra ni en el Ministerio.

Recordó que sí escuchó en el Ministerio que Marcos Tevez le decía “esto lo arreglamos en el barrio”, que le dijo que era un traidor, y que cree que esto también se lo dijo a García, a quien además le dijo “esto no va a quedar así, lo arreglamos en el barrio”. Que a Cuevas, que también estaba con el declarante, le dijo “siempre haciendo macanas” o algo similar.

Comentó que a la inspección fueron en dos camionetas, que eran 6 del sindicato y los dos inspectores del Ministerio. Que era una Hilux blanca y una S10; resultando la primera dañada por golpes de piedras, palos y patadas cuando se retiraban, quedando marcada, con abolladuras la camioneta de Soules.

Expresó que no volvió a acompañar en inspecciones por lo que ya señaló y porque le costaba llegar a un lugar que pudiese haber gente que conocía y no poder saludarla, porque no le gustó la situación. Que conoce a

Mario Gonzalez y a Paiz desde hace muchos años y no poder saludarse porque uno está de un bando y otro del otro no le gustó.

Que fue Marcos Tevez quien le dijo que esto iba a seguir así, de esa manera, que ellos iban a estar en cada inspección cuando esté el SITRAIC.

Agregó que en los Chañares le generó temor la situación, pensó en agresiones físicas posibles, y fue una situación no deseable. Que eran más de 10 vehículos los de la gente de la UOCRA y serían más de 40 personas.

Indicó que él no estuvo en la reunión con el delegado en el Ministerio, que ahí estaban arriba García y Parada y luego observó bajar a una delegación de 5 personas de la UOCRA. Que no sabe si Parada se fue acompañado por la policía, que él estaba afuera del Ministerio y no pasó nada, no fue necesaria escolta policial cuando se retiró del lugar, acotando que hubiese sido lindo que los policías estuviesen en los Chañares.

Dijo que en el Ministerio estaba Ríos con otros cuatro muchachos, que no lo saludó aunque lo reconoció al declarante. Que tiene entendido que pudo haber amenazado a Martín Parada, pero no lo vio, esto se lo dijo Parada, quien fue quien se lo comentó y por eso alguien recurre al policía y éste ofrece la custodia para salir, y el declarante le dijo que no y salió sin que pasara nada.

Le refirió al Fiscal que Rios fue al despacho de Bossi, Delegado del Ministerio, porque él lo vio bajar de ahí junto con las 4 personas. Que en el despacho estaban Bossi, Parada y García, cuando irrumpió la gente de la UOCRA, ingresando sin permiso y le dijeron al Delegado “que así no funcionaban las cosas”, que Rios le dijo “si le daba la nafta”, que esto recuerda de lo que le comentaron, pero si hubo alguna amenaza o algo más no lo recuerda, que lo sabrá Martín Parada.

Expresó que ese día se iban a realizar más inspecciones, pero no se realizaron porque del Ministerio se fueron cada uno para su casa.

Señaló que tiene el recuerdo de haber visto una filmación de un teléfono de cómo le tiraban piedras y arena a la camioneta donde iba Soules, que capaz que se filmó porque era idea del candidato nuevo tener acreditadas las agresiones de UOCRA para poder denunciarlas.

Apuntó que la UOCRA tenía esta actitud contra el sindicato SITRAIC porque este se forma en contra de Martinez que es el secretario general de UOCRA a nivel nacional. Que por eso había enemistad fuerte entre SITRAIC y UOCRA, y además, a nivel local, la UOCRA no quería al SITRAIC porque era otro gremio al cual se podían afiliar los trabajadores.

Preguntado por el Fiscal si escuchó que alguien refiriese hacia el señor Unibaso: esto lo va a pagar tu hermano Gerardo?, contestó que algo de eso escuchó, pero no sabe si tiene Unibaso un hermano de nombre

Gerardo. Que algo de eso puedo haber escuchado, pero no sabe si en el marco de esta situación, que le parece que no fue en la inspección en Coince, sino que cree que fue cuando estaban con la lista 22 de abril, porque el jefe de esa lista era Gerardo y por eso puede ser que en las elecciones Unibaso haya recibido ese tipo de amenazas por su hermano Gerardo o por el líder de lista también de nombre Gerardo.

Contestó a las consultas del Ministerio Fiscal que puede ser que Unibaso recibiese alguna amenaza en la inspección, porque el mismo que lo increpa a él, lo increpa a Unibaso, quien estaba a su lado; pero que ahora no lo recuerda. Que ademanes de pistola no presenció. Que sí cuando estaban volviendo alguien hizo un ademán como de cortar un cogote y algo así; que puede ser que hayan hecho ademán de pistola o cuchillo en el cuello, y sí recuerda que les tiraron arena o algo así, pero la camioneta en la que él iba no se dañó, y si la otra de Soules.

Le volvió a contestar al doctor Gomez Talamoni que a Rios en la obra no lo vio. Que a Paiz y Gonzalez los vio en actitud pasiva. Que no los vio con cuchillos. Que había una flaquito, chiquito, que hacía gesto cuando se dan vuelta con la camioneta para irse, pero ni Paiz, ni Gonzalez hicieron gesto alguno. Que no conoce a Jorge Diaz de la UOCRA.

En la I.P.P. 02-00-0019540-17/00 agregada por cuerda, de la prueba incorporada por lectura al debate, se puede advertir la denuncia efectuada el 21 de marzo del 2017 por el señor Martín Parada –fs. 9/11-, en

la que relata el suceso ocurrido en el barrio Chañares, que comentara en la audiencia, denuncia en la que cuenta las frases que le habrían efectuado el señor Jorge Diaz ("…esto lo va a pagar tu hermano Gerardo…"; "…te vamos a pegar un tiro. Te vamos a ir a buscar a tu casa porque ya sabemos donde vivís…") y los señores Marcos Tevez, Mario Gonzalez y Walter Paiz en ese lugar ("…¿cómo nos venís a hacer esto?, esto lo vamos a arreglar de otra manera. Ya te vamos a llamar…"), y el señor Sabino Ríos en sede del Ministerio de Trabajo ("…no van a poder salir de acá…").

Y en sentido similar la denuncia realizada por el señor Benjamín César Unibaso –fs. 13/15-, en la que relata la misma cuestión.

Estas copias de denuncias se corresponden con las originales investigaciones penales preparatorias agregadas por cuerda I.P.P. 02-00-004894-17/00 (denuncia penal de Benjamín César Unibaso de fs. 1/3 e I.P.P. 02-00-004885-17/00 (denuncia penal de Martín Ariel Parada de fs. 1/3).

De la I.P.P. n° 4885/17, agregada por cuerda, tengo en cuenta la documentación de fs. 14/16 vta., el dictamen técnico de fs. 17 y las fotografías de fs. 18, con las que se acreditan los daños que presentaba el vehículo Toyota Hilux dominio INQ698 que era conducido por el señor Soules al momento de los hechos relatados por los señores Parada y García, y la señora Molina.

Con el dictamen técnico de fs. 21 y las fotográficas de fs. 22/23vta. se acreditan los daños que presentara la camioneta Chevrolet S10, dominio BUU152, propiedad del señor Benjamín Unibaso.

Las fotografías de fs. 125/130 ilustran sobre el lugar y personas observadas en el momento del hecho del barrio los Chañares.

Para observar el vínculo de algunos de los acusados con las empresas cuya contratación requerían, basta observar lo documentado en el Anexo documental al Legajo Fiscal con documentación remitida por la AFIP respecto a José Bernardo Burgos; María Cristina Carrillo; Estefanía Elizabeth Burgos; María Laura Burgos; Analía Belén Burgos; Acqua Servicios SRL y Lucía Teresa Sanabria. Anexo documental al Legajo Fiscal con documentación remitida por la AFIP respecto a Toyca Obras Civiles S.A.; GBM S.R.L. Construcciones y Servicios; Servicios Industriales y Constructivos S.R.L; Flor de Lirio S.R.L. y SGT Soluciones en Grupos de Trabajo S.A. Lo que coincide con lo que han señalado los testigos, y algunos de los acusados al declarar en la audiencia de juicio.

En el anexo documental -cuerpo I y II- identificado como "Apertura de secuestro 02/02/2018 I.P.P. 02-00-017215-17/00 UFIJ 10", además de observarse las fotografías que ilustran sobre la apertura de la caja de seguridad secuestrada en el domicilio del señor Humberto Monteros, en la cual había, entre otras cosas, una importante cantidad de dólares, se pueden advertir distintos documentos que dan cuenta de la relación de

algunos familiares del mencionado con las empresas Flor de Lirio y SGT, con respecto a distintos inmuebles propiedad de los familiares, y hasta una tarjeta de invitación para un festejo de fin de año de la empresa Flor de Lirio en el predio del gremio de la UOCRA de la ruta 3 vieja (fs. 233).

De la documentación destaco las copias de las denuncias formuladas por el señor Cristian Gabriel Jesús Vinet, las que dieron origen a las I.P.P. n° 21402/15, en la que denuncia por amenazas al señor Humberto Monteros, y la I.P.P. n° 6151/16, en la que denuncia amenazas sufridas tras renunciar como delegado en el gremio de la UOCRA.

Del Legajo identificado con la letra "O" - víctima: JORGE OMAR FERRARI (400frío S.A.), destaco la documentación acompañada por el señor Ferrari, la que ilustra y corrobora lo mencionado por el testigo en la audiencia, a saber, la documentación por el acuerdo por premios suscripto con el señor Sergio Vazquez en representación de la UOCRA, y la documentación correspondiente a los recibos de sueldo en los que se ha volcado ese premio, conforme se advierte a fs. 15/66.

En el mismo legajo –fs. 69/96- obran copias de las facturas emitidas por Stradi Viandas S.A. a la empresa 400Frio S.A.

En los anexos documentales identificados como Legajo N se puede advertir distinta documentación de interés, a saber, obra a fs. 16/19 y 31/38 facturas de la empresa Flor de Lirio por transporte de personal para

Panedile Tecma, el contrato de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales suscripto entre ABSA y la UT Panedile-Tecma -20/30-; convenio suscripto entre la UOCRA Bahia Blanca y la UT Panedile-Tecma -49/51-; facturas emitidas por la firma Ariel Edgardo Zaballa por el servicio de comida y notas de crédito remitidas por dicha firma; orden de compra, detalle de facturas y pagos realizados a la citada firma de catering y constancia de transferencias bancarias -39/48-; orden de compra a la firma Mormando Lorenzo de prestación del servicio de comida; orden de compra a la empresa Lange Dante Raul de prestación del servicio de transporte; acta de inicio de obra de planta de tratamiento de efluentes de Bahía Blanca -53-.

De interés resulta el informe de la Perito Contadora María Agustina Tennina de fs. 55/59, del que surge que al comparar los precios por transporte de personas de la empresa Flor de Lirio y del proveedor Dante Raúl Lange, los del último mencionado serían inferiores para el mismo período comparado, prestándose el mismo servicio. Se menciona que los precios de Flor de Lirio serían en más del doble a los del precio de Lange.

En la misma pericia la contadora dictamina que en lo que respecta al servicio de alimentos, comparando los precios de Ariel Zaballa y del señor Lorenzo Mormando, surge que los precios de Zaballa resultarían

ser superiores a los del proveedor Lorenzo Mormando en casi un 40 % (indica un 37,54 %).

En el legajo, a fs. 70/96 y 186/297, se pueden observar facturas de las empresas Flor de Lirio, SGT, Ariel Zaballa y Acqua Servicios S.R.L., emitidas a la UTE Panedile Tecma. A fs. 82/94 y 138/171 facturas por materiales de la empresa Codimat S.A.; y a fs. 95/96 facturas emitidas por las empresas Dante Lange por transporte de personas y Lorenzo Momando por servicio de viandas.

A fs. 99 y vta. obra copia de denuncia efectuada por el señor Guillermo Dante Marchese, quien da cuenta el día 9 de enero del 2018, que personas que pertenecerían al gremio de la UOCRA están bloqueando el acceso a la planta de tratamientos cloacales en la cual se encuentra trabajando la empresa Panedile Tecma.

A fs. 312/323 y 324/337 obran copias de correos electrónicos y conversaciones de Whatsapp entre la empresa Panedile y Ariel Zaballa, y de Panedile y la señora Lucía de SGT, relacionadas con la facturación entre ambas.

El anexo documental a legajo "N" contiene recibos de sueldo de la UTE Panedile Argentina y Tecma S.A., del año 2017.

En el anexo documental Legajo N también se puede advertir una copia certificada del expediente de construcción y/o demolición n°

421-S-2016, iniciado por SGT Soluciones en grupos de trabajo S.A., por la demolición de un inmueble en calle Donado 1958, iniciado el 4 de mayo del 2016, por la presidenta, Lucía Sanabria.

Del anexo Legajo Fiscal identificado con la letra "M" - Víctima: Pablo Alberto Quantín (VIAL AGRO S.A.), tengo en cuenta una acta acuerdo celebrada entre la UOCRA y la empresa Vial Agro S.A. (25 de septiembre del 2.017), en la que la última acepta pagar los días caídos durante la paralización de la obra luego del regreso normal para el día siguiente, como así también analizar un posible aumento de salarios. A fs. 11/25 facturas y documentación relacionada con la empresa Acqua por baños químicos. A fs. 26/44 obra documentación y facturas relacionadas con las viandas de Ariel Zaballa de EIS eventos. A fs. 45/48 documentación y facturas vinculadas con la empresa SGT soluciones en grupo de trabajo S.A.

La copia de escritura número ciento sesenta y uno: Acta de Constatación Vial Agro S.A. de fs. 54/56 y la copia simple de escritura número ciento veintidós de fs. 57/61, dan cuenta del estado de la obra ejecutada por Vial Agro S.A. la que se encontraba parada por reclamos laborales en septiembre del 2017, volcándose en las actas lo que mencionaban los representantes de la empresa y los delegados del gremio UOCRA, y lo que pudo constatar el escribano.

En el Legajo Fiscal identificado con la letra "L" - Víctima: Alejandro César Cowper (GEOMAC S.A.), se puede advertir a fs. 7/8 el

contrato celebrado entre la empresa y la municipalidad de Bahía Blanca, por la obra señalada por el señor Cowper al momento de prestar declaración testimonial en la audiencia de juicio.

En el legajo Fiscal identificado con la letra "K" - Víctima: Juan Manuel Moreno resulta de interés para estos hechos que se están analizando la denuncia efectuada por el señor Moreno ante el Ministerio de Trabajo, el acta de inspección efectuada por el Ministerio, Orden de Inspección N° 369726 (expediente 21507-25041-16/0) del MTPBA y la nota solicitando archivo de actuaciones ante el MTPBA -fs. 7/10 vta.; la copia simple de Acta acuerdo "Recambio de Cañerías en Bahía Blanca Módulo 5" Aguas Bonaerenses S.A. Comitente Solidario, de fs. 11/11 vta. en la que se instrumenta un acuerdo de un porcentaje del 35% por encima de la escala salarial del CCT 76/75 firmado entre Moreno y Walter Paiz en representación de la UOCRA; la nota de pedido de la empresa ABSA de fs. 13/15; y las copias de recibos de sueldo de fs. 16/52 donde consta el pago del 35% detallado como Ac. Uocra N/REM.

También computo lo que obra en el legajo Fiscal identificado con la letra "J" - Víctima: Martín Sánchez (KARPA S.A.), esto es, las copias de 7/12 donde surgen conversaciones entre el señor Sanchez y quien resulta identificado como Walter Pais Nuevo, en las que aparecen las mencionadas por el testigo al momento de prestar declaración en el debate. Así, a fs. 8 se observa que Walter Pais Nuevo escribe: “Están en tu empresa

los de la contra sacalos cagando y no les de listado de personal y fíjate quién lo dejó entrar” (conversación del 25 de noviembre del 2016); y otra conversación del 4 de diciembre del 2015, donde Walter Pais Uocra Bahía Blanca escribe: “el que va a pasar por el semento se llama hector de la torre”.

A fs. 6 obra el listado de candidatos a elecciones de la UOCRA; y a fs. 23 una tarjeta de la empresa Acqua baños químicos industriales.

Del legajo Fiscal identificado con la letra "I" - Víctima: Carlos Schlosser (SCHLOSSER INGENIERÍA), corresponde tener en consideración el croquis de fs. 6 donde se detalla una división de la ciudad en 4 zonas, mencionándose en una a los señores Burgos y Canale, en otra al señor Gutierrez, otra al señor Paiz y la restante al señor Molina. Se agrega afs. 7 copia de la lista de candidatos de la UOCRA para el período 21 de abril del 2017 al 20 de abril del 2021, figurando como Secretario General el señor Humberto Monteros, Secretario Adjunto el señor José Burgos, Secretario de Organización el señor Walter Paiz, Secretario de Difusión y Actas el señor Pablo Guiterrez y Secretario de Finanzas el señor Guillermo Molina; también aparecen como Vocales Titulares –entre otros- el señor Mario Gonzalez, el señor Sebastián Canales, y como vocales suplentes –entre otros- el señor Aníbal Aranda y el señor Sandro Erbín.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

A fs. 9 obra una copia de un acta firmada por el señor Sebastián Canales en la que requiere a la firma Schlosser Ingeniería presente en la sede del gremio, en el plazo de 48 horas, documentación, sin aparecer bien en claro que es lo que se solicita.

Como fs. 10/16 y 28/33 obran copias de los extractos de cuenta bancarios y observaciones con relación a los cheques emitidos, en los que aparece mencionada la UOCRA por una suma de 7.500 pesos.

A fs. 22/25 obra copia de la documentación que se refiere a un contrato entre la municipalidad de Bahía Blanca y las empresas que conforman la UTE Obras Abedul y Schlosser Ingeniería, por la intervención urbana en la avenida Guillermo Torres de Ingeniero White.

Con relación al legajo Fiscal identificado con la letra "H" -víctima: Diego Martín Cerra (CERRA Y MORO SRL), computo las copias de Orden de Compra N° 3747 de la Municipalidad de Bahía Blanca de fs. 13, la Nota S.P.y S.P. N° 801 de la Municipalidad de Bahía Blanca de fs. 14, la copia certificada de decreto N° 2326/2014 de la Municipalidad de Bahía Blanca de fs. 15, el acta de apertura Solicitud de Pedido N° 2952 de la MBB de fs. 16 que dan cuenta de la obra ejecutada por la empresa Cerra y Moro en la rotonda de la avenida Cabrera y calle Pilmaiquen de Bahía Blanca.

De interés resulta la factura de fs. 17, de la señora Estefanía Elizabeth Burgos, de fecha 7 de enero del 2.015, por la provisión de un baño

químico para la empresa Cerra y Moro. Se puede observar que el domicilio que se indica de la monotributista Burgos es en calle Rio Atuel 780, el cual resulta ser el mismo que el indicado en las facturas de la empresa Acqua, conforme se puede observar a fs. 23 en la factura de fecha 4 de mayo del 2015. A fs. 18/33 obra agregada más documentación respecto de la facturación de Estefanía Burgos o la empresa Acqua a la empresa Cerra y Moro, con el detalle de los cheques extendidos por la empresa Cerra y Moro y como beneficiarios las empresas antes indicadas. A fs. 39/41 obra documentación de la empresa Basani, también proveedora de baños químicos para la empresa Cerra y Moro, pudiéndose advertir que la facturación por unidad de Basani es para el mes de abril de 790 pesos, y la de la empresa Acquz, por el mismo mes es de 850 pesos.

A fs. 46 obra copia del acta del expediente N° 21507-24904-16 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, de fecha 23 de noviembre del 2.016, en la que José Burgo y Walter Paiz por la representación gremial, y los señores Diego Cerra, Roberto Gaveglio, Jorge Fonseca, Gustavo Evangelista, Andrés Medús y Cristian Ferro manifiestan que han arribado a un convenio por el cual las empresas se comprometen a abonar un premio extraordinario, por única vez, de 4.000 pesos, en 3 cuotas de 2.000, 1000 y 1000 respectivamente.

A fs. 56/58 obra el contrato de conformación de la UTE integrada por Carreteras 2000 S.A., Obras Abedul S.R.L., Cerra y Moro

S.R.L. y Coince Bahía S.A. para la realización de trabajos de rehabilitación y conservación de capa de rodamiento en rutas.

De interés resulta la pericia contable efectuada por la perito María Agustina Tennina –fs. 59/61 vta.- de la que surge que la empresa Basani Ecobahía S.A. factura por un precio menor por los baños que la empresa Acqua Servicios S.R.L., además de detallar como fue aumentando el valor de la locación de los baños de Acqua, muy por encima de la fluctuación de un tiempo anterior.

La factura del mes de noviembre del 2016 de la empresa Acqua Servicios S.R.L. por el alquiler de un baño por la suma de 12.396,70 (sin IVA9, factura A n° 0001-188, se corresponde con lo relatado por el señor Cerra en la audiencia de debate, cuando contó que el señor Burgos le solicitó dinero para las elecciones y le ofreció facturar la suma a nombre de Acqua, para que la empresa lo pudiese justificar contablemente. La documentación de fs. 62/66 y el informe del Banco Provincia de fs. 176 refleja lo expuesto y además se corresponde con la facturación y cheques librados a la empresa Acqua o a Estefanía Burgos y depositados por la mencionada en su cuenta corriente.

A fs. 69/175 obran copias de recibos de liquidación de haberes emitidos por la empresa Cerra y Moro S.R.L., consignando rubro "93 - PREMIO EXT. 2016".

También encontramos documentación de interés en el legajo Fiscal identificado con la letra "G" -víctima: Cristian Horacio Ferrero (CARRETERAS 2000 S.A.), ya que en este se puede advertir que a fs. 9/10 obra copia del acta firmada entre otros por el señor Ferrero –mencionado como Ferro- por el premio del año 2016 (con más detalle se mencionó en el legajo correspondiente al señor Cerra-. A fs. 15/23 obra copia de los correos electrónicos que contienen comunicaciones relacionadas con las obras en el predio del gremio UOCRA. A fs. 24/66 obra documentación y facturas por la contratación de baños químicos a la empresa Acqua. A fs. 68/70 vta. y 109/134 vta**.** se agregan copias de recibos de sueldo de la empresa Carreteras 2.000 S.A..

A fs. 71/105 se pueden observar órdenes de pago por cuenta de la empresa Carreteras 2000 S.A. y cheques relativos a la firma Acqua Servicios S.R.L.

Analizado el legajo Fiscal identificado con la letra "F" -víctima: Luis María Medús (OBRAS ABEDUL S.R.L.), del mismo podemos computar que la empresa mencionada tenía un listado de cheques y pagos realizados a algunos de los aquí acusados y a otras personas vinculadas al gremio de la UOCRA, conforme se observa en las planillas de fs. 9/20, y fuera comentado por el señor Luis María Medús al momento de prestar declaración testimonial en la audiencia de debate. El detalle comienza el 14 de julio del 2.006, mencionándose como primer receptor a Riffo, y luego más

adelante en las fechas, van apareciendo mencionados Montero en marzo del 2.008 –entre otras tantas menciones-, Erbin en noviembre del 2011, Molina en mayo del 2.012, Gonzalez en julio del 2013, Mario Gonzalez en agosto del 2014, Pablo Gutierrez en julio del 2017 y otras personas más.

A fs. 21/23 obra una imagen de una conversación de Whatsapp entre Guillermo Molina y Luis Medús, en la que hablan de encontrarse en la YPF de calle 9 de julio, y luego una consulta “que hago luis?”, a la que hiciera referencia el señor Medús al tiempo de prestar declaración en la audiencia.

De suma importancia resulta el informe de la Contadora Pública María Agustina Tennina, quien a fs. 35/36 vta. indica y relaciona los cheques mencionados en la planilla acompañada por el señor Medús y que tendrían vinculación con los retirados por los sujetos mencionados como integrantes del gremio UOCRA. A fs. 37/72 vta. obra el detalle movimiento bancario de la cuenta de Obras Abedul en el Banco Credicoop y a fs. 76/152 vta. el informe del Banco Provincia de Buenos Aires; e informe del Banco Credicoop de fs. 223/224 con copias certificadas de cheques librados contra la cuenta corriente de la firma Obras Abedul SRL de fs. 225/232; informe del Banco de la Pampa de fs. 266; informe del Banco Provincia de fs. 267/268; informe del Banco Nación de fs. 270/272.

En el nuevo informe de la Contadora Tennina –fs. 153/159 vta.- resulta de mucha importancia observar que varios de los cheques antes

identificados como entregados a integrantes de la UOCRA, resultaron cobrados en varias oportunidades por una misma persona, señalándose, en lo que aquí interesa, el cobre por parte del señor Raúl Erbin de 11 cheques, por parte del señor Guillermo Molina de 26 cheques (entre los días 31 de mayo del 2012 y el 21 de febrero del 2017), por parte del señor Omar Roca de 3 cheques y por la señora Luara Sepulveda de 6 cheques.

Como documentación a fs. 243/244 podemos observar el contrato de la UTE integrada por Obras Abedul y Schlosser Ingeniería por la obra en Ingeniero White; y a fs. 249/264 la documentación correspondiente al contrato de obra y certificaciones por los trabajos en calle Tres Sargentos.

También obra documentación aportada por Luis María Medús de fs. 284/291, 293/306 y 308/322 consistente en copia de planilla de cálculo titulada "OBRAS EN EL PREDIO UOCRA" conteniendo detalle de aportes de fs. 284; copia de planilla de cálculo titulada "Cotización Obra Predio UOCRA", relativo a cotización de obras de fs. 285.

Se observa a fs. 286/291 y 293/306 copia de recibos de liquidación de haberes emitidos por la empresa Obras Abedul.

Se agrega a fs. 337 nota de fs. 18 de octubre del 2011, remitida por el señor Humberto Monteros comunicando que por la ausencia por enfermedad del señor José Riffo, el mismo sería reemplazado por el señor Raúl Erbin.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

En el legajo Fiscal identificado con la letra "E" -víctima: Néstor Julio Teplitz (COINCE BAHÍA S.A.), podemos observar la copia de las actas de fecha 14 y 23 de noviembre de 2016, correspondientes al expediente N° 21507-24904-16 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires -fs. 10/11- relacionadas con el pago del premio en el año 2016.

A fs. 13 factura de la empresa Basani; facturas de la empresa Acqua Servicios SRL de fs. 14/15 y resumen de Cuenta Corriente correspondiente al proveedor Acqua Servicios SRL -fs. 16- de la empresa Coince S.A.; copia simple de Acuerdo Marco (sin suscribir) "Rutas Nacionales y Provinciales dentro de la seccional de UOCRA Bahía Blanca" de fs. 19/23; copia simple de Acuerdo Marco -sin suscribir- "Rutas Nacionales y Provinciales dentro de la seccional de UOCRA Bahía Blanca" ("Contra-propuesta presentada por la Delegación Bahía Bca de la Cámara Argentina de la Construcción") de fs. 24/29; a fs. 42/51 obra copia de documentación correspondiente a obras ejecutadas por la empresa Coince, mencionadas por el señor Teplitz al momento de prestar declaración testimonial; como así también recibos de liquidación de haberes emitidos por la empresa Coince Bahía S.A. de fs. 59/184; copia de intercambio de correos electrónicos recibidos en la dirección de correo electrónico tecnica@coince-sa.com.ar, correspondientes a la realización de tareas en el predio de la UOCRA de Bahía Blanca de fs. 185/198; copia de detalle contable interno de la Compañía Coince Bahía S.A., detallando facturas y

órdenes de pago relativas a servicios correspondientes a la firma Acqua Servicios S.R.L. de fs. 199; copia de facturas tipo "A" emitidas por servicios correspondientes a la firma Acqua Servicios S.R.L. de fs. 201/208; recibos de haberes de fs. 213/220, 222 y 224.

En lo que respecta a la documentación obrante en el legajo Fiscal identificado con la letra "D" -víctimas: LUIS G. CARCERENY y MANUEL CARCERENY (CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A.), resulta de sumo interés el informe obrante a fs. 21 y vta., en el que se detalla la desgravación de los audios aportados por el señor Gustavo Carcereny, en los que el señor Guillermo Molina (quien no desconoció estos audios al momento de prestar declaración, sino que les dio otro sentido a las frases y al contexto de los mismos) dice: “Gustavo, buen día…¿Tenés algo de las….de la documentación?”, “Como andas con lo mio?”, y otra en la que se solicita que le endose un cheque que se le venció, que le actualice la fecha de cobro; conversaciones de audios enviados entre los meses de mayo a septiembre del 2017.

A fs. 26/41 obra documentación relacionada con las obras ejecutadas por Carcereny, pudiéndose observar a fs. 40 la rescisión del contrato de mutuo acuerdo de la licitación pública 03/14 de Coronel Suarez por los problemas gremiales sin resolución que dificultan la concreción de la obra.

A fs. 42/43 obran fotografías en donde se observa un automotor blanco parado delante de un camión y una pancarta que dice UOCRA presente.

A fs. 62/74 se pueden observar correos electrónicos intercambiados entre la empresa Carcereny construcciones y Acqua servicios, en los que se pueden advertir conversaciones por el pago de facturas por los baños químicos entre Gisela por Carcereny y Estefanía por Acqua, pudiéndose además observar una serie de reclamos desde la empresa por la falta de limpieza de los baños químicos y las quejas recibidas por ese motivo por parte de los obreros –fs.70-.

A fs. 106/135 obran copias de recibos de haberes abonados por Carcereny.

La pericia de voz realizada por la Fonaudióloga María Peña y la Licenciada Alejandra Santos concluye que los audios aportados por el señor Carcereny y las voces que se cotejaron en el video somos noticia y con el video Molina del punto 2, se corresponderían con una misma voz.

Analizado el legajo Fiscal identificado con la letra "B" -víctima: Fabián H. Gurrado. (INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L.), entre las constancias que contiene, destaco de interés las copias de las actas acuerdo Proyecto "Barrio Procrear" de fs. 16/17; acuerdo marco "Rutas Nacionales y Provinciales dentro de la seccional de UOCRA Bahía Blanca"

de fs. 18/23, acta acuerdo proyecto "Recambio de cañerías en la ciudad de Bahía Blanca" - Aguas Bonaerenses S.A. Comitente Solidario de fs. 24/25; y las notas firmadas por el señor Pablo Quantín, de la Cámara Argentina de la Construcción, de fecha 09 de agosto de 2017, dirigidas a distintos organismos estatales y empresas prestatarias de servicios de gas y agua, en las que da cuenta de los distintos inconvenientes que tendrían los empresarios a partir de la conducta adoptada por integrantes del gremio UOCRA -fs. 26/34 vta.-.

La documentación de fs. 36/115 y 181/183 vta. se corresponde con distintas obras en la que interviniera la empresa Ingeniería y Arquitectura, y de las cuales han dado cuenta los testigos integrantes de esa empresa al prestar declaración en el juicio. A fs. 117/118 obra copia de las actas de fecha 14 y 23 de noviembre de 2016, correspondientes ambas a expediente N° 21507-24904-16 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires por el premio del año 2.016.

A fs. 126 se puede observar una copia de factura de Zaballa Ariel Edgardo; copia simple de factura de Bordenave Martín Julio de fs. 127; copia simple de factura de Flor de Lirio SRL de fs. 128; copia simple de factura de Rachi Mario Domingo de fs. 129; planilla de cálculo identificada como "VIANDAS PROCREAR - EIS EVENTOS" de fs. 131; copias simples de facturas tipo "A" emitida por la empresa EIS EVENTOS XL S.H. de fs. 132/147; copias simples de facturas tipo "A" emitida por Zaballa Ariel

Edgardo de fs. 148/161; planilla de cálculo identificada como "COMBIS PROCREAR" de fs. 163; copias simples de facturas tipo "A" emitida por la empresa Flor de Lirio SRL de fs. 164/171; planilla de cálculo identificada como "predio UOCRA" de fs. 178/179; y copias de recibos de haberes de fs. 184/264.

Del legajo identificado con la letra "A" -víctima: Rubén Edgardo Almada (ENTEGRO SOCIEDAD UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -Sociedad Extranjera) corresponde tener en consideración distinta documentación incorporada por lectura al debate, entre otra, la de 6/23, que contiene facturas emitidas por la empresa Flor de Lirio por viajes y Ariel Zaballa por viandas; informe de Pampa Energía S.A. de fs. 108/274 en el que se da cuenta de los trabajos de la empresa Entegro S.R.L.

En la I.P.P. 02-00001077-17/00 agregada por cuerda obra la denuncia –fs. 2- efectuada con fecha 17 de enero del 2017, en la que el señor Rubén Edgardo Almada señala que es empleado de la empresa Entegro y que recibió un llamado de Pablo Gutierrez, perteneciente al gremio UOCRA, quien le dijo que por no tener respuesta de la empresa le iban a realizar un escrache en su domicilio, quemando ruedas y quemándole la casa, agregando “que se abstenga a las consecuencias”. Deja constancia que le mencionó que el denunciante sólo era empleado, ante lo cual el interlocutor le dijo que no le importaba, que le iban a realizar el escrache al día siguiente.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

En lo que respecta al anexo caratulado legajo Fiscal Principal corresponde computar la siguiente prueba incorporada por lectura a la audiencia de juicio: en especial, se puede apreciar a fs. 384/385 la denuncia realizada por el señor Cristian Gabriel Jesús Vinet, con fecha 10 de mayo del 2016, la que diera inicio a la I.P.P. n° 8376/16 y en la que expone que hace dos meses viene sufriendo hechos y amenazas que ponen en riesgo su vida y la de su familia; que hace un mes le prendieron fuego la camioneta Chevrolet de su propiedad y con anterioridad había recibido amenazas –hecho que ya había denunciado-, y que lo han llamado a su teléfono y le han dicho “que me deje de joder con el gremio”, “que no lo iba a contar”, en varias oportunidades. Relató que “El suscripto es presidente de la agrupación “ASOC” y miembro de la “ASOCIACIÓN GREMIALES UNIDAS PARA EL OBRERO CONSTRUCTOR” que nuclea las distintas agrupaciones de la construcción de Bahía Blanca y la zona y que vela por los derechos de todos los trabajadores para resguardarse de la conducción dictatorial del Secretario actual de Bahía Blanca del Sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina –UOCRA- Humberto Monteros”. Luego expone inconvenientes con las políticas de Monteros, indicando que hay trabajadores que no consiguen trabajo por no pertenecer a su ideología, cuestionando además que no velan por los derechos de los trabajadores. Expuso que “Las amenazas son concisas en cuanto quieren que dejemos de participar para proteger a nuestros compañeros. A

diferencia de los dirigentes de la UOCRA local como Monteros, Burgos, Molina entre otros, la agrupación de la que formo parte viene actuando a derecho y formulando todas las denuncias correspondientes.”.

Del informe de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios de fs. 428/469 surgen los vehículos registrados a nombre del señor José Bernardo Burgos (KIB305 y 311AIC) y sus familiares, como así también a nombre de Acqua Servicios S.R.L. (dominios AB138RP y OZR701), y a nombre del señor Humberto Arnaldo Monteros (PGK 365) y sus familiares, y Flor de Lirio S.R.L. (AA674GW, IYD249, JJN160, KAN673, KGI000, KRR670, LHN501, LSM695, MAF999, NPZ104 y PCR551).

En el informe de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de fs. 511/561 y 562/616 se puede advertir las distintas integraciones de la cúpula directiva del gremio UOCRA seccional Bahía Blanca desde el año 2005 al 2021, constando que desde el 2005 el cargo de Secretario General fue detentado por el señor Humberto Monteros hasta el 2017, que el señor José Bernardo Burgos fue segundo vocal titular desde el período 21 de abril del 2009, ocupando el cargo de Secretario adjunto desde el período que comienza el 21 de abril del 2.013; siendo Guillermo Molina el Secretario de Finanzas de ese período, Sergio Vasquez, Walter Paiz, Néstor Rivas, Raúl Erbín vocales y Sabino Ríos y Carlos Carrillo congresales; y para el período que comenzara el 21 de abril

del 2017 –en lo que aquí interesa- aparecían también en la comisión el señor Monteros como Secretario General, el señor Burgos Secretario Adjunto, el señor Paiz Secretario de Organización, el señor Pablo Gutierrez Secretario de Difusión, el señor Molina Secretario de Finanzas, como vocales Mario Gonzalez, Sebastián Canales, Roberto Limpiante, Aníbal Aranda, Sandro Erbín y Carlos Carrillo como congresal suplente, entre otros de los que integraban las distintas comisiones ejecutivas.

Se da cuenta en el informe que la Seccional Bahía comprende los partidos de Adolfo Alsina, Coronel Pringles, Saavedra, Puan, Torquinst, Villarino, Coronel Suarez, Coronel de Marina L. Rosales, y Carmen de Patagones, contando con una delegación en Suarez.

También se detallan los distintos delegados y subdelegados en las empresas, apareciendo mencionados, entre otros, los señores Anibal Aranda en Centro construcciones, Damián Cabrera, Sebastián Canales, Raúl Erbin, Carlos Carrillo, Mario Gonzalez, David Muñoz, César Paiz, Néstor Rivas, Marcos Tevez, Sabino Ríos, José Bernardo Burgos, Walter Rafael Paiz, Sergio Vasquez, Cristian Vinet.

A fs. 547 se puede observar el detalle de los ingresos del señor Burgos desde el mes de enero del 2010 al mes de octubre del 2017. A fs. 549 obran los ingresos de Pablo Gutierrez.

En la foja 550 se encuentra el detalle de los ingresos del señor Guillermo Molina (mayo del 2013 a octubre del 2017).

A fs. 551/552 podemos observar el detalle de ingresos del señor Monteros desde enero del 2005 hasta octubre del 2017.

A fs. 555 obra el detalle de ingresos del señor Mario Gonzalez desde mayo del 2013 a octubre del 2017.

A fs. 556 el detalle de Sergio Vazquez y como foja 561 se aprecia el detalle de fondos girados a la seccional Bahía Blanca desde el año 2005 al 2017.

De los informes del RNPA nro. 6 de Bahía Blanca de fs. 634 con formulario nro. 03 y contrato de prenda de fs. 635/639 vta., e informe del RNPA nro. 2 de Bahía Blanca de fs. 640 y fs. 647 con documentación anexa consistente en formulario nro. 03 y contrato de prenda de fs. 641/646 y fs. 648/651 se obtiene un detalle de vehículos registrados a nombre de Flor de Lirio S.R.L..

Del informe de ARBA de fs. 652/653 se puede extraer que el señor José Burgos es titular de la partida 59746 de Bahía Blanca, Río Atuel 780 y Río Atuel 784; la empresa SGT Soluciones en grupo de trabajo S.A. es titular de la partida 49061 de la calle Donado 1958 de Bahía Blanca, el señor Humberto Monteros de la partida n° 291 de Monte Hermoso y la empresa Flor de Lirio S.R.L. con domicilio en Donado 1970, es titular de las

partidas 12548, 12549, 12550, 12551, 12552, 12553, 12554, 12555, 12565, 12566, 12567, 12568, 12569, 125790, 12571, 12572 del partido de Monter Hermoso.

De la documentación agregada a fs. 656/658 surge que el vehículo dominio OMS840 que aparece en la fotografía frente al local de la MUOCRA pertenece al señor Pablo David Gutierrez, tratándose de una camioneta Toyota Hilus 4x4 c/d pack eléctrico 2.5 tdi.

Del informe de Cesvi Argentina surge que el señor José Bernardo Burgos ha tenido asegurados a su nombre una camioneta VW Amarok patente KIB305, una Ford Ranger xl 3.0 dominio KXC625, un Kia Cerato dominio NAO671 y un VW Gol dominio HTP866; la empresa Acqua servicios una Chevrolet Silverado BOG 741 y un Kia K dominio OZR 701; la señora Lucía Sanabria una Gilera 228kkx, un Panther 599JPV, y una VW Amarok OJJ 182; el señor Humberto Monteros una Peugeot 208 dominio PGK 365, un Peugeot 307 dominio GOO 090, una VW Amarok dominio JHR 281; y la empresa Flor de Lirio S.R.L. M. Benz Sprinter dominios HST 057, IYD 249, JJN 160, KAN 673, KGI 000, KRR 670, LHN 501, LSM 695, NPZ 104 y MAF 999, y un Fiat Doblo NVO 412.

Del informe del municipio de Bahía Blanca de fs. 23 de noviembre del 2017, obrante a fs. 663/666 surge que el señor Humberto Monteros participó del plan Jefes de Hogar desde el período Agosto del 2.002 hasta Agosto del 2.008 donde recibió la baja, por un importe que va

desde los 150 a los 160 pesos mensuales (a fs. 722/727 obra la resolución que crea el programa Jefes de Hogar y para quienes está destinado).

La impresión de consultas efectuadas al NOSIS de fs. 729/753vta. aporta un detalle de los acusados.

De suma importancia resulta el informe de la perito Contadora María Agustina Tennina, quien analizó la información remitida por la AFIP y pudo establecer, entre otras cuestiones de interés, que el señor José Burgos tiene domicilio fiscal en calle Rio Atuel 780 de Bahía Blanca y que es integrante de la Asociación Mutual Construcción Solidaria; que la señora Estefanía Burgos tiene domicilio fiscal en Rio Atuel 780, integra la sociedad Acqua Servicios SRL y además es socia de la Asociación Mutual Construcción Solidaria y ha sido dependiente de la UOCRA desde el 07/2001 al 10/2013; que la señora María Laura Burgos tiene domicilio legal en calle Rio Atuel 780 y está en relación de dependencia de la UOCRA desde el 06/2010 al 01/2017; que la señora Analía Belen Burgos tiene domicilio legal en Rio Atuel 780 e integra la sociedad Acqua SRL; que el señor Nahuel Eduardo Burgos tiene domicilio legal en Rio Atuel 780 e integra la sociedad Acqua SRL; que la empresa Acqua Servicios SRL tiene domicilio legal en calle Rio Atuel 780 encontrándose relacionado el CUIT de la sociedad con el de las señoras Estefanía, María Laura y Analía Burgos y con el señor Nahuel Burgos.

Del informe contable surge también que la señora Lucía Teresa Sanabria tiene domicilio legal en calle Teniente Farias 2947 de Bahía Blanca e integra las sociedades SGT Soluciones en Grupos de Trabajo SA y Flor de Lirio SRL. Luego se encuentran detallados que informó dos lotes de terreno, 3 casas, un automóvil, un cuatriciclo y dos furgones marca Mercedes Benz.

Se detalla que respecto de la sociedad Flor de Lirio SRL surgen como integrantes la señora Lucía Teresa Sanabria, el señor Raúl Agustín Sanabria y el señor Matías Juan Monteros, siendo la misma titular de 15 vehículos.

En relación a la empresa SGT Soluciones en grupos de trabajo SA se menciona que tiene el mismo domicilio fiscal que Flor de Lirio SRL en calle Donado 1970, estando integrada por los mismos tres socios que integran Flor de Lirio SRL, con más el señor Víctor Roman Sosa Rivero; siendo titular la sociedad de 14 vehículos.

De la causa principal, luego de analizar la prueba incorporada al debate por su lectura, a partir del expreso consentimiento de las partes, tengo en consideración distinta documentación, parte de la cual ya he comentado y analizado en los párrafos precedentes, dado que se repite en los legajos confeccionados como anexos por parte del Ministerio Público Fiscal.

En particular he considerado las actas de allanamiento en la sede sindical de la UOCRA subdelegación Coronel Suarez de fs. 859/860 y 863/864; el acta de allanamiento en las sedes de las empresas SGT Soluciones en grupos de trabajo y Flor de Lirio SRL de fs. 869/870; 871/876 vta. con documentación de fs. 877/884; acta de allanamiento y detención de Humberto Arnaldo Monteros de fs. 886/889 vta.; informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires de fs. 1991; informe de la DICOM de fs. 2025/2028; acta de apertura de secuestro de fs. 2090/2095 vta.; copia certificada de Resolución N° 19/17 de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina de fs. 2113; actas de diligencias de apertura de secuestros instrumentadas por funcionarios de la PGSCBA de fs. 2131/2133 vta. y de fs. 2134/2135 vta.; actas de apertura de secuestros de fs. 2845/2853 vta.; 2861/2862 vta. y 2863/2864 vta.; copia certificada de documentación aportada por Raúl Ernesto Erbin de fs. 3215/3304; acta de apertura de secuestro de fs. 3559/3560 con copia simple de acta correspondiente a expediente 21507-21838-16-00 del MTSS de fs. 3561; informe del Banco Itaú de fs. 3592; informe del Banco Saenz de fs.3596, 3598 y 3599; informe de FCA compañía financiera de fs. 3671; informe del Banco Credicoop de fs. 3702/3703; informe del Banco Macro de fs. 3738/3739; detalle de movimientos de cuenta bancaria judicial de fs. 3764; informe de la Dirección de Análisis en la Investigación de las Comunicaciones de fs. 3766/3785; informe del Banco Galicia de fs.

3808/3808 vta.; informe del Banco Patagonia de fs. 3809; informe del banco ICBC de fs. 3813; informe de la entidad "Efectivo Si" de fs. 3865; informe de AFIP de fs. 4110/4111; informe del Banco Hipotecario de fs. 4120; informe del BLP de fs. 4182/4183; informe del BNA de fs. 4184/4188; acta de apertura de secuestros de fs. 4205/4208; informe actuarial de fs. 4214/vta. con copias certificadas de escritura N° 173 de fs. 4215/4237; impresiones de página web ARBA de fs. 4238/4245; Informes del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 4247/4255; informe del Banco Credicoop de fs. 4257; constancia del BNA de fs. 4261/4262; constancias del BNA de fs. 4330/4334; recibos de sueldo de la firma Flor de Lirio SRL de fs. 4335/4345; planes de pago de impuesto municipal de SGT de fs. 4346/4347 y de Flor de Lirio de fs. 4348/4349; constancia de datos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Bahía Blanca de fs. 4350; planilla detalle de plan de pagos AFIP de la firma Flor de Lirio de fs. 4351/4353 e impresión de página web AFIP de fs. 4354/4367; planilla detalle de plan de pagos AFIP de la firma SGT de fs. 4368/4370 e impresiones de página web AFIP de fs. 4371/4386; informes NOSIS de fs. 4389/4421; copia de resumen de cuenta bancaria del Banco Galicia de fs. 4445 /4447; informe del BLP de fs. 4468/4470; informe del BN de fs. 4471; informe del BNA de fs. 4471/4472; informe del Banco Hipotecario de fs. 4478; informe nominal del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 4479; informe del Banco Credicoop de fs. 4482; copia certificada de acta constitutiva y contrato social de ACQUA SERVICIOS SRL

de fs. 4457/4492; informes del BNA de fs. 4511/ 4512 y fs. 4520/4521; informes de tasación de inmuebles de fs. 4513 y fs. 4519; informes de anotaciones personales de fs. 4514/4515 y 4522/4523 vta.; informes de dominio de fs. 4516/4518vta. y de fs. 4524/4568 vta.; informe del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 4591; informes del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 4597/4599; informe de la MBB de fs. 4606/4613; informe del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 4637; Informe del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 4651; informe del Banco Citi de fs. 4653; informes del Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia. de Bs. As. de fs. 4666/4676; Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 4681/4682; informe del BNA de fs. 4683/4684; impresión de nosis de fs. 4690/4699; informe del Banco Provincia de fs. 4729; informe del Banco Patagonia de fs. 4732; convenio de honorarios y representación de fs. 4736; consulta de saldo de cuenta judicial de fs. 4737; acuerdo conciliatorio de fs. 4738/4739; impresión de consulta de Mesa de Entradas Virtual de la SCBA de fs. 4740/4742; copia simple de convenio de honorarios de fs. 4744; informe del banco Macro de fs. 4836; informe del banco HSBC de fs. 4852; informe del banco Macro de fs. 4860; informe del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires delegación Coronel Suárez de fs. 4905/4952; informe del Banco Credicoop de fs. 4966; informe del Banco de La Pampa de fs. 4973; informe del BCRA de fs. 4974/4978; pericia contable de fs. 4985/5033; informes de NOSIS de fs. 5041/5043 vta.; informe del banco

Credicoop de fs. 5049; informe de LIDERAR compañía de Seguros de fs. 5050; informes de dominio de fs. 5051/5065; informe pericial de fs. 5077; informe pericial del Gabinete Informático de la PGSCBA de fs. 5078/5079 vta.; informe de la Asesoría Pericial Departamental La Plata -sección Cotejo de Voz y Habla- de fs. 5081; informe del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Delegación Regional Bahía Blanca de fs. 5082/5084 vta.; informe del BBVA Francés de fs. 5095/5096; informe de AFIP de fs. 5098; copia simple de acta de directorio de STRADI VIANDA S.A. de fs. 5142; informe del Banco Patagonia de fs. 5155/5257; informe de ANSES de fs. 5271; informe de AFIP de fs. 5272/5272 vta.; notas con membrete de UOCRA dirigido al Delegado a cargo de la Delegación Coronel Suárez del MTPBA de fs. 5301 y 5302; copia simple de acuerdo marco de fecha 18/06/2016 (expte 51507-22245-16-00) hojas 1 a 9 de 21 obrantes a fs. 5303/5311; copia simple de resolución del MTPBA en expte. 21507-0020125-15-00 homologando acuerdo de fecha 05/08/15 obrante a fs. 5312; copia simple de acta acuerdo de fecha 05/06/2015 obrante a fs. 5313/5318 con anexo I obrante a fs. 5319/5321; copias simples de notas con membrete de UOCRA solicitando al MTPBA inspección de seguridad e higiene y laboral a la empresa Cerra y Moro de fs. 5322 y 5323; copia simple de nota con membrete UOCRA intimando a la empresa CERRA Y MORO obrante a fs. 5324; copia simple de planilla CyMAT de fs. 5325/5329; copias simples de fotografías de fs. 5330/5336; copias simples de notas con

membrete UOCRA solicitando al MTPBA inspección laboral y de seguridad e higiene a empresa Carcereny Construcciones SA de fs. 5337 y 5338; copia simple de nota con membrete UOCRA, intimando a la empresa CARCERENY CONSTRUCCIONES obrante a fs. 5339; copia simple de planilla CyMAT de fs. 5340/5343; copia simple de planilla UOCRA de fs. 5344; copia simple de actuaciones CYMAT 17-941 empresa OBRAS ABEDUL SRL de fs. 5345/5353; copias simples de nota con membrete UOCRA dirigida al MTPBA solicitando inspección de seguridad e higiene y laboral a empresa Ingeniería y Arquitectura SRL de fs. 5354 y 5355; copia simple de nota con membrete UOCRA intimando a empresa INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SRL de fs. 5356; copia simple de planilla CyMAT 17-891 de fs. 5357/561; copias simples de notas con membrete UOCRA solicitando al MTPBA inspección de seguridad e higiene y laboral a empresa COINCE de fs. 5362 y 5363; copia simple de nota con membrete de UOCRA intimando a empresa COINCE Bahía SA de fs. 5364; copia de planilla CyMAT 15-640 de fs. 5365/5368; copias simples de notas con membrete de UOCRA dirigidas al MTPBA solicitando inspección laboral y de seguridad higiene a JULIAN ALLENDE de fs. 5369 y 5370; copia simple de nota con membrete UOCRA intimando a Julián Allende de fs. 5371; copias simples de planilla CyMAT 15-642 de fs. 5372/5376; copias simples de notas con membrete de UOCRA dirigida al MTPBA solicitando inspección de seguridad e higiene y laboral de empresa VIAL AGRO S.A. de fs. 5377 y 5378; copia

simple de nota con membrete de UOCRA intimando a empresa VIAL AGRO de fs. 5379; copia simple de planilla CyMAT 17/087 de fs. 5380/5383; copia simple de resolución expte. N° 21516-0008029-15-00 del MTPBA delegación Coronel Suárez de fs. 5384/5385; copia simple de acta correspondiente a audiencia celebrada en el MTPBA delegación Coronel Suárez entre representantes de UOCRA y de firma CARCERENY CONSTRUCCIONES de fs. 5386; copia simple de nota dirigida al MTPBA de fs. 5387/5389; informe de ARBA de fs. 5414; impresión de correo electrónico con informe de UOCRA delegación Central de fs. 5416/5421; informe de UOCRA delegación central de fs. 5431/5438; informe pericial Dirección Provincial de Vialidad de fs. 5451/5464; informe de los Instructores Contadores de la PGSCBA de fs. 5549/vta. con impresiones de archivos obtenidos en pericia informática de fs, 5550/5579; informe del BNA de fs. 5581/5664; impresión de informe de UOCRA delegación central remitido por correo electrónico de fs. 5666/5667; informe de UOCRA central de fs. 5668/5672; informe del Sr. Instructor Contador de la PGSCBA de fs. 5697; acta correspondiente a procedimiento de extracción de información de equipos de telefonía celular, de fs. 5699/5705 vta.; informe de la Asesoría Pericial La Plata de fs. 5706; informe de UOCRA de fs. 5742; informe actuarial de fs. 5810/5812 con impresiones de pericia efectuada sobre teléfonos celulares de fs. 5813/5868; informe de la Dirección de Casos Especiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de

fs. 5872; impresiones de NOSIS de fs. 5877/5881; informe de NOSIS de fs. 6500/6504; e informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires de fs. 7044. Como así también el acta de allanamiento en sede de la MUOCRA de fs. 817/818 y fs. 819/821, el acta de allanamiento en las sedes de las empresas SGT Soluciones en grupos de trabajo y Flor de Lirio SRL de fs. 869/870; 871/876 vta. con documentación de fs. 877/884; y el acta de allanamiento y detención de Humberto Arnaldo Monteros de fs. 886/889 vta.; y las fotografías de fs. 893/896.

También se puede observar que se ha incorporado como prueba al debate los anexos documentales I y II con la información remitida por los registros de la propiedad automotor; el "ANEXO DOCUMENTAL -copias certificadas expedientes Ministerio de Trabajo, Delegación Tres Arroyos- I.P.P. 02-00-017215-17/00 UFIJ 10 CONTIENE: copia certificada de los expedientes nro. 0021547-0001309-17-000; 0021573-0009647-17-000; 0021573-0009098-17-000 y 0021547-0000961-17-000, provenientes del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Tres Arroyos (cf. expedientes 3065-18 y 3146-18); y los anexos documentales con las pericias sobre los teléfonos celulares de los señores Sergio Daniel Vasquez, Nelson Damián Cabrera, José Bernardo Burgos, Humberto Arnaldo Monteros y Pablo David Gutierrez.

De interés resulta una conversación que puede observarse entre Pablo Gutierrez (abonado 5492915053100) y otro sujeto que se encuentra agendado como "Rafita Panedile" (abonado 5492916465580) donde Gutierrez escribió:"... te preguntan si la planta esta parada y después respondés que esta parada y es la medida de fuerza ahí esta el tema", "Nunca parada y medida de fuerza siempre de asamblea informativa", "O asamblea o asamblea permanente ellos pueden aducir que estan de paro" "Y cuando la radio te pregunta estan parados? La respuesta es no, parados no ... de asamblea". En otro mensaje de voz, Gutierrez dice: : "... Lo que nosotros nos tenemos que cuidar es de "no paro no ...", sino "asamblea".

Del anexo correspondiente al celular del señor Vasquez corresponde apuntar una conversación que se observa entre el mencionado y un sujeto identificado como Tato en la agenda, ocurrida el 27 de septiembre de 2017 donde se puede leer:Tato: "Hipocrecía en el estado mas puro. ¿Por qué no sale el sr Humberto Montero a hablar? ¿Por qué no cuenta como se hace siendo un 'simple obrero' para adquirir una flota de combis (todas 0 km) las cuales trabajan en su empresa Flor de Lirio, por qué no cuenta como se hace para poner una casa de venta de ropa para trabajo en calle Donado, por qué no cuenta como hizo para adquirir los baños químicos, por qué no cuenta como arregló con Eys y Stradivarius por la comida que dan en las obras, por qué no cuenta como generó el ingreso para adquirir los camiones, por qué no cuenta como logró construir cinco

casas en Monte Hermoso, por qué no cuenta sr Montero?"; y Sergio Vásquez: "porque no cuenta la casa de calle Honduras o la de Corrientes o la de 9 de Julio o la de Charlone o la de Viajantes del sur o la de Quilmes o la de Donado 1960 el caserón de Spurr o el local de calle Matheu o el terreno en calle Paraná"; Tato: "mas todavía, el Pata es un poroto".

De la causa 1140/19 agregada por cuerda, I.P.P. n° 572/18, resulta de sumo interés observar que al momento de llevarse adelante la diligencia de allanamiento para detener al señor Humberto Monteros, la que se concretó en el domicilio sito en la calle Río Iguazú -entre el 400 y el 500 de las numeraciones catastrales- de la localidad de Monte Hermoso, se halló en una de las habitaciones de la vivienda: una escopeta calibre 16 de dos caños, marca "Damas Tric", la cual tenía recortados ambos caños a los 35 centímetros (arma de fuego de uso prohibido), 18 cartuchos calibre .22 marca CBC, 14 cartuchos calibre .22 marca Orbea (OA), 21 cartuchos calibre 16 marca Orbea, 19 cartuchos calibre 12.70 (12) marca Remington, 22 cartuchos calibre 12 marca GBL PLUS, 12 cartuchos calibre 12 marca UEE, 19 cartuchos calibre 7,62 por 51 milímetros marca FLB, 58 cartuchos calibre 44 marca CB, 14 cartuchos calibre .38 Special marca CBC y un cartucho .357 Magnun.

También se incautó una pistola marca Browning calibre 9 milímetros, con número de serie 0273250 (arma de fuego de uso civil

condicional -guerra-), 14 cartuchos 9 milímetros marca CBC, y otros 24 cartuchos calibre 9 milímetros marca FLB.

Se secuestró sustancia estupefaciente (cocaína) y una máquina contadora de billetes profesional con detector.

Surge del acta de allanamiento el secuestro de distintas sumas de dinero, las que fueron encontradas en distintos sitios, a saber, una caja con la inscripción Virginia con 670.000 pesos, una valija marca Unicorn con 1.725800 pesos y 5.000 dólares, en una valija marca Dudley con 941.210 pesos y 20.000 dólares, en una valija marca Polaris con 1.068.850 pesos y 20.000 dólares, en un bolso marca Sport Kimera con 550.000 pesos, un maletín Pierde Cardin con 295.030 pesos y 43.200 dólares.

También detalla el acta que al momento de requisarse al señor Monteros se le secuestró del bolsillo de su pantalón la suma de 8.900 pesos, y se incautó una caja fuerte marca Zurich, la que al ser abierta en una diligencia pericial posterior permitió encontrar una importante cantidad de dinero, especialmente dólares por el valor de los mismos en nuestro mercado, los que se ilustran en las fotografías a las que ya hicieran mención con anterioridad.

Es así entonces que producto del allanamiento al momento de la detención del señor Monteros se logró secuestrar más de 5.000.000 de

pesos y más de 500.000 dólares en dinero en efectivo, en la vivienda donde se encontraba en la localidad de Monte Hermoso.

De importancia para establecer la existencia de esta organización y la conexión entre los distintos actores con otras personas vinculadas familiarmente, resultan los contratos de locación de servicio que el señor Agente Fiscal le hiciera observar al señor Guillermo Molina en la audiencia de debate, y respecto de los cuales el señor Molina reconociera su firma (la que está certificada por un escribano), aunque dijo desconocer el contenido del texto de los documentos. En estos contratos de fecha 23 de agosto del 2012 y 1 de octubre del 2013, se indica el vínculo contractual de locación de servicios celebrado entre Soluciones en Grupos de Trabajo S.A., con domicilio en calle Donado 1970, representada por Lucía Teresa Sanabria –según certificación de firmas- y la Asociación Mutual Construcción Solidaria, con domicilio en calle Villarino 250, representada por el señor Guillermo Esteban Molina –según certificación de firmas-, en las que el locador (empresa SGT), en el primer contrato, señala que le prestará al locatario los servicios de traslado de personal desde los domicilios particulares hasta el predio de la Asociación Mutual (se detallan demás condiciones del contrato, recorridos, horarios, etc.); y en el segundo contrato entre las mismas partes, el locador prestará al contratante servicios de traslado de personal en una combi de 19 asientos desde los domicilios que se denuncien hasta la obra y viceversa.

Se menciona en el primer contrato un tiempo de duración de dos años (24 meses), y en el segundo una duración de 6 meses, prorrogables.

El testigo Julio Cesar Irigoyen relató que es sub comisario de la división casos especiales e investigaciones en función judicial. Que a fines del 2017 lo convocan para constatar domicilios de los causantes y las empresas. Trató de establecer los domicilios de Acqua servicios industriales, SGT, Flor de Lirio, Strady viandas y otras empresas más.

Que fue hasta calle Río Atuel al 700 y ahí verificó que Acqua no funcionaba en el lugar. Que obtuvo información de que se encontraba en calle Suiza al 900 y fue hasta el lugar, donde no había publicidad, pero sí un galpón. Que consultó y salió una persona que por las fotos sería Burgos, a quien le preguntó por el alquiler de baños, quien le dio unos folletos y le explicó el sistema de baños, diciéndole que se comunicase con Laura u otra empleada para concretar el alquiler.

Que como tenía que constatar el domicilio de Burgos lo siguieron desde ese lugar, conduciendo Burgos una camioneta nueva de color blanco hasta la calle Vieytes al 800, donde se encuentra un edificio y luego constataron que vivía en el octavo piso, junto con una mujer embarazada.

Señaló que por la empresa SGT fueron a calle Donado al 900, que en el lugar no había publicidad que indicara que Flor de Lirio funcionaba en el sitio, pero salió una señora a tirar basura, la tomaron, revisaron y por la documentación, facturas y papelería que encontraron pudieron establecer que ahí funcionaba Flor de Lirio, la empresa de viandas Strady Viandas y SGT de ropa de trabajo.

Que llamaron a SGT para contratar un servicio de combi, y luego se comunicó una mujer, quien les informó que Flor de Lirio funcionaba en ese lugar, por lo que pidió una combi para un casamiento y como la querían ver fue al lugar. Que lo particular en el lugar era que llegaban personas y se quedaban afuera hasta que llegaba una mujer y abría. Que luego advirtieron que las personas que trabajaban en una construcción al lado, los albañiles también esperaban a esta mujer, por lo que se estableció que la obra de al lado pertenecía a la misma persona. Que se ofició al número de expediente y a Edes, y también al servicio de contenedores y esos resultados se adjuntaron a la causa.

Que con respecto a Ríos no lograron constatar su domicilio para el momento de la detención y allanamientos. Que sí establecieron que Molina vivía en calle San Martín al 500.

A la doctora Stacco le contestó que constataron los inmuebles de las personas y las empresas. Que Strady viandas y SGT tenían información, pero no podían encontrar a Flor de Lirio, y fue ahí en los restos

de la basura que vieron documentación a nombre de Sanabria Teresa, y tenían información que en Monte Hermoso la camioneta de la señora de Monteros estaba a nombre de Teresa Sanabria y esa camioneta fue vista en Rio Azul donde vivía Monteros.

Al doctor Jara le dijo que no sabe porque se apresuraron los allanamientos, que les pidieron que el informe se presentara lo más rápido posible, y como son dos en la unidad investigativa y tienen por eso pocos recursos, fue que se demoraron en los informes. Que él desconoce los motivos por los cuales le piden el informe. Que las tareas de investigación empezaron con los oficios que recibieron y en los que se pedían medidas. Que realizó más de tres informes con relación a la causa, que no sabe a qué corresponde el informe del 25 de noviembre, a que tareas se refiere y si fueron realizadas para él.

Que no recuerda exactamente, que la constatación fue en noviembre y diciembre, y cree que un par de meses antes recibió algún oficio y seguramente han producido algún informe o trabajo, medidas de investigación.

El informe de fs. 668/680, el anexo fotográfico y documental de fs. 681/720 y el informe de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial - Departamento de casos especiales, de fs. 828/905 del legajo fiscal principal se corresponde con lo relatado por el oficial Irigoyen en la audiencia, pudiéndose observar la documentación de fs. 675/677 que

utilizara el testigo para vincular a las empresas Flor de Lirio y SGT y la señora Sanabria y el señor Monteros.

El testigo Ricardo Adhemar Rodriguez dijo que conoce a los acusados por su rol como interventor del gremio, que a algunos los conoce de antes por su función como secretario general de la seccional Trenque Lauquen, donde se desempeña en ese rol desde hace 45 años.

Que lo convocó la comisión directiva nacional como interventor de la sede Bahía Blanca, donde ya había estado en los años 2004/2005 cuando había en Bahía dos gremios paralelos, la UOCRA 1 y 2, que en el 1 estaba él como interventor, que era el genuino, y en el otro Vallejos, que había sido destituido pero no quería acatar la orden.

Que cuando asumió esta segunda intervención en octubre estaban como autoridades los acusados y algunos más, que los conocía por los congresos del gremio, por ser secretario general de la seccional Trenque Lauquen, siendo a Monteros a quien más conocía, conociendo al resto durante su intervención.

Refirió que le llamó la atención de la auditoría que se hizo que no encontró nada que objetar. Que lo único es que no habían sido retirados los presupuestos que tenía el gremio asignados para manejarse, y que con esos presupuestos junto a la comisión directiva nacional compró un auto 0 kilómetro y quedó plata en caja que no había sido retirada. Que el corte de

auditoría dio que no había objeción contable en la seccional. Que le llamó la atención que no se hubiese utilizado el presupuesto, con el cual se cubren gastos de reparación de vehículos y otros costos edilicios y de gestión. Que en este caso la obra social está separada del gremio. Que no sabría decir con qué se afrontaban los gastos para el funcionamiento del gremio, que supone que con fondos propios de la comisión pero no lo puede aseverar.

Apuntó que su seccional representa un 22 o 25 por ciento en relación a lo que es Bahía Blanca, que su zona si no tiene obra pública no la pasa bien. Que en la intervención intentó la libre elección y libre presentación de listas para delegados, que antes no sabe cómo era, y que en algún momento alguien que tenía que ser reelegido fue al gremio y le alcanzó toda la documentación firmada en el gremio y se la rechazó y luego realizó la convocatoria como correspondía y esos delegados que se habían presentado como si hubiese habido una elección no fueron los que ganaron; que en ese caso en particular no hubo elección, luego convoqué, se hizo y eligieron a otros. Que delegados a dedo es cuando no se hace la elección, que finge que se hizo.

Refirió que MUOCRA es una agrupación nacional de la cual es uno de los trece fundadores y es la herramienta política que se tiene para ir a elecciones. Que la MUOCRA está en Trenque Lauquen como lista blanca, y acá apoyaba al señor Monteros como secretario general, desde la primera elección que ganó y aún antes de ganar.

Que en Bahía había más de 100 delegados, mientras que en Trenque Lauquen hay unos 25/35 delegados. Que en Trenque Lauquen la MUOCRA funciona en período pre-eleccionario, empieza a moverse un año antes, en cambio en seccionales grandes como Bahía, Mar del Plata, Mendoza, donde hay más afiliados, funciona en forma permanente porque realiza otras tareas que tienen que ver con ayudar a los compañeros empleados, y esta funciona por fuera de la organización sindical. Dijo que acá la autoridad de MUOCRA era Ríos, si no tiene mal entendido.

Señaló que durante su intervención el único problema que tenían era que había dos bolsas de trabajo, uno en la organización sindical UOCRA y otro que la manejaba la MUOCRA; que eso no es normal, debería haber una sola, pero acá desde larga data había dos durante toda su gestión, desconociendo que pasaba antes.

Que de los delegados del gremio había un grupo en el polo, los que en su mayoría estaban en sus lugares de trabajo, otros de obra privada o pública que pasaban una cantidad importante de horas al día en el gremio, y con los cuales tenía una buena relación.

Que a Monteros y toda su comisión renunciante se los atendía pese a haber renunciado a la comisión, porque seguían siendo del gremio. Que en la sede de la MUOCRA también había delegados, iban y venían, y había algunos que no iban a la agrupación que estaba en la esquina. Que los delegados no perciben ingresos por su función por parte de MUOCRA O

UOCRA, tienen una retribución que paga el empleador. Que en Bahía el convenio era particular, acá se usaba para partir de una negociación de un piso, había muy buenos sueldos y muy buenos convenios, por lo que tuvo bastantes problemas con la Cámara, la UIA y el Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y el vice ministro, no con el delegado local, porque ellos luego de las detenciones vinieron por los convenios de trabajo, que le tocó defenderlos y lo hizo con éxito.

Indicó que alguna empresa que trabajaba para ABSA les hizo mandar carta documento renunciando a esos convenios. Que se sentó con las empresas y logró mantenerlos sin que pasaran por el Ministerio de Trabajo, que era como que los convenios se hubiesen caído pero el bolsillo de sueldo de los trabajadores no se modificó para nada.

Expresó que al delegado no le paga el sindicato, cobran salario de la empresa empleadora, y tendrían que estar una parte del tiempo en la empresa, porque ahí está el problema y otra parte del día para ir y venir y hacer las gestiones en el gremio y en la obra social para los compañeros.

Dijo que SITRAIC es un sindicato paralelo de un dirigente Victor Grosi que fue miembro del consejo directivo nacional, fue luego expulsado del gremio y ahí empezó el SITRAIC, por Tucumán y se extendió de a poco. Están en todos los lugares, según el perfil del dirigente se puede convivir, en otros casos no, porque hay violencias y agresiones. Agresión a la agresión y violencia a la violencia, así se responde. Cuando estuve de

interventor muy poco de eso se dio. Que se reunió con Grosi y acordaron un pacto de no agresión. Que SITRAIC tiene personería jurídica que le da entidad en la provincia de Buenos Aires, no en el resto del país; puede funcionar como sindicato en la provincia de Buenos Aires, pero no tiene personería gremial otorgada por el Ministerio de la nación, acá se la dio la provincia. No pueden elegir delegados porque si se presenta el Ministerio de Trabajo de la nación la debe anular.

A la doctora Busteros le contestó que SITRAIC no tiene prohibido actuar, ni ir a las obras, pero no puede participar de la elección de delegados porque no tiene la personería gremial nacional. Que con Grosi se suscitó el problema en la década del 80, ahí hubo un cambio de autoridades en el sindicato nacional y luego fue elegido Gerardo Martinez que está desde 1989.

Consultado por el doctor Jara dijo que los convenios estaban homologados por las partes, eso lo revisó con el Ministerio, y estaban firmados por la comisión anterior. Que la tabla salarial de la UOCRA es un piso, no se puede ir para abajo, es el convenio 7675 que está obsoleto, por eso se discute con las empresas y se firman y se homologan convenios por encima de esa tabla salarial. Que durante su intervención se firmaron convenios por encima de la escala salarial y esto fue luego de las detenciones. Que se firmaron convenios en obras nuevas que se denunciaron, siempre tomando como base los convenios anteriores.

Que con el intendente y el Ministro de Trabajo no firmó nada, que firmaban previo acordarlo con la empresa, se sacaba turno en el Ministerio de Trabajo de la nación y ahí se homologaba el acuerdo. Que en el Ministerio de Trabajo de la provincia en calle O'Higgins al 300 participó de una reunión pero no se suscribió ningún acuerdo, hubo una discusión muy fuerte porque la gente del Ministerio de Trabajo de La Plata vino a dar por tierra con todos los convenios que había firmado la gestión anterior y él no estaba de acuerdo porque había que respetarlo, discutió muy fuerte con el ministro y vice de trabajo de la provincia, se pasó a un cuarto intermedio y luego volvieron a reunirse y ellos pedían voltear los convenios esos y por eso dice que los pudo defender con éxito, dado que no le tiraron ningún convenio porque estaban firmados y homologados. Que no se acordó revisar los acuerdos incluso en los que se menciona vicio de la voluntad, que él se iba a retirar de la reunión y la gente de la Cámara le propuso hacer un cuarto intermedio.

Consultado por una nota periodística, dijo que él no mencionó que había que denunciar los convenios, sino que iban a hacer todo para firmar nuevos acuerdos similares, porque a veces se discutía cuestiones de dinero, otras veces las horas extra y otras cuestiones.

Que la gente del ministerio venía todas las semanas, y él lo habló con los renunciantes de la UOCRA para saber de boca de ellos cómo se había logrado llegar a esos acuerdos, porque tenían duplicación de la

asistencia perfecta, premio de fin de año, aumento del monto salarial. Que no lo logró en el 2017, porque la UIA y la Cámara y luego se plegaron las otras menos las del polo, que pagaran el premio de fin de año conseguido por la gestión anterior.

Que se ha reunido con el intendente y lo presentó en una oportunidad en UOCRA central para trabajar en un centro de formación profesional. Que el intendente mencionaba quejas de la anterior gestión, decía que la obra pública era cara por la manera en la que negociaba la UOCRA, que el precio de la obra pública había que bajarlo, y a eso no le respondía porque no era función del intendente discutir convenios.

Comentó que el SITRAIC no tiene participación en la paritaria. Que la seccional Bahía Blanca recibe fondos de UOCRA central, cada seccional tiene su presupuesto y con eso hay que arreglarse para pagar los gastos corrientes diarios; que el pago de los sueldos no pasan por la seccional.

Señaló que en alguna oportunidad llama a alguna empresa para que contrate a algún trabajador, y si dice que no llama a otra empresa. Que esto lo hace cuando hay algún trabajador con algún problema y que lo que buscan es que lo que reciba sea bajo contra prestación laboral.

Al doctor Gomez Talamoni le dijo que en cuanto a las bolsas de trabajadores la MUOCRA estaba mejor armada que la bolsa de trabajo de la UOCRA.

Al doctor Martinez le respondió que el bono de fin de año o por finalización de obra lo tienen en Trenque Lauquen, pero en menor escala, que no tienen empresas de gran envergadura, y negocian todo el tiempo mejores salarios, premio de fin de año, para el inicio de clase, que no piden, negocian. Que tienen el listado de las empresas y si la empresa dice que no empiezan algún plan de lucha para que diga que sí; que si tiene el 60 o 70 por ciento que accede no puede dejar de lado a ese porcentaje, no puede dejar de lado al 30. Que en el plan de lucha se hacen asambleas que han sido notificadas el día anterior o los días anteriores y ahí los trabajadores dicen lo que quieren hacer, en algunos casos se va al paro y otras veces las empresas acceden. Esto es así en la seccional Trenque Lauquen.

Mencionó que en Bahía tuvo reclamos y conflictos cuando fue interventor y se hicieron las denuncias y se pidieron las inspecciones correspondientes. Que los inspectores son del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Que en una asamblea los dirigentes se constituyen y charlan el tiempo que sea necesario con los trabajadores. Agregó que “…en diferentes circunstancias se pueden realizar. Que esto no es extorsivo, que nosotros tenemos el derecho de luchar por nuestro salario.

Los planes de lucha es una herramienta que tenemos para pelear…" –sus palabras-.

Indicó que un aumento de salario de 35 por ciento por sobre el piso de convenio en su seccional sería un logro muy bueno para la gente, que en Bahía era una cuestión común que eso ocurriera.

Al señor Fiscal le dijo que él se contacta por llamado telefónico con las empresas y escucha sus reclamos. Que no sabe cómo se negociaron los acuerdos salariales en Bahía Blanca, no sabe en qué condiciones se negociaron. Que en su opinión serían de carácter excepcional porque no es la misma situación de las empresas porque en Bahía hay con 700 trabajadores y en Trenque Lauquen unos 70, por lo que no tienen la misma espalda las empresas, las empresas chicas pelean con los certificados. Que como hay poca obra pública en Trenque Lauquen los acuerdos no superaron el 22 por ciento, que luego el tomó de Bahía la doble asistencia.

Dijo que de acuerdo con la cantidad de afiliados de la seccional es como se mueve, si la más grande tiene 65 obreros, no puede ir a pedirle lo mismo a una de Bahía que tiene 700 obreros, se tiene que manejar con mesura.

Refirió que Panedile era una de las que recuerda como de conflicto casi permanente durante su gestión, que él tiene que negociar bien

para la gente, pero con una empresa de 70 trabajadores tiene que achicar la parada y manejarse dentro de los parámetros normales. Que cuando llegó a la intervención Panedile tenía acuerdos firmados que luego no quería respectar y él logró que se respetaran. Que tanto la empresa del presidente de la UIA y las empresas del polo petroquímico, tenían todas muy buenos acuerdos, pero ellos saben que el polo no discute mucho el aumento salarial porque al otro día lo suben al costo. Que no se le puede pedir grandes cosas a una empresa que construye viviendas sociales, que es distinto a una empresa que construye obras importantes. Las empresas de las obras sociales trabajan casi a pérdida. Que no conoce de costos ni de contabilidad de la empresa.

Apuntó que habló de los acuerdos con Monteros, Molina, Burgos y en menor escala con Paiz, Gutierrez, porque estaban libres y los atendió desde la denuncia hasta las detenciones cada vez que se lo solicitaban.

Que en cuanto a la contratación de servicios brindados por una empresa en particular, llegó a su conocimiento, pero eso era lo que las empresas decían, nunca se lo dijeron los trabajadores, ni los delegados. Se lo dijo el intendente municipal. Que cuando llegó eso estaba instaurado pero no participó de ningún acuerdo de ese tipo, ni lo avaló. Que lo sabe por lo que le decían las Cámaras, que los gremialistas tenían empresas dedicadas a servicios a la construcción que había que contratar.

Que en cuenta a los premios de fin de año, la caja que le iban a dar, eso lo llegó a discutir con las empresas. Que lo otro lo sabía por los comentarios y no le prestó mayor atención porque no hacía a su función.

Concluyó su testimonio indicando que un secretario general tiene un ingreso de 71 mil pesos de recibo y 45 mil pesos en viáticos que se rinden con comprobantes de boletas de nafta, arreglo de auto, y hoy esa plata no les alcanza para moverse, y eso que tiene 45 años de antigüedad.

Es a partir de analizar toda esta prueba que antecede que arribo a la conclusión de que se ha probado en debida forma el hecho materia de acusación fiscal identificado como número uno.

Conforme luego indicaré, la restante prueba producida por las partes en el proceso, que a continuación paso a analizar, no logra modificar mi convicción en cuanto a los hechos que considero acreditados.

Veamos y computemos los testimonios producidos básicamente a petición de la defensa del señor Molina.

El testigo Andrés Darío Altamirano, convocado para declarar por el doctor Jara mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams, mencionó ser amigo de Guillermo Molina, y que conoce al resto de los acusados por su actividad gremial de delegado del Sindicato de Ladrilleros, función que cumplió también entre los años 2015 al 2017.

Le explicó al doctor Jara que como delegado luchaba y defendía los derechos de los trabajadores del sector, procuraba que cada día estén mejor e insertarlos en la sociedad, hacerlos más visibles, luchar para revertir las postergaciones que llevan mucho tiempo. Que además buscan evitar conflictos con la sociedad por la ubicación de los hornos que están en Bahía en zona urbana. Que hay una aprobación de un predio para los hornos y no logran mudarlos.

Que en esas tareas del gremio es que conoce a la gente de la UOCRA, y como no tenían donde funcionar la CGT les brindó el edificio de calle Zapiola y ahí pudieron instalar la obra social que maneja su hija.

Que pretendían que se forme el parque industrial para que no se trabaje en negro, no se evada, y no exista trabajo infantil, pero no lo han logrado. Que muchos hornos son familiares y por eso querían incorporar al monotributista al gremio.

Señaló que del otro lado de los trabajadores están los empresarios, que se ha reunido con los empresarios del sector ladrillero y esas reuniones son muy duras, dado que ellos toman como normal que un trabajador no tenga derechos. Que delante del secretario nacional han intentado sobornarlo, han hecho cualquier cosa. Que el señor De Mirta, que trae ladrillos de forma clandestina desde Mendoza, y donde tiene menos

controles, le dijo que él trabajaba cuando era chico, que si necesitaba un auto o que era lo que necesitaba.

Que le pidieron que no insistiera con el tema de los derechos de los trabajadores, para que estén en blanco y con seguridad en el trabajo. Que no aceptó, que violencia física no sufrió nunca, pero si destrato, ignorancia.

Mencionó que luego del 2.015 se dejaron de vender ladrillos, no se estaba construyendo. Que por la CGT y la UOCRA, encabezada por Monteros y Molina que era el articulador con todos los otros gremios que estaban vinculados con la construcción, se realizó una reunión en la CGT a principios del 2.016, donde había empresarios de cámaras de la construcción, uno de APYME que era muy gauchito, y estaba Néstor Iglesias por jerárquicos de la construcción, gente de la UOCRA, y gente de la parte empresaria de la cual recuerda a este presidente de APYME. Que ahí mostraron la preocupación porque había muchos despidos, se habían parado obras, y Gay les dijo que se iba a construir, que se iban a hacer obras por 300 millones de pesos al año. Que le planteó las preocupaciones de su gremio y coordinó una reunión en el municipio donde le prometió que el parque ladrillero iba a salir.

Que después que pasó esto de las detenciones no fue nunca más a la CGT. Que siempre pegan los empresarios con la justicia, con los medios, con la justicia cuando inventan causas. Que a él le van a inventar

una causa, porque el Concejal Leandro Santomásimo había salido a correr la voz que era un corrupto, que esto lo decía por los medios.

Refirió que de Molina, aparte de ser su amigo, le valora mucho que es Asistente Social, trabajador de la educación, muy formado y muy buena persona. Que como el declarante vive en Pehuen Co y no podía viajar, Molina compartía la nafta para que se pueda reunir. Que pone las manos en el fuego por él, y los buenos nunca ganan, “lo va a pagar”, porque reconocer que Molina es una persona honesta no lo van a hacer, que este es el dolor que tiene como amigo.

Ante consultas del señor Agente Fiscal dijo que es delegado del gremio porque lo nombraron desde la Secretaría General, que es interventor. Que su ingreso lo paga el gremio y es delegado desde hace 8 o 10 años. Que trabajó en la Municipalidad de Coronel Rosales en el 2.011 o 2.012, pero fue efímero el trabajo. Que lo nombran delegado del gremio porque siempre estuvo en el trabajo social, que estaba en cooperativas de trabajadores desocupados. Que desde ladrilleros la obra social es muy humilde y aportan lo que pueden a la gente que necesita salud. Que hace 3 o 4 años que cobra sueldo, antes fue ad honorem.

Ante nuevas preguntas del doctor Jara dijo que desde el gremio realizan ayuda social, asistencia alimenticia, jurídica, que la responsable de la obra social es su hija que es abogada. Que se ocupan de temas de salud, tema social como sacar los chicos del ámbito laboral. Que

junto a su compañera que es docente jubilada han trabajado siempre dentro de las posibilidades, asistiendo a gente por el tema de migraciones, porque no hay consulado de Bolivia en Bahía Blanca, y muchas de las personas que se dedican a esta actividad son de ese país.

Expresó que la UOCRA ayudaba a los trabajadores, era un gremio más grande y organizado, hacían campañas de vacunación, lo ha visto, y además su hija abogada para terminar la carrera trabajó en la UOCRA. Que por eso sabe que ayudan con medicamentos, garrafas, para pagar la luz. Que lo ha conmovido el trabajo que ha hecho la UOCRA, es un trabajo muy humanitario que no lo ha visto en otro sector.

El testigo Cesar Augusto Marino, contó que entre los años 2.015 al 2.017 trabajó con su empresa de servicios de obras de infraestructura y obra pública, tanto en Bahía Blanca como en la zona de Villarino y en la provincia de Río Negro.

Dijo que la relación con la UOCRA era normal, que representaban a la gente que trabajaba con ellos. Que cuando empezaba la obra se juntaban, veían en qué consistía y cuanta gente iban a ocupar, y tomaban gente de la bolsa de trabajo, a veces sí y otras veces no, dependiendo de la tarea.

Que le han pedido colaboración para arreglar y pintar en la UOCRA en calle Saavedra, o para el día del niño y les ha dicho que le den

el nombre de la juguetería y les ha transferido, y además para fin de año ha colaborado con pan dulces, bebidas y otras cosas.

Manifestó que cuando le pedían que tome gente de la bolsa era en términos normales, ellos decían dos o tres y del otro lado les pedían más gente, y le contestaban que no podían y básicamente tomaban lo que necesitaran. Que si no tomaba la gente que le pedía la UOCRA no pasaba nada, que muchas veces no ha tomado gente que le pedía la UOCRA.

Le refirió al doctor Jara ante sus preguntas que ha asistido a la sede de la UOCRA. Que la última vez que lo hizo fue convocado por Burgos y ahí se invitaba a las empresas a firmar que el trato era normal, que no había ningún problema con ninguna de las personas de la UOCRA, y firmó un cuaderno que había en ese momento. Que cuando el declarante iba a ingresar salía el titular de la empresa Coince que había firmado obviamente, era el señor Néstor Tepliz.

Que esa firma fue a principios del 2017, o fines del 2016, no lo puede precisar.

Que sabe de las denuncias en contra de la UOCRA por lo que han publicado los medios. Que él no asistía a la Cámara de la construcción, que ahí iba su hijo. Que no sabe si existió una reunión en la cámara por este tema, que su hijo no le contó nada.

Mencionó que apriete por parte de la UOCRA no recibió nunca y no sabe de alguien que haya sufrido, que no le consta.

Que no sabe como se maneja la UOCRA. No sabe si ayudaba a los trabajadores.

Refirió que cuando iniciaba una obra iba a hablar con Guillermo Molina en las obras de Villarino. Que los pedidos de Molina eran normales, se juntaban y veían la cantidad de gente que necesitaban, que siempre había alguna diferencia porque pretendían que tomasen más gente, pero era una relación normal.

Contestó que nadie le pidió que denuncie a la UOCRA.

Que el móvil sanitario no lo ha visto, lo sabe por comentarios, le contaron que había pasado por la obra.

Al doctor Zorzano le contestó que no recuerda todo el contenido del cuaderno que firmó, que mencionaba que la relación de la UOCRA con las empresas era normal y no había existido ningún apriete o algo así. Que era una relación normal. Que aparte de ver salir a Tepliz no sabe quien lo firmó, que había firmas y firmó abajo, pero no recuerda que otras empresas firmaron. Que no vio la firma del señor Tepliz de Coince, que lo vio salir de donde el declarante tenía que entrar. Que entraba uno y salía otro, que cuando entró estaba solo con Burgos. Que lo citó Burgos.

El testigo César Martin Farias dijo tener una relación de amistad con Molina. Que durante el período comprendido entre el 2015 al 2017 era secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Farmacia y era el delegado a la CGT por su gremio. Que en la CGT se reunían una vez por mes o más y por esa época tuvieron una merma la mayoría de los sindicatos del país por la desocupación en todas las actividades; y lo que se salió a hacer fue elaborar documentos y movilizaciones en contra de los primeros despidos que hubo en el país, en el que estaba transcurriendo un daño laboral muy importante.

Que el compañero Monteros era el Secretario General de la CGT y a través de molina y demás proponían actividades y con el consenso de los demás se llevaban adelante. Que Molina era la cara visible de la UOCRA, era el que estaba siempre en reemplazo de Monteros.

Que Molina era el que proponía las actividades a realizarse, y si estaban de acuerdo las llevaban adelante. Que muchas veces no hacían las actividades propuestas, pero por lo general se consensuaban y llevaban adelante.

Que su sindicato no sufrió lo mismo que el resto de las actividades porque el medicamento siempre se necesita, por eso no tuvieron bajas de empleados, pero por solidaridad colaboraban con otros sindicatos.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

Que cuando ingresó hacía poco que estaba el Gremio Jerárquico de Petroquímicos y se le dio lugar en calle Zapiola, donde también funcionaba el Sindicato de Seguridad. Que se le dio la posibilidad de instalarse en ese edificio y esto fue con la colaboración de UOCRA.

La testigo Melina Rebollo mencionó que es amiga de Guillermo Molina. Que durante los años 2015 al 2017 era trabajadora de ANSES y representante sindical de los trabajadores del organismo. Que no tienen sede a nivel Bahía, la representación es nacional y está en Capital Federal.

Refirió que a Molina lo conoce por su actividad sindical y porque formaba parte del espacio de la CGT, en la que se realizan actividades de política sindical y solidarias. Se analizan las problemáticas para acompañar a los trabajadores en sus actividades, intento de solución de la problemática de los trabajadores. Siempre se proponen planes de acción, acompañar los gremios a los otros sindicatos que tienen algún momento complicado o difícil, se plantean movilizaciones y marchas. Que la UOCRA participaba de la CGT. El Secretario General era Monteros y cuando no estaba iba Molina, y esto era la mayoría de las veces.

Que en ese momento era complicado por la política que se llevaba a cabo desde el macrismo y había planteos de los sindicatos, incluida la UOCRA.

Expresó que nunca recibió amenaza o situación intimidante por ser delegada sindical. Que no recuerda que ningún compañero planteara en la CGT algo así.

Que propusieron medidas de fuerza en el ANSES; se llevaron a cabo movilizaciones, más que nada cuando se intentó modificar todo lo de las cuestiones de las jubilaciones. Que esas medidas de fuerza cesaron y antes de las medidas de fuerza se advirtió a la patronal que se iban a hacer. Que en realidad ella no lo llamaría advertencia, sino que cuando uno va a realizar una medida de fuerza se informa al Ministerio de Trabajo y cuando se hace ya está informada. Cuando fue el intento de modificar la ley jubilatoria organizamos una movilización a nivel nacional y es obligación de los sindicatos informar la medida que se va a llevar a cabo. Que tuvieron el despido a nivel local de 6 compañeros.

Relató que en el 2017 participó en política, que en el 2015 no participó en el armado de listas, y en el 2017 sí fue candidata a Concejal en la lista 4 del Frente para la victoria y estaba también Molina en esa lista. Que no recuerda a otro miembro de la UOCRA en esa lista. Que en ese momento hubo una interna con la lista 2 de Quiroga y la 4 de Lopez, perdieron la interna y un porcentaje pasa a formar la lista 2 y entre ellos estaba Molina que cree que estaba en el octavo lugar, y pudo entrar.

El testigo Néstor Claudio Iglesias, convocado por la defensa del señor Molina a prestar declaración a través del sistema Microsoft Teams,

dijo que conoce al mencionado de la CGT. Que entre los años 2015 al 2017 era personal directivo del sindicato de UECARA que tiene como afiliados al personal mensual obrero de la construcción, mientras que la UOCRA tiene al personal jornal. Que formaron parte de la CGT Bahía Blanca con la conducción de Monteros, y los 60 gremios de Bahía agrupados bajo esa jefatura. Que asistía a las reuniones de la CGT, pero como de martes a jueves tiene un cargo a nivel nacional, estaba afuera de la ciudad y a veces no podía ir.

Señaló que en la CGT a la UOCRA la representaba Monteros y Molina que también tenía participación activa. Que Molina iba a las reuniones y trabajaba en conjunto sobre lo que había que conseguir para los trabajadores en las diferentes actividades. Que se las ha dado espacio físico a sindicatos que no tenían lugar para trabajar. Que en ese momento se trataba de reestablecer el edificio histórico y se logró la inauguración de ese edificio.

Expuso que se realizó alguna reunión con empresas en momentos de crisis, y hubo reunión con las cámaras para conseguir que los trabajadores no sean despedidos; que fue la única vez que se juntaron todos en la CGT, no sólo la gente de la construcción. A las cámaras se les planteó un plan de trabajo para que los trabajadores no se queden sin la fuente laboral. Que las cámaras no hicieron reclamo hacia los gremios.

Refirió que por ser miembro directivo de UECARA la relación con las empresas siempre fue buena. Que ninguna empresa le habló de extorsiones por parte de la UOCRA, nunca dijeron nada de eso. Que en esa reunión estaban centrados en la crisis que había que varios trabajadores iban a ser despedidos y se buscó en esas dos reuniones que sigan manteniendo la continuidad laboral y los beneficios que se habían conseguido. Que se dijo que se iba a buscar un punto de equilibrio y fue productivo porque no sufrieron en ese momento muchos despidos.

Señaló que en la CGT se buscaba la posibilidad de ayudar a compañeros desocupados, o con bolsa de alimentos o fuente laboral, que esa es la función de la CGT. Que Molina participaba de eso, como cada uno de los sindicalistas, en tirar ideas y buscar solución al compañero que se queda sin trabajo.

Consultado por el doctor Jara respecto de una ordenanza denominada del corralito, dijo que no sabe a qué se refería. Con relación a una ordenanza de tope de pisos a la construcción en algún barrio, respondió que existió un proyecto de ordenanza para el barrio Universitario, que no recuerda el año, y que eso impactó en la mano de obra de la construcción. Que se paralizó la construcción en el barrio universitario. Que cree que una de las reuniones en la CGT fue por eso, donde los empresarios querían que el gremio hiciese un reclamo por escrito a la municipalidad para poder seguir construyendo.

Indicó que la CGT iba contra cualquier proyecto que fuera en contra de los trabajadores, y seguramente habrán pedido alguna reunión con el Concejo Deliberante o con el Municipio, y seguro se hizo algún reclamo administrativo para que sigan las construcciones.

Que movilizaciones hicieron muchas en esa época, que es posible que hayan hecho al Concejo Deliberante, pero no lo puede afirmar; pero el espíritu era del diálogo pacífico y con los actores que eran importantes.

Que cree que en ese sector estuvo bastante tiempo sin construirse y luego se amplió ese famoso corralito al barrio Napostá, para que las empresas construyan en otro lugar y no en el barrio Universitario que tenía las redes saturadas.

El señor Gustavo Adrián Berdini Becerra mencionó que actualmente es coordinador del Ministerio de Trabajo, que para el año 2014 y hasta el 2018 no era coordinador, pero hacía tareas como conciliador del organismo, brindaba asesoramiento y tomaba audiencias.

Que en más de una oportunidad tomó audiencias con integrantes del gremio de la UOCRA, por lo que conoce a todos los acusados.

Contó que existen dos maneras de audiencias las de presentación espontánea o las que se convocan a requerimiento de parte.

En las espontáneas generalmente las partes tienen todo acordado y presentan el convenio para que lo rubrique el organismo, en las otras citan a las partes para que concilien o no, a partir de una presentación de alguna de ellas.

Indicó que con el gremio de la UOCRA ha intervenido en ambos tipos de audiencias. Que cuando se trata de audiencias espontáneas venía todo el tema resuelto y sólo se certifican las firmas de quienes lo rubrican. En las otras audiencias se terminaba en convenio o no, y se hacía un acta con o sin el acuerdo.

Que las audiencias son in voce, se debate y cuando está el asunto terminado le dictan al conciliador lo que quieren poner en el acta, se lee y luego se rubrica. Firman las partes y luego los conciliadores.

Explicó que la instancia del organismo es voluntaria, por lo que parten de la base de que quien asiste no lo hace por la fuerza. Expuso que no le ha pasado nunca que una de las partes no quiera firmar el acta.

Sostuvo que si el pedido de audiencia lo formuló el sindicato generalmente es por reclamo de algún trabajador y si no hay acuerdo queda abierta la instancia judicial; y si la pide un particular contra el gremio generalmente es por un reclamo y por eso si no hay acuerdo hay distintos trámites, archivo, conciliación obligatoria, o judicializar.

Por la conciliación obligatoria se insta a las partes a llegar a un acuerdo retrotrayendo la situación al estado anterior que generó el conflicto. Que el abanico de posibilidades es muy amplio, un despido, una medida de fuerza y la empresa solicita audiencia y no hay arreglo y se insta una conciliación obligatoria, el organismo se expide y se abre negociación por 10 días, cesa la medida de fuerza y los empleados son reincorporados y finalizado ese período tienen que llegar a una solución.

Que con la UOCRA más de una vez se pidió la conciliación laboral obligatoria, pero hay que hablar de cada caso en particular, tienen distintas soluciones. En general, en todas las conciliaciones se da la orden al gremio de levantar las medidas de fuerza, la idea es que no haya medidas del gremio ni de la empresa, volver atrás en el tiempo para que puedan hablar.

Que no recuerda que alguna vez no haya cumplido la UOCRA con levantar la medida de fuerza, y no cree que lo hagan porque si no cumplen hay sanciones, al igual que para las empresas.

Exhibida que la fuera a pedido del doctor Jara la hoja 17 del legajo B, identificado como “Víctima Gurrado”, reconoció una de las firmas como la suya, aunque señaló que no sabe de que se trata ese acta.

Consultado por la defensa sobre si estuvo presente en la audiencia a la que se refiere el acta del día 16 de marzo del 2017, en la que

se acuerda un aumento salarial, contestó que puede ser, pero que en general en ese tipo de acuerdos es de reuniones espontáneas, no había debate que él presenciara.

Respondió ante la consulta del letrado que no ha presenciado irregularidades en las audiencias en las que intervino, que algunas audiencias son encendidas y si levantan la voz, pero nunca vio a nadie que obligara al otro. Que una vez que iniciaba la audiencia estaba todo el tiempo hasta que finalizaba, no recuerda haber dejado solas a las partes en su despacho, no abandonaba su escritorio, por ahí las partes sí salían, pero él no abandonaba la audiencia.

Señaló que presión, amenaza o apriete por parte de la UOCRA delante suyo no vio. Que alguna vez alguna parte ha dicho que una medida de fuerza le resultaba extorsiva, en forma de opinión subjetiva, pero no le han dicho que estuviese amenazado.

Al doctor Zorzano le contestó que en las audiencias espontáneas las partes se presentaban con todo resuelto, que esto es habitual, se arregla afuera y él ni nadie del organismo participa en las tratativas. Que desconoce que pasa ahí, que esto no se hacía en el edificio. Que si supiese de apriete los hubiese denunciado como funcionario público.

Al doctor Martinez le indicó que ha intervenido en audiencias en que la UOCRA y empresarios acordaban premios, en pocos casos y

generalmente ya venían estipuladas, no se discutía adelante del funcionario, ya venían habladas. Que por cuestiones de premios o salariales no recuerda haber presenciado reunión con discusión o intercambio de opiniones.

Que sí ha presenciado en audiencias no espontáneas, que requerían su intervención, discusiones, pero por lo general su participación no resulta fundamental porque por lo general las partes van con sus abogados; por lo que el declarante a veces participa para calmar ánimos, poner orden u otorgar la palabra. Que esto de ir con abogado es normal en las no espontáneas, en el 98 por ciento de los casos van con abogados.

Que cuando hay un pedido del gremio y respuesta del requerido, con citas legales o cuestiones más profundas intervenían los abogados.

Mencionó que con esta dirigencia de la UOCRA no notó nada anormal.

Ante una nueva consulta del señor Agente Fiscal, señaló que de lo que consta en el acta, por la redacción, puede establecerse si fue espontanea o no; y luego de tomar contacto con el acta que antes se le exhibiera y en la cual reconociera la firma, dice que como menciona que comparecen de manera espontánea y por el resto de lo instrumentado, se trata de esos acuerdos que traían para que se certificara firma, se rubricara.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

El testigo Gerónimo Paoletti, convocado por el señor Defensor particular, Dr. Mariano Jara, para prestar declaración de forma remota, a través de la plataforma Teams, contó que tiene una empresa de construcciones, denominada JS, y por su actividad con la misma y por integrar una filial de futbol de Estudiantes de La Plata, es que conoce al señor Guillermo Molina, quien también asiste a la filial.

Contó que trabajan en todo el país, que tiene un socio en Pilar y él se ocupa desde hace más de 6 años de la actividad de la empresa en Bahía y la zona. Que han realizado obra pública en la zona de Villarino y Patagones.

Refirió que en la primera obra que hicieron en la zona de Bahía fue iniciada sin conocer el paño local, y ahí hubo un acercamiento de parte de ellos; luego con otras obras, al ganar la licitación le daban aviso y estaban en contacto como para ir poniéndolos en tema.

Que la UOCRA pedía cumplir la ley contrato laboral, que la gente cobre lo que corresponde en su recibo de sueldo, entrega de los elementos de protección personal, condiciones óptimas de trabajo, y a veces viáticos por la distancia ante viajes más largos.

Le contestó al doctor Jara que conoce de qué se trata la bolsa de trabajo de la UOCRA, que le pidieron que tomase la gente de la bolsa; pero además en los pliegos de licitación figuran artículos que exigen que se

tome mano de obra local. Que en la mayoría de sus obras la mano de obra era local, salvo algo muy específico de necesidad de capacitación, y es ahí que dentro de lo local le pedían que tome gente de la bolsa de la UOCRA.

Mencionó que no pactaron aumento salarial por encima del convenio nacional.

Que recibió pedidos de colaboración de la UOCRA para el día del niño y días festivos, consistentes en que donaran dinero o algún regalo que ellos sorteaban a los hijos de los agremiados. No más que eso.

Refirió que en líneas generales han colaborado, capaz que alguna obra por lo justo de los precios no han podido colaborar, pero por lo general tienen esa pauta que ayudan a la gente con la que trabajan. Que esto no ha sido un problema, nada ilógico lo que planteaban.

Expuso que cuando no han colaborado no ha pasado nada, que en obras chicas los números no lo permiten pero jamás tuvo ningún problema de parte del gremio. Que eran voluntarias las colaboraciones, no eran obligatorias; y Guillermo Molina no le pidió dinero para él.

Sostuvo que en una obra tuvieron una medida en la que se paró la obra medio día, que tenía que ver con una cuestión de demora de su parte en los pagos de los salarios, que luego se resolvió y se volvió a trabajar con normalidad. Que cuando pararon la obra le comunicaron el motivo.

Que el móvil sanitario es un vehículo que va por las obras vacunando a la gente del gremio.

Que no participó de una reunión multisectorial en la que se trató este tema antes de las detenciones. Que no recibió invitación para formular una denuncia contra la UOCRA.

Le contestó al doctor Jara que luego de la intervención y cambios de autoridades de la UOCRA, le han pedido colaboraciones para los trabajadores, que le han efectuado similares pedidos, como también viáticos para los que están lejos. Que estuvo dos años afuera de Bahía trabajando en otras obras, que ahora tiene obras en Bahía con contratos por sobre convenio, y es todo muy similar a como era antes.

Que hoy está en obras como la del paseo urbano, en la zona del Cholo, y ahí tiene convenio por encima de la paritaria nacional. Que en ese caso es sub contratista de otra empresa, que esa otra empresa es la que participó de los convenios y firmaron, y luego les avisaron a ellos al momento de firmar como sub contratista que estaban esos convenios. Que en esa obra trabaja para ESUCO y habla con Néctor de Vicenio que es el gerente del contrato.

Al doctor Zorzano le contestó que tuvo vínculo con los delegados zonales en Carmen de Patagones, que eran Roberto Lipian y un señor Martinez en Villarino. Que no hizo obras por esa época en Bahía

porque era difícil lograr entrar en la parte de obra pública de acá, que por eso apuntaron a Villarino porque había más oferta, motivo por el cual no tuvo vínculo con otros representantes de la UOCRA, que su experiencia es con Molina en el área de Villarino.

Refirió que con la conducción actual tiene trato con Olguin y Alejandro Bauer, que no sabe que funciones cumplen en la UOCRA, sabe que están al mando y ha tratado con los dos.

Manifestó que lo que hay pactado hoy es un porcentaje de aumento salarial que tiene que ver con aumentos no en la hora hombre sino en el presentismo, que hay un 10 por ciento extra sobre el presentismo, y a la hora de la liquidación final también hay un plus, no recuerda el porcentaje. Que habitualmente tienen el 20 por ciento por presentismo y en este caso hay un plus más del 10 por ciento, y todo va en el recibo de sueldo.

Al doctor Martinez le respondió que no realizó obras en el año 2016 en Bahía Blanca, que sí ejecutó en Villarino y en el 2018 en Patagones. Que no recuerda haber participado de una charla en el año 2016 por un premio de fin de año. Que no es normal en su caso dar un premio para fin de año, que a veces le han solicitado cosas para el día del niño, o días festivos en los que piden colaboraciones. Que no recuerda haber pagado premio de fin de año.

Al docto Jara –ante nuevas preguntas- le dijo que señaló que era difícil entrar en Bahía a participar de licitaciones de obra pública porque hay una ley en la cual le dan prioridad al compre local, que implica un beneficio de hasta un cinco por ciento para poder ser adjudicado, y en algún tipo de obra esto es un número muy grande y por eso se tornaba más difícil; además, porque había más competencia, más empresas interesadas, y esto no ocurría en Villarino, ahí no tenían el compre local y no había tantas empresas participando, por lo cual fueron a licitar obras públicas de esa zona.

Apuntó que en el 2016 y 2017 en la actividad de la construcción había algunas licitaciones, que esto se mueve distinto a lo privado, que en esa época en Villarino había licitaciones y pocos oferentes, había ofertas de obras.

El testigo Juan Angel Arrieta dijo ser titular de una empresa que trabaja en obras civiles para las empresas del polo petroquímico (TGS, Piedra Buena, UNIPAR).

Contó que su empresa integra una cámara, la Cámara de Empresas Industriales y que han firmado acuerdos desde el año 2008, los que se han ido actualizando. Que la cámara nuclea a unas 20 empresas que trabajan para las empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca.

Indicó que al comienzo de cada obra no le pedían mucho porque tiene todo en blanco y bien; tiene buena relación con el gremio. Que en el año 2008 firmaron el acuerdo y luego lo ratificaban año a año, por lo cual no le realizaban ningún pedido salvo alguna colaboración como mandar una máquina para el predio cerca del aeropuerto. Que no ha tenido pedidos especiales de ellos.

Que lo que hacía era voluntario, referido a un pedido sabiendo que tenía la máquina; que también les ha donado alguna lata de pintura para el predio. Que esos fueron los pedidos. Que dinero no le pidieron nunca ninguno de ellos.

Manifestó que no recuerda en esa época la existencia de un móvil sanitario de la UOCRA.

Al doctor Zorzano le indicó que su empresa se llama Juan Arrieta y Compañía S.R.L., dedicada a obras civiles y servicios a las plantas del polo petroquímico. Que no hace obras a privados, todo a empresas. Que tiene unos 35 empleados, algunos de las UOCRA y dos o tres del sindicato de empleados administrativos de la construcción, los que tienen otro convenio.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que conoce a Walter Paiz y Mario Gonzalez, que cuando tenían reuniones para atar el acuerdo ellos eran los que coordinaban las reuniones; cuando había que discutir

alguna cosa que planteaban eran ellos los que presentaban los pedidos y pretensiones, y les respondían a ellos para que se las pasen a Monteros o Molina, que eran como intermediarios.

Sostuvo que no tuvo conflicto con ellos, que si hubo discusiones en lo que pretendían y en lo que ellos podían ponerse de acuerdo. Que se pagó un plus sobre el convenio nacional, había premio por la parada de planta y un plus para cada categoría, y los civiles un 10 por ciento más en el presentismo, y premio de fin de año de 9 horas por mes trabajado y se pagaba a fin de año; que respetando eso no había por qué tener discusión o conflicto.

Expuso que tenía inspecciones, que le pidieron que ponga un delegado, que citaron a la gente y sus empleados no vieron la necesidad de tener un delegado, porque él tiene buen trato con su personal tratan las cuestiones de forma directa.

El testigo Carlos Aflredo Ferrari dijo que es directivo desde hace 26 años de la gremial empresaria APIME, que representa a las pymes y se dedica a la defensa gremial empresaria de distintos sectores pymes, profesionales, comercio, construcción, siempre en defensa de los empresarios y la producción nacional y el mercado interno. Que tiene más de 200 asociados, entre ellos algunos ligados al sector de la construcción. Que esas empresas tienen relación con la UOCRA.

Precisó que durante los años 2.015 al 2017 ninguna de esas pymes le manifestaron algún conflicto. Que sí fueron convocados a una mesa multisectorial en la intendencia de Linares en el año 2000, y luego esa mesa multisectorial se retomó en el 2016 por los conflictos que había. Que en noviembre del 2016 fue convocada por la municipalidad y el Concejo Deliberante, a partir del pedido de algunas organizaciones que integraban la mesa multisectorial. Que esa mesa la integraban las Universidades, la Unión Industrial, APYME, la Municipalidad, el Concejo Deliberante, la Cámara de la construcción, la de consignatarios de granos, y varios más. Que la reunión fue por la problemática generada con los dirigentes de la UOCRA de ese momento, y en la misma mencionaban que tenían distintas situaciones con respecto a los dirigentes de la UOCRA.

Que estos sectores que indicaban problemas pretendían firmar una especie de documento; ante lo cual les manifestó que desde APYME no podían firmar esta condena o resolución porque no tenían motivos y fundamentos de aprietes y pagos de coimas que ahí se decían.

Dijo que las empresas asociadas a su entidad no habían tenido situación o complicación anómala. Que además manifestó en esa época ante el Fiscal y los medios de comunicación que el sector de la construcción había logrado el pago por sobre la paritaria nacional de la UOCRA que era muy bajo. Que estos convenios se homologaron en el Ministerio de Trabajo y no hubo ninguna queja de las empresas asociadas.

Manifestó que a Molina lo conoció en el gremio, que era el tesorero y seguramente defendía la problemática de sus trabajadores; que cree que fue candidato en el 2015 por una organización política en la ciudad.

Consultado por como es la situación luego de la detención de los gremialistas, dijo que se viene escuchando que la situación de los trabajadores no ha mejorado para nada, y que hubo problemas en cuanto a la seguridad, con muchos accidentes laborales. Que la situación de los mejores salarios homologados en el Ministerio de Trabajo por lo visto no siguió sucediendo de esta manera, porque los trabajadores están mal.

Expuso que considera que aumentó la accidentabilidad en el sector y que en los últimos años hubo un incremento de la desocupación.

Consultado por si existió una orden de la política para contra la UOCRA, respondió que le parece que lo que vino a posterior, en los últimos 4 años de Macri, donde 25.000 pymes se fundieron, desaparecieron de la república Argentina, afectó a la construcción que mueve mucha gente, y todo tiene que ver con todo, fue una situación que se vivió en el país, desde su punto de vista horrorosa y fue intencional, no hubo defensa del mercado interno. Que no obstante no puede decir ni certificar si había intencionalidad con esa dirigencia de la UOCRA hoy detenida.

Que la situación fue llevando a que se dejara de trabajar, había que lograr mayor flexibilización laboral, que era orientación contraria a como se venía trabajando.

El testigo Eduardo Jesús Chute dijo que trabaja como oficial albañil en el partido de Villarino. Que allí representaban a la UOCRA los señores Fabián y Julio Martinez. Que cuando existía algún incumplimiento se lo comunicaban a los delegados antes nombrados y ellos buscaban una solución.

Le contestó al doctor Jara que ha estado en algunas asambleas; pero puntualmente en obras de los señores Carcereny o Salguero no estuvo presente en esas obras, que no participó en medidas de fuerza de esas obras.

Relató que ha estado en otras asambleas por incumplimiento en las quincenas cuando faltaba plata, que ahí hacían el reclamo y de ahí para adelante se encargaba el delegado. Que la asistencia a la asamblea era voluntaria, no obligado por la UOCRA. Que en el grupo que él estaba, que eran todos de la UOCRA, iban todos voluntariamente, que la gente que traía la empresa por ahí no se animaba por temor a los patrones.

Sostuvo que en Villarino había una delegación de la UOCRA. Que existía una bolsa de trabajo, la cual cree que sigue existiendo. Que se anotó en la bolsa de trabajo y consiguió trabajo por eso en varias obras.

Expuso que ha estado presente en ayudas de alimentos de parte de la UOCRA para compañeros, y un par de fiestas de la UOCRA Bahía Blanca para el día del niño.

Le respondió al letrado que luego de la detención de los aquí acusados, las veces que reclamaron a los delegados siempre han tenido respuestas. Que siempre tuvieron muy buena comunicación con los delegados, la relación no cambió. Que ha ido a la delegación de la UOCRA y ha visto fotos grupales, que hay una foto pero no recuerda de que medida de fuerza es.

El testigo Fabián Patricio Martinez comenzó señalando que conoce al señor Molina por ser quien manejaba la bolsa de trabajo en la UOCRA. Que durante el año 2015 al 2017 fue delegado en la empresa Carcereny Construcciones, habiéndose dedicado con anterioridad a la construcción y a la cebolla.

Indicó que conoció a Molina por intermedio de Mario Meone, que ahí fue cuando apareció la UOCRA en Villarino y empezaron a trabajar junto con Molina con la bolsa de trabajo. Que era el mencionado quien les avisaba cuando llegaba una empresa y les decía cuántos ayudantes, oficiales y de los distintos rubros se iban a necesitar y luego los mandaban a la empresa.

Apuntó que fue delegado de Carcereny en la obra de la escuela secundaria 10 en Pedro Luro. Que en ese momento la relación con la empresa no fue del todo buena, porque tuvieron muchos inconvenientes por falta de pago, falta de seguridad e higiene; y por esas cosas consultaban a la central Bahía Blanca para ver que hacían, porque eran nuevos en esto; y se llegaba al momento que había que parar la obra por esos hechos, y así estuvieron hasta que cambió el mandato del intendente, cuando entró BevilAcqua y se fue Covello, el intendente suspendió todas las obras y recién las recomenzó un tiempo atrás.

Mencionó que como él era nuevo en esto consultaba con Bahía Blanca, con Molina, que era quien estaba a cargo de Villarino hasta Patagones. Que siempre le preguntaba por las leyes gremiales, dado que si bien le daban lo del artículo 9, como uno tiene un jefe hay que dirigirse siempre a él, no tomar decisiones sin ser aprobadas por quien es su jefe.

Contó que Molina tenía comunicación con ellos y también con las empresas. Que cuando una empresa empezaba una obra, la relación entre la UOCRA y las empresas era que se respetara el artículo 9 que indica que la gente tiene que ser tomada del lugar, y a veces desde la central se le pedía colaboración a la empresa para ayudar con el día del niño o con mercadería a la gente, incluso a gente que no pertenecía a la UOCRA y la trataban de ayudar.

Refirió que esos pedidos de colaboración lo hacían acá en la central. Que a ellos siempre que se iba a hacer un evento como el día del niño o campeonato de futbol en Monte Hermoso, a donde fueron una vez, todos los gastos, como combis y demás los pagaba la central, porque Bahía es grande en comparación con Villarino, donde los trabajos que salen son a cuenta gotas.

Expuso que la UOCRA tiene una oficina en la zona y la comisión de Bahía Blanca mientras duró les pagaba el alquiler, y cuando a ellos los detienen, ese alquiler lo empezaron a pagar entre cuatro compañeros que estaban trabajando.

Consultado por el doctor Jara respecto de alguna medida de fuerza en la obra de Carcereny respondió que se impidió la entrada y salida de camiones. Que fueron a parar la salida del camión en la obra de la escuela 10 porque Carcereny se llevaba los materiales y aún les faltaba liquidar el dinero que les debían hacía 8 días. Que les habían mandado carta documento ya que habían consultado con unos abogados y con la central, donde les dijeron que tenían que hacer eso.

Aclaró que en la central hablaban con Molina, quien era quien mandaba la plata que llegaba de la central.

Que en la obra de la escuela 10 desde central les dijeron que no se fueran, que si lo hacían no les iban a pagar. Que por eso no los

dejaron que se fueran porque no habían terminado de pagar la quincena, sí habían pagado el fondo de desempleo. Que ellos querían impedir que se fueran sin pagarles.

Señaló que no dejaban salir al camión por estar cargado con materiales. Que temían que no les pagaran, y de central los mandaron al abogado para mandar carta documento y luego evitar que se fueran.

Contestó a las consultas señalando que quien manejaba el camión se podía ir tranquilamente la persona, dado que es un laburante más, un trabajador, no tiene nada que ver con el problema que tenían ellos. Que el camión estaba cargado con las herramientas, con todo lo que era de la obra. Que por eso se impedía que vaciaran la obra.

Dijo que al otro día los llaman de central, que habían dormido ahí con todos los compañeros, y los llama Molina diciendo que Carcereny se había comprometido a pagarles todo. Que luego Carcereny se presentó al otro día a pagar y ahí terminó todo el conflicto.

Indicó que él personalmente tuvo un conflicto con Carcereny y Luis Flores también, que el declarante era el delegado y Flores el sub, y los despidió Carcereny, inició un juicio laboral el cual ha ganado, pero Juan Pablo, que es su abogado les dijo que no podían hacer nada porque Carcereny declaró quiebra y quedó todo ahí.

Contó que en la obra tuvieron incumplimientos de Carcereny, tanto en lo económico como en seguridad e higiene, y de hecho Guillermo pidió al Ministerio de Trabajo que interviniera, y fue y suspendió las tareas por falta de seguridad y esas cosas en la escuela 10. Que Molina pidió suspender la obra al Ministerio y el Ministerio la suspendió por todo lo acontecido. Que a Molina le informaban ellos que eran los que veían lo que acontecía en la obra, como los baños que eran impresentables, falta de cobro, terminaba la quincena y a los días te aparecían con algo, no con todo, y todas las quincenas pasaba lo mismo.

Que luego de que el Ministerio de Trabajo paró la obra Carcereny regularizó y comenzó nuevamente, pero esto duró una quincena, dado que luego les volvió a fallar nuevamente con el pago, y es ahí que se produce el cambio de gobierno y antes pararon al camión con las herramientas. Que esto luego se arregló pero se paró la obra, pasaron los años y recién ahora en la obra están recomenzando las tareas.

Le contestó al doctor Jara que cuando se hacían asambleas no participaban todos los trabajadores, sino los que eran del lugar, que había gente del Paraguay a la que habían afiliado a la UOCRA, pero que no quería participar de las asambleas ni nada por miedo a represalias de la propia empresa. Que era la gente de Paraguay la que no participaba por miedo a las represalias de la empresa. Que la empresa tomó represalias con el

declarante, y por eso los demandó civilmente junto a Flores que estaba bajo la ART cuando fue despedido y la obra seguía en pie.

Dijo que además de pagar el alquiler del local, todos recuerdan el festejo del día del niño, porque fue muy lindo, que pasó por primera vez en Villarino, y ahí llevaron juguetes y bicicletas, les acercaron la plata para comprar la carne para el asado y compraron juguetes también; invitaron a chicos de padres que no estaban en obra y a cada compañero que estaba trabajando se le pidió un alimento no perecedero para ayudar a un jardín maternal.

Contó que recibían bolsones desde central para ayudar a gente que no tenía trabajo, incluso aunque no fuese del gremio pero que la estaban pasando mal. Que esto los llevó a hacer una asociación civil para poder ayudar a gente que lo necesitara en Villarino y esto lo hacen en conjunto con el municipio de Villarino.

Refirió que cuando detuvieron a la cúpula de la UOCRA la relación de las empresas y los trabajadores no fue la misma. Que el declarante trabajaba haciendo calles de hormigón y por eso sabe que ninguna empresa tenía delegado, porque eran todas de menos de 10 personas. Que lo llamó un compañero porque no cumplían con el seguro de desempleo, por lo que llamó al grupo Marcos y la señora que lo atendió le contestó si la estaba apretando; y esto no era así, simplemente le dijo si le podía arreglar el sueldo del fondo de desempleo a su compañero. Que esto

pasó luego de las detenciones, al mes o los días, y en ese momento el declarante no era delegado de esa empresa.

Expuso que Ripsol era otra empresa que empezó con problemas con la gente, no les quería respetar el horario de mate de 10 a 15 minutos a la mañana y a la tarde, por lo que los compañeros renunciaron a esa empresa. Que lo llamó uno de ellos para contarle y él no podía hacer nada; no había delegado en esa empresa porque no tenía la cantidad de personal para que tengan delegado. Que cree que no hablaron con el gremio porque ya no había nadie, había llegado el primer interventor que no se quería meter en nada, no quería representar a nadie, vino a sentarse en el sillón y nada más. Que a sus compañeros no les quedó otra que renunciar porque la empresa no respetaba el horario de mate. Que al no tener delegado la obra no tiene nadie quien la defienda, “si llamás a central y te dicen qué querés que haga, quedan las cosas así nomás”.

Respondió que el primer interventor fue Rodríguez. Que al señor Boer lo conoce, es el interventor ahora de UOCRA Bahía Blanca. Que habló con el interventor, se reunió por temas laborales de obras que salían para la zona de Villarino.

Comentó que ya no están en UOCRA, ahora están con la asociación civil, porque con el interventor nuevo no hubo buena relación por el tema laboral de la gente de Villarino. Que son gente de campo y pueblo y en su opinión no puede ser que cuando sale una obra son seccional a nivel

UOCRA y en ese caso la mayoría de la gente que va a trabajar es de Bahía Blanca, cuando ellos en Villarino no tienen ni puerto ni muchas obras.

Mencionó que con motivo de una obra en la estación de bombeo pasando Médanos, luego del fitosanitario, se reunieron con Carlos Boer, Limpiante, el declarante y su hermano en Rodovía y le plantearon que ocupaban gente de Bahía en el parque eólico y que en la estación se iban a ocupar a unas 80 personas. Que ahí le dijeron que Boer ya tenía a la gente de Bahía que iba a trabajar ahí, que ellos le dijeron que la obra era de Villarino y la gente tenía que ser de ahí, y que Boer les contestó que la gente de Villarino se fuera a trabajar al campo. Indicó que por eso rompieron su relación con UOCRA, que son gente de campo pero no indios y tienen derecho a trabajar.

El testigo Julio Rafael Martinez dijo que conoce al señor Guillermo Molina por su relación laboral. Que entre el 2015 y el 2017 Molina le dijo si podía manejar la bolsa de trabajo de Villarino porque él no conocía a la gente. Que Molina le decía que empresa necesitaba la gente, el declarante miraba el listado y veía que se necesitaba.

Que la UOCRA le pedía a la empresa la ropa, el pago en tiempo y forma, y que tome la gente del lugar de donde es la obra. Que no se le pedía nada más a la empresa cuando empezaba la obra.

Le contestó al doctor Jara que cuando se hacían eventos Molina traía bicicletas, juguetes y cosas para el día del niño y fin de año. Que lo que traía Molina era como que venía de Bahía de la seccional. Que cuando iban a festejar el día del niño el declarante buscaba un local, les decía el valor y Molina les daba para pagar el local y para comprar los juguetes.

Que la oficina que se alquilaba en Villarino la plata para pagar el alquiler la traía Molina. Que no sabe de donde salía esa plata, que para él era de la seccional, que nunca le preguntó a Molina.

Respondió que no trabajó en una obra de refacción de una escuela secundaria en Pedro Luro, pero participó prestando apoyo a los compañeros a los que no les pagaba la empresa. Que cuando fue un camión a cargar retazos de material y ya se iban de la obra, y en tanto le adeudaban una plata de una quincena a los compañeros, pararon el camión y le dijeron que tenía que solucionar el problema, pagar a la gente y que luego sacara todas las cosas de la obra.

Dijo que luego los llamó al otro día Guillermo Molina y les pidió que dejaran salir el camión, que el lunes iba Carcereny y les pagaba a la gente lo que se adeuda; que fue así que dejaron salir el camión y el lunes fue Carcereny y pagó.

Apuntó que había muchos problemas con los pagos en las quincenas, que Carcenri decía que era el contador el que decía la forma de pagar, y que siempre faltaba algo. Que había veces que le paraban la obra por ese motivo, que incluso una vez la paró el Ministerio de Trabajo. Que cuando se paraba la obra, luego venía Carcereny y pagaba a la gente lo que le correspondía, lo que faltaba y la obra seguía adelante. Que de los paros no participaban todos los trabajadores, la gente que iba con la empresa no quería participar de eso, sí la gente de Villarino. Que la gente que iba con la empresa se afiliaba o no a la UOCRA según quería, que los reclamos los hacían en forma general para todos; y si los trabajadores querían parar lo hacían, ellos no los podían obligar a que lo hicieran.

Refirió que les preguntaban a los trabajadores por qué no se adherían y ellos decían que no porque tenían que seguir trabajando con esa empresa y no podían perder el trabajo. Que nombres de esos trabajadores no recuerda, que eran paraguayos, uno Juvencio, otro Miler, pero no recuerda el apellido.

Contó que Guillermo pagaba el alquiler del local y les decía que si algún compañero necesitaba medicamentos que le avisaran y él les acercaba el dinero. Que recuerda que la señora de un compañero llamado Onildo Riquelme necesitaba medicamentos y se lo acercaron.

Recordó que una vez fueron a Monte Hermoso y para eso Molina le dijo que consiguiera una combi, lo hizo y Molina pagó los gastos, y

también los gastos de la estadía de las 14 personas que fueron hasta Monte.

Que siempre tuvo contacto con Molina, hablaba con él y le decía las necesidades de la zona y él respondía.

Que luego de la detención la relación con las empresas no fue igual, había problemas con la ropa, las empresas no querían delegados en la obra, no respondían los reclamos. Que siempre le reclamaron a la intervención local que está ahora y ellos se encargaban de hablar con la empresa pero tardaban mucho en responder; que por ejemplo por botines de seguridad pasaban 15 o 20 días para que renueven el botín roto.

Que la intervención una sola vez en Vientos de Secano paró por ese tema, pero nada más.

Le respondió al doctor Jara que el mismo acuerdo que estaba en el parque eólico de la Castellana lo pusieron en las Castellanas 2; que este acuerdo lo hizo el interventor con las empresas y era un acuerdo por encima del salario del convenio. Que el representante de las empresas era Guillermo Torres de Civilpro y gente de la empresa Provie, y el interventor es Carlos Boer, siendo homologado en el Ministerio de Trabajo. Que también se pactó un premio para los trabajadores de 10.000 pesos para todos, aparte del acuerdo. Que esto ocurrió luego de las detenciones.

Consultado por una obra en la estación de bombeo en el kilómetro 712, dijo que se reunieron con Boer y le plantearon que como iban a tomar 80 personas la gente tenía que ser del distrito. Que Boer les dijo que no, que esa gente se dedicara al campo, que como mucho les iba a dejar meter 5 o 6 personas. Que luego en esa obra entró un 70 por ciento de mano de obra de Villarino.

Apuntó que con su hermano hicieron cursos de capacitación antes de Vientos del Secano, para que se supiera lo que era un parque eólico. Que le enseñaron a la gente de Villarino y asistieron unas 300 personas. Que fue luego en esa obra de Vientos del Secano donde se acordó un premio de 10.000 para todos los trabajadores.

Le respondió al letrado que la protección de los derechos de los trabajadores no fue lo mismo luego de la detención de la dirigencia, que las empresas no te dan la ropa en tiempo y forma, los reclamos no llegan a buen fin, tardan mucho los reclamos.

Ante la consulta del doctor Zorzano dijo que en la obra de la escuela de Pedro Luro lo de no dejar salir al camión lo consultaron con central, lo hablaron con Guillermo Molina.

El señor Edgardo Ariel Colombo contó que es maestro mayor de obras, dedicado desde hace 38 años a la construcción en obras privadas tanto en Bahía Blanca como en Villarino. Que nunca tuvo relación con la

Cámara de la construcción, porque su trabajo son pequeñas obras, del orden familiar, viviendas unifamiliares y algo de obra industrial de galpones, no otro tipo de obras de envergadura. Que no formó parte de la cámara porque nunca tuvo tiempo de dedicarle a esa actividad. Que como diseña la obra y la ejecuta, eso le insume tiempo, y al ser un emprendimiento propio, no tiene ni siquiera tiempo para participar en el colegio profesional al cual pertenece, y menos a ese tipo de asociaciones.

Expuso que entre los años 2015 al 2017 la construcción estaba en un nivel de mucha carga de tiempo en la actividad para poder llevarla adelante. Que trabajo siempre hubo, los períodos inflacionarios hacen que sean más o menos difíciles, ha trabajado en la ciudad y en la zona rural, y no le ha faltado trabajo.

Que la situación de los trabajadores en esa época era como en casi todos los períodos que le ha tocado vivir, no ha sido ni mejor ni pero, siempre han sido situaciones difíciles.

Le contestó al doctor Jara que entre los años 2015 y el 2017 la relación con la UOCRA, era normal, iban a inspeccionar, no era una relación muy fluida ni especial, los conocía, formaban todos parte del gremio de la construcción, ha tenido inspecciones de forma normal.

Apuntó que en las inspecciones lo que les reclamaban en ese momento era lo normal en estos casos, que usen casco, cinturón, elementos

de protección personal. Eran reclamos que podían ser enérgicos, pero no ha tenido conflicto, dado que no está en esta profesión hace dos días. Que cuando vienen y reclaman enérgicamente pero si él los elementos los entregó y el personal no se los puso no los va a echar, les indica que los usen. Que no se ha sentido extorsionado ni amenazado en esas situaciones.

Dijo que siempre le pedían que tomasen a gente de la bolsa de trabajo que todos conocían que tienen en el gremio. Que el declarante nunca accedió porque luego de 38 años tiene gente que lo acompañó en épocas muy malas y entiende que tienen prioridad por encima de otros, por un sentido de preferencia. Que como lo han acompañado, le han dicho “cuando cobremos cobramos todos”, esa gente para el testigo tiene prioridad por encima de otros. Que amenaza, extorsión o represalia por no tomar gente de la UOCRA no recibió. Que como hace más tiempo que está en este trabajo que cualquiera de los del gremio, no se va a dejar impresionar por cualquiera que venga invocando ser de la UOCRA, que por eso no se siente presionado.

Indicó que algunas veces le han pedido si podía colaborar con algún material para la obra del complejo, pero nunca colaboró porque no ha tenido tiempo para eso, además que por lo general no hace provisión de materiales, sino de mano de obra.

Le respondió al doctor Jara que no lo invitaron, ni lo llamaron para formular una denuncia parecida a la de esta causa. Que no conoce el móvil sanitario de la UOCRA. Que nunca tuvo medida de fuerza entre el 2015 al 2017 en sus obras.

Que a Guillermo Molina lo conoce porque se acercó a la obra y se presentó como integrante de la UOCRA. Que en una oportunidad Molina le pidió trabajo para determinada gente, pero en ese momento no tenían trabajo, y además, como ya mencionó, le da prioridad a la gente que hace mucho tiempo lo viene acompañando. Que no recibió amenaza por no haber tomado esa gente. Que el trato con Molina era cordial.

El testigo Walter Larrea señaló que conoce a Molina desde hace 30 años. Que han coincidido en la Escuela de Trabajo Social, luego lo trató en los años 90 por ser militante del partido intransigente y el declarante sindicalista militante de la bancaria. Que luego, al ser Molina de la UOCRA, han compartido reuniones en la CGT y marchas en defensa de los derechos humanos y otras actividades políticas. Que la última vinculación fue en el 2017 que participaron de una primaria de Unidad Ciudadana, donde iban en listas distintas y luego por la minoría entró Molina en la lista como número 12.

Dijo que en las reuniones en la CGT recuerda de Molina que siempre fue un dirigente enfático y muy militante en su rol de dirigente sindical de la construcción. Que no puede dar fe de su manera de actuar

gremial, pero sí puedo dar fe de su militancia muy ferviente en defensa de los trabajadores en general, que era lo que los ocupaba en la CGT; que por eso lo referiría como una persona muy firme, convincente, con vocación de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, muy enfático.

Le respondió al doctor Jara que no le consta que Molina extorsionara; pero dando opinión en términos de los valores humanos y personales de Molina diría que no.

Que entre los años 2015 al 2017 no recibió comentarios o quejas de las empresas de la construcción por el comportamiento de Molina. Que el declarante asumió como Concejal en diciembre del 2017 y nunca tuvo manifestación ni de sectores empresarios ni políticos por eventuales inconductas de Molina. Que cuando asumió como Concejal no se presentó nadie del ejecutivo, pero sí observó en los archivos que hubo una manifestación o resolución del cuerpo aprobada por mayoría que expresaba repudio por la situación que había llevado a la formación de la presente causa. Que de los disidentes en esa resolución recuerda a dos concejales, Pera y Ercoli que no acompañaron esa resolución del bloque mayoritario que creo que era Cambiemos o Juntos por el cambio.

Expuso que al haber participado en listas enfrentadas y luego formaron la oficial, hizo que no compartiera tiempo con Molina en términos de campaña, pero sabe por contactos con otros integrantes de la lista que luego el tiempo que se dedica es full time, que recuerda incluso que sus

funciones sindicales en la Asociación Bancaria quedaron como secundarias en ese tiempo.

Apuntó que cada candidato hace cosas relacionadas con los sectores que va a representar, y por comentarios sabe que Molina se dedicaba casi a tiempo completo, pero no puede dar fe.

Refirió que el nivel de confrontación de Molina y otros dirigentes sindicales puede ser ilustrado con que la UOCRA era quien más representación tenía por cantidad de afiliados, y la pauta la puede dar la visita de Vidal del 11 de abril del 2016, donde varios sindicatos decidieron una gran movilización y fue la UOCRA quien cargó sobre sus espaldas con toda la logística de la movilización, y luego tuvieron la desagradable consecuencia que las fuerzas de seguridad les impidieron el paso en Sarmiento y Mitre o Irigoyen, por lo que posteó en sus redes irónicamente como los había atendido la gobernadora. Que eso marca la posición de Molina, la UOCRA y otras organizaciones en contra de la política que desarrollaba la gobernadora Vidal.

Ante la consulta del letrado defensor sobre si la figura de Molina a nivel local era obstáculo para Cambiemos, y si esa defensa de los derechos sociales, era relevante para el oficialismo de ese momento? Respondió que no le consta si Molina era una personalidad destacada, pero se permite considerar que en el 2016 la UOCRA registraba en Bahía un índice de desocupación de 2.000 trabajadores, y por los cometidos de la

organización social, la comisión directiva y Molina por integrar la misma, tenían prédica militante con vigor para reclamar por esos puestos de trabajo, y repudio con las políticas socio económicas que a su modo de ver habían generado esa merma en los obreros que ellos representaban.

Reiteró que no puede afirmar que sea Molina destacado por la nación o provincia como opositor.

Por última respuesta, le indicó al doctor Jara que no le consta como funcionario la existencia de persecuciones políticas en perjuicio de alguna persona.

El testigo Ignacio Jerónimo Caspe, quien prestó declaración convocado por la defensa del señor Molina a través del sistema informático Microsoft Teams, dijo que conoció a Molina por una reunión en la municipalidad, dado que durante los años 2015 al 2017 se desempeñó como Subsecretario de acción social. Que Molina fue como representante de la UOCRA junto a otra persona más para acercar un listado de gente de la UOCRA que estaba desempleada. Que esta reunión fue cerca del aniversario de Bahía Blanca en el 2016, cuando estuvo la gobernadora Vidal, pero no recuerda si la reunión se hizo ese mismo día.

Que a esa nota que presentaron se le dio curso y para tramitar una ayuda hay que hacer un informe, por lo que se pasó al área social, donde se hace un estudio de cada persona, dado que hay que pasar

controles técnicos y cualquier tipo de ayuda tiene que estar firmada por una Trabajadora Social.

Apuntó que no lo recuerda, pero tal vez algún bolsón de alimentos se dio en ese momento, dado que eso es lo más rápido; pero luego el seguimiento por ayuda social lo hacen las profesionales del sector.

El testigo Leandro Fabián Andrés Martinez, convocado por la defensa del señor Guillermo Molina para prestar declaración a través de la plataforma Microsoft Teams, contó que durante los años 2015 al 2017 trabajó para la empresa Coince, en la localidad de Pedro Luro.

Le indicó al doctor Jara que no hicieron medidas de fuerza en la empresa Coince. Que si no recuerda mal cobraban el salario básico de convenio, y cree que cobró premio de fin de año.

Expuso que fue a una fiesta por los festejos del día del niño, que ahí hubo regalos, que Coince aportó una bicicleta.

Dijo que una vez fue a la sede de la UOCRA y ahí se ayudaba a los trabajadores a conseguir trabajo, había que llevar el currículum y se anotaban en la bolsa de trabajo. Que el declarante consiguió trabajo por la bolsa.

Refirió que en Coince trabajó en una obra de desagües pluviales, la que se hizo con normalidad; que no existieron incumplimientos por parte de la empresa, que la empresa trabajó muy bien.

Consultado por qué pasaría si la empresa trabajaba mal, respondió que no lo sabe, que capaz se hecho alguna medida; pero reiteró que la empresa trabajó muy bien. Agregó que el referente gremial era Molina en esa obra.

Expresó que para los gastos de la fiesta del día del niño Coince colaboró un poco y entre compañeros ponían algo para que se organice la fiesta, para darle algún juguete a un chico.

El testigo David Roberto Revale, convocado por el señor Defensor, Dr. Mariano Jara, para prestar declaración a través de la plataforma Microsoft Teams, expresó que conoce al señor Molina por la función que el declarante tenía como Director de viviendas de la municipalidad de Bahía Blanca, cargo que ocupó desde el año 2008 hasta el 2015 en que se jubiló.

Señaló que estuvo en la tramitación del barrio para el gremio UOCRA desde sus comienzos, desde que empezaron a involucrarse en el tema la gente de la UOCRA, gestionando no solo para ese sindicato sino para otros gremios viviendas a través de la municipalidad a la nación.

Contó que Molina fue a verlo por el tema de las viviendas a la municipalidad diciendo que tenían un terreno en la chacra 315 el cual estaba cedido por la provincia y querían hacer viviendas ahí. Que en primera instancia no se podía hacer porque tenían una cesión de derechos pero no la propiedad, y por la gestión que hicieron en provincia le dieron con el tiempo la propiedad del terreno ese.

Que por eso empezaron a trabajar con un pedido de 40 viviendas con terrenos en sistema TPU en el que la empresa tenía que no solo hacer las casas sino también poner el terreno, que esto fue antes de que le dieran los terrenos a la UOCRA como propiedad. Que todo ese trámite está en la municipalidad y en la Dirección de viviendas de la nación.

Expuso que por el gremio era Molina quien hacía las gestiones, que una vez fue Monteros y luego siempre era delegado Molina para todo el trámite de pedido de construcción de viviendas. Que incluso una vez fueron juntos a la Secretaría de vivienda y hablamos con el Subsecretario Bontempo de vivienda.

Que la gestión del predio se hizo varias veces, el TPU fue a licitación a través de la ejecución de la vivienda y la puesta de terreno y no se pudo lograr porque no hubo oferentes, no había empresa constructora que estuviese en condición de ofrecer los terrenos. Que luego se iniciaron los trámites para la chacra 315 que era de la UOCRA, pero eso ya no

dependía del municipio sino de nación. Que sabe que inclusive hasta ahora están haciendo gestiones para que la UOCRA tenga sus viviendas.

Contestó que no tiene conocimiento de ningún tipo de apriete de la UOCRA. Que sólo conocía a Molina por el tema de las viviendas y no se enteró de nada más.

La testigo Carolina Tevez dijo que entre los años 2015 al 2017 era enfermera, al igual que hoy, habiendo cumplido tareas saliendo a las obras en el móvil sanitario. Que iban a tomar controles vitales a los integrantes de las obras. Que cuando empezó iban en una combi obra por obra, dos o tres obras cada mañana, y bajaban en la obra, pero no era nada particular, no había un recinto.

Indicó que luego también iban con el odontólogo y más tarde unos chicos que explicaban acerca de las maniobras de rcp. Que las empresas sabían de su actividad y les daban permiso para entrar. Que cobraba por hacer eso, que le pagaba la UOCRA, y a ella le pagaba Guillermo Molina.

El señor Miguel Pellegrina señaló que conoce al señor Molina por ser amigo de su señora, amistad que formaron como compañeros de trabajo.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

Dijo que entre los años 2015 al 2017 era propietario de una empresa de servicios para el polo petroquímico, haciendo inspecciones y ensayos.

Indicó que en algún momento Molina fue delegado en su empresa y luego pasó a integrar la comisión directiva de la UOCRA, y pasó a licencia gremial. Que cuando era delegado gremial en la empresa, estaba encargado de cuestiones administrativas.

Expuso que la relación con el mencionado siempre fue buena, nunca tuvo ninguna cuestión que lo llevara a discutir con él. Que a veces tenían alguna cuestión por ser el deponente el dueño de la empresa y Molina el delegado, y ahí había alguna discusión, intercambio de opiniones razonables, capaz que alguno con más vehemencia, pero ninguna cuestión violenta; que luego se ponían de acuerdo, conversaban le buscaban la vuelta hasta encontrar un punto bueno para la gente que trabajaba y la empresa. Que la mayoría eran solicitudes económicas generalmente, eran erogaciones de plata que debía hacer la empresa, y si era razonable asentía y lo llevaban a acuerdo. Que en general le dijo que sí a los pedidos porque nunca le hizo planteo que hubiese considerado que no podía cumplir; que por ahí se veía el momento, plazo en que hacerlo, la magnitud, dado que, por ejemplo, un lugar para comer no se puede hacer para mañana sino en un mes. Que siempre se pusieron de acuerdo.

Ante nuevas consultas del doctor Jara, señaló que la extorsión le parece que es algo que a uno lo hacen hacer compulsivamente, a uno lo obligan a hacer algo con alguna cuestión que le pueden ofertar. Que en las conversaciones no se sintió extorsionado por Molina, el trato siempre fue bueno, pudo existir algún intercambio de opinión más elevada, pero nunca sintió que lo estuviese extorsionando, que con él eso nunca pasó.

Reiteró que fue delegado hasta que pasó a ser dirigente de la UOCRA. A partir de ahí no cumplió más la función de delegado gremial de la empresa. Estaba en comisión directiva de la UOCRA. Que cuando se fue a la UOCRA conversaron alguna vez pero no tuvieron un intercambio en su función de integrante de la UOCRA y el deponente como empresario.

Refirió que el móvil sanitario es una especie de ambulancia que se dedicaba a recorrer lugares u obras y se hacía prevención de la salud de los operarios afiliados a UOCRA, le tomaban la presión y se hacía alguna cuestión vinculada con la salud preventiva.

Le respondió al doctor Jara que colaboración al declarante directamente no le pidió la UOCRA; que es asociado a CECIL, una cámara de empresas, y a través de CECIL colaboraban para día del niño y eventos de fin de año, compraban cajas con sidras y pan dulce y se lo entregaban. Que eran colaboraciones voluntarias, alguien hablaba con el presidente de la cámara y él les pasaba vía mail la inquietud y el que quería colaboraba

con lo que podía, por ahí se anotaban con cajas navideñas. Que él no tuvo trato directo con nadie de la UOCRA sobre eso.

Contó que en la obra en la termoeléctrica de White participó en parada de planta por mantenimiento. Que se trata de una cuestión técnica que cada tanto se realiza para revisar equipamientos, tuberías y todo lo demás, se para la planta y se revisa, y esto es decisión de la gerencia, de los dueños de la planta.

Apuntó que en Bahía la UOCRA tiene firmado con la CECIL un acuerdo en el cual se establecen algunos premios para los trabajadores por día, por horario extendido, por parada de planta. Que en esa oportunidad no se pusieron de acuerdo la gente de la termoeléctrica y el gremio sobre si era o no parada de planta, y por eso hubo una reunión en UOCRA, a la cual asistieron varios contratistas, y se hizo reunión para establecer que eso era una parada de planta y por eso la compensación que había que dar a los trabajadores, luego que se arregló ese tema, la parada se hizo normalmente. Que no recuerda el monto pero se fijó un monto diario.

Expresó que las empresas contratistas cotizan por valor horario establecido legalmente, con el acuerdo marco en Bahía que establece un valor diario para cada persona que trabaja en una parada de planta. Que eso lo cotizan y si ganan la cotización el que pone la plata es la Central Termoeléctrica, porque eso tiene que ver con la plata que tienen que prever para el pago de la mano de obra y los equipos. Que en general este acuerdo

ya está pre-hablado con las empresas y ellos saben que en la parada hay un reconocimiento para los trabajadores, ellos pasan esos valores y luego los contratistas se los dan a los trabajadores. Que los comitentes son las empresas del polo, la Central o Profertil y la plata sale de ahí.

Que la discusión es siempre de donde sale la plata, un contratista pequeño con un presupuesto si sale algo no previsto lo tiene que sacar de los beneficios y a veces se quedan sin beneficios, por eso lo tienen que tener arreglado con el comitente.

Que en esa oportunidad se hizo una reunión en la sede de la UOCRA de la cual participó, intercambiaron ideas de valores, no llegaron ese día a un acuerdo y al otro día, ya no participó, pero se estableció un valor y se cerró el tema. Cree que se acordó 50 por día y la Central acordó pagarlos. Que no hubo extorsión o amenazas, son reuniones que se ofrecen 3, se piden 5, no se sentían presionados ni apretados los que estaban ahí.

Que no sabe que pasaba si no pagaban, que no sabe que hubiese hecho la UOCRA. Que cree que esas cosas se arreglan, porque la Central tiene que seguir funcionando, se puede presionar hasta un punto, pero nunca sintió que alguien dijese que iban a tener parada de forma indefinida la central hasta que se arribe a un acuerdo.

Dijo que conoce la bolsa de trabajo, donde se anotan los que están sin trabajo. Que su empresa tiene personal especializado, que en

alguna oportunidad pudo haber tomado algún ayudante, gente de más baja calificación que puede realizar tareas de menor responsabilidad, pero no los técnicos que manejan en su empresa, que están capacitados en Buenos Aires, y no es común que haya gente de ese tipo en la bolsa.

Que Molina siempre le dijo cuando era delegado que tomara gente de la bolsa de trabajo. Que le hacía acordar que había un lugar donde había compañeros que necesitaban trabajar y que dentro de sus posibilidades recurriese a esa bolsa para darle trabajo a esa gente.

Que ninguna otra cosa le pidió Molina, salvo lo que les correspondía a los trabajadores, como se pagaban las horas extra, que cumpliera con eso, el lugar para el refrigerio, las cosas para lo cual era delegado él, para cuidar la integridad y la buena manera de trabajar de la gente.

Al doctor Zorzano le contestó que su esposa trabajaba en gabinete psicológico en Médanos y Molina trabajaba en ese gabinete y de ahí se conocían. Que en su empresa era delegado y hacía tareas administrativas, pero fundamentalmente cumplía la función de delegado.

El testigo Gabriel Martin dijo que conoce a los acusados del gremio, que mantiene amistad con algunos. Que durante los años 2.015 al 2.017 siempre fue obrero de la construcción, en distintas empresas. Que si no recuerda mal para esa fecha trabajaba para Panedile en obra pública, la

renovación termoeléctrica Guillermo Brown y luego en una potabilizadora de ABSA.

Que en esas obras había un marco acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo y era por arriba de la escala normal, en un 15 o 20 por ciento más. Que no sabe quien firmó ese acuerdo, que el mismo se hizo para esas obras puntualmente. Que había otras obras con esos acuerdos, y siempre se homologaban en el Ministerio de Trabajo. Que también cobró premio de fin de año y eso estaba homologado.

Refirió que siempre iba a la UOCRA, que era militante del gremio. Que ha estado anotado en la bolsa de trabajo muchas veces y ha conseguido trabajo por la bolsa. Que no sabe quien la manejaba, que ellos sólo se anotaban y la manejaban puertas adentro y por eso no sabe como se la ofrecían a la bolsa a las empresas.

Le contestó al doctor Jara que participó en asambleas informativas. Que en las mismas el cuerpo de delegados informaba a los trabajadores los beneficios que tiene afiliarse al gremio, como el programa UOCRA vacaciones y otros beneficios que tenían; y además le informaban como iba la obra en sí.

Refirió que no hubo problemas con la patronal en esas asambleas.

Indicó que el móvil sanitario fue a la obra, les dieron un curso de rcp y primeros auxilios, que lo presenció tanto en la empresa Maza como en Panedile.

Que sabe de festejos por el 22 de abril, día del constructor. Que organizaban asados y en uno de esos contrataron un circo que actuó en el predio y se festejaba el día del constructor. Que también se festejó el día del niño, pero no estuvo presente porque no tiene hijos.

Expuso que a la sede de la UOCRA se iba a pedir trabajo solamente, no otra ayuda. Que sabe de un convenio con la CGT que daban bolsones de alimentos pero desconoce quien estaba con eso, era algo del gobierno.

Preguntado por el letrado defensor sobre que pasó luego de las detenciones, contestó que no sabe como fue la relación de las empresas con los trabajadores, que hubo dos veces que se definieron autoridades de UOCRA central que fueron a normalizar el gremio. Que entre las empresas y los trabajadores siguió siendo la misma la relación, las empresas no objetaron nada a los trabajadores, nunca cuestionaron a los obreros en sí.

Que acuerdo por sobre paritaria no se pactó, solo siguió el de Panedile que lo respetaron, no lo dieron de baja. Que con esta nueva normalización no sabe de nuevos acuerdos. Que festejos tampoco hubo. Que la protección a los trabajadores por parte de la UOCRA es la misma.

Al doctor Zorzano le contestó que la militancia es ir al gremio, ir a movilizaciones para poder conseguir los acuerdos, ir al Ministerio de Trabajo, y los medios lo difundían. Que siempre en la calle estaban. Que ya no es militante, que lo fue hasta que renunció la cúpula de la UOCRA local, antes de la intervención.

El testigo Ricardo Ángel Ismael Rebolledo dijo que durante los años 2015 al 2017 era obrero de la construcción, que por eso conoce a varios de los acusados, al haber ido a buscar trabajo.

Que en esa época trabajó en Bahía Blanca en la obra de la termoeléctrica nueva. Que no se realizaron medidas de fuerza en esa obra. Que dos por tres se hacía a las perdidas alguna asamblea. Que cuando estaban trabajando los llamaban que había asamblea, a veces iban y otras se quedaban trabajando en sus puestos. Que cuando iban a la asamblea ahí les decían o que era por los sueldos, por la colecta para el día del niño o por algún accidente de un compañero. Que duraban 20 minutos aproximadamente, a lo sumo media hora y no era obligatorio participar de la misma. Que el declarante incluso muchas veces no iba a participar de las asambleas porque le interesaba más trabajar.

Indicó que por la parte gremial, si uno no iba a la asamblea no pasaba nada, pero que la gente a veces trataba de no ir para que no te marquen en los contenedores oficina de la empresa. Que en esas oficinas estaban la gente del gremio y las de la empresa, y que de ahí ven quienes

van a la asamblea, y por eso algunos a veces no iban para cuidar el trabajo, porque uno tiene familia y si iba a una asamblea o reunión sindicalista te pueden echar.

Preguntado por el doctor Jara si tiene conocimiento de alguna represalia tomada por la empresa por haber ido a asamblea contestó que no.

Agregó que sabe que han echado gente de todas las obras por ser gremialistas o sindicalistas, como dicen los empresarios, por reclamar cosas, y si uno va a reclamar te dicen que sos gremialista o sindicalista.

Consultado sobre cuál era la consecuencia de ser marcado como sindicalista, dijo que era eso, que lo marcaban.

Expuso que había acuerdos salariales por encima del convenio, que tenían uno de los acuerdos más grandes, según les comentó gente de afuera, quienes decían que ganaban bien. Que estos acuerdos los hacían los sindicalistas, el secretario general y demás. Que consistían en premio de fin de obra, franco compensatorio, y otros beneficios; que se cobraba muy bien en la obra.

Relató que conoció el móvil sanitario de la UOCRA en las obras. Que tomaban la presión, daban cursos de rcp, vacunaban para la gripe, y daban charlas sanitarias.

Que ha ido a la sede de la UOCRA a buscar trabajo; que se tenían que quedar ahí para tratar de charlar con algunos de los secretarios, porque ellos tienen una bolsa de trabajo, para así poder entrar a una empresa a trabajar. Que hay que ir a la UOCRA y ellos manejan un listado, te preguntan categoría y si tenés carnet de conducir, y luego tenían la suerte de entrar.

Refirió que a veces estaban afuera para ver si ligaban trabajo. Que alguna vez insultó a Molina, Paiz y a otros más, cuando no salía trabajo, o porque tenía que ir el declarante en un listado y luego fue otra persona. Que también se enteró que esta persona tenía a la esposa con leucemia o algo así, por lo que luego que los insultó recapacitó.

Dijo que en la UOCRA lo han ayudado con alguna garrafa. Que también ha visto que ha ido gente a conseguir medicamentos. Que desconoce si han ayudado con dinero a alguien.

Consultado sobre la situación de los trabajadores y la relación con las empresas con posterioridad a las detenciones de los dirigentes de la UOCRA, dijo que el no pudo conseguir más trabajo, que sabe que hay mucha gente sin trabajo. Que ahora no es lo mismo que antes, que antes se defendía al trabajador. Que dos por tres se cruza con algún compañero y le cuentan que no es lo mismo que antes, que no están los acuerdos, que

cobran menos. Que en la única obra que ha estado no hubo premios ni nada.

Le señaló al doctor Jara que ha participado en eventos por el día del niño o el día del trabajador de la construcción. Que ahí se entregaban premios y había sorteos.

Expuso que ha visto empresarios entrar a la sede y ellos se ponían contentos, porque venían de tal o cual empresa e iban a tener trabajo.

Que ha recibido capacitaciones de la UOCRA, charlas de seguridad e higiene, para el cuidado de cada uno y de los compañeros, charlas de adicciones también. Que no sabe quien pagaba todo eso.

Que las empresas a veces aportaban con cajas navideñas o juguetes para los chicos en los festivales. No sabe si aportaban plata, los juguetes y esas cosas las ha visto porque han salido camionetas con esas cosas, chorizos, cajas navideñas, juguetes.

Por último dijo que a Molina lo veía en algún que otro acto en la CGT.

El testigo César Henriquez expuso que durante los años 2015 al 2017 trabajó en las obras de la termoeléctrica, en el tendido eléctrico de líneas de alta tensión. Que en el sector donde estaba no se hizo asamblea o huelga. Cree que en planta se hizo una asamblea informativa, pero él

estaba en el campo. Que la charla informativa fue por un acuerdo que se había firmado por el tema de una enfermería.

Que cree que se firmó un acuerdo por encima de la paritaria por el valor hora de trabajo.

Indicó que ha ido a la sede de la UOCRA, que cada vez que se queda sin trabajo vuelve a anotarse en la bolsa de trabajo, que es un registro donde se anota el obrero que está desempleado. Que esa bolsa la maneja un colaborador de UOCRA. Que ha conseguido trabajo de ahí, por eso iba a anotarse cada vez que se quedaba sin trabajo. Que no ha ido a la UOCRA por algún otro motivo; pero si sabe que muchas veces ayudaban con alimentos o medicación si había compañeros con enfermedades, que eso lo ha visto. Que no sabe si han dado dinero, sí a compañeros con hijos enfermos una colaboración en conjunto para comprar una silla de ruedas o cosas así. Que este dinero, según la obra, el delegado hacía reunión se juntaba entre todos los compañeros y se lo hacía llegar a esa persona. Que esta gestión la hacían los de la UOCRA, pero no sabe si además ponían dinero.

Respondió a las consultas del doctor Jara que conoce el móvil sanitario, que ha estado en una empresa donde fue, en Botazi construcciones, que ahí llegó el móvil y medía presión, glucosa y aplicaba la vacuna contra la gripe.

Que ha cobrado un premio de fin de año en la empresa donde trabajaba, que ese premio lo arregló la comisión con el delegado.

Le contestó que luego de las detenciones la empresa en la que estaba trabajando siguió respetando el acuerdo firmado, que luego trabajó en otra empresa y se seguía respetando el mismo acuerdo. Que luego de las detenciones en la empresa que trabajaba el trato con los trabajadores fue igual. Que con los delegados la relación con los trabajadores también fue igual.

Refirió que a Molina lo conoce de cuando fue al gremio a anotarse, que desconoce si Molina tenía otra actividad además de la UOCRA.

Señaló que antes de las detenciones se habló con la municipalidad para construir un barrio para los afiliados; que luego esas tierras se perdieron, que él vive enfrente de ese lugar y ahora están haciendo una plaza. Que según sabía estaba el proyecto, las tierras y luego de ser detenidos eso se perdió.

Contó que participó en eventos de la UOCRA para el día del niño, día del obrero de la construcción. Que el día del niño se festejó en varios lados, uno de los lugares fue el predio de la UOCRA, que iba la familia y se festejaba el día con chocolate, pelotas, bicis, y se hacía un festival para los chicos.

Dijo que no sabe si luego de las detenciones se firmó un nuevo acuerdo por encima de las paritarias, que tampoco sabe si con esta nueva conducción se pactó un premio para los trabajadores. Que eventos del día del niño o del obrero no se hicieron nunca más. Que ha ido varias veces a la sede y no le permiten entrar, que ni siquiera lo anotan, lo dejan parado afuera. Que no sabe si brindan alguna ayuda. Que no fue más al gremio.

El testigo Marcelo Cerri dijo que durante los años 2015 al 2017 trabajó para distintas empresas en obras en la termoeléctrica Guillermo Brown. Que no participó de medidas de fuerza o movilizaciones en esa obra, dado que ahí estaban bien pagos, se habían logrado un 35 por ciento sobre las paritarias, todo homologado por el Ministerio de Trabajo. Que no sabe quien acordó eso. Que ha cobrado premio de fin de año.

Expuso que ha ido a la sede de la UOCRA, que es su segundo hogar. Que iba como los compañeros desocupados, dado que ahí se saben las noticias sobre si va a arrancar una obra o no, y qué proyectos hay. Que siempre estuvo anotado en la bolsa de trabajo, siempre hubo bolsa de trabajo en la UOCRA como en todas las partes del país. Que tomaba trabajo cuando le tocaba el turno en su oficio, pero eran muchos. Que la bolsa la manejaba la gente de la UOCRA, que eran ellos los que decían que se necesitaba cañista, soldador, y luego le decían que dejara el lugar a un compañero que estaba parado.

Contó que había mucha gente desocupada en el 2015, cuando comenzó a trabajar en la termoeléctrica, y que ahí eran unas 2.000 personas trabajando y en la bolsa de trabajo habría unos 6.000 anotados. Que hoy también existe mucha desocupación.

Mencionó que cuando estaba desocupado iba a movilizaciones y eventos. Que asistió a festejos del día del niño, fin de año.

Dijo que no vio el móvil sanitario, pero sabe que iba a las obras y tomaba la presión y vacunaba contra la gripe.

Que ha participado de asambleas informativas cuando se requería algún beneficio o acomodar las paritarias. Que había obras que no estaban adheridas al acuerdo, dado que siempre se discriminó a la gente de la construcción, siempre fue el salario más bajo, por eso entre todos los compañeros había que hacer un empuje para que te paguen un poquito más. Que a esas asambleas iban la mayoría de los empleados, salvo la parte capataz o jefes que no van porque tienen arreglado el sueldo.

Contestó que se hacían cursos de capacitación en electricidad y de otro tipo, que son los mismos cursos que dan cualquier escuela de soldadura o cañería, en los que te enseñan lo básico y elemental.

Comentó que ha visto a gente sin trabajo y sabe que le han dado garrafas o bolsones de mercaderías. Que cuando estaba en la termoeléctrica había una caja o urna y uno depositaba lo que quería.

Respondió que luego de las detenciones es como que se perdieron un poco de beneficios, no hay tanto. Que hoy no sabe con quien hablar. Va, cumple su función, pero está limitado para ir a fumar un cigarro, que es lo que corresponde, pero te limita, dado que si vas dos o tres veces a fumar te ven de la oficina de personal y es como una intimidación, que no va a fumar porque los fumaderos están delante de la oficina de personal, al igual que la oficina del delegado que está al frente de la de personal y por eso uno no va a la oficina del delegado, porque te tildan de gremial.

Dijo que dejó de trabajar en Panedile a fines del 2.018 y hoy está en otra empresa, a la que no entró por la UOCRA, y que hace rato que no va al gremio.

Le contestó al doctor Jara que al momento de las detenciones estaba en Rosario con su familia, y lo trajeron para la obra del 2.018. Que en esa obra sí había acuerdo por paritarias, se tomaba la mitad de lo de antes de la termoeléctrica; que cree que les dieron un 18 por sobre paritarias, que ese acuerdo vino porque Panedile ya estaba con acuerdo sobre paritarias y se vencía en el 2.017 y no querían pagar el premio de fin de año, que luego entró el declarante a la obra la que se estiró al 2.018, cambiaron los delegados y los nuevos gestionaron un acuerdo local, que fue luego homologado.

Expuso que cuando llegó a Bahía Blanca encontró que había una diferencia abismal con otros lugares, que antes ha estado en sitios

donde la gente de la UOCRA comía en lugares apartes y ganaban 2,50, y acá un oficial carpintero ganaba lo mismo que el declarante que es soldador. Que además se armó un predio espectacular que no había, al cual fue para una fiesta de 15 de la hija de un compañero, y ahí observó una pileta y cosas que se estaban haciendo. Que además le mencionaron que se estaba gestionando un barrio, lo cual le venía bien porque no tienen vivienda, como tienen los taxistas.

Señaló que no trabajó en los parques eólicos, pero sí tiene contacto con conocidos que han trabajado en parques eólicos y le han mencionado que cobraban bien, tenían buenos acuerdos, pero estaban mal en la atención, con baños a 300 metros y no había comedores, por lo que estaban bien económicamente pero no como laburantes.

Consultado por si le habían comentado esta situación a los delegados, respondió que le dijeron que si está pactado hay cosas que no las podés charlar, que pasa a ser lo mismo que los cigarros hoy, si te dicen que estás todo el día en el fumadero, dejás porque no podés perder el trabajo, que esto son formas de presión. Que no podían hablar en contra del delegado porque lo estaba metiendo el mismo gremio, “no le podés morder la mano al patrón, hay cosas que no se pueden pelear” –así sus palabras-.

La señora Gloria Viviana Sauma, testigo convocada por el doctor Jara, y por esto consultada en primer lugar por el letrado, señaló en la audiencia ser empleada de la UOCRA, motivo por el cual conoce a todos los

acusados, siendo también desde el 2015 empleada administrativa de UPECOM.

Dijo que realizó la parte contable en la UOCRA, que un tiempo luego no lo hizo, y ahora volvió a esa actividad. Que en esa tarea pagaba las cuentas del dispenser de agua, cable, gastos que se generaran dentro del sindicato, refrigerios. Que no se encarga de pagar los sueldos, los que se transfieren directamente a cada caja de ahorro del empleado y se retiran con tarjeta.

Indicó que estos gastos se enfrentan con un presupuesto que llega todos los meses de UOCRA central, se rinden los gastos y se vuelven a depositar los presupuestos. Que el presupuesto es dinero, se transfiere a una cuenta que está a nombre del secretario general del momento y se retira en efectivo. Que en ese momento tenía las tarjetas que estaban a nombre de Monteros que era el titular de la cuenta, y ella retiraba el dinero del cajero pagaba y rendía con los comprobantes. Que las cuentas estaban a nombre de Monteros, ella solo usaba las tarjetas para ir al cajero y retirar, dado que no puede retirar por caja porque ahí solo puede hacerlo la persona autorizada.

Expuso que conoce a Guillermo Molina, que era el secretario de finanzas, pero en tal carácter no manejaba la plata. En lo que era

contable Molina no tenía participación, la cuenta era a nombre del secretario general, Molina no tenía intervención.

Consultada por el móvil sanitario, dijo que era el móvil que se dedicaba a la vacuna antigripal en ese momento, iban a obra y cumplían esa función, llevaban al obrero de la empresa a vacunar. Que el que se encargaba del móvil sanitario era Guillermo Molina junto con alguna enfermera. Que cree que iban en una combi y alguna vez han ido en auto.

Contestó que no pagaba ella los gastos del móvil, que las vacunas llegaban de Buenos Aires, las enfermeras eran del SEMAC, pero ella no pagaba esos gastos, que desconoce con que dinero se pagaban esos gastos, que no era parte de su trabajo.

Le expresó al letrado que recuerda alguna celebración o festejo por el día del niño, que se hacía en algún salón con juguetes que se entregaban a los chicos y algún chocolate o bollito. Que no pagaba ella con la plata que manejaba estos gastos, que no sabe como se pagaban.

Que estuvo ausente de su trabajo desde fines del 2014, hasta principios del 2016, con carpeta médica.

Al doctor Zorzano le contestó que OPECOM es la obra social del personal de la construcción y funciona en calle Las Heras n° 39. Que ella es empleada de OPECOM desde el año 1989 y ha cumplido funciones en el área sindical. Que en el área contable de la UOCRA estuvo desde el 2.009

hasta el 2.014, y luego siguió únicamente en OPECOM, hasta que en el 2018 volvió a calle Saavedra 470.

Expresó que Guillermo Molina era secretario de finanzas y estaba en Saavedra 470, sede de la UOCRA. Que en la comisión directiva del sindicato son 5, el secretario general, el adjunto y tres secretarios más, que además hay colaboradores gremiales, 3 o 4, y el personal administrativo y de maestranza. Que los electos son los de la comisión, a los colaboradores los elije el secretario general y de empleados eran entre 7 a 9, según la época, entre administrativos y maestranza.

Que en calle Saavedra eran tres administrativas y una persona de maestranza, que no sabe si tiene más empleados la UOCRA. Que en el predio recreativo no hay empleados, ni nunca hubo empleados. Que al predio iban a colaborar o hacer trabajos compañeros que estaban dentro del sindicato, que no estaban nombrados por UOCRA, y realizaban tareas de limpieza, cortado de pasto, reparación de alguna cosa.

Refirió que no tiene conocimiento de que se les haya contratado seguro a estas personas, que no manejaba esa área, que seguramente era del secretario general.

Mencionó que no conoce a la empresa Acqua, que no tiene contacto ni conocimiento de las empresas, solo retira dinero, paga cuentas y rinde facturas, no tiene contacto con los empresarios ni las empresas.

Dijo que la MUOCRA es una agrupación de la UOCRA, es gente que se agrupa con un propósito; que no participó de la MUOCRA.

El testigo Mauro Suazo, quien prestó declaración a través del sistema Microsoft Teams, contestó las preguntas del doctor Jara (quien lo convocara), señalando que durante el año 2016 realizó una auditoría en una obra de la empresa Geomac por fallas de seguridad. Que ante las fallas de seguridad se completó la documentación cymac, que consistía en pedir la documentación laboral y de seguridad e higiene que tiene que estar en la obra, y como no estaba en la obra, no tenía los permisos para iniciar la obra y no los tenía en ese momento fue que se confeccionó el formulario cymac y además encontró las fallas de seguridad. Que se dejó constancia en el cymac que no tenía la documentación en la obra para presentar, se lo hace firmar luego de leerlo, se le entrega una copia y se le pide que presente en un tiempo la documentación requerida en el gremio.

Indicó que esta persona tenía que ir a presentar la documentación a la persona a cargo de la secretaría de finanzas que era Guillermo Molina. Que el declarante no estuvo en la reunión entre esta persona y Molina.

Comentó que esa documentación cymac es una denuncia que en papel va al Ministerio de Trabajo, y luego de concretada la reunión entre Molina y el representante de la empresa, a los días tiene que corroborar si

las fallas que había detectado se habían solucionado, que es por esto que se le da un plazo desde el gremio.

Refirió que el hombre le preguntó si había forma de solucionarlo y que le dijo que tenía que ir a hablar con el secretario y él le iba a dar un plazo para solucionar todo.

Expuso que la obra no estuvo parada, no se paró en ningún momento; que el declarante no paralizó la obra, solo le entregó la copia del cymac y organizó una reunión con el secretario para que éste le de un lapso para que pueda arreglar la situación en la obra. Que si no recuerda mal cree que a los 4 o 5 días fue a la obra y ahí ya había matafuegos, el baño y se solucionaron todos los problemas que figuraban en el cymac.

Refirió que en la inspección le habían pedido que acomodara lo que faltaba, como los matafuegos, que el encargado le dijo que recién se instalaban y por eso no tenían la documentación en la obra.

Dijo que a la sede de la UOCRA iban los trabajadores, mucha gente militante, y a pedir trabajo militantes o no. Que había gente que iba por primera vez y se anotan en la bolsa de trabajo. Que cuando había pedido de alguna empresa que decía que necesitaba 4 muchachos, dos carpinteros y dos ayudantes, se buscaba en el listado la gente con esa especialidad y se lo mandaba a la empresa que lo tomaba o no. No era obligación de la empresa tomar a esa gente.

Comentó que entre los años 2015 al 2017 se le han dado ayudas a los trabajadores, dado que había compañeros que pedían garrafas, medicamentos y mostraban la receta y se les iba a comprar.

Dijo que antes de ser el declarante delegado lo han ayudado a pagar la luz. Que estas ayudas las brindaba la UOCRA, y tiene entendido que algunas empresas colaboraban y de ahí salían las ayudas. Que también de casa central en Buenos Aires mandaban fondos para esas ayudas; pero no sabe como se manejaban los fondos de las ayudas, que puede ser que cada secretaría repartía los fondos, dado que no se hablaba siempre con una sola secretaría, los trabajadores iban y hablaban con varios.

Apuntó que el móvil sanitario hacía visitas en cada obra, se daba charla de rcp y se hacía control de diabetes, medían la glucosa y tomaban la presión.

Le respondió al doctor Jara que el día 22 de abril se festejó en la UOCRA, y también el día del niño, y que se hizo la fiesta de fin de año, donde hubo mucha gente, se hizo en la FISA y era un buen almuerzo donde iba la familia. Que para el día del niño se les pidió colaboración a las empresas y estas donaron bicicletas y juguetes, que se pasó toda la tarde en el club Villa Mitre, se hicieron sorteos, tortas y dulces para los chicos. Que esto se financió con la colaboración de las empresas, y muchas

donaron bicis, juguetes; lo mismo que cuando se le pedía donación a las empresas para las escuelas, útiles escolares.

Refirió que luego de la detención de los dirigentes de la UOCRA no fue lo mismo. Llegó Rodríguez estuvo 7 meses y luego nunca tuvieron fiestas, no se hizo nada más por el día del niño, fin de año, ni 22 de abril.

Que según tiene entendido no se dan ayudas sociales a los trabajadores.

Manifestó que en la obra de Geomac los haberes no se pagaban por encima de la paritaria. Que en esa obra y muchas otras, les ha dejado una copia del convenio nacional de los haberes, y había chicos que hacían trabajos de oficiales en esta obra y en la mayoría de las de Bahía Blanca y los remuneraban como ayudantes, que eso era un gran tema con las empresas.

Culminó su declaración señalando que actualmente no hace el trabajo gremial, está en Profertil y se cumple con todo, pero no cree que en las obras del centro estén muy bien en la parte de seguridad y en lo laboral.

El testigo Guillermo Gustavo Gregorio apuntó que conoce al señor Molina y tiene amistad desde el año 80. Que Molina es compañero ideológico y puede decir “un amigo, aunque no lo ha visto los últimos años”. Que en su época de militancia universitaria y el pase a la política, a ellos les

faltaba calle, y con Guillermo encontraron a alguien que era Trabajador Social y les facilitaba lo de poder ir al barrio. Era un tipo que sabía caminar el barrio, llegar a la gente, era un tipo solidario, de darle una mano a la gente.

Expuso que luego fue candidato a concejal y tenía expectativa de ingresar. Que era un tipo formado, con facilidad de palabra, que transmitía bien lo que quería decir y pensaba. Un tipo agradable, divertido, pero cuando se sentaba a discutir política discutía política. Que Molina era siempre con una idea constructiva y de seguir avanzando.

Expuso que de la militancia sindical lo ha seguido por los medios y por conocidos en común que tienen, ya que por su actividad nunca tuvo acceso a la UOCRA, aunque tiene entendido que estaba en la obra social y sabe de compañeros que le han ido a pedir algo y el tipo siempre estaba disponible.

Que ha conocido compañeros que han hecho de la política un microemprendimiento, y que este no es el caso de Guillermo. Que era una persona comprometida donde le tocara.

Manifestó que Molina vivía en el barrio Rosendo Lopez, que tenía una Dodge que no siempre andaba, se iba a Médanos a trabajar a dedo y siempre fue austero, normal, de una vida sencilla. Que lo del

Rosendo Lopez es hace 20 años, que no sabe ahora últimamente donde vivía en los últimos años, pero no se lo ha cruzado en un auto de alta gama.

Señaló que la última vez lo vio fue en una movilización para el día 11 de abril del 2016 en la plaza Rivadavia. Que esa vez había venido a la ciudad la gobernadora Vidal. Que lo vio salir a Molina junto a dos o tres personas más de la municipalidad y habían entregado un petitorio a las autoridades.

Expuso que Molina no es susceptible de ser dirigido fácilmente, no es manipulable para nada. Que es imposible en su opinión que siguiese órdenes ilegítimas, que nunca aceptaría eso. Que si él está a cargo de determinada responsabilidad no aceptaría ninguna orden que vaya en contra de los beneficiarios de esa actividad.

Le respondió al doctor Jara que no lo vio apretar a ninguna persona. Que cuando discutimos lo hacemos fuerte, pero eso es distinto a apretar a alguien. Discutimos poniendo pasión y temperamento.

Que no lo vio aprovecharse de un puesto y extorsionar a ninguna persona, no lo vio tampoco de ninguno de sus compañeros de agrupación, nunca fue el estilo de su agrupación.

Que no le consta que se llevara dinero al bolsillo de forma ilegítima.

Al doctor Zorzano le contestó que la vez que lo vio salir de la municipalidad en el 2016 fue la última vez que tuvo un encuentro. Que ahí estuvo 3 o 4 minutos en la vereda con Molina. Que lo recuerda porque esa vez era el aniversario de la ciudad y había venido la gobernadora Vidal, por lo que estaba cercada toda la plaza Rivadavia.

Que antes de esa situación no ha compartido actividades, no ha ido al gremio. Que los últimos encuentros eran en la calle, que se han dejado de ver por las distintas actividades que tenían cada uno. Que la actividad política fue hasta el 2001, y ahí era asiduo, cotidiano el trato. Que luego de eso volvió a tener relación cuando el declarante trabajó en la Cruz Roja desde el 2004 al 2007, donde trabajaba la hija de él Mercedes.

Comentó que Molina era una persona de consulta. Que cuando estuvo a cargo de la intervención en la Cruz Roja hablaba con él e intercambiaba opiniones.

Que luego de eso se dedicó a la gastronomía, y tiene un reparto en una localidad cercana ya que tiene un comercio y ahí su relación fue tomando otro camino, nada más. Que nunca lo fue a visitar a la UOCRA o a la obra social a Molina, que no lo iría a molestar a su trabajo.

Que cuando estaba el declarante en la Cruz Roja hablaba con Molina una vez por mes. Que luego no lo ha hecho, tanto es así que últimamente no tenía el teléfono de Molina.

El testigo Cristian Gabriel Jesus Vinet mencionó que es primo del señor Mario Gonzalez. Que durante los años 2.015 al 2.017 ha trabajado como obrero pintor en Bahía Blanca, por lo cual iba a la UOCRA a pedir trabajo y cuando tuvo un problema que le dieron una mano también.

Dijo que iba al gremio y se anotaba en la bolsa de trabajo, y que ha conseguido trabajo por la bolsa un par de veces. Que iban muchas personas, siempre estaba lleno de gente que iba a pedir trabajo o también a pedir ayuda.

Expuso que a él lo ayudaron porque tenía una nena con discapacidad internada y no podía trabajar por falta de trabajo y de tiempo. Que le han dado plata y bolsas de comida. Que con su nena enferma iba a pedir trabajo y no consiguió en ese momento, pero sí escuchó que llamaban dando su nombre y apellido para pedir trabajo. Que este llamado lo hizo Molina consultando puntualmente por su tema para ver si podía conseguir trabajo.

Expuso que conoce el móvil sanitario, que es una combi que iba a las obras con enfermeras u odontólogos a medir presión arterial, azúcar en sangre, daban cepillos de dientes. Que en una obra que él trabajaba fue el móvil, que era una obra en vialidad nacional en calles Montevideo y Darregueira.

Apuntó que en casi todas las obras había acuerdo por encima de la paritaria nacional de salarios. Que premio de fin de año cobró dos veces.

Dijo que participó de una medida de fuerza que se hizo una vez porque no pagaron la quincena, que se atrincheraron y esperaron que pagaran, y que esto ocurrió a los dos días. Que en esa medida participaron todos los trabajadores, aunque algunos no querían ya que tenían miedo. Que los tenían amenazados de la empresa que si hacían medidas de fuerza los echaban. Que la obra era para vialidad, pero no recuerda el nombre de la empresa.

Le contestó al doctor Jara que participó de un curso de seguridad e higiene organizado por la UOCRA.

Que además se festejaba el día del niño, día del trabajador. Se hacían sorteos, había payasos, grupos musicales, se repartían juguetes, sorteaban bicicletas, unas 25 en una oportunidad y una “banda” de juguetes.

Que hoy trabaja como gasista matriculado, vinculado a la construcción de forma particular, y no va a la UOCRA.

Al señor Agente Fiscal le contestó que la ayuda de Molina y el dinero lo recibió a medidos del 2.017.

Que no recuerda haber integrado la Asociación gremialista por el trabajador de la construcción.

Consultado por si efectuó una denuncia contra Burgos, Monteros y Molina, le contestó al doctor Zorzano que tuvo un problema personal con Monteros y luego formuló una denuncia porque estaba muy enojado, que la denuncia la escribió otra persona y no la leyó. Que del contenido se enteró después cuando le llegó, que se asesoró con una chica y luego cruzó palabras con Monteros. Que firmó la denuncia sin leer.

Dijo que recuerde no se presentó como integrante de la oposición a la dirigencia de la UOCRA.

Al serle exhibida la denuncia que obra en el legajo fiscal principal a fs. 384/385, copia de la I.P.P. n° 8376/16 reconoció su firma.

Preguntado si al formular la denuncia luego recibió amenazas, contestó que sí, pero que no sabe de qué persona. Que en ese momento conducía la UOCRA Humberto Monteros, y estaban Vazquez, Molina, Burgos y Estéfano.

Que no recuerda a la entidad Asociación de gremialistas unidos por el obrero de la construcción.

El testigo Hernán Segundo Ulloa Sepúlveda mencionó que conoce a Molina, quien le dio una gran mano con un problema de salud de su hijo.

Contó que se desempeñó como obrero de la construcción entre los años 2.015 al 2017, trabajando en el Procrear en Patagones. Que ha participado en reclamos a la empresa por horas que faltaban o por mal pago de los sueldos.

Que además iba a la sede de la UOCRA a reunirse con los compañeros porque había muchos desocupados y era para apoyarlos. Que había bolsa de trabajo en la sede, se conseguía trabajo y se trataba de encontrar para los desocupados.

Que en la delegación se daba ayuda humanitaria, alimentos, garrafas para los compañeros desocupados, ayuda humanitaria como ropa para compañeros y sus hijos. Que se les han conseguido medicamentos a los que no tenían los medios para poder comprarlos; o se deba una ayuda al que no podía pagar el alquiler. Que la ayuda venía de la seccional Bahía Blanca y se hablaba con el señor Guillermo Molina.

Indicó que recibió ayuda para su hijo, que está muy agradecido por un viaje a la ciudad de La Plata y agradecido a Molina por abastecerlo de remedios tan caros para su hijo, quien está en silla de ruedas y tiene una enfermedad para toda su vida. Que hoy los remedios se los da la provincia

de Buenos Aires, y son 6 a 8 mil pesos por mes. Que en su momento el remedio no lo tenía el hospital, lo tenía que comprar el declarante, pidió ayuda en la seccional y ahí fue que Molina le consiguió la ayuda humanitariamente.

Expuso que se han realizado festejos del día del niño y un plenario en Carmen de Patagones donde se han tratado temas de trabajo. Que para los festejos del día del niño les han dado ayuda desde la seccional Bahía Blanca.

El testigo Juan Angel Meli, convocado por la defensa del señor Guillermo Molina, prestó declaración a través del sistema remoto Microsoft Teams, y contó que conoce al señor Molina, dado que durante los años 2.015 al 2.017 trabajó en la construcción de un barrio de 77 viviendas para el señor Mosquin, y en ese momento los fue a asesorar de parte de la seccional Bahía Blanca, el mencionado.

Señaló que había veces que no se pagaba la quincena por temas de dinero y había que hacer notas reclamando, y que fue en eso que les dio una mano grande la gente de Bahía, en particular el señor Molina.

Que medidas de fuerza no se hicieron, se confeccionaron notas y se presentaron en el Ministerio de Trabajo.

Contó que delegación de la UOCRA en la zona no había, que se formó un cuerpo de delegados cuando empezó a trabajar en la empresa.

Que cuando empezaron con el gremio se formó la bolsa de trabajo. Que por esa época había fuentes de trabajo, estaban bastante bien. Que la gente necesitaba trabajo y había.

Relató que ayuda a la gente siempre se le dio, por ejemplo cuando había familias numerosas que iban a pedir y se les daba mercadería, para pagar la luz o el gas, o garrafas. Que en muchas cosas ayudaban la gente de Bahía y por eso están muy agradecidos con eso. Que por todo hablaban en la seccional con el señor Molina.

Le respondió al doctor Jara que el festejo del día del niño fue importantísimo para la zona; era una fiesta muy grande, la seccional de Bahía traía regalos para todos los hijos de los compañeros.

El testigo Roberto Antonio Limpiante, convocado por el doctor Jara, a cargo de la defensa del señor Guillermo Molina, prestó declaración a través del sistema remoto Microsoft Teams, señalando que conoce al señor Molina por haberse desempeñado entre los años 2.015 al 2.107 como obrero de la construcción en Carmen de Patagones, estando como colaborador del gremio UOCRA en esa localidad, llevándole todos los reclamos al compañero Guillermo Molina.

Dijo que ante una obra nueva le pasaba el parte a Molina que iniciaba la obra, el nombre de la empresa y el mencionado se comunicaba

con la empresa y luego el declarante le presentaba la bolsa de trabajo a la seccional.

Le indicó al doctor Jara que había una oficina de la UOCRA en Patagones, donde habían alquilado un local para poder atender a los compañeros desocupados, y de ahí salía la bolsa de trabajo y todas las necesidades que había. Que el alquiler lo pagaba la seccional Bahía Blanca y con la misma tenían contacto a través del señor Guillermo Molina.

Señaló que el declarante le pasaba el reclamo cuando había diferencia salarial y Molina les mandaba la nota que había que presentar en el Ministerio para reclamar. Que también le pasaba la bolsa de trabajo al señor Molina para que hable con las empresas, y se les conseguía trabajo a la gente de la bolsa.

Dijo que había una obra en el boulevard Moreno, del barrio Procrear, la que hacía Ingeniería y Arquitectura, y el dueño era un tal Evangelista. Que el declarante hablaba en Patagones con la persona que estaba a cargo, y con Evangelista hablaba el señor Guillermo Molina.

Le respondió al doctor Jara que no realizaron ninguna medida de fuerza en esa obra, ni en otras obras de esta empresa en la zona.

Que él ha participado de medidas de fuerza en obras, que siempre se hacían porque no pagaban las quincenas en tiempo y forma, se hacía el reclamo en el Ministerio y luego hacían una asamblea de dos o tres

horas y seguían trabajando. Que de las medidas de fuerza estaba al tanto la delegación central de Bahía, que ellos les daban instrucciones para actuar para que los compañeros cobren en tiempo y forma, y siempre se resolvieron los reclamos.

Expresó que en obras de la empresa de Ingeniería y Arquitectura no tenían incumplimientos; que solo en la primer parte cuando empezaron la obra que tenían gente de ellos, y luego se tomaron compañeros y pudieron trabajar tranquilos.

Refirió que cuando había necesidades de algún compañero que no tenía trabajo, él le pedía a Molina y se lo solucionaba.

Que tiene entendido que Ingeniería y Arquitectura colaboraba. Que siempre fueron voluntarias las colaboraciones.

Expuso que ayuda a la gente en Patagones con mercadería, útiles escolares, garrafas, ropa, para pagar la luz o el gas, alquiler, y medicamentos, o viajar por temas de salud con los hijos, siempre se han dado. Que esa ayuda salía de la seccional Bahía, que le pasaba el reclamo al compañero Molina y él se encargaba de solucionarlo, y ellos repartían a la persona que necesitaba.

Expuso que de las medidas de fuerza en algunas empresas no participaban todos los trabajadores por temor a que la empresa los despida, que el que quería participaba, no era obligatorio.

Que conoce el móvil sanitario el cual recorría la seccional haciendo capacitaciones y para tomar la temperatura, y con un capacitador para hacer primeros auxilios y esas cosas. Que en Patagones no pudieron lograr hacer una capacitación de ese tema. Que no sabe quien pagaba el móvil.

Refirió que hicieron un evento de fiesta del día del niño, del obrero de la construcción, y plenarios de delegados. Que los recursos para eso venían de la seccional. Que se encargaban de pagar el salón y de los premios que traían, bicicletas y cosas para sortear a los hijos de los trabajadores.

Indicó que una obra en el parque eólico en Villalonga la hizo la empresa Geneia y Milic. Que había un convenio aparte de la paritaria, que el porcentaje cree que era el doble en presentismo más 10 por ciento, y un 30 por ciento por encima de la paritaria nacional. Que también había premio de fin de año en esa obra.

Que el convenio marco lo hizo Bahía Blanca y se firmó en el Ministerio de Trabajo.

Le respondió al doctor Jara que antes de la llegada de Molina al gremio las empresas no tenían relación con los trabajadores, no tenían trato. Que no tenían delegado hasta que llegó la seccional y se hizo cargo de Patagones. Que antes cuando entraban a trabajar lo era sin esos

beneficios de tener delegado y respaldo gremial. Que no podían hacer reclamos.

El testigo Fredy Ernesto Arias –quien declaró por intermedio de la plataforma Microsoft Teams- señaló que durante los años 2015 al 2017 se dedicaba a la construcción como ayudante de albañilería. Que trabajaba en la localidad de Pedro Luro y estaba anotado para ingresar en una obra en un jardín de infantes, pero no pudo hacerlo, sin saber los motivos. Que con el tiempo se fue enterando por comentarios que la empresa era de Carcereny y trajo su propia gente, unos “paraguayos” que hicieron la obra.

Contó que en ese tiempo en UOCRA le dieron mercadería como para el mes y Molina le entregaba 5.000 pesos por mes que le daba él personalmente; y una parte la ocupaba para pagar la luz y el gas. Que luego tuvo la desgracia que a su hijo se le declaró el cáncer y estuvo 6 años luchándola, y una parte iba para la madre y su hijo; que esa plata le venía muy bien aunque no le alcanzaba.

Dijo que había una planilla donde se habían anotado y el señor Molina les había dicho que iban a empezar a trabajar en esa obra del jardín. Que no entró y luego se enteró que la empresa tenía su propia gente, gente paraguaya que la empresa tenía de antes y los trajo a trabajar ahí; y que otros compañeros le dijeron que la empresa colaboraba con compañeros que no habían entrado.

Al doctor Zorzano le dijo que no le consta que fueran paraguayos, que no vio documentación ni habló con ellos, que sólo eran comentarios, y ya trabajaban en la empresa de Carcereny.

Contó que no fue a solicitar trabajo en la empresa, que estaba anotado en la UOCRA y fue Molina quien les comentó que iban a entrar a trabajar en esa empresa, y luego no sabe por que no ingresó.

La testigo Juliana Pugnanoni, convocada por el doctor Jara a través de la plataforma Microsoft Teams, relató que tiene una empresa de elaboración de hormigón; dedicándose dentro de la misma a la parte administrativa, por lo que no tiene relación con la UOCRA.

Mencionó que luego conoció a Molina, por la UOCRA, y no tenían en su empresa afiliados a ese gremio, pero cuando fue Molina luego pusieron a un trabajador como afiliado. Señaló que no forma parte de la Cámara de la construcción.

Explicó que cuando fue Molina a la planta les consultó si algún empleado estaba por el gremio UOCRA; que la declarante le comentó que estaban en el gremio de minería y ahí Molina le dijo que al menos uno tenía que ser de UOCRA, por lo que fue ahí que pusieron a uno de los dos empleados por UOCRA. Acotó que el pedido fue perfecto, que le dijo que lo pusieran por UOCRA y sino no había problema.

Que Molina no le hizo otro pedido, que sí le ofreció empleados de la bolsa y le dijo que no porque tenían personal especializado como chofer, y ante la negativa no sufrió consecuencias.

Indicó que no le pidió nada para los empleados. Que sí para alguna fecha especial como el día del niño o similar, le ha solicitado y ella prestó colaboración.

Le contestó al doctor Jara que no la llamaron de la Cámara de la construcción por las denuncias contra la UOCRA, que no la invitaron a participar desde la Cámara de la construcción.

Expresó que Molina no la extorsionó, ni amenazó.

Al doctor Zorzano le contestó que en su momento Molina le dijo que el rubro donde se desempeñaba era parte de la construcción y por eso cuadraba para el empleado afiliarse a la UOCRA; y eran dos los empleados y dejaron a uno para el gremio de minería.

El doctor Diego Cerniesky dijo que es abogado de la UOCRA desde el 31 de julio del 2001, cuando se presentó como querellante en los daños y otros hechos suscitados en la delegación, trabajando para la intervención de ese momento a cargo de Gonzalez; y luego desde el 2006 es apoderado legal de la UOCRA y de la obra social.

Dijo que comenzó a trabajar con las intervenciones y luego fue que ingresó Monteros al gremio, cuando gana en el año 2005.

Que entre los años 2015 al 2017 se encargaba de la cuestión electoral y como actividad fundamental del cobro de deudas a través de ejecuciones de cobro de cuotas patronales o de la obra social, y además asesoraba en la seccional en las tareas en que se le preguntara.

Señaló que intimación o queja por el trato de los delegados de la UOCRA por parte de los empresarios formalmente no recibió; que sí había comentarios de empresarios que comentaban que la UOCRA era muy exigente, que exigían todo, y que eran de trato fuerte; pero que nunca ningún empresario le dijo que le pidieran coima; sí que los volvían loco con todas las cuestiones legales como los cascos y ese tipo de cosas.

Que reunión con los denunciantes de esta causa no tuvo.

Expuso que luego de las detenciones en enero del 2018, el mismo día, el interventor del gremio, Ricardo Rodríguez, le pidió que fuese a la fiscalía y se interiorice de que los acusaban y que hiciese un informe. Que lo atendieron en la fiscalía y le dieron una copia de los hechos que se les imputaban, que esto fue el único contacto que tuvo con la causa, solo ese día.

Agregó que luego, para informar correctamente, realizó una investigación por su cuenta, miró a los denunciantes y empezó a averiguar,

y su conclusión fue que no existía una asociación ilícita. Aclaró que llegó a esa conclusión por el contexto socio político del momento que era de clara persecución política al sindicalismo y movimientos sociales vinculados al kirchnerismo, y el gobierno de Macri venía con impulso para atacar estas cuestiones.

Dijo que si lo denunciado hubiese sido verdad se tendrían que haber presentado como 100 empresarios, no sólo las 5 o 6 empresas vinculadas a la obra pública. Que por eso consideró como que no existían elementos para la asociación ilícita, no la vio y eso informó.

Mencionó que al leer los diarios y revisar en internet fue que notó determinada similitud, dado que sólo 5 o 6 empresas de las cientos de la ciudad fueron las que se quedaron con las obras, que los pagos de la municipalidad son a todos esos denunciantes.

Refirió que de los edificios de la ciudad y obras civiles nadie denunció, del polo nadie denunció, que solo están las 5 o 6 empresas que se quedaron con toda la obra pública de la ciudad.

Explicó que hizo un trabajo de investigación por google –del cual acota que trajo copias-, y que si se mira el pago a proveedores de la página de gobierno abierto de Bahía Blanca se puede concluir que están todos los denunciantes.

Que además le llamó la atención que los 6 denunciantes estaban afiliados a dos centrales gremiales empresarias que estaban en fuerte disputa por una cuota salarial con el gremio.

Refirió que cuando llegó Vidal es que se transformó esto en aprietes, extorsiones, y ahí sale el intendente y aparece la fiscalía a actuar de oficio.

Que otra cosa que recuerda son un par de notas en Lanueva del 3 de marzo del 2.016 donde dice que se adjudican las obras de bacheo, y ahí se reparte la ciudad en 6 partes y son estas empresas las que compiten; y en otra nota en el mes de mayo donde se hablaba de licitación por 175 cuadras en Bahía, donde competían estas 5 empresas denunciantes Abedul, Coince, Carreteras 2000, Ingeniería y arquitectura, y las ganaban ellas. Que esto salía en el diario La nueva provincia, que no vio los pliegos de licitación, ni nada más, dado que su función era informarle a la UOCRA si había asociación ilícita o no.

Expuso que luego de esta investigación llegó a una conclusión inversa a la del Fiscal Zorzano.

Comentó que había una puja salarial por sobre los acuerdos paritarios y la seccional fijaba y negociaba acuerdos salariales superiores, por lo general era de 25, 30 o 40 más según el año y el momento, y desde hacía 10 o 12 años se ganaba en Bahía seccional más que en otras

seccionales. Que recuerda una nota de la gobernación que decía que ahora que esta gente había renunciado y no estaba a cargo del gremio el costo de obra iba a bajar, y esto no se dio, y sí bajó el costo de mano de obra y los denunciantes se quedaron con ese beneficio que debían pagar a los trabajadores, más todas las cosas de seguridad y medidas de higiene que no se tranzaban, no había posibilidad de negociar, y si no estaban paraban la obra.

Expuso que surge el cuándo de esta denuncia porque es posterior a que el gobierno de juntos por el cambio municipal, nacional y provincial, se sintió con fuerza suficiente para avanzar sobre Boudou, Luis D'Elia, Milagro Salas y gente de la UOCRA en La Plata. Que había una decisión de sacar chapa de lucha contra la corrupción encarcelando opositores; y como en esta ciudad había una puja salarial y por derechos entre la parte gremial y la empresaria, es que entiende que por eso habrán visto ese momento como adecuado, y luego atrás se alineó el intendente, un senador y aparece de oficio la fiscalía. Que luego del gremio a nivel nacional les quitan el apoyo y del espacio político también les quitan el apoyo, los aíslan; que así llega a esa conclusión, aunque acota que no es el dueño de la verdad.

Respondió que de los diarios surgía que el intendente y un senador se alinearon atrás de los denunciantes. Que de las notas de Lanueva se puede ver como luego de la puja por salarios, luego de

intervenir la gobernadora, aparecen estas extorsiones, todo pasa a ser extorsiones. Que fue por esto que habló con el interventor y le planteó que desde su punto de vista jurídico estaban ante un avance sobre el sector sindical que debía ser defendido por la UOCRA. Que luego no lo vio más al interventor, había otro cuando volvió al gremio y no tuvo más respuestas. Que el declarante entendía que no existía la asociación ilícita.

Acotó que no leyó la prueba de los hechos individuales porque no le interesaba saber cada hecho en particular, sólo ver si existía asociación que perjudicara los intereses de la UOCRA como sindicato.

Dijo que como apoderado del gremio tiene juicios ejecutivos en trámite, cobra un abono mensual, tanto de la UOCRA como la obra social.

Refirió que los acuerdos por encima de la paritaria a nivel nacional son legales, se homologan en el Ministerio, pero en los últimos años no participaba de eso se encargaba el doctor Francisco Garza.

Insistió en que no le parece que haya una asociación ilícita, que los convocaron para reclamar por los trabajadores, ganaron tres elecciones ante pluralidad de lista, nunca fue lista única, es un gremio con mucha vida interna, muchas agrupaciones, siempre hubo elecciones, y la última la ganaron muy holgadamente.

Al señor Agente Fiscal le contestó que el doctor Garza en ese momento trabajaba en Bahía Blanca y estaba en la seccional en los temas

de conflicto colectivo, se encargaba de eso. Que convenios con aumentos por encima de la paritaria a nivel local con Rodríguez –interventor cuando renuncian- se ha ratificado varios según sabe, como en el polo y en obra civil, que no sabe con el actual interventor, ya que hoy asesora Gonzalez Bécares a la actual intervención.

Señaló que fue a la fiscalía el día de la detención y cree que un día previo y se entrevistaron con el Fiscal. Que le dieron los hechos y acceso para mirar la prueba que no estaba reservada en el cuaderno del fiscal, que vio recortes y declaraciones de los denunciantes y no mucho más. Que miró el pedido de detención de la fiscalía y la orden de la Jueza de garantías. Que debe haber estado hora y media o dos horas, no leyó todos los casos individuales que involucraban a personas, fue a mirar qué había pasado con la UOCRA, que ni siquiera las pidió a esas cuestiones, ni leyó los testimonios de damnificados. Que trató de ser lo más objetivo posible con su cliente, y de todo lo que pude leer le informó.

Le respondió al Fiscal que entiende que las diferencias de ingresos al no firmar acuerdos por encima de la paritaria y no cumplir con seguridad se la quedaban los empresarios porque en algún lado quedaron.

Dijo que conocía la denuncia de Allende, que en ese momento Allende había denunciado que Burgos le pedía coimas y decía que le pedía cosas, y se evidenciaba una querella por calumnias e injurias, porque le exigía tener a todos en blanco, botines para todos y cosas que era que la ley

exigía; que por eso se lo intimó por carta documento y se le inició una querella y luego ya detenido Burgos consulté con su defensor y me dijo que no le interesaba seguir a Burgos con la querella y por eso la desistieron. Que el declarante era abogado de Burgos en la querella.

Comentó que Allende hablaba de pedido de dinero y las exigencias laborales, que todo está en la querella, pero no lo recuerda.

Contestó al representante del Ministerio Fiscal que no se presentó como abogado defensor de Burgos en la denuncia que formuló el señor Allende, aunque luego, al serle exhibida la firma en la investigación penal, reconoce la misma y dijo que no recordaba haberse presentado como defensor de Burgos.

Dijo que los pedidos de informes judiciales los contesta legales de la central, se remite todo porque está centralizado. Que no recuerda si le pidieron información por Walter Paiz, pero sí era él parte de la UOCRA. Que no recuerda haber informado que no había datos de Paiz como integrante del gremio.

Exhibido el oficio de fojas 44 de la I.P.P. n° 4885/17 dijo que no recuerda ese documento, que no lo redactó.

Reiteró que no se entrevistó con los empresarios. No está en la causa, no es querellante ni defensor de nadie, solo abogado de una institución a la cual los imputados habían renunciado un par de meses antes

de ser detenidos y si el interventor no se lo pedía no se reunía con nadie. Que no le corresponde tomar declaraciones y le informa a sus clientes a partir de lo que puede ver. Que no le parecía cierto la asociación ilícita en un contexto en el cual la sociedad había avalado perseguir a los sindicatos, donde todo el poder judicial y político avalaba eso.

Que no hubo denuncia y tiene entendido que el fiscal avanzó de oficio a partir de un pedido de Vidal y el intendente y luego se le tomó declaración a los empresarios; y en la fiscalía le dijeron que la principal prueba la tenía el fiscal en los cuadernos reservados.

A la doctora Busteros le contestó que contesta amparos y ejecuta deudas por la obra social. Que hay una vieja lucha de la UOCRA que arranca en los 90 para que haya un barrio de viviendas para los afiliados, luego consiguieron el terreno, pero no se ha podido avanzar; y esto se sigue por todos los compañeros en todos los mandatos.

Al doctor Jara le contestó que la UOCRA no es parte en este expediente.

El testigo Sergio Varas Cisternas, también propuesto por el doctor Gomez Talamoni y la doctora Sager, contó en la audiencia que entre los años 2016 al 2017 trabajó en la termoeléctrica Piedra Buena en White, para la empresa Enterio, dedicada al mantenimiento mecánico, montaje y desmontaje de piezas.

Refirió que a Mario Gonzalez lo conoce porque iba cuando ellos solicitaban apoyo gremial, para darles una mano para arreglar las diferencias que tenían con la empresa, cuando se atrasaban en los pagos. Que ellos hablaban con la empresa por las deudas y al no tener respuesta acudían al gremio UOCRA.

Expresó que el declarante no era delegado en la empresa. Que cuando no les abonaban hacían una asamblea hasta que se arreglara; pero no era un paro, era una asamblea de brazos caídos, iban a la empresa pero se quedaban afuera hasta que les arreglasen lo que les adeudaban. Que esto lo hacían ellos con apoyo del sindicato, lo hacían todos los trabajadores.

Dijo que no se dañó máquinas ni a la empresa, no tenían porque hacerlo.

Expuso que en la empresa consiguió el trabajo por intermedio del sindicato, ya que hay una bolsa de trabajo donde te anotan por la especialidad y cuando salían obras seleccionaban o llamaban a la gente que estaba primera en la fila. Que lo llamaron y empezó ese trabajo.

Contó que él iba con su auto al trabajo, que había servicio de combis pero prefería ir por sus medios para no levantarse temprano, que se podía optar por combi o ir cada uno. Que almorzaban en la empresa, había un comedor en la planta habilitado para eso, y no se podía comer en otro

lugar. Que comía por turnos todo el personal, sea de la UOCRA o no, personal de planta también, y los rusos también comían ahí.

A partir de la prueba que se viene valorando se puede señalar que el Ministerio Público Fiscal logró probar que en el período temporal mencionado en el hecho identificado como número uno al tiempo de formular acusación, existió un grupo de personas integrado por al menos 14 miembros que tenían por fin desarrollar actividades delictivas tendientes a exigir y percibir de manera indebida dinero u otros objetos materiales o la firma de documentos que producen efectos jurídicos, mediando el común acuerdo de este grupo, con la idea de dividirse las tareas y actividades a ejecutar para concretar ese tipo de hechos ilícitos, en un número indeterminado de eventos, según las circunstancias se lo fuesen permitiendo.

Se puede observar una decisión común de los integrantes del grupo de actuar ilícitamente no sólo para su beneficio económico personal, sino también para continuar en el poder en el ejercicio de la actividad sindical dentro del gremio UOCRA.

Acordaron una forma de actuar en los casos futuros –y lo llevaron a la práctica en algunos supuestos que luego se demostrarán probados, conforme se verá-, demostrando con sus conductas que querían

integrar esa organización de fines delictivos, y esto se aprecia en las intervenciones que han tenido los distintos acusados en este proceso –como también otros acusados cuya conducta aquí no se analiza, y otras personas también intervinientes en la organización que surgen de la prueba-.

Coincido con el señor Agente Fiscal en que esta organización se conformó luego del año 2005, cuando asumió como Secretario General el señor Humberto Monteros, junto con otras personas, algunas de las cuales fueron cambiando durante el largo transcurso de duración de la asociación hasta el año 2018, en que resultaron detenidos parte de sus integrantes, algunos de ellos acusados en este proceso.

Como ya mencioné, la idea era cometer delitos para beneficio personal, de terceros, y para conservar el poder dentro del gremio.

Se advierte de la prueba que la actividad ilícita de esta organización se profundizó pasados los años de su creación.

La mayoría de los testigos coincidieron en marcar que las actitudes hostiles e ilícitas de los acusados se agudizaron entre los años 2013, 2014, 2015 y siguientes, y que era una situación que sufrían numerosas personas vinculadas a la construcción; agregando casi todos, a excepción del señor Allende (que hizo una denuncia por su cuenta), que no se pusieron de acuerdo para formular una denuncia penal, sino que fueron contando lo que les pasaba a medida que fueron convocados por el Agente

Fiscal a cargo de la investigación; y que no invitaron a nadie para formular una denuncia penal.

El señor Pablo Quantin relató que no eran asiduos en obras en Bahía hasta el año 2.012 o 2.013, donde comenzaron a realizar obras en la zona y empezaron a tratar con la sede de la UOCRA Bahía Blanca, teniendo una relación normal hasta que a partir del 2.014 o 2.015 en adelante tuvieron inconvenientes.

Dijo que cuando comenzaron a trabajar en la zona de Bahía Blanca no tenían inconvenientes, que luego sí comenzaron a tenerlos, no siendo esto normal, ya que "…no es normal tener una asamblea día mediante en una obra para discutir no se sabe qué. Que poder trabajar todos los días es lo normal, lo de las asambleas no lo era…" y estos problemas fueron en los años 2.015, 2016 y 2017, que incluso están las actas por escribano donde se documentaba todo.

Señaló que le consta lo que le dicen los empresarios, que todos tenían los mismos reclamos, incrementos de salarios, contratar determinados proveedores y pedidos de dinero.

Fabián Gurrado dijo que cuando llegaron las grandes obras nacionales subieron las pretensiones y se usaron prácticas que tenían que ver más con otras cosas que con la seguridad e higiene y las condiciones de

trabajo para los compañeros; que concretamente pedían colaboración mensual y en forma coercitiva.

Surge del aporte del testigo que en otras oportunidades les han pedido dinero ilegítimamente, pero luego se agravó la situación, cambiaron la modalidad, tornándose más prepotentes y con una escalada en las pretensiones que era como que querían manejar la empresa.

Del testimonio del señor Roberto Gaveglio, quien dijo que hace 30 años que tiene la empresa, se puede advertir que se trabajaba cordialmente, pero que luego empezaron a pedir el pago de una suma mensual, haciendo asambleas que no estaban justificadas para parar las obras.

Néstor Teplitz también coincidió en marcar a los años 2016 y 2017 como los de peor situación, cuando se tensaron las relaciones y se hicieron más complejas por las conductas que adoptaron gran parte de los dirigentes y colaboradores del gremio.

También el testigo Luis Medús apuntó que en su momento pudo haber existido algún pedido de colaboración por parte del gremio que se podía entender como normal, para los gastos de nafta o viáticos, pero que luego esta situación se transformó, la forma de los pedidos varió y se fue agravando hasta que en los últimos años era una situación de mucha gravedad y se generaron muchos problemas.

En la testimonial del señor Diego Cerra se indica lo mismo, por cuanto el testigo dijo que hasta el año 2010, 2011 se trabajaba normalmente, que luego “empiezan a realizar pedidos de dinero mensuales a cambio de nada, de poder trabajar”.

Si observamos los testimonios de los señores Juan Manuel Moreno, Luis Simón, Julián Allende, Gustavo Evangelista, Nancy García, Fernando Schro, Luis Carcereny, Martín Sanchez, Diego Perrin, Carlos Schlosser, Rubén Almada, Alejandro Cowper, Hugo Dragonetti, y otras tantas personas más que han declarado en las audiencias de juicio, se puede advertir que, tal cual han señalado los testigos que antes mencionamos, se agravó la situación y se concretaron por parte de esta organización varios delitos en el lapso temporal que transcurre entre los años 2013 al 2017, fecha que coincide con el período para el cual había sido elegida esta última comisión del gremio UOCRA antes de disponerse su intervención en el año 2017. Todos los nombres de los dirigentes que integraban las secretarias gremiales en el año 2013 –ver la documentación ya valorada-, aparecen vinculados no sólo a la conformación de la organización criminal, sino en la ejecución de distintos hechos ejecutados por integrantes de esa organización criminal.

De la prueba computada puedo concluirse que existía una forma de obrar en la que se dividían las tareas, de forma consensuada, para ejecutar los hechos, realizando distintos individuos diferentes actividades, para así lograr un estado de situación en el cual concretaban las exigencias ilegales, y luego colaboraban las personas para hacerse de ese resultado.

Conforme han relatado los testigos, la forma de obrar, las conductas que desplegaban, las situaciones que generaban, los pedidos que realizaban, y las actitudes, reflejan que existía un acuerdo, una comunión de voluntades que se habían agrupado con la intención de integrar esa asociación creada con fines delictivos, la que, en definitiva, conforme surge de la prueba, concretó varios hechos ilícitos, habiendo tomado parte en los mismos distintos miembros de la organización.

Del testimonio del señor Rubén Almada surge que el señor Monteros se comunicó con el señor Miguel Iwanyniuk, a quien le exigió la entrega de 400.000 pesos para poder realizar la obra, pagos que efectuaron en dos cuotas de 200.000 cada uno, los que fueron cobrados por el señor Vazquez (quien posiblemente incumplió el arreglo que tenía con Monteros, porque se habría quedado con el dinero); habiendo tratado posteriormente, en otra arreglo de otra turbina, con los señores Pablo Gutierrez y Mario Gonzalez, quienes invocando orden de Monteros habrían exigido el pago de 750.000 pesos, que se abonaron en tres cuotas.

Surge del testimonio que la primera reunión fueron recibidos por Gonzalez y Gutierrez, quienes los hicieron pasar a la oficina del señor Monteros, y luego en la segunda reunión, ya Gonzalez y Gutierrez fueron los interlocutores, mencionando que tenían que consultar con Monteros sobre la posibilidad de un pago en cuotas.

Del testimonio se desprende los piquetes que se hicieron y que paralizaron el acceso a la planta, como así también, que le impidieron al testigo ingresar al lugar, medidas que fueron ejecutadas por otras personas vinculadas al gremio UOCRA, al igual que fueron otros varios sujetos los que se presentaron en su domicilio particular y realizaron un protesta frente al mismo.

El testigo Alejandro Cowper relató que unas personas que se identificaron como de la UOCRA fueron las que dispusieron que la obra estaba paralizada, y que él debía concurrir a la sede del gremio para charlar, siendo atendido en la sede gremial por el señor Guillermo Molina.

Del testimonio del señor Hugo Dragonetti también surge esta división de tareas, interviniendo en las obras algunos miembros de la UOCRA, y exigiéndole a él las sumas de dinero y los materiales de construcción directamente el señor Monteros. Se prueba con sus dichos la intervención de las empresas vinculadas a algunos de los acusados, a través de la emisión de facturas que no se correspondían con servicios prestados, para justificar contablemente la salida de sumas de dinero de la

empresa Panedile. Dijo que esto lo hacían así porque esta gente tuvo temor de que se conociera lo que hacían, que se supiese de este modus operandi.

El testigo Julián Allende comentó que el señor Cabrera le organizó una reunión con Burgos en la sede, lugar al cual acudió y ahí Burgos escribió la cifra en el papel del dinero que pretendía. Detalló que Cabrera los atendió en la sede y los hizo pasar a la oficina de arriba donde los esperaba Burgos.

Del testimonio de Ale Herrera se advierte que Humberto Monteros era el que imponía todo, pero él trataba con Pablo y Mario, quienes eran los que transmitían las órdenes de Monteros. También se observa en este testimonio lo que ocurrió en la sede de la MUOCRA, luego de la intervención del gremio, donde Sabino Ríos, Pablo Gutierrez y Mario Gonzalez le expusieron que debía contratar a la gente de la bolsa que manejaban ellos, no la del gremio UOCRA intervenido, dado que ellos eran los que seguían los lineamientos de Monteros.

Se observa en este testimonio la intervención de las distintas empresas vinculadas a algunos de los acusados, ya que Ale Herrera menciona los intercambios de mensajes con la esposa de Monteros, la señora Sanabria, quien también ha indicado donde debían ser remitidos los materiales de construcción que Monteros le pedía a la empresa Panedile; como también las transferencias bancarias que se realizaban por disposición

de los directores, a esas empresas por facturaciones que no se correspondían con servicios prestados.

Del testimonio del señor Juan Manuel Moreno, surge la intervención de personas del gremio UOCRA que se presentaron en la obra y para paralizaron, y luego la intervención de otros dos dirigentes sindicales, uno realizando la reunión en la que se le solicitaron varias cosas (firma del convenio, dinero en efectivo) y el restante firmando el convenio ante las vacaciones que estaba gozando el sujeto con el cual había hablado con anterioridad. También se advierte de esta prueba que con motivo de otra obra la situación fue la misma, gente del gremio parando las tareas, convocatoria a la sede, y entrevista en la misma con dos dirigentes sindicales, los que les pidieron firmar un convenio y dinero en efectivo de forma mensual, habiendo cobrado uno de ellos una cifra importante.

Del testimonio del señor Fernando Schro también se desprende la misma situación, ya que se presentaron en la obra gente con chalecos de la UOCRA, identificando el testigo a Carrillo, Cabrera y Muñoz, quienes le dijeron que fuese al gremio a charlar, luego de que el testigo les manifestase que no tenía a todo el personal registrado.

Luis Alberto Simón también fue coincidente en señalar que algunos venían a la obra y presionaban con pararla, mientras lo atendían en la oficina del gremio (Burgos), o lo convocaba a la misma a entrevista (Carrillo), lugar donde luego le pedían una suma de dinero para trabajar sin

inconvenientes, pese a que sabían que tenía alguna persona no registrada laboralmente.

De sumo interés resulta lo marcado por el señor Fabián Gurrado, dado que es una cuestión que han comentado varios de los testigos, en cuanto a lo que era una división de la actividad de estas personas, ocupándose Burgos de la zona de Suarez y Molina del sur, Patagones y Villarino, estando además la ciudad de Bahía Blanca dividida en 4 secciones. Gurrado contó que su empresa tenía obras en dos o tres sectores de la ciudad y tenían que hablar con cada encargado del sector. Que en la obra del Procrear, era Canales el encargado de pedir para que la obra avance. En Suarez era Burgos, en Patagones era el señor Molina. Que la ciudad estaba dividida en cuadrantes y según la zona tenía que llevarle el aporte dinerario a Burgos porque era su zona, o a Canales porque era la suya.

Lo mismo indicó el señor Gustavo Evangelista, quien aportó que según la obra era quien lo citaba al gremio para hablar, que en el barrio Procrear intervenía el señor Sebastián Canales, en Patagones el encargado era Molina y en Suarez Burgos, quienes eran los que recibían los montos de cada sector.

Del testimonio de Luis Carcereny se observa que los pagos mensuales se realizaban a través de la entrega de sobres en la sede de su empresa, poniéndoles en los mismos los nombres de Burgos, apareciendo

luego alguien en nombre de él que lo retiraba, recordando entre otros a Paiz como uno de los que se ha llevado sobres. Se menciona en el testimonio que además otros delegados en la obra, como Aranda, pedían una suma de dinero para ellos directamente, por encima de lo que correspondía cobrar por su trabajo.

También se advierte en este testimonio la actuación de las empresas vinculadas a los dirigentes sindicales, en particular la empresa Acqua, cuyo servicio fuera impuesto por Burgos, Aranda y los delegados de la obra.

La división de zonas la comentó Carcereny, indicando a Burgos en Suarez y a Molina en Villarino Patagones, pero agregando que no se metía uno en la zona del otro, pero que la práctica era siempre la misma, pasar por el gremio para arreglar un dinero para ellos. Señaló que Burgos le decía: eso lo maneja Molina, y al revés, Molina lo remitía con Burgos por otras obras.

Manuel Carcereny dio su testimonio, y de este se extrae esta división de roles, con la presencia de 4 o 5 personas en la obra que piden documentación y la paralizan, y luego les requieren documentación para presentar en el gremio, y al concurrir a la sede gremial es que se producían las reuniones con las exigencias. Se señala en el testimonio que en la zona de Suarez Aníbal Aranda era el delegado, también estaba Hoyos como subdelegado, y actuaba siempre junto a ellos el señor Cabrera, los que en

opinión del testigo eran como los soldaditos de Burgos, quien era el que manejaba la sede. Que en la sede del gremio lo atendía Guillermo Molina si era del sector de Patagones y Villarino, o José Burgos si era de Suarez y la zona, y que ahí era cuando le pedían dinero, que luego pasaban a cobrar por la oficina, Molina en un Toyota 0 kilómetro y Burgos, quien ha ido alguna vez o a enviado a buscar el sobre a alguna persona, identificando entre ellos a Carrillo y Paiz, a quienes ubica de cara porque han participado en los piquetes que se les han efectuado en las obras. Además del testimonio surge que Cabrera fue quien le indicó a la empresa Acqua como la que tenía que ser contratada para el baño químico.

En la declaración del señor Roberto Gaveglio se observa lo mismo, esto es, la suma de dinero que era entregada al señor Mario Gonzalez o a la persona que él enviaba para que le entregasen el sobre; y que en una obra en Villarino el dinero le fue requerido por Molina, a quien se lo entregaba el señor Salguero quien estaba a cargo de la obra.

Lo mismo indicó Diego Salguero, quien contó que acordaba con Guillermo Molina en una estación de servicio o en la vía pública para entregarle el sobre con el dinero.

Néstor Teplitz aportó un testimonio del cual se puede extraer que fue el señor Humberto Monteros quien le exigió el pago de una suma

mensual, dinero que en algunas oportunidades retiraba Gonzalez, porque el señor Monteros estaba por problemas de salud en Buenos Aires.

Cristian Ferrero trae al debate información similar, ya que lo menciona a Burgos presentándose junto a otra gente del gremio y paralizando la obra sin indicarle los motivos o falencias en la misma; siendo convocado luego por otras personas del gremio para hablar con Burgos en la sede.

Del testimonio del señor Luis Medús, surge la división de tareas, ya que indicó que los pedidos que calificó de abusivos eran efectuados por Rifo, Erbin, Molina, Gerardo Gonzalez, Mario Gonzalez y Burgos. Que luego estas personas pasaban a retirar el dinero en efectivo o los cheques, o se los acercaban al gremio, o acordaban encuentros en una estación de servicio o en la vía pública. Detallo que cada vez que empezaban una obra aparecían con un papelito pidiendo documentación e implícitamente era que si no iba al gremio y arreglaba iban a empezar los problemas.

El testimonio de Carlos Schlosser da cuenta de que lo llamaron o se presentaron en la obra y lo citaron a la sede del gremio, donde fue que le indicaron la cifra que tuvo que pagar todos los meses, el que retiraban de su oficina en un sobre por gente que era enviada por el señor Paiz.

El detalle de los cheques emitidos por Obras Abedul y la UTE con Schlosser Ingeniería bien demuestra el grado de colaboración entre los distintos integrantes de la organización, la división de tareas con ese fin común de participar en delitos a futuro, luego de conformada la organización, la que –como ya señalé- tuvo distintos integrantes durante los años, incorporándose nuevas personas a la misma, retirándose algunos, pero en definitiva ampliándose con el transcurso del tiempo. Las planillas aportadas por el señor Medús permiten observar quienes retiraban los cheques o el dinero en efectivo, nombres varios que se corresponden con parte de los acusados en este debate, con otros imputados ya juzgados a través del proceso abreviado, o con otras personas evidentemente vinculadas a la organización, no sólo por este detalle descriptivo que los menciona, sino por toda la otra prueba que se viene analizando, y en la que aparecen ejecutando conductas que así los vinculan.

La mecánica de solicitar documentación para ser presentada en la sede gremial y ahí mantener una entrevista con alguien que en definitiva perseguía otra intención distinta a la de revisar la documentación laboral, también se observa en lo comentado por el testigo Martín Sanchez, quien contó esto y relató que fue Paiz quien lo recibió en la oficina, de la cual hizo retirar a otras personas que se encontraban junto a él, y en ese momento le pidió el 3% del valor de la obra y que luego le comentó que lo iba a charlar con su superior (suponiendo el testigo que se trata de

Monteros); siendo Paiz en definitiva quien le informó que podía pagar en cuotas, las que incluso el testigo le alcanzó en un par de oportunidades al gremio, y en otros casos los retiraron otros sujetos invocando a la UOCRA, desde su empresa.

Esta forma de operar de requerir documentación para alcanzar al gremio se observa en lo testimoniado por Julián Allende, Gustavo Evangelista, Luis Carcereny, Luis Medús, entre muchos otros, y todos coincidieron también en que la documentación no era revisada, se dejaba de lado para pasar a los pedidos irregulares.

De la testimonial del señor Diego Cerra se advierte que el dinero se le entregaba a Burgos o sino a Carrillo, e ilustró indicando que incluso una vez le llevó el sobre al gremio y se lo entregó desde el auto, cuestión que no le gustó a Burgos, quien en otras oportunidades le pidió que fuese a calle Alvarado entre 19 de mayo y 11 de abril y ahí lo estaba esperando y le entregó el sobre desde el auto.

Comentó este testigo que en otra obra lo citaron a una estación de servicio y ahí un señor de apellido Rivas y apodo Cucha, junto con otro más que se identificó de la UOCRA, le pidieron una suma de dinero por mes y que hablara con Burgos, y como no abonó la misma luego Cucha Rivas le paró una máquina y la obra, hasta que tuvo que pagarle una suma de dinero mensual, siendo luego informado por Burgos, mediante un llamado

telefónico que Rivas no manejaba más la zona, que la iba a manejar Gutierrez.

De los dichos de Cerra surge el vínculo y la actuación de otras personas, como los encargados de la empresa Acqua S.R.L., la que se vio obligado a contratar para la obra de la rotonda de Pilmayquen por imposición de Burgos y Rivas; siendo además la empresa Acqua la que le emitió una factura por una cifra cercana a los 15.000 pesos por un servicio que no fue prestado, esto a indicación del señor José Burgos, siendo quien facturaba la señora Estefanía Burgos.

Se señala en este testimonio la actuación de Paiz y Burgos en lo que respecta a la firma del convenio por los premios de fin de año, demostrándose una concertación de voluntades y la dirección de voluntades que de ellos dependían, dado que mientras esto ocurría, al testigo Cerra le indicaba su jefe de planta que por orden del gremio no podían dejar salir los camiones con asfalto hasta que los volviesen a llamar.

Los testimonios de Raúl Porras y Adriano Giusti, de la empresa Cerra y Moro, corroboran lo mencionado por Cerra, en cuanto a la actuación de Rivas en la obra, y al retiro de los sobres por distintas de la sede de la empresa, recordando Giusti a una persona de apellido Carrillo como uno de los que efectuó uno de los retiros.

Se puede advertir de estos testimonios que algunos iban a la obra y la paraban citándolos o convocándolos al gremio, o les solicitaban la entrega de documentación para que la llevasen al sindicato; otros los atendían en la sede del sindicato y los derivaban a hablar con los dirigentes; algunos hacían los pedidos ilegales; otros retiraban los sobres por las empresas o los recibían en el gremio; algunos participaban de los piquetes, asambleas o intervenían en las actuaciones contra otro gremio; creaban empresas y participaban de estos hechos que se cometían por la asociación criminal y en algunos casos también la integraban.

Ha sido una común coincidencia lo señalado por los testigos en cuanto a que el obrar de los dirigentes sindicales del gremio UOCRA y de sus delegados o colaboradores era irregular, no ajustado a la ley, en cuanto a como debe ser una medida de fuerza y en qué situaciones la misma se puede concretar.

De los testimonios y prueba documental (actas de escribano, inspecciones del Ministerio de Trabajo) se desprende que se presentaban en la obra ni bien advertían el inicio de la misma, y lo que hacían era paralizarla aún cuando estuviese todo en regla, hasta tanto el jefe, encargado, o dueño de la empresa fuese a la sede del gremio para hablar con los dirigentes sindicales.

No se realizaba una medida de fuerza justificada en algún incumplimiento de las condiciones de trabajo, o reclamo laboral por aumento

de salarios u otro tipo de necesidad laboral. No se hacían huelgas conforme lo dispone la legislación como regulación del derecho previsto constitucionalmente. Sino que lo que se hacían eran distintas medidas que impedían la continuidad de la actividad laboral hasta tanto ellos mismos luego lo autorizaban, dejando afuera y a un lado de esto hasta a los propios trabajadores, muchos de los cuales ni siquiera sabían los motivos por los cuales no los dejaban trabajar.

Esto lo comentaron distintos testigos, entre otros, el señor Pablo Quantín, quien contó que en las obras empezaban las protestas, se realizaban asambleas irregulares porque no estaban dentro de la reglamentación, lo que tornaba inviable desarrollar las obras. Que se hacían asambleas todos los días sin que se indicase el motivo de las mismas. Que incluso hicieron la denuncia en el Ministerio de Trabajo el que dictaminó que la asamblea era ilegal, porque no tenía motivo. Que cuando le mencionaban algún punto de reclamo ellos eso lo cumplían, por lo que no había motivo para la asamblea.

Señaló Quantín que había empresarios que cuando se reunían en la Cámara de la construcción comentaban que las asambleas se evitaban cuando pagaban sumas de dinero, que entregando dinero las obras se desarrollaban con total normalidad.

Ilustrativo resulta lo que se puede extraer del testimonio del señor Jorge Ferrari, quien contó que luego de que Humberto Monteros le

pidiese una suma de dinero y él no abonara nada, recibió un llamado un miércoles a las 10 de la noche de parte de Monteros, quien le dijo: “Jorgito te olvidaste de mi”, y ante su respuesta de que no podía abonar la suma que le pedía, que era inalcanzable, Monteros le dijo: “entonces mañana no trabajabás más”, y al otro día, luego de empezar a trabajar, a eso de las 8 de la mañana comienza el hermano de Mario Gonzalez a decir que era una asamblea y nadie podía trabajar.

Se extrae del testimonio también que luego de ese llamado tuvo una asamblea que duró una semana, que él quiso consultar en el obrador los motivos de ello y Gonzalez no lo dejó entrar por ser de la patronal. Señaló que a los operarios los pasaba a buscar la combi, los llevaba al lugar de trabajo y ahí se quedaban, sin hacer nada. Que sus empleados –de muchos años de trabajo con la empresa- les decían que se tenían que quedar en el obrador porque no los dejaban trabajar, y los otros empleados que estaban por el gremio de UOCRA decían que no conseguían trabajo nunca más.

Del testimonio de Ferrari surge que no había motivo para la asamblea (huelga en mi opinión, porque era un cese de la actividad laboral con concurrencia al lugar de trabajo), y sólo se había dispuesto por el llamado de Monteros, porque no se abonó la suma que él pedía.

También de este testimonio surge la modalidad de paralizar las obras que se iniciaban hasta tanto hablar con la gente a cargo del gremio.

Contó Ferrari que cuando estaban las turbinas en marcha se rompe un enfriador de agua, por lo que le piden que lo repare. Que trajeron material de Chile, armaron los andamios y cuando suben los empleados de su empresa para soldar, lo llama un empleado desde arriba, quien le dice que estaba en comunicación Queco Vazquez, quien les decía que no podían trabajar porque no había arreglado con él primero. Que le pidió que le pasara el teléfono y le consultó a Vazquez sobre cuál era el problema, y que Vazquez le dijo que no podía trabajar sin haber hablado con él.

Del testimonio del señor Rubén Almada también surge esta mecánica de paralización de la obra mediante asambleas o piquetes en el ingreso de la obra, para evitar la normal continuidad de la misma y generar el pago de las sumas de dinero ilegítimamente reclamadas en beneficio personal del dirigente sindical, o la contratación de alguna empresa de servicios, la incorporación de determinado personal que indicaban desde el gremio, o por alguna otra cuestión. Detalló el testigo que hasta tuvieron que alquilarle una oficina en el centro de la ciudad porque la gente del gremio no lo dejaba entrar a la planta porque él había comentado que querían que echase al personal contratado e incorporase otros que les indicaban desde el gremio.

De esta prueba surge además que tuvieron piquetes en el acceso a la planta, donde unas 50 o 60 personas cortaban el acceso, siendo

sólo unas 10 de ellas empleadas de la empresa. Que también le efectuaron una movilización hasta en el domicilio particular del testigo.

La situación antes apuntada fue comentada en el juicio por la señora Dolabaras, quien presenció como 40 o 50 personas que se identificaban con chalecos o camperas del gremio UOCRA se presentaron en su vivienda particular para manifestarse en contra de su esposo; señalando además que era habitual ver en los medios periodísticos de la época los piquetes que realizaban del gremio UOCRA en el acceso a la planta.

Del testimonio del señor Alejandro Cowper, también se desprende esta modalidad de paralizar la obra ni bien se iniciaba, aún cuando estuviese todo en regla, hasta tanto el empresario fuese a la sede del gremio para hablar con algún dirigente sindical. Que como motivo de esta medida le dijeron que tenía que conversar con la gente del gremio, que sólo le manifestaron que no podía seguir, que era una asamblea.

Del testimonio del señor Ale Herrera surge que cuando Monteros fue a la obra les dijo que si no tomaban gente de la bolsa les paraban la obra.

Lo mismo indicó Juan Manuel Moreno, quien contó que cuando comenzó la obra se presentaron unos personas del gremio y paralizaron la misma, indicándole que debía ir a hablar al gremio; y luego Canales le

realizó varias exigencias de dinero y otras cuestiones, que él no aceptó porque no correspondían y fue entonces que recibía llamados de Canales que le decía que si no firmaba el convenio por el aumento de sueldo se paraba la obra.

También surge de este testimonio que cuando quiso negociar alguna cuestión del convenio que le querían hacer firmar en el Ministerio de Trabajo, Canales le dijo que se firmaba como estaba escrito o se paraba la obra, y acto seguido llamó a una persona y le dijo Canales que fuese hasta la obra y la parase; siendo por ello que Moreno luego decidió no continuar con esta obra.

Lo mismo contó el testigo cuanto retomó la obra ante el reclamo de ABSA para que la cumplimente. Dijo que ni bien comenzó se hicieron presentes del gremio y la pararon sin explicar el motivo, hasta que luego tuvo que firmar el convenio en el Ministerio y entregar una suma de dinero a Molina y pudo continuar con su actividad.

Del testimonio del señor Diego Perrin se desprende la misma mecánica, dado que estando sus empleados haciendo una actividad de balizamiento en un bacheo, dos personas se ponen al pie del camión y no los dejaban seguir trabajando hasta llegar a un arreglo, hasta pagar una coima; situación que le causaba mucho perjuicio porque se trataba de

asfalto caliente, que se perdía si no se utilizaba, por lo que el gerente de CV1 viajó en avión a Bahía para arreglar con Monteros.

Julián Allende brindó un testimonio del cual se extraen datos de interés con relación a lo que se viene comentando, dado que indicó que lo llamaban para preguntarle por cómo iban a seguir con la obra, y cuando el testigo les preguntaba y les pedía que le indicaran que cuestiones faltaban, no le daban ninguna contestación, que sólo querían que fuese a la sede del gremio, lugar en el cual, conforme ya se apuntó, el señor José Burgos escribió en un papel una suma de dinero que pretendía para dejar seguir trabajando. Del testimonio surge que le prendían gomas afuera de la obra y le realizaron un piquete que duró dos días, medidas de las cuales no participaron sus empleados porque no estaban de acuerdo.

Lo mismo se extrae del testimonio del señor Víctor Allende, padre de Julián, quien al observar lo que ocurría en la obra de su hijo con el piquete y el pedido de dinero que le había realizado Burgos, fue que decidió exponer la situación en los medios de comunicación y convocó a una reunión –junto con otras personas- en el Concejo Deliberante de Suarez.

También del testimonio del señor Luis Simón surge esta mecánica de realización de un piquete, no ya en la obra, sino en el lugar de trabajo del cliente (Juan Carlos Smith) para el cual estaba ejecutando la obra el señor Simón; que en ese momento no dejaban salir del lugar al señor Smith. Indicó que esta medida era porque él no había aceptado

pagarles el dinero que le habían pedido los dirigentes de la UOCRA. Apuntó además que las personas del gremio que le reclamaron el dinero le hicieron el comentario que sino le iba a pasar lo mismo que “al otro gil”, en referencia a Allende, a quien le efectuaban piquetes y medidas de fuerza en la obra.

Se extrae de este testimonio que concurrían 4 o 5 personas que se identificaban como del gremio UOCRA como para ejercer presión, que decían que sino iban a mandar inspecciones y al Ministerio, y que esto lo hacían para presionar, para que uno pagase un dinero que no correspondía, para poder seguir trabajando sin inconvenientes.

Coincide también lo que evidencia el testimonio del señor Fabián Gurrado, quien contó que se hicieron presentes del gremio ni bien arrancó la obra, y que si no se accedía a los que ellos pedían se la paralizaban, la ralentizaban –comentó- y hacían asambleas sin motivo alguno, lo que implicaba que el trabajador no trabajaba, pero igual el sueldo se pagaba de forma completa, generándoseles además de este perjuicio económico otro posible perjuicio por sanción económica del comitente ante la falta de cumplimiento de los trabajos en el tiempo establecido en los contratos. Fue muy ilustrativo al señalar que le han “…parado la obra con asamblea por haberme atrasado en llevar la cuota al gremio, porque no le gustaba la vianda, no sólo paraban la obra en cuestión sino todas las obras de la empresa…”; que indagaba por los motivos y las respuestas eran disuasivas, pero el fin era ir al gremio para arreglar. Detalló también que en

alguna asamblea el motivo era que la vianda estaba fría si era de otra empresa y que la combi no los llevaba a su casa si era de otra empresa. Que las asambleas crecían mientras no llevaba la cuota al gremio. Que las asambleas interrumpían la obra y no estaban autorizadas por el Ministerio de Trabajo; que nunca lo notificaron, que nunca la UOCRA o el Ministerio le solicitaron llevar a cabo la asamblea. Que en esas oportunidades se quedaban sentados sin hacer nada durante la asamblea, era un quite de colaboración, permanecían en la obra sin hacer nada.

Del testimonio del señor Gustavo Evangelista se puede extraer estas mismas conclusiones, dado que contó que si no se pagaba lo que exigía el dirigente del gremio se paraba la obra.

Luis Carcereny también aportó datos con relación a estas asambleas sin aviso y sin motivo que ejecutaban en las obras, producto de las cuales se perdía el día de trabajo y había que pagar igual el jornal, con el riesgo para la empresa de ser sancionada por su comitente; por lo que fue que se vieron obligados a pagar las sumas de dinero que les fueran requeridas de forma mensual y por cada obra que ejecutaban, sin tener sentido esa exigencia de dinero, sin recibir la empresa contraprestación alguna por ello.

Del testimonio también se puede advertir la actitud que adoptaban cuando comenzaba una obra, dado que indicó el testigo que cuando iniciaron la obra llegaron dos autos y se cruzaron delante de la

máquina y una persona se baja y les dice que vayan a hablar con Burgos. Contó el señor Carcereny que era una actitud como de patoteando. Que también le cruzaron unos autos por delante de un camión en el cual estaban retirando materiales de una obra que se había paralizado por rescisión del contrato con la provincia, que a ese camión no lo dejaban seguir, hasta que habló con Molina y dio la orden de que lo dejaran pasar. Mencionó "…no pagar era no trabajar, eran asambleas permanentes, eran amenazas de no vas a poder trabajar, tanto con Burgos como con Molina era o pagás o no trabajás, o te hacemos la vida imposible para no trabajar…".

De los dichos de Manuel Carcereny se arriba a las mismas conclusiones que con el testigo anterior, dado que refirió que si no pagabas no podías trabajar, te hacían asambleas y te paraban la obra. Relató también el episodio con el camión, que no dejaban salir de la obra que se había paralizado por rescisión del contrato con la provincia. Detalló que Burgos le ha mencionado que si reducía el personal (cuando no le pagaban los certificados de obra) iba a tener "kilombo", iba a tener problemas; comentado además que algunos dirigentes le mencionaban cosas como que iban a pasar las fiestas con su familia, lo que le daba mucho miedo, porque lo sentía como una amenaza.

Del testimonio además se extrae la modalidad de los piquetes, dado que contó Carcereny que le hicieron uno durante 5 días en sus

oficinas; situación ésta también recordada por la señora Mariela Gonzalez al declarar en el debate.

El señor Roberto Gaveglio también expuso que tenían que pagar las sumas de dinero que les pedían los dirigentes del gremio porque sino les hacían asambleas que implicaban la paralización de los trabajos sin motivo alguno, sin que existiese alguna falta de la empresa que justificase la medida. Lo mismo surge de los dichos del señor Diego Salguero, quien dijo que por experiencias anteriores, para que la obra pudiese seguir sin inconvenientes, sin que se las frenen sin existir motivo para ello, había que pagarle a quien requería la suma de dinero.

Del testimonio del señor Cristian Ferrero se observa la modalidad comentada, ya que apuntó que en una obra en Suarez se presentó el señor José Burgos junto a gente del gremio e hizo una parada de obra, indicando que no se podía seguir trabajando porque no estaban dadas las condiciones, y ante la consulta del testigo sobre cuáles eran esas condiciones, no le contestó nada, simplemente le dijo que no se podía seguir trabajando.

De lo relatado por Diego Cerra surge esta situación de poner un freno en las obras cuando recién comenzaban, para generar la situación de que se viesen obligados a pagar sumas de dinero. Así, contó el testigo que al no pagar la suma de dinero que le fuera requerida por Rivas y Burgos, se hicieron presentes en la obra gente del gremio UOCRA y uno de

ellos se subió a una máquina y la paró, indicándoles al resto del personal que la obra estaba parada, sin que existiese motivo o irregularidad alguna constatada en la misma, y sin tener atribuciones para adoptar esa medida el dirigente sindical.

Han sido coincidentes también los testimonios en marcar la mecánica de la asamblea o paro de actividades de forma sorpresiva, sin aviso previo, y sin justificación alguna, en momentos en que se estaba tratando alguna cuestión, como fue la de los premios de fin de año del 2.016. De los testimonios antes comentados surge que de forma sorpresiva convocaron al Ministerio de Trabajo a varias empresas, y previo a ingresar a la sede del Ministerio, todas estas empresas fueron avisadas por sus delegados de obra o jefes de planta que las actividades se habían paralizado esa mañana, que no se podía dejar salir a los camiones con asfalto u hormigón, u otros materiales, hasta tanto no se recibiese un llamado desde el gremio.

Así lo expusieron los testigos Néstor Teplitz quien contó que se tornó muy compleja la situación porque estaban en diálogo y de buenas a primeras los llamaban del Ministerio de Trabajo para buscar una salida en este tema, y ahí fue problemático porque muchas obras tuvieron ese mismo día de la reunión asambleas y paradas transitorias, por lo que les daban a entender que si no acordaban iban a tener más problemas, y al final acordaron dar algo por operario.

El testigo Cristian Ferrero al señalar que se los citó a todos al Ministerio de Trabajo, un día a la mañana, y lo llamativo de esa reunión fue que se reunieron 15 minutos antes y en ese momento les avisaron los supervisores de cada empresa que las obras estaban paradas, que en su caso el encargado de la planta de Pigué le comentó que no podía salir ningún camión hasta tanto no lo dijesen desde el sindicato. Que no les daban los motivos para parar la obra; la pararon porque alguien llamaba y decía acá no se trabaja más; que no les decían artículo de ley o convenio, y además era una llamada telefónica, no había acta ni documentación que entregaran por ese “parate” de obra o la prohibición de salida de los camiones.

A igual conclusión se llega con lo expuesto en el testimonio del señor Luis Medús, dado que señaló que cuando estaban en el Ministerio de Trabajo le dijeron que paraban la obra y lo hicieron, no dejaban salir a los camiones de la planta, ni trabajar a su personal; que no era que sus empleados estaban en huelga, que era la directiva del gremio que no trabajen y sus empleados no tienen posibilidad de hacer otras cosas.

El señor Diego Cerra dio datos en su declaración que corroboran lo que se viene señalando, dado que dijo que con el asfalto, si te paran un camión cargado, se enfría y no sirve para trabajar, si hacen una asamblea con el camión cargado se genera un perjuicio económico muy grande, y por eso era mayor el perjuicio que pagar las sumas que le pedían.

Que les pidieron de ir al Ministerio de Trabajo al día siguiente, y cuando llegó al Ministerio lo llama el delegado que le habían avisado que tenían la orden de parar las obras, que no cargara los camiones, y por eso negociaron con todas las obras paradas.

Muy ilustrativo de la forma de obrar de los acusados, y cómo estaban de acuerdo para ello, resulta el mensaje de WhatsApp entre Pablo David Gutiérrez (abonado 5492915053100) y una persona que agendó como "Rafita Panedile" (abonado 5492916465580), donde se menciona por parte de Gutierrez: "... te preguntan si la planta esta parada y despues respondes que esta parada y es la medida de fuerza ahí esta el tema", "Nunca parada y medida de fuerza siempre de asamblea informativa", "O asamblea o asamblea permanente ellos pueden aducir que estan de paro", "Y cuando la radio te pregunta estan parados? La respuesta es no, parados no ... de asamblea". En otro mensaje Gutierrez señala: "... Lo que nosotros nos tenemos que cuidar es de "no paro no ...", sino "asamblea".

La testigo Melina Rebolledo explicó, como indica la legislación, que las medidas de fuerza se adoptan por votación en el gremio y se comunican previo a su realización a la patronal o empleadora y al Ministerio de Trabajo.

Martín Ariel Parada, del sindicato SITRAIC también contó que antes de hacer asamblea le avisaron a la empresa Sidepa.

Como se puede advertir de todos los testimonios antes mencionados, no había aviso alguno de la medida que se adoptaba, no se sabían ni explicaban los motivos de las asambleas ni siquiera a los trabajadores, y no se cumplía con la normativa legal, y por eso era que usaban esa mención de asamblea informativa, para evitar quedar en evidencia de lo irregular de su actividad.

Varios testimonios nos ilustraron sobre como eran las formas y actitudes, palabras y gestos utilizadas por las personas cuando los atendían en sus oficinas de la sede del gremio, o en las distintas reuniones que se han mantenido en otros sitios.

Al referirse a los momentos en que se les hacían las exigencias de entregar sumas de dinero, de contratar empresas para la prestación de servicios, de firmar convenios por condiciones laborales, los testimonios han coincidido en las apreciaciones puntuales que recuerdan de esos hechos, lo que resulta de sumo interés, dado que en la mayoría de los casos, estos encuentros eran casi en soledad, de persona a persona.

Así, el testigo Juan Manuel Moreno dijo que era Canales quien hablaba con él, pero cuando iba a la obra los hacía con algunos más, a los que no conoce; que en el sindicato la reunión sí fue solo con Canales, y ahí

este le dijo que si no se firmaba el convenio en el Ministerio de Trabajo no podía seguir trabajando.

Contó también que en otro momento Canales le dijo que si no firmaba lo que ya estaba escrito en el convenio no podía trabajar, y delante de él llamó por teléfono y le dijo a una persona que fuesen a la obra y parasen todo porque no se iba a firmar nada.

Señaló Moreno que Canales lo llamaba y lo presionaba con la amenaza de que si no se firmaba se paraba la obra; que incluso una vez fue Canales a la obra y le dijo que si no firmaba se paraba la obra; por lo que el testigo dejó de trabajar y no cumplió con esa tarea, hasta que luego, a los meses, fue requerido por su contratista ABSA para que la terminase, y ahí tuvo que firmar con el gremio, presionado por Canales.

Expresó que el motivo por el cual firmó y pagó era porque le paraban la obra si no lo hacía, que el único incumplimiento que ellos le decían era que no firmaba el convenio.

El testigo Rubén Almada dijo que la gente del gremio con la cual se ha reunido le refería “o pagás o no trabajás”.

Del testimonio del señor Alejandro Cowper también surge que el pedido de dinero le decían que era para poder trabajar. Así, señaló que Molina le dijo en la primera charla que tenía que aportar un dinero mensualmente para evitar tener inconvenientes de presencia y objeciones

en cuanto al avance de la obra. Refirió que esto le generaba temor, porque si la obra se paralizaba no podía cumplir con el plazo de ejecución de la misma.

Señaló que previo a esta reunión se habían hecho presentes en la obra dos personas del gremio, que se bajaron de un auto y le informaron a su personal que no podían continuar trabajando, sin indicar los motivos o el faltante de alguna medida de seguridad, sólo convocándolo a Cowper a dialogar en el sindicato con Molina. Que de esa forma presionaron en la obra para que no se siguiese trabajando.

El testigo Carlos Schlosser fue muy ilustrativo al afirmar que "no era un pago voluntario, era intimidatorio el sistema, podíamos llegar a tener problemas en la obra, a tener inspecciones difíciles por parte del Ministerio de Trabajo, a pesar de que somos una pyme que cumple con todos los requisitos laborales; pero a veces uno ante el temor y pensando en que uno quiere trabajar y que su personal de años en la empresa (alguno más de 20), se pensaba más en ellos y en que la obra no se pare, porque cuando la obra se para el personal no cobra, ante eso uno llega a decir tengo que hacer este pago aunque sea en contra de mi voluntad".

El testigo Manuel Carcereny también fue muy gráfico en sus palabras, por cuanto señaló "…cae esta gente, 4 o 5 personas grandotes, te piden documentación y sin revisar para ellos está mal, y esto no es así; te increpan, te tratan con metodología de apriete y no diálogo, te piden

documentación para presentar en el gremio que luego no les importa, que no les importan los derechos de los trabajadores…", que "…nos pedían una extorsión para poder seguir trabajando, si no cumple con esas cosas corre el riesgo de que lo apreten, que le prendan fuego un vehículo o una máquina, no hay diálogo con esa gente…".

Expresó que cuando "…yo digo que la pasamos mal, fue así, la pasamos muy mal. Aranda y Burgos dijeron que iban a pasar las fiestas con mi familia, son gente que amenaza, eso te da un poco de miedo. Nos hicieron piquete en la oficina por 5 días…".

También surge esta cuestión de los dichos del testigo Roberto Gabeglio, quien contó que tenían que abonar una suma mensual por las obras que estaban haciendo en Bahía, y esto era una exigencia en la que no estaban de acuerdo. Que se pagaba porque de otra manera les entorpecían el avance de las obras, hacían asambleas y otras cosas, que no estaban justificadas en relación a las condiciones laborales.

Agregó que siempre los amenazaban haciendo asambleas y entorpeciendo el ritmo normal de las obras.

También de interés resulta lo que se extrae del testimonio del señor Diego Cerra, quien contó que los citó José Burgos y les dijo que "…había que ponerla, nos pidió un monto colaboración y terminamos arreglando por 3000 pesos que le pagaba mensualmente, que luego se fue

actualizando anualmente hasta llegar a los 5000 pesos…", que esto no era colaboración, había que pagar, sino te volvían loco, como le pasó a Carcereny que no lo dejaban trabajar. También expresó que Burgos decía siempre la frase "…el que avisa no traiciona…", eso para referirse a las consecuencias que uno podía tener.

Este testigo expuso la actitud de otro de los delegados del gremio, el señor Cucha Rivas (Burgos luego le avisaría a Cerra que no sería más delegado, que le presentaría a Gutierrez), quien junto a otro individuo le exigió el pago de 30.000 pesos, según pedido de Burgos, y ante la negativa al pago, luego se presentaron dos sujetos en la obra y uno de ellos se subió a una máquina que estaba en funcionamiento y la detuvo, y comentó que hasta que no arreglaran con ellos no se podía seguir trabajando.

El señor Raúl Porras también contó en la audiencia este episodio sufrido por la empresa Cerra y Moro, en el cual un tal Cucha Rivas se subió a una máquina de la empresa y la paró y dijo que no podían seguir trabajando hasta que no recibieran una llamada.

Por su parte, del testimonio del señor Martín Sanchez, surge que tuvo que abonar la suma de dinero que le era exigida porque "…sino no podían hacer la obra, que la versión era pagar o no hacer la obra…". Dijo que el pago no era voluntario, que Walter Paiz tenía un trato cordial, pero el

contenido de lo que decían no correspondía, ya que le decían que si no pagaba le paraban la obra.

Similar situación se desprende del testimonio del señor Fernando Ariel Schro, quien contó que Carrillo le dijo que si le daba el dinero que le pedía no le salía más caro, como sería si pusiese en blanco a su personal, que sino le iban a encontrar algo para molestarlo e igual iba a tener que pagar. Que además Carrillo le comentó una vez que "…cuando fuese a presupuestar pensara en ellos, que siempre me iban a caer…", agregando luego que por miedo hasta quiso dejar la albañilería.

Del testimonio del señor Luis Medús surge el estado de temor que le generaba toda la situación que le planteaban los sujetos con los que se entrevistaba en las distintas reuniones a las que fuera convocado. Expresó el testigo que "…no era por deseo propio, nunca hice nada de lo que hice por deseo propio, era por una presión y prefería aceptarlo que atenerme a las consecuencias, no era voluntario…".

Que cuando fue la reunión por una de las obras del predio, fue el llamado y decirles "que iban a parar la obra", "que fijate que hacen asambleas", las situaciones que en una empresa se siente como presión.

Coincide con lo expuesto por Medús, lo que se extrae del testimonio del señor Cristian Ferrero, quien comentó que "fue una reunión

áspera porque les decían que tenían que terminar en tiempo porque se les iba a poner feo".

Señaló que el que exigía era Burgos; y exigía, no era una colaboración en la que uno dice "haber si podés", ahí era una cuestión de cómo y en qué tiempo tenían que hacer las cosas.

El señor Gustavo Evangelista, también brindó un testimonio que permite arribar a las mismas conclusiones, por cuanto dijo que hicieron la obra por una exigencia del gremio, dado que sino paralizaban las obras que tenían en Bahía Blanca y la zona.

También surge de la prueba que se viene analizando que además de esa mecánica de presentarse en la obra y dar cualquier excusa para que las personas a cargo de la empresa o la obra se presentasen en la sede del gremio de la UOCRA, la circunstancia era aprovechada por estos sujetos para escenificar una situación de hostilidad, que ha impactado en el ánimo de varios de los concurrentes, conforme lo expusieron en la audiencia de debate.

Así, el señor Luis Carcereny contó que "…en la UOCRA nos citaban y había 15 o 20 personas grandecitos afuera y había que pasar a través de esa gente que no se sabe si son empleados buscando trabajo o matones que tienen ahí. En el salón de la UOCRA había otros 15 matones y nos hacían esperar para demostrar que estábamos en un medio hostil y

luego nos hacían pasar a una oficina donde estaba Burgos y ahí nos imponían las condiciones…" –así sus dichos-.

Apuntó graficando la situación que "…cuando usted llega a un lugar y encuentra a 15 personas en la vereda interponiéndose en la puerta, pide permiso y no se corren, lo miran despectivamente o amenazantemente, entra, encuentra otras 15 personas que lo miran y lo hacen esperar unos 15/20 minutos, parece para ablandarlo y que sintamos en el ambiente en que estamos, esto resulta totalmente hostil…" –así sus expresiones-.

Igual se pronunció el señor Juan Manuel Moreno, al exponer que "…cuando uno iba a la sede de la UOCRA el ambiente era bastante intimidante…", que él no tenía experiencia en esas situaciones y era intimidante porque uno iba solo y tenías unos patovicas en la entrada o adentro, y te hacían anunciar, esperar y pasar a otra sala adentro, y luego más tarde a una oficina, y no era grato en lo más mínimo.

En el mismo sentido se computa lo expuesto por el testigo Luis Medús, quien dijo que nunca le gustó la relación con la UOCRA, que siempre le dio medio ir al gremio, sentir la presión que le hacían.

También lo relatado por el señor Carlos Schlosser, quien contó que les propuso a los que lo citaban en la UOCRA ir a otro lugar y no hubo forma de convencerlos; porque en la UOCRA uno se siente intimidado,

presionado, era la manera que ellos buscaban de lograr que se acepte lo que ellos le pedían.

Coincide con lo que se viene señalando lo indicado por el testigo Diego Cerra, quien aportó que era "…una clásica que te rodeaban con una cantidad de gente que te asustaba, no porque te dijeran nada, la situación era intimidante de por sí…"; o lo señalado por el señor Manuel Carcereny, en cuanto refirió que "…el ambiente al entrar al gremio era tremendo, había gente afuera y luego adentro para aflojarlo a uno….".

Del plexo probatorio analizado se concluye que era un método de operación diseñado y aplicado por los distintos integrantes de la organización criminal utilizar la pantalla que le permitía su condición de dirigente sindical o colaborador de los dirigentes sindicales, para paralizar las obras y generar la concurrencia de la posible víctima a la sede del gremio, o citarlas al mismo con algún pretexto como era requerirles documentación, para luego, bajo la amenaza de dificultar el avance de la obra, generando con ello miedo o temor en las personas, exigir sumas de dinero en la mayoría de los casos, o la contratación de empresas en particular, o la firma de convenios que producían efectos jurídicos como ser aumentos salariales o prestación de servicios a los trabajadores.

También han demostrado los testimonios que en algunos casos se los llamaba telefónicamente, y de esa formar se concretaban los

ilegítimos pedidos; y esto acontecía (en cuanto a los hechos que aquí analizamos) con personas con las cuales ya existía algún contacto anterior.

Así, del testimonio del señor Jorge Ferrari surge que luego de mantener una reunión con gente del gremio UOCRA en la cual le mencionaron que debía aportar una suma de dinero como “colaboración”, y que él se ofreciese a construirles una cámara refrigeradora para uso de los afiliados, fue que una noche recibió un llamado de Humberto Monteros a su teléfono celular, en el cual Monteros le manifiesta: “Jorgito te olvidaste de mi”, y ante su respuesta de que la suma que le solicitaran era inalcanzable, es ahí que Monteros le dijo que “entonces mañana no trabajás más”, cuestión que así sucedió, dado que en la jornada siguiente uno de los operarios que había sido designado por pedido de Mario Gonzalez, en particular su hermano, fue que empezó a decir que estaban en asamblea y que no se trabajaba. Luego relató que sus contratistas, a los que les comentó lo ocurrido, decidieron pagar las sumas de dinero, que él retiró del banco y entregó a gente de Armec porque él avisó que no quería tener contacto con ese tipo de gente.

En los dichos del señor Rubén Almada también se encuentran elementos para acreditar esta mecánica y forma de actuar de la organización, ya que cuenta el testigo que su empleador, el señor Iwanyniuk fue quien se reunió con Monteros en Buenos Aires y que ahí le pidieron la suma de 400.000 pesos, los que abonaron en dos cuotas, habiendo

participado el testigo de las entregas, ya que acompañó a Iwanyniuk, entregándole en esas oportunidades el dinero al señor Sergio Vazquez, del cual luego se enteró que se habría quedado con el mismo, ya que en una obra posterior Monteros les reclamó el pago de una suma de 750.000 pesos porque no había recibido los 400.000 que ellos habían pagado.

De este testimonio se extraen los datos para corroborar esta mecánica antes mencionada de convocar a reunión al gremio y ahí recibir el planteo de las personas del gremio (mencionó a Pablo Gutierrez y Mario Gonzalez, quienes invocaban al señor Monteros), siempre dentro de ese contexto de paralización de las obras, dado que el testigo apuntó que les realizaban piquetes en la planta impidiéndole al declarante ingresar a la misma, por lo que tuvieron que alquilarle una oficina en el centro de la ciudad para poder realizar su actividad de administrador.

Los dichos del señor Alejandro Cowper ilustran sobre otro tipo más de situaciones que utilizaban los integrantes de la organización, aunque siempre eran similares. Se puede observar que luego de que se presentara gente del gremio en la obra y se la paralizara sin indicarle el motivo, y los convocase a la sede del gremio; fue recibido el testigo por el señor Guillermo Molina, quien no le supo explicar los motivos por los cuales la obra había sido paralizada, dado que estaba todo en regla, y luego le dijo que tenía que contratar a dos personas que él le indicaba. Refirió el testigo que luego de la exigencia y ante su negativa, le propone Molina que si no

accedía al pedido por lo menos que haga un aporte de una plata equivalente a un jornal de sueldo de un oficial mensual. Que esto era juntar todos los meses el equivalente al sueldo de un oficial, que serían unos 11.200 pesos en ese entonces, y ese dinero le contó Molina que estaba destinado a uno de los operarios de la bolsa de trabajo que estaría sin trabajo.

Computable del testimonio resulta lo expuesto a la forma de efectivizar los pagos, los que se realizaron en persona al señor Guillermo Molina, en un sobre que fue entregado en distintos sitios, así, en la sede de la UOCRA, en la esquina del Automovil Club, en calle Chiclana y Fitz Roy, frente a donde estaba la CGT en calle Mitre y Rodríguez, y otra en la calle San Martin al 500.

Fue muy expresivo de lo que le pasó cuando ante la consulta del doctor Jara en cuanto a que si había pagado esa suma que era como un salario por qué no contrató a una persona?, que el testigo le respondió que no necesitaba una persona más, que pagó porque necesitaba continuar con la obra.

En el testimonio del señor Hugo Dragonetti se nota esto que se viene analizando, ya que dio cuenta de las reuniones mantenidas con Monteros en las que se le solicitaron cosas que entendió legales, pero también otras exigencias que no eran legítimas, como eran las de contratar a determinadas empresas para la prestación de servicios (transporte, comida), sumas de dinero en efectivo y entrega de materiales de

construcción; pedidos que fueron efectuados luego de que empezaron a sufrir presiones e inconvenientes en la obra, con asambleas que paralizaban la misma o la demoraban en su ejecución.

Comentó el testigo que Monteros los llevó a una situación extrema, y que por eso tuvieron que aceptar estas cosas para poder continuar el trabajo.

Diego Perrín es otro testigo que ha dado cuenta de las reuniones a las que los convocaban en el gremio, y de los llamados telefónicos recibidos, en los cuales se les realizaban estos planteos irregulares de pedidos de dinero, contratación de determinadas personas que ellos les decían reemplazando a los que ya estaban trabajando, y contratación de empresas de servicios en particular.

Señaló en su testimonio que él era sub-contratista, por lo que el primer arreglo de una suma de dinero, luego de que le impidieran continuar una obra de bacheo, le fue comentado por el señor Jorge Panero, gerente de CV1, quien viajó a Bahía Blanca para tener una reunión con Monteros y luego le depositaba al testigo una suma que éste entregaba mensualmente al señor Néstor Rivas de la UOCRA.

También se advierte en el testimonio que luego lo convocaron al declarante a la sede de la UOCRA, el señor Pablo Gutierrez (expuso previamente que Rivas le había dicho que había cambiado el personal de la

UOCRA y que se iban a poner en contacto con él para tener otro arreglo), quien le dijo que tenía que echar al personal que tenía trabajando y poner como obreros a las personas que le indicaban desde el gremio, y que además debía darles transporte y viandas, y entregar una suma de dinero importante de forma mensual. Se menciona en el testimonio que se transmitió todo esto al nuevo gerente de CV1, de nombre Martín, y luego conversó con Gutierrez por teléfono, quien se manifestó enojado, nervioso y señaló que había que cumplir con eso; por lo que la empresa decidió dejar de trabajar en ese sector por el momento y luego se produjo la intervención del gremio.

También muy expresivo en su declaración fue el señor Juan Manuel Moreno, quien al igual que varias de las personas que han declarado, pudo evidenciar el pesar que le generaban todas las actitudes que tuvo que padecer por los sujetos que invocando al gremio se presentaron en la obra y la paralizaron, y las adoptadas luego por los dirigentes sindicales con los que tuvo que tratar.

De este testimonio se puede advertir como ejercían su presión los sujetos que estaban a cargo de la dirigencia del gremio y que han intervenido en los hechos de los que resultara víctima. Se observa que luego de que lo citaran al gremio, el testigo mostrase que tenía todo en regla, le exigieran la firma de un convenio por mejora salarial y prestación de servicios de transporte y viandas (que no correspondían por ser una obra en

el centro de la ciudad), y el testigo decidiera no continuar con el trabajo para evitar inconvenientes, fue que ante la petición del comitente, la empresa ABSA, y al retomar la obra, se la paralizaron sin motivo alguno y se tuvo que reunir en el gremio con Canales, quien lo obligó a suscribir un convenio y le exigió la entrega de una suma de dinero, situación que luego volvió a presentarse, de la misma forma, en otra obra, donde las exigencias fueron efectuadas por Canales y Molina, siendo el último de los mencionados a quien le entregó el dinero en una oportunidad, dado que luego se produjo la intervención del gremio.

Ante las consultas de los letrados dijo en una frase que bien refleja la situación cuando concurrió al Ministerio de Trabajo: “bajo obligación era una extorsión que quede claro, me obligaban que si no firmaba no trabajaba, era una extorsión”.

Los pedidos de dinero en las reuniones que se concertaban en la sede del gremio a las que los convocaban las personas que se presentaban en las obras de parte del sindicato, se observan en los testimonios del señor Julián Allende y la señora Nancy García, quienes relataron que concurrieron a la sede a una reunión que había sido indicada por Cabrera, y que fue ahí que Burgos les pidió la entrega de un dinero.

En la versión expuesta por el testigo Diego Salguero se advierte la misma forma de actuar, esto es la petición ante una obra nueva por parte de un dirigente de la UOCRA de una suma de dinero mensual,

situación que se suscitaba en una reunión a la sede gremial, celebrada en una oficina a puertas cerradas, a la que había sido convocado por otra gente del gremio UOCRA que se había presentado previamente en el sitio de la obra. Se detalla en el testimonio que los pagos de dinero se hacían mensualmente y que el señor Molina, quien era el que los recibía, consultaba por esos pagos no haciendo referencia al dinero, sino que decía: “dónde nos podemos encontrar por la documentación a entregar o los planos”.

También del testimonio del señor Fernando Schro se puede percibir la concertación de entrevistas en la sede del gremio, donde el dirigente gremial, el señor Carrillo, luego le señalara que regularizar la situación del personal a su cargo le saldría más caro que entregarle un dinero a ellos.

De la declaración se puede notar que ya siendo conocidos los mecanismos y los interlocutores, directamente, ante cada obra que se comenzaba, lo llamaban por teléfono y lo convocaban al gremio, sin pasar siquiera por el sitio de los trabajos, y luego en el gremio venía el pedido de una suma de dinero. El testigo apuntó que le dijeron en una de las reuniones que siempre los tuviese en cuenta al presupuestar una obra “…porque siempre le iban a caer…”.

El del señor Luis Alberto Simón resulta otro testimonio en el cual se da cuenta de las convocatorias a la sede del gremio, efectuada por

distintas personas, según quien estuviese en ese momento en la delegación de Suarez, reuniones en las cuales se les exigía una suma de dinero para poder trabajar sin inconvenientes.

Del testimonio del señor Fabián Gurrado, corresponde aquí hacer notar que también comentó que se los hacía concurrir a las oficinas del gremio, ya que sino paralizaban las obras, y ahí les exigían una colaboración mensual en dinero de forma coercitiva, también exigiendo de esa misma forma convenios de trabajo por encima de los salarios de convenio. Detalla el testimonio que no se convenía nada, que se imponía y atrás de la imposición del porcentaje en más de la mano de obra, venía el pedido del encargado del sector que pedía algo de dinero, sino no se podía trabajar. Señala el testigo que les decían "…nosotros queremos para que la obra funcione 10, 15, 20, o 50 mil pesos por mes y había que llevarlo al gremio a quien recolectaba…".

El testigo Gustavo Evangelista expuso que al inicio de cada obra eran convocados por el gremio, dependiendo la zona era quien lo convocaba, porque estaba diagramada en sectores y dividida entre la gente de la UOCRA, para hacerles un pedido de dinero por el período de duración de la obra.

Se expone en la declaración que la reunión era en una oficina, solo el dirigente sindical (señaló a Canales y Molina) con el testigo y que ahí

se les hacían los pedidos de dinero, los que luego ha entregado, entre otros, al señor Burgos.

Luis Carcereny aportó datos semejantes a los apuntados, al indicar que al inicio de las obras los citaban a la sede del gremio UOCRA y ahí los apretaban exigiéndoles una suma de dinero mensual por cada obra, dependiendo con quien hablaba y a quien entregaba el dinero, según el sector en el cual se estaba llevando adelante la tarea por parte de su empresa.

Mencionó haber sido citado por Burgos y por Molina, y que le decían “para que trabajes y no tener problemas ahora tenés que poner 10 mil pesos”.

Indicó que el mecanismo era el mismo, los citaban a la UOCRA en calle Saavedra, los citaba Molina, iban a una habitación solos y les decían “son 20, diez por cada obra”. Que también Molina lo ha citado en alguna estación de servicio, en calle Colón y 9 de julio, una YPF.

En el mismo sentido los dichos del señor Manuel Carcereny al exponer que llevaban la documentación al gremio en Bahía Blanca, pero eso era una entrada para hablar de otra cosa, para pedir dinero para poder seguir trabajando, los papeles no les importaban a nadie. Que él fue a algunas reuniones, aunque generalmente ha ido su padre, se reunía con Molina y con Burgos en la sede de la UOCRA y tanto Burgos como Molina le

pedían dinero. Que la zona de Suarez la manejaba Burgos, la del sur, Luro y Buratovich la manejaba Molina. También se aprecia en este testimonio una reunión a la que lo convocó Aranda, delegado en la obra, quien lo convocó a la delegación de Suarez y le dijo "…vamos a arreglar algo más para no tener problemas en los trabajos…", y esto era un extra que tenía que agregar en su quincena.

Del testimonio del señor Víctor Allende también surgen estas conductas y la forma de obrar de los acusados. Se indica en la declaración que cuando se presentaban en la obra del gremio UOCRA les exigían cosas que parecían imposibles, pero que no era para que se cumpliese con eso, sino para que fuesen a entrevistarse a la sede del gremio, donde el dirigente gremial le pedía un dinero a cambio para no exigir lo que realmente tenía que cumplir.

Señaló el testigo que "…era dinero a cambio de no denunciar la falta…".

También se aprecia que ha mantenido conversaciones con Burgos en las obras, en una de las cuales le dijo que para que no vaya una inspección a la obra había que ponerle plata a Darío Graf que es el inspector del Ministerio de Trabajo, pidiéndole 500 pesos para darle a él, para que no fuese Graf a la obra. Que le decía que si no arreglaba con ellos venían de la Secretaría de Trabajo para inspeccionar la obra; y que en otro momento Burgos le dijo: "…vos no me alcanzaste lo que te pedí, llevámelo

porque viene la gente de Bahía Blanca y se lo iban a pedir…", y "…Víctor si no pagás te tengo que denunciar…".

Semejante es lo que se extrae del testimonio del señor Néstor Teplitz, quien contó de reuniones en la sede del gremio a las que asistió convocado por el señor Burgos, y otra con el mencionado y Monteros, donde le efectuaron el pedido de las sumas de dinero mensuales; mencionando en la declaración que fue una situación muy violenta, que se vieron obligados a aceptar.

De los dichos del señor Cristian Ferrero se desprende una situación casi análoga, dado que contó que José Burgos le paró una obra, luego regularizó la cuestión en el Ministerio de Trabajo y al retomar se la vuelven a paralizar sin explicarle el motivo, invitándolo al gremio para reuniré con Burgos, lugar al que asistió y ahí le fue requerida la entrega de una suma de dinero de forma mensual.

Fue claro al describir lo que le ocurría, cuando señaló que "uno sentía que si quería trabajar tranquilo lo tenía que pagar, veníamos con experiencia de paradas de obra y requerimientos de documentación de la noche a la mañana, uno tenía que trabajar 48 horas para presentar la documentación y se hacía luego otro parate u otra cuestión, que por eso entendimos que no había otra forma que pagar; lo que anhelábamos es que esto fuese lo menos posible".

De los dichos del testigo Luis Medús se desprende la convocatoria a una estación de servicio para dialogar sobre la obra, y en realidad ahí se producía una exigencia de una suma de dinero (al principio de un porcentaje del monto de la obra, un 3%), luego rebajado a una cifra mensual, que si no pagaba se iba a tener que atener a las consecuencias.

Se describe la insistencia de la persona dirigente gremial (en este caso el señor Molina), mediante llamados telefónicos para tratar de percibir el dinero requerido.

La mecánica de la reunión en la sede del gremio también fue comentada por el señor Medús al relatar el encuentro con el señor Gutierrez, quien le pidió una suma mensual por la obra de la calle Tres Sargentos.

Carlos Schlosser nos aportó un testimonio que refleja este coincidente modo operativo de este grupo organizado, los que lo citaron al gremio y ahí, uno de los dirigentes le solicitó entregar una suma de dinero por mes, indicando que la primer cifra que le solicitaron fue un porcentaje del monto de la obra.

Del testimonio del señor Martín Sanchez se puede observar esta cuestión del pedido de un porcentaje de la obra, de un 3 %, que se ve que era el monto en el cual se habían puesto de acuerdo en solicitar, ya que se reitera en varios casos, para que la obra se pudiese ejecutar sin inconvenientes. Se indica en esta prueba que la reunión fue a puertas

cerradas en una oficina de la sede gremial y que el señor Paiz, con quien se concretó la misma, luego habló con Monteros, quien autorizó el pago de la cifra reclamada en tres cuotas.

El testimonio del señor Diego Cerra da cuenta de los dichos del señor Burgos en la reunión mantenida en la oficina del gremio, cuando dijo que “había que ponerla”, exigiéndoles una suma mensual para poder trabajar.

Se describen también otras reuniones, las situaciones de las obras previo a ello, y el contenido de los dichos que se suscitaban en las mismas, todos tendientes a obligar a realizar aportes de dinero o de trabajo, aún cuando no fuese esa la voluntad del testigo.

Otra frase que apuntó el testigo es que José Burgos siempre les decía “…el que avisa no traiciona…”, para referirse a las consecuencias que podían tener.

Como se ha podido observar también en los testimonios de los señores Medús, Carcereny, Gurrado, Evangelista, Allende, Salguero, Schlosser, Cerra, Sanchez, Ferrari, Almada, Cowper, Teplitz, no fue fácil ni placentero concurrir a las audiencias de debate a contar las situaciones padecidas. No se mostraban molestos por haber tenido que brindarle un servicio (incluso cuando no correspondía) a sus trabajadores sea de viandas o transporte o alguna cuestión de seguridad o higiene en la obra, sino que

de forma sincera vinieron a declarar sobre las cuestiones que tuvieron que sufrir, sobre cómo las conductas de algunos de los aquí acusados les generaron esa situación de miedo a no poder seguir desempeñando su actividad laboral (y algunos también temor por su familia y sus bienes), cuestión que los llevó a verse obligados a cumplir con las exigencias ilegítimas que se les hacían, o a otros a desistir de continuar en esa actividad o en la ejecución de esa obra (Ferrari, Simón, Schro, Moreno, entre otros).

Ver sus rostros en la audiencia, escuchar su relato, observar sus actitudes, relacionar sus expresiones y gestos con lo que está contando en esas extensas declaraciones antes las distintas consultas de las partes (las que incluso en algunos casos se han excedido en las preguntas o en comentarios lo que ha llevado a su objeción), bien permite advertir que se han pronunciado de forma veraz, sobre todo lo que han percibido por sus sentidos, siendo por ello sus dichos plenamente computables para analizarlos y extraer las distintas conclusiones que en esta resolución se están exponiendo.

Se descarta por ello (y por lo que se observó con la restante prueba producida) lo señalado por alguno de los letrados defensores en cuanto a que estas personas se habrían puesto de acuerdo para denunciar e inventar una situación para perjudicar a los dirigentes del gremio UOCRA, por incitación de políticos.

Resulta apropiado aquí marcar otra coincidencia en lo expuesto por los distintos testigos, víctimas de distintos hechos en diferentes circunstancias y situaciones, dado que han sido contestes en afirmar una modalidad en el obrar de parte de los acusados, que demuestra que sabían que lo que hacían estaba mal, y que por eso lo ejecutaban en la soledad de una oficina que era de ellos, su terreno conocido, ante el miedo a ser descubiertos.

De la prueba testimonial, complementada también con el audio aportado por el señor Julián Allende, surge que una de las prácticas era escribir en un papel el monto que se solicitaba, sin mencionarlo oralmente, como bien indicaron los testigos, por miedo a ser grabados.

Así, del testimonio del señor Jorge Ferrari surge que lo convocaron a una reunión y fue recibido por Monteros y Vazquez, y ahí Humberto Monteros anotó en un papel el monto de 80.000 pesos por mes que tenía que darle. Dijo el testigo que se retiró con el papel, el cual le exhibió luego a la gente que colaboraba con él y a los del proyecto.

Del testimonio del señor Julián Allende se observa que cuando fue a la reunión con el señor Burgos, la cual grabó en su teléfono celular, el mencionado le escribió la cifra de 10.000.

La señora Nancy García también expresó que en la reunión Burgos le escribió en un papel un número, cree que 10, y no contaban con ese dinero que era 10.000 pesos para pagarle.

Víctor Allende no presenció la situación vivida por su hijo, pero si escuchó los comentarios que le realizó tanto este como la señora García, y escuchó la grabación que había realizado su hijo, en la que se hacía referencia a la suma de 10.000 pesos.

Del testimonio del señor Fabián Gurrado también se observa esta metodología, dado que contó que en una oficina, Sebastián Canales le pasó un papelito con lo que pretendía por mes, para no decirlo en forma oral por si se lo estaba grabando –acotó-.

En el testimonio del señor Luis Carcereny se advierte similar proceder por parte del señor José Burgos, quien en una oficina de la sede del gremio a la que convocó al testigo le escribió en un papel la suma de 50.000 pesos que era lo que le exigía, mencionando que en su opinión no la decía a la suma por si lo estaban grabando. Se detalla en el testimonio que ante la mención del señor Carcereny de que el monto era una locura, luego escribió el señor Burgos la cifra de 40.000.

Manuel Carcereny dijo que "…el pedido de dinero se materializaba escribiendo en un papel, creo que tenían miedo de que los

estuviésemos grabando, pero no nos animábamos a eso porque el ambiente al entrar al gremio era tremendo…”.

Además de poderse establecer con estos testimonios parte de la metodología utilizada para cubrir su actividad ilícita, se puede apreciar tanto en las declaraciones de los testigos recién apuntadas, como en las de los señores Gustavo Evangelista, Diego Salguero, Mariela Gonzalez, Facundo Orazi, Luis Medús, Carlos Schlosser, Martín Sanchez, Diego Cerra, Adriano Giusti, Rubén Almada, Alejandro Cowper y otros más, que era de práctica pasar a retirar los sobre con el dinero por la sede de las empresa, o requerir su entrega en el gremio, o acordar la entrega en la vía pública, pero sin hacer mención al contenido de los mismos, como si mencionar dinero o billetes estuviese mal, observándose que las personas que requerían las sumas y pasaban a retirar los sobres o enviaban a colaboradores a hacerlo, consultaban previamente si “estaba la documentación”, “los planos”, “los legajos”, “si había algo para ellos”, cuando en realidad lo que pasaban a retirar eran sobre con dinero en efectivo en la mayoría de los casos, o cheques en otras varias situaciones.

Gráficamente el testigo Diego Salguero relató que se coordinaba con Molina la entrega del dinero en efectivo. Que Molina le decía “dónde nos podemos encontrar por la documentación a entregar o los planos”, que eso era lo que decía, pero era el dinero lo que le daba. Que cree que usaba la palabra documentación o planos porque tenía miedo de

ser grabado, que por eso cree que hablaba de documentación y no de dinero.

El miedo a ser grabado, referido en su opinión y en base a como se presentaban las circunstancias y la actuación de las personas por varios de los testigos, bien se corresponde con el saber de que lo que estaban haciendo estaba muy mal; por eso también acordaban reuniones en la vía pública y de imprevisto, donde es más difícil que se organice una situación de registro fílmico o de audio de lo que ocurría.

Otro tema coincidente que se puede advertir de las distintas declaraciones testimoniales es que efectivamente existía una bolsa de trabajo que era manejada por los directivos del gremio UOCRA; y que a partir de la misma distintas personas han conseguido un puesto de trabajo, conforme lo han señalado los testigos Cristian Vinet, Cesar Augusto Marino, Néstor Iglesias, Gustavo Berdini Becerra, Gerónimo Paoletti, Juan Angel Arrieta, Carlos Aflredo Ferrari, Edgardo Ariel Colombo, Julio Martínez, Fabián Martínez, Miguel Pellegrina y Juliana Pugnanoni, entre otros).

Ahora bien, a un lado este uso legal y correcto de esta mecánica de la bolsa de trabajo como forma de incorporar obreros desocupados a una actividad laboral, se ha observado a partir de la prueba producida que existía también una mecánica mediante la cual, los integrantes de la asociación lograban incorporar gente que respondía a sus indicaciones, en varias de las empresas que se encontraban ejecutando

obras en la seccional; y ello lo hacían con la clara intención de contar con personas que les respondiesen a sus requerimientos para poder facilitar las maniobras delictivas que luego concretaban.

Así, del testimonio del señor Jorge Ferrari surge que el señor Mario Gonzalez le pidió personalmente que incorporase a su hermano en el equipo de trabajo, que le dijo que él respondía por la conducta del hermano, y luego en realidad éste y otras personas más eran el brazo ejecutor de las medidas que mandaban del gremio, que estas personas que habían contratado del gremio llegaban cuando querían a trabajar, no con el resto del personal que iba en las combis, sino más tarde en autos particulares, y que esto era una situación atípica que había que aceptar.

Expuso que fue el hermano de Mario Gonzalez, que le dicen garrafa, otro muchacho Erbín, y otro que habían contratado, todos digitados por el gremio, los que realizaron esa asamblea que duró una semana, por la que tuvo que pagar los dos turnos de sueldo del personal que en definitiva no trabajó.

El testigo Diego Perrín también contó que a Panero le pidieron que ocupe a dos personas del gremio, pero que no iban a trabajar. Que Pablo Gutierrez lo citó en el gremio y le dijo que tenía que echar a determinada gente y poner a los que le indicaba el gremio; que luego por esto dejaron de trabajar en la zona, porque no lo querían hacer.

El testimonio del señor Rubén Almada también da cuenta de estos pedidos, ya que mencionó que luego de la reunión en el gremio, en la cual le solicitaron despedir al personal que tenían y contratar al personal que le indicaban desde la UOCRA, y al comentar esta situación en la obra a su personal, fue que luego le impidieron el ingreso a la planta y desde la empresa le tuvieron que alquilar una oficina para poder seguir cumpliendo con su rol de administrador.

Del testimonio del señor Alejandro Cowper también surge que el señor Guillermo Molina, luego de que Cowper le indicara que no había ningún problema en la obra, y que Molina no le supiese contestar cual era el conflicto en su caso, le dijo que quería que tomara dos personas de la bolsa de trabajo de la UOCRA. Se desprende del testimonio que el señor Cowper explicó que tenía la gente necesaria y capacitada como personal, y no obstante ello que Molina le decía que era condición imprescindible que tomara esa gente.

También se refirieron a esta cuestión los testigos Luis Carcereny, Diego Salguero, Roberto Gaveglio, Néstor Tepliz, Ale Herrera y Manuel Moreno, entre otros, algunos de ellos indicando, tal como lo hicieron los testigos antes apuntados, que el pedido de contratación de determinado personal por parte de los dirigentes de la UOCRA tenía que ver más con contar con un delegado en la obra que realizara actividad sindical, que con que se designase a una persona que no tuviese trabajo en ese momento.

Si bien se puede observar de la prueba producida por las defensas a cargo de los letrados Jara, Gomez Talamoni y Sager, que desde el gremio UOCRA, o algunos de sus integrantes habrían colaborado con personas que tenían necesidades económicas o de salud, o se han realizado actividades como realizar festejos por el día del niño, del obrero de la construcción, u otro tipo de actividades como son charlas de rcp o de control y prevención de enfermedades o de vacunación de los obreros de la construcción; a un lado esta situación, también ha quedado evidenciado que las conductas que aquí estamos analizando eran ejecutadas en provecho personal, sin importar las consecuencias que de las mismas podrían derivarse para sus compañeros de actividad laboral.

Los testigos han coincidido en marcar que si abonaban las sumas de dinero que ilegítimamente les exigían la actividad en las obras se podía llevar adelante sin ningún inconveniente, tanto si existían irregularidades como si no las había.

Señalaron que "…si Molina cobraba su cuota mensual estaba todo bien…" (Manuel Carcereny); "…si no se pagaba se entorpecía el avance de la obra, por el contrario, si se pagaba se trabajaba normalmente…" (Roberto Gaveglio); que luego de que pagaba mensualmente no le pidieron que pusiera a los empleados en blanco, que si andaban en patas no les importaba, si tenían casco o no, no los defendían, no iban a hablar con los obreros (Fernando Schro); que pagó los 5 meses y

no tuvo inconvenientes, que no le hicieron planteo por la situación de los empleados (Martín Sanchez); que Burgos le decía "…Víctor si no pagás te tengo que denunciar…", y que ahí se refería a que faltaba algo o algún empleado que no estuviese en blanco porque recién empezaba a trabajar; que si pagaba no había denuncia, que ese era el comentario de Burgos (Víctor Allende); que siempre había faltante de ropa o medidas de seguridad, pero de lo único que se ocupaban era de pedir plata (Luis Simón); que en la sede Carrillo lo hizo pasar a la oficina y le dijo que si blanqueaba a los chicos le salía plata y que ellos buscaban solucionar de otra forma, si le daba un dinero no le salía más caro (Schro); entre otras declaraciones testimoniales.

También marcaron los testigos que ni siquiera en los servicios que prestaban las empresas de su propiedad o vinculadas a ellos, y que obligaban a contratar, se observaba que tuviesen respeto por sus compañeros de actividad laboral, ya que varios coincidieron al indicar que los servicios de transporte, de viandas o de ropa eran más caros que los prestados por otras empresas, sin que existiese una diferencia en mejor calidad de servicios o de materias correspondientes a los mismos; y que incluso en algunos casos, la prestación era muy deficiente, como acontecía con los baños químicos que alquilaba la empresa Acqua, los que no eran limpiados ni acondicionados debidamente.

Así, el testigo Diego Cerra contó que con los baños de la empresa Acqua que le obligaron a contratar tuvo inconvenientes con la limpieza, que incluso esto se lo manifestó a Rivas, quien era el delegado de Burgos en la zona, refiriéndole que los empleados no estaban contentos. En el mismo sentido el testigo Raúl Porras expuso que los baños de Acqua eran de menor nivel que Bassani, más simples y su mantenimiento era escaso, dado que a diferencia de Bassani que pasaba a limpiarlos una vez por semana, en el caso de Acqua lo hacían cada 15 días o más y la limpieza no era correcta.

Del testimonio del señor Manuel Carcereny surge que la limpieza de los baños de Acqua era incorrecta, habiendo acompañados los correos electrónicos –ya apuntados anteriormente- en los que reclamaba por la limpieza sin obtener respuesta positiva. Dijo incluso el testigo que sus obreros se quejaban, pero que Anibal Aranda, que era el delegado y respondía a Burgos, no hacía ni decía nada.

El señor Julián Allende dijo que el baño de la empresa Acqua que le mandaron a la obra nunca lo fueron a limpiar y que sus empleados decían que era un adorno, que no lo podían usar porque no se limpiaba, por lo que tenía contratado otro baño químico de otra empresa.

El testimonio de Rubén Almada también refleja esta situación, al indicar que las viandas y el transporte eran más caros que lo

presupuestado por otras empresas, sin tratarse de un servicio de mejor calidad. Lo mismo expuso el testigo Hugo Dragonetti y el señor Ale Herrera.

Del testimonio del señor Luis Carcereny surge que el servicio de Acqua era malo, no cumplían con el proceso semanal de limpieza del baño, que ellos reclamaban y no venían.

El testigo Fabián Gurrado contó que al obrero no le daban la chance de recibir el concepto por alimentos en el recibo, que los hacían contratar una empresa, no obstante que a muchos de los trabajadores les interesa que les paguen el ítem y ellos decidir que comen.

Otra cuestión que se puede establecer a partir de la prueba analizada es que no controlaban la documentación del personal, ya que todos los testigos fueron contestes en señalar que cuando eran convocados a la sede del gremio UOCRA y llevaban la documentación de los empleados, la misma no era revisada, sino dejada a un lado y se pasaba a "charlar" otras cuestiones, las que refirieron como el pedido de una suma de dinero, la contratación de empresas o la firma de algún convenio (así, han coincidido en señalar esto los señores Sanchez, Cerra, Gaveglio, Allende, Schro, Carcereny, Moreno, Salguero, Medús, Schlosser, Almada, y otros tantos testigos ya detallados con anterioridad).

Por otro lado, la conducta desplegada por los acusados evidencia una actitud violenta hacia sus compañeros de rubro, dado que han

ejecutado acciones tendientes a evitar la libre asociación sindical, el libre ejercicio de ese derecho que tiene todo trabajador de afiliarse o no a un sindicato, y si decide afiliarse, al que él eligiese.

Lo afirmado surge de lo relatado por el testigo Martín Sanchez, quien contó que Walter Paiz les mandó unos mensajes (reconocidos en la audiencia al serle exhibido el legajo J, hojas 10 y 8), siendo muy demostrativo de lo expuesto el que dice "…están en la empresa los de la contra, sacalos cagando, no les des el listado de personal…".

Esta actitud también se evidencia en lo comentado por el testigo Ale Herrera, quien dijo que lo citaron a la sede de la MUOCRA y ahí, estando junto a los señores Ríos, Gutierrez y Gonzalez, el primero de los mencionados le dijo que tenían que contratar al personal de la bolsa de trabajo que tenía la MUOCRA, que eran ellos, siguiendo los lineamientos de Monteros, quienes ahora manejaban la bolsa de trabajo, y no la gente a cargo del gremio UOCRA, que por ese entonces estaba ya intervenido.

También surge esta información de lo expuesto por los testigos Damián Mayor, Martín Parada, Cristian García, los que fueron contestes en relatar lo que ocurrió cuando integrantes del sindicato SITRAIC, acompañando a una delegación del Ministerio de Trabajo, fueron a realizar unas inspecciones en unas obras, situación en la cual, personal dirigente del gremio UOCRA, junto con varias personas más que se identificaban con ropa del gremio (unas 40 personas más), se presentó en el lugar no para

reclamar por la situación de los operarios (la delegada Molina del gremio suspendió la ejecución de una de las obras por falta de medidas de seguridad), sino para tratar de evitar la intervención de otro sindicato en la ciudad de Bahía Blanca.

Dieron cuenta los testigos de la actuación de los señores Gonzalez, Paiz, Ríos y otros, en estos hechos, evidenciándose una actitud no de defensa del trabajador, sino de su situación como dirigentes sindicales o colaboradores del gremio UOCRA, y en detrimento de la actividad legalmente llevada adelante por otro sindicato.

También del testimonio del señor Martín Parada surge demostrada la actitud de los integrantes de esta asociación criminal, dado que el testigo contó los inconvenientes que tuvieron en la empresa Sidepa, donde varios de los trabajadores se afiliaron al SITRAIC y luego fueron despedidos por la empresa como represalia. Contó el testigo que se presentó gente de la UOCRA, no para reclamar por los obreros despedidos, sino para referirle el señor Erbín bajo amenazas “…que tenían que salir de ahí, que era una quintita de él que manejaba esa empresa, que de ahí comía él como de otras dos empresas, y que si no se retiraba le iba a dar un tiro…”.

Y de la copia de escritura del acta labrada el 29 de junio del 2011, obra de la empresa BGS en la localidad de Suarez, donde se dejó constancia que: "se presentaron en la obra supuestos miembros de la

UOCRA, encabezados por un tal BURGOS, con la pretensión de que nos afiliaramos al sindicato y eligiéramos un delegado, ello a razón de que al no estar supuestamente asesorados y representados por la UOCRA, los empresarios nos incumplen nuestros derechos laborales. Ante nuestra negativa manifiesta, este grupo de personas, todos totalmente extraños a la obra, nos impidieron por la fuerza que sigamos trabajando simulando una Asamblea de la cual no participamos. En síntesis, estas personas no solo se metieron en la obra sin que los convocáramos y obviamente sin autorización de la empresa, sino que nos están despojando de nuestra fuente de trabajo".

De la prueba comentada también surge que esa organización con fines criminales no sólo pretendía concretar delitos que importasen un beneficio personal para el ejecutante o interviniente principal o visible físicamente en los mismos, sino además concretar delitos, conforme las circunstancias se lo fuesen permitiendo, que redundarían en beneficio económico de los jefes de la organización, dueños por sí o por interpuestas personas que también tenían intervención en los hechos delictivos, de empresas que se dedicaban a prestar servicios de transporte, venta de indumentaria laboral, viandas de alimentos o alquiler de baños químicos.

Entre otros, menciono los dichos del testigo Rubén Almada, quien expuso que además les solicitaron utilizar el comedor, el transporte y la ropa de empresas que les indicaron las dirigentes del gremio UOCRA. Un

servicio de catering ubicado en calle Charlone y la empresa Flor de Lirio para el transporte, las que tuvieron que contratar aun cuando se habían evaluado varias empresas de transporte de costo menor.

El testigo Hugo Dragonetti también fue contundente en afirmar que los pedidos de Monteros (sacando la cuestión del incremento salarial para los trabajadores) fueron en su interés personal, no para los obreros, consistiendo entre otras cosas (como los pedidos de suma de dinero y de entrega de materiales de construcción) en la contratación de empresas que ellos les indicaban, las que cotizaban por encima del valor del mercado, para la provisión del transporte de personal (Flor de Lirio), y otra de viandas (Ariel Zaballa).

El testigo Pablo Quantin también contó que tomó conocimiento a partir de su función de presidente de la Cámara de la construcción de que había solicitudes por parte de dirigentes del gremio UOCRA de contratación de determinadas empresas, relacionadas con comidas para los trabajadores, cuestiones de sanidad y baños químicos, transporte de los operarios a las obras, utilización de transportes en las obras.

Por su parte, el señor Ale Herrera dijo que la empresa tuvo que contratar los servicios de Flor de Lirio para el transporte de personal, SGT para la ropa y una empresa de catering, las que incluso cobraban más que otras empresas de esos rubros en plaza.

En el mismo sentido se pronunció el señor Jorge Ferrari, quien contó que los obligaban a contratar las combis de Flor de Liz, la ropa de SGT y las viandas de otra empresa.

El testigo Diego Perrin declaró que en la reunión en el gremio le dijeron que tenía que contratar a una empresas de transporte para el traslado del personal y a una empresa de comidas para las viandas, más una suma de dinero mensual, lo que le comentó al gerente de la empresa CV1 para la cual era subcontratista, y éste tomó la decisión de dejar de trabajar en esta zona correspondiente a la seccional de la UOCRA Bahía Blanca, y continuar realizando su actividad en otra zona de la ruta 3 sur.

El testigo Julián Allende sostuvo que siempre le pedían muchas cosas, entre ellas baños químicos, cuestión que le parecía correcta y bien porque mejoraba las condiciones laborales de sus empleados, pero el problema era que él no había contratado nada y le mandaron a la obra un baño de la empresa Acqua, que era de alguien de apellido Burgos, y luego le quisieron cobrar una suma por ese servicio que era muy alta (casi como el alquiler de una casa, graficó).

También indicó Allende que antes de que esto ocurriese, el señor José Burgos le había dicho que le podía conseguir el baño químico.

El testigo Luis Simón, dijo que a él no le pidieron que contratara baños u otros servicios, pero que sí ha escuchado a otros

constructores comentar de esos pedidos. Que escuchó también que esta gente del gremio tenía servicios de alquiler de baños químicos, y que cuando la obra lo requería había que alquilarle el baño a ellos.

Se sostiene lo que se viene señalando también con el testimonio del señor Fabián Gurrado, quien comentó al declarar que con las obras venía la contratación de la combi, ropa, catering, sino se paralizaba la obra. Que le requerían el sistema de combis Flor de Lirio, las viandas de Eis u otro lugar y los baños Acqua.

Lo mismo indicó el señor Gustavo Evangelista, quien refirió que en el aeropuerto de Espora, donde participaron en una obra en una UTE y en la obra del Procrear en los terrenos del ejército, tuvieron que contratar a la empresa de viandas, el servicio de combis y al de baños que eran propiedad o de amigos de la gente del gremio. Que el servicio de combis lo prestaba la empresa Flor de Lirio, los baños eran de Acqua y las viandas de Eis eventos. Que tuvieron que contratar con estas empresas aún cuando ya tenían contratado otra empresa de transporte y en el caso de baños químicos lo hacían habitualmente con la empresa Bassani (de un amigo suyo desde la infancia).

Señaló también Evangelista que el costo del transporte de la empresa Flor de Lirio era mayor a las de otras empresas.

El testigo Luis Carcereny dijo que les impusieron la contratación de baños Acqua, que tiene entendido que era de la hija de Burgos.

En el mismo sentido se expresó Manuel Carcereny, quien dijo que Cabrera le entregó una tarjetita y le dijo "…acá están los baños…", y eran de la empresa Acqua.

El testigo Carlos Schlosser, también aportó información coincidente con la de las personas que antes mencionara, dado que señaló que a él le intentaron imponer la contratación de empresas de servicios, cuestión que logró evitar porque era sub-contratista. Aportó como dato que en las conversaciones de la cámara de la construcción, de la cual participaba, varios empresarios mencionaron que sufrían presiones para contratar una determinada empresa para el transporte de personal, alquiler de baños y comida del personal.

El testigo Diego Cerra dijo que le exigieron contratar los baños de Acqua, que sabe que eran de la hija de Burgos, por la facturación. Dato este corroborado por el señor Raúl Porras, empleado Cerra y Moro, quien sostuvo que siempre tenían contratada a la empresa Bassani para la provisión de baños, pero en esa obra tuvieron otro servicio, algo como Eco, que eran baños plásticos químicos pero de menor nivel que Bassani, más simples y su mantenimiento era escaso.

Conforme la documentación que obra en el expediente, y de la que ya hemos dado cuenta anteriormente, surge probado que las empresas SGT S.R.L. y Flor de Lirio S.R.L. eran manejadas por la esposa del señor Humberto Monteros y uno de sus hijos, y la empresa Acqua era de familiares del señor José Burgos.

Lo expuesto surge, entre otras constancias, por lo señalado por los testigos, correspondiendo aquí recordar que el señor Julián Allende dijo que respecto del baño químico que le mandaron de la empresa Acqua, con la cual no realizó contratación alguna, le fue reclamado el pago por una persona de apellido Burgos.

El testimonio del señor Hugo Dragonetti resulta contundente sobre el particular, dado que expuso que, además de tener contratadas las empresas que se vienen mencionando por exigencia del señor Monteros, fue a estas mismas empresas que hacían las transferencias por sumas de dinero exigidas también por Monteros a cambio de poder seguir trabajando sin inconvenientes, y estas empresas facturaban por servicios que no prestaban, para que la empresa que dirigía el señor Dragonetti, pudiese justificar las salidas de dinero requeridas por Humberto Monteros.

El testigo Ale Herrera corroboró lo señalado por Dragonetti, a la vez que agregó que la señora Sanabria (de las empresas SGT y Flor de Lirio) también le decía donde debían entregar los materiales de construcción que eran solicitados por Humberto Monteros para sí. Expuso que Flor de

Lirio era de Monteros y Acqua de Burgos o gente de su familia porque tenía contacto con las hijas del mismo.

El señor Fabián Gurrado dijo que Flor de Lirio es de Monteros, Acqua es de Burgos o alguien de su familia y el de las viandas desconoce.

El señor Gustavo Evangelista refirió en la audiencia que no sabe de quienes eran Flor de Lirio y Eis, pero que sí sabe que Acqua era de Burgos o vinculada al mismo.

También de suma contundencia en lo que respecta a la prueba testimonial resulta lo señalado por el señor Diego Cerra, por cuanto contó que cuando el señor José Burgos le exigió la entrega de un dinero para la campaña eleccionaria y él le contestó que no podía, que se le dificultaba por la cuestión contable, para tratar de evitar tener que aportar dinero, fue ahí que Burgos le ofreció hacerle una factura de la empresa Acqua. Situación esta que se acredita con la documentación obrante como hojas 29/30 del legajo fiscal H, en las que se observa la factura y el cheque al que hiciera referencia el testigo, por un monto muy superior al correspondiente al alquiler de un baño químico, el cual por esa época rondaba los 1.500 pesos mensuales y el cheque es por la suma cercana a los 15.000 pesos, que fuera la cifra exigida por el señor Burgos.

El testimonio del oficial Irigoyen y el informe de fs. 668/680, el anexo fotográfico y documental de fs. 681/720 y el informe de la

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial - Departamento de casos especiales, de fs. 828/905 del legajo fiscal principal se corresponde con lo relatado por los testigos antes valorados, pudiéndose observar la documentación de fs. 675/677 que utilizara el testigo para vincular a las empresas Flor de Lirio y SGT y la señora Sanabria y el señor Monteros.

De contundencia resulta el informe de la perito Contadora María Agustina Tennina, quien analizó la información remitida por la AFIP y pudo establecer, entre otras cuestiones de interés, que el señor José Burgos tiene domicilio fiscal en calle Rio Atuel 780 de Bahía Blanca y que es integrante de la Asociación Mutual Construcción Solidaria; que la señora Estefanía Burgos tiene domicilio fiscal en Rio Atuel 780, integra la sociedad Acqua Servicios SRL y además es socia de la Asociación Mutual Construcción Solidaria y ha sido dependiente de la UOCRA desde el 07/2001 al 10/2013; que la señora María Laura Burgos tiene domicilio legal en calle Rio Atuel 780 y está en relación de dependencia de la UOCRA desde el 06/2010 al 01/2017; que la señora Analía Belen Burgos tiene domicilio legal en Rio Atuel 780 e integra la sociedad Acqua SRL; que el señor Nahuel Eduardo Burgos tiene domicilio legal en Rio Atuel 780 e integra la sociedad Acqua SRL; que la empresa Acqua Servicios SRL tiene domicilio legal en calle Rio Atuel 780 encontrándose relacionado el CUIT de la sociedad con el de las señoras Estefanía, María Laura y Analía Burgos y con el señor Nahuel Burgos.

Del informe contable surge también que la señora Lucía Teresa Sanabria tiene domicilio legal en calle Teniente Farias 2947 de Bahía Blanca e integra las sociedades SGT Soluciones en Grupos de Trabajo SA y Flor de Lirio SRL. Luego se encuentran detallados que informó dos lotes de terreno, 3 casas, un automóvil, un cuatriciclo y dos furgones marca Mercedes Benz.

Se detalla que respecto de la sociedad Flor de Lirio SRL surgen como integrantes la señora Lucía Teresa Sanabria, el señor Raúl Agustín Sanabria y el señor Matías Juan Monteros, siendo la misma titular de 15 vehículos.

En relación a la empresa SGT Soluciones en grupos de trabajo SA se menciona que tiene el mismo domicilio fiscal que Flor de Lirio SRL en calle Donado 1970, estando integrada por los mismos tres socios que integran Flor de Lirio SRL, con más el señor Víctor Roman Sosa Rivero; siendo titular la sociedad de 14 vehículos.

También la prueba analizada permite establecer que, por otra parte, el costo de estas empresas, en muchos de los casos, conforme lo indicaron los testigos y el informe de la perito Contadora era superior a lo que cobraba por un servicio similar otra empresa del rubro.

Así lo expuso el testigo Julián Allende (“lo llamó esta persona reclamando el pago del baño era un costo elevado, no recuerda la cifra, le pedía un valor similar a alquilar la casa del vecino”), los señores Carcereny,

Gurrado, Evangelista, Schlosser, Almada (quien comentó que el costo de las viandas y del transporte eran un 200 por ciento arriba de lo que cotizaban otras empresas, que Flor de Lirio cotizaba a 1500 cuando otras lo hacían a 500, y las viandas eran 120 el costo afuera de la planta y a ellos les salían 250 pesos).

Nada de este cuadro probatorio se desdibuja con la restante prueba producida en la audiencia.

Así, el testigo Andrés Darío Altamirano no aportó mucho para este proceso, contó los problemas de su gremio de ladrilleros, dijo que le van a armar una causa –sin explicar mucho sobre el particular-; y en lo que aquí interesa expuso que Molina es una persona honesta.

Luego habló de su gremio, que estaba agradecido con la gente de la UOCRA porque le dieron trabajo a su hija mientras estudiaba en la universidad, y hoy se pudo recibir como abogada y es la encargada de la obra social del gremio de ladrilleros, el cual el declarante conduce desde el año 2012 aproximadamente, cuando lo nombraron interventor.

Expuso que sabe que el gremio UOCRA ayuda a gente con bolsas de comida, medicamentos, garrafas, para pagar la luz.

El testigo César Farias sólo aporta que tenía amistad con Molina y que éste era el que reemplazaba a Monteros por la UOCRA en las reuniones de la CGT.

Igual surge del testimonio del señor Néstor Iglesias, quien señaló que en la CGT a la UOCRA la representaba Monteros y Molina, que también tenía participación activa.

La testigo Melina Rebollo corrobora que la UOCRA participaba de la CGT. El Secretario General era Monteros y cuando no estaba iba Molina, y que esto era la mayoría de las veces.

Por otro lado resulta de interés que comentó que nunca recibió amenaza o situación intimidante por ser delegada sindical; y que no recuerda que ningún compañero planteara en la CGT algo así.

Se destaca de este testimonio que comentó que cuando hacían medidas de fuerza en el ANSES, antes de ejecutarlas, se advertía a la patronal que se iba a realizar y se informaba al Ministerio de Trabajo, dado que es obligación de los gremios informar las medidas que se van a llevar a cabo.

El testimonio del señor Cristian Gabriel Jesús Vinet solo aporta que recibió ayuda del gremio por un inconveniente con su hija, y que a Molina lo escuchó mencionarlo al testigo en una conversación telefónica.

Luego desconoció lo relatado en la denuncia de la cual reconoció la firma al serle exhibida por el Agente Fiscal y en la cual habría denunciado a los integrantes de la UOCRA por distintos inconvenientes.

Con el testimonio del señor Hernán Segundo Ulloa Sepúlveda se puede establecer que recibió ayuda del gremio UOCRA, que se la alcanzó Molina, para comprar medicamentos para su hija.

En similar sentido lo relatado por el señor Fredy Ernesto Arias, quien también contó que recibió ayuda del gremio, que se la alcanzó Molina, dándole algo de mercadería y 5.000 pesos por mes.

El señor Juan Angel Meli con su testimonio expuso sobre la ayuda de Molina en las cuestiones laborales y reclamos que debían efectuar, para hacer las notas que tenían que presentar en el Ministerio de Trabajo.

Lo mismo el testigo Roberto Antonio Limpiante, quien recordó la ayuda de Molina en cuestiones de relación laboral y para asistir a compañeros con necesidades.

El testimonio del señor Fabián Patricio Martinez, también dio cuenta de esta situación, dado que dijo que como él era nuevo en esto de la actividad gremial que desempeñaba en la zona de Patagones, consultaba con Bahía Blanca, con Molina, que era quien estaba a cargo de la zona de Villarino hasta Patagones. Que siempre le preguntaba por las leyes gremiales, dado que si bien le daban lo del artículo 9, “como uno tiene un jefe hay que dirigirse siempre a él, no tomar decisiones sin ser aprobadas por quien es su jefe” –graficó-.

El testimonio del señor Leandro Fabián Andrés Martinez solo indica que trabajó para Coince, sin ningún inconveniente, y que participó de festejos por el día del niño, habiendo colaborado los trabajadores para que los chicos recibiesen algún obsequio.

La testigo Carolina Tevez, enfermera, demuestra que trabajó en el móvil sanitario y le pagaba Molina.

El testigo Ignacio Jerónimo Caspe sólo sirve para probar que Molina solicitó en la municipalidad ayuda social para trabajadores desocupados, que se dio asistencia a través de bolsones y luego se dio trámite para verificar la situación de las personas mencionadas y asistirlas –en su caso- por parte del municipio.

Con los dichos del señor David Roberto Revale, quien mencionó que habló con Molina por el tema de las tierras para el barrio de viviendas del gremio UOCRA, se puede observar que el mencionado se ocupó de parte de esas gestiones.

Varios testigos respondieron las reiteradas consultas del doctor Jara sobre los festejos por el día del niño, recordando muchos de ellos ese evento realizado en la localidad de Pedro Luro y en Bahía Blanca (testimonios de Leandro Fabián Andrés Martinez, Hernán Segundo Ulloa Sepúlveda, Fabián Patricio Martinez, Mauro Suazo, Gabriel Martin, Cristian

Gabriel Jesus Vinet, César Henriquez, Ricardo Rebolledo, Juan Angel Meli, Roberto Antonio Limpiante, entre otros).

Ahora bien, a un lado que ninguna persona cuestionó la ejecución de ese evento festivo, ni señaló haber sido coaccionada, amenazada u obligada de alguna manera para efectuar un aporte para ese evento, lo que debe quedar en claro es que no se está analizando la actividad gremial del señor Molina y de los restantes acusados. Si se ocupaba de la salud de los trabajadores con el móvil sanitario, de los niños con los festivales, de las viviendas de los afiliados, de la situación por la que atravesaban afiliados desocupados, no es una cuestión pertinente y central en este proceso. No se está decidiendo si fue o no un buen dirigente sindical en cuanto a opinión que merezca formarse del mismo quienes estamos trabajando con este proceso penal.

No importa la opinión que merezca su actuación como dirigente sindical o político, ni su ideología o compromiso social, al menos en lo que respecta a la cuestión de fondo sobre las conductas puntuales materia de acusación y configurativas o no de delitos; para lo cual poco importan las opiniones personales que puedan tener distintas personas respecto del señor Molina en esos temas que antes mencionáramos.

Si estas personas no conocen nada de los sucesos que se están analizando, más allá de eventualmente aportar elementos para establecer el concepto personal que merezca el acusado (como por ejemplo

el testigo Guillermo Gustavo Gregorio), en nada pueden contribuir para decidir respecto de la materialidad de los hechos, y la intervención del mencionado en los mismos, salvo en los datos que antes se destacaron y que se pueden extraer de esa prueba.

El testimonio del señor Cesar Augusto Marino junto con los testimonios de Néstor Iglesias, Gustavo Berdini Becerra, Gerónimo Paoletti, Juan Angel Arrieta, Carlos Aflredo Ferrari, Edgardo Ariel Colombo, Julio Martínez, Fabián Martínez, Miguel Pellegrina y Juliana Pugnanoni, sirven para establecer que a distintas personas se les han solicitado por parte de los aquí acusados la contratación de obreros incorporados en el listado de la bolsa de trabajo del gremio, y también colaboraciones para el día del niño, o distintas fiestas, sin haber tenido ningún tipo de conflicto ante esas situaciones, sin haber sido obligados a hacerlo.

Tampoco dieron cuenta estos testigos de algún trato incorrecto, irregular, anormal o ilegal por parte de los aquí acusados; habiendo comentado incluso algunos de ellos que lo que hacían los sindicalistas les parecía correcto.

Los testigos han coincidido en marcar que algunas cuestiones que se charlaban o discutían con la gente de la UOCRA eran normales por la actividad, más allá de la posición de cada parte sobre el punto, y las

consecuencias que para las economías de las empresas o el bolsillo del obrero pudiesen importar.

Dejaron en claro que no veían mal que se reclamase por las cuestiones de seguridad, higiene o por salarios, o por procurar mejores servicios para los trabajadores.

Así lo han expuesto, entre otros, el señor Pablo Quantin, quien expresó que hay solicitudes que son por encima de los convenios colectivos homologados, y en eso las conversaciones de la UOCRA y los empresarios están todo el tiempo presentes, se consulta lo que pide el gremio para sus afiliados y en algunos casos se accede, pero un aumento salarial no sucede en la totalidad de los casos, hay jurisdicciones que lo hacen y otras que no.

Dijo que en cuanto a los salarios lo que no se compartía era lo ilógico del porcentaje que se pedía como aumento, no una mejora salarial en sí; pero que sí había otros puntos de conflicto distintos, por más que se arreglase lo del sueldo, que era que no se quería acceder a la contratación de determinados operadores de servicios o pagar sumas de dinero.

También el señor Hugo Dragonetti dijo que en el primer momento la discusión de la mejora salarial le pareció algo normal, que era posible discutir una mejora salarial por encima del convenio colectivo nacional, y eso podía considerarse como algo propio de la actividad gremial, aunque fuese un reclamo de algo que estaba por encima de lo pactado a

nivel nacional. Pero aclaró que otras cuestiones no se manejaban así, que no se reclamaban cuestiones que tenían que ver con lo laboral, sino en interés personal de gente del gremio.

Néstor Teplitz dijo que en su empresa nunca se opusieron a charlar por mejorar un salario, que consideraban al convenio nacional un piso y no un techo, pero que lo que siempre le indicaban a la gente del gremio era que ellos tenían que tener las reglas de juego claras y previstas antes de cotizar, porque en la obra pública no se podía modificar luego estas variables.

El señor Julián Allende, por su parte sostuvo que siempre le pedían muchas cosas, entre ellas baños químicos, que esto le parece bien para las condiciones laborales de un empleado, por lo que no había problema.

El señor Luis Medús señaló que con el gremio tenía una relación normal, y que veía bien los intereses de ellos al velar por sus compañeros de rubro.

El señor Jorge Ferrari contó en la audiencia que hubiese colaborado con el gremio cuando así se lo solicitaron y ofreció hacerles una cámara frigorífica para que la disfrutasen los asociados, aunque luego aclaró que no era esto el dinero que pedían y el destino del mismo.

Del testimonio del señor Fabián Gurrado se desprende que en su caso, en su empresa, había pedidos que se le efectuaban como ser elementos para la época escolar o el día del niño, que eran aportados por ellos como uso y costumbre. Lo mismo apuntó Manuel Carcereny, quien dijo que han colaborado para fin de año, o para algún festejo y no tuvieron presión en eso.

También se desprende de los distintos testimonios que en muchas situaciones no había inconveniente en contratar el personal que les era ofrecido de la bolsa de trabajo del gremio. Así lo sostuvo entre otros el señor Roberto Gaveglio, quien expuso que los contrataban de ese lugar cuando con su equipo de personal permanente no les alcanzaba.

Lo mismo dijeron los Carcereny, que contrataban del personal de la bolsa, pero no veían mal esta situación aunque sólo fuesen personas afiliadas a la UOCRA. Que ellos igual mantenían su plantel de personal habitual porque eran los capacitados para el manejo de las máquinas.

Esto demuestra que no cualquier planteo del gremio era una extorsión, no lo entendían así, ni se han confundido los testigos.

Lo relatado por ellos evidencia que la situación era distinta según las obras, según quien fuera el interlocutor, y lo que solicitaran y la forma de hacerlo.

A algunos les ofrecieron servicios de determinadas empresas, y más allá de que pueda considerarse que éticamente esto estaría mal, al usar el gremio para hacer propaganda o beneficiar a su empresa y a sus familiares, en esos casos no habría delito alguno.

Ahora bien, esta situación, no lleva a descartar la existencia de los hechos que aquí se están analizando. Que una persona se comporte correctamente durante gran parte de su vida, no lo desvincula por esa sola circunstancia de situaciones puntuales, en las que pudo no haber ajustado su conducta a la norma debida, y afectado con su accionar bienes jurídicos protegidos por el Código Penal.

De otra parte, algunos testigos también han expresado que todo es muy similar a como era antes de las detenciones de los aquí acusados, en cuanto al trato con la UOCRA, los convenios y demás que se firman y la actitud del sindicato (Eduardo Jesús Chute, Paoletti, Arrrieta, Julio Martinez –en parte-, Edgardo Ariel Colombo, Gabriel Martin, César Henriquez, Marcelo Cerri, entre otros), y, por otro lado, otros testigos han dicho que se han alejado del gremio, que no los representa, que no han obtenido más premios o beneficios y no se han realizado fiestas (Julio Martinez, Fabián Martinez, Ricardo Ángel Ismael Rebolledo, Mauro Suazo, entre otros).

Esto demuestra solo que existen opiniones encontradas, según las personas que declaren, y lo que tengan en cuenta sobre la gestión

sindical anterior o posterior a las detenciones; pero en modo alguno permite afirmar, como lo pretendían algunas defensas como teoría del caso, que todo este proceso se trata de una mentira en la que se han puesto de acuerdo distintas personas para perjudicar específicamente a los aquí acusados, apartándolos de la actividad gremial en perjuicio de los trabajadores y en beneficio económico de los testigos que habrían mentido y que se habrían beneficiado por ser empresarios.

No se ha demostrado en modo alguno la existencia de una persecución hacia los acusados por parte del poder político.

Por el contrario, la propia prueba producida por el doctor Jara, a cargo de la defensa del señor Molina, ha descartado la posición sostenida por esa parte. Así, el señor Paoletti dijo que no participó de una reunión multisectorial en la que se trató este tema antes de las detenciones; y que no recibió invitación para formular una denuncia contra la UOCRA.

La testigo Pugnanoni indicó que no la llamaron para denunciar, ni de la Cámara de la construcción, ni una persona en particular, y que tampoco la invitaron a participar de la cámara.

El testigo Edgardo Colombo le respondió al doctor Jara que no lo invitaron, ni lo llamaron, para formular una denuncia parecida a la de esta causa.

La señora Melina Rebolledo dijo que no recibió amenazas por ser dirigente sindical, ni nadie le comentó haberlas sufrido.

El testigo Carlos Alberto Ferrari, al ser consultado por si existió una orden de la política para contra la UOCRA, respondió que le parece que lo que vino a posterior, en los últimos 4 años de Macri, donde 25.000 pymes se fundieron, desaparecieron de la república Argentina, afectó a la construcción que mueve mucha gente, y todo tiene que ver con todo, fue una situación que se vivió en el país, desde su punto de vista horrorosa y fue intencional, no hubo defensa del mercado interno. Pero agregó que no obstante no puede decir ni certificar si había intencionalidad con esa dirigencia de la UOCRA hoy detenida.

Y el señor Walter Larrea, concejal del Frente de Todos, señaló que no puede afirmar que sea Molina destacado por la nación o provincia como opositor, indicándole a la consulta del doctor Jara, que no le consta como funcionario la existencia de persecuciones políticas en perjuicio de alguna persona.

En lo que respecta a los dichos del doctor Diego Cerniesky, quien opinó que su conclusión fue que no existía una asociación ilícita, y que llegó a esa conclusión por el contexto socio político del momento que era de clara persecución política al sindicalismo y movimientos sociales vinculados al kirchnerismo; corresponde señalar que se trata sólo de eso, de una opinión, dado que se puede observar de su testimonio que si bien indicó que

realizó una investigación por su cuenta (no vimos esa prueba), lo cierto es que dijo que se basó en los diarios, en averiguaciones que efectuó por internet, ya que sólo vio la causa el día de la detención de los acusados, cuando se entrevistó con una secretaria del Ministerio Público quien le facilitó una copia de los hechos que eran materia de acusación. Dijo que no habló con los denunciantes, no consultó la prueba testimonial de la causa, no leyó las explicaciones de los acusados, ni leyó la causa.

De forma hasta poco seria, le señaló al Agente Fiscal en el debate que no concluyó lo mismo que él, que en su opinión no había asociación ilícita, sin siquiera haberse interesado por observar la prueba colectada por el representante del Ministerio Público Fiscal, al menos hasta el momento de las detenciones, única oportunidad en la cual afirmó el testigo que fue a la fiscalía para hacer averiguaciones (con el alcance antes indicado).

Sostuvo el testigo que llegó a esa conclusión al observar que las licitaciones eran ganadas por las empresas de Bahía Blanca, que eso lo extrajo de la página gobierno abierto del municipio; y se advierte de toda la prueba que venimos analizando que los hechos se constataron tanto en obras de licitación del municipio de Bahía Blanca, como en obras de licitación por parte de la provincia, obras de la nación, obras particulares, y en otras localidades distintas a las de Bahía Blanca (Coronel Suarez, Pedro Luro, Patagones, etc.).

Y a todo esto debe sumarse lo expuesto por los restantes testimonios antes analizados, en los que las distintas víctimas de diferentes hechos, muchas de las cuales no tienen ningún tipo de conexión entre sí, salvo la dada por el rubro en el cual se desempeñan, han expuesto que nadie les dijo lo que tenían que decir, que no se pusieron de acuerdo para formular denuncia alguna, y que sólo contaron lo que habían padecido ante el llamado del Ministerio Público Fiscal para prestar declaración testimonial aportando en algunos casos documentación respaldatoria –incluso de antigua fecha- de lo por ellos relatado.

Varios testigos se han expresado también sobre la existencia del móvil sanitario de la UOCRA. Puntualmente la señora Gloria Viviana Sauma dijo, en su rol de empleada administrativa de la UOCRA, que no pagaba el móvil sanitario, los gastos por las fiestas del día del niño, ni sueldos de enfermeras, las que no estaban en relación de dependencia con el gremio; que de eso se ocupaba el señor Molina.

La señora Tevez dijo que trabajaba como enfermera en el móvil sanitario y que su sueldo se lo pagaba Molina.

Algunos testigos vieron el móvil sanitario, otros sabían de su existencia; pero la verdad es que poco se puede extraer de esta prueba producida con relación al móvil sanitario. Lo único cierto es que quedó demostrado que el señor Molina no cumplía con la legislación laboral en lo

que respecta a la remuneración que le debía abonar a las personas que trabajaban en el mismo.

El propio acusado lo deslizó sin querer al tiempo de declarar, y también lo demuestra lo expuesto por la testigo Sauma, quien dijo que de esos gastos se ocupaba Molina, que no eran gastos que estuviesen en la actividad administrativa del gremio, de la cual ella estaba a cargo, según las partidas que les remitían desde sede central; y la enfermera Carolina Tevez, quien dijo que a ella le pagaba el señor Molina, quien por ese entonces no tenía una empresa o no dirigía una razón social en la que tuviese personal a su cargo.

Sobre esto Molina habló de retribución, no de sueldo aclaró, como si las retribuciones no mereciesen registración.

Los testimonios de los señores César Farías y César Marino, con más lo expuesto por la testigo Melina Rebolledo, y lo coincidentemente señalado por varios de los testigos ya analizados, permite evidenciar que Guillermo Molina era uno de los que reemplazaba a Monteros cuando el mencionado no estaba en la ciudad de Bahía Blanca.

Se observa así que la prueba permite reconstruir la existencia de la decisión común de varias personas (más de 14), dirigidas en un primer momento por quien revestía la condición de Secretario General del gremio UOCRA, y luego de forma conjunta con este Secretario General por otras

dos personas más, de integrar un grupo que a través del transcurso del tiempo tenía la intención de incurrir en conductas ilícitas, realizando los sujetos aportes concretos para la concreción de esa asociación, conforme lo indican las conversaciones, reuniones, divisiones de tareas y demás cuestiones ya apuntadas. Se agruparon y formaron ese vínculo especial que requiere el tipo penal de querer integrar esa asociación de forma permanente (la prueba los ha posicionado con distintos aportes a lo largo del tiempo), organización que tenía fines ilícitos.

Como vemos con la prueba producida, la forma de obrar de los distintos acusados en este proceso, como así también parecerían haberlo hecho otras personas cuyas conductas no estamos analizando aquí, resultaría similar y coincidente, como prácticas habituales y mecánicas de obrar que habrían sido coordinadas, acordadas, pautadas por los integrantes de la asociación, como medios de ejecución en los distintos hechos ilícitos que han ido ejecutando a lo largo del tiempo.

Los relatos de los distintos damnificados, como así también, de las personas que presenciaron las maniobras, resultan coincidentes al exponer la forma en que se concretaban los hechos; como con una supuesta inspección inicial, visita a la obra, se les informaba que no podrían continuar si no se presentaban en el gremio, y ya en la sede del mismo, en una oficina en soledad, una persona dirigente gremial o colaborador, les solicitaba la entrega de una suma de dinero por mes, mientras durase la

obra, y, en algunos casos, otros pedidos más, relacionados con la contratación de determinadas empresas o la concertación de convenios laborales.

Lo que permite evidenciar esto, junto con los restantes elementos probatorios antes mencionados, es que existía una comunión entre los integrantes de la asociación, demostrando esto que el acuerdo para conformar una organización para cometer delitos existía, estaba vigente, y ellos querían integrarla.

La organización comenzó a operar bajo la dirección del señor Monteros con posterioridad al año 2005, fecha en la cual éste pasó a desempeñarse como Secretario General de la UOCRA, habiendo acordado con distintas personas formar una organización que procuraría la obtención de beneficios económicos personales a través de la comisión de delitos según las circunstancias se fuesen presentando, como así también, lograr mantenerse en el poder como integrantes de la comisión directiva gremial, también mediante la concreción de delitos cuando esto fuese necesario.

Con la prueba que se viene analizando se puede concluir que luego del 2005, tras ganar las elecciones para integrar la dirección del gremio de la UOCRA en Bahía Blanca, más de tres personas acordaron conformar una organización para cometer delitos, cuando las circunstancias

se lo permitiesen, aprovechándose para ello, entre otros medios, de su condición de dirigentes gremiales.

Esta organización fue integrada por distintas personas, en distintos momentos, siempre bajo la dirección del señor Humberto Monteros, habiéndose incorporado en el extenso tiempo en que la misma duró (al menos hasta la detención de las personas que fueran luego acusadas en este proceso, en el año 2018), otras personas, algunas de las cuales pasaron a ocupar también el rol de jefes de la organización.

Así, claramente se puede advertir que la prueba permite demostrar que durante los últimos años de la organización, con posterioridad al 2010, dos personas pasaron a revestir el papel de jefes junto a Monteros, para dividir sus funciones y por los inconvenientes de salud que aquejaban al mencionado, por los cuales tenía que trasladarse a la ciudad de Buenos Aires.

Se conformó por esa época un triunvirato a cargo de la dirección de la asociación, encargándose una de las personas de la zona de Coronel Suarez y partidos aledaños, y la otra de la zona sur de la seccional, esto es, partidos de Villarino y Patagones, dividiéndose además la zona de la ciudad de Bahía Blanca, junto con otros sujetos.

La idea de la organización era de acordar voluntades hacia la comisión de delitos, entre ellos, algunos que redundarían en beneficio

personal o de familiares o personas allegadas, y otros de los que resultarían beneficiados terceras personas, pero con la clara intención de que la satisfacción que el beneficio pudiese aportar a los terceros, redundase en beneficio colateral para los integrantes de la organización, al conseguir ser reelegidos en sus cargos de dirigentes sindicales, y así tener una mejor posición para intentar concretar nuevos delitos.

La prueba demostró que para las épocas de las elecciones se cometían delitos para recaudar fondos para la campaña (cheque del señor Cerra entregado al señor Burgos contra facturación de la empresa Acqua), o para que los eventuales votantes recibiesen un premio en dinero (hecho número 21 materia de acusación fiscal) o se considerasen amparados por una buena gestión sindical que había mejorado un predio o realizado agasajos festivos (la fiesta del día del niño, por ejemplo, sobre la cual tanto consultó el doctor Jara).

Con los elementos analizados se ha podido establecer que esta organización tenía una gran cantidad de miembros, varios más que los que fueron acusados en este proceso, que querían integrar la misma y que luego han desempeñado distintas actividades y ejecutado conductas en los distintos hechos delictivos que en definitiva se han concretado por parte de quienes la integraban, y dentro del marco de esa finalidad criminal que los agrupó.

La prueba demuestra que si bien no todos participaban en todos los delitos que al menos han sido materia de acusación en este proceso –algunos no analizados en este debate porque han sido materia de intervención de otros Jueces en los trámites de juicio abreviado acordados por los otros 8 acusados-, sí existía una especie de plan, de modalidad para la ejecución de los hechos, con clara división de roles, adoptando mecánicas comunes de forma de obrar para tratar de no ser descubiertos, ni denunciados.

Es por todo lo que se viene analizando que entiendo demostrado que desde el año 2.005 hasta el año 2018, en esta ciudad de Bahía Blanca, y con la finalidad de actuar también en localidades vecinas, más de 14 personas, algunas de las cuales revestían la condición de dirigentes sindicales del gremio UOCRA, o colaboradores del mismo, en la seccional correspondiente a Bahía Blanca y delegación de Coronel Suarez, conformaron una agrupación con la intención de cometer delitos indeterminados, conforme las circunstancias se les fuesen presentando, con la intención de beneficiarse personalmente en lo económico, y para conservar el poder dentro del gremio en el cual actuaban, acordando brindar aportes para intentar o concretar los mismos (hecho número uno).

Entrando a analizar la acusación fiscal en cuanto al hecho identificado como número 2, y como forma que repetiré en los distintos hechos que se irán analizando, voy a recordar la descripción dada al mismo

por el Ministerio Público Fiscal. Detalló esa parte lo siguiente: Entre los meses de enero y marzo de 2016, cuando el señor JULIÁN ALEJO ALLENDE -empresario dedicado a la realización de obras civiles- se encontraba construyendo un galpón para la futura instalación de un supermercado, ubicado en la calle Alemanes del Volga s/número del Pueblo San José (Colonia 2) del Partido de Coronel Suárez, los integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, señores NELSON DAMIÁN CABRERA y ANIBAL ALEJANDRO ARANDA (Delegado Gremial y Primer Vocal Suplente, respectivamente), se constituyeron en dicha obra y, luego de realizar una supuesta inspección, le exigieron al señor ALLENDE que se presente en la sede del sindicato, advirtiéndole: "vamos a llegar a un arreglo porque así no podés trabajar".

Cumpliendo con el requerimiento, el señor ALLENDE se constituyó en la sede gremial -sita en calle Hipólito Yrigoyen N° 701 -entre calles Sixto Rodriguez y Sargento Cabral- de la localidad de Coronel Suarez-, donde CABRERA y CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplente), lo recibieron e indicaron que debía reunirse con el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la UOCRA, a cargo de la Delegación Coronel Suárez).

Posteriormente, el señor JULIÁN ALEJO ALLENDE, acompañado por la señora NANCY GARCÍA -maestro mayor de obras a cargo de la construcción-, fueron recibidos en la entidad obrera por el señor

JOSÉ BERNARDO BURGOS, quien le exigió al empresario el pago de la suma de DIEZ MIL PESOS, como condición para que la referida obra pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Así también, durante dicha reunión, BURGOS EXIGIÓ a ALLENDE que contrate el servicio de BAÑOS QUÍMICOS para la obra a la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." (con domicilio en calle Río Atuel 780 de esta ciudad).

Con posteridad, se presentaron en varias oportunidades en la obra los señores CABRERA y ARANDA reclamando el dinero espuriamente exigido por BURGOS, y ante la negativa de ALLENDE a cumplir con la indebida exigencia, paralizaron la obra con la colaboración de otras personas, mediante actos violentos e intimidantes como el encendido de cubiertas, que impedían continuar el normal desarrollo de las tareas laborales. Dicho proceder continuó durante el plazo de tres días, hasta que el señor JULIÁN ALLENDE -padre del damnificado- formuló la respectiva denuncia penal.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y

personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir que la empresa cumpliera con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

En lo que respecta al hecho individualizado como número dos en la acusación fiscal entiendo que el mismo se encuentra parcialmente acreditado con la prueba producida en el debate oral.

Comienzo computando el testimonio del señor Julián Alejo Allende quien declaró que conoce al señor Burgos de la localidad de Coronel Suarez, por su actividad como constructor, rubro en el cual está desde muy chico, dado que va a las obras desde los 15 años para acompañar a su padre (Víctor).

Mencionó que habitualmente contratan a los mismos empleados, con los que realizan contratos temporales, dependiendo de la magnitud de la obra. Que en el año 2015 o 2016, no lo puede precisar bien, estaban haciendo un tinglado tipo galpón para un supermercado chino en la Colonia n° 2 cercana a Suarez, que era una obra grande de 600 metros cuadrados. Que ahí comenzó a advertir que la gente de la UOCRA se acercaba a la obra y pedía hablar con él, que uno de ellos era el delegado Damián Ezequiel Cabrera –si no recuerda mal su nombre- a quien conocía de la localidad de Suarez, ya que es una comunidad de 38.000 habitantes.

Que en un principio el diálogo con Cabrera era tranquilo, no había punto de violencia, que iban a ver las condiciones de la obra. Que le llamó la atención que pedían hablar con él permanentemente, que el declarante les decía que tenían que hablar con los empleados, que ellos les iban a comentar si tenían algún problema, que tenían que defender al trabajador; acotando que no observó ni tuvo conocimiento de una charla previa con sus empleados por parte de gente de la UOCRA.

Señaló que con sus empleados, en la mayoría de los casos, tiene un vínculo excelente, que come asados, juega a la pelota, dado que los conoce desde siempre, porque trabaja con gente que siempre ha estado vinculada a él y su padre, y son de la localidad.

Indicó que Cabrera le hablaba de reuniones por condiciones laborales de los empleados y como buscando llegar a un arreglo, que era como que querían que pasase algo, un soborno, una plata para poder trabajar tranquilo.

Señaló que tuvo encuentros ocasionales en otras obras, como en el barrio del polo, donde hay un club de polo y se construían viviendas. Que había mucha cantidad de obras, estaba lo del procrear y se habían iniciado muchas obras, por lo que no recibía visitas del gremio seguido porque tenían muchas obras para andar visitando. Que fue así que en la obra del barrio del polo cortó la relación con ellos, les dijo que ya no tenía que hablar con ellos. Que ahí terminó la obra del polo y empezó la del

supermercado. Que los contactos que tuvo en otras obras no llegaron a mayores, ni pasó nada. Que con sus empleados arregla en la obra, que “labura” con ellos revocando una pared en un andamio y en otras tareas, y luego en el obrador salían las cuestiones y se arreglaba, no intervenía el sindicato.

Refirió que a principios de año, verano, hacía calor y sería enero o febrero, fue que comenzó con el replanteo de la obra del tinglado, que era una obra que llamaba la atención por la magnitud en la Colonia 2 y llega esta gente, Cabrera y un grupo más de personas de la UOCRA. Que le preguntaron qué iban a construir en el lugar y les contó y ahí empezaron a decirle “…que tenía que ver cómo me iba a manejar…” –así sus palabras- y empezaron a ser más exigentes en un montón de cuestiones, excesivas exigencias para hacer una obra dado que pedían cosas que parecen lógicas pero son inabordables para una obra de esas características. Que luego lo llaman por teléfono y le consultan “…cómo íbamos a seguir con la obra…” –sus términos-. Que él les contestó que si faltaba algo se lo dijeran y ahí le pedían cosas que no tenían mucha coherencia.

Expuso que luego Cabrera le organizó una reunión con Burgos en la sede, donde le iban a decir todo lo que necesitaba. Que ya en unas ocasiones le habían pedido plata por eso. Que él no lo quería llevar a la justicia porque no quería involucrarse en algo así como lo que está viviendo ahora, pero como es ciudadano y necesita que lo que está mal en su

pequeño pueblo tratar de solucionarlo no quedarse de brazos cruzados. Que por eso decidió grabarlos, para contarle a un par constructor lo que le estaba pasando. Que nunca pensó que esta grabación iba a ser un aporte para la justicia, era para decirle a un colega suyo como estaba actuando esta gente.

Apuntó que Nancy García es Maestra Mayor de Obra y trabaja con ellos, que ella no estaba al tanto que él iba a grabar con el teléfono. Que lo hizo porque necesitaba un respaldo, pero no estaba seguro de que lo que estaba haciendo estaba bien o mal. Que le escribió a Nancy para encontrarse y se juntaron fuera de la sede del gremio en Alsina al 700 y pico, que ya tenía su dispositivo grabando, los atendió abajo Cabrera y los hizo pasar arriba a una oficina chica para hablar con el señor Burgos.

Expresó que en la reunión Burgos insistía mucho en la seguridad de los empleados, como que con eso no iba a negociar, pero ya en algunas ocasiones le habían pedido dinero y como no iba a pagar por nada fue que decidió grabar. Que en la grabación lo estaba incitando a que él le diga que es lo que él quería. Que en reiteradas ocasiones Burgos le decía que no iba a negociar la seguridad y luego de seguir hablando, termina escribiendo en un papel arriba de la mesa la cifra de 10.000 pesos, como si él supiera que lo estuviera grabando. Que se fueron con Nancy y al salir ella preguntó que iban a hacer, contestándole que para él eso era una locura.

Señaló que luego de esto tuvo hechos en la obra por este motivo, porque no accedía a ese pedido, hasta llegaron a prender gomas afuera de la obra como si fuese una gran empresa en la que se explotara a los empleados.

Que le realizaron un piquete y cuando acudieron los medios de comunicación para saber qué pasaba y consultaban, él les contó que todos sus empleados estaban trabajando, que no había ninguno de sus empleados prendiendo las cubiertas. Que el piquete duró dos días, primero una mañana y luego volvieron al otro día. Que en el piquete estaba gente del sindicato y trabajadores que utilizaban para ir a hacer reclamos a otras obras, que no conoce los nombres de las personas, pero algunos eran gente de trabajo que se manejaban dentro de la UOCRA porque conseguían trabajo a partir del gremio.

Comentó que esto no deterioró su vínculo con los empleados, quienes hasta lo tranquilizaban y entendían su situación. Que son siempre los mismos 4 o 5 que comparten la obra, charlan, toman mate.

Consultado refirió que el papel era rectangular, blanco, estaba arriba de la mesa y Burgos lo escribió con números y lo dejó arriba de la mesa. Que él le dijo 10.000 pesos y que "…Burgos asintió, dijo si sí, no sé si con palabras o con un gesto en la cabeza, dado que pasó mucho tiempo…" –así sus dichos-.

Contó que luego del piquete hubo intervenciones en la obra, Cabrera se acercó y le habló de las condiciones laborales que tenía que tener y que recuerda que le dijo que venía con zapatillas a una obra y exigía condiciones de vestimenta y seguridad que no las tenían ellos cuando venían a la obra. Que los que los acompañaban para estar en los reclamos eran gente de trabajo pero que además andaban en un vehículo y siempre iban acompañados.

Sostuvo que siempre le pedían muchas cosas, entre ellas baños químicos, que esto le parece bien para las condiciones laborales de un empleado, por lo que no había problema, pero "…el tema es que un día llegué a la obra y no había contratado nada, y estaba el baño químico ahí, ya instalado, era de una empresa Acqua…". Dijo que no sabe a quién pertenece la empresa, que después dio con el supuesto dueño, cuando se desencadenó el lío y lo fueron a retirar y le quisieron cobrar el uso del baño. Que los llamó y les dijo que no había contratado nada y que quien lo atendió le dijo que era de apellido Burgos. Que no sabe si tiene vínculo familiar con el señor Burgos –en referencia al aquí acusado-, que fue una charla telefónica, y que luego le comentaron que era uno de los hijos de él. Que no habló con esta persona nunca cara a cara.

Expresó que Burgos le había dicho que le podía conseguir el baño, que esto se lo dijo en la oficina, pero no lo contrató y luego el baño

apareció. Que nunca lo fueron a limpiar, y los empleados decían que era un adorno, que no lo podían usar porque no se limpiaba.

Que cuando lo llamó esta persona reclamando el pago del baño era un costo elevado, no recuerda la cifra, le pedía un valor similar a alquilar la casa del vecino, era más o menos el mismo valor.

Recordó que la denuncia la arranca su padre, quien vio que estaban haciendo las cosas mal, y tuvo, entre comillas, siempre algún conflicto con Burgos, que es él quien denuncia públicamente en los medios, que no se acercó a la justicia, que se acercaron a la justicia luego de los medios, porque Burgos, con abogados del sindicato, le inician un juicio a su padre porque sostenían que lo que estaba diciendo era mentira. Que son ellos los que los llevaron a la justicia.

A la doctora Busteros le contestó que no puede afirmar quien es titular o dueño de la empresa Acqua, que por el nombre de fantasía es difícil saber quién es el titular; que sólo recibió un llamado telefónico en su momento y luego la sociedad de Suarez decía que a esa empresa la estaba manejando el hijo de Burgos. Que el nombre Acqua estaba inscripto en el baño, que por eso suponía que era el nombre de la empresa. Que por casualidad nunca estaba en la obra cuando llevaron el baño y luego cuando lo retiran. Que además había un baño paralelo a ese, dado que ese no se podía usar, estaba inutilizable, y que por eso contrató otro. Que no tenía

contacto con quien lo había dejado para llamarlo y reclamarle por la limpieza.

Al doctor Martinez le contestó que no pagó el servicio del baño. Que no lo llamaron más por el pago. Que la obra del supermercado duró 5 meses o medio mes más.

Señaló que además de las medidas de fuerza el gremio denunciaba a la Secretaría de Trabajo y la secretaría hacía un acoso permanente, que iban los dos juntos. Que además del piquete de dos días no tuvo otra medida de esas características. Que falleció una persona en una obra similar. Un accidente de un operario que cayó al vacío y se murió, en un supermercado chino similar. Que esto pasó justo cuando la chica de la Secretaría de Trabajo de Tres Arroyos estaba revisando su obra. Que recuerda que en esa oportunidad le comentó a su padre que no podría haber pasado ese accidente si hubiesen cumplido todo lo que él cumplía, que eso hacía pensar como que hubiesen pagado la coima. Que cree que el operario pisó una chapa traslúcida y cayó al vacío, por lo que no tendría muchas medidas de seguridad.

Refirió que el Ministerio le labró infracciones, que esta chica de seguridad e higiene de Tres Arroyos le pidió una jabalina de seguridad, que él tenía todo y lo infraccionó.

Que la obra se terminó y no pagó ninguna suma de dinero a ningún integrante de la UOCRA.

Volvió luego a señalar que no sabe si incitó a que Burgos diga, que fue llevándose el diálogo, y que lo mismo le sucedió en actos anteriores que le pedían plata. Que con Burgos habló una sola vez; y que en la grabación cree que se escucha, porque el testigo le dice 10.000 mil. Que de esa reunión luego se retiró y se saludaron cordialmente, que la charla fue cordial.

Contestó a las consultas de la defensa que en el piquete se decía que los empleados no estaban con las condiciones laborales que se necesitaban, pero que esto no era así, que no le sabría decir cuáles son las que reclamaban. Que el piquete fue en esas fechas cercanas a la muerte de la persona, que él diría que antes del fallecimiento de la persona en el otro super chino.

Refirió que seguro, si él hubiese entregado la suma de dinero, estarían bien las condiciones laborales.

Que reclamo de la UOCRA a nivel salarial no hubo, no hablaron de lo que tenía que ganar una persona.

Agregó que ellos pedían infinidad de cosas, que no podía cumplir todas porque no eran necesarias para el trabajo que estaban haciendo, que se iban sobremanera para la seguridad, que sería casi

trabajar como en una burbuja, pero a veces es imposible por comodidad o por las características del mismo trabajo que no se pueden utilizar.

Al Dr. Zorzano le contestó que usó su celular para grabar la conversación. Que participó de una rueda por fotografías cuando vinieron a Bahía Blanca e individualizó a Burgos entre las fotografías.

Agregó que la jabalina era una exigencia que no podía pedir el Ministerio, que lo debe exigir la empresa que le da el servicio eléctrico. Que él tenía un pilar aprobado por una empresa que era la Cooperativa Eléctrica, que con esa aprobación trabajaba, y eso se lo explicaba a la secretaria de seguridad de Tres Arroyos, indicándole que le hacían perder tiempo en su obra, que no se lo podían pedir a él, sino a la empresa de electricidad, que era la que había aprobado la obra. Que la jabalina es innecesaria, que él no es experto en electricidad, pero que hay térmica y disyuntor y eso es suficiente.

Tengo en cuenta también lo expuesto por la testigo Nancy García quien dijo que conoce al señor Burgos por su actividad, que es Maestra Mayor de Obra y ejerce en Coronel Suarez desde el año 2.012.

Apuntó que trabajó con Julián Allende cuando hicieron un supermercado chino y en alguna casa particular. Que compartió con él una entrevista y nada más. Que los habían citado por una denuncia de cosas para cumplir, y fueron a la entrevista en la sede de la UOCRA de Suarez.

Que ahí les presentaron las irregularidades que tenían. Que en el lugar los recibieron unos chicos de la UOCRA, un par de personas pero no sabe quiénes eran. Que en la sede se entrevistaron con Burgos y les presentó las cosas que tenían que regularizar, y como la obra recién comenzaba ellos sabían que tenían cosas para acomodar, pero les dio un tiempo que era imposible que pudiesen juntar todo, comprar ropa y hacer el papelerío.

Dijo que recordaba eso y que les pidió una colaboración para ver cómo podían solucionarlo, que quedaron con charlarlo con Julián afuera para ver lo que decidían. Que Burgos hablaba con Julián, eran cosas de la obra que tenía que hablar con él. Que le pidió una colaboración porque estaban haciendo la sede de la UOCRA que se estaba construyendo. Les escribió en un papel un número, no contaban con ese dinero y por eso quedaron que al otro día le daban la respuesta. Que escribió en el papel un número 10. Que Allende le preguntó si eran 10 mil pesos y Burgos le dijo que sí. Que le dijeron que no tenían ese dinero, tenían que hablar con el cliente y la respuesta al otro día se la iba a dar Julián. Que luego le parece que Julián se reunió nuevamente con él y acordaron como iban a manejarse, que ella no fue a otra reunión, y que esto le parece que fue así.

Refirió que en rueda de fotografías participó y ahí reconoció a Burgos.

Sobre estos hechos también declaró como prueba propuesta por el señor Fiscal el testigo Víctor Manuel Allende quien señaló que a

Burgos lo conoce porque representaba a la UOCRA, porque vive en Suarez y por su actividad de constructor contratista.

Comenzó relatando que con Burgos aparece en una obra mucho antes de que ellos reaccionen, que sabían por eso del accionar de ellos y luego, cuando se meten en la obra de su hijo, que eso sobrepasa la tranquilidad de uno. Que decidieron ver de qué manera frenar el atropello que tenían de parte de ellos.

Contó que se presentan en la obra de su hijo en pueblo San José exigiéndole cosas que era imposible hacer en poco tiempo; pero que no les interesaba eso, sino pedir a cambio un dinero para no exigir lo que realmente tenían que cumplir, era dinero a cambio de no denunciar la falta.

Que su hijo dijo que esto era insostenible, siempre les pedían dinero a cambio, aunque nunca le pagaron nada, y les habían hecho una manifestación en la vereda de la obra.

Que a su hijo le habían dicho "…te pido casco blanco hoy y si quiero mañana te pido casco amarillo…", y eso era como un apriete a cambio de dinero.

Expresó que por esto ellos hicieron pública la denuncia y luego de eso convocaron al gremio de la construcción para ver qué iban a seguir haciendo, dado que la UOCRA apretaba a los constructores. Que se reunieron en el Concejo Deliberante y se decidió hacer una denuncia penal,

que les aconsejaron que había que hacer una denuncia penal y la hicieron en la Ayudantía de Coronel Suarez.

Recordó que al Concejo fueron más de 100 personas, todo el gremio de la construcción y algunos concejales, y se quería convocar al gobierno para que ellos los apoyen. Fueron con su hijo y otros colegas del gremio de la construcción, eran varios y se notó que había mucha gente en la misma situación.

Contó que tiene una denuncia por injurias de parte de Burgos, que así reaccionó la UOCRA en base a esa denuncia pública. Que luego la denuncia de Burgos se cayó por estos actos, fue convocado por una Jueza para desistir de la denuncia por la injuria y “le dije que no iba a desistir porque era la verdad no era una injuria lo que estaba haciendo” –así sus palabras-.

Mencionó que él lo nombraba a Burgos como el que iba a pedir dinero a la obra cuando faltaba algún elemento de seguridad o algún chico en blanco. No iba al empleado, iba a decirle a él.

Agregó que la primera vez que lo conoció fue a la obra y le dijo que pasara por la oficina, que estaba todo bien y en blanco, y era una obra en calle Harriet. Que luego le dijo “…mirá Víctor -él creía que había confianza porque mi hermano era secretario del sindicato municipal-…”, me dijo que había que arreglarlo de alguna manera, que para que no vaya una

inspección a la obra había que ponerle plata a Darío Graf que es inspector y le pidió 500 pesos para darle a él, para que no fuese Graf a la obra. Acotó el declarante que nunca puso un peso. Que en esa oportunidad fue a la oficina de Burgos para corroborar lo que le decían los colegas, quienes contaban que también sufrían aprietes, y le decían que de acuerdo a la obra era el monto que había que pagar.

Manifestó que la UOCRA no existió en Suarez hasta que no apareció Burgos, que apareció sólo y le dijo que era un empleado de una empresa que construía un barrio llamado Islas Malvinas, que le dijo que estaba trabajando ahí y que por eso representaba a los trabajadores de la construcción. Que antes de Burgos a la UOCRA la conoció cuando era peón de albañil, que había un representante pero luego falleció y nunca hubo otro en el gremio. Que en la UOCRA primero apareció Burgos y luego había 5 personas que eran los que los visitaban en la obra, que no era Burgos en persona quien iba, sino que eran mandados por él, en cada obra que había aparecían, y al que más conoce era Cabrera que trabajó con él de chico, y a Muñoz que era un vecino del barrio, conocido de la familia. Del resto sabe los nombres indicando Carrillo y Aranda, pero acotando que lo sabe por los colegas los nombres, que él no los conocía.

Señaló que su hijo grabó una reunión con Burgos y se la hizo escuchar. Que de esa reunión escuchó el audio y le contó que fueron porque le dijeron que tenía que arreglar el tema de la obra con él. Que su

hijo quería grabarlo, que le diga cuánto dinero le estaba pidiendo para hacer la denuncia y que su hijo le dijo que sabía o sospechaba, porque le escribió en un papel 10 mil pesos a cambio de su silencio, y debe haber pensado que lo podían grabar.

Dijo que el piquete en la obra ocurrió cuando la obra se estaba por techar, que fue anterior a lo de la grabación. Acotando luego que pensando un poquito más, no sabría sinceramente si fue anterior o posterior.

Refirió que lo que sentía por su hijo fue lo que lo movilizó a hacer la denuncia. Que García lo llamó a él porque estaba la manifestación y le querían parar la obra, y ahí decidió que había que hacer algo.

Al doctor Martinez le contestó que Burgos le pidió 500 pesos la primera vez que lo conoció para darle a Darío Graf funcionario de la Secretaría de Trabajo. Que nunca le dio dinero, pero que luego lo denunciaba. Que no le pidió dinero otra vez, pero que le decía que si no arreglaba con ellos venían de la Secretaría de Trabajo para inspeccionar la obra. Que esto de Graf fue en el 2010; y en la misma obra haciendo Islas Malvinas se produce manifestación de UOCRA, llegan delegados de Bahía Blanca y ahí Burgos le dice “…vos no me alcanzaste lo que te pedí, llevámelo porque viene la gente de Bahía Blanca y se lo iban a pedir…” –así

sus dichos-. Que como él le había dicho que no le iba a dar un peso, por eso no le pedía más plata.

Expresó que a la gente de la Secretaría le decía que iban a inspeccionar las obras donde no pagaban. Que lo sancionaron dos veces. Que con Monteros nunca habló, y nunca le pidió dinero.

Ante nuevas consultas del señor Fiscal indicó que Burgos le decía "…Víctor si no pagás te tengo que denunciar…", y que ahí se refería a que faltaba algo o algún empleado que no estuviese en blanco porque recién empezaba a trabajar. Que si pagaba no había denuncia, que ese era el comentario de él. Que para que no aparezca la Secretaría de Trabajo en su obra había que pagarle a Burgos.

Al doctor Martinez le volvió a señalar que la única vez que le dijo de dinero fue los 500 pesos, pasó por segunda vez en la obra, cerca del 2010. Luego no le dijo más.

Al formular denuncia penal el día 12 de abril del 2.016, la que dio origen a la I.P.P. n° 02-00-006687-16/00, agregada por cuerda a la causa principal, el señor Víctor Manuel Allende -fs. 2/2vta- señaló que un gremio denominado UOCRA estaba cobrando coimas por decir que hay irregularidades en las obras que realiza el denunciante y sus colegas. Señaló que el señor José Burgos lo citó a una oficina unos años atrás y le dijo "Víctor vos tenés gente en negro, sin los elementos de seguridad que te

exige la ley, entonces para que no te moleste la inspección de la secretaría de trabajo le tenemos que dar quinientos pesos argentinos a Darío Graff". Agregando luego que "una manifestación de U.O.C.R.A. interfería en una obra la cual tenía las condiciones óptimas establecidas por la ley, pero como no apoyaba la coima solicitada por el gremio los mismos buscaban algún subterfugio para detener la construcción, sumado a que el dicente tiene conocimiento de varios colegas de su entorno que están sometidos al mismo criterio por los gremialistas, temiendo no solo por el avance de su trabajo para el sustento diario de vida, sino también por su propia integridad física".

Lo que esta denuncia contiene se corresponde con parte de lo relatado por Allende al momento de prestar declaración en la audiencia de debate.

La documentación de fs. 9/19 de la I.P.P. mencionada refleja las noticias periodísticas publicadas en distintos medios en los que se cubre periodísticamente una manifestación de los trabajadores de la UOCRA frente a la municipalidad de Coronel Suarez -9-; una denuncia de pedido de coimas contra el delegado zonal señor José Burgos -10; una nota del Nuevo Día Digital del 29 de enero del 2014, en la que se da cuenta de un supuesto enfrentamiento entre dos facciones de la UOCRA en la sede gremial de calle Saavedra 470, donde habrían resultado heridos de arma de fuego, entre otras 6 personas (dos de un bando y 4 del otro), el señor José Burgos,

culminando la situación con la detención de 44 personas -11/12-; una nota donde se menciona la paralización de obras en la ruta 67 -13-; una nota donde el señor José Burgos, junto al letrado Diego Czerniesky rechazan las acusaciones -14/15-; una nota donde se menciona la convocatoria a una reunión en el Concejo Deliberante -16/17-; y una nota que da cuenta que los empleados de la empresa que construye la ruta 67 seguirían cobrando su salario, apareciendo en la foto el señor Burgos -18-; fotografías del señor Damián Cabrera y del mencionado junto al señor Burgos y otras personas -19/21-. A fs. 140/144 obran agregados copias de otros recortes periodísticos que dan cuenta de la denuncia por coimas y del encuentro organizado en Suarez.

De interés resulta la desgravación de conversaciones obrante a fs. 56/64, correspondiente a la grabación efectuada por el señor Julián Allende, en la que advierte el siguiente diálogo de interés, que sería el que habría mantenido el mencionado con el señor Burgos. Se detalla: MASCULINO 1: "bueno ahora estamos a tres cuadras de la uocra, vamos a ver que dicen, vengo en la camioneta, seguro que estos van a querer coimear como lo hacen siempre así que voy a ponerme el teléfono al bolsillo y ver si se puede escuchar lo que dice esta gente, voy a tardar más o menos 5 segundos en llegar a la UOCRA, un poco más, me pongo el teléfono en el bolsillo y vemos que dice..."; más adelante se transcribe: "MASCULINO 3: yo te (inentendible) esto por mes"; "MASCULINO 3: no es para moco,

porque vos tenés que hablarlo con los otros allá porque los otros, los otros se van a venir se van a venir..." (al detalle total de los diálogos me remito).

Estas conversaciones, según lo señalado por el señor Julián Allende al prestar declaración testimonial en la audiencia, se corresponderían con el diálogo mantenido por él y la señora García, en la oficina del señor Burgos en Suarez, lugar al cual los convocaran. Dijo en su momento al declarar que no recordaba si Burgos había mencionado las palabras 10.000 mil, o si sólo lo había escrito en el papel, pero que en la conversación o el declarante, o Burgos hacían referencia a la suma de 10.000, que fuera escrita por Burgos, y esto se puede observar en las conversaciones y diálogos que siguen a los antes apuntados.

La documentación de fs. 124/138 refleja distintas actas labradas por el Ministerio de Trabajo entre los años 2012/2015 por infracciones al señor Víctor Allende.

Obra a fs. 139 carta documento firmada por el señor José Burgos en la que intima al señor Víctor Allende para que se retracte, informando que sino iniciará acciones legales por calumnias e injurias, querella que luego fue entablada, conforme se acredita con la copia del expediente 704/16 del Juzgado en lo Correccional n° 4 agregada por cuerda.

A fs. 162/166 obra constancia de notificación a José Bernardo Burgos en el domicilio de la sede gremial UOCRA de la medida cautelar

dispuesta por la señora Jueza de Garantías n° 4, de prohibición de acercamiento del mencionado y los señores Carlos Carrillo, David Ezequiel Muñoz, Damián Cabrera y Gustavo Ariel Rodriguez, a los señores Julián y Víctor Allende.

Completa este cuadro probatorio las diligencias de reconocimiento en rueda de fs. 313/313 vta. y fs. 316/316 vta. e impresión de placas fotográficas de fs. 314/315 y fs. 317/315, constancia reconocimiento fotográfico e impresión de placas fotográficas utilizadas de fs. 321/327, en las que el señor Julián Alejo Allende y la señora Nancy Giselle García reconocieron la fotografía del señor José Bernardo Burgos, como la de la persona con la que se entrevistaron en la oficina de la sede de la UOCRA de la localidad de Coronel Suarez.

Con estos testimonios, y la restante prueba mencionada, entiendo demostrado el hecho materia de acusación no en su totalidad, dado que según los dichos de los señores Allende y la señora García, no se abonó la suma solicitada por el señor Burgos, ni ninguna otra suma de dinero, como así tampoco, se contrató el servicio de baño de la empresa Acqua.

Así, si bien la empresa Acqua habría instalado por su propia cuenta, sin cumplir con una petición del señor Julián Allende, un baño químico en el lugar donde se estaba ejecutando la obra; según lo indicado por el testigo Julián Allende, además de que no contrató la prestación de

ese servicio, tampoco abonó suma alguna por el mismo, no obstante el reclamo que en tal sentido le hiciese mediante un llamado telefónico una persona que se identificó como de la empresa Acqua y de apellido Burgos.

Con los testimonios antes valorados y con la grabación que se ha incorporado como prueba al proceso se puede establecer que en una reunión convocada en la sede gremial el señor Burgos le solicitó al señor Julián Allende la entrega de 10.000 pesos para no intervenir en la obra que recién comenzaba y en la cual tenían que regularizar condiciones de seguridad e higiene, la que sino debía ser paralizada.

Como mencionaron los testigos, luego de indicarles las supuestas falencias para llevar adelante y continuar la obra, y de mencionarle un tiempo muy breve para poder solucionar estas cuestiones, el señor Burgos le escribió en un papel un monto de 10.000 pesos como la suma que debían entregar para solucionar la cuestión, "…un pedido de colaboración para solucionarlo…" según dijo la testigo García, que acompañaba al señor Allende en esa oportunidad.

Que también en esa reunión el señor Burgos le dijo al señor Allende que le podía conseguir el baño químico, apareciendo luego -como se apuntó-, uno instalado en la obra que no fue contratado ni requerido por Julián Allende, quien ya tenía contratado otro baño para ese servicio.

Además de este pedido de dinero y del envío de un baño químico a la obra, al no abonar la suma solicitada, ni ninguna otra el señor Allende, fue entorpecido en su actividad laboral normal con la realización de una manifestación en el ingreso a la obra por parte de varias personas (ninguno de su escasa planta de personal).

Los testigos indicaron que ya habían tenido otros inconvenientes en otras obras, en las que se habían efectuado medidas de fuerza para paralizar las mismas.

El testigo Víctor Allende brindó precisiones sobre situaciones anteriores con el señor Burgos y con gente del gremio de la UOCRA, apuntando que en las obras le ha referido Burgos que si no arreglaba con él y le daba el dinero solicitado lo iba a denunciar a la Secretaria de Trabajo por algún incumplimiento en las condiciones laborales.

También señaló Allende padre que al menos una vez con seguridad (luego dijo que en otra oportunidad también), Burgos le requirió una suma de dinero para poder continuar con la actividad en la obra, dado que sino llamaría o denunciaría en la Secretaría de Trabajo. Que como no abonó, luego fue inspeccionado en distintas oportunidades.

La declaración de Víctor Allende, con el pedido de parte del señor Burgos de dinero para Graf, indica que ya había sufrido una situación anterior, con movilización, porque no pagó, cuestión que le fue recordada

por Burgos cuando concurrió nuevamente a la obra, quien le dijo que esto era por no haber pagado, no porque existiese alguna irregularidad a subsanar.

Este señor escuchó la grabación que le aportó su hijo, advirtió la actitud del gremio que le realizó un piquete en la obra, y fue ahí que decidió hacer pública su denuncia, donde acudió a los medios para poner en conocimiento de todos lo que ocurría, y fue luego de esto que fue querellado por injurias, dichos de los cuales no se retractó al ser citado por la Juez

Por lo apuntado, entiendo probado que al menos tres personas, entre los meses de enero y marzo del 2.016, en el partido de Coronel Suarez, intimidaron al señor Julián Allende, quien estaba construyendo un galpón en la calle Alemanes del Volga del Pueblo San José, a partir de presentarse en la obra y realizar una inspección de las condiciones laborales, convocándolo al gremio donde uno de ellos le mencionó que tenía que pagar la suma de 10.000 pesos para que esas cuestiones se solucionasen, y enviándole un baño químico que no había sido contratado por el señor Allende, efectuándole además una medida de fuerza, paralizando la obra, quemando cubiertas e impidiéndole continuar normalmente con sus tareas laborales, con la finalidad de que el mismo abonara la suma solicitada (hecho número dos).

Como se podrá advertir, coincido con el señor Defensor, Dr. Martinez, en cuanto a que el hecho no se consumó, dado que no existió disposición patrimonial de parte del señor Julián Allende.

Los hechos 6 y 7 han sido descriptos por el señor Agente Fiscal de la siguiente forma: HECHO 6): A comienzos del año 2013, mientras el señor FERNANDO SCHRO se encontraba realizando tareas de construcción de una vivienda ubicada en calle Baigorria -a la altura catastral del 400- de la localidad de Coronel Suárez, los señores CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplento y Delegado Gremial), NELSON DAMIÁN CABRERA (Delegado Gremial) y DAVID EZEQUIEL MUÑOZ (Delegado Gremial), invocando el carácter de integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, se constituyeron en el lugar, donde hicieron entrega a SCHRO de una nota que indicaba todos los recaudos que el gremio exigía respecto de la obra, ordenándole CARRILLO al empresario que se constituyera en la sede de dicho gremio.

En la sede gremial (sita en calle Hipólito Yrigoyen N° 701, entre calles Sixto Rodriguez y Sargento Cabral, de la localidad de Coronel Suárez), el señor SCHRO fue recibido por CARRILLO, CABRERA y MUÑOZ, quienes le EXIGIERON que debía abonarles la suma de UN MIL PESOS POR MES durante el tiempo que durara la obra, para que ésta pudiera continuar sin inconvenientes (paralización) ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Así también, para lograr las espurias disposiciones patrimoniales, CARRILLO, CABRERA y MUÑOZ extorsionaron a la víctima, a quien amenazaron con comunicar a la Secretaría de Trabajo de Coronel Suárez que tenía contratado personal sin la correspondiente registración laboral, lo que motivaría la clausura de la obra a su cargo.

Ante la amenaza de los sindicalistas, para evitar represalias y el perjuicio económico que podría generarle la paralización de la obra, el señor SCHRO abonó mensualmente la suma de UN MIL PESOS, durante un período de aproximadamente cinco meses que demandó la obra. Los pagos fueron realizados en dinero en efectivo a NELSON DAMIÁN CABRERA, quien los recibió en la sede del sindicato. El dinero fue exigido y percibido por el señor CABRERA con conocimiento y bajo las órdenes de JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto), quien era el jefe de la Delegación Coronel Suárez.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos

previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 7): A fines del año 2013, en circunstancias en que el señor FERNANDO SCHRO se encontraba realizando la refacción de la confitería de la estación de servicio YPF ubicada en avenida San Martín de Coronel Suárez, se constituyó en la obra el señor NELSON DAMIÁN CABRERA (Delegado Gremial) junto con otra persona, quienes invocando la condición de integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, comunicaron a las personas que se encontraban realizando tareas laborales en el lugar, que el señor SCHRO -a cargo de la obra- debía presentarse en el sindicato.

En respuesta a la directiva, el señor SCHRO se presentó en la sede gremial donde fue recibido por CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplente y Delegado Gremial), quien le EXIGIÓ la suma de DOS MIL PESOS POR MES durante el plazo de ejecución de la obra, para que ésta pudiera continuar sin planteos ni inconvenientes (como la paralización de la obra) por parte de los integrantes de la UOCRA.

En cumplimiento de dicha imposición, FERNANDO SCHRO debió abonar DOS MIL PESOS POR MES, durante los dos meses que demandó la obra (un total de cuatro mil pesos). Los pagos fueron realizados en dinero en efectivo a NELSON DAMIÁN CABRERA, quien los recibió en la

sede del sindicato.- El dinero fue exigido por CARRILLO y percibido por el señor CABRERA con conocimiento y bajo las órdenes de JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto), quien era el jefe de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

Computo con relación a estos hechos lo expuesto en la audiencia de debate por el señor Fernando Ariel Scrho, quien contó que trabaja en obras en Suarez como albañil desde hace 15 años. Que recuerda que había iniciado una obra en calle Baigorria al 400, la construcción de una casa nueva, que demandaría unos tres meses de trabajo o más y apareció gente de la UOCRA, tres integrantes con chaleco de la UOCRA, siendo uno Carrillo, el otro Cabrera y el restante Muñoz, quienes le consultaron por la

obra, sobre cuánto tiempo iba a demandar, cuántos empleados tenía (que en ese momento eran dos), y si los tenía en blanco. Que les contestó que no porque no podía, no le daban los números y que ellos le manifestaron que la idea era blanquear gente, que le dijeron que pase por la sede.

Contó que fue a la sede y Carrillo lo hizo pasar para el fondo, a la parte de arriba donde subió por una escalera y ahí le explicó Carrillo que si blanqueaba a los chicos le salía plata y que ellos buscaban solucionar de otra forma, si le daba un dinero no le salía más caro. Que él le contestó de ponerlos en monotributo y Carrillo le dijo que no le convenía, porque a la larga le iban a encontrar algo e iba a tener que pagar, que si hacía cooperativa también, que no les iba a ganar. Que por eso, al tener miedo porque esa gente te rompe todo, pagó, y así arrancó todo, "…aboné 4000 pesos o 5 mil mensuales, dependía de cómo les pintaba a ellos, era lo que iban pidiendo.".

Señaló que le habían pedido el número de teléfono y cuando veían un empleado suyo en alguna obra lo llamaban y lo hacían pasar por la sede del gremio; acotó que así hicieron el circuito más rápido y ya ni iban a la obra. Que esto ocurrió en noviembre del 2012, y estos empleados estuvieron en alguna otra obra más.

Refirió que conocía a Cabrera y Muñoz porque eran de Suarez y a Carrillo porque iba cada tanto, dos o tres veces por mes; que supone que vendría a buscar la plata, cuando supuestamente esta gente eran los

delegados como para normalizar la gente. Que a Burgos no lo conoció, que lo vio una vez cuando arrancó lo de Allende en una foto en un diario.

Dijo que tenía que ir a la sede una vez por mes, que el 90 por ciento de las veces le dio la plata a Cabrera. Que una vez estaba Carrillo y "…le hice la consulta por si tenía dos o tres obras y Carrillo me dijo que me hacían un paquetito para que no me saliese tanto, pero que cuando fuese a presupuestar pensara en ellos, que siempre me iban a caer…", agregó que por miedo hasta quiso dejar la albañilería, dado que siempre era con la misma modalidad, él quería ayudar a los empleados y ellos le decían que más le iban a sacar si los ponía en monotributo.

Contó que en una obra de una estación de servicio de YPF, en la que estaban ampliando un bufet, en el año 2013, en calle avenida San Martín, cae esta gente, él no estaba, preguntaron quien la ejecutaba y le dijeron a un empleado que le dijese que pase por la sede que querían charlar. Que fue hasta la sede, Carrillo le preguntó cuánto había pasado por la obra y le dijo que "…estaba bueno, que le ponga yo el precio porque sino lo ponía él…", que no le dijo la verdad, que le dijo menos y accedieron a 6000 pesos por mes porque sino le iba a sacar más, que era una obra de dos meses. Que recuerda que le dijo como en todo reclamante "vos ya la arrancaste la obra", molesto porque era como que se durmieron. Que luego le cayeron a la otra obra más grande y se la pararon. Que era una obra en un campo a 12 kilómetros de Suarez, que el dueño Santiago los dejó entrar

y ahí empezaron a reclamar porque los tenía en negro, que había que regularizar, y este dueño paró la obra, porque no lo iba a manejar un gremio.

Señaló que ellos querían plata y arreglar con el dueño Monaterre y el mencionado los mandaba con el declarante y los del gremio no querían hablar con él. Que se paró la obra, pasaron unos meses, pusieron a toda la gente en blanco y luego pudieron empezar a trabajar; y eso está mal, se puso todo como debería ser.

Indicó que luego de que pagaba mensualmente no le pidieron que pusiera a los empleados en blanco, que si andaban en patas no les importaba, si tenían casco o no, no los defendían, no iban a hablar con los obreros. Que sí le preguntaban al declarante si tenía más obras.

A la doctora Busteros le contestó que no los podía poner en blanco porque cuesta un dinero, que él podía acceder a ponerlos en monotributo, pero ellos le decían que no servía.

Al doctor Martinez le señaló que los 8000 pesos los pagaron por única vez en la obra de Monterre. Que luego pusieron en blanco a todo el personal y no les pidieron más plata, la obra continuó y se terminó. Que la obra de la estación de servicio tenía gente en negro, era una obra más chica. Que en esa obra de YPF no le pagaba seguro a la gente, en la obra chica tampoco. Que a la UOCRA no le importaba la gente, que a él sí porque les da trabajo, y que ante un accidente se haría cargo porque son

empleados suyos. Que no tenía seguro por accidentes para el personal. Que ha tenido gente que lo ha denunciado, le han hecho juicios laborales.

Principalmente con este testimonio, y la demás prueba antes analizada, entiendo demostrado que en la localidad de Coronel Suarez, en el año 2013, al menos tres personas intimidaron al señor Fernando Schro, quien se encontraba realizando una obra de construcción en calle Baigorria al 400, ejecutando una inspección en su calidad de dirigentes gremiales, convocándolo a la sede del gremio, sitio en el cual le exigieron el pago de una suma mensual de dinero, de 4000 o 5000 pesos por mes, porque sino le iban a paralizar la obra por tener personal no registrado debidamente, suma esta que fue abonada por el señor Schro mientras duró la ejecución de la obra ante el temor que le había generado la actitud de estos sujetos (hecho número 6).

También se ha demostrado que en esa misma localidad, en el año 2013, en otra obra del señor Schro de refacción de la confitería de la estación de servicio YPF, ubicada en calle San Martín, al menos dos personas le exigieron bajo intimidación con denunciarlo por tener personal no registrado y paralizar la obra, la entrega de 6.000 pesos por mes, que el señor Schro abonó por el temor que le había generado la conducta de estas personas (hecho número 7).

En lo que respecta al hecho número 8 que pasaremos a analizar, recordemos la acusación fiscal: HECHO 8): En el mes de febrero

de 2012, en circunstancias que el señor LUIS ALBERTO SIMÓN se encontraba realizando la AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CORONEL SUÁREZ, se constituyó en la obra el señor CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal y Delegado Gremial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), quien invocando la representación y órdenes de JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto del sindicato), le EXIGIÓ a SIMÓN que abonara la suma de CINCO MIL PESOS POR MES, como condición para que la referida construcción pudiera continuar sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes del sindicato. A pesar que la exigencia le generaba gran temor por su integridad física y por los daños patrimoniales que pudiera sufrir, el señor Simón no abonó las sumas indicadas.

Meses más tarde, durante el año 2013, en circunstancias que el señor SIMÓN estaba realizando la obra de REFORMAS A UN EDIFICIO DE CORONEL SUÁREZ, el señor CARRILLO se presentó en la obra y le requirió que se presente en la sede del sindicato porque "tenían que hablar con él". En el lugar, CARLOS ARIEL CARRILLO, invocando nuevamente el mandato de BURGOS, le dijo: "tenés que venir a pagar y te vamos a dejar tranquilo, no es mucha plata", exigiéndole nuevamente que abonara la suma de CINCO MIL PESOS POR MES durante el plazo de duración de la obra.

Posteriormente, en el año 2014, cuando SIMÓN estaba realizando la CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO EN AVENIDA CASEY, A

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

LA ALTURA DEL PASO A NIVEL DE VILLA BELGRANO, DE LA LOCALIDAD DE CORONEL SUÁREZ, se presentaron en la obra los señores CARLOS ARIEL CARRILLO y NELSON DAMIÁN CABRERA, quienes le exigieron nuevamente la suma de CINCO MIL PESOS POR MES, como condición para no tener problemas con ellos, no pararle la obra y dejarlo trabajar tranquilo. A pesar que la víctima sentía miedo por la situación, no cumplió la exigencia extorsiva, motivo por el cual continuaron los planteos intimidantes de los dirigentes de la UOCRA. Finalmente, en mayo del año 2015, cuando el señor LUIS ALBERTO SIMÓN se encontraba construyendo UN GALPÓN SOBRE EL CAMINO DE CINTURA DE LA LOCALIDAD DE CORONEL SUÁREZ (Ruta Provincial N° 85), de propiedad de una persona de apellido Schmidt, fue citado por JOSÉ BERNARDO BURGOS a la sede de la Delegación Coronel Suárez de la UOCRA. En dicho lugar, el señor BURGOS le exigió la suma de CINCO MIL PESOS para poder continuar con la obra sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Al no abonar dicha suma, los integrantes de la UOCRA le hicieron una manifestación frente a la obra, de la que participaron BURGOS y CABRERA, oportunidad en que le exigieron la suma de DIEZ MIL PESOS, amenazándolo con la realización de una nueva manifestación ("un piquete"), en el que incendiarían gomas y no los dejarían trabajar.

Luego de ello, la víctima sufrió una enfermedad que lo alejó de su actividad laboral y, consecuentemente, cesaron las exigencias extorsivas de los integrantes de la U.O.C.R.A.-

Computo para dar por debidamente demostrados estos hechos lo expuesto en la audiencia por el testigo Luis Alberto Simón quien dijo que trabaja desde hace más de 30 años como albañil en la localidad de Coronel Suarez y la zona. Que por lo general trabaja con sus dos hijos y en ocasiones con algún ayudante. Que antes del 2016 ha tenido problemas con la gente de la UOCRA. Que como responsable de las obras esta gente del gremio lo iba a ver y le exigía pagos irregulares, pagos en concepto de coimas.

Relató que lo visitaban en las obras de buenas maneras, te hacían preguntas, te sondeaban como quien dice, te analizaban hasta que los conocieron; y después era el planteo de lo que se necesita para trabajar en forma independiente, de la ropa, de la seguridad e higiene; y "…es obvio que uno no siempre está en regla con eso y eso ellos lo aprovechaban para pedir coima, presionaban…" –sus palabras-.

Mencionó que siempre se negó de buena forma, poniendo excusas para no entrar al choque, porque pensaba que negándose de buena forma iban a desistir y luego dejarlo tranquilo. Pero pasado el tiempo y los años, 3 o 4 años que estuvieron los mismos sujetos empezaron a presionar cada vez más, y amenazaban con pararte la obra, con denunciarte

al Ministerio del Trabajo, o con hacer un piquete en la obra, o molestar al cliente; que, de hecho, al declarante lo han denunciado por cosas insólitas en el Ministerio.

Contó que a él le daba miedo porque trabajaba con sus hijos, vive del trabajo, y esta gente cumplía otra función, actuaba como una banda de delincuentes, se movían con impunidad, se reían y te presionaban para pagar una coima.

Dijo que no llegaron a hacerle un piquete en alguna de sus obras, pero una vez le hicieron un piquete a un cliente en su lugar de trabajo, se pararon un grupo de la delegación de Suarez adelante del portón del comercio de Juan Carlos Smith y le cantaban que sabían quien era, donde estaba haciendo la obra, y se veía que la mano venía más pesada. Que en esa ocasión el declarante estaba trabajando sobre la ruta 85 para este cliente, haciéndole un depósito, y el cliente lo llamó para que parara la obra, porque esta gente no lo dejaba salir. Que lo llamaron los chicos y estaban asustados. Que esta era la forma de presionar para que uno arreglase con ellos.

Precisó que en esa oportunidad la manifestación de la UOCRA fue en un depósito que el cliente, el señor Smith, tenía alquilado; que previo a esto fue que se hicieron presentes los del gremio en la obra en nombre de Burgos y luego lo citaron a él a la sede del gremio porque el jefe quería hablar con el declarante. Que fue hasta la oficina de calle Irigoyen y habló

con Burgos en su oficina a solas y le dijo que todos tenían que pagar, que había que colaborar con una suma de 5.000 pesos. Que le contestó que no podía, que estaba mal de dinero y trabajando con sus hijos, para sacárselo de encima de forma tranquila, sin chocar diciéndole no quiero pagar, que siempre trataba de terminar en buenos términos y le dijo que más adelante cuando se acomodara iba a pagar.

Refirió que a los pocos días de esa reunión ahí fue donde fueron a hacer el piquete en el galpón distribuidora de este cliente, y luego fueron otra vez un par de integrantes de la UOCRA a decirle que el arreglo no iba más, que querían 10.000 pesos, que había que pagar sí o sí, sino le iban a hacer un piquete a él en la obra, como le habían hecho un piquete en otra obra de Suarez al que mencionaban como “el otro gil”, en referencia al señor Allende. Que le decían que le iban a hacer a él lo mismo que al otro gil.

Manifestó que les contestó que lo iban a dejar sin trabajo, y que ahí insistieron en que al otro día iban a hacer un piquete; por lo que al día siguiente fue él solo a trabajar, sin sus hijos, y no aparecieron para hacer el piquete.

Aclaró que fue primero la reunión con Burgos a la que lo citaron, luego el piquete en el depósito al cliente y luego la presencia de esta gente en su obra amenazando con hacer un piquete.

Que en esa obra que hacía para el señor Smith recuerda haber visto a Cabrera, quien era el que se bajaba a hablar siempre con el testigo; que por lo general Cabrera bajaba con una par de acompañantes, pero no les conoce sus nombres, sólo los ubicaba de vista. Que por lo general era como que se repartían las obras, que en esa obra era Cabrera quien iba, pero dependía de la ubicación.

Relató que en la obra del depósito de la avenida Casey, en el 2014, fue que se presentó Carrillo con algún otro más de la UOCRA, que no recuerda si era Cabrera, con las mismas exigencias, diciéndole que iba a tener que pagar un arancel. Que él siempre les lloraba la carta, les decía que la cosa no estaba bien, que necesitaba más tiempo; y bueno, pasaban un par de veces y te presionaban. Que siempre en esa época te pedían 5.000 pesos por obra.

Indicó que realizó una obra de ampliación en el Hospital Municipal en el año 2012, y que fue ahí cuando empezó la era Burgos, que ahí empezó a escuchar de Burgos. Que esa obra la manejaba Carrillo en la calle, era el encargado de pasar a pedir coimas, siempre con el mismo método de presionarte, amenazarte con pararte la obra, de aparecer con un montón de gente. Que en esa obra una vez fueron un montón, como 4 o 5 integrantes de la UOCRA todos juntos a presionarlo, y que ahí empezó su problema con esta gente, con Carrillo y Burgos.

Refirió que era una obra estatal e igual iban a pedir coimas. Que por ser una obra estatal si uno ocupaba a una persona la tenía que tener en blanco; que así tenía a su personal, pero siempre iban a encontrar algo por seguridad o higiene para presionar y pedir una coima.

Que en esa época se manejaba entre 3.000 y 5.000 pesos de coima; todo dependiendo si te veían cambiando una puerta o haciendo un tapial dado que mucho no molestaban, pero si la obra era importante como un depósito te iban a ver para que pagues.

Contó que en otra obra en un edificio de Suarez en calle Belgrano, que estaba a cargo de su hermano en el año 2013, y consistía en reformas y ampliaciones de departamentos también lo visitaron, porque era una obra grande y se veía el movimiento. Que lo visitó Carrillo con dos personas más de la UOCRA, que se los presentó pero no recuerda los nombres, que le dijo que era gente de Bahía que estaba haciendo un relevamiento de las obras en Suarez, con planillas y demás. Que esa vez Carrillo le pidió que pasara por la oficina, que cree que ese año se hacía cargo el mencionado de la oficina, y en nombre de José Burgos te tenías que reunir con él. Que fue a la oficina y ahí le pidió alrededor de 5.000 pesos.

Apuntó que en el 2016 tuvo una enfermedad oncológica y se tuvo que mudar a la ciudad de La Plata, por lo que dejó más de dos años de trabajar. Que recién volvió a trabajar a fines del 2018 con cosas livianas, y

desde esa fecha hasta la actualidad no tuvo experiencias como las que contó.

Le contestó al señor Fiscal que a él no le pidieron que contratara baños u otros servicios, pero que sí ha escuchado a otros constructores comentar de esos pedidos. Que escuchó también que esta gente tenía servicios de alquiler de baños químicos, y que cuando la obra lo requería había que alquilarle el baño a ellos; pero aclaró que a él no le dijeron nunca que alquile un baño, ni nada por el estilo.

A la doctora Busteros le contestó que siempre te iban a encontrar algo, o por la marca de botines o el tipo de andamios, ellos si quieren te encuentran el problema, porque uno no está totalmente en regla con lo que son las normas; la construcción en la argentina no está bien normalizada para que se cumplan todas las reglas; que, por ejemplo, estar con zapatillas comunes iba a ser causa de un cuestionamiento. Que si te querían encontrar algo, alguna falencia para hacer una infracción como la ropa, el andamiaje, cerco de la obra, te hacían las observaciones como para presionarle porque sino te venía la infracción.

Relató que una denuncia que le hicieron en el Ministerio fue por falta de jabalina en un pilar de luz nuevo. Que el declarante construyó el pilar bajo las normas de la Cooperativa Eléctrica que no pedía jabalina, y lo

denunciaron ante el Ministerio de Trabajo y le vino la sanción, que era todo una forma de presionar.

Mencionó que en esa obra en Pueblo San José la cooperativa no pedía la jabalina y por eso le colocaron el medidor; pero el punto de esta gente no era la jabalina o no, sino dar a entender que te podían infraccionar por cualquier cosa si no pagabas. Que la presión era para conseguir la coima.

Refirió que el Ministerio de Trabajo le aplicó una multa, que se la alcanzó un representante de la secretaria de trabajo de Suarez, Darío Graf, el mencionado le alcanzó la notificación, y no recuerda bien la plata si eran 7.000 de multa, porque le dio bronca y la rompió, dado que no la pensaba pagar. Que luego le llegó una notificación a la casa de su madre y le quedó una deuda con el Ministerio de Trabajo.

Señaló que cree que a nadie le deben haber hecho una multa por falta de jabalina para una vivienda unifamiliar, que la cooperativa en Pueblo San José te daba todos los requisitos y formas de lo que había que construir, sino no te daban suministro y en ese pueblo no pedían jabalina.

Sostuvo que el dinero que pedían era mensual mientras durara la obra, una vez por mes. Todo el tiempo que estuviese la obra duraba la coima.

Que en esa obra que era una vivienda unifamiliar para el plan procrear el señor Carrillo era el que lo iba a ver; que ya lo había visto unas cuantas veces, y el declarante lo había pateado para adelante, y Carrillo le había dicho que lo “estaba boludeando”, y una tarde llegó una camioneta del Ministerio de Trabajo de Tres Arroyo con dos mujeres y en otro auto Carrillo con Cabrera, tipo 4 de la tarde, cuando estaba tomando mate con su hijo y un ayudante, y ahí Carrillo le dijo “viste que te caímos”. Que esa vez fue la primera vez en su vida que llegaba una inspección del Ministerio de Trabajo para una casita de 60 metros. Que era raro que el Ministerio de Trabajo se moleste para hacer un acta en ese tipo de obras, pero viendo con quien habían concurrido no lo sorprendió mucho.

Comentó que luego salió al exterior y le llamó la atención que en el barrio que estaba en construcción, que eran como dos manzanas y eran todas viviendas para el procrear, unas 20 a 30 obras de casas en construcción, no había nadie trabajando, y por eso asoció que él era uno de los pocos que no pagaba lo que le pedían y que a los demás les habían avisado que iban a llegar del Ministerio.

Expuso que Carrillo, luego de decirle “viste que te caímos”, le dijo que pasara por la oficina de la sede de la UOCRA en Irigoyen, a lo que le contestó que sí porque lo preocupó la visita del Ministerio de Trabajo, que lo había sorprendido que estuviesen todos juntos. Que fue a la oficina del sindicato y ellos tenían un entrepiso, con escalera, que abajo no había nadie

y para su sorpresa, mientras se quedó esperando abajo, escuchó que estaban las dos mujeres del Ministerio de Trabajo con Carrillo haciendo recuento de ese día de la recaudación de Coronel Suarez. Que ahí pensó que esto no tenía más arreglo. Que como no se dieron cuenta que estaba se fue. Que luego lo llamaron, les dijo que iba a ir, pero no pasó.

Le contestó a la letrada que supone que algo del dinero sería para ellos, en referencia a Carrillo, pero seguramente algo era para Burgos.

Al señor defensor, doctor Martinez, le contestó que nunca abonó ni pagó lo que le pedían, que por eso tuvo esos problemas. Que nunca le hicieron un acta de constatación por parte del Ministerio de Trabajo por tener empleados no registrados.

Que en la obra del Pueblo San José no impugnó la resolución del Ministerio que le impuso la multa, no la pagó, no la podía arreglar en ese momento, no la respondió ni hizo el descargo. Que cuando le llegó la notificación no la leyó toda, que era una vergüenza, que sabía como venía la mano, no hiso el descargo, ni nada. Que en esa obra le habían pedido dinero y siempre se negó a pagar.

Acá se debe realizar una aclaración, dado que de la redacción del hecho y de lo expuesto por el testigo Simón surgiría que se trata de diferentes situaciones y circunstancias los distintos supuestos en los que al mencionado, ante distintas obras que ha ejecutado a lo largo del transcurso

del tiempo, se le ha exigido la entrega de una suma de dinero para no parársele la obra, no dar intervención al Ministerio de Trabajo o no realizar medidas de fuerza en la misma.

Ahora bien, si bien serían varios hechos independientes, el señor Fiscal los acusó como uno solo, y a eso debemos estar para no afectar el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio. Por ello, estas conductas realizadas por varias personas de común acuerdo, las que no han generado el perjuicio patrimonial al señor Simón, dado que no ha abonado las sumas que fueran pretendidas por los sujetos, deben ser consideradas como un solo hecho tentado de extorsión.

Por ello, con la prueba antes analizada, entiendo demostrado que entre los años 2012 al 2014, en el partido de Coronel Suarez, mientras estaba desempeñando su actividad laboral, llevando adelante distintas obras de construcción como la ampliación del hospital municipal de Coronel Suarez, una reforma en un edificio o la construcción de un depósito en la avenida Casey, a la altura del paso a nivel de Belgrano, al señor Luis Alberto Simón, al menos tres personas, le exigieron la entrega de una suma de dinero mensual de entre 4.000 a 5.000 pesos, para no ser denunciado ante el Ministerio de Trabajo o paralizar la obra, o concurrir a la misma con un montón de gente para hacer un piquete e impedir el ejercicio de su actividad laboral (hecho número 8).

Abordaremos ahora los hechos 9, 10, 11 y 12, los que han sido descriptos en la acusación de la siguiente forma: HECHO 9): A partir del mes de febrero de 2017 -aproximadamente-, en circunstancias en que la empresa "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L." se encontraba abocada a la realización de obras civiles en el "Predio Bahía Blanca", ubicado al Sudoeste de la Ruta 33 y al Noroeste de la calle Mariano Reynal, correspondientes al proyecto "Barrio PRO.CRE.AR" y consistentes en infraestructura de red de agua potable, infraestructura de red cloacal e infraestructura de gas (cuyo comitente era el Banco Hipotecario Nacional en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero PRO.CRE.AR.); los señores FABIÁN HÉCTOR GURRADO y GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA (socio gerente y apoderado de la citada constructora, respectivamente), fueron extorsionados por JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto) y SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Delegado Gremial y Segundo Vocal Titular), entre otros integrantes de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, quienes les EXIGIERON abonar a los operarios que trabajaban en la obra, UN AUMENTO SALARIAL DEL TREINTA Y CINCO POR CIENTO DEL SALARIO que percibían dichos trabajadores según el convenio salarial vigente aplicable al sector. Ante la coactiva exigencia, los representantes de la empresa constructora debieron suscribir el día 16 de marzo de 2017, en el marco del expediente

administrativo n° 21507-1001-17-00 de trámite por ante la Delegación Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, UN CONVENIO con Walter Rafael Paiz -en su carácter de Tercer Vocal titular de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca-, aceptando el pago de las sumas indebidamente demandadas.

Como consecuencia de la imposición, los directivos de las empresas constructoras pagaron a cada trabajador las sumas indicadas junto a la liquidación de los respectivos salarios.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 10): Durante el año 2017, cuando la empresa "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L." se encontraba abocada a la realización de obras civiles en el "Predio Bahía Blanca", ubicado al Sudoeste

de la Ruta 33 y al Noroeste de la calle Mariano Reynal, correspondientes al proyecto "Barrio PRO.CRE.AR" y consistentes en infraestructura de red de agua potable, infraestructura de red cloacal e infraestructura de gas (cuyo comitente era el Banco Hipotecario Nacional en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero PRO.CRE.AR.), el ingeniero GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA -gerente técnico de la citada empresa- fue citado a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (ubicada en calle Saavedra 470 de esta ciudad). En el lugar, el señor SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Colaborador Gremial y Segundo Vocal Titular del sindicato), le EXIGIÓ a EVANGELISTA la suma de CINCUENTA MIL PESOS POR MES durante el plazo de ejecución de la obra, como condición para que la misma pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Con posterioridad, fue citado a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el ingeniero FABIÁN HÉCTOR GURRADO -en su carácter de socio gerente de la citada empresa y a quien Evangelista había transmitido el requerimiento-, en esta oportunidad el señor SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES le exigió al empresario la suma total de QUINIENTOS MIL PESOS, los cuales debían ser abonados en mensualidades, durante la ejecución de la referida obra, como condición para que la misma pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los

integrantes de la UOCRA.

Finalmente, el ingeniero GURRADO le ABONÓ al señor SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES, en la sede de la UOCRA, la suma de VEINTE MIL PESOS. El dinero fue exigido y percibido por el señor CANALES con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

En esas mismas circunstancias, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS EXIGIÓ a FABIÁN HÉCTOR GURRADO y a GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA, que contraten para la referida obra los servicios de transporte a la empresa "FLOR DE LIRIO S.R.L.", el servicio

gastronómico de viandas a la empresa "EIS EVENTOS" y el servicio de baños químicos a la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L.", como condición para que la misma pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Como consecuencia de dicha imposición, los empresarios debieron abonar un costo superior al valor que por esos servicios ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 11): Desde el año 2007 hasta la actualidad, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca), EXIGIÓ a FABIÁN HÉCTOR GURRADO -representante legal-, a

GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA -gerente técnico- y a otros directivos de la empresa "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L.", el pago de sumas de dinero en forma mensual, como condición para que la referida constructora pudiera realizar las obras a su cargo sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. El monto de dichas sumas era variable -de acuerdo a la cantidad de obras a cargo de la empresa-, siendo en un principio de CINCO MIL PESOS hasta llegar a la suma de DIEZ MIL PESOS POR MES.

Como consecuencia de dicha imposición, desde el mes de enero de 2007 -aproximadamente- y hasta la intervención del gremio, el ingeniero EVANGELISTA y otros integrantes de la empresa damnificada ABONARON mensualmente las sumas exigidas a JOSÉ BERNARDO BURGOS, en dinero efectivo, en la sede de la U.O.C.R.A. (Saavedra 470 de Bahía Blanca). El dinero fue exigido y percibido por Burgos con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la Delegación local de la UOCRA.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal

desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 12): En circunstancias en que la empresa "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L." se encontraba realizando obras de pavimentación contratadas por la Municipalidad del Partido de Patagones, el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca), EXIGIÓ al ingeniero GUSTAVO ALEJANDRO EVANGELISTA (gerente técnico de empresa), el pago de sumas de dinero en forma mensual, como condición para que la citada constructora pudiera continuar sin inconvenientes ni planteos las obras que estaba realizando la citada constructora en dicho ámbito.

Dichas sumas de dinero fueron pagadas desde el año 2014 hasta diciembre de 2017 por el ingeniero EVANGELISTA a MOLINA, en la sede del sindicato local (Saavedra n° 470 de esta ciudad), en dinero efectivo, incrementándose el monto abonado -por decisión del imputado- hasta alcanzar la suma de DIECINUEVE MIL PESOS POR MES. El dinero fue exigido y percibido por el señor MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto).

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

Tengo en consideración la prueba que menciono a continuación como los principales elementos (además del resto de las constancias probatorias que se detallan en esta resolución y que se han mencionado con anterioridad), que permiten tener por debidamente demostrados los hechos materia de acusación fiscal e identificados como números 9, 10, 11 y 12.

Así, computo lo expuesto por el testigo Fabián Héctor Gurrado quien mencionó que es Ingeniero Civil, y desde hace 40 años socio de la constructora vial Ingeniería y Arquitectura srl., con sede en el Parque industrial, realizando obras en esta localidad y otras provincias y obras nacionales en cualquier parte del país. Que forma parte de la Cámara

Argentina de la construcción e integró la mesa ejecutiva a nivel nacional, siendo presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca hasta el 20 de diciembre del año pasado.

Contó que en reiteradas ocasiones le llegaron quejas en las que decían que gente del gremio pedía colaboraciones, en un principio para el funcionamiento normal de las obras, y que eso escaló a otras situaciones, cuando llegaron las grandes obras nacionales, que ahí subieron las pretensiones y se usaron prácticas que tenían que ver más con otras cosas que con la seguridad e higiene y las condiciones de trabajo para los compañeros. Que concretamente pedían colaboración mensual y en forma coercitiva, exigiendo convenios de trabajo por encima de los salarios de convenio, lo que afectó la situación económica de las empresas. Indicó que no había manera de negociar nada, las condiciones eran impuestas por el gremio, a ellos se los hacía concurrir a las oficinas del gremio y sino paralizaban todas las obras que tenía la empresa.

Que la colaboración era que se le entregaba dinero, dependiendo de la zona de la ciudad, a alguno de ellos una suma mensual que era exigida por ellos en función del tamaño de las obras. Que con el correr del tiempo se llegó a incrementar y exigir un porcentaje del contrato, no solo se pedía un plus para que el obrero ganara por encima del convenio, sino que tras ello venía el pedido de la cúpula.

Apuntó que no se convenía nada, que se imponía y atrás de la imposición del porcentaje en más de la mano de obra, venía el pedido del encargado del sector que pedía algo, sino no se podía trabajar.

Que cualquier convenio en salarios por encima no es reconocido por los comitentes, la empresa no se lo puede trasladar a nadie y eso es en perjuicio de la empresa; a diferencia de las obras privadas donde uno podría repetir contra el particular comitente. Que aparte del extra para el trabajador venía la contratación de la combi, ropa, catering, sino se paralizaba la obra.

Relató que su empresa tenía obras en dos o tres sectores de la ciudad y tenían que hablar con cada encargado del sector. Que en la obra del Procrear, era Canales el encargado de pedir para que la obra avance. En Suarez era Burgos, en Patagones era el señor Molina. Que un obrero cobraba distinto según a la obra a la que iba, según el encargado.

Dijo que no había un acuerdo, era una imposición. Que les decían "…nosotros queremos para que la obra funcione 10, 15, 20, o 50 mil pesos por mes y había que llevarlo al gremio a quien recolectaba…" –así sus palabras-.

Señaló que los aumentos salariales iban por recibo como todo lo que indica la ley, que "…esto es otra cosa, era una dádiva para poder trabajar, no eran colaboraciones…" –según sus dichos-.

Que en el barrio Procrear licitaron la obra, el valor de la mano de obra está en el pliego, y cuando se arranca la obra ellos piden reunión, querían que la gente gane más, y obligadamente firmaron un convenio con una suba del 35 por ciento sobre el valor convenido, y no le podían exigir a su comitente, el Banco Hipotecario, para trasladarlo. Que si no aceptaban la obra se paraba, ralentizaba, quedaba en asamblea cuando no pagaban. Que por eso agacharon la cabeza y firmaron el convenio, con el plus de mano de obra porque sino los iba a multar su comitente.

Contó que el señor Canales le insistía y lo citaba al gremio, que él se negaba a concurrir, pero tuvo que ir y en una oficina que está al frente le pasó un papelito con lo que pretendía por mes, para no decirlo en forma oral por si se lo estaba grabando. Comentó que tomaban en esto todas las precauciones del caso. Que lograban así pedir un número y esto lo hicieron con muchas empresas a lo largo de las obras. Que intentaron hablar con el gremio para marcar que esto no era correcto, pero no obtuvieron respuesta.

Señaló que la obra del Procrear a la que hace referencia estaba en la ruta 35, en las tierras del Ejército Argentino, la que comenzó a mediados del 2.016.

Que cuando la situación no daba para más, el gremio pedía hablar con el dueño y ahí trataban de mitigar el impacto de las condiciones, pero en la parte operativa estaba el ingeniero Gustavo Evangelista.

Relató que "…Canales le pidió el 3 por ciento del monto de la obra, que es algo muy importante, pero terminamos en algo así como 50 mil por mes, que era en relación al monto de la obra y el tiempo de duración, y era una obra de 6/7 meses…" –esas sus expresiones-.

Que además le requerían el sistema de combis Flor de Lirio, las viandas de Eis u otro lugar y los baños Acqua. Que al obrero no le daban la chance de recibir el concepto en el recibo y le daban la bandeja con la comida; que a muchos le interesa que le paguen el ítem para así poder decidir, pero acá esta posibilidad no existía. Dijo que Flor de Lirio es de Monteros, Acqua es de Burgos o alguien de su familia y el de las viandas desconoce. Que su empresa contrató estos servicios, y solo terminaron con estos servicios cuando llegó la intervención al gremio luego de todos estos acontecimientos por todos conocidos.

Aclaró el testigo que nombra esa obra, pero que esto era en todas las obras, que en las obras de pavimentación había que ir a tributar un dinero que variaba según ellos consideraban la obra más chica o más grande, más importante. Que además había pedidos por bonos de fin de año, de distintos elementos para la época escolar o día del niño, que eso es más de uso y costumbre, pero no tuvimos rendición de nada de eso que se hizo.

Recordó que en el año 2.015 les realizaron un pedido grande para la construcción del predio del gremio donde 5 empresas hicieron

cordones, bases y otras cosas y eso no fue acordado. Que estaban en el aeropuerto de Espora y "…tuvimos que ir a colaborar, entre comillas, por trabajos que fueron ejecutados en forma gratuita, no es una colaboración, es una extorsión, no se negociaba nada, era necesito esto y si no se hacía se paraba la obra…" –sus palabras-.

Que las empresas que tuvieron que hacer eso eran las que estaban trabajando en el aeropuerto, y eran Cerra y Moro, Coince, Carreteras 2.000, Abedul y la de él, que le parece que en el predio de recreación había otra empresa Bulwar. Dijo que él no participaba de las reuniones porque le hacía mal, que sí estaba en la reunión pero en la ejecución estaba Evangelista.

Apuntó que en la reunión estaban Burgos, Monteros, que no recuerda si estaba Molina, y distintas personas del gremio y de las empresas, dueños, supervisores de obra y ahí "…no se convino –eso es hablar mal- se nos obligó a hacer esas obras para el predio lindero al aeropuerto..." –sus dichos-; luego dijo que cree que estaba Paiz también en la reunión.

Que en cuanto a la contratación de las empresas para los distintos servicios no recuerda quien las exigió porque él no se dedicaba al día a día de eso, pero era voz populi que había que contratar con esas empresas de Burgos, Monteros y algún otro. Que si no recuerda mal

aportaron al expediente la documentación de la contratación de su empresa de esos servicios.

Sostuvo con relación a los premios anuales, que se juntaba la cúpula del sindicato, las principales autoridades y mandaban nota a las empresas en la que les decían que era un buen año y que querían firmar un acuerdo por 4000 pesos, que esto fue en los años 2.017 y 2.018, y que ellos se oponían, pero "…era firme y marche preso…", que nunca hubo negociación en ninguna situación, siempre fueron imposiciones. Que pagaron esos premios porque se homologaban en el Ministerio de Trabajo. Que recuerda uno de 4000 y lo mismo los convenios que se hacían por encima de la tabla acordada a nivel nacional, que eso está documentado en los recibos. Que estos premios no estaban vinculados con nada. Que normalmente se puede convenir previo al inicio, y capaz no tenía obra y había que pagar igual, acá no estaba vinculado con nada, salvo por el interés de tener gente contenta que les conviene. Los premios era por el solo hecho de estar en una obra que se consideraba más importante, que ellos no sabían si podían pagar o no, porque en esa época no había licitaciones y sí muy poco trabajo.

Que estos convenios impuestos se suscribían en el Ministerio de Trabajo, esa negociación era en el gremio luego de varias idas y vueltas en el que trataban de bajar el monto de las pretensiones, pero nunca tuvieron éxito. Que José Burgos era el que generalmente suscribía esos

convenios, puede haber alguna otra persona que no recuerde el nombre, puede ser algún delegado de obra.

Al doctor Jara le contestó que no realizó antes ninguna denuncia similar, que antes de la denuncia tenía conocimiento de este tipo de colaboraciones impuestas, pero la escalada de la situación hacía inviable el trabajo de las empresas y por eso se hizo la denuncia.

Apuntó que las empresas antes preferían estar trabajando, porque están para trabajar, no generar conflictos. Que quisieron trabajar aun aceptando imposiciones e igual vinieron los conflictos, y es por eso que se hizo la denuncia. También por el modus operandi, se tomaban las obras, se paralizaban las obras; antes eran los mismos, que cambiaron la modalidad.

Que se enteró en simultáneo de las declaraciones de Vidal, que no hicieron esta denuncia por ninguna cuestión mediática ni mucho menos, ya lo habían hablado con Burgos y Monteros diciéndoles que no se podían sostener estas situaciones. Que hay declaraciones antes de que hablara la gobernadora.

Que cuando habla de funcionamiento anormal se refiere a que hagan asambleas en la obra y no se pueda trabajar, se pagan los sueldos igual y no cumple con el comitente que la sanciona a la empresa.

Que le han "…parado la obra con asamblea por haberme atrasado en llevar la cuota al gremio, porque no le gustaba la vianda, no sólo

paraban la obra en cuestión sino todas las obras de la empresa…" –sus palabras-. Que indagaba por los motivos y las respuestas eran disuasivas, pero el fin era ir al gremio para arreglar. Pedían mejoras salariales, premio por finalización de obra, mejoras en las condiciones, pero además ir al gremio a arreglar.

Le contestó al letrado a cargo de la defensa de Molina que en seguridad hay un protocolo que se debe seguir, que por eso tienen ingenieros y la UOCRA puede controlar y hacer observaciones.

Que en alguna asamblea el motivo era que la vianda estaba fría si era de otra empresa y que la combi no los llevaba a su casa si era de otra empresa.

Dijo que desde la formalidad la UOCRA puede inspeccionar, pero estos temas se arreglaban cuando llevaba la cuota al gremio, mientras tanto estas asambleas crecían. Que lo tenía que hacer porque sino estás dos meses sin trabajar y el comitente le aplica una multa, y eso pasaba si hacía una conciliación obligatoria.

Apuntó que las herramientas legales siempre son la negociación, pero acá no se hacía eso, siempre se impuso. Que algunas negociaciones se hacían en el gremio y otras en el Ministerio de Trabajo, e iba el abogado de su empresa. Que la relación del Ministerio de Trabajo con el gremio es excelente, que no le consta si el delegado lo sabía o no todo

esto que pasaba, pero era voz pópuli. Que al delegado de ese momento no le contó, a otros delegados sí. Que él va una sola vez y luego va su asesor letrado.

Ante la consulta del doctor Jara contestó que la redeterminación de valores es la variación de precios de la obra a partir de la ley de convertibilidad, el gobierno estableció distintos mecanismos para que las ecuaciones económicas no se vean afectadas, pero que no hay posibilidad con valores firmados por encima del convenio, esos cambios de valores no se podían repetir contra el comitente. Que demanda de su empresa por estos aumentos, cree que en alguna obra han presentado, pero no hay posibilidad, la obra pública es contrato de adhesión, no se puede modificar nunca. Que si se le aplica una multa a la empresa no se puede realizar explicación y no hay posibilidad de que algo que sea por fuera del convenio sea reconocido en la obra pública.

Contestó al letrado de la defensa que durante la pandemia se pararon las obras, que esto le ha generado perjuicio, pero hasta ahora no ha reclamado nada, es todo demasiado reciente y no se sabe si se vuelve a parar todo.

Que cuando ha hecho referencia a las grandes obras se refiere a las obras viales que rodeaban la ciudad y que venían del presupuesto

nacional. Es la obra pública del kirchnerismo, que hoy es parte de una coalición.

Que quejas de otras empresas recibió, trató de hablar con Monteros que lo derivó con Burgos porque Monteros no estaba mucho en Bahía por problemas de salud. Que le decían que tenían muchísimas quejas, que se hacía imposible trabajar por las condiciones que se le imponían a las empresas.

Que no sabe si son 5 empresas las denunciantes, no miró el expediente. Que a él no lo llamó nadie, ni invitó a nadie para sumarse a la denuncia.

Que a Julia Pugnanoni no la conoce.

Que participación de los trabajadores en las utilidades de la obra no sabe si se pactó por alguna empresa. Que reconocimiento luego del final de obra sin intervención de la UOCRA no se pactó. Que en forma previa a la intervención de la UOCRA no se pactó beneficio para los trabajadores.

Volvió a reiterar ante las consultas del Dr. Jara que tenía que "…ir a arreglar, llevar la cuota solicitada, era plata de mi cuenta particular, era dinero en efectivo de mi cuenta particular, es parte de mi cuenta corriente, es plata blanca mía, está debidamente registrada, dinero sacado de mi empresa en blanco; que el dinero de mi cuenta es producto de mi

trabajo, que es la construcción…" –así sus expresiones-. Que no tiene socios en esa empresa, y que no procuró recuperar el dinero.

Expresó que normalmente se contrata a gente de la zona, que esto depende de la tipología de obra, si no hay gente capacitada en el lugar se trae de afuera, sino se prioriza a los del lugar. Que ha contratado gente de Viedma, maquinistas especializados, y es una comarca donde está el gremio SITRAIC que no tiene relación con este gremio UOCRA. Que antes las relaciones de las distintas seccionales de la UOCRA fueron cordiales en Viedma y Patagones, trabajaban juntos, con la llegada de SITRAIC a Viedma, que es nuevo, esto cambió.

Al doctor Martinez le contestó que en la reunión con Canales, cuando le entrega el papelito, estaba él solo, y que no dijo Canales para quien era el dinero, se limitó a pedir un monto.

Que la ciudad estaba dividida en cuadrantes y según la zona tenía que llevarle el aporte dinerario a Burgos porque era su zona, o a Canales porque era la suya. Que no le entregó dinero personalmente en manos a Burgos y que a Monteros no lo recuerda. Que generalmente todo era a través de Burgos y Canales. Reiteró que no le entregó dinero a Burgos, pero que le parece que en una oportunidad sí le entregó a Canales.

Refirió que él arreglaba alguna situación por ser el titular de la empresa, pero luego no iba a ejecutar la entrega, salvo la situación de

Canales. Que dinero en mano probablemente al señor Burgos le ha dado una vez, no está seguro, y al señor Monteros no recuerda.

Explicó nuevamente que todo lo que tiene que ver con el salario por encima del convenio no entra en una redeterminación del valor de obra, sí una suba de materiales y otros parámetros. Que las paritarias se abren una vez por año, por pedido de la UOCRA o la Cámara de la construcción y se fijan los valores salariales, que generalmente hay revisión cada seis meses siguiendo la inflación y siempre hay acuerdo.

Que el aumento del 35 por ciento por encima del convenio fue obra por obra, que no vio los convenios que firman otras empresas, pero diría que fueron para la mayoría de las obras. Que no fue un acuerdo marco, se negoció con cada empresa. Que en el caso de su empresa fue la primera vez, en el caso de otras empresas sabe que tuvieron que firmar ese tipo de convenios en otras oportunidades. Que después de la intervención lo mantuvieron en el tiempo hasta la finalización de esas obras donde estaban acordadas esas sumas. Luego en otras obras depende de la empresa, que ellos pagan paritarias o algún punto más por encima del convenio.

Con relación a la reunión por el predio camino al aeropuerto dijo que una se hizo en la CGT y otras en el gremio con las líneas inferiores de las empresas. Que él fue a una reunión, cree que en la CGT, donde estaban presentes dos o tres titulares de empresas y líneas intermedias, y también Burgos, Molina, Paiz y otra gente del gremio. Que no había nadie

de la CGT, que cree que estaba Monteros a cargo de la CGT, pero no recuerda si estaba en la reunión.

Que la charla fue en términos coloquiales fue "…muchachos nos tienen que dar una mano para hacer esta obra…", a lo que las empresas le contestamos "…pero como hacemos es mucha guita…", y nos respondieron, "…hay que hacer esto o hay que hacerlo, sino va a haber problemas…". Que el mal en concreto era no poder trabajar, no terminar las obras, hacer que se encarezcan los precios. Parar la obra era el mal concreto. Que en su caso personal no hubo otra conducta, salvo los modales.

Indicó que en seguridad e higiene dentro de la obra hay control de la UOCRA, que siempre encontraban algo y el Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación. Que tiene inspectores el Ministerio y han ido junto con el gremio, que es de uso y costumbre que vayan con el gremio y se levantan actas por esos temas, que a veces el gremio dice que hay una cuestión y el Ministerio dice que no es así.

Que ha tratado con varias gestiones, que antes de esta también era de práctica y costumbre llevar dinero; pero fue la escalada, la prepotencia y la pretensión de manejarte la empresa lo que llevó a hacer la denuncia. Que antes no denunció, pese a que era casi igual durante 40 años, bajo el mismo modelo de extorsión, pero no lo denunció.

Al doctor Jara le contestó que luego de esta denuncia no hizo otra contra la nueva dirección, que cesaron las retribuciones impuestas desde la intervención, y no volvió a pagar más.

Que conoce a Molina, habló pocas veces con él y no le pidió dinero a él. Que no se ha reunido a solas con Molina, quien sí ha estado en esas reuniones en la CGT por el tema del predio, que cree que estaba Molina. Que no lo puede precisar puntualmente porque en algunas sí estaba y en otras no, que a veces entraba y salía gente del gremio de la reunión. Que Molina no le pidió a él en persona una contribución.

Al señor Fiscal le contestó que las asambleas interrumpían la obra y no estaban autorizadas por el Ministerio de Trabajo; que supone que no sabía el Ministerio, y que a él nunca lo notificaron, que nunca la UOCRA o el Ministerio le solicitaron llevar a cabo la asamblea. Que en esas oportunidades se quedaban sentados sin hacer nada durante la asamblea, era un quite de colaboración, permanecían en la obra sin hacer nada.

Apuntó que cuando se refirió a escalada de prepotencia esto se daba con modales y formas que tienen que ver más con aprietes que con diálogos. Que esto hacía que se le tuviese temor a los miembros de la UOCRA, temor a que puedan accionar contra uno, su familia, o las máquinas que son un patrimonio muy valioso. Que el temor se lo generaban algunos más que otros, que con algunos se puede hablar más que con otros. Que de los presentes cree que uno de los más combativos era el

señor Molina, que con Monteros tuvo poco trato en los últimos tiempos porque estaba en Buenos Aires en un tratamiento. Que Burgos tenía fijado el objetivo y tenía que lograrlo.

Apuntó que el supervisor de obra era Gustavo Evangelista, quien se encargaba de llevar el dinero; es socio gerente de la empresa. Que sí sabe que se reunía con la gente de la UOCRA.

Ante nuevas consultas del doctor Jara, le indicó que Molina era de posición más dura, según el recuerda. Que está hablando de las reuniones en las que había más gente. Que no lo vio pedir algo, que si lo vio mantenerse muy firme en la posición. Que en las reuniones que estuvo presente Molina no pidió nada, que defendía con más vehemencia las pretensiones del sindicato. Que en las reuniones que estuvo él no recuerda si Molina pidió algo que fuera por fuera de un beneficio de los trabajadores. Que era combativo por las formas, que por lo menos con él tenía esa posición, por la intransigencia que mostraba en todo, era el más combativo, era la persona que no quería aflojar en nada.

Culminó señalando que luego de la intervención no tuvo asamblea, medida de fuerza y no sabe si inspección, que no le consta.

En el mismo sentido considero como prueba de estos hechos lo expuesto por el señor Gustavo Alejandro Evangelista quien comenzó señalando que es Ingeniero Civil, empleado y apoderado en algunas obras

de la empresa Ingeniería y Arquitectura desde el 2005 a la actualidad. Que esa empresa integra la Cámara de la construcción.

Relató que al inicio de cada obra eran convocados por el gremio, dependiendo la zona era quien lo convocaba, porque estaba diagramada en sectores y dividida entre la gente de la UOCRA, para hacerles un pedido de dinero por el período de duración de la obra; que se los convocaba al gremio, se escuchaban las exigencias, luego hablaba con los socios, se evaluaba el monto, se hacía en algunos casos una contra-oferta y luego de eso era habitual su visita mensual al gremio para entregar el monto solicitado.

Que en la Cámara de la construcción conversaban entre las empresas, entre ellas las 5 dedicadas a cuestiones viales, de las exigencias y esto era una cuestión natural y rutinaria del trabajo suyo.

Dijo que la convocatoria era para establecer un monto fijo que si la obra era muy grande se iba a ir actualizando.

Que en una obra por el plan Procrear cuyo comitente era el banco Hipotecario, y que se ejecutó en el año 2017 en terrenos del ejército y ruta 33, su empresa se encargó de la parte de agua, cloaca y electricidad, siendo en ese momento 3 las empresas contratistas.

Que, como dijo antes, cuando se iniciaba una obra era convocado por la persona del sector del gremio para ver el tema de la

mensualidad. Que en ese sector estaba Canales Sebastián y cuando se inició la obra lo convocó al gremio, que el declarante asistió y ahí le pidió dos cosas: que se le otorgue a la gente el 35 por ciento de aumento de jornal y la suma de 50.000 pesos mensuales mientras durara la obra. Que esta reunión se produjo en el gremio, estando sólo el testigo y Canales.

Refirió que se negó porque las dos cosas no tenían nada que ver con lo que hacían ellos, que por eso habló con Gurrado que es uno de los socios de la empresa para explicarle la situación, porque se le iba de las manos ese requerimiento excesivo. Que sabe que Gurrado se ocupó y ante la insistencia de Canales estuvo con él y arregló una suma de dinero, pero no sabe cuánto, ni participó de la entrega; y además a la gente se le sumó el 35 por ciento durante todo el tiempo de la obra.

Le contestó al señor Fiscal que la suma que exigía Canales no correspondía, que lo que pasa es que esto era habitual, y si no se pagaba se paraba la obra. Que el 35 por ciento sobre salarios no estaba en el convenio, que la empresa siempre paga lo que corresponde por convenio colectivo, y eso no estaba previsto en ningún lado. Que ese 35 por ciento afectaba la ecuación de la empresa, fue un gran perjuicio de la obra, la obra de infraestructura requiere mucha mano de obra, por eso el perjuicio es mayor y no se pudo reclamar al comitente porque era obra pública y no se podía reclamar porque no estaba en el arreglo con el banco Hipotecario.

Que acompañó documentación en la fiscalía del contrato con el banco Hipotecario.

Dijo que a Burgos lo conoció. Que debido a que la empresa cumplía con todo lo que exige la ley el trato con Burgos era cordial.

Reiteró que a cada inicio de obra era convocado al gremio para estipular el monto a entregar. Que a Burgos le llevó dinero mensualmente, la suma era variable, hace varios años que le entregó dinero, y fue algo así como 5.000 mensuales y en el último momento estaba en 10.000 pesos la obra, lo que pagó hasta que se produjo la desafectación del gremio, cuando renunciaron o tomaron licencia. Que una vez convenido el monto lo llamaba por teléfono y el declarante iba al gremio con el sobre que le daban en la empresa o se lo entregaba al delegado de la empresa cuando Burgos no estaba en Bahía Blanca. Que mensualmente se entregaba dinero. Que desconoce para que era el dinero, que no había ninguna contraprestación hacia la empresa. Que la entrega de dinero mensual equivalía a que la empresa trabajaba sin ningún contratiempo durante toda la obra, más allá que la empresa siempre cumplió con los requisitos que están en la ley.

Comentó que en el aeropuerto de Espora, donde participaron en una obra en una UTE y en la obra del Procrear en los terrenos del ejército, tuvieron que contratar a la empresa de viandas, el servicio de combis y al de baños que eran propiedad o de amigos de la gente del gremio. Que el servicio de combis lo prestaba la empresa Flor de Lirio, los

baños eran de Acqua y las viandas de Eis eventos. Que no sabe de quien era Eis y Flor de Lirio, pero que Acqua era vinculada a Burgos.

Comentó que en las obras locales no se provee la comida porque así lo indica el convenio, en el barrio del Procrear fue una imposición que tenían que entregar las viandas, y además, aunque ya tenían otro servicio de combis, les fue impuesto Flor de Lirio y también los baños, dado que ellos siempre trabajaron con Bassani y tuvieron que sacarla cuando les impusieron esta empresa. Dijo que la relación con Bassani era muy buena, no tenían problemas, incluso es amigo desde chico del dueño; pero esto fue una imposición que tenían que sacar las empresas que habían contratado para empezar a trabajar con estas que les decían.

Señaló que con respecto a las viandas de la empresa Eis no tiene referencia de los costos porque su empresa no entregaba vianda a la gente; que en lo que respecta a las combis el precio de la empresa Flor de Lirio era mayor pero no había más alternativa que contratarla. Que sobre esta cuestión entregó facturas en el Ministerio Público Fiscal y ahí están los valores que abonaban a las empresas anteriores y lo que se abonaba a las nuevas, que ahí están los valores expuestos.

Expresó que en la zona de Patagones, Stroeder, Villalonga han realizado muchas obras de pavimentación, que incluso tienen una planta de asfalto en Viedma para ello. Que como el gremio tenía dividida las zonas de trabajo, cuando se iniciaban las obras en Patagones, lo convocaba

Guillermo Molina al gremio, dado que el mencionado tenía asignada esa zona. Que la mecánica era la que ya relató, empezaba la obra, lo convocaban al gremio, escuchaba la propuesta, se reunía con los dueños y hacía una contrapropuesta o les pagaban lo que pedían. Que las últimas cuotas cuando finalizó este tema eran de unos 19.000 mensuales que abonaba en el gremio; que fue por el inicio de esta causa que se terminaron estos pagos.

Indicó que la empresa no recibía contraprestación por los pagos, simplemente que la obra no se pararía nunca, y ello a pesar de que la empresa cumplía todo lo que exige la ley. Los montos se pagaban desde inicio de cada obra, la zona estaba dividida en sectores donde cada uno era el encargado de esa obra, Molina era el encargado de Patagones, Stroeder, Villalonga, y el declarante iba al gremio a pagar a la UOCRA.

Que el monto de 19.000 era mensual, ese pago lo recibía el encargado de cada sector; en el caso del Procrear era Canales, en Bahía y Suarez el señor Burgos y en la zona sur era el señor Molina.

Consultado por el Ministerio Fiscal por un premio de fin de año en el año 2.016, dijo que los convocaron a la sede de la Secretaria de Trabajo, que el declarante asistió en representación de Ingeniería y Arquitectura y ahí hubo una reunión para exigir el pago de un premio de fin de año, cuestión que excedía el convenio colectivo. Que se pagaron 4.000 pesos y la UOCRA pedía 8.000. Que para fijar este monto hubo una sola

reunión que recuerde el deponente, entre el gremio y las empresas, que los empleados de la Secretaría de Trabajo no participaron.

Que la reunión había sido convocada a la Secretaría de Trabajo, pero los integrantes de la misma no participaban, una vez que las empresas y el gremio se ponían de acuerdo se hacía el acta correspondiente, pero en las negociaciones la Secretaría nunca participó.

Que no correspondía el pago del premio porque está fuera del convenio, la empresa paga lo que corresponde según el convenio colectivo. Que un premio nunca han pagado salvo esa vez, que no sabe lo que es un premio, dado que no tenía experiencia en pagar eso. Que ese monto se les pagó a todos los obreros. Que en la reunión por la UOCRA estaba Burgos y alguno más que no recuerda su nombre.

Consultado por obras en el predio de la UOCRA, respondió que en el año 2015 estaban trabajando en la repavimentación del aeropuerto de Espora junto a Vial Agro y por ese momento fueron convocadas a una reunión en el gremio todas las empresas viales, a los efectos de ponerlos en conocimiento que tenían que colaborar en la finalización del predio. Que de esa reunión recuerda, entre otros, a Burgos. Que tuvieron varias reuniones porque no se ponían de acuerdo, que las empresas no entendían porque tenían que hacer esa obra gratuitamente, que no querían, y tampoco en el período para ejecutarla porque era una

obra muy cara, con mucha mano de obra y materiales, dado que era una obra de asfalto y cordón cuneta.

Que participaron Vial Agro, Ingeniería y Arquitectura, Carreteras 2000, Abedul, Cerra y Moro, Coince, CV1. Que algunos aportaron más y otros menos, que su empresa llevó la parte más grande porque tenían equipamiento y personal muy cerca, junto a la empresa Vial Agro.

Consultado por el señor Fiscal de por qué hicieron la obra? Dijo que por una exigencia del gremio, porque sino se paralizaban las obras que tenían en Bahía y la zona.

Que como las empresas no querían hacer esta obra, porque era una erogación muy grande, se fue pasando el tiempo y como venía alguien de la seccional del gremio de Buenos Aires, cree que Gerardo Martinez, y la tenían que terminar para una fecha, fue que por eso las exigencias fueron mucho mayores a medida que transcurría el tiempo que dejaban pasar las empresas porque no estaban de acuerdo en hacerla.

Consultado por el doctor Jara dijo que normalmente les pedían del gremio que llevasen la documentación del personal, el 931, recibos de sueldo, art. Que siempre llevaban todos los papeles antes de iniciar la obra, o a los pocos días de iniciada, y ahí era el pedido de dinero. Que este pedido de documentación era a los efectos de convocar al gremio para

después pedirles el dinero. Que esto no es una apreciación, que esto era así siempre. Que al iniciar la obra lo convocaban telefónicamente con el pedido de la documentación, lo cual se hizo durante varios años y siempre se entregaba todo, con todo al día, y ahí luego venía el pedido de dinero. Que los pagos al personal es quincenal, la empresa tiene cada 15 días los recibos de sueldo, y esa documentación no era controlada, el declarante iba mensualmente a entregar dinero, no documentación. Que su empresa siempre tenía todo en regla, por lo que no sabe que pasaba si no se cumplía con algún requisito.

Le respondió al doctor Jara que el encargado de controlar los sueldos, la seguridad y la higiene en la obra es el Ministerio de Trabajo, que no sabe si la UOCRA tiene facultad de controlar, pero que llevaban la documentación que les pedían al gremio para que no les pararan la obra.

Refirió que en el año 2015 fueron convocados para entregar una suma de dinero para la compra de bicicletas para un sorteo en el gremio o para la entrega a los chicos.

Que el gremio tiene una bolsa de trabajo de gente desocupada y les recomendaba alguna persona de acuerdo al puesto que necesitaran. Que en la zona de Molina el gremio tenía un delegado en Patagones, no recuerda su nombre, que era la mano derecha de Molina en Patagones y les

recomendaba alguna gente cuando iniciaban la obra, a veces la tomaban si convenía según el currículum y si no convenía no se la tomaba.

Consultado por el móvil sanitario de la UOCRA, dijo que tiene entendido que es un servicio de enfermería y demás que lo han implementado. Que en la zona de Molina no recuerda si estaba el móvil sanitario, en las obras de la empresa alguna vez ha ido alguna enfermera del gremio a vacunar a la gente del gremio, pero no tiene más registro que eso.

Expuso que le daban el sobre con el dinero y él lo llevaba al gremio, que no sabe como se contabilizaba, no tiene idea de eso, no participa de eso ni es su función. Que la empresa factura todo en blanco y tiene a todo el personal en blanco, por lo que eso eran retiros de caja o ganancias. Que como está todo en blanco eso se pone como retiro de socios, que no es contador pero entiende que no hay posibilidad de sacar el dinero cuando una empresa está en blanco, la única manera es como honorarios de socio, que además paga el 35 por ciento de ganancias, entre otras cosas. Que no sabe si había algún otro retiro de socio. Que en la empresa cada pago es contra factura o comprobante, pero no los de la UOCRA.

Dijo que reclamos por empleados no registrados en la zona de Molina no recibió.

Que la empresa consulta con abogados en temas legales. Que antes de la reunión por el premio no consultó a un abogado, dado que no podían evitarlo porque era la exigencia como la de las mensualidades que llevaban por obra, si no se pagaba se para.

Que no sabe que es una conciliación obligatoria. Que en virtud de que cumplían en todo no tiene recuerdo de que le pararan la obra.

Que casi exclusivamente hacen obra pública, participan de licitación pública, y en la licitación son dos sobres, el uno con la documentación de las empresas y en el dos la parte técnica, análisis de precios, plan de trabajo y precio final que uno ofrece. Gana normalmente la del mejor precio, si no ocurre ningún inconveniente en la que saca el precio mejor por el tema de antecedentes o demás. El mejor precio es el más bajo de los contendientes. Para el costo de la mano de obra se hace un estudio de cada ítem y se ve el personal, la calificación del personal para la tarea, para sacar el valor del ítem y luego el global. Que además está el costo de los materiales, etc.. Que si en el curso de la obra alguno de los costos varía la herramienta es la redeterminación de precios que son los índices que refleja el nivel de la construcción, eso lo fija el comitente, son índices del gobierno y se calcula para las empresas para los certificados según el ítem. Que el gobierno elabora los índices, los comitentes redeterminan el precio y uno tiene que aceptar esa redeterminación, no se puede no aceptar un aumento de precios, “como no se van a aceptar” apuntó. Que hay índices y

el gobierno los aplica para las empresas, y normalmente esos índices no reflejan el aumento real de los precios.

Contestó que una paritaria a nivel nacional sí influye en la redeterminación, ya que esta incluye la mano de obra, valor dólar, materiales, combustibles, insumos, etc. Que la mano de obra se fija en la paritaria, cuando aumenta la paritaria aumentan los índices, no así con respecto a algún otro convenio, él único que rige es la paritaria.

Al doctor Martinez le contestó que estos pagos mensuales comenzaron hace mucho tiempo, que puede ser que sea en el año 2007, dado que el declarante regresó a Bahía en el 2005. Que se daban las llamadas por teléfono habituales, la convocatoria al gremio, y se pagó hasta el inicio de la causa o que se tomaron licencia o renunció la cúpula, hasta esa fecha. Que no hicieron antes una denuncia, que no denunciaron porque era habitual, era una costumbre mensual por cada obra nueva que se iniciaba.

Que no sabe, no recuerda que se abonara un bono de fin de año en el 2014 y 2015. Que si a nivel nacional se acordaba eso y estaba homologado lo hubiesen pagado, lo que estaba homologado se pagaba.

Al doctor Zorzano le contestó que la contratación de las empresas las exigió Burgos.

Ante nuevas consultas del doctor Jara dijo que ahora no se realizan pagos mensuales, no se pactaron premios ni aumentos de sueldo por fuera de la paritaria. Que no sabe si hay bolsa de trabajo y el gremio no está pidiendo nada ahora. Que no se contrató gente de la bolsa de trabajo.

Que lo que se paga por fuera del convenio incide en la empresa, lo que está en convenio no incide. Que sin duda, si no se pagan cosas por fuera de lo previsto tiene un impacto positivo en la economía de la empresa. Que la empresa por cada trabajador paga entre un 80 a 85 por ciento más de lo que sale el empleado, estimativamente dado que es difícil de calcular. Que este costo por trabajador no ha cambiado desde la denuncia.

Que no sabe para que era la plata que llevaba a la UOCRA, que solamente llevaba el sobre y a la empresa no le traía ninguna contraprestación. Que no sabe para que usaba la plata la UOCRA, no preguntó para que era esa plata y no le dijeron para que era la plata. Que tampoco le dijeron que la plata fuera para la persona que recibía el dinero.

El testigo Roberto Antonio Limpiante, convocado por el doctor Jara, a cargo de la defensa del señor Guillermo Molina, prestó declaración a través del sistema remoto Microsoft Teams, señalando que conoce al señor Molina por haberse desempeñado entre los años 2.015 al 2.107 como obrero de la construcción en Carmen de Patagones, estando como

colaborador del gremio UOCRA en esa localidad, llevándole todos los reclamos al compañero Guillermo Molina.

Dijo que ante una obra nueva le pasaba el parte a Molina que iniciaba la obra, el nombre de la empresa y el mencionado se comunicaba con la empresa y luego el declarante le presentaba la bolsa de trabajo a la seccional.

Le indicó al doctor Jara que había una oficina de la UOCRA en Patagones, donde habían alquilado un local para poder atender a los compañeros desocupados, y de ahí salía la bolsa de trabajo y todas las necesidades que había. Que el alquiler lo pagaba la seccional Bahía Blanca y con la misma tenían contacto a través del señor Guillermo Molina.

Señaló que el declarante le pasaba el reclamo cuando había diferencia salarial y Molina les mandaba la nota que había que presentar en el Ministerio para reclamar. Que también le pasaba la bolsa de trabajo al señor Molina para que hable con las empresas, y se les conseguía trabajo a la gente de la bolsa.

Dijo que había una obra en el boulevard Moreno, del barrio Procrear, la que hacía Ingeniería y Arquitectura, y el dueño era un tal Evangelista. Que el declarante hablaba en Patagones con la persona que estaba a cargo, y con Evangelista hablaba el señor Guillermo Molina.

Le respondió al doctor Jara que no realizaron ninguna medida de fuerza en esa obra, ni en otras obras de esta empresa en la zona.

Que él ha participado de medidas de fuerza en obras, que siempre se hacían porque no pagaban las quincenas en tiempo y forma, se hacía el reclamo en el Ministerio y luego hacían una asamblea de dos o tres horas y seguían trabajando. Que de las medidas de fuerza estaba al tanto la delegación central de Bahía, que ellos les daban instrucciones para actuar para que los compañeros cobren en tiempo y forma, y siempre se resolvieron los reclamos.

Expresó que en obras de la empresa de Ingeniería y Arquitectura no tenían incumplimientos; que solo en la primer parte cuando empezaron la obra que tenían gente de ellos, y luego se tomaron compañeros y pudieron trabajar tranquilos.

Refirió que cuando había necesidades de algún compañero que no tenía trabajo, él le pedía a Molina y se lo solucionaba.

Que tiene entendido que Ingeniería y Arquitectura colaboraba. Que siempre fueron voluntarias las colaboraciones.

Expuso que ayuda a la gente en Patagones con mercadería, útiles escolares, garrafas, ropa, para pagar la luz o el gas, alquiler, y medicamentos, o viajar por temas de salud con los hijos, siempre se han dado. Que esa ayuda salía de la seccional Bahía, que le pasaba el reclamo

al compañero Molina y él se encargaba de solucionarlo, y ellos repartían a la persona que necesitaba.

Expuso que de las medidas de fuerza en algunas empresas no participaban todos los trabajadores por temor a que la empresa los despida, que el que quería participaba, no era obligatorio.

Que conoce el móvil sanitario el cual recorría la seccional haciendo capacitaciones y para tomar la temperatura, y con un capacitador para hacer primeros auxilios y esas cosas. Que en Patagones no pudieron lograr hacer una capacitación de ese tema. Que no sabe quien pagaba el móvil.

Refirió que hicieron un evento de fiesta del día del niño, del obrero de la construcción, y plenarios de delegados. Que los recursos para eso venían de la seccional. Que se encargaban de pagar el salón y de los premios que traían, bicicletas y cosas para sortear a los hijos de los trabajadores.

Indicó que una obra en el parque eólico en Villalonga la hizo la empresa Geneia y Milic. Que había un convenio aparte de la paritaria, que el porcentaje cree que era el doble en presentismo más 10 por ciento, y un 30 por ciento por encima de la paritaria nacional. Que también había premio de fin de año en esa obra.

Que el convenio marco lo hizo Bahía Blanca y se firmó en el Ministerio de Trabajo.

Le respondió al doctor Jara que antes de la llegada de Molina al gremio las empresas no tenían relación con los trabajadores, no tenían trato. Que no tenían delegado hasta que llegó la seccional y se hizo cargo de Patagones. Que antes cuando entraban a trabajar lo era sin esos beneficios de tener delegado y respaldo gremial. Que no podían hacer reclamos.

De toda la prueba que se viene analizando –junto con la documentación y demás prueba ya mencionada- se puede concluir que se han acreditado los hechos materia de acusación e identificados como números 9, 10, 11 y 12.

El testigo Limpiante no aportó nada con relación a los mismos, a excepción de indicar que el señor Guillermo Molina se ocupaba de lo que ocurría en la zona de Patagones y Villarino, recibiendo las inquietudes que el señor Limpiante le acercaba y dándoles trámite, siendo además quien hablaba con el señor Evangelista.

Ahora bien, no presenció los hechos relatados por los testigos Gurrado y Evangelista, y esos testimonios, que me han impresionado como absolutamente veraces, dado que su estado de ánimo se correspondía con

lo que estaban relatando, tienen la entidad suficiente para arribar al estado de certeza que permite afirmar la existencia de estos hechos.

Tanto Gurrado como Evangelista fueron contestes en afirmar como era la mecánica de quienes se presentaban en las obras invocando la condición gremial, para luego convocarlos a la sede del gremio, donde les solicitaban la entrega de una suma de dinero, la firma de un convenio por aumento de salario, o la contratación de determinadas empresas de prestación de servicios para los trabajadores bajo la amenaza de que sino se verían entorpecidas sus actividades laborales y las obras de la empresa a la que pertenecían o de la que era el dueño.

Dieron cuenta que distintas personas integrantes del gremio eran las que los obligaron a realizar esto bajo intimidación de complicar el desarrollo de las obras si no accedían; aclarando que en las obras de su empresa no había ningún inconveniente técnico o legal que no cumpliesen.

Por todo ello, entiendo que quedó debidamente demostrado que en el año 2017, mientras la empresa Ingeniería y Arquitectura se encontraba efectuando una obra en el Predio Bahía Blanca, ubicado en la Ruta 33 y la calle Mariano Reynal, correspondientes al proyecto "Barrio PRO.CRE.AR", al menos tres personas intimidaron a los señores Fabián Gurrado y Gustavo Alejandro Evangelista, mencionándoles que si no otorgaban una mejora salarial a los trabajadores les pararían las obras, y los obligaron a firmar un convenio con un aumento salarial del 35% por encima

del sueldo de convenio nacional, con fecha 16 de marzo de 2017, en el marco del expediente administrativo n° 21507-1001-17-00 de trámite por ante la Delegación Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, debiendo abonar en consecuencia esas sumas de dinero a todos los trabajadores de la empresa (hecho número 9).

También en ese mismo año y con motivo de esa misma obra, a los integrantes de la empresa Ingeniería y Arquitectura, los señores Fabián Gurrado y Gustavo Evangelista, al menos dos personas los intimidaron dándoles a entender que no podrían continuar con la obra –la que sería paralizada con medidas de fuerza, aún cuando la empresa tenía todo en regla- si no abonaban una suma de dinero mensual de 50.000 pesos, y si no contrataban los servicios de transporte de pasajeros de la empresa Flor de Lirio SRL, de provisión de viandas de la empresa EIS y de baños químicos de la empresa Acqua. Producto de esta conducta, el señor Gurrado le abonó a uno de estos sujetos la suma de 20.000 pesos; y además contrató los servicios de las tres empresas antes mencionadas durante los meses que duró la obra (hecho número 10).

Por otra parte, también está demostrado que desde el año 2.007, hasta la renuncia al gremio de la última dirigencia electa en el gremio UOCRA, en esta ciudad de Bahía Blanca, al menos una persona, que se desempeñaba como Secretario Adjunto del sindicato, le exigió a los señores Fabián Gurrado y Gustavo Evangelista, integrantes de la empresa Ingeniería

y Arquitectura, el pago de sumas de dinero en forma mensual (de entre 5.000 a 10.000 pesos), como condición para que la referida constructora pudiera realizar las obras a su cargo sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA, sumas que fueron abonadas mensualmente por los mencionados (hecho número 11).

Por último, como ya mencioné, también se ha demostrado el hecho número 12 materia de acusación fiscal, ya que está establecido a partir de la prueba producida que en el partido de Patagones, desde el año 2014 y hasta diciembre del 2017, en circunstancias en que la empresa "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L." se encontraba realizando obras de pavimentación contratadas por la Municipalidad, al menos una persona, quien revestía la calidad de Secretario de Finanzas del gremio UOCRA, le exigió al señor Gustavo Evangelista, gerente de la empresa mencionada, que abonase una suma de dinero mensual, el que llegó hasta la suma de 19.000 pesos, bajo intimidación de que si no se cumplía con esto las obras de la empresa se verían entorpecidas, sin que existiese motivo para ello, y no pudiendo entonces trabajar. Por esto, ante el temor que le causó esta situación, la empresa Ingeniería y Arquitectura cumplió mensualmente con la entrega de las sumas de dinero peticionadas por esta persona (hecho número 12).

Con relación a los hechos 13, 14 y 15, que paso a analizar, han sido así descriptos: HECHO 13): A comienzos del año 2015, en

circunstancias en que la empresa "CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A." comenzaba la ejecución de tres obras civiles en la ciudad de Coronel Suárez (consistentes en la construcción del Jardín de Infantes B° El Rosario; el jardín de infantes N° 913 y la Escuela Secundaria N° 5 -ex E.S. N° 6-, de las que resultaba comitente la Unidad Ejecutora Provincial y que fueron adjudicadas por licitaciones públicas N° 4/14, N° 147/13 y N° 3/14 -respectivamente-), el ingeniero LUIS GUSTAVO CARCERENY -representante legal de la citada empresa- fue citado a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la U.O.C.R.A. (ubicada en calle Saavedra 470 de esta ciudad). En dicha entidad gremial, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS -Secretario General Adjunto del sindicato-, exigió a CARCERENY la suma de DIEZ MIL PESOS MENSUALES por cada una de las referidas obra.

Como consecuencia de la exigencia extorsiva del dirigente sindical, los ingenieros LUIS GUSTAVO CARCERENY y MANUEL CARCERENY debieron abonar a BURGOS la suma de TREINTA MIL PESOS POR MES, durante los diez meses que demandaron las obras (totalizando la suma de trescientos mil pesos).

Así también, en dicha oportunidad, BURGOS les exigió que debían contratar el servicio de baños químicos para las obras a la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." y que la totalidad de los obreros contratados

para la obra debían ser afiliados a la UOCRA y resultar de la "bolsa de trabajo" de dicho sindicato.

Como consecuencia de dicha imposición, los empresarios debieron abonar por los baños químicos un costo superior al valor que por ese servicio ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

El cumplimiento de dichas exigencias (pago de las sumas de dinero y alquiler de los baños) eran impuestos extorsivamente como condición para que las referidas construcciones puedan continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

El dinero fue exigido y percibido por Burgos con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la Delegación local de la UOCRA.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales entre ellos ANIBAL ALEJANDRO ARANDA-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de

las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

Como consecuencia del accionar desplegado por los sindicalistas y las coactivas exigencias de éstos -que generaron conflictos gremiales que tornaron imposible la ejecución de las obras-, a principios del año 2016 la empresa debió rescindir de mutuo acuerdo los contratos de obra suscriptos con la Unidad Ejecutora Provincial, quedando las obras inconclusas.

HECHO 14): Durante el año 2017, en circunstancias que la empresa "CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A." se encontraba ejecutando la obra de ampliación de la red cloacal en la localidad de Carhué (cuyo comitente era la Municipalidad del Partido de Adolfo Alsina), el ingeniero LUIS GUSTAVO CARCERENY -representante legal de la citada empresa- fue citado a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (ubicada en calle Saavedra 470 de esta ciudad). En dicha sede gremial, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la entidad), le exigió al ingeniero CARCERENY la suma de CUARENTA MIL PESOS POR MES,

para que la referida construcción pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Como consecuencia de la exigencia coactiva del citado dirigente sindical, los ingenieros LUIS GUSTAVO CARCERENY y MANUEL CARCERENY debieron realizarle a Burgos TRES PAGOS MENSUALES DE CUARENTA MIL PESOS CADA UNO, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2017.

Dichos pagos eran retirados de la sede de la empresa "Carcereny Construcciones" por CARLOS ARIEL CARRILLO.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplente y Delegado Gremial de la UOCRA) amenazó a Manuel Carcereny, advirtiéndole a Martín Alejandro Schtargloff (empleado de la empresa constructora "Carcereny Construcciones S.A."): "A Carcereny lo vamos a reventar", "decile que él me conoce bien a mí".

Asimismo, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y,

en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

El dinero abonado por la víctima fue exigido y percibido por Burgos con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la Delegación local de la UOCRA.

HECHO 15): Durante el año 2017, cuando la empresa "CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A." construía instalaciones destinadas al Jardín de Infantes N° 910 de la localidad de Pedro Luro e instalaciones destinadas al edificio de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 2 de la localidad de Mayor Buratovich (ambas ordenadas por la Municipalidad del Partido de Villarino y adjudicadas por Licitaciones Públicas N° 11 y N° 12 de 2014), el ingeniero LUIS GUSTAVO CARCERENY fue convocado a la sede de la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) Seccional Bahía Blanca, por el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca). En dicho lugar, el señor MOLINA le EXIGIÓ al señor LUIS GUSTAVO CARCERENY, la suma de VEINTE MIL PESOS POR MES, como condición para que la empresa "CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A." pueda continuar desarrollando

las referidas construcciones sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Como consecuencia de la exigencia extorsiva del citado dirigente sindical, el señor CARCERENY le ABONÓ a MOLINA la suma de VEINTE MIL PESOS POR MES (diez mil por cada obra), durante el lapso de diez meses (totalizando en consecuencia la suma de doscientos mil pesos), que fueron recibidos por MOLINA en la sede de la empresa (sita en calle Pablo Acosta n° 87 de esta ciudad), en forma personal o a través de colaboradores.

El dinero fue exigido y percibido por MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación,

ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

Para tener por debidamente demostrados y recreados los hechos materia de acusación e identificados por el señor Agente Fiscal como números 13, 14 y 15, computo lo expuesto en la audiencia de juicio por el señor Luis Gustavo Carcereny, en cuanto el mencionado relató que es Ingeniero Civil, titular de Carcereny Construcciones que es su empresa, dedicada a obras civiles de escuelas y jardines, agua, gas, infraestructura, escuelas para la provincia y las obras de infraestructura para los municipios, en Bahía Blanca y la zona.

Que en la localidad de Suarez realizó obras, dos jardines y una escuela. Que arrancaron a principios del 2.015 y se paralizaron en noviembre o diciembre del mismo año. Que antes de arrancar las obras los citan de UOCRA y les dicen que tenían que usar personal afiliado a UOCRA, que no podían tomar a otros, que por eso tomaron a esa gente y empezaron a trabajar. Que primero arrancó una obra y luego las otras dos. Que les ponen un delegado y un sub delegado como marca la ley y corresponde, acotando que su empresa cumplía con todas las reglamentaciones que exigía la ley. Que los delegados nunca trabajaron y luego empezaron los problemas cuando ya empezaron con las obras.

Relató que lo citó Burgos a las oficinas de UOCRA en calle Saavedra y los apretaron diciéndoles que tenían que pagar 10 mil pesos por cada obra, y tuvieron que acceder porque era eso o no se podía trabajar.

Indicó que hacían asambleas permanentes sin aviso, que el día se perdía y los jornales los tenían que pagar. Que su hijo estaba a cargo de esas obras y lo sufrió bastante.

Que "…en la UOCRA nos citaban y había 15 o 20 personas grandecitos afuera y había que pasar a través de esa gente que no se sabe si son empleados buscando trabajo o matones que tienen ahí. En el salón de la UOCRA había otros 15 matones y nos hacían esperar para demostrar que estábamos en un medio hostil y luego nos hacían pasar a una oficina donde estaba Burgos y ahí nos imponían las condiciones…" –así sus dichos-.

Expresó que los hacían llevar toda la documentación legal pero cuando entraban decían esto lo dejamos al costado y les decía son 10 "lucas" por obra, por lo que pagaban 30 "lucas" por las obras.

Que jamás vio que revisaran algo y nunca le reclamaron que le faltara algo. Que ha llevado biblioratos de documentación que le daba a Burgos o a Molina, con los que arreglaban después, "…teníamos que terminar arreglando..." –afirmó-.

Que le decían “para que trabajes y no tener problemas ahora tenés que poner 10 mil pesos”. Que la reunión no era para una revisión de la documentación legal de la gente, era una excusa para que vayan y pedirles plata. Que les hacían la asamblea y un acta con toda la documentación que tenían que llevar e iban y no les importaba, quedaba a un costado y nunca les dieron un recibo de esa documentación, quedaba al costado y les decían “tenés que poner 10 lucas por mes”.

Que las asambleas lo que buscaban era dilatar el plazo de obra, como se pagaba mensual lo que ellos buscaban era dilatar, estar cobrando durante más tiempo 30.000 pesos.

Que había momentos en que el delegado Aranda (el sub era Hoyos) decía qué era lo que se hacía en la obra, todo era patoterismo, que ellos decían de hacer la pared aquella en vez de la que se le indicaba. Que cuando echaban a alguien por algún problema tenían una cadena de sucesos en el Ministerio de Trabajo en Suarez.

Apuntó que los atrasos generan perjuicio porque les aplican multa por incumplimiento del plazo de obra. Pagan además los jornales caídos y todo se encarece, “…por eso la solución más barata es agachar la cabeza y hacerle caso a esta gente, se pagaba porque estábamos presionados y era la única forma de seguir trabajando…” –sus palabras-.

Relató que los 10.000 por cada obra por mes fue hasta septiembre u octubre, que empezaron a tener problemas financieros porque la provincia dejó de pagar. Que cuando pagaban atrasados la quincena, le avisaban a UOCRA. Que luego pararon las obras porque no daba para más y ahí tuvieron muchos roces con Burgos, sobre todo su hijo.

Indicó que los pagos eran en efectivo en las oficinas de su empresa en calle Pablo Acosta. Lo ponían en un sobre cerrado y se lo dejaban a la secretaria, le ponían “Burgos” y le mandaban un mensaje de “legajos a disposición”, “documentación a disposición”, y alguien aparecía diciendo que era de parte de Burgos, que conocían y le daban el sobre. Que Paiz ha ido, y también otro con la cara quemada que no recuerda el nombre.

Dijo que llamaba la atención que el delegado y sub delegado no iban a trabajar, que eran Aranda y Hoyos. Que eso lo pone el gremio por la cantidad de obreros que hay. Normalmente el delegado cumple función sindical pero tiene que estar en la obra, pero estas personas no iban. Dijo que las asambleas deben ser fuera de los horarios de trabajo o en la comida, y dar aviso, y esto no ocurría.

Que se cobra sueldo de oficial por ser delegado y Aranda exigía cobrar unos pesos más personalmente para que no haya lío.

Expuso que en el caso de Suarez les impusieron la contratación de baños Acqua, que tiene entendido que era de la hija de

Burgos, que tenían que alquilar esos baños. Dijo que no fue una decisión voluntaria, "…era ese o ese, que Burgos, Aranda y los delegados fueron los que impusieron alquilar esos…". No podían poner otro, si ponían otro tenían problemas.

Comentó que el servicio era malo, no cumplían con el proceso semanal de limpieza del baño, que ellos reclamaban y no venían. Dijo que él hubiese optado por otro servicio, hubiese pedido dos o tres precios y ver cual le convenía y si no cumplía lo podía echar, pero en este caso no lo podía echar. Que estos baños químicos estaban en las tres obras durante todo el tiempo que duraron, unos 7/8 meses.

Consultado sobre por que señaló que el ambiente en la UOCRA era hostil contestó que "…cuando usted llega a un lugar y encuentra a 15 personas en la vereda interponiéndose en la puerta, pide permiso y no se corren, lo miran despectivamente o amenazantemente, entra, encuentra otras 15 personas que lo miran y lo hacen esperar unos 15/20 minutos, parece para ablandarlo y que sintamos en el ambiente en que estamos, esto resulta totalmente hostil…" –así sus expresiones-.

Relató que en Suarez las reuniones del Ministerio de Trabajo cada vez que echaban a alguien se notaba que el encargado era muy allegado a Burgos. Que a la mayoría de las reuniones fue su hijo; pero cuando echaron a todos cuando se paralizaron las obras empezó a ir con su hijo, recordando que en una reunión la delegación estaba cerrada, que

estaba a cargo de Freitas que era de Mar del Plata, y llegó Burgos y abrió con la llave la delegación del Ministerio, prendió las luz y los hizo pasar y les dijo que iban a esperar que llegara el delegado. Que eso demostraba que la imparcialidad estaba rota, que si este hombre tenía la llave era difícil negociar. Además, si querían hacer constar algo en el acta y Burgos no quería, no se ponía.

Contó que en Carhué estaban haciendo una obra de cloacas para la municipalidad, que se arrancó en el 2017 a mediados de año, y que Burgos lo citó en las oficinas de UOCRA en Bahía blanca y le exigió el pago de 50.000 pesos, lo escribió en un papelito, opinando que no lo decía por si lo estaban grabando, que le dijo que era una locura, y entonces escribió 40 y cerró en eso y lo pagó 3 o 4 veces, con la misma modalidad en sobre cerrado en efectivo y él mandaba alguien a buscarlo, le decían “legajo documentación” por mensaje.

Recordó que cuando iniciaron la obra llegaron dos autos y se cruzaron delante de la máquina y uno se baja y les dice que vayan a hablar con Burgos. Que ese era el mecanismo, siempre patoteando. Que luego lo llamaron a Burgos, y le dijo al testigo: “…che José estuviste por Carhue, venite tal día a tal hora y ahí arreglábamos eso…”, acotando “…en realidad no arreglábamos nada, estaba yo obligado a pagar…”.

Que tenían obras en el partido de Villarino, en Pedro Luro, Buratovich que era la terminación de una escuela técnica, y en Luro un

jardín y una escuela. Que esas obras se ejecutaron en la misma época que Suarez, se pararon un tiempo y luego se terminó el jardín en el 2016, la escuela no, esa quedó parada.

Dijo que tenían delegados, pero era Molina el que estaba a cargo de ese sector, era Molina el que manejaba la parte sur y Burgos la parte de Suarez, porque no se metía el uno con el otro. Era lo mismo, la misma temática, "…vení al gremio…". Que Burgos decía eso lo maneja Molina y al revés.

Señaló que a Molina le pagaban 10.000 pesos por cada obra, igual que en lo de Suarez.

Refirió que cuando ya pararon la obra les atravesaron un auto en la puerta de la escuela en construcción porque tenían un camión cargado porque retiraban materiales porque la obra se paralizaba y no lo dejaron salir, por lo que el camionero estuvo dos noches durmiendo en el camión. Que para esa época a la gente ya la habían echado. Que esto no era una asamblea, que, en su opinión, deberían querer cobrar algo más.

Que en el 2015 se pararon todas las obras, el estado no pagaba las obras y no podían seguir. Que el jardín se siguió en el 2016 porque tenía financiación a través de un organismo internacional que financia, por el cual iban a cobrar a Buenos Aries. Luego del parate del 2.015 se terminó la escuela de Burato y el jardín de Luro.

Volvió a reiterar que el mecanismo era el mismo, los citaban a la UOCRA en calle Saavedra, los citaba Molina, iban a una habitación solos y les decían son 20, diez por cada obra. Que también Molina lo ha citado en alguna estación de servicio, en calle Colón y 9 de julio, una YPF.

Expresó que preparaba un sobre con los 20 mil pesos, le ponían Molina e iba él o mandaba a alguien, que a veces se lo entrega el testigo si estaba en la oficina. Que fueron unos 7/8 meses que le pagó, coincidente temporalmente con la obra, que durante la obra tenían que pagar. Que "…no pagar era no trabajar, eran asambleas permanentes, eran amenazas de no vas a poder trabajar, tanto con Burgos como con Molina era o pagás o no trabajás, o te hacemos la vida imposible para no trabajar…" –así sus palabras-.

Que entonces pagaban y no tenían grandes conflictos adentro de la obra, si no pagaban los tenían.

Dijo que con Molina no llegaron a una situación en el Ministerio de Trabajo, que le parece que no, que no se acuerda.

Nuevamente volvió a señalar que a Molina le daban el dinero en un sobre en efectivo, lo cerraban, le escribía Molina y lo dejaba en la oficina, y si estaba se lo daba el declarante y sino su secretaria. A Molina o a quien venía mandado por Molina. Que en la zona sur de Molina no se le pidió la contratación de servicios, tenían a uno de Pedro Luro.

Al doctor Jara le contestó que nunca las personas que estaban en la sede lo amenazaron verbalmente, tanto los que estaban afuera, como los que estaban adentro. Que cuando lo citaba Molina también iba con documentación, que hay un formulario de UOCRA cuando visitan una obra que indican que hay que presentar pagos de recibo de sueldo, desempleo, plan de seguridad, que ellos llevaban toda la documentación pero no le daban recibo, lo dejaban ahí. Que no hizo ningún planteo al Ministerio de Trabajo porque no le daban recibo de la documentación que entregaba; que pagaban para no tener represalias, por lo que hacer una denuncia en el Ministerio le generaba más roces y por eso pagaba y no hizo denuncia.

Que no pasó más nada porque lo que los obligaban a pagar siempre se lo daban. Que no le decían para que era la plata. Que han tenido algunas asambleas pero no le pararon nunca la obra. Que el atraso en el pago fue de unos días, lo hablaban con los trabajadores y le avisaban a Molina, y por eso no tenían problemas con los trabajadores y a los días cumplían con el pago.

Comentó que cuando le cruzaron los autos porque habían echado a la gente fue después de pagarle a Molina, que la construcción tiene un fondo de desempleo, pero les cruzaban los autos porque no querían que los trabajadores queden afuera.

Dijo que en la localidad de Suarez tuvieron 45 días de conciliación obligatoria y pagaron igual aunque los delegados no los dejaban trabajar a los empleados.

Contestó al doctor Jara que pagaron de acuerdo a la ley al echar a los trabajadores, que no les debía nada, se hace una liquidación y se cumplió con eso. Que no recuerda tener un reclamo o demanda por eso, que pagar pagaban todos los jornales. Que gente en negro no empleaba, sí gente de nacionalidad paraguaya y estaban en blanco, que el encargado de la obra era paraguayo, era de Villa Gesell el capataz y otros eran de la zona, que tendría que mirar el legajo de cada uno; pero que no recibió reclamo por incumplir el artículo 9 del convenio colectivo que dispone contratar a gente de la zona. Que se tomaba a gente que estaba ahí, en la localidad, donde también hay bastantes paraguayos y bolivianos por el tema de la cebolla y el ajo.

Reiteró que "…el único reclamo importante era que paguemos los 20 mil pesos…", que le pagó 6 u 8 veces a Molina.

Dijo que a Monteros lo vio una o dos veces en la delegación pero nunca arregló con él nada.

Expresó "…que no sabe para quién era el dinero, era para ellos, que pagaban para que no les hagan kilombo en las obras, por la tranquilidad para poder trabajar, está mal lo que nos hacían, era una

extorsión, les importaba tres cominos si la gente estaba en blanco, negro, si tenía la ropa o no…”.

Contestó que puede ser que me haya reunido con Molina en el Ministerio, pero no lo recuerda, porque han pasado varios años. Que con Molina en la CGT cree que lo vio, pero no recuerda por qué, no recuerda que pasó en la CGT, fue pero no sé si por Molina u otra persona.

Que para las fiestas han puesto algo, pero eso le parece hasta que está bien, como empresarios que colaboren con algo, pero eso es normal, eso no es una extorsión, pero otra cosa no. Que no le pidieron dinero para otra cosa.

Que además, el delegado de la obra de Pedro Luro le pedía al capataz 2.000 pesos por mes por encima del salario, que el capataz se lo pedía a él y se lo daba; que es el mismo delito que se comete con los 20.000 pesos. Que eso lo tiene más en claro su hijo. Que no recuerda cuantas veces fue lo de los 2.000 pesos del delegado.

Relató que previo a denunciar tenía reuniones semanales en la Cámara de la construcción y en líneas generales se ha tratado este tema. Ha expuesto como expusieron casi todas las otras empresas su situación particular, por eso tienen una Cámara he hicieron frente a esta situación.

Apuntó que hace 35 años que está en construcción en obras. Que en otra oportunidad le pidieron dinero en otra obra, no fue Molina, él no

estaba. Que en esa oportunidad pagó, pero eran cifras más bajas, y era por la misma razón, para evitar problemas, compraban tranquilidad. Que también eran extorsivas, que no puede precisar bien el tiempo, eran conducciones anteriores, años anteriores. Que hubo épocas en que no pasaba y otras en que sí. Que no hizo denuncias de esos pagos por el mismo motivo que explicó antes, hacer una denuncia de esas sin pruebas es muy difícil, es más lograron estas denuncias porque la Cámara los respaldó, por eso fue esta denuncia masiva, que antes una empresa quiso hacer la denuncia y tuvo problemas, no llegó a nada.

Indicó que de esto no existen pruebas, no se puede ir al Ministerio de Trabajo si no existen pruebas. Que no tiene un recibo de Molina que le dio 20 mil pesos, se lo dieron el dinero 6/8 veces, lo mismo que hicieron con Burgos y que lo hicieron muchas empresas en Bahía Blanca.

Sostuvo que se incrementaban las quejas y comentarios de las empresas, que en la Cámara comentaban el tema, lograron juntarse y arrancó con la denuncia de la gobernadora Vidal cuando vino a Bahía Blanca. Que no recuerda que decía la declaración de la Cámara, que expresaba toda esta situación, por eso la firmó, pero no recuerda puntualmente lo que decía.

Indicó que en la Cámara se desahogaban unos con otros, no lograban nunca llegar a esto, estaban muy mal, era una situación

demasiado extorsiva, se había tornado inmanejable y quizás eso fue el detonante, que no sabe por qué lo hizo la gobernadora, pero luego de eso firmaron la declaración y expusieron ante el Fiscal la situación. Que nadie se comunicó con él para que haga la denuncia. Que lo otro no lo denunciaron porque era muy viejo, la gente esa ya no estaba, y en este caso era tal la extorsión que ponía en peligro sus empresas, porque era mucho el dinero que había que pagar, era una suma importante. Que se juntaron todos para poder declarar, que el señor de Suarez declaró y no le fue muy bien.

Agregó que le molesta tener que pagar por algo que no corresponde, que antes también le molestaba, pero no podía ir al Ministerio de Trabajo porque no tenía prueba o recibo de Molina.

Que no invitó a empresa o empresario a sumarse a esta denuncia ni individual ni general. Que Julia Pugnanoni era compañera de la universidad de su hijo, charló con ella de estas situaciones porque sufría lo mismo, la conoce más su hijo, le dijo que fuera a la Cámara y haga lo que tenga que hacer, le comentó que en la Cámara estaba este tema. Que no le sugirió a Pugnanoni que haga la denuncia.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que Paiz era uno de los que Burgos mandaba a buscar el sobre porque él no estaba en Suarez, que lo recuerda al apellido, que si no se lo hubiesen mencionado en esta causa no lo recordaría, como también debe haber a alguno más que no recuerda el nombre. Que Paiz venía a buscar el sobre y ha estado en algún piquete.

Que está seguro que ha ido alguna vez a buscar Paiz un sobre, también ha estado en las presentaciones que hacían en las obras. Que no sabe si lo atendió él a Paiz.

Consultado por el doctor Martínez dijo que Burgos escribió primero 50 y luego puso 40, no llamó a nadie, ni habló con nadie. Que le dijo que era una locura, le dijo que le daba la llave de la empresa y puso 40, que también era una locura.

Que en Suarez no recuerda si tuvo medidas gremiales, recuerda más su hijo.

Que el apellido Aranda le suena, que cree que le hizo un juicio a su empresa, cree que no hay resultado, lo puede saber la doctora Valle que es su abogada. Que estaban bien echados, y no recuerda haber pagado luego de un tiempo a varios más, que sí se pagaron los fondos de desempleo. Que en Luro cree que algunos conflictos hubo, pero sabe más su hijo, él le va a poder explicar mejor.

Al doctor Jara le dijo que Paiz retiraba a nombre de Burgos, no sabe si de Molina, que cree que a veces han retirado los dos sobres juntos. Que no recuerda si Molina le hizo algún pedido por seguridad para los trabajadores. Que inspección del Ministerio cree que hubo, pero no recuerda bien.

En el mismo sentido computo el testimonio del señor Manuel Carcereny quien dijo que conoce a los señores Molina, Burgos, Carrillo, Cabrera y Aranda, por su actividad como Ingeniero Civil de la empresa Carcereny Construcciones, siendo el señor Gustavo Carcereny su padre.

Expresó que por el año 2015 tenían varias obras en ejecución, a saber en Coronel Suarez dos jardines y una escuela, en Saavedra un jardín, en Buratovich una escuela técnica, en Carhue una red cloacal, en Pedro Luro un jardín, una escuela técnica y varias obras de infraestructura en Bahía Blanca.

Relató que estando en una obra en Suarez, "…cae esta gente, 4 o 5 personas grandotes, te piden documentación y sin revisar para ellos está mal, y esto no es así; te increpan, te tratan con metodología de apriete y no diálogo, te piden documentación para presentar en el gremio que luego no les importa, que no les importan los derechos de los trabajadores…". Que estas personas dependen de Bahía Blanca, pero había una seccional en Suarez y otra en Luro, pero pertenece todo a Bahía Blanca. Que en Suarez estaba Aníbal Aranda que era el delegado, que Hoyos era el sub delegado y que también estaba siempre Cabrera, que ellos eran los que llama soldaditos de Burgos que manejaba la zona de Suarez y alrededores.

Que le llevaban la documentación al gremio en Bahía Blanca, pero eso era una entrada para hablar de otra cosa, para pedir dinero para poder seguir trabajando, los papeles no les importaban a nadie. Que él fue a

algunas reuniones, aunque generalmente ha ido su padre, se reunía con Molina y con Burgos en la sede de la UOCRA y tanto Burgos como Molina le pedían dinero. Que la zona de Suarez la manejaba Burgos, la del sur, Luro y Buratovich la manejaba Molina.

Apuntó que lo ha acompañado a su padre a llevar la documentación, luego de charlar se pasaba a lo importante para ellos "…nos pedían una extorsión para poder seguir trabajando, si no cumple con esas cosas corre el riesgo de que lo apreten, que le prendan fuego un vehículo o una máquina, no hay diálogo con esa gente…". Dijo que nunca estuvo en reunión con Burgos y Molina a la vez, que nunca estuvo con los dos juntos a la vez.

Refirió que "…el pedido de dinero se materializaba escribiendo en un papel, creo que tenían miedo de que los estuviésemos grabando, pero no nos animábamos a eso porque el ambiente al entrar al gremio era tremendo, había gente afuera y luego adentro para aflojarlo a uno. Que luego pasás a una oficina donde ellos escriben en un papel la suma, lo sé porque me la comentó mi padre…" –así sus palabras-. Reiteró que el ambiente era tremendo, que lo del papel se lo contó su padre. Que de Molina también le dijo. Que Burgos le pidió 10 mil por obra en Suarez, de aquella época el dinero no de ahora –acotó-, y era muchísimo dinero, que les costaba mucho juntarlo, no había recibo ni justificación de esto y para el estado era plata que ellos se ponían en el bolsillo y de la cual tenían que pagar impuestos.

Mencionó que en la obra de Carhué le pidió primero 50 y luego 40 mil porque era imposible. Que no se arreglaba nada, te lo imponían, que en esa reunión no estuvo, que se lo contó su papá.

Que si no pagabas no podías trabajar, te hacían asambleas y te paraban la obra. Que se pagó durante el tiempo que duraron las obras.

Señaló que en las obras de Buratovich y Luro era con Molina, que se juntaba con “Peter” Martinez que era el cabecilla de Molina en Luro. Que en una oportunidad les paró un camión tres noches en una obra cuando le habían puesto fin porque no cobraban.

Refirió que era Molina el que manejaba ahí, y que “…yo creo que Molina estaba en concordancia con Burgos, porque cuando tuvimos problemas en Suarez luego los problemas se trasladaron a Luro. Que Molina pedía 10 mil por obra por el transcurso del tiempo que estuvimos trabajando…”.

Que Molina un par de veces ha ido hasta la oficina y se reunían también en la UOCRA. Que los 10 mil pesos por mes era por el tiempo de duración de la obra. Pasaban por la oficina a cobrar, Molina generalmente iba él en un auto Toyota Corolla 0 km, que a veces estaba el declarante y le entregaba el sobre y otras se lo daba la secretaria. Que Burgos ha ido alguna vez, pero generalmente mandaba a alguien. Que

Carrillo y Paiz han ido a buscar, los tiene de cara porque iban a las obras a hacer los aprietes.

Que entrado el mes ya preguntaban si los legajos o planillas ya estaban, refiriéndose de esa forma a ese pago que estaban obligados a hacer.

Que Mariela Gonzalez era la empleada que estaba en la oficina. Que Molina ha ido a buscar alguna cuota o charlar sobre esto a la oficina. Que a ellos les interesaba que la obra continúe para poder seguir cobrando su cuotita.

Expresó que tuvieron que contratar en Suarez el baño Acqua, que Cabrera le entregó una tarjetita y le dijo "…acá están los baños…". Que el servicio era bastante malo. Que no le obligaron a contratar otro servicio.

Contó que acompañó a la Fiscalía los mails reclamando por la limpieza de los baños. Que la gente se quejaba, pero el delegado que era Aníbal Aranda no decía ni hacía nada. Que Aranda respondía a Burgos.

Que Cabrera no era empleado pero estaba presente en los momentos de inicio de las obras, y ahí le dio la tarjeta de los baños. Que luego fue designado Aranda y Hoyos como delegados, en teoría se hizo una votación, pero no estuvieron presentes, ni el encargado de obra que era un chico de Suarez, lo mismo que cuando hacían otro tipo de asambleas, no los dejaban participar.

Refirió que una vez lo citó Aranda en la delegación de Suarez y fue porque Aranda no iba a la obra, solo aparecía para hacer alguna asamblea, a trabajar no se presentaban. Que lo citó y fue a la delegación de Suarez, fue al entrepiso y estaba Aranda solo y le pidió un extra arriba de la quincena para no tener problemas, que le dijo "…vamos a arreglar algo más para no tener problemas en los trabajos, era un extra que tenía que agregar en su quincena…" –esas sus palabras-.

Contó que al Ministerio de Trabajo en Suarez fue muchas veces, que tenían 35 empleados, siempre pueden surgir problemas, si no hace bien el trabajo se le paga y lo echa y se reemplaza por otro. Generalmente se le avisaba al delegado y se mandaba el telegrama y cada vez que se despedía a alguien se paraban las tres obras, se hacían asambleas y lo citaban en el Ministerio de Trabajo, luego llegaba Aranda y Burgos y lo hacían esperar, llegaba Burgos, lo atendía Freizer, charlaban ellos y luego lo hacían pasar a él. Que esa reunión terminaba con que tenía que volver a tomar al empleado, pagar todos los jornales caídos y pagar a todos los que estaban en asamblea sin trabajar. El del Ministerio sólo anotaba lo que decía Burgos, no se podía hacer otra cosa, no se puede dialogar con esta gente, es mafia, esto pasó después también.

Mencionó que a fines del 2.015 no se cobraban los certificados de obra, por lo que lo llamó a Burgos y le dijo que tenían problemas con los certificados de obra, que tenían que reducir el personal

porque no daban los números y la respuesta de él fue que si sacaba gente iba a tener kilombo, iba a tener problemas y le cortó el teléfono. Que luego tuvo que reducir al personal porque se paró la obra, tuvo que ir al Ministerio y le fijaron 45 días de conciliación obligatoria en los que tuvo que pagar los sueldos.

Expresó que cuando "…yo digo que la pasamos mal, fue así, la pasamos muy mal. Aranda y Burgos dijeron que iban a pasar las fiestas con mi familia, son gente que amenaza, eso te da un poco de miedo. Nos hicieron piquete en la oficina por 5 días…" –sus términos-.

Indicó que luego quedaron paralizadas las obras por falta de pago del estado.

En cuanto al partido de Villarino dijo que Martinez le pedía que contrate a gente de la UOCRA, que ellos en Luro tenían un 70 por ciento de gente que era de la localidad y en Buratovich casi el 100 por 100 era de ahí, pero Peter Martínez le pedía que contrate otra gente de Luro y Buratovich, y respondió contratando gente de esos lugares.

Al doctor Jara le contestó que no lo amenazaron en la sede de la UOCRA. Que con Molina "…tuve reuniones, pero no fui amenazado, ni fui agredido, fui extorsionado, nada más…". Que en la zona de Molina no le pidieron la contratación de algún servicio. Que Martínez le pidió la contratación de los baños químicos del lugar, pero no hubo un apriete ahí.

Señaló que el dinero que entregaban era un retiro en efectivo. Era como retiro de la empresa y su padre manejaba eso. Que le ha entregado el sobre con ese dinero a Molina cuando ha estado en la oficina, dos o tres veces, y a veces estaba Mariela. Que esos pedidos de dinero los arregló Molina con su padre, a veces estuvo en esas reuniones. Que si no se le daba el dinero no se podía continuar con la obra, venían los paros y las asambleas, que esa era la amenaza. Que no le dijo Molina para qué era el dinero, no sabe para qué ellos lo usaban.

Reiteró que la parálisis de las obras fue por falta de cobro de certificados, que en el 2.015 se paralizó y en el 2016/2017 retomaron la obra de Burato y luego la de Luro. Que ahí seguía presente la extorsión, pero no ha tenido conflictos.

Indicó que el último conflicto grande, del cual hay fotos, fue cuando les cruzaron dos autos blancos, y esa foto luego la tenía como un cuadrito colgada en la pared, como una suerte de trofeo, orgullosos de eso. Que Martinez le dijo "…vos de acá no te vas…", y eran mandados por Molina. Que en esa oportunidad se habían mandado los telegramas y la obra no seguía, que él entendía que querían continuar con la obra para poder seguir cobrando. Que los autos se los cruzaron delante de un camión en el cual querían sacar material y herramientas de la empresa, la obra se cerraba y no iban a dejar nada. Que no recuerda si hablaron con Molina en ese momento y el camión lo lograron sacar tres días después. Que cree que

hubo un arreglo de su padre con Molina, que se pagó a la gente lo que correspondía.

Refirió que los 10 mil pesos en salarios no recuerda a cuanto equivalía, pero que se puede averiguar observando los recibos de sueldo. Que el pedido de tomar gente fue cuando se inicia la obra, que en toda obra hay que tomar un 30/35 por ciento de gente de la zona, eso está en los pliegos, y ellos siempre están por encima de ese porcentaje.

Comentó que "…pedían dinero decían para mantener la paz social, en mi opinión era para que nosotros podamos trabajar. No le pregunté al que decía paz social qué significaba, pero me han dicho para no tener problemas, los problemas eran las asambleas, no avanzar con la obra…". Que cuando van de la UOCRA siempre van dos autos, 4/5 personas en cada uno y les dicen muchachos paren de trabajar y la gente tiene miedo; dejan de trabajar y hacen una asamblea. Que a él no lo dejan entrar y la obra se paraliza.

Señaló que con los salarios se han atrasado dos o tres días y le han avisado al gremio, que esto les ha ocurrido cuando no les pagaban en tiempo los certificados, que a veces han tenido problemas y a veces no. Que cuando tenían problemas era que la gente hacía asamblea y no trabajaba, y esto se resolvía cuando se pagaba a los 2 o 3 días. Que cuando se terminó de pagar a los empleados, se terminó la asamblea y se continuó la obra. Que no le pidieron más nada. Si Molina cobraba su cuota

mensual estaba todo bien. Que no le dijo Molina que fuera para él, no sabe (volvió a indicar) para qué era el dinero.

Refirió que él se recibió en el año 2012 y empezó a trabajar en el 2013, que siempre se tuvo problemas con la UOCRA, siempre existieron este tipo de extorsiones. Que este grupo trabaja como mafia, y sólo no se puede denunciar. En Suarez uno denunció solo y le fue muy mal, gracias a Dios tuvieron el apoyo político, se juntaron en la Cámara y por eso se anima a venir. Que en los medios salió la gobernadora Vidal y el intendente, hicieron una denuncia pública, y a partir de eso, ellos que pertenecían a la Cámara, empezaron a ir uno por uno a contar lo que pasaba. Que uno de los determinantes de la denuncia fue el apoyo de la gobernadora Vidal en los medios. Que no llamó a nadie para que se sume a esta denuncia.

Contestó al doctor Jara que la conoce a Julia Pugnanoni, que le comentó por teléfono que iba a hacer la denuncia, le contó lo que iba a hacer, que le compró hormigón en algunas oportunidades. Que no sabe si ella hizo algo, que no sabe si es víctima de esto o no.

Corrobora lo expuesto por los testigos Carcereny lo que ha declarado en la audiencia de debate la testigo Mariela Mercedes Gonzalez quien indicó que lo conoce a Molina de Carcereny construcciones, por ser empleada administrativa de esa empresa donde trabajó 5 años en la oficina de recursos humanos y tareas administrativas en general.

Relató que ella no confeccionaba los sobres, veía que estaban y los entregaba a la persona que lo venía a buscar, y tenían el nombre de Guillermo Molina o José Burgos y pasaba gente con los chalecos de la UOCRA para retirarlos. Que tenían dinero adentro. Dijo que el contacto con ellos era a través de la ventana, decían que venían a retirar documentación a nombre de José Burgos, agarraban el sobre y se lo daban por la ventana.

Que por dichos de los Carcereny sabe que eran coimas para poder trabajar, continuar con las obras.

Indicó que Molina ha ido a la empresa, venía y se reunía con Gustavo Carcereny, no sabe qué cosas hablaban.

Al doctor Martínez le contestó que a Burgos no lo vio en la empresa. Que en los sobres decía José Burgos, pero no lo vio.

El doctor Martínez le señaló al señor Monteros en la sala y la testigo dijo que tampoco lo vio.

Al doctor Jara le contestó que han ido a buscar sobres y que Molina se reunía con Carcereny, pero no sabe si se llevaba sobres, que ella se limitaba a darle el sobre a quien venía a retirarlo a nombre de ellos. Dijo que Molina no retiró en forma personal un sobre que le dejaran a la testigo.

Que los pagos eran para poder continuar con las obras, para poder trabajar, eso se lo dijo el dueño de la empresa. Que además se escuchan las conversaciones, hablan delante de uno y sabe de lo que se

trata. Que ella escuchaba en la oficina que había problemas con la UOCRA, los ingenieros decían que hacían algún paro y pedían algunas cosas de más. Que les hicieron un piquete en la puerta de la oficina. Que paro y asamblea es lo mismo, no trabajan y el empleador paga el día. Que le parece que en Villarino se hizo asamblea, y en Suarez seguro, aclarando luego que en Villarino no lo sabe precisamente.

Mencionó que en algunos sobres había 30 mil pesos, en otros 20, en otros 40 mil. Que el dinero del sobre podría llegar a ser más o menos dos quincenas de un oficial especializado.

Volvió a reiterar que los retiraba gente que venía con los chalecos de la UOCRA. Venían y decían que venían a retirar un sobre con documentación para Molina o a nombre de Burgos. Que no sabe quién los mandaba, no la llamaron de la UOCRA, que sabían el día que iban a venir, les dejaban los sobres y les decían que en el transcurso de la semana iban a pasar.

Apuntó que esto lo documentaban como salida de caja de las ganancias de los socios, que de otra manera no se puede documentar porque no tiene una factura. Que la testigo lo ponía como salida de caja, como si fuese una caja chica y se lo pasaba al contador. Que en la caja chica es donde se ponen los insumos para oficina, viáticos de la oficina, son gastos de salida de caja, algunos insumos están facturados y otros un ticket

que no se puede descargar el iva. Que no había otras salidas de caja sin respaldo documental.

Contestó al doctor Jara que a Julia Pugnanoni la conoce a través de mails para solicitarle insumos, no la conoce personalmente, es una persona que tiene una hormigonera, y no habló de esta situación con Pugnanoni. Que no sabe si los Carcereny hablaron con ella.

El testigo Fabián Patricio Martinez comenzó señalando que conoce al señor Molina por ser quien manejaba la bolsa de trabajo en la UOCRA. Que durante el año 2015 al 2017 fue delegado en la empresa Carcereny Construcciones, habiéndose dedicado con anterioridad a la construcción y a la cebolla.

Indicó que conoció a Molina por intermedio de Mario Meone, que ahí fue cuando apareció la UOCRA en Villarino y empezaron a trabajar junto con Molina con la bolsa de trabajo. Que era el mencionado quien les avisaba cuando llegaba una empresa y les decía cuántos ayudantes, oficiales y de los distintos rubros se iban a necesitar y luego los mandaban a la empresa.

Apuntó que fue delegado de Carcereny en la obra de la escuela secundaria 10 en Pedro Luro. Que en ese momento la relación con la empresa no fue del todo buena, porque tuvieron muchos inconvenientes por falta de pago, falta de seguridad e higiene; y por esas cosas consultaban

a la central Bahía Blanca para ver que hacían, porque eran nuevos en esto; y se llegaba al momento que había que parar la obra por esos hechos, y así estuvieron hasta que cambió el mandato del intendente, cuando entró BevilAcqua y se fue Covello, el intendente suspendió todas las obras y recién las recomenzó un tiempo atrás.

Mencionó que como él era nuevo en esto consultaba con Bahía Blanca, con Molina, que era quien estaba a cargo de Villarino hasta Patagones. Que siempre le preguntaba por las leyes gremiales, dado que si bien le daban lo del artículo 9, como uno tiene un jefe hay que dirigirse siempre a él, no tomar decisiones sin ser aprobadas por quien es su jefe.

Contó que Molina tenía comunicación con ellos y también con las empresas. Que cuando una empresa empezaba una obra, la relación entre la UOCRA y las empresas era que se respetara el artículo 9 que indica que la gente tiene que ser tomada del lugar, y a veces desde la central se le pedía colaboración a la empresa para ayudar con el día del niño o con mercadería a la gente, incluso a gente que no pertenecía a la UOCRA y la trataban de ayudar.

Refirió que esos pedidos de colaboración lo hacían acá en la central. Que a ellos siempre que se iba a hacer un evento como el día del niño o campeonato de futbol en Monte Hermoso, a donde fueron una vez, todos los gastos, como combis y demás los pagaba la central, porque Bahía

es grande en comparación con Villarino, donde los trabajos que salen son a cuenta gotas.

Expuso que la UOCRA tiene una oficina en la zona y la comisión de Bahía Blanca mientras duró les pagaba el alquiler, y cuando a ellos los detienen ese alquiler lo empezaron a pagar entre cuatro compañeros que estaban trabajando.

Consultado por el doctor Jara respecto de alguna medida de fuerza en la obra de Carcereny respondió que se impidió la entrada y salida de camiones. Que fueron a parar la salida del camión en la obra de la escuela 10 porque Carcereny se llevaba los materiales y aún les faltaba liquidar el dinero que les debían hacía 8 días. Que les habían mandado carta documento ya que habían consultado con unos abogados y con la central, donde les dijeron que tenían que hacer eso.

Aclaró que en la central hablaban con Molina, quien era quien mandaba la plata que llegaba de la central.

Que en la obra de la escuela 10 desde central les dijeron que no se fueran, que si lo hacían no les iban a pagar. Que por eso no los dejaron que se fueran porque no habían terminado de pagar la quincena, sí habían pagado el fondo de desempleo. Que ellos querían impedir que se fueran sin pagarles.

Señaló que no dejaban salir al camión por estar cargado con materiales. Que temían que no les pagaran, y de central los mandaron al abogado para mandar carta documento y luego evitar que se fueran.

Contestó a las consultas señalando que quien manejaba el camión se podía ir tranquilamente la persona, dado que es un laburante más, un trabajador, no tiene nada que ver con el problema que tenían ellos. Que el camión estaba cargado con las herramientas, con todo lo que era de la obra. Que por eso se impedía que vaciaran la obra.

Dijo que al otro día los llaman de central, que habían dormido ahí con todos los compañeros, y los llama Molina diciendo que Carcereny se había comprometido a pagarles todo. Que luego Carcereny se presentó al otro día a pagar y ahí terminó todo el conflicto.

Indicó que él personalmente tuvo un conflicto con Carcereny y Luis Flores también, que el declarante era el delegado y Flores el sub, y los despidió Carcereny, inició un juicio laboral el cual ha ganado, pero Juan Pablo, que es su abogado les dijo que no podían hacer nada porque Carcereny declaró quiebra y quedó todo ahí.

Contó que en la obra tuvieron incumplimientos de Carcereny, tanto en lo económico como en seguridad e higiene, y de hecho Guillermo pidió al Ministerio de Trabajo que interviniera, y fue y suspendió las tareas por falta de seguridad y esas cosas en la escuela 10. Que Molina pidió

suspender la obra al Ministerio y el Ministerio la suspendió por todo lo acontecido. Que a Molina le informaban ellos que eran los que veían lo que acontecía en la obra, como los baños que eran impresentables, falta de cobro, terminaba la quincena y a los días te aparecían con algo, no con todo, y todas las quincenas pasaba lo mismo.

Que luego de que el Ministerio de Trabajo paró la obra Carcereny regularizó y comenzó nuevamente, pero esto duró una quincena, dado que luego les volvió a fallar nuevamente con el pago, y es ahí que se produce el cambio de gobierno y antes pararon al camión con las herramientas. Que esto luego se arregló pero se paró la obra, pasaron los años y recién ahora en la obra están recomenzando las tareas.

Le contestó al doctor Jara que cuando se hacían asambleas no participaban todos los trabajadores, sino los que eran del lugar, que había gente del Paraguay a la que habían afiliado a la UOCRA, pero que no quería participar de las asambleas ni nada por miedo a represalias de la propia empresa. Que era la gente de Paraguay la que no participaba por miedo a las represalias de la empresa. Que la empresa tomó represalias con el declarante, y por eso los demandó civilmente junto a Flores que estaba bajo la ART cuando fue despedido y la obra seguía en pie.

Dijo que además de pagar el alquiler del local, todos recuerdan el festejo del día del niño, porque fue muy lindo, que pasó por primera vez en Villarino, y ahí llevaron juguetes y bicicletas, les acercaron la plata para

comprar la carne para el asado y compraron juguetes también; invitaron a chicos de padres que no estaban en obra y a cada compañero que estaba trabajando se le pidió un alimento no perecedero para ayudar a un jardín maternal.

Contó que recibían bolsones desde central para ayudar a gente que no tenía trabajo, incluso aunque no fuese del gremio pero que la estaban pasando mal. Que esto los llevó a hacer una asociación civil para poder ayudar a gente que lo necesitara en Villarino y esto lo hacen en conjunto con el municipio de Villarino.

Refirió que cuando detuvieron a la cúpula de la UOCRA la relación de las empresas y los trabajadores no fue la misma. Que el declarante trabajaba haciendo calles de hormigón y por eso sabe que ninguna empresa tenía delegado, porque eran todas de menos de 10 personas. Que lo llamó un compañero porque no cumplían con el seguro de desempleo, por lo que llamó al grupo Marcos y la señora que lo atendió le contestó si la estaba apretando; y esto no era así, simplemente le dijo si le podía arreglar el sueldo del fondo de desempleo a su compañero. Que esto pasó luego de las detenciones, al mes o los días, y en ese momento el declarante no era delegado de esa empresa.

Expuso que Ripsol era otra empresa que empezó con problemas con la gente, no les quería respetar el horario de mate de 10 a 15 minutos a la mañana y a la tarde, por lo que los compañeros renunciaron a

esa empresa. Que lo llamó uno de ellos para contarle y él no podía hacer nada; no había delegado en esa empresa porque no tenía la cantidad de personal para que tengan delegado. Que cree que no hablaron con el gremio porque ya no había nadie, había llegado el primer interventor que no se quería meter en nada, no quería representar a nadie, vino a sentarse en el sillón y nada más. Que a sus compañeros no les quedó otra que renunciar porque la empresa no respetaba el horario de mate. Que al no tener delegado la obra no tiene nadie quien la defienda, si llamás a central y te dicen qué querés que haga, quedan las cosas así nomás.

Respondió que el primer interventor fue Rodríguez. Que al señor Boer lo conoce, es el interventor ahora de UOCRA Bahía Blanca. Que habló con el interventor, se reunió por temas laborales de obras que salían para la zona de Villarino.

Comentó que ya no están en UOCRA, ahora están con la asociación civil, porque con el interventor nuevo no hubo buena relación por el tema laboral de la gente de Villarino. Que son gente de campo y pueblo y en su opinión no puede ser que cuando sale una obra son seccional a nivel UOCRA y en ese caso la mayoría de la gente que va a trabajar es de Bahía Blanca, cuando ellos en Villarino no tienen ni puerto ni muchas obras.

Mencionó que con motivo de una obra en la estación de bombeo pasando Médanos, luego del fitosanitario, se reunieron con Carlos Boer, Limpiante, el declarante y su hermano en Rodovía y le plantearon que

ocupaban gente de Bahía en el parque eólico y que en la estación se iban a ocupar a unas 80 personas. Que ahí le dijeron que Boer ya tenía a la gente de Bahía que iba a trabajar ahí, que ellos le dijeron que la obra era de Villarino y la gente tenía que ser de ahí, y que Boer les contestó que la gente de Villarino se fuera a trabajar al campo. Indicó que por eso rompieron su relación con UOCRA, que son gente de campo pero no indios y tienen derecho a trabajar.

El testigo Julio Rafael Martinez dijo que conoce al señor Guillermo Molina por su relación laboral. Que entre el 2015 y el 2017 Molina le dijo si podía manejar la bolsa de trabajo de Villarino porque él no conocía a la gente. Que Molina le decía que empresa necesitaba la gente, el declarante miraba el listado y veía que se necesitaba.

Que la UOCRA le pedía a la empresa la ropa, el pago en tiempo y forma, y que tome la gente del lugar de donde es la obra. Que no se le pedía nada más a la empresa cuando empezaba la obra.

Le contestó al doctor Jara que cuando se hacían eventos Molina traía bicicletas, juguetes y cosas para el día del niño y fin de año. Que lo que traía Molina era como que venía de Bahía de la seccional. Que cuando iban a festejar el día del niño el declarante buscaba un local, les decía el valor y Molina les daba para pagar el local y para comprar los juguetes.

Que la oficina que se alquilaba en Villarino la plata para pagar el alquiler la traía Molina. Que no sabe de donde salía esa plata, que para él era de la seccional, que nunca le preguntó a Molina.

Respondió que no trabajó en una obra de refacción de una escuela secundaria en Pedro Luro, pero participó prestando apoyo a los compañeros a los que no les pagaba la empresa. Que cuando fue un camión a cargar retazos de material y ya se iban de la obra, y en tanto le adeudaban una plata de una quincena a los compañeros, pararon el camión y le dijeron que tenía que solucionar el problema, pagar a la gente y que luego sacara todas las cosas de la obra.

Dijo que luego los llamó al otro día Guillermo Molina y les pidió que dejaran salir el camión, que el lunes iba Carcereny y les pagaba a la gente lo que se adeuda; que fue así que dejaron salir el camión y el lunes fue Carcereny y pagó.

Apuntó que había muchos problemas con los pagos en las quincenas, que Carcereny decía que era el contador el que decía la forma de pagar, y que siempre faltaba algo. Que había veces que le paraban la obra por ese motivo, que incluso una vez la paró el Ministerio de Trabajo. Que cuando se paraba la obra, luego venía Carcereny y pagaba a la gente lo que le correspondía, lo que faltaba y la obra seguía adelante. Que de los paros no participaban todos los trabajadores, la gente que iba con la empresa no quería participar de eso, sí la gente de Villarino. Que la gente

que iba con la empresa se afiliaba o no a la UOCRA según quería, que los reclamos los hacían en forma general para todos; y si los trabajadores querían parar lo hacían, ellos no los podían obligar a que lo hicieran.

Refirió que les preguntaban a los trabajadores por qué no se adherían y ellos decían que no porque tenían que seguir trabajando con esa empresa y no podían perder el trabajo. Que nombres de esos trabajadores no recuerda, que eran paraguayos, uno Juvencio, otro Miler, pero no recuerda el apellido.

Contó que Guillermo pagaba el alquiler del local y les decía que si algún compañero necesitaba medicamentos que le avisaran y él les acercaba el dinero. Que recuerda que la señora de un compañero llamado Onildo Riquelme necesitaba medicamentos y se lo acercaron.

Recordó que una vez fueron a Monte Hermoso y para eso Molina le dijo que consiguiera una combi, lo hizo y Molina pagó los gastos, y también los gastos de la estadía de las 14 personas que fueron hasta Monte.

Que siempre tuvo contacto con Molina, hablaba con él y le decía las necesidades de la zona y él respondía.

Que luego de la detención la relación con las empresas no fue igual, había problemas con la ropa, las empresas no querían delegados en la obra, no respondían los reclamos. Que siempre le reclamaron a la

intervención local que está ahora y ellos se encargaban de hablar con la empresa pero tardaban mucho en responder; que por ejemplo por botines de seguridad pasaban 15 o 20 días para que renueven el botín roto.

Que la intervención una sola vez en Vientos de Secano paró por ese tema, pero nada más.

Le respondió al doctor Jara que el mismo acuerdo que estaba en el parque eólico de la Castellana lo pusieron en las Castellanas 2; que este acuerdo lo hizo el interventor con las empresas y era un acuerdo por encima del salario del convenio. Que el representante de las empresas era Guillermo Torres de Civilpro y gente de la empresa Provie, y el interventor es Carlos Boer, siendo homologado en el Ministerio de Trabajo. Que también se pactó un premio para los trabajadores de 10.000 pesos para todos, aparte del acuerdo. Que esto ocurrió luego de las detenciones.

Consultado por una obra en la estación de bombeo en el kilómetro 712, dijo que se reunieron con Boer y le plantearon que como iban a tomar 80 personas la gente tenía que ser del distrito. Que Boer les dijo que no, que esa gente se dedicara al campo, que como mucho les iba a dejar meter 5 o 6 personas. Que luego en esa obra entró un 70 por ciento de mano de obra de Villarino.

Apuntó que con su hermano hicieron cursos de capacitación antes de Vientos del Secano, para que se supiera lo que era un parque

eólico. Que le enseñaron a la gente de Villarino y asistieron unas 300 personas. Que fue luego en esa obra de Vientos del Secano donde se acordó un premio de 10.000 para todos los trabajadores.

Le respondió al letrado que la protección de los derechos de los trabajadores no fue lo mismo luego de la detención de la dirigencia, que las empresas no te dan la ropa en tiempo y forma, los reclamos no llegan a buen fin, tardan mucho los reclamos.

Ante la consulta del doctor Zorzano dijo que en la obra de la escuela de Pedro Luro lo de no dejar salir al camión lo consultaron con central, lo hablaron con Guillermo Molina.

Los testigos propuestos por la defensa del señor Molina no saben nada –o al menos no han sido consultados- de los hechos puntuales materia de acusación. Si bien han declarado que las órdenes en relación a las actividades gremiales las daba el señor Molina, por ser el encargado de la zona de Villarino y de Patagones, y que además era el mencionado quien se ocupaba de cubrir los gastos del alquiler del local que tenía el gremio en Pedro Luro y de los gastos de la fiesta del día del niño y el transporte a un evento en la localidad de Monter Hermoso; en lo que aquí interesa, sólo han señalado que con la empresa Carcereny han existido distintos conflictos por atrasos al tiempo del pago de los salarios, cuestión ésta reconocida por los dueños de la empresa al prestar declaración testimonial.

En lo demás, tanto los testigos Carcereny, como los señores Martinez, han relatado el incidente con el camión, cuando la empresa trató de retirar los materiales de la obra que se había paralizado, y los señores Martinez han indicado que esta medida fue por orden del señor Molina.

De la prueba antes analizada, tanto de estas declaraciones testimoniales como de la prueba apuntada al hablar respecto del hecho identificado como número uno, entiendo que se han demostrado los hechos materia de acusación fiscal he indicados como números 13, 14 y 15.

Considero probado que en el año 2015, en circunstancias en que la empresa CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A. comenzaba la ejecución de tres obras civiles en la ciudad de Coronel Suárez (consistentes en la construcción del Jardín de Infantes B° El Rosario; el jardín de infantes N° 913 y la Escuela Secundaria N° 5 -ex E.S. N° 6-), al menos una persona, quien revestía la calidad de dirigente sindical del gremio de la UOCRA, le exigió al señor Luis Carcereny, el pago de una suma de 10.000 pesos por cada una de las obras, y la contratación del servicio de baños químicos para las obras a la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L.", bajo intimidación de paralizar las obras e impedir la normal actividad de la empresa en la ejecución de las mismas; realizando producto de esta conducta los señores Luis y Manuel Carcereny los pagos de 30.000 pesos mensuales durante los 10 meses que duró la obra, y contratando los baños de la empresa Acqua durante ese período (hecho número 13).

También entiendo demostrado que en el año 2017, cuando la empresa CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A. se encontraba ejecutando la obra de ampliación de la red cloacal en la localidad de Carhué, al menos una persona, quien revestía la calidad de dirigente sindical del gremio de la UOCRA, le exigió al señor Luis Carcereny, el pago de una suma de 40.000 pesos por la obra, bajo intimidación de paralizar la misma e impedir la normal actividad de la empresa en la ejecución de esta; realizando producto de esta conducta los señores Luis y Manuel Carcereny el pago de 40.000 pesos mensuales durante los 3 meses que duró la obra (hecho número 14).

Por otro lado, se ha comprobado que en el año 2017, en momentos en que la empresa CARCERENY CONSTRUCCIONES S.A. construía instalaciones destinadas al Jardín de Infantes N° 910 de la localidad de Pedro Luro e instalaciones destinadas al edificio de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 2 de la localidad de Mayor Buratovich, al menos una persona, quien revestía la calidad de dirigente sindical del gremio de la UOCRA, le exigió al señor Luis Carcereny, el pago de una suma de 20.000 pesos por las dos obras, bajo intimidación de paralizar la misma e impedir la normal actividad de la empresa en la ejecución de esta; realizando producto de esta conducta los señores Luis y Manuel Carcereny el pago de 20.000 pesos mensuales durante los 10 meses que duró la obra (hecho número 15).

Los hechos 16 y 17 han sido detallados por la acusación de la siguiente forma: HECHO 16): Durante el año 2015, el señor MARIO MATÍAS GONZALEZ (Colaborador gremial y Primero Vocal Titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca), invocando directivas de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente), EXIGIÓ al señor ROBERTO GAVEGLIO (socio de la empresa "COINCE BAHÍA S.A."), la suma de OCHO MIL PESOS POR MES, como condición para que la referida constructora pudiera realizar las obras a su cargo sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Como consecuencia de dicha imposición, desde el mes de enero de 2015 -aproximadamente- y hasta el mes de septiembre del 2017, el señor ROBERTO GAVEGLIO y otros integrantes de la citada empresa, debieron ABONAR mensualmente las sumas exigidas, las cuales eran recibidas en dinero efectivo por el señor MARIO MATÍAS GONZALEZ y otros sujetos enviados por éste, a cuyo fin se constituían en la sede de la constructora (sita en calle 25 de Mayo n° 2772, intersección con el Acceso a Puertos, de Bahía Blanca) o requerían el envío del dinero a la sede gremial.

Asimismo, se le exigió a los representantes de la firma "COINCE" la contratación de los servicios de baños químicos de la empresa "ACQUA SERVICIOS INDUSTRIALES SRL", debiendo abonar los

empresarios como consecuencia de dicha imposición, un valor superior al que por ese servicio ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca. La contratación así exigida, se concretó entre el 21 de febrero de 2017 hasta el 02 de noviembre de dicho año.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 17): En el año 2016, en circunstancias en que la empresa "COINCE BAHÍA S.A." se encontraba realizando una obra de CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE PEDRO LURO -Partido de Villarino-, la cual se desarrolló entre los meses de febrero de 2016 y febrero de 2017, el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la Unión Obrera de la Construcción, Seccional Bahía Blanca), convocó al ingeniero DIEGO RAFAEL SALGUERO

-socio que también se desempeñaba como supervisor de obra de la citada constructora-, al sindicato (ubicado en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad), para "hablar de la obra".

En dicha sede gremial, el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA le EXIGIÓ al señor SALGUERO la suma de DIEZ MIL PESOS POR MES para que la citada obra pudiera continuar sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la U.O.C.R.A.

Como consecuencia de dicha imposición, el ingeniero SALGUERO ABONÓ mensualmente a MOLINA las sumas exigidas, en dinero efectivo, durante un periodo de nueve meses -aproximadamente-, concretándose las entregas en distintos lugares de la vía pública que previamente indicaba el imputado.

El dinero fue exigido y percibido por MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad

imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

Estos hechos antes referenciados se tienen por debidamente acreditados –principalmente, además de la prueba documental- con las declaraciones testimoniales que se han recibido en el debate. Así, el señor Roberto Gaveglio, al declarar como testigo dijo que conoce a Mario Gonzalez y al señor Burgos. Que es Electrotécnico e integra Coince S. A. junto con el señor Néstor Tepliz y tres socios minoritarios, los señores Salguero, Botazzi y Porcelli.

Relató que hace 30 años que tienen la empresa, que al principio no tenían ningún problema, trabajaban cordialmente, y últimamente sí exigencias en las que pedían a modo de colaboración una cuota mensual. Que tenían que abonar una suma mensual por las obras que estaban haciendo en Bahía, y esto era una exigencia en la que no estaban de acuerdo. Que se pagaba porque de otra manera les entorpecían el avance de las obras, hacían asambleas y otras cosas. Que no eran justificadas las asambleas.

Mencionó que el aporte mensual últimamente era de 8000 pesos, que se empezaron a pagar esas sumas alrededor del 2015 y luego se actualizaron a 8000. Que el pago lo efectivizaba él en la empresa y lo buscaba Mario Gonzalez o mandaba a otra persona para que le den el sobre. Que supone que Mario Gonzalez sabía que se trataba de dinero porque lo venía a buscar. Que durante los años 2015 al 2017 fueron estos pagos mensuales. Que no recuerda cuando le dijeron que empezara a pagar, y en agosto/septiembre del 2017 se cortó el pago.

Indicó que para una obra en Villarino se les pidió la suma de 10 mil pesos, que la obra era de desagüe cloacal en Pedro Luro. La obra la encomendó la municipalidad de Villarino. Que esto de los 10 mil mensuales fue durante lo que duró la obra 4 o 5 meses y se lo entregaba al ingeniero Salguero que estaba encargado de esa obra y él lo entregaba en la obra. Que ese pedido lo hizo Molina. Salguero se lo daba a Molina, y esto se lo dijo Salguero.

Que esto es lo mismo que lo que aportaban en Bahía, que como era una obra afuera había que hacer otro aporte aparte, que no correspondía a Bahía y si no se pagaba se entorpecía el avance de la obra; que, por el contrario, si se pagaba se trabajaba normalmente.

Acotó que en Villarino se hicieron varias obras menores pero no se hizo ningún aporte.

Señaló que Coince integró una ute con Cerra y Moro, Ingeniería y Arquitectura, Abedul y Carreteras 2000, esta ute tenía a cargo obras de pavimentación asfáltica en la zona donde se re-asfaltó ruta existente. En esa obra la ute pagó 40 mil por mes, ese dinero lo manejó Tepliz, que negoció con Burgos, porque pedían más y llegaron a convenir que fueran 40 mil pesos. Que no sabe cuánto pedían. Que de esos 40 mil aportó 10 mil cada empresa, y la administración de la ute la manejaba Carreteras 2000, y esto fue durante toda la obra.

Relató que se hizo una carpeta, camino de entrada y un cordón cuneta por parte de las empresas de la ute en un predio del gremio cerca del aeropuerto. Que eso fue una exigencia del sindicato para que aportaran a esa obra sin cobrar, y ahí participaron todas las empresas de la ute. Que esa obra cree que la dirigió Ingeniería y Arquitectura.

Al doctor Jara le contestó que Molina sí le pidió dinero a él, que primero habló con el declarante y luego después el dinero se lo llevaba Rafael Salguero. Que era el aporte que les obligaban a hacer para poder realizar obras, que no le dijo para qué era el dinero. No le dijo que iba a hacer con el dinero. Que no le dijo Molina que pasaba si no pagaba, pero siempre los amenazaban haciendo asambleas y entorpeciendo el ritmo normal de obras.

Indicó que no les hicieron asambleas porque conocían la metodología y por eso empezaron pagando sin que se produjeran esos

hechos. Que Molina no le dijo que si no pagaba iban a hacer asamblea. Que ya había pasado con otras empresas, tenían conocimiento que era esa la metodología. Que cuando había una exigencia así se hacían asambleas todos los días para entorpecer la obra y perder tiempo. Que en algún caso lo habían hecho en la empresa suya también, en Bahía Blanca. Que en la zona de Villarino no hicieron ninguna asamblea. Que en algunas obras no se pagó, como tampoco se pagó cuando la empresa empezó a trabajar, en el año 87.

Al doctor Martinez le contestó que conoce a Monteros, que no ha hablado personalmente con él, que generalmente hablaba su socio. Que Monteros no le hizo ningún pedido.

Que desde el 2015 venía lo de la cuota mensual, y aumentó sobre el final a 8000 pesos. Que era una cuota fija de dinero mensual, más allá de las obras en Bahía.

Respondió que "…esto convenido no fue, era una imposición que ellos no estaban de acuerdo pero lo pagaban para evitar conflicto…". Que no recuerda cómo lo impusieron, que capaz su socio lo sabe más.

Mencionó que una vez con la vestimenta les dieron los presupuestos de lo que ellos cobraban los elementos de seguridad y no lo contrataron porque era más caro y no pasó nada. Que servicio de comida no tenían y la gente se llevaba su comida a la obra. Que no les dijeron de

contratar a nadie, no tenían traslado tampoco, ni les aconsejaron contratar a nadie en particular. Que en cuanto a los elementos de seguridad estaban junto con el presupuesto de la ropa de trabajo y contrataron a otro que era más conveniente.

Que personal de la bolsa de trabajo han usado en Villarino; pero ellos tienen un staff propio que lo llevan a las distintas obras, y cuando necesitaban contratar ellos les daban la lista, pero eso no era imposición y no han tenido problemas.

Que en el 2016 les exigieron premios de fin de año para los obreros, que querían 8000 por obrero pero se terminó acordando 4000 pesos. Que no recuerda otra exigencia. Que del 2015 para acá no recuerda conflictos gremiales en las obras. Que no recuerda cómo fue el momento del aumento a 8000.

En el mismo sentido computo lo declarado en el juicio por el testigo señor Diego Rafael Salguero, quien contó que es Ingeniero Civil, dirigiendo obras desde hace varios años para la empresa Coince, siendo desde hace un tiempo atrás socio minoritario de la misma.

Expuso que ha trabajado en Pedro Luro y la zona en distintas obras. Que una de ellas fue la construcción de desagüez plubiales en los años 2.016 y 2.017, una obra bastante grande contratada por hidráulica de la provincia. Que comenzó la obra en febrero del 2.016, y luego de pasar un

par de meses se presentó gente de la UOCRA para pedir un aporte dinerario mensual de 10.000 pesos y que se tomara gente de la bolsa de trabajo de la UOCRA, cuestiones ambas que hicieron.

Indicó que el pedido lo hizo Guillermo Molina, que era el encargado zonal, de la zona de Villarino. Antes de este planteo se presentó gente de la UOCRA en la obra y les dijeron que tenían que ir a la sede del sindicato a calle Saavedra al 400. Que el declarante fue al sindicato y lo recibió Molina, no habiendo otra persona en la reunión. Que esto fue en una oficina entrando a la derecha.

Relató que los 10.000 pesos se tenían que pagar mensualmente en efectivo. Que esos pagos se hicieron. Una vez por mes le daban un sobre desde la empresa con el dinero para que él se lo acerque a Molina en algún lugar en el cual quedaban para encontrarse, en la vía pública, una estación de servicio u otro lugar.

Reiteró que estos pagos no fueron desde el inicio de la obra, sino que fueron luego de pasados al menos dos meses hasta el final de la obra.

Mencionó que en la parte de las obras de Villarino trató él con el gremio, pero que la empresa trabajaba desde siempre con la UOCRA, y no era él parte de este trato, pero sabe que la empresa le pagaba a la UOCRA 8.000 por mes para trabajar en Bahía Blanca, como aporte a la

UOCRA. Que esto se lo comentaba Roberto Gabeglio, aunque no sabe a quién la pagaba Gabeglio, dado que no participó de esas reuniones y negociaciones, pero entiende que era para trabajar sin recibir amenazas o que les frenen las obras el motivo por el que se pagaban estas sumas.

Señaló que en la obra a su cargo no vio nada mal, se desarrolló naturalmente, tomaron gente de la bolsa de la UOCRA y ese personal trabajó normalmente y correctamente, y no hubo actos de violencia en esas obras. Que no tomaron a todos los de la bolsa, sino a un par de empleados para ayudante y tareas menores, y los maquinistas eran los empleados permanentes de la empresa.

Refirió que la empresa Coince participó en la obra del predio del gremio, cree que aportó mezcla asfáltica para hacer algo en el lugar. Sabe que participaron en eso varias empresas viales para hacer cordón cuneta y asfalto. Acotó que fue una negociación entre el gremio y las distintas empresas, y empezó como un pedido del gremio a las distintas empresas. De las negociaciones por la empresa participó Tepliz, su presidente.

Al doctor Jara le contestó que le dijeron que tenía que ir a la sede de la UOCRA para hablar de la obra. Que no recuerda si llevó alguna documentación. Que no le hicieron ninguna amenaza. Que no se habló de

otra solicitud de parte de la UOCRA. Que esas dos cosas fueron las que solicitaron en relación a la obra.

Dijo que no recuerda nada en particular que no tenga algo que ver con una obra como la que era, las condiciones de seguridad y ese tipo de cuestiones no se hablaron, pero no había nada fuera de lo normal que él recuerde. Que en obras de esas características siempre se habla de las particularidades de la obra, la normativa apunta especialmente a cuestiones de seguridad e higiene, a la seguridad en las excavaciones y zanjeos, en lo que uno tiene que tener cuidado en ese tipo de trabajo. Que justamente por eso en esa charla, al tener la empresa al conductor y capataz de mucho tiempo y confianza, cuestión que hace no sólo a la ejecución sino al cuidado de la gente que trabaja aquí, que fue que se contrató sólo a personal para tareas menores.

Le respondió al doctor Jara que no le dijo Guillermo Molina para que era el dinero que se pedía como colaboración.

Que luego del 2.015 se hicieron muchas obras en Pedro Luro, que no recuerda cuantas, que se hicieron obras de cordón cuneta, pavimentación, algo de cloaca, por lo que han sido más de 5 obras seguramente. Que normalmente se hacen licitaciones y se le adjudican. En los casos de privados se contrata directamente. En las licitaciones se compite con otras empresas, que se repita la competencia es lo normal, son empresas de la zona casi siempre, las locales y de la región, capaz que

viene alguna de más lejos de acuerdo con la magnitud de la obra. Que en Bahía y la región hoy están Esuco, Centro, otras en la ruta 33, Ingeniería y arquitectura, Carreteras 2000, Abedul y otras más.

Que en las obras de Pedro Luro intimidación, amenazas o aprietes por parte del señor Molina no recibió.

Ante nuevas consultas del señor Fiscal dijo que Molina no le dijo adonde iban los 10.000 mensuales. Que no lo consultó a Molina por el destino del dinero. Que la suma se abonaba porque al requerimiento de los 10.000 y tomar gente lo charlaron en la empresa, y para evitar que se pongan trabas a la hora de trabajar o se realicen asambleas que entorpezcan el trabajo en sí sin ninguna justificación, fue que se decidió pagar. Que por experiencias que antes estos requerimientos la forma que se podía trabajar sin asambleas sin sentido, es que había que acceder a este tipo de situaciones, de pagos.

Relató que se coordinaba con Molina la entrega del dinero en efectivo. Que Molina le decía “dónde nos podemos encontrar por la documentación a entregar o los planos”, que eso era lo que decía, pero era el dinero lo que le daba. Que cree que usaba la palabra documentación o planos porque tenía miedo de ser grabado, que por eso cree que hablaba de documentación y no de dinero.

Refirió que entiende que no era legítimo el pedido de dinero porque la única contraprestación era no generar molestias a la hora de trabajar o no entorpecer las obras.

Ante consulta del doctor Jara contestó que no le dijo Molina que el dinero era para evitar molestias o no entorpecer la obra.

Al doctor Zorzano le dijo que la reserva de su testimonio la solicitó por una cuestión de protección de la familia y seguridad personal, por ese resguardo. No miedo en particular, pero al no estar habituado a este tipo de situaciones y teniendo una familia, por estas cosas que aparecen en las noticias como violentas fue que lo hizo.

También se suma a lo expuesto por los dos testigos que se han valorado anteriormente, lo relatado en la audiencia por el señor Néstor Julio Teplitz, quien comenzó señalando que es Ingeniero Civil, socio de la empresa constructora Coince, habiéndose dedicado desde hace 39 años a la construcción, habiendo integrado también la comisión directiva de la Cámara Argentina de la construcción.

Indicó que por esa actividad interactuaban con la dirigencia local y nacional de la UOCRA, existiendo un acuerdo de colaboración mutua entre las entidades por tener temas en común y para generar oportunidades de buscar puestos de trabajo y obras; como así también, para atender otras cuestiones como las paritarias anuales, en las cuales la cámara es un

referente, dado que si bien hay otras cámaras más regionales en el país, las paritarias que ellos acuerdan son las que se tienen como referencia, como pautas salariales para el sector.

Relató que se tiene una buena relación desde lo institucional, siempre con alguna situación, pero en general resulta bastante cordial el trato; pero que en el último tiempo, entre el 2016 y el 2017, se generaron situaciones que tensaron la relación y la hicieron más compleja.

Apuntó que se debe distinguir entre dos tipos de obra, la pública y la privada, la obra pública se rige por los pliegos y cuando se oferta se rige por las leyes de obra pública y en esa instancia cuando se cotiza para formar un precio se pone el componente de mano de obra que es el homologado por las paritarias.

Indicó que a partir de determinado momento en la delegación Bahía Blanca de la UOCRA se empezaron a pedir la firma de convenios específicos que los remitían a valores muy superiores a los establecidos por las paritarias; valores que iban del 20 al 35 por ciento por arriba de lo establecido. Que las cláusulas que pedían eran específicas y no están contempladas en los pliegos de licitación, por lo que les querían hacer entender eso a la gente de la UOCRA, pero no podían, y cuando ganaban una obra tenían que hacer uso de estos convenios particulares que hacían inviable la obra, al modificar los costos.

Expuso que hay obras de arquitectura de viviendas u hospitalarias en las que la mano de obra es significativa, cerca del 40 o 50 por ciento y si ahí se aplican coeficientes tan altos no se podía ejecutar la obra. Que esto empezó a generar polémica y no se encontraba punto de equilibrio con la UOCRA.

Señaló que les informaron a los gobiernos de nación y provincia avisando que no los podían contemplar a esos convenios, y que si se querían homologar los acuerdos tenía que ser oficial, situación que colocó a las empresas en situación de tensión. Que además del salario había otras variables que estaban en esos convenios, como la provisión de comida, que no estaba en la licitación original, lo que generó situaciones complejas.

Acotó que es por eso que el declarante habla de dos etapas, una hasta el 2.016 y otra luego cuando entró a jugar esto. Que los años 2.015 y 2.016 fue duro para el sector, y cuando empezaron a salir obras de saneamiento y viales fue que empezaron a aparecer este tipo de intenciones de aplicar estos convenios específicos. Que para él no se podían admitir estas exigencias descabelladas que llevasen a paralizar las obras.

Apuntó que tuvo exigencias de premios a fin de año en su empresa Coince. Que el primer problema fue un convenio específico cuando hacían un trabajo de saneamiento y recambio de cañerías para ABSA y fueron convocadas casi la totalidad de las empresas que trabajaban para

ABSA para firmar el convenio, del cual les habían dado un borrador con lo que se exigía y cada empresa tomaba la decisión que le parecía oportuno. Que ellos no lo aceptaron y no lo firmaron.

Relató luego que los premios es una cuestión habitual en el sector de la construcción. Que la gratificación de fin de año ellos no la tenían como sector, pero sobre fines del 2.016 fueron invitadas las empresas a que diesen un premio generalizado de 8.000 pesos por persona; pero como era una época crítica, luego de un par de años con bastantes problemas de trabajo en la obra pública, les pareció desmedido, no obstante lo cual, para acompañar una petición para que la gente pasara mejor las fiestas aceptaron dar un premio más bajo que lo solicitado, ofreciendo 2000 pesos, pero esta suma no fue aceptada y se tornó muy compleja la situación porque estaban en diálogo y de buenas a primeras los llamaban del Ministerio de Trabajo para buscar una salida en este tema, y ahí fue problemático porque muchas obras tuvieron ese mismo día de la reunión asambleas y paradas transitorias, por lo que les daban a entender que si no acordaban iban a tener más problemas, y al final acordaron dar algo por operario.

Refirió que en representación de la UOCRA en estas gestiones estaba Burgos, que se reunió en la CGT y otras veces en sede de la UOCRA. Que recuerda alguna reunión con una mesa en la que estaban Molina, Paiz y algunos más, que de la Cámara estaba Quantin, el gerente

Lopez de su empresa, Gurrado, siendo unos 4 o 5 que fueron para acordar eso. Que luego, en la reunión en el Ministerio de Trabajo había más gente, como los representantes de Carretera 2000, Ferrero y empresas que no eran de Bahía Blanca y otras que hacían obras viales por la zona que habían sido invitadas pero no se acercaron. Que en esa reunión en el Ministerio de Trabajo por la UOCRA estaba Burgos y alguien más, pero no recuerda quien.

Señaló que a las empresas viales de Bahía, que eran unas 5 (Ingeniería y Arquitectura, Carreteras 2000, Cerra y Moro, Coince, Obras Abedul), y empresas viales que trabajaban en la jurisdicción, como CV1, Vial Agro y alguna más, se les hizo un planteo por el gremio que había que hacer determinadas obras en el predio de la ruta vieja, obras que para algunas empresas chicas eran significativas, porque estaban haciendo obras de poco monto y era muy injusto dividir en partes iguales un esfuerzo de tal magnitud, que ellos sostenían que podían colaborar con una cuota parte según las posibilidades de las empresas. Que para esto hubo muchas reuniones y les dijeron que había que hacerlo y no tuvieron más opción que hacerlo, sino iba a llegar a una situación conflictiva y si lo que querían era colaborar con los obreros de la construcción, y por eso accedieron, y ahí las empresas más chicas que eran las de Bahía tuvieron que hacerse cargo de eso.

Comentó que sabían de la obra que se estaba haciendo en ese predio, que ellos les mostraban el proyecto que estaban ejecutando, que era algo que veían beneficioso para los obreros, incluso los de su empresa, y eso es real. Que las empresas locales afrontaron la ejecución, hizo un aporte alguna empresa de afuera, pero mayormente lo hicieron las 5 locales. Que la obra consistía en unos 2500 metros cuadrado de pavimento, movimiento de suelo, cordones cuneta, curvas, como si hoy hubiese que hacer 3 cuadras en la ciudad, que estos son números importantes, no era algo que tuviesen previsto como empresa.

Expuso que por ese tiempo había poco trabajo, las empresas padecían esa situación y como su empresa tiene personal estable y si no hay trabajo les dan tareas menores, para no despedir gente, es que estaban haciendo un esfuerzo para mantener su personal, cuestión que le plantearon a la UOCRA y por eso les decían que no podían hacerse cargo de tamaña inversión, que querían colaborar pero a largo tiempo, y tras eso les dieron un ultimátum que ese trabajo tenía que estar terminado para tal fecha, dentro de unos 60 días y ahí se puso tenso el asunto, no tuvieron muchas opciones, terminaron haciendo la obra para mantener una relación, pero fue tenso.

Contó que estuvo en dos reuniones y el gerente de una vial de Bahía, Gustavo Evangelista, fue como designado para coordinar la relación entre todas las empresas con la UOCRA para poder llevar a buen puerto

esto. Que cuando se los convocó a reunión en la UOCRA estaba Evangelista, el de Obras Abedul, Cerra y Moro y de la UOCRA el señor Burgos y no recuerda si otros más, y esa fue la última reunión donde se les impuso una fecha cierta de terminación y había que hacerlo. Que esta fue la última reunión, que antes gente de la UOCRA y Evangelista venían gestionando y hablando sobre el particular durante algún tiempo, pero que del momento del ultimátum lo recuerda a Burgos, que lo recuerda a él como el vocero, capaz que había otro integrante de la UOCRA que hoy se le escapa.

Consultado por el señor Fiscal sobre pedidos de dinero, contestó que a muchas empresas les pedían colaboración mensual, y como era razonable para hacer frente a viáticos y combustibles para movilizarse o hacerse cargo de bolsa de alimentos para obreros sin trabajo, ellos ponían como una cuota de aporte pero que nunca fue significativa y era bastante habitual. Que por eso colaboraban con presentes y regalos para el día del niño o para hacer una bolsa para las fiestas o para cuando empezaban las clases para chicos de padres que no tenían trabajo. Que estas solicitudes las hacían habitualmente de la UOCRA y no veían con problema esas colaboraciones y rondaban el equivalente a una quincena de un operario de la construcción por mes, esto era lo que significaban estas cuotas. Pero luego tuvieron un inconveniente en algún momento que le tocó participar en negociación en una oportunidad que conformaron una UTE entre cuatro

empresas bahienses en una obra de bacheo para vialidad de la provincia de Buenos Aires, y a la empresa que administraba se le solicitó que se haga un aporte significativo mensual, sin entender el declarante el por qué, dado que las empresas tenían la misma gente, no era una obra importante o extraordinaria, ni había motivos. Que se realizó una reunión de la UTE y lo comisionaron para que explicara que les parecía fuera de lugar y no correspondía, que en ese momento les pedían 80.000 pesos por mes a esa UTE, integrada por 4 viales de Bahía (Cerra y Moro, Coince, Abedul y Carreteras 2000), que no eran nuevas empresas y además estaban ya colaborando en forma individual cada empresa.

Contó que se reunió con Burgos y le explicó esta situación y que él le dijo que entendía pero que había que hacer la colaboración. Que ahí el declarante le dijo que quería reunirse con Monteros, y así lo hicieron los tres y luego de explicaciones terminaron acordando un número de 40.000 pesos, 10.000 por cada empresa que se sumaba a lo que además colaboraban cada una por su cuenta. Que no le encontraban explicación a esto, pero esta fue una de las primeras veces que vivieron algo muy violento y fuera de lugar, pero que igual tuvieron que aceptar.

Reiteró que la gente de la UOCRA no entendía del todo que esto no era una nueva empresa, que estas personas les decían que era algo de magnitud la obra y eso no era así, eran los mismos equipos y operarios, y las mismas empresas, pero que ellos insistían en que era algo aparte.

Comentó que estos costos eran significativos para cada empresa. Que era muy complejo administrativamente sacar esos fondos, la contabilidad se respalda en facturas y certificados de obra y esto había que sacarlo como retiro de socios y era complejo.

Que la obra que llevaban adelante era de bacheo en rutas provinciales dentro del distrito de vialidad provincial y duró un plazo de entre 7 a 9 meses, habiéndose realizado los pagos a través de su persona una vez por mes, que el declarante se ocupaba de gestionar el aporte de cada empresa y luego se lo llevaba a la UOCRA al señor Burgos. Que no recuerda exactamente cuantos meses pagaron, que lo tienen seguramente documentados pero habrán sido la cantidad de meses que duró la obra. Que cuando fue a declarar a la Fiscalía llevó un detalle, pero no lo recuerda en este momento.

Mencionó que su empresa realizó también por esa época una obra de desagües en la localidad de Pedro Luro, estando encargado el ingeniero Salguero, siendo una obra contratada por hidráulica provincial. Que conflicto no hubo, pero sí dos exigencias que los sorprendieron, por un lado que tenían que contratar personal de una bolsa de trabajo y su empresa dudaba si estaban calificados o no, por lo que acordaron tomar en forma parcial, no a todos los operarios porque había equipos que no podía manejar cualquiera. Que por eso tuvieron que tomar gente de una bolsa de trabajo, que no les gustó la idea al principio pero luego no tuvieron conflicto

gremial ni laboral con esos operarios a pesar de que se les impuso ese personal. Por otro lado se les pidió una asignación porque era un contrato extraordinario y se les pidió aporte monetario de un dinero, y luego de negociación quedó de 10.000 mensuales mientras transcurra el plazo de obra. Que de eso dio un detalle cuando hizo la declaración en fiscalía.

Que estos 10.000 pesos los pidió Molina, que era el que tenía diálogo en temas gremiales en esa obra con Salguero, que no habló con el declarante, que el manejo lo tuvo Salguero, pero él estaba al tanto. Que el pago de los 10.000 mensuales se los alcanzaba Salguero en persona al señor Molina, pero no sabe en qué lugar.

Agregó que esto era un monto significativo por esa época y además era lo mismo que antes comentó, dado que era complicado manejar dinero en efectivo y era todo engorroso.

Le señaló al señor Fiscal ante sus consultas que a Mario Gonzalez lo conoce de la UOCRA. Que tiene un delegado de obra en la empresa y desde la comisión de la UOCRA habían instrumentado que el vocero interlocutor que hablaba con los delegados y el personal técnico era el señor Gonzalez, para los reclamos, planteos o situaciones que corregir de obra, entrega de ropa y otras cosas.

Aseveró que era Gonzalez quien retiraba la suma de colaboración que mencionó al principio, y que era habitual y se correspondía con una

quincena más o menos de un operario, que lo retiraba él de la empresa dado que era el nexo que seguramente lo llevaría a la UOCRA. Que el declarante no se ocupaba de eso, dado que la administración la llevaba su socio. Que esos pagos eran una colaboración y el argumento que ellos decían era que se utilizaba para viáticos, combustible o ayuda a algún desocupado, que esto no era algo institucional. Que esto era lo que ellos decían como argumento, pero no les consta que hacían con ese dinero. Que estas sumas de dinero se pagaron muchísimos años.

Acotó que no fue Gonzalez quien lo solicitó, que fue en la época que Humberto Monteros estaba en forma presencial en la UOCRA y les hizo estas solicitudes que luego permanecieron en el tiempo.

Al señor defensor, Dr. Jara, le contestó que en su momento le explicaron a la gente de la UOCRA el margen de ganancia por cada obra y también le dijeron que era una situación irregular lo que significaban estos pedidos.

Que en una licitación pública donde no está establecido por pliego y les dicen que van a aplicar un convenio en el que van a pedir 20 por ciento por arriba de lo acordado, y a otra la llaman y le dicen el 25, y a la otra el 30, y ese llamado invoca a una institución gremial, torna a esto en una situación irregular porque puede hacer que uno gane o pierda una obra, si es así esto también es irregular.

Le explicó al letrado que en una obra vial la parte proporcional de mano de obra es de aproximadamente el 25 por ciento del monto contractual y si a eso se lo incrementa en un 25 o 30 por ciento lo lleva a un número que no se puede afrontar. Que el margen de utilidad va entre 8 y 10 por ciento en la obra, por lo que si se distorsiona ese número, no hay de donde sacarlo.

Le contestó al Dr. Jara que no podían poner un margen de ganancia del 50 por ciento porque no ganarían ninguna obra; que hace 30 años que se dedica a esto, y a veces van con el 4 o 5 por ciento de utilidad, dado que es una cuestión de oferta y demanda.

Señaló que las leyes de redeterminación de precios ajustan el 90 por ciento del contrato aproximadamente, porque no lo hacen en las utilidades que habitualmente son hasta el 10 por ciento.

Agregó que los premios de fin de año, comidas cuando no corresponde que las den, transporte a obras cuando no es habitual o cuando los obreros se pueden manejar particularmente, son todos gastos que hacen inviable y desfasan los números de la cotización de la obra.

Reiteró que se debe diferenciar obra pública con la privada, que en su empresa nunca se opusieron a si querían mejorar el salario porque ellos decían que los convenios eran un piso y no un techo, pero que desde su empresa les contestaban que tenían que tener contratos previstos

para pagar esas diferencias, si al cotizar en la obra pública no lo tienen previsto no lo pueden afrontar.

Señaló que todo esto arrancó en obras privadas, donde su empresa habitualmente no participa, pero por sus colegas sabía que cuando se hacían paradas de planta en el polo petroquímico era habitual que se abonase el salario caído y que además existiesen valores distintos en los convenios de las empresas que trabajan en eso. Que hay una cámara específica vinculada a las empresas que trabajan en ese sector donde se establecían valores que iban en más en 20 por ciento en el salario, pero que esto ya estaba en los contratos y los comitentes lo sabían y se hacían cargo.

Señaló que cuando comenzaron los parques eólicos se pretendió por la UOCRA hacer lo mismo, pero las empresas que habían agarrado esas obras no tenían previsto eso, por eso se generaron muchos conflictos, las empresas se quejaban en la cámara, comentaban que tenían la obras paradas.

Reiteró que el 35 por ciento de aumento no lo pactaron, no lo firmaron, su empresa Coince nunca firmó y no sufrieron represalias por no firmar.

Le contestó al Dr. Jara que los 4.000 pesos que pagaba eran retiro de dividendos. Que no maneja la parte contable pero es un retiro de los directores o los socios de la empresa para hacer frente a esto. Que debe

haber maneras de visualizarlo, pero no maneja la parte contable administrativa. Que se les pedía una colaboración y aducían esos argumentos que antes indicó, y lo habían “aceptado, póngale el término que quiera” –así sus dichos-, y eso se registraba igual como ganancia, salidas de cajas chicas en las empresas que tienen que ver con esas cosas. Son fondos que no salen ni facturados, ni con un concepto específico, por lo que todos esos pagos se consignaban como ganancias, porque no se tiene forma de justificar un gasto al no haber factura, y eso además tributa ganancias ya que así se lo entiende impositivamente. Que no pagaron nada más sin documentación respaldatoria.

Reiteró que desde lo institucional hacían énfasis para lograr más fuentes de trabajo y estaban saliendo de una crisis con una desocupación muy grande, había gente haciendo cola en la empresa pidiendo trabajo que no tenían. Cuando empezó alguna licitación pasaba que se generaban conflictos en obras que se paraban y en las reuniones con la UOCRA se apuntaba a eso, al sentido común, que las obras se hagan y se concreten.

A partir de esta prueba antes analizada, entiendo demostrado que durante el año 2015, en esta ciudad de Bahía Blanca, al menos dos personas que revestían la calidad de dirigente sindical del gremio UOCRA, le exigieron a los integrantes de la empresa Coince Bahía S.A., los señores Roberto Gaveglio y Néstor Teplitz, el pago de una suma mensual de unos

8.000 pesos por mes bajo intimidación de paralizar las obras e impedir que la empresa pudiese ejecutar sus tareas de forma normal. La suma requerida fue abonada por la empresa desde el año 2015, hasta el mes de septiembre del 2017, de forma mensual (hecho número 16).

También encuentro demostrado que en el año 2016, cuando la empresa COINCE BAHÍA S.A. se encontraba realizando una obra de construcción de desagües pluviales en la localidad de Pedro Luro, al menos una persona que revestía la calidad de dirigente sindical del gremio UOCRA, le exigió a los integrantes de la empresa Coince Bahía S.A., los señores Roberto Gaveglio, Néstor Teplitz y Diego Salguero, el pago de una suma mensual de 10.000 pesos por mes bajo intimidación de paralizar las obras e impedir que la empresa pudiese ejecutar sus tareas de forma normal. La suma requerida fue abonada por la empresa desde el mes de febrero del 2016, hasta el mes de febrero del 2017, de forma mensual (hecho número 17).

Trataremos ahora los hechos 18, 20 y 21, por tener prueba común. Los mismos se han descripto: HECHO 18): Durante los años 2015 y 2016, en circunstancias en que la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS conformada por las firmas: "CARRETERAS 2000 S.A.", "COINCE BAHÍA S.A.", "CERRA Y MORO S.R.L." y "OBRAS ABEDUL S.R.L.", se encontraba realizando la obra de BACHEO DE LA RUTA NACIONAL N° 3, contratadas por la Dirección de Vialidad de la Provincia de

Buenos Aires (expediente n° 2410-98/2014), el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS -Secretario General Adjunto de la entidad- EXIGIÓ a los representantes legales de dichas empresas, señores CRISTIHAN HORACIO FERRERO (quien también actuaba de coordinador de la UTE), NÉSTOR JULIO TEPLITZ, DIEGO MARTÍN CERRA y LUIS MARÍA MEDÚS, respectivamente, la suma de CIEN MIL PESOS POR MES como condición para poder continuar la obra sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Posteriormente, el señor NÉSTOR JULIO TEPLITZ -presidente de "Coince Bahía S.A."-, se reunió en la sede de la UOCRA. Seccional Bahía Blanca (sita en calle Saavedra n" 470 de esta ciudad) con los dirigentes HUMBERTO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente), quienes finalmente le exigieron el pago de CUARENTA MIL PESOS POR MES. Como consecuencia de dicha imposición, los representantes de las empresas integrantes de la U.T.E. debieron ABONAR mensualmente las sumas exigidas durante los siete meses que demandó la realización de la obra.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos

(quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 20): En el mes de diciembre de 2015 -aproximadamente-, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca (sita en calle Saavedra n" 470 de esta ciudad), el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto del sindicato) con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General del sindicato), EXIGIÓ a los señores LUIS MARÍA MEDUS, CRISTIHAN HORACIO FERRERO, DIEGO MARTÍN CERRA Y MAURICIO GIQAUX, NÉSTOR JULIO TEPLITZ, FABIÁN HÉCTOR GURRADO y GUSTAVO EVANGELISTA y PABLO QUANTÍN, quienes representaban a las empresas: OBRAS ABEDUL S.A., CARRETERAS 2000 S.A., CERRA Y MORO S.R.L., COINCE BAHÍA S.A., INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L. y VIAL AGRO S.A., respectivamente, y al representante legal de CV1 (Consecionaria Vial 1), que realizaran el MOVIMIENTO DE SUELO, CONSTRUYERAN LA CARPETA ASFÁLTICA, CORDÓN CUNETA Y BADENES

CORRESPONDIENTES AL ACCESO Y CALLE INTERIOR DEL PREDIO RECREATIVO QUE EL SINDICATO TIENE SOBRE LA EX RUTA NACIONAL N° 3 NORTE, en el tramo conocido como Calderón, dentro del Partido de Bahía Blanca.

También, durante el mes de diciembre del año 2015, WALTER RAFAEL PAIZ (Tercer Vocal Titular), EXIGIÓ a MARTÍN DARIO SÁNCHEZ, presidente de la firma "KARPA S.A." el aporte de materiales para la construcción de la citada obra.

Respondiendo a las extorsivas exigencias de BURGOS, PAIZ y otros dirigentes gremiales, dichas obras debieron ser concretadas por las empresas damnificadas, las cuales distribuyeron la realización de las tareas y afrontaron los costos que demandó la misma, a excepción de "KARPA S.A.", que no participó en las tareas, aunque sí aporto para la obra, medio pallet de cemento, que fue entregado el 04 de diciembre del 2015 a Héctor De La Torre, persona enviada a la empresa por WALTER RAFAEL PAIZ a retirar el material requerido.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de las obras que por entonces estaban realizando y/o con la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad

imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a las empresas cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 21): A fines del año 2016, en sede de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (sita en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad), los señores JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto), GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas), SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Segundo Vocal Titular y Delegado Gremial) y WALTER RAFAEL PAIZ (Tercer Vocal Titular y Secretario de Organización y Asuntos Gremiales), entre otros dirigentes del sindicato, EXIGIERON a LUIS MARIA MEDÚS, en representación de "OBRAS ABEDUL S.R.L."; NÉSTOR JULIO TEPLITZ y ROBERTO GAVEGLIO, ambos de "COINCE BAHÍA S.A."; GUSTAVO EVANGELISTA, apoderado de "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L.", CRISTIHAN FERRERO representante de "CARRETERAS 2000 S.A."; MAURICIO GIQAUX y DIEGO MARTÍN CERRA, ambos de "CERRA Y MORO S.R.L." y al señor JORGE LUIS FONSECA -representante de MARCALBA S.A., que abonen a todos los empleados de sus respectivas empresas la suma de OCHO MIL PESOS,

que era impuesta por los citados dirigentes gremiales como supuestos "PREMIOS", circunstancia que no era real, pues fueron exigidas coactivamente por los sindicalistas para todos los trabajadores por igual y sin considerar la opinión de los empresarios en función del mérito y rendimiento de cada uno de sus dependientes. Dicha exigencia coactiva era condición para que las tareas en las obras que estaban desarrollando cada una de las referidas empresas pudieran continuar sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la U.O.C.R.A.

Finalmente, los imputados resolvieron que se abone a cada obrero un monto de CUATRO MIL PESOS, que debió ser aceptado por los representantes legales de las citadas empresas, a través de un supuesto "acuerdo" en el marco del expediente administrativo número 21507-24904-16, que tramitó por ante la Delegación Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en fecha 23 de noviembre de 2016 y que fuera suscripto en carácter de representantes gremiales por José Bernardo Burgos y Walter Rafael Paiz.

Como consecuencia de la imposición, los directivos de las empresas constructoras pagaron a cada trabajador las sumas indicadas junto a la liquidación de los respectivos salarios.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades

laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir que la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

El relación al hecho identificado en la acusación fiscal como número 18 entiendo que se demuestra con lo declarado por los testigos Gaveglio, Salguero, Tepliz, Medús, Cerra y otros que han declarado en la audiencia, a cuyos testimonios en su totalidad me remito, dado que han sido en extenso analizados.

Puntualmente, la mecánica de la reunión, las conversaciones y la obligación a pagar una suma mensual para evitar las alteraciones durante la ejecución de las obras, han sido bien graficadas en el testimonio del señor Tepliz, quien luego era el encargado de recoger los aportes de las cuatro empresas –incluída la suya- y acercárselo al señor Burgos.

El testigo fue contundente en señalar que incluso solicitó una reunión con Monteros, para tratar de evitar estos pagos, pero que no lo logró, dado que en esa reunión con Burgos y Monteros sólo pudo conseguir que se disminuyese el monto que debían entregar a la suma de 40.000

pesos, cifra que –indicó- era sumamente importante para las empresas que debían aportar el dinero.

Señaló el señor Néstor Tepliz que conformaron una ute entre cuatro empresas bahienses en una obra de bacheo para vialidad de la provincia de Buenos Aires, y a la empresa que administraba se le solicitó que se haga un aporte significativo mensual, sin entender el declarante el por qué, dado que las empresas tenían la misma gente, no era una obra importante o extraordinaria, ni había motivos. Que se realizó una reunión de la ute y lo comisionaron para que explicara que les parecía fuera de lugar y no correspondía, que en ese momento les pedían 80.000 pesos por mes a esa ute, integrada por 4 viales de Bahía (Cerra y Moro, Coince, Abedul y Carreteras 2000), que no eran nuevas empresas y además estaban ya colaborando en forma individual cada empresa.

Contó que se reunió con Burgos y le explicó esta situación y que él le dijo que entendía pero que había que hacer la colaboración. Que ahí el declarante le dijo que quería reunirse con Monteros, y así lo hicieron los tres y luego de explicaciones terminaron acordando un número de 40.000 pesos, 10.000 por cada empresa que se sumaba a lo que además colaboraban cada una por su cuenta. Que no le encontraban explicación a esto, pero esta fue una de las primeras veces que vivieron algo muy violento y fuera de lugar, pero que igual tuvieron que aceptar.

Reiteró que la gente de la UOCRA no entendía del todo que esto no era una nueva empresa, que estas personas les decían que era algo de magnitud la obra y eso no era así, eran los mismos equipos y operarios, y las mismas empresas, pero que ellos insistían en que era algo aparte.

Comentó que estos costos eran significativos para cada empresa. Que era muy complejo administrativamente sacar esos fondos, la contabilidad se respalda en facturas y certificados de obra y esto había que sacarlo como retiro de socios y era complejo.

Que la obra que llevaban adelante era de bacheo en rutas provinciales dentro del distrito de vialidad provincial y duró un plazo de entre 7 a 9 meses, habiéndose realizado los pagos a través de su persona una vez por mes, que el declarante se ocupaba de gestionar el aporte de cada empresa y luego se lo llevaba a la UOCRA al señor Burgos. Que no recuerda exactamente cuantos meses pagaron, que lo tienen seguramente documentado pero habrán sido la cantidad de meses que duró la obra. Que cuando fue a declarar a la Fiscalía llevó un detalle, pero no lo recuerda en este momento.

En el mismo sentido computo el testimonio del señor Cristian Horacio Ferrero quien contó que en una obra de bacheo de varias rutas cercanas a Bahía Blanca, no al testigo en particular, sino a uno de los integrantes de la ute, se lo convocó a reunión y le pidieron unos 90.000 pesos por mes a la ute, que estaba conformada por empresas de Bahía, y

ese pago era aparte de lo que cada empresa pagaba. Que luego se accedió a pagar 40.000 por mes, aportando 10.000 cada empresa de la ute, integrada por Coince, Abedul, Cerra y Moro y Carreteras 2000. Que fue Tepliz, de la empresa Coince, quien se encargó de eso, que no sabe con quien habló.

Dijo que no había forma de no efectuar el pago, que “uno sentía que si quería trabajar tranquilo lo tenía que pagar, veníamos con experiencia de paradas de obra y requerimientos de documentación de la noche a la mañana, uno tenía que trabajar 48 horas para presentar la documentación y se hacía luego otro parate u otra cuestión, que por eso entendimos que no había otra forma que pagar, lo que anhelábamos que esto fuese lo menos posible” –así sus expresiones-.

También corresponde computar para acreditar estos hechos lo relatado por el señor Luis María Medus, quien dijo que junto con otras empresas (Cerra y Moro, Carreteras 2000 y Coince) conformaron una ute para realizar una obra de bacheo y repavimentación en algunos sitios localizados en la ruta 3. Que en esa oportunidad les pidieron dinero, que la cifra que pagaban era de 40.000 pesos por mes, que los recibía Burgos y lo llevaba la gente de Coince o Carreteras 2000. Que él sabía de la existencia del pacto, pero la ute la gerenciaba Carreteras 2000, de la cual Cristian Ferrero es su titular.

Apuntó que cree que fue el titular de Coince, Néstor Tepliz, quien habló en esa oportunidad con la UOCRA, aunque no sabe como eran las entregas, si pasaban por la empresa o lo entregaban en el gremio. Dijo que los 40.000 lo ponían del fondo de la ute, para el cual aportaban en partes iguales 10.000 cada empresa. Que lo que pagaban eran menos de lo que le habían pedido al inicio, que habían pedido mucho más y arreglaron por eso.

El testigo Diego Cerra también aporta datos de interés para este hecho, dado que dijo que su empresa integró una UTE junto con Coince, Abedul, Arquitectura e Ingeniería y Carreteras 2000, para ejecutar una obra de la provincia en la ruta tres vieja y otras obras de bacheo, y ahí les pidieron 100 mil pesos y el Ingeniero Tepliz consiguió negociar en 40 mil que es lo que terminaron pagando, que hacían un aporte cada empresa a la UTE para poder pagarlo. Que esto era muchísimo dinero y era una obra que duró unos 10 meses, durante los cuales se abonó esa cifra, por lo que son 400 mil pesos que incluso hoy en día es un montón si se tiene en cuenta que esto ocurrió en el 2014 aproximadamente.

Dijo que el señor Tepliz es de la empresa Coince, que la UTE la administraba Carreteras 2000 y Tepliz era el encargado de tratar con el gremio.

Contó que él estuvo en la reunión con Burgos en su oficina, que estaba Ferrero, Tepliz, cree que Medus de Abedul y ahí se les hizo el

pedido de 100 mil pesos, que ellos le contestaron que no porque era una locura imposible de pagar, sobre todo porque la provincia paga a los 6 meses. Que ellos sabían lo que sucedía si no pagaban, no tenían que apretarlos porque sabían que tenían que arreglar, que esto "…no fue voluntario, jamás fue voluntario, por favor…". Que luego el señor Tepliz les dijo que había llegado a 40 mil, y lo festejaron, entre comillas, porque al lado del pedido inicial se consideraba un buen arreglo. Que posteriormente ellos le llevaban el dinero a Tepliz, la parte de su empresa, y él entregaba el dinero. Que esto fue durante lo que duró toda la obra, unos 6/8 meses por lo menos entre el 2014 y 2015.

Recordó que Burgos decía siempre la frase "…el que avisa no traiciona…", eso para referirse a las consecuencias que uno podía tener. Que esto se lo dijo varias veces.

Respecto de estos hechos resulta computable el testimonio del señor Roberto Gaveglio quien contó que Coince integró una ute con Cerra y Moro, Ingeniería y Arquitectura, Abedul y Carreteras 2000, esta ute tenía a cargo obras de pavimentación asfáltica en la zona donde se re-asfaltó ruta existente. En esa obra la ute pagó 40 mil por mes, ese dinero lo manejó Tepliz, que negoció con Burgos, porque pedían más y llegaron a convenir que fueran 40 mil pesos. Que no sabe cuánto pedían. Que de esos 40 mil aportó 10 mil cada empresa de la ute cuya administración la manejaba Carreteras 2000, y esto fue durante toda la obra.

Como se podrá advertir, los testigos han sido coincidentes en remarcar que este pedido de dinero a la unión transitoria de empresas, fue ante esa obra en especial que las mismas estaban ejecutando de forma conjunta, independientemente de las otras obras que estuviesen concretando en la ciudad o la zona.

Todos fueron contestes en remarcar la actitud de los gremialistas aquí acusados, quienes los convocaron a una reunión para hacerles saber el monto de dinero que debían entregarles por estar realizando esa obra.

No fueron citados para revisar documentación, para charlar sobre condiciones laborales, para tratar de acordar un mayor salario para los operarios, o por otras cuestiones vinculadas a la actividad gremial, sino que fueron convocados para ser informados del monto que debían pagar para poder trabajar, para poder ejercer ese derecho constitucional que menciona el artículo 14 de nuestra ley suprema.

Las condiciones que rodearon este nuevo pedido de dinero fueron las mismas expuestas por los testigos al momento de declarar, y para ello me remito a la declaración íntegra que ya ha sido computada con relación a los otros hechos puntuales de los cuales han sido víctimas.

En lo que respecta al hecho acusado como número 20, consistente en la ejecución de unas obras en el predio del gremio UOCRA,

sobre la ruta 3 vieja, entiendo que se demuestra con lo expuesto por varios testigos que han declarado en las audiencias de juicio.

El testigo Fabián Gurrado recordó que en el año 2.015 les realizaron un pedido grande para la construcción del predio del gremio donde 5 empresas hicieron cordones, bases y otras cosas y eso no fue acordado. Que estaban en el aeropuerto de Espora y "…tuvimos que ir a colaborar, entre comillas, por trabajos que fueron ejecutados en forma gratuita, no es una colaboración, es una extorsión, no se negociaba nada, era necesito esto y si no se hacía se paraba la obra…" –sus palabras-.

Que las empresas que tuvieron que hacer eso era las que estaban trabajando en el aeropuerto, y eran Cerra y Moro, Coince, Carreteras 2.000, Abedul y la de él, que le parece que en el predio de recreación había otra empresa de nombre Bulwar. Dijo que él no participaba de las reuniones porque le hacía mal, que sí estaba en una reunión pero en la ejecución estaba Evangelista.

Apuntó que en la reunión estaba Burgos, Monteros, que no recuerda si estaba Molina, y distintas personas del gremio y de las empresas, dueños, supervisores de obra y ahí "…no se convino –eso es hablar mal- se nos obligó a hacer esas obras para el predio lindero al aeropuerto..." –sus dichos-; luego dijo que cree que estaba Paiz también en la reunión.

Agregó que la charla fue en términos coloquiales fue "…muchachos nos tienen que dar una mano para hacer esta obra…", a lo que las empresas le contestamos "…pero como hacemos es mucha guita…", y nos respondieron, "…hay que hacer esto o hay que hacerlo, sino va a haber problemas…". Que el mal en concreto era no poder trabajar, no terminar las obras, hacer que se encarezcan los precios. Parar la obra era el mal concreto. Que en su caso personal no hubo otra conducta, salvo los modales.

Por su parte el testigo Pablo Quantín indicó que participó con su empresa de la obra en el predio de la UOCRA en la ruta 3 vieja, que como estaban haciendo trabajos en el aeropuerto de Bahía cedieron materiales y equipos para hacer una obra en la sede de la UOCRA que quedaba cerca. Que esto fue un pedido del gremio y "…a veces podés decir que sí, otras veces que no, son pedidos que a veces decir que no son inconvenientes, dado que cuando te hacen un pedido y decís que no y no traen consecuencias no hay problema, pero en este caso sí traía consecuencias…" –sus expresiones-.

Mencionó que no participó en las reuniones, que lo manejó su socio eventual que era la gente de Ingeniería y Arquitectura, pero los equipos que mandaron eran de su empresa; que definió el trato Ingeniería y Arquitectura. Que los trabajos consistieron en pavimentación dentro del predio.

Que los materiales para el predio supone que los sacaron de los acopios de la obra que estaban ejecutando. Que tiene que estar en la contabilidad registrado a donde fue ese material. Que ese costo se cargaba a sus bolsillos, no va a ningún otro lado.

También depuso con relación a este hecho el testigo Luis María Medus quien dijo que hicieron obras en el predio del gremio, a partir de una exigencia del gremio a la Cámara de la construcción para que se hiciese un acceso en el predio de la ruta 3 vieja, unos 200 metros de pavimento y cordones.

Que les pidieron a las empresas de la cámara hacerlo, entre ellas, Carreteras 2000, Ingeniería y Arquitectura, Vial Agro, Cerra y Moro, CV1, Abedul y otras más, y entre todos lo hicieron. Apuntó que nadie quería hacer eso gratis, que no era su obligación, pero Burgos los intimó a que lo hicieran y así tuvieron que hacerlo, terminando antes de navidad o fin de año. Que fue un monto importante que tuvieron que aportar las empresas.

Que recuerda una reunión en el gremio en la sala grande del fondo, donde los intimaron a terminar porque no estaban haciéndolo en tiempo, e hicieron una especie de compromiso para terminar la obra.

Señaló que “no era por deseo propio, nunca hice nada de lo que hice por deseo propio, era por una presión y prefería aceptarlo que atenerme a las consecuencias, no era voluntario” –así sus palabras-.

Que el señor Burgos junto a tres o más de la UOCRA estaban en la reunión a la que se refirió, y también los empresarios.

Que asistió a una reunión en el gremio por el predio, porque habían demandado a la cámara que en la obra que habían pedido había pasado tiempo y Burgos los convocó para decirles que tenían que hacerlo. Que fueron a la reunión porque el gremio les pedía de hacerlo y a poner la cara, que a él no le gustaba mucho, y ahí les dijeron que tenían que hacer la obra, y ellos sintieron la presión reorganizaron sus actividades y empezaron a trabajar.

Le indicó que el declarante no tenía obligación de hacer la obra, que fue el llamado y decirles que iban a parar la obra, que fijate que hacen asambleas, las situaciones que en una empresa se siente como presión.

Ante la consulta de si en la reunión en el gremio hubo manifestaciones o amenazas?, dijo que no recuerda, que no necesariamente cada vez que lo llamaban lo amenazaban, que la presión estaba sobreentendida, porque ya se lo habían dicho.

Preguntado si Burgos en esa reunión dijo algo? Señaló que no lo recuerda específicamente, que tampoco recuerda que fuera una reunión amena, porque la sensación de estar en esa reunión no fue placentera para él, pero no recuerda las palabras que se usaron.

En el mismo sentido computo lo expuesto por el testigo Diego Cerra quien contó que varias veces les pedían equipos para tareas en el predio de la UOCRA, para hacer movimiento de suelo, cosas que hacían los fines de semana, y esto era un gran costo, dado que una máquina cuesta más o menos 5.000 pesos por hora y si se trabajaba unas 10 horas el costo era de 50 mil; que esto no se hacía de buena gana ni de voluntad, había que hacerlo. Lo mismo cuando pidieron el asfalto, y ahí hubo varias empresas involucradas, se realizó una reunión en la CGT, donde estaba Vial Agro, Ingeniería y Arquitectura, Cerra y Moro, Abedul y cre que CV 1. Que estaban en una mesa rodeados de gente de la UOCRA y se les pidió colaborar con el asfalto, que era una obra muy grande y cara.

Comentó que era "…una clásica que te rodeaban con una cantidad de gente que te asustaba, no porque te dijeran nada, la situación era intimidante de por sí…". Que se les pidió colaborar, dijeron que sí, pasó el tiempo y como la colaboración no se hizo efectiva lo volvían loco a Evangelista, lo apretaban y por eso luego hicieron el trabajo. Que se hizo movimiento de suelo y carpeta asfáltica, obra de mucho dinero si se tiene en cuenta el costo en la actualidad de una cuadra de 100 metros es 1.7 millón o 1.8 y eso han sido unos 200 metros o más, que por eso es un monto elevado. Que su empresa mandó bateas y algunos viajes de piedras para hacer la carpeta asfáltica, Vial Agro puso los equipos, Carreteras la mezcla, que colaboraron todas las empresas entre sí para hacerlo. Que no sabe

quién aportó el asfalto, puede ser Ingeniería y Arquitectura o Carreteras 2000, que Evangelista fue el que administró esa obra y debe tener más precisiones. Que la gente de la UOCRA no se hizo cargo de ningún costo de esto. Que en la reunión en la CGT estaba Burgos y muchos más, que no recuerda bien con precisión quienes estaban. Que ha participado de otras reuniones con la misma gente.

El testigo Roberto Gaveglio dijo que se hizo una carpeta, camino de entrada y un cordón cuneta por parte de las empresas de la ute en un predio del gremio cerca del aeropuerto. Que eso fue una exigencia del sindicato para que aportaran a esa obra sin cobrar, y ahí participaron todas las empresas de la ute. Que esa obra cree que la dirigió Ingeniería y Arquitectura.

El testigo Cristian Ferrero contó que se les exigió hacer el acceso del predio del gremio UOCRA. Que en su caso llegó esa exigencia a través de un integrante de otra empresa, el señor Evangelista, a quien habían llamado para que organice y coordine la pavimentación entre las empresas de Bahía; que Carreteras 2000 hizo los cordones cuneta y un badén, otras empresas la base y pavimentación.

Que en su momento se charló del por qué de esta obra, pero accedieron todos a hacerla y como venía demorada la cosa porque todos tenían obras y para hacer esa del predio tenían que disponer de personal y recursos, fue que en un momento dado se puso áspero para el señor

Evangelista porque el sindicato lo llamaba reclamándole que no estaban haciendo las cosas. Que se los citó a una reunión a la cual fueron las 5 empresas y ahí tuvieron una reunión con Burgos y otros más que no conoce, y se les manifestó que tenían premura por el acceso, que tenía que ser terminado para fin de año porque venía gente de Buenos Aire. Indicó que fue una reunión áspera porque les decían que tenían que terminar en tiempo porque se les iba a poner feo.

Señaló que el que exigía era Burgos; y exigía, no era una colaboración en la que uno dice “haber si podés”, ahí era una cuestión de cómo y en qué tiempo tenían que hacer las cosas.

Que esa obra fue a fines del 2016 y sería un monto de 350 o 400 mil pesos, lo que en aquel momento era un monto importante. Que para su empresa era como una obra ganada en otro lugar y que les tenían que pagar, era una obra normal para el estado, para un municipio, por lo que destinó una cuadrilla y puso hormigón para hacer esos cordones, pero la UOCRA no pagó nada.

Que las empresas viales de Bahía hicieron aportes, no recuerda bien qué cosas cada una, cree que Abedul aportó equipos, Ingeniería la mezcla, que no recuerda Cerra y Moro, cree que la base. Que se comunicaban para ver cómo iban y quien tenía que entrar. Que Coince también participó, y Vial Agro también aportó, es una empresa de Tres

Arroyos y estaba haciendo el aeropuerto, esa empresa puso el hormigón que él usaba para los cordones cunetas.

De suma importancia resulta el relato del testigo Gustavo Evangelista quien contó que en el año 2015 estaban trabajando en la repavimentación del aeropuerto de Espora junto a Vial Agro y por ese momento fueron convocadas a una reunión en el gremio a todas las empresas viales, a los efectos de ponerlos en conocimiento que tenían que colaborar en la finalización del predio. Que de esa reunión recuerda, entre otros, a Burgos. Que tuvieron varias reuniones porque no se ponían de acuerdo, que las empresas no entendían porque tenían que hacer esa obra gratuitamente, que no querían, y tampoco en el período para ejecutarla porque era una obra muy cara, con mucha mano de obra y materiales, dado que era una obra de asfalto y cordón cuneta.

Que participaron Vial Agro, Ingeniería y Arquitectura, Carreteras 2000, Abedul, Cerra y Moro, Coince, CV1. Que algunos aportaron más y otros menos, que su empresa llevó la parte más grande porque tenían equipamiento y personal muy cerca, junto a la empresa Vial Agro.

Consultado por el señor Fiscal de por qué hicieron la obra? Dijo que por una exigencia del gremio, porque sino se paralizaban las obras que tenían en Bahía y la zona.

Que como las empresas no querían hacer esta obra, porque era una erogación muy grande, se fue pasando el tiempo y como venía alguien de la seccional del gremio de Buenos Aires, cree que Gerardo Martinez, y la tenían que terminar para una fecha, fue que por eso las exigencias fueron mucho mayores a medida que transcurría el tiempo que dejaban pasar las empresas porque no estaban de acuerdo en hacerla.

Por su parte el testigo Diego Salguero contó que la empresa Coince participó en la obra del predio del gremio, cree que aportó mezcla asfáltica para hacer algo en el lugar. Sabe que participaron en eso varias empresas viales para hacer cordón cuneta y asfalto. Sabe que fue una negociación entre el gremio y las distintas empresas, y empezó como un pedido del gremio a las distintas empresas. De las negociaciones por la empresa participó Tepliz, su presidente.

El señor Néstor Tepliz, en su condición de testigo, dijo que a las empresas viales de Bahía, que eran unas 5 (Ingeniería y Arquitectura, Carreteras 2000, Cerra y Moro, Coince, Obras Abedul), y empresas viales que trabajaban en la jurisdicción, como CV1, Vial Agro y alguna más, se les hizo un planteo por el gremio que había que hacer determinadas obras en el predio de la ruta vieja, obras que para algunas empresas chicas eran significativas, porque estaban haciendo obras de poco monto y era muy injusto dividir en partes iguales un esfuerzo de tal magnitud, que ellos sostenían que podían colaborar con una cuota parte según las posibilidades

de las empresas. Que para esto hubo muchas reuniones y les dijeron que había que hacerlo y no tuvieron más opción que hacerlo, sino iba a llegar a una situación conflictiva y si lo que querían era colaborar con los obreros de la construcción y por eso accedieron, y ahí las empresas más chicas que eran las de Bahía tuvieron que hacerse cargo de eso.

Apuntó que sabían de la obra que se estaba haciendo en ese predio, que ellos les mostraban el proyecto que estaban haciendo, era algo que veían beneficioso para los obreros, incluso los de su empresa, y eso es real. Que las empresas locales afrontaron la ejecución, hizo un aporte alguna empresa de afuera, pero mayormente lo hicieron las 5 locales. Que la obra consistía en unos 2500 metros cuadrado de pavimento, movimiento de suelo, cordones cuneta, curvas, como si hoy hubiese que hacer 3 cuadras en la ciudad, que estos son números importantes, no era algo que tuviesen previsto como empresa. Que por ese tiempo había poco trabajo, las empresas padecían esa situación y como su empresa tiene personal estable y si no hay trabajo les dan tareas menores para no despedir gente, es que estaban haciendo un esfuerzo para mantener su personal, cuestión que le plantearon a la UOCRA y por eso les decían que no podían hacerse cargo de tamaña inversión, que querían colaborar pero a largo tiempo, y tras eso les dieron un ultimátum que ese trabajo tenía que estar terminado para tal fecha, dentro de unos 60 días y ahí se puso tenso el asunto, no tuvieron

muchas opciones, terminaron haciendo la obra para mantener una relación, pero fue tenso.

Contó que estuvo en dos reuniones y el gerente de una vial de Bahía, Gustavo Evangelista, fue como designado para coordinar la relación entre todas las empresas con la UOCRA para poder llevar a buen puerto esto. Que cuando se los convocó a reunión en la UOCRA estaba Evangelista, el de Obras Abedul, Cerra y Moro y de la UOCRA el señor Burgos y no recuerda si otros más, y esa fue la última reunión donde se les impuso una fecha cierta de terminación y había que hacerlo. Que esta fue la última reunión, que antes gente de la UOCRA y Evangelista venían gestionando y hablando sobre el particular durante algún tiempo, pero que del momento del ultimátum lo recuerda a Burgos, que lo recuerda a él como el vocero, capaz que había otro integrante de la UOCRA que hoy se le escapa.

Expuso sobre estos hechos el testigo Martín Sanchez quien dijo que desde su empresa dieron algo de cemento para el predio que estaban construyendo. Que esto se lo pidió Walter Paiz, y era un palet o menos que les pidió él, era un sobrante y lo fueron a retirar de la empresa algo así como De la Torre, que Walter Paiz le dijo por mensaje de texto que iba a ir este señor a retirarlo. Que supone que las bolsas fueron para el centro recreativo, pero él no vio el destino que le dieron.

El testigo Diego Omar Perrin dijo que la empresa CV1, de la cual él era subcontratista- realizó tareas en el predio de la UOCRA. Que eso fue posterior al primer arreglo de los 15.000 pesos por mes, cuando lo llaman a Panero y luego este lo manda a la reunión en las oficinas de Ingeniería y arquitectura, y ahí se hizo un arreglo y CV1 pagó en efectivo para que ellos puedan asfaltar un pedazo en la zona recreativa de la ruta 3 vieja. Que CV1 le hacía facturar a él esa suma, la retiraba del banco y se la daba a Néstor Rivas.

Indicó que en la obra del predio se puso al frente la gente de Ingeniería y arquitectura, y el encargado era Evangelista. Que esto fue por pedido de la gente de UOCRA, se sentaron, estaba Burgos cree, a quien vio esa vez y una vez más antes del arreglo con CV1, cuando le preguntó que hacía y a qué se dedicaba. Que esta reunión fue antes de lo del predio y tuvieron una muy buena charla.

Que la charla con gente de la UOCRA cuando pidieron la realización de las obras en el predio fue en Ingeniería y arquitectura. Que eso lo pidió Burgos, si no recuerda mal, que el declarante se sentó a escuchar, no habló ni dijo nada, y luego se lo trasladó a CV1 diciéndoles que tenían que aportar plata.

En lo que respecta al hecho identificado como número 21 entiendo que el mismo se encuentra comprobado a partir de la prueba testimonial producida en la audiencia de juicio.

Computo en primer término el testimonio del señor Cristian Ferrero quien contó que en el año 2016 se pidió sobre fin de año un premio, que convocaron a las empresas viales a una reunión en la CGT y se les manifestó, solicitó el pago de un premio de fin de año a todos los trabajadores por igual, unos 8.000 por trabajador. Recordó que no era una situación muy buena para las empresas en ese momento, que ellos además manifestaron que le daban el premio a quien consideraban se lo merecía, no a todos igual. Que no se definió nada en esa reunión y luego se los citó a todos al Ministerio de Trabajo, un día a la mañana, y lo llamativo de esa reunión fue que se reunieron 15 minutos antes y en ese momento les avisaron los supervisores de cada empresa que las obras estaban paradas, que en su caso el encargado de la planta de Pigué le comentó que no podía salir ningún camión hasta tanto no lo dijesen desde el sindicato. Que en ese estado entraron a la reunión para conciliar el premio de fin de año.

Contó que la reunión fue en el primer piso, se discutió el por qué, cómo, las formas, el monto, el por qué a todos igual, por qué la imposición de un premio cuando el declarante entiende que lo da al empleado cuando corresponde y terminaron que debían pagarle 4.000 pesos a cada uno de los trabajadores. Que el pago se efectuó en dos veces,

cree que en el mes de diciembre y luego en enero, por 2.000 cada uno, bajo recibo de sueldo a los trabajadores.

Consultado por el señor Fiscal sobre si correspondía pagar ese premio, contestó que no estaba en los convenios, no correspondía. Que las empresas pagaban de conformidad a la legislación y esos premios no estaban incluidos. Mencionó que no corresponde pagarle a todos por igual un premio, que de acuerdo a los usos y costumbres se pagan por producción, desempeño, no a todos por igual, que esa era otra de las discusiones que tenían, dado que eso generaba problemas entre el personal porque no todos trabajan de la misma forma.

Dijo que firmaron un acta en el Ministerio y en forma inmediata se pudo continuar con el trabajo. Que en ese momento no había asambleas, la directiva del gremio era que se paran las actividades, no se hacía ninguna asamblea, el llamado telefónico era se paran las actividades hasta tanto les avisaran desde el gremio. Que luego de la firma comunicaron que se podía seguir trabajando.

Refirió que en el Ministerio de Trabajo estaba la gente de la UOCRA, de las empresas y entró alguno del Ministerio que no sabe quien era, pero luego salió enseguida. La reunión era a puertas cerradas, no había gente del Ministerio que coordinara la reunión.

Que en la reunión en la CGT de la UOCRA recuerda a Burgos y otros más, pero no los conoce de nombre. Que el pago de los 8.000 los pidió José Burgos que era el que más manejaba la reunión, aunque hablaban otros de la UOCRA también, hablaban entre todos.

Que en la reunión en el Ministerio estaba de la UOCRA Burgos, Molina a quien conoce y no recuerda a otro.

Indicó que mientras sucedía esta medida de parate de obras cuando estaban en el Ministerio, no le consultó a la abogada si eso era legal. Que no le consultó a la abogada ese día del parate de las obras, que había muy poco para consultar, no les daban los motivos para parar la obra; la pararon porque alguien llamaba y decía acá no se trabaja más; que no les decían artículo de ley o convenio, y además era una llamada telefónica, no había acta ni documentación que entregaran por ese parate de obra o la prohibición de salida de los camiones.

Que ese día llamaron a la obra y dijeron que no salía ningún camión, sin tener ningún tipo de papel, esto era “no podés salir hasta tanto tengamos la reunión”. Que ellos sabían que la reunión era por los premios, y el declarante entendió que ese parate era por los premios, no tenían otra cuestión para tratar.

Dijo que él estaba en Bahía cuando le avisa su jefe de planta que no podían salir los camiones, que el declarante estaba afuera del

Ministerio de Trabajo, próximo a ingresar a la reunión. Que cuando recibió la noticia todavía no estaban en contacto con el gremio en el Ministerio. Que esta reunión se hace a los pocos minutos. Que la paralización duró dos horas. Que en el Ministerio duró la reunión como dos horas o dos horas y media; y que esto fue el mismo tiempo que se paralizó la obra. Fueron coincidentes temporalmente el parate y la reunión.

El testigo Néstor Tepliz dijo que la gratificación de fin de año ellos no la tenían como sector, pero sobre fines del 2.016 fueron invitadas las empresas a que diesen un premio generalizado de 8.000 pesos por persona; pero como era una época crítica, luego de un par de años con bastantes problemas de trabajo en la obra pública, les pareció desmedido, no obstante lo cual, para acompañar una petición para que la gente pasara mejor las fiestas aceptaron dar un premio más bajo que lo solicitado, ofreciendo 2000 pesos, pero esta suma no fue aceptada y se tornó muy compleja la situación porque estaban en diálogo y de buenas a primeras los llamaban del Ministerio de Trabajo para buscar una salida en este tema, y ahí fue problemático porque muchas obras tuvieron ese mismo día de la reunión asambleas y paradas transitorias, por lo que les daban a entender que si no acordaban iban a tener más problemas, y al final acordaron dar algo por operario.

Refirió que en representación de la UOCRA en estas gestiones estaba Burgos, que se reunió en la CGT y otras veces en sede de la

UOCRA. Que recuerda alguna reunión con una mesa en la que estaban Molina, Paiz y algunos más, que de la Cámara estaba Quantin, el gerente Lopez de su empresa, Gurrado, siendo unos 4 o 5 que fueron para acordar eso. Que luego, en la reunión en el Ministerio de Trabajo había más gente, como los representantes de Carreteras 2000, Ferrero y empresas que no eran de Bahía Blanca y otras que hacían obras viales por la zona que habían sido invitadas pero no se acercaron. Que en esa reunión en el Ministerio de Trabajo por la UOCRA estaba Burgos y alguien más, pero no recuerda quien.

El testigo Diego Cerra contó que para la época de las elecciones les exigieron el pago de un premio, que los citaron a la CGT un jueves por la tarde, que ahí estaba Gurrado, gente de Abedul, Tepliz y les pidieron 8000 pesos como bono de fin de año, que ellos contestaron que no, que ofrecieron 2000 y no se pusieron de acuerdo. Que más tarde los llamaron y les pidieron de ir al Ministerio de Trabajo al día siguiente, y cuando llegó al Ministerio lo llama el delegado que le habían avisado que tenían la orden de parar las obras, que no cargara los camiones, y por eso negociaron con todas las obras paradas, y ahí Paiz les dice que arreglaran ahora porque luego ellos se juntaban con las empresas de afuera y si se acordaba más ése iba a ser el piso; que por eso se arregló por 4 mil, que en ese momento su empresa estaba sin trabajos importantes y fue un gran

perjuicio económico, pero tuvieron que arreglar igual para conservar ese poquito trabajo.

Refirió que ellos pagan los sueldos, aguinaldos, horas extras, distancia, plus cuando es hormigón, pero no tenían previsto premio de fin de año, que no se pagaba eso habitualmente. Que en este caso lo tuvieron que hacer porque la obra estaba parada, con los costos que eso implicaba de pérdida de material. Que en ese momento estaban haciendo un cordón cuneta muy chico y manteniendo a toda la planta, que por eso necesitaba 4 empleados pero estaba manteniendo los 20, por lo que cargar con el premio se les hacía muy difícil.

Reiteró que fue Paiz quien les dijo de arreglar antes de acordar con las empresas de afuera, que en la reunión también estaban Molina y José Burgos, Evangelista, el abogado de esa firma, Roberto Gaveglio y Andrés Medús, Mauricio Chicon y el declarante de Cerra y Moro, que esta reunión fue en el Ministerio de Trabajo. Que en la reunión del día anterior en la CGT estaban Paiz y Burgos. Que Paiz habló cuando entraron a la reunión, dijo que luego tenían la reunión con las empresas de afuera y ahí se cerró en 4000 y tuvieron que afrontar el gasto. Que luego del arreglo volvieron a trabajar normalmente, su delegado recibió el llamado de volver a trabajar. Que les habían comentado que tenían que pagar los aguinaldos, que les ofrecieron pagar los 2000 antes del aguinaldo, pero no accedieron, y tuvieron que pagar las empresas los 4.000.

El testigo Evangelista contó que en el año 2.016 los convocaron a la sede de la Secretaria de Trabajo, que el declarante asistió en representación de Ingeniería y Arquitectura y ahí hubo una reunión para exigir el pago de un premio de fin de año, cuestión que excedía el convenio colectivo. Que se pagaron 4.000 pesos y la UOCRA pedía 8.000. Que para fijar este monto hubo una sola reunión que recuerde el deponente, entre el gremio y las empresas, que los empleados de la Secretaría de Trabajo no participaron.

Que la reunión había sido convocada a la Secretaría de Trabajo, pero los integrantes de la misma no participaban, una vez que las empresas y el gremio se ponían de acuerdo se hacía el acta correspondiente, pero en las negociaciones la secretaría nunca participó.

Que no correspondía el pago del premio porque está fuera del convenio, la empresa paga lo que corresponde según el convenio colectivo. Que un premio nunca han pagado salvo esa vez, que no sabe lo que es un premio, dado que no tenía experiencia en pagar eso. Que ese monto se les pagó a todos los obreros. Que en la reunión por la UOCRA estaba Burgos y alguno más que no recuerda su nombre.

El testigo Fabián Gurrado dijo con relación a los premios anuales, que se juntaba la cúpula del sindicato, las principales autoridades y mandaban nota a las empresas en la que les decían que era un buen año y que querían firmar un acuerdo por 4000 pesos, que esto fue en los años

2.017 y 2.018, y que ellos se oponían, pero "…era firme y marche preso…", que nunca hubo negociación en ninguna situación, siempre fueron imposiciones. Que pagaron esos premios porque se homologaban en el Ministerio de Trabajo. Que recuerda uno de 4000 y lo mismo los convenios que se hacían por encima de la tabla acordada a nivel nacional, que eso está documentado en los recibos. Que estos premios no estaban vinculados con nada. Que normalmente se puede convenir previo al inicio, y capaz no tenía obra y había que pagar igual, acá no estaba vinculado con nada, salvo por el interés de tener gente contenta que les conviene. Los premios era por el solo hecho de estar en una obra que se consideraba más importante, que ellos no sabían si podían pagar o no, porque en esa época no había licitaciones y sí muy poco trabajo.

Que estos convenios impuestos se suscribían en el Ministerio de Trabajo, esa negociación era en el gremio luego de varias idas y vueltas en el que trataban de bajar el monto de las pretensiones, pero nunca tuvieron éxitos. Que José Burgos era el que generalmente suscribía esos convenios, puede haber alguna otra persona que no recuerde el nombre, puede ser algún delegado de obra.

El testigo Luis María Medus contó que en el año 2015 les reclamaron el pago de un premio de 8.000 por trabajador, cosa que no estaba prevista en ningún lado, no se lo podían trasladar a nadie, y además premio no era porque no había nadie que hubiese hecho algo más que los

demás. Que los citaron y hablaron de eso. Que luego los citaron en el Ministerio de Trabajo para confirmar el tema del premio y por el delegado de la obra les decían que si no aceptaban pagar el premio iban a hacer asambleas en la obra; que fue por eso que en vez de 8.000 tuvieron que acceder a pagar 4.000, que fue lo que lograron bajar, y tuvieron que aceptar esa presión teniendo que darle el premio a todos los trabajadores, no a los que se los merecían.

Que en esa oportunidad estaban además de Abedul, Cerra y Moro, Carreteras 2000, Bulwar, Ingeniería y Arquitectura, y alguna más de afuera, que trabajaban en Bahía Blanca y la sección.

Señaló que cuando estaban en el Ministerio de Trabajo le dijeron que paraban la obra y lo hicieron, no dejaban salir a los camiones de la planta, ni trabajar a su personal. Esa fue la vez que no hacían caso, cuando se discutía el premio, si hacían caso no había problema.

Que cada vez que empezaban una obra aparecían con un papelito pidiendo documentación, e implícitamente era que si no iba al gremio y arreglaba iban a empezar los problemas, era una amenaza velada.

Que a una reunión en la CGT local fue, cree que fue previa a la del Ministerio de Trabajo, que luego los citaron al Ministerio porque la reunión de la CGT no era suficiente. Que en esa reunión les pedían el

premio. Que ellos no querían pagar nada, que lo que corresponde sí lo pagaban, y lo que no no.

Que de la UOCRA pedían 8.000, ellos ofertaron 2.000 y arreglaron por 4.000. Que en su opinión no correspondía pagar nada. No querían pagar nada porque los premios se ganan, no obligados por el gremio a pagarle a todos.

Que existe un convenio de la UOCRA con la Cámara que es el que respetan ellos, todo lo que se exige demás no está pactado. Que hay veces que se pactan nuevas cosas y están en el convenio, como premios que en realidad se llaman de otra manera.

Mencionó que a la reunión asistió solo, sin asesoramiento legal, que no recuerda si alguna otra empresa fue con abogado. Por parte del Ministerio había una persona que entraba y salía de la reunión, la gente de la UOCRA y las empresas. Que de esos 4.000 que se acordaron cree que se firmó un acta, supone que luego fueron pagados. Que después de eso no hubo parate de obras, ni asambleas.

Expresó que mientras negociaba lo llamaban de la planta que el camión no podía salir, por lo que no era una negociación libre, era con coerción, si no arreglaba la situación seguían parados en asamblea. No era que sus empleados estaban en huelga, la directiva del gremio era que no trabajen y sus empleados no tienen posibilidad de hacer otras cosas.

El testigo Roberto Gaveglio dijo que en el 2016 les exigieron premios de fin de año para los obreros, que querían 8000 por obrero pero se terminó acordando 4000 pesos.

Por esta prueba testimonial, y la anteriormente analizada, es que podemos concluir que se encuentran demostrados los hechos materia de acusación descriptos por el Ministerio Público Fiscal (hechos números 18, 20 y 21).

Corresponde recordar aquí el hecho acusado por el señor Agente Fiscal como número 19: En fecha no determinada, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), citó al señor CRISTIHAN HORACIO FERRERO -en su carácter de presidente de "CARRETERAS 2000 S.A."-, a la sede de la Seccional Bahía Blanca de la citada entidad sindical (ubicada en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad).

En dicho lugar, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS EXIGIÓ al señor FERRERO, la suma de OCHO MIL PESOS POR MES, como condición para que la empresa que representa pueda continuar las obras que por entonces estaba ejecutando, sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Como consecuencia de la imposición, el señor CRISTIHAN HORACIO FERRERO abonó mensualmente las sumas exigidas, mediante entregas en dinero en efectivo en la sede de la empresa "CARRETERAS 2000 S.A." (sita en calle O´Higgins número 408 de la ciudad

de Bahía Blanca). Así también, BURGOS exigió a FERRERO que contrate para las obras a cargo de la empresa "CARRETERAS 2000 S.A.", los baños químicos de la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." (con domicilio en calle Río Atuel 780 de esta ciudad), debiendo abonar el empresario como consecuencia de dicha imposición un costo superior al valor que por ese servicio ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

El dinero fue exigido y percibido por BURGOS con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la Delegación local de la UOCRA.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

De fundamental importancia para establecer la existencia de este hecho resulta lo que surge del testimonio del señor Cristian Horacio Ferrero, quien contó en la audiencia que es empresario, presidente de Carreteras 2000, empresa que se dedica a construcciones viales en Bahía y la región, originalmente con domicilio en La Plata y luego en Carhué, y desde el 2004 trasladaron las oficinas a Bahía donde está hoy. Señaló que en Carhué desde el 2001 no había relación con la UOCRA, alguna visita del gremio para fiscalizar algo pero no más que eso. En el 2004 cuando se trasladaron a Bahía, y al estar el sindicato acá y al hacer obras acá hubo más relación asidua, fiscalizando y visitando las obras.

Contó que en el año 2014, en una obra en Suarez se presentó gente del gremio, el señor José Burgos e hizo una parada de obra, indicando que no se podía seguir trabajando porque no estaban dadas las condiciones; que le preguntó cuáles eran esas condiciones y no le contestó nada, simplemente le dijo que no se podía seguir trabajando, y luego hicieron un papel con un montón de cosas para presentar en la delegación del Ministerio de Suarez, cosa que así hizo y luego los dejaron trabajar; pero al tiempo vuelven con el papel y les dicen que tenían que llevar la documentación a la sede de la UOCRA, cuestión que también cumplieron, pero ahí le hacen saber que Burgos quería hablar con él en la sede.

Expuso que ya en la sede Burgos le dice que había que colaborar con el gremio, que la forma de trabajar que ellos tenían con las

empresas era esa, que como él era nuevo y la empresa había llegado hacía poco a Bahía tenía que dejar el equivalente a un sueldo de un oficial especializado por mes. Que ese monto tenía que llevarlo a la sede y dejárselo ahí; que hizo eso una o dos veces y luego lo pasaban a buscar por la oficina de la empresa. Que esto fue así desde el 2014 hasta el 2017, hasta el inicio de la causa penal. Que el monto que se entregaba mensualmente en el último tiempo era de 8.000 pesos.

Indicó que en la reunión con Burgos en la sede de la UOCRA, éste no le hizo referencia alguna a la documentación que había presentado.

Expuso que en una obra de bacheo de varias rutas cercanas a Bahía Blanca, no al testigo en particular, sino a uno de los integrantes de la ute, se lo convocó a reunión y le pidieron unos 90.000 pesos por mes a la ute, que estaba conformada por empresas de Bahía, y ese pago era aparte de lo que cada empresa pagaba. Que luego se accedió a pagar 40.000 por mes, aportando 10.000 cada empresa de la ute, integrada por Coince, Abedul, Cerra y Moro y Carreteras 2000. Que fue Tepliz, de la empresa Coince, quien se encargó de eso, que no sabe con quién habló.

Dijo que no había forma de no efectuar el pago, que “uno sentía que si quería trabajar tranquilo lo tenía que pagar, veníamos con experiencia de paradas de obra y requerimientos de documentación de la noche a la mañana, uno tenía que trabajar 48 horas para presentar la documentación y se hacía luego otro parate u otra cuestión, que por eso

entendimos que no había otra forma que pagar; lo que anhelábamos es que esto fuese lo menos posible" –así sus expresiones-.

Expuso que estas situaciones se conversaban en las reuniones de la Cámara, que se trataba porque el tema que salía era siempre era este de los pedidos de dinero de la UOCRA a cada una de las empresas.

Que en el año 2016 se pidió sobre fin de año un premio, que convocaron a las empresas viales a una reunión en la CGT y se les manifestó, solicitó el pago de un premio de fin de año a todos los trabajadores por igual, unos 8.000 por trabajador. Recordó que no era una situación muy buena para las empresas en ese momento, que ellos además manifestaron que le daban el premio a quien consideraban se lo merecía, no a todos igual. Que no se definió nada en esa reunión y luego se los citó a todos al Ministerio de Trabajo, un día a la mañana, y lo llamativo de esa reunión fue que se reunieron 15 minutos antes y en ese momento les avisaron los supervisores de cada empresa que las obras estaban paradas, que en su caso el encargado de la planta de Pigué le comentó que no podía salir ningún camión hasta tanto no lo dijesen desde el sindicato. Que en ese estado entraron a la reunión para conciliar el premio de fin de año.

Contó que la reunión fue en el primer piso, se discutió el por qué, cómo, las formas, el monto, el por qué a todos igual, por qué la imposición de un premio cuando el declarante entiende que lo da al empleado cuando corresponde y terminaron que debían pagarle 4.000

pesos a cada uno de los trabajadores. Que el pago se efectuó en dos veces, cree que en el mes de diciembre y luego en enero, por 2.000 cada uno, bajo recibo de sueldo a los trabajadores.

Consultado por el señor Fiscal sobre si correspondía pagar ese premio, contestó que no estaba en los convenios, no correspondía. Que las empresas pagaban de conformidad a la legislación y esos premios no estaban incluidos. Mencionó que no corresponde pagarle a todos por igual un premio, que de acuerdo a los usos y costumbres se pagan por producción, desempeño, no a todos por igual, que esa era otra de las discusiones que tenían, dado que eso generaba problemas entre el personal porque no todos trabajan de la misma forma.

Dijo que firmaron un acta en el Ministerio y en forma inmediata se pudo continuar con el trabajo. Que en ese momento no había asambleas, la directiva del gremio era que se paran las actividades, no se hacía ninguna asamblea, el llamado telefónico era “se paran las actividades hasta tanto les avisaran desde el gremio”. Que luego de la firma comunicaron que se podía seguir trabajando.

Refirió que en el Ministerio de Trabajo estaba la gente de la UOCRA, de las empresas y entró alguno del Ministerio que no sabe quien era, pero luego salió enseguida. La reunión era a puertas cerradas, no había gente del Ministerio que coordinara la reunión.

Que en la reunión en la CGT de la UOCRA recuerda a Burgos y otros más, pero no los conoce de nombre. Que el pago de los 8.000 los pidió José Burgos que era el que más manejaba la reunión, aunque hablaban otros de la UOCRA también, hablaban entre todos.

Que en la reunión en el Ministerio estaba de la UOCRA Burgos, Molina a quien conoce y no recuerda a otro.

Consultado por obras en el predio de la UOCRA, dijo que se les exigió hacer el acceso del predio. Que en su caso llegó esa exigencia a través de un integrante de otra empresa, el señor Evangelista, a quien habían llamado para que organice y coordine la pavimentación entre las empresas de Bahía; que Carreteras 2000 hizo los cordones cuneta y un badén, otras empresas la base y pavimentación.

Que en su momento se charló del por qué de esta obra, pero accedieron todos a hacerla y como venía demorada la cosa porque todos tenían obras y para hacer esa del predio tenían que disponer de personal y recursos, fue que en un momento dado se puso áspero para el señor Evangelista porque el sindicato lo llamaba reclamándole que no estaban haciendo las cosas. Que se los citó a una reunión a la cual fueron las 5 empresas y ahí tuvieron una reunión con Burgos y otros más que no conoce, y se les manifestó que tenían premura por el acceso, que tenía que ser terminado para fin de año porque venía gente de Buenos Aire. Indicó que

fue una reunión áspera porque les decían que tenían que terminar en tiempo porque se les iba a poner feo.

Señaló que el que exigía era Burgos; y exigía, no era una colaboración en la que uno dice “a ver, si podés”, ahí era una cuestión de cómo y en qué tiempo tenían que hacer las cosas.

Que esa obra fue a fines del 2016 y sería un monto de 350 o 400 mil pesos, lo que en aquel momento era un monto importante. Que para su empresa era como una obra ganada en otro lugar y que les tenían que pagar, era una obra normal para el estado, para un municipio, por lo que destinó una cuadrilla y puso hormigón para hacer esos cordones, pero la UOCRA no pagó nada.

Que las empresas viales de Bahía hicieron aportes, no recuerda bien qué cosas cada una, cree que Abedul aportó equipos, Ingeniería la mezcla, que no recuerda Cerra y Moro, cree que la base. Que se comunicaban para ver cómo iban y quien tenía que entrar. Que Coince también participó, y Vial Agro también aportó, es una empresa de Tres Arroyos y estaba haciendo el aeropuerto, esa empresa puso el hormigón que él usaba para los cordones cunetas.

Al doctor Jara le contestó que no recuerda que en la reunión en el gremio se mencionara el motivo del premio, que tampoco recuerda que alguna de las empresas consultaran por el motivo del premio. Que tiene una

abogada a quien consulta por cuestiones civiles y administrativas, pero no le consultó a la abogada por esto.

Le indicó al letrado que mientras sucedía esta medida de “parate de obras”, cuando estaban en el Ministerio, no le consultó a la abogada si eso era legal. Que no le consultó a la abogada ese día del parate de las obras, que había muy poco para consultar, no les daban los motivos para parar la obra; la pararon porque alguien llamaba y decía acá no se trabaja más; que no les decían artículo de ley o convenio, y además era una llamada telefónica, no había acta ni documentación que entregaran por ese “parate” de obra o la prohibición de salida de los camiones.

Que ese día llamaron a la obra y dijeron que no salía ningún camión, sin tener ningún tipo de papel, esto era “no podés salir hasta tanto tengamos la reunión”. Que ellos sabían que la reunión era por los premios, y el declarante entendió que ese “parate” era por los premios, no tenían otra cuestión para tratar.

Le respondió al doctor Jara que sabe por arriba de qué se trata la conciliación laboral obligatoria, que entiende que es cuando las partes no se ponen de acuerdo el juez determina que se continúe la actividad hasta que se pongan de acuerdo. Que no le consultó a la abogada si se podía pedir eso. Que en el Ministerio ninguna empresa solicitó el dictado de una conciliación obligatoria.

Que no conoce el móvil sanitario de la UOCRA, que en su empresa no recuerda que haya ido un móvil de ese tipo.

Ante nuevas consultas del doctor Zorzano dijo que él estaba en Bahía cuando le avisa su jefe de planta que no podían salir los camiones, que el declarante estaba afuera del Ministerio de Trabajo, próximo a ingresar a la reunión. Que cuando recibió la noticia todavía no estaban en contacto con el gremio en el Ministerio. Que esta reunión se hace a los pocos minutos. Que la paralización duró dos horas. Que en el Ministerio duró la reunión como dos horas o dos horas y media; y que esto fue el mismo tiempo que se paralizó la obra. Fueron coincidentes temporalmente el parate y la reunión.

Que no recuerda que Burgos cuando le pedía el dinero hiciese referencia o comparase la situación con la modalidad de UOCRA La Plata. Que sí una vez le comparó con lo que pasaba con el “Pata Medina” en La Plata, que le dijo que acá eran mucho más tranquilos. Que no recuerda si le explicó por qué decía eso, que uno infería que en La Plata eran más violentos, se veían las noticias de La Plata de la UOCRA y era como que “acá estás mejor”.

Ante otra consulta del doctor Jara dijo que en la reunión en la CGT no les dijeron que pasaba si no se pagaban los premios.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

Agrego a este testimonio lo señalado en la audiencia por el testigo Facundo Nicolás Orazi quien contó que trabaja para la empresa Carreteras 2.000 S. A., en el sector de facturación, cobranzas y ventas. Que no ha mantenido trato con las personas que le mencionaron como acusadas pero sí las ha visto dentro de la empresa, iban a la empresa, sabe de los nombres que se mencionaron por escucharlos, pero no sabe quién es cada uno.

Dijo que el presidente de la empresa es Cristian Ferrero y que con él han estado estas personas. Que también les ha dado sobres con documentación a gente de la UOCRA, que le dejaban el sobre y le avisaban que lo iban a retirar por las oficinas, que esto era mensualmente. Que no sabe qué tenían los sobres, cree que documentación, se los entregaba el declarante o alguno de sus compañeros.

A partir de estas constancias probatorias, y las ya mencionadas anteriormente, entiendo demostrado que en el año 2014, en la ciudad de Bahía Blanca, se le exigió al señor Cristian Horacio Ferrero, presidente de Carreteras 2.000 S.A., por al menos una persona que revestía la calidad de dirigente sindical del gremio UOCRA, el pago de una suma de dinero mensual, de unos 8.000 pesos, bajo intimidación de paralizar las obras que tuviese que ejecutar su empresa e impedir el desarrollo normal de la actividad de la misma. Estas sumas fueron abonadas mensualmente por el titular de la empresa hasta pasado la mitad del 2.017 (hecho número 19).

Voy a recordar los hechos materia de acusación indicados como números 22, 23, 24 y 30. El señor Agente Fiscal los describió de la siguiente forma: HECHO 22): Desde el año 2006, dirigentes de la Seccional Bahía Blanca de la UOCRA, exigieron a integrantes de la firma "OBRAS ABEDUL S.R.L." el pago de sumas de dinero para que la empresa constructora pudiera desarrollar sus tareas laborales sin inconvenientes ni planteos por parte del sindicato, las cuales fueron abonadas hasta la actualidad en forma habitual, mediante entregas en efectivo y cheques, que fueron cobrados -entre otros- por: Raúl Ernesto Erbín, Guillermo Esteban Molina, Humberto Arnaldo Monteros y Mario Matías González.

Así también, en dicho marco, a partir del año 2012, en circunstancias en que la empresa "OBRAS ABEDUL S.R.L." se encontraba ejecutando las obras de MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 3, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CIUDADES DE BAHÍA BLANCA Y VIEDMA, el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) EXIGIÓ al ingeniero LUIS MARÍA MEDUS (gerente de la citada constructora) el pago de SUMAS MENSUALES DE DINERO, las cuales inicialmente fueron de SEISCIENTOS PESOS hasta llegar -con sucesivos aumentos- a TRES MIL QUINIENTOS PESOS POR MES, canceladas por la damnificada mediante dinero efectivo y cheque, como condición para que pudiera continuar desarrollando sus

tareas laborales sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la U.O.C.R.A.

El dinero fue exigido por MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente).

Como consecuencia de las referidas imposiciones, MEDÚS y otros integrantes de la firma damnificada, abonaron las siguientes sumas: 1)- cheque de fecha 14/07/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Riffo"); 2)- cheque de fecha 26/07/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 3)- cheque N° 56336730, de fecha 29/08/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 4)- cheque Nº 58114153, de fecha 04/10/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 5)- cheque Nº 59138637, de fecha 30/10/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 6)- cheque Nº 61673111, de diciembre de 2006, por la suma de $250,00; 7)- cheque Nº 63597764, de fecha 29/12/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 8)- pago en efectivo de fecha 15/01/07, por la suma de $400,00 (recibido por "Peralta"); 9)- pago en efectivo realizado con fecha 20/02/07, por la suma de $300,00 (recibido por "Peralta"); 10)- pago en efectivo, de fecha 21/03/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 11)- pago en efectivo, de fecha 13/04/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 12)- pago en efectivo, de fecha 14/05/07, por la

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

suma $350,00 (recibido por "Peralta"); 13)- pago en efectivo, de fecha 19/06/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 14)-pago en efectivo, de fecha 09/08/07, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"); 15)-pago en efectivo, de fecha 21/09/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 16)-cheque Nº 6782918, de fecha 25/09/07, por la suma de $450,00 (recibido por "Peralta Riffo"); 17)- pago en efectivo, de fecha 10/10/07, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"): 18)- cheque Nº 77540040, de fecha 24/10/07 por la suma de $450,00 (recibido por "Peralta"); 19)- pago en efectivo, de fecha 16/11/07 por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"); 20)- pago en efectivo, de fecha 07/12/07, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"), 21)- pago en efectivo, de fecha 20/12/07 por la suma de $450,00 (recibido por "Peralta"); 22)- pago en el año 2008 -abono en concepto de "SALDO 2007"- por la suma de $600,00; 23)- pago en efectivo, de fecha 11/01/08, por la suma de $300,00 (recibido por "Peralta"); 24)- pago en efectivo, de fecha 28/02/08, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"); 25)- pago en efectivo en el mes de marzo del año 2008, por la suma de $500,00 (recibido por "Peralta"); 26)- cheque Nº 83419166, de fecha 11/03/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 27)- cheque Nº 86718776, de fecha 08/04/08, por la suma de $450,00 (recibido por "Montero"); 28)- pago en efectivo, de fecha 08/04/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 29)- cheque Nº 87330442, de fecha 15/05/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por

"Montero"); 30)- cheque N.º 89441535, de fecha 13/06/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 31)- Cheque Nº 90338281, de fecha 18/07/08, por la suma de $1.350,00 (recibido por "Montero"); 32)- pago en efectivo, de fecha 11/08/08, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Montero"); 33)- cheque Nº 424974, con fecha 04/02/09, abonó la suma de $1.000,00 que indica fuera recibido por "Montero"; 34)- cheque Nº 3159388, con fecha 18/03/09, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Montero"); 35)- cheque Nº 3808597, con fecha 22/04/09 pagó la suma de $1.400,00 que indica fuera recibido por "Montero"; 36)- cheque Nº 5478733, con fecha 22/05/09 abonó la suma de $1.000,00 que indica fuera recibido por "Montero"; 37) cheque Nº 7792082, de fecha 01/07/09 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Montero"); 38)- cheque Nº 9908700, de fecha 28/08/09 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Sepulveda"); 39)- cheque Nº 12462090, de fecha 17/11/09 por la suma $1.000,00 (recibido por "Montero"); 40)- cheque N.º 99663831, de fecha 23/12/09 por la suma de $1.300,00 (recibido por "Montero"); 41)- cheque Nº 1618041, de fecha 17/01/10, por la suma de $600,00 (recibido por "Montero"); 42)- cheque Nº 307611746, de fecha 03/11/10 por la suma de $1.500,00 (recibido por "Riffo"); 43)- cheque N.º 307611756, de fecha 05/11/10 por la suma de $1.500,00 (recibido por "Riffo"); 44)- cheque Nº 32470024, de fecha 02/12/10 por la suma de $700,00 (recibido por "Riffo"); 45)- cheque Nº 22903402, de fecha 04/12/10 por la suma de $600,00 (recibido por "Riffo");

46)- pago en efectivo, de fecha 14/12/10 por la suma de $370,00 (recibido por "Riffo"); 47)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 07/01/11, por la suma de $1.591,00 (recibido por "Riffo"); 48)- pago en efectivo, de fecha 07/01/11, por la suma de $110,00 (recibido por "Riffo"); 49)- cheque Banco Provincia de Buenos Aires, de fecha 07/01/11, por la suma de $1.591,00 (recibido por "Riffo"); 50)- pago en efectivo, de fecha 07/01/11, por la suma de $110,00 (recibido por "Riffo"); 51)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 36313648, de fecha 04/02/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Lara Cristian Alexis, DNI 29360563); 52)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 381117731, de fecha 15/03/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 53)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 39188149, de fecha 12/04/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 54)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 39917956, de fecha 09/05/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 55)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 42441440, de fecha 16/06/11, por al suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 56)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 43286798, de fecha 08/07/11 por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Troya Juan D., DNI 17908504); 57)- cheque del Banco de la

Provincia de Buenos Aires Nº 45442815, de fecha 05/08/11, por la suma de $500,00 (recibido por "Geo Juguetes"); 58)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 45442821, de fecha 09/08/11, por al suma de $1.900,00 (recibido por "Riffo"); 59)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 46978575, de fecha 09/09/11, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura DNI 26333396); 60)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires N.º 48147601, de fecha 08/10/11 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 61)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 49205870, de fecha 07/11/11, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 62)- cheque Nº 52963523 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/01/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 63)- cheque Nº 52963540 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/02/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 64)- pago en el mes de febrero del año 2012, por la suma de $1.900,00; 65)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 55302440, de fecha 12/04/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 66)- pago en el mes de abril del año 2012 por la suma de $1.900,00; 67)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 56613559, de fecha 19/05/12, por la suma de $1.900,00 (cobrado por Erbin

Raúl, DNI 14595367); 67)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 56613560, de fecha 24/05/12, por la suma de $600,00 (recibido por Molina y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 68)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 56613574, de fecha 14/06/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 69)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 65513575, de fecha 21/06/12 por la suma de $360,00 (recibido por Molina y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 70)- Cheque de fecha 21/06/12, por la suma de $240,00 (recibido por "Molina"); 71)- cheque Nº 56613954, de fecha 18/07/12 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin"); 72)- cheque Nº 56613599, de fecha 23/07/12 por la suma de $600,00 (recibido por "Molina"); 73)- cheque Nº 60216456, de fecha 23/08/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin"); 74)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 60216457, de fecha 23/08/12, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin p/ Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 75)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 60216472, de fecha 30/09/12 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Hermano Erbin" y cobrado por Cangelosi César DNI 31611430); 76)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66388980, de fecha 17/10/12, por la suma de $600,00 (recibido por "Molina" y cobrado por López Daniel, DNI 8397007); 77)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66388986, de fecha 29/10/12, por la suma de

$1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Grupo Argos Bahía SA - Casajuana Jorge); 78)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66388995, de fecha 16/11/12, abonó la suma de $600,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 79)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66389005, de fecha 05/12/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 80)- cheque del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Nº 73210343, de fecha 27/12/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin y herm" y cobrado por Erbin Sandro, DNI 20903741); 81)- cheque del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Nº 73210344, de fecha 27/12/12, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin p/Molina"); 82)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253482, de fecha 06/02/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 83)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253483, de fecha 06/02/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Esteban Guillermo, DNI 11343112); 84)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 71253489, de fecha 28/02/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 85)- cheque Nº 71253490 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 28/02/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado

por Molina Guillermo, DNI 11343112); 86)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253508, de fecha 05/04/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Packaging Argentina SA); 87)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253509, de fecha 05/04/13 por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 88)- cheque N.º 72532429, de fecha 11/05/13 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin"); 89)- cheque Nº 72532430 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 11/05/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 90)- cheque Nº 72532447 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 04/06/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 91)- cheque Nº 72532448, de fecha 04/06/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin"); 92)- cheque N.º 72532455, del Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 29/06/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 93)- cheque Nº 72532456 del Banco de la Prov. de Bs. As, de fecha 29/06/13 por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112 según informe del Banco de la Prov. de Bs. As); 94)- cheque Nº 72532459, de fecha 15/07/13, por la suma de $500,00 (recibido por "Gonzalez"); 95)- cheque Nº 75517084, de fecha 23/07/13, por la suma de $3.500,00 (recibido por "Gonzalez"); 96)- cheque Nº 78340137, de fecha 31/07/13, por la suma de $800,00 (recibido por

"Molina"); 97)- cheque Nº 78340143 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 06/08/13, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 98)- cheque Nº 81664411 del Banco de la Prov. de Bs. As, de fecha 11/09/13 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 99)- cheque Nº 81664412, de fecha 11/09/13, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin hno medio"); 100)- cheque Nº 81664412, de fecha 24/10/2013, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 101)- cheque Nº 81664426 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 30/10/13, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 102)- cheque Nº 81664427 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 17/10/13, por la suma de $450,00 (recibido por "17 de Octubre" y cobrado por Tévez Marcos, DNI 25947799); 103)- cheque N.º 81664433 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 22/11/13, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl DNI 14595367); 104)- cheque Nº 81664443, de fecha 30/11/13, por la suma de $800,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 105)- cheque N.º 82995898, en el mes de diciembre de 2013, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 106)- pago de fecha 17/12/13 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina"); 107)- Mediante cheque Nº 88179735 del Banco de la Provinicia de Buenos Aires, de fecha 20/01/14, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina

Guillermo, DNI 11343112); 108)- cheque N.º 88179774 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 21/02/14, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Gili y Cia. SRL); 109)- pago en efectivo, de fecha 25/02/14 por la suma de $1.700,00 (recibido por "Marcos (Gerardo)"); 110)- cheque Nº 89216988 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 27/02/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 111)- cheque Nº 89217010, de fecha 28/03/14 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina"); 112)- pago de fecha 03/04/14 por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 113)- cheque Nº 90560859 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 09/04/14, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Gerardo" y cobrado por Martínez Héctor J., DNI 27407959); 114)- cheque Nº 90560866 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 21/04/14 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 115)- cheque Nº 90560873 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/05/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 116)- cheque Nº 90560875, de fecha 09/05/14, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Gerardo"); 117)- cheque Nº 90560877 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 03/06/14, por la suma de $800,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 118)- cheque Nº 90560885 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 05/06/14, por la suma de

$1.700,00 (recibido por "Gerardo" y cobrado por Genchi Rodrigo, DNI 35101779); 119)- cheque Nº 90560886 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/06/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Taegu Automotores SA); 120)- cheque Nº 92779370 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 02/07/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Hermano Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 121)- cheque Nº 92779399, de fecha 16/07/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina"); 122)- pago de fecha 15/07/14, por la suma de $1.000,00 "Viaje de suelo a pedio UOCRA" (recibido por "Gerardo"); 123)- cheque Nº 96762603 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 06/08/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Hermano Erbin" y cobrado por Erbin Raúl DNI 14595367); 124)- cheque Nº 96762625 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 11/08/14, por la suma de $4.000,00 (recibido por "Mario Gonzalez"); 125)- cheque Nº 9733476, de fecha 14/08/14, por la suma de $1.500,00 (recibido por "Gerardo"); 126)- cheque Nº 97334793 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 23/09/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 127)- cheque Nº 79347506 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 27/08/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 128)- cheque Nº 98654261 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 23/09/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 129)- cheque Nº

325972 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/11/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 130) cheque Nº 325973 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/11/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Gonzalez, DNI 22670556); 131)- cheque Nº 326000, de fecha 09/12/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Erbin"); 132)- cheque Nº 2216842, de fecha 29/12/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina"); 133)- cheque Nº 5394822 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 05/02/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 134)- cheque Nº 5808343, de fecha 18/03/15 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 135)- cheque Nº 81491012 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 27/04/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 136)- cheque Nº 11260101 del Banco Provincia de Buenos Aires, de fecha 18/06/15 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 137)- cheque N.º 11260119 del Banco Provincia de Buenos Aires, de fecha 27/07/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 138)- cheque Nº 14701341, de fecha 28/08/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 139)- cheque N.º 17137990 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 04/11/15, por la suma de $6.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina

Guillermo, DNI 11343112); 140)- cheque N.º 18698792, de fecha de 10/12/15 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 141)- cheque Nº 18698820, de fecha 14/01/16, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 142)- cheque Nº 86007799 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 11/03/16 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 143)- cheque Nº 23507842 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 04/04/16, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 144)- cheque Nº 23507872, de fecha 26/04/16 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 145)- cheque Nº 13849736, de fecha 06/06/16 por la suma de $2.900,00 (recibido por "Molina"); 146)- pago en efectivo, de fecha 06/06/16 por la suma de $600,00 (recibido por "Molina"); 147)- cheque Nº 24855139 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 01/07/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 148)- cheque N.º 88492705 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 02/08/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 149)- cheque Nº 89238220 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 30/09/16, por la suma de $3.300,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 150)- cheque Nº 89763969 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 30/10/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por

Molina Guillermo Esteban DNI 11343112); 151)- cheque Nº 29059353 del Banco de la Prov. de Bs. As, de fecha 25/11/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 152)- cheque N.º 90481688 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 27/12/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 153)- cheque N.º 35827717 del Banco de la Prov. de Bs. As., de fecha 09/02/17, por la suma de $3.500,00 (cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 154)- cheque Nº 39058335 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 03/04/17, por la suma de $7.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Bazan DNI 28068181); 155)- cheque Nº 30538613, de fecha 31/05/17, por al suma de $3.500,00 (recibido por "Molina"); 156)- cheque N.º 31135246 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 04/07/17 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina"); 157)- cheque Nº 32428763 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 19/09/17, por la suma de $11.000,00.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y

personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

HECHO 23): Con posterioridad al inicio de la obra de "PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES TRES SARGENTOS, ENTRE PILMAYQUEN Y FRAGATA SARMIENTO - CHARCAS ENTRE FRAGATA SARMIENTO Y FORTALEZA PROTECTORA ARGENTINA - SAN LORENZO ENTRE NECOCHEA Y MISIONEROS (21 CUADRAS)" (el día 05 de junio de 2017), licitada según expediente N° 417R-200-2017, el señor LUIS MARÍA MEDUS, socio gerente de la empresa "OBRAS ABEDUL S.R.L." que estaba a cargo de dicho emprendimiento, fue citado por el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) a una reunión en el ámbito de la estación de servicio YPF ubicada en avenida Colón y calle 9 de Julio de esta ciudad, oportunidad en que el citado dirigente sindical le EXIGIÓ al empresario -como "colaboración a la U.O.C.R.A."- un monto equivalente al TRES POR CIENTO DEL PRECIO DE LA OBRA, para finalmente compelerlo al pago de la suma de VEINTICINCO MIL PESOS POR MES durante el periodo de duración de la

obra, como condición para poder continuar su ejecución sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor MEDÚS ABONÓ a MOLINA las siguientes sumas: DOCE MIL PESOS, el día 26 de julio de 2017, mediante cheque Banco Provincia de Buenos Aires número 41640077, de fecha 04/08/2017; la suma de DIEZ MIL PESOS, mediante cheque Banco Provincia de Buenos Aires número 41640099, de fecha 10/08/2017; la suma de ONCE MIL PESOS, mediante cheque cargo Banco Provincia de Buenos Aires n° 44684883, de fecha 14/09/2017 y la suma de ONCE MIL PESOS, mediante cheque Banco Credicoop n° 32428764, de fecha 19/09/2017.

Todos estos cartulares fueron entregados a MOLINA -quien actuó con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto respectivamente y jefes de la Delegación Bahía Blanca de la UOCRA)- en la sede de la empresa (sita en calle Rega Molina n° 816 de esta ciudad) y fueron cobrados por el señor Omar Roca (DNI 18.027860), según constancias remitidas por las entidades bancarias.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos

(quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

HECHO 24): En circunstancias en que la empresa "OBRAS ABEDUL S.R.L." se encontraba realizando la obra "PAVIMENTACIÓN CALLES DE PUNTA ALTA ETAPA 1" del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales (ordenada por Licitación Pública N° 4/17 mediante expediente S-067/17), con posterioridad al día 24 de julio de 2017, el señor LUIS MARÍA MEDUS, socio gerente de la empresa "OBRAS ABEDUL S.R.L." a cargo de dicho emprendimiento, fue citado a la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca (sita en calle Saavedra número 470 de esta ciudad), por el señor PABLO DAVID GUTIERREZ (Colaborador del gremio y Secretario de Difusión y Actas del sindicato), oportunidad en que este último le EXIGIÓ al empresario el pago de la suma de QUINCE MIL PESOS POR MES, durante el tiempo que demandara la realización de la obra, como condición para poder continuar la misma sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor LUIS MARÍA MEDUS ABONÓ a GUTIERREZ la suma de SEIS MIL PESOS, mediante cheque Banco Provincia de Buenos Aires número 44684867, de fecha 14/09/2017, que fue cobrado por el señor Antonio Mazzarello (DNI n° 17143489), según información bancaria.

Esos pagos fueron exigidos por GUTIERREZ con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

HECHO 30): Durante el año 2016, en circunstancias en que se desarrollaba la obra "INTERVENCIÓN URBANA EN AVENIDA GUILLERMO

TORRES DE INGENIERO WHITE - 1ra. ETAPA", la cual estaba a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por "SCHLOSSER INGENIERÍA" y "OBRAS ABEDUL S.R.L.", el señor CARLOS SCHLOSSER fue citado a la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca (sita en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad), donde fue recibido por el señor WALTER RAFAEL PAIZ (Tercer Vocal Titular y Secretario de Organización y Asuntos Gremiales), que le dijo que tenía que "colaborar", exigiéndole un monto de dinero que finalmente se estableció en la suma de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS POR MES, como condición para que las tareas laborales puedan continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la U.O.C.R.A.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor SCHLOSSER abonó las sumas exigidas durante ocho meses -como mínimo-, mediante entregas en dinero efectivo y los siguientes cheques correspondientes a la cuenta corriente en pesos n° 053497/0 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 6229: 1)- número 026994902, de fecha 10/06/16, por la suma de $7.500; 2)- número 026994914, de fecha 02/08/16, por la suma de $7.500; 3)- número 026994941, de fecha 23/08/16, por la suma de $7.500; 4)- número 026994978, de fecha 27/10/16, por la suma de $7.500; 5)- número 026994999, de fecha 02/12/16, por la suma de $7.500; 6)- número 034590851, de fecha 30/12/16, por la suma de $7.500.

Dichos pagos -realizados en efectivo o cheque- fueron recibidos por un colaborador de Paiz, en la sede de la empresa (sita en calle O´Higgins n° 2096 de esta ciudad).

Los pagos fueron exigidos y percibidos por PAIZ con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr la indebida disposición patrimonial, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban al empresario con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la UTE cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de la obra, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

Computo para tener por debidamente demostrados estos hechos lo expuesto por el testigo Luis María Medus quien contó en el

Tribunal que conoce a los señores Burgos, Molina, Paiz y Gonzalez. Que es Ingeniero civil y socio gerente de la empresa Obras Abedul.

Dijo que la relación en un principio con el gremio era normal, los intereses de ellos eran velar por los compañeros, y les pidieron colaboraciones que eran razonables, y luego de un tiempo eso pasó a una exageración y ahí se vieron con muchos problemas.

Mencionó que la colaboración era la entrega de dinero de forma mensual para nafta o necesidades de la gente del gremio para su actividad, que eso era lo que decía la gente del gremio cuando pedía el dinero. Pero que luego la proporción de los montos pedidos empezaron a ser parte de sus ganancias como empresa, que era un porcentaje de su facturación, cosa que se les hacía imposible cumplir sin tener problemas financieros en las empresas.

Indicó que desde que trabaja han hecho colaboraciones con el gremio para nafta y otras cosas, pero que los pedidos abusivos empezaron cerca del 2016 más o menos. Que esos pedidos de la UOCRA los hacían Rifo, Erbin, Molina, Gerardo Gonzalez, Mario Gonzalez y Burgos. Que a veces era entrega de dinero en efectivo, en otras oportunidades cheques, y que pasaban a buscarlo por la oficina, lo llevaban al gremio o acordaban encuentros en una estación de servicio o en la vía pública.

Sostuvo que su empresa tenía una planilla donde anotaba todo lo que iba entregando, también identificaba a la persona, el lugar, el monto, a quien se lo daba, y si era cheque el monto del mismo y el banco, que podía ser Provincia o Credicoop.

Relató que junto con otras empresas (Cerra y Moro, Carreteras 2000 y Coince) conformaron una UTE para realizar una obra de bacheo y repavimentación en algunos sitios localizados en la ruta 3. Que en esa oportunidad les pidieron dinero, que la cifra que pagaban era de 40.000 pesos por mes, que los recibía Burgos y lo llevaba la gente de Coince o Carreteras 2000. Que él sabía de la existencia del pacto, pero la UTE la gerenciaba Carreteras 2000, de la cual Cristian Ferrero es su titular. Apuntó que cree que fue el titular de Coince, Néstor Tepliz, quien habló en esa oportunidad con la UOCRA, aunque no sabe como eran las entregas, si pasaban por la empresa o lo entregaban en el gremio. Dijo que los 40.000 lo ponían del fondo de la UTE, para el cual aportaban en partes iguales 10.000 cada empresa. Que lo que pagaban eran menos de lo que le habían pedido al inicio, que habían pedido mucho más y arreglaron por eso.

Contó luego que su empresa también realizó una obra en calle Tres Sargentos, haciendo cordón cuneta y asfalto de diez cuadras, por un monto de 20 millones de pesos en el año 2016. Que ahí venía conversando con Molina por los pagos mensuales, ya que estaba dividida la ciudad en cuartos entre la gente de la UOCRA, y en este caso en particular Molina lo

llamó para decirle que debían pagar el 3 por ciento del monto de la obra. Señaló que desconoce para que era el dinero pedido, que no era justificable con los gastos de un gremio para nafta. Que con motivo de este pedido se llamaron algunas veces, fue a la estación de 9 de julio y Colón, y cree que Molina le reclamaba 80.000 por mes durante lo que durara la obra; lo cual era mucho, y le manifestó su problema. Que el 3 por ciento del monto total de la obra serían un total de 600.000 pesos, que le dijo que no podía cumplir.

Acotó que en su forma de actuar Molina siempre fue respetuoso pero duro en el comentario, diciendo que se iba a tener que atener a las consecuencias, que ellos sabían lo que tenían que hacer. Dijo que nunca le gustó la relación con la UOCRA, que siempre le dio medio ir al gremio, sentir la presión que le hacían y nunca lo sintió o consideró a lo que entregó como una colaboración.

Que en ese momento le dijo a Molina que no sabía si podría cumplir, que le dijo que iba a hacer algo aún cuando no lo iba a aceptar y quedó en que iba a hacer algunos pagos, y realizó algunos pagos luego de eso. Que Molina le mandaba los mensajes, y que él le contestaba por como iba la obra, y ahí la situación se había puesto complicada porque los montos eran altos y no era razonable si cabe la palabra –acotó-. Que Molina lo consultó qué iba a hacer, por lo que le hizo un cheque con algo, que no era

lo pactado, para ver qué pasaba, con cuanto menos se conformaba de lo que le había pedido.

Que así, no llegó a pagar el total del primer mes, cuando surgieron estas denuncias que terminan en este juicio y por eso no tuvo que avanzar más con los pagos.

Señaló que los pagos al final eran todos con cheques, que eran al portador.

Consultado por el señor Fiscal si en esa obra tuvo algún inconveniente dijo que no, porque la obra recién empezaba, hizo los primeros pagos y luego no hubo más relación porque saltó la denuncia.

Contó que en otra obra de pavimentación de 10 cuadras en Punta Alta lo llamó Gonzalez (más tarde corregiría el apellido) cuando empezaba la obra para solicitarle un pago mensual de 10 o 15 mil por mes; que él le contestó que tenía problemas de pago, cree incluso que Gonzalez le pidió más, y el declarante le dijo que no sabía si iba a cumplir el plazo. Que entonces lo citó al gremio, se reunió con él, y arreglaron en 14.000 o 15.000 por mes. Que ahí le comentó que estaba pagando lo de calle Tres Sargentos y que Gonzalez le contestó que eso era una obra separada. Que lo comentó para que supieran que estaban pagando por demasiados lados y no se sentía cómodo. Que luego dejó un valor en un sobre para Gonzalez

en el gremio y más tarde surgieron las denuncias y no tuvo más relación con nadie.

Ante la consulta del Dr. Gomez Talamoni indicó que no fueron ninguno de los dos Gonzalez los que les pidieron el dinero, que fue Gutierrez.

Contestando preguntas del Fiscal dijo que hicieron obras en el predio del gremio, a partir de una exigencia del gremio a la Cámara de la construcción para que se hiciese un acceso en el predio de la ruta 3 vieja, unos 200 metros de pavimento y cordones.

Que les pidieron a las empresas de la cámara hacerlo, entre ellas, Carreteras 2000, Ingeniería y Arquitectura, Vial Agro, Cerra y Moro, CV1, Abedul y otras más, y entre todos lo hicieron. Apuntó que nadie quería hacer eso gratis, que no era su obligación, pero Burgos los intimó a que lo hicieran y así tuvieron que hacerlo, terminando antes de navidad o fin de año. Que fue un monto importante que tuvieron que aportar las empresas.

Que recuerda una reunión en el gremio en la sala grande del fondo, donde los intimaron a terminar porque no estaban haciéndolo en tiempo, e hicieron una especie de compromiso para terminar la obra.

Señaló que “no era por deseo propio, nunca hice nada de lo que hice por deseo propio, era por una presión y prefería aceptarlo que atenerme a las consecuencias, no era voluntario” –así sus palabras-.

Que el señor Burgos junto a tres o más de la UOCRA estaban en la reunión a la que se refirió, y también los empresarios.

Contó que en el año 2015 les reclamaron el pago de un premio de 8.000 por trabajador, cosa que no estaba prevista en ningún lado, no se lo podían trasladar a nadie, y además premio no era porque no había nadie que hubiese hecho algo más que los demás. Que los citaron y hablaron de eso. Que luego los citaron en el Ministerio de Trabajo para confirmar el tema del premio y por el delegado de la obra les decían que si no aceptaban pagar el premio iban a hacer asambleas en la obra; que fue por eso que en vez de 8.000 tuvieron que acceder a pagar 4.000, que fue lo que lograron bajar, y tuvieron que aceptar esa presión teniendo que darle el premio a todos los trabajadores, no a los que se los merecían.

Que en esa oportunidad estaban además de Abedul, Cerra y Moro, Carreteras 2000, Bulwar, Ingeniería y Arquitectura, y alguna más de afuera, que trabajaban en Bahía Blanca y la sección.

Expresó que junto con Schlosser hicieron una obra de peatonalización de la calle Guillermo Torres, consistente en levantar adoquines, hacer veredas, muebles urbanos, iluminación, era semipeatonalización de dos cuadras y media; y ahí ocurrió lo mismo de siempre, hablaron con Schlosser y él le pagaba 10.000 por mes a Mario Gonzalez de la UOCRA. Que esto se lo contó Schlosser, quien era el que administraba la UTE y por eso se encargaba de hacer el pago. Que si no

recuerda mal pagaron 6 meses esa suma, que fue lo que duró la obra; que seguramente Schlosser sabe más de esos pagos.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que lo de la plata para Mario Gonzalez lo sabe por dichos de Schlosser y porque gente de su empresa lo ha visto a Gonzalez en la obra.

Al doctor Jara le contestó que los pedidos de colaboración al principio eran razonables y luego no, como ya expuso. Que esos pagos que hacía eran un retiro de la empresa que no se podía imputar de ninguna forma, no había ningún comprobante. Que los pagos los realizaban desde la empresa y no lo podían computar como gastos de la empresa, aparecía como un beneficio, porque no tenía ningún comprobante.

Le explicó al letrado que al principio pagaban un monto, era un poco de gasto y listo, pero luego todo fue mayor, y no se computaba contablemente. Que esos son pagos que se hacen sin comprobante, como si va a una gomería y no le dan comprobante, igual el gasto está. Que por eso las colaboraciones a la UOCRA no se computaron contablemente.

Señaló que los cheques salen de caja, es una extracción que sale como retiro de socio, es como ganancia de la empresa aunque realmente no lo sea. Que todos los gastos sin comprobante quedan en el balance como egreso sin comprobante y queda como ganancia. Todos los gastos que no tienen comprobante pasan a ser como ganancia de la

empresa aunque no lo sean. Que esto es la ganancia de la empresa que puede o no ser de los socios.

Indicó que en la construcción como empresa está desde el año 1992, que es el dueño de la empresa junto a otras personas.

Le contestó al doctor Jara que no se puede diferenciar la ganancia de los socios y dueños con lo que se destinaba a colaboración. Que de ese dinero, lo que se dio en colaboración no lo tiene él, que sí se ha quedado con lo que se llevaba al bolsillo como ganancia. Que el balance es una aproximación de la realidad de la empresa, es una buena imagen.

Sostuvo que acompañó el listado de cheques y pagos que se dieron como colaboración a la UOCRA. Que acompañó en la fiscalía unas impresiones de unas planillas Excel que contenían la fecha, el pago, el lugar y a quien se habían realizado, y que esto lo realizaba él o su hermano, según el caso. Que estos pagos se hicieron a distintos integrantes de la UOCRA. Que en ese detalle de pagos no había ninguno que fuese como ganancia del declarante, son los pagos que se le hicieron a integrantes de la UOCRA.

Dijo que no sabe que es el móvil sanitario de la UOCRA, que no tienen conocimiento de eso.

Que Molina era respetuoso, no le decía para que era la colaboración, y el declarante no le preguntó. Que sí le dijo qué pasaba si no cumplía.

Que no recuerda si en una reunión en la estación de servicio le pidiese la contratación de algún empleado. Que alguna vez alguien de la UOCRA se lo ha pedido, pero no recuerda si esa vez y en ese lugar Molina se lo pidió.

Que hubo un tiempo que la colaboración era razonable, luego cuando la UOCRA hablaba con Vale y Siemens fue que sintieron ellos que esa presión de demanda se las trasladaron a ellos y en cada obra era un pedido, un monto y cada vez les pedían más plata por todas las obras y que fue ahí cuando habló con Gutierrez por la obra de Punta Alta que le dijo que no les podían cobrar más, que ahí fue que hizo referencia a eso de englobar, para tratar de argumentar para pagar menos, que fue lo que quiso hacer, por eso le dijo que juntaran todo, como un descuento. Que no lo pudo lograr, que en realidad justo se dio que cuando comenzó a pagar surgió todo lo de las denuncias y esto se suspendió.

Que luego de las denuncias no lo llamaron más.

Que a Molina cree que solo le entregaron cheques.

Que sabe de la existencia de la bolsa de trabajo de la UOCRA, que puede ser que haya hablado con Molina de ello, pero no lo recuerda;

que puede ser que le pidiera que tomara alguien para la empresa, pero no lo recuerda.

Que los premios del año 2015 eran para el trabajador, que no tiene presente si fueron consignados como remunerativo o no remunerativo.

Le respondió al doctor Jara que no calculaban la colaboración para la UOCRA, porque si hoy te piden 4 o 5 mil pesos se pueden afrontar, ahora si te piden 80.000 en el año 2016, eso no era un monto aceptable.

Que en la obra pública va todo por licitación y la gana el que tiene el precio más barato, o puede ganar el segundo si existe algún inconveniente; pero para la licitación no se tiene en cuenta la colaboración, menos los montos que se empezaron a pedir después. Que nunca se contabilizó una colaboración para la UOCRA en una oferta.

Que las 5 empresas de Bahía que hacen obra pública son competencia suya, que se ha juntado como UTE, ha ganado licitaciones y ha perdido. Que no se ponía en contacto con las empresas para presentar la oferta.

Al doctor Martinez le contestó que no tuvo muchas reuniones con Burgos, alguna vez en la Cámara de la construcción con la obra del predio del gremio.

Que directamente Burgos no le pidió dinero. Que no le entregó a Burgos dinero.

Que asistió a una reunión en el gremio por el predio, porque habían demandado a la cámara que en la obra que habían pedido había pasado tiempo y Burgos los convocó para decirles que tenían que hacerlo. Que fueron a la reunión porque el gremio les pedía de hacerlo y a poner la cara, que a él no le gustaba mucho, y ahí les dijeron que tenían que hacer la obra, y ellos sintieron la presión, reorganizaron sus actividades y empezaron a trabajar.

Le indicó al letrado defensor que el declarante no tenía obligación de hacer la obra, “que fue el llamado y decirles que iban a parar la obra, que fijate que hacen asambleas, las situaciones que en una empresa se sienten como presión”.

Ante la consulta de si en la reunión en el gremio hubo manifestaciones o amenazas?, dijo que no recuerda, que no necesariamente cada vez que lo llamaban lo amenazaban, que la presión estaba sobreentendida, porque ya se lo habían dicho.

Preguntado si Burgos en esa reunión dijo algo? Señaló que no lo recuerda específicamente, que tampoco recuerda que fuera una reunión amena, porque la sensación de estar en esa reunión no fue placentera para él, pero no recuerda las palabras que se usaron.

Señaló que cuando estaban en el Ministerio de Trabajo le dijeron que paraban la obra y lo hicieron, no dejaban salir a los camiones de la planta, ni trabajar a su personal. Esa fue la vez que no hacían caso, cuando se discutía el premio, si hacían caso no había problema.

Que cada vez que empezaban una obra aparecían con un papelito pidiendo documentación e implícitamente era que si no iba al gremio y arreglaba iban a empezar los problemas, era una amenaza velada.

Que a una reunión en la CGT local fue, cree que fue previa a la del Ministerio de Trabajo, que luego los citaron al Ministerio porque la reunión de la CGT no era suficiente. Que en esa reunión les pedían el premio. Que ellos no querían pagar nada, que lo que corresponde sí lo pagaban, y lo que no no.

Que de la UOCRA pedían 8.000, ellos ofertaron 2.000 y arreglaron por 4.000. Que en su opinión no correspondía pagar nada. No querían pagar nada porque los premios se ganan, no obligados por el gremio a pagarle a todos.

Que existe un convenio de la UOCRA con la Cámara que es el que respetan ellos, todo lo que se exige demás no está pactado. Que hay veces que se pactan nuevas cosas y están en el convenio, como premios que en realidad se llaman de otra manera.

Mencionó que a la reunión asistió solo, sin asesoramiento legal, que no recuerda si alguna otra empresa fue con abogado. Por parte del Ministerio había una persona que entraba y salía de la reunión, la gente de la UOCRA y las empresas. Que de esos 4.000 que se acordaron cree que se firmó un acta, supone que luego fueron pagados. Que después de eso no hubo parate de obras, ni asambleas.

Expresó que mientras negociaba lo llamaban de la planta que el camión no podía salir, por lo que no era una negociación libre, era con coerción, si no arreglaba la situación seguían parados en asamblea. No era que sus empleados estaban en huelga, la directiva del gremio era que no trabajen y sus empleados no tienen posibilidad de hacer otras cosas.

Dijo que por fuera de los premios no tuvo otra situación de similares características; que era bastante conciliador y aceptaba las cosas.

Al doctor Jara le contestó que luego de la denuncia tiene entendido que la UOCRA fue intervenida. Que luego de la intervención no pagó más colaboraciones, no hubo asambleas en sus obras, y no le dio dinero, ni contraprestación a gente de la UOCRA.

Que mientras las colaboraciones eran razonables no impactaban. Que al no existir colaboraciones las utilidades nunca fueron menores.

Dijo que luego de la intervención pagó premios de fin de año, que esto lo arregló la Cámara con la UOCRA a nivel nacional, que es el convenio que siguen, viene homologado por el Ministerio de Trabajo a nivel nacional.

Que el convenio de premios que firmaron más de 5 empresas no se volvió a firmar luego de la intervención. Que cada empresa puede tener algún arreglo particular y pagarle más a sus empleados.

Que no tiene empleados a los que no les esté realizando el aporte de ley.

Que un cien por cien es la incidencia de lo que se paga por aportes y demás por cada trabajador. Que no tiene abogado que asesore a la empresa, sí ha consultado a abogados. Que cuando fue al Ministerio no consultó a ningún abogado antes de ir.

También computo lo expuesto por el testigo Carlos Schlosser quien mencionó que es Ingeniero Civil y hace 38 años que ejerce, teniendo una empresa constructora unipersonal que tiene de nombre de fantasía Schlosser ingeniería, trabajando desde el 2001 en Bahía Blanca.

Contó que junto con Obras Abedul tomaron un trabajo en Ingeniero White, tratándose de una intervención urbana en la avenida Guillermo Torres, que a esos efectos conformaron una UTE, por 9 meses de trabajo. Que la obra era renovación del pavimento, iluminación y mobiliario

urbano, y reparación de veredas y desagües pluviales, como también reemplazo de cañería de servicios.

Dijo que en esa obra el tema fue que recibió a gente de la UOCRA solicitándole colaboración, según decían ellos, porque consideraban que el tipo de obra, por el monto que era, resultaba importante para el tipo de empresa. Que solicitaron el aporte de una colaboración que no terminó siendo así, que se solicitó un aporte mensual en función del monto de la obra en sí, se solicitó que concurrieran a la UOCRA y ahí se pactó la cifra y eso fue lo que se tuvo que aportar todos los meses hasta la finalización.

Mencionó que la reunión fue en la sede del gremio, y ahí estuvo presente Paiz. Que fue Paiz quien lo citó, creo que lo llamó por teléfono o se presentó en la obra, pero no lo recuerda bien. Que en el sindicato, en esa reunión con Paiz, se terminó negociando una cantidad porque la inicial era superior y se pactó 7.500 pesos mensuales. Que el monto inicial cree que fue más del doble de esa cifra.

Que el deponente le dijo a Paiz que era excesivo, que no era posible, porque el monto se sacaba del beneficio de la obra y era imposible disponer de ese dinero, por lo que luego llegaron a ese número, y todos los meses se contactaban con el declarante, quien en representación de la UTE pagaba entregando el dinero a alguien que mandaban, de los que desconoce identidad. Que les avisaban que en tal momento pasaban a

retirarlo, que el dinero era en efectivo y en algunos casos, como no tenían, se entregaron cheques al portador. Que estos cheques eran de la UTE, la que abrió una cuenta en el Banco Provincia, y los cheques los firmaba gente de Abedul o el testigo. Que si no recuerda mal fueron 8 o 9 pagos, durante el plazo de ejecución de la obra, y abarcaron todo el período.

Relató que Paiz no recibió esos pagos en forma personal, siempre era alguien enviado por él, de los que no conoce los nombres. Que no se firmaba nada, era dinero que pasaba de sus manos a las manos de ellos. El pago se hacía en su oficina, le decían vengo de la UOCRA a retirar lo pactado y se lo entregaban en un sobre, no existiendo constancia ninguna. Que los datos de los cheques los aportó en la fiscalía en su momento.

Le señaló al Fiscal que “no era un pago voluntario, era intimidatorio el sistema, podíamos llegar a tener problemas en la obra, a tener inspecciones difíciles por parte del Ministerio de Trabajo, a pesar de que somos una pyme que cumple con todos los requisitos laborales; pero a veces uno ante el temor y pensando en que uno quiere trabajar y que su personal de años en la empresa (alguno más de 20), se pensaba más en ellos y en que la obra no se pare, porque cuando la obra se para el personal no cobra, ante eso uno llega a decir tengo que hacer este pago aunque sea en contra de mi voluntad” –esas sus palabras-

Relató que ha tenido otras experiencias, solicitudes en algunos casos a las que no accedió pensando que se tenía que atener a las consecuencias, pero el caso más concreto es el que está relatando.

Que otro caso fue en una obra por el PROCREAR, donde le exigieron que firmara un convenio como tenía la empresa principal, no accedió y logró eludir la situación. Explicó que la empresa de la cual era sub-contratista era Ingeniería y arquitectura, que la sub-contrató para hacer una red de gas en el barrio del procrear ubicado en los terrenos traseros del Quinto Cuerpo del Ejército. Que en esa obra fue presionado para aceptar las condiciones de la empresa principal, pero logró después de discusiones no aceptarlas. Que las condiciones que le querían imponer eran en algunos casos más caras que las que él contrataba de baños y comida.

Que como ha participado de las reuniones de la cámara y su empresa es miembro, sabe que había comentarios que en muchos casos hubo presiones para contratar una determinada empresa para el transporte de personal, alquiler de baños y comida del personal.

Dijo que les propuso a los que lo citaban en la UOCRA ir a otro lugar y no hubo forma de convencerlos; porque en la UOCRA uno se siente intimidado, presionado, era la manera que ellos buscaban de lograr que se acepte lo que ellos le pedían.

Que los cheques se descontaron todos de su cuenta corriente.

Al doctor Gomez Talamoni le dijo que no recuerda las palabras exactas que Paiz utilizó en la reunión, pero que hizo mención al monto de la obra pública, el plazo de obra y que en función de eso la UOCRA exigía esos pagos. Que si la UTE tiene esta obra es que se pedía esa suma de pago no voluntario, y fue en función del ambiente intimidatorio y conociendo otros casos comentados dentro de la misma cámara, que se termina accediendo a estos pagos.

Dijo que “era implícito, no hubo una amenaza de decir o pagan o les rompemos un equipo, le prendemos fuego un equipo, lo que sucede es que cuando uno está trabajando tiene que analizar esas ideas de cómo sigue esto si no accedo a esta situación. Uno las piensa, las analiza, hay ejemplos donde han pasado cosas, uno se pone en situación de autodefensa que afecta hasta la salud personal de uno por estar bajo este estado de presión” –esos los términos en que contestó-.

Reiteró que cree que pagaban 7.500 por mes y cree que era Paiz el que los mandaba a buscar, porque el contacto anterior al pago era de él.

Al señor Fiscal le señaló que margen para no pagar no había, los pagos eran religiosamente mensuales, que “no sufrí una amenaza frontal por parte de él, debo decir, pero si teníamos retraso un día nos pedía el cumplimiento, nos exigía el cumplimiento” –sus dichos-. Que en esa obra, sobre el final, los visitó el Ministerio de Trabajo, que hubo algún retraso en

los pagos en esa época, pero no lo puedo asegurar totalmente que haya sido producto de esa situación, pero es coincidencia.

Entiendo que, con estos elementos probatorios recién mencionados y la demás prueba ya apuntada y valorada en el hecho 1, en particular, toda la prueba documental en lo que respecta al detalle de los cheques emitidos por Obras Abedul y la UTE conformada con Schlosser Ingeniería, las planillas de excell y la documentación aportada por las distintas entidades bancarias, se han demostrado los hechos acusados.

Así, entiendo probado que con posterioridad al 2006, en esta ciudad de Bahía Blanca, al menos tres personas que revestían la calidad de dirigentes sindicales del gremio UOCRA o colaboradores del mismo, le exigieron a los integrantes de la empresa Obras Abedul S.R.L., al señor Luis Medús, el pago de una suma de dinero mensual, por una cifra que fue variando en el tiempo, según la situación económica de nuestro país, bajo intimidación de entorpecer la actividad normal de su empresa dedicada a obras de infraestructura en la ciudad de Bahía Blanca y la zona. Por el temor generado por estas conductas, los directivos de la empresa Obras Abedul S.R.L. abonaron sumas de dinero en efectivo y en cheques, habiendo emitido hasta el año 2017 los siguientes: 1)- cheque de fecha 14/07/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Riffo"); 2)- cheque de fecha 26/07/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 3)- cheque N° 56336730, de fecha 29/08/06, por la suma de $250,00 (recibido por

"Peralta"); 4)- cheque Nº 58114153, de fecha 04/10/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 5)- cheque Nº 59138637, de fecha 30/10/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 6)- cheque Nº 61673111, de diciembre de 2006, por la suma de $250,00; 7)- cheque Nº 63597764, de fecha 29/12/06, por la suma de $250,00 (recibido por "Peralta"); 8)- pago en efectivo de fecha 15/01/07, por la suma de $400,00 (recibido por "Peralta"); 9)- pago en efectivo realizado con fecha 20/02/07, por la suma de $300,00 (recibido por "Peralta"); 10)- pago en efectivo, de fecha 21/03/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 11)- pago en efectivo, de fecha 13/04/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 12)- pago en efectivo, de fecha 14/05/07, por la suma $350,00 (recibido por "Peralta"); 13)- pago en efectivo, de fecha 19/06/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 14)-pago en efectivo, de fecha 09/08/07, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"); 15)-pago en efectivo, de fecha 21/09/07, por la suma de $350,00 (recibido por "Peralta"); 16)-cheque Nº 6782918, de fecha 25/09/07, por la suma de $450,00 (recibido por "Peralta Riffo"); 17)- pago en efectivo, de fecha 10/10/07, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"): 18)- cheque Nº 77540040, de fecha 24/10/07 por la suma de $450,00 (recibido por "Peralta"); 19)- pago en efectivo, de fecha 16/11/07 por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"); 20)- pago en efectivo, de fecha 07/12/07, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"), 21)- pago en efectivo, de fecha 20/12/07 por la suma de

$450,00 (recibido por "Peralta"); 22)- pago en el año 2008 -abono en concepto de "SALDO 2007"- por la suma de $600,00; 23)- pago en efectivo, de fecha 11/01/08, por la suma de $300,00 (recibido por "Peralta"); 24)- pago en efectivo, de fecha 28/02/08, por la suma de $200,00 (recibido por "Peralta"); 25)- pago en efectivo en el mes de marzo del año 2008, por la suma de $500,00 (recibido por "Peralta"); 26)- cheque Nº 83419166, de fecha 11/03/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 27)- cheque Nº 86718776, de fecha 08/04/08, por la suma de $450,00 (recibido por "Montero"); 28)- pago en efectivo, de fecha 08/04/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 29)- cheque Nº 87330442, de fecha 15/05/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 30)- cheque N.º 89441535, de fecha 13/06/08, por la suma de $1.400,00 (recibido por "Montero"); 31)- Cheque Nº 90338281, de fecha 18/07/08, por la suma de $1.350,00 (recibido por "Montero"); 32)- pago en efectivo, de fecha 11/08/08, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Montero"); 33)- cheque Nº 424974, con fecha 04/02/09, abonó la suma de $1.000,00 que indica fuera recibido por "Montero"; 34)- cheque Nº 3159388, con fecha 18/03/09, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Montero"); 35)- cheque Nº 3808597, con fecha 22/04/09 pagó la suma de $1.400,00 que indica fuera recibido por "Montero"; 36)- cheque Nº 5478733, con fecha 22/05/09 abonó la suma de $1.000,00 que indica fuera recibido por "Montero"; 37) cheque Nº 7792082, de fecha 01/07/09 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Montero"); 38)-

cheque Nº 9908700, de fecha 28/08/09 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Sepulveda"); 39)- cheque Nº 12462090, de fecha 17/11/09 por la suma $1.000,00 (recibido por "Montero"); 40)- cheque N.º 99663831, de fecha 23/12/09 por la suma de $1.300,00 (recibido por "Montero"); 41)- cheque Nº 1618041, de fecha 17/01/10, por la suma de $600,00 (recibido por "Montero"); 42)- cheque Nº 307611746, de fecha 03/11/10 por la suma de $1.500,00 (recibido por "Riffo"); 43)- cheque N.º 307611756, de fecha 05/11/10 por la suma de $1.500,00 (recibido por "Riffo"); 44)- cheque Nº 32470024, de fecha 02/12/10 por la suma de $700,00 (recibido por "Riffo"); 45)- cheque Nº 22903402, de fecha 04/12/10 por la suma de $600,00 (recibido por "Riffo"); 46)- pago en efectivo, de fecha 14/12/10 por la suma de $370,00 (recibido por "Riffo"); 47)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 07/01/11, por la suma de $1.591,00 (recibido por "Riffo"); 48)- pago en efectivo, de fecha 07/01/11, por la suma de $110,00 (recibido por "Riffo"); 49)- cheque Banco Provincia de Buenos Aires, de fecha 07/01/11, por la suma de $1.591,00 (recibido por "Riffo"); 50)- pago en efectivo, de fecha 07/01/11, por la suma de $110,00 (recibido por "Riffo"); 51)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 36313648, de fecha 04/02/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Lara Cristian Alexis, DNI 29360563); 52)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 381117731, de fecha 15/03/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI

26333396); 53)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 39188149, de fecha 12/04/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 54)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 39917956, de fecha 09/05/11, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 55)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 42441440, de fecha 16/06/11, por al suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 56)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 43286798, de fecha 08/07/11 por la suma de $1.700,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Troya Juan D., DNI 17908504); 57)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 45442815, de fecha 05/08/11, por la suma de $500,00 (recibido por "Geo Juguetes"); 58)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 45442821, de fecha 09/08/11, por al suma de $1.900,00 (recibido por "Riffo"); 59)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 46978575, de fecha 09/09/11, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura DNI 26333396); 60)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires N.º 48147601, de fecha 08/10/11 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Riffo" y cobrado por Sepúlveda Laura, DNI 26333396); 61)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 49205870, de fecha 07/11/11, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 62)- cheque Nº 52963523

del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/01/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 63)- cheque Nº 52963540 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/02/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 64)- pago en el mes de febrero del año 2012, por la suma de $1.900,00; 65)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 55302440, de fecha 12/04/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 66)- pago en el mes de abril del año 2012 por la suma de $1.900,00; 67)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 56613559, de fecha 19/05/12, por la suma de $1.900,00 (cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 67)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 56613560, de fecha 24/05/12, por la suma de $600,00 (recibido por Molina y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 68)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 56613574, de fecha 14/06/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por Erbin y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 69)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 65513575, de fecha 21/06/12 por la suma de $360,00 (recibido por Molina y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 70)- Cheque de fecha 21/06/12, por la suma de $240,00 (recibido por "Molina"); 71)- cheque Nº 56613954, de fecha 18/07/12 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin"); 72)- cheque Nº 56613599, de fecha 23/07/12 por la suma de

$600,00 (recibido por "Molina"); 73)- cheque Nº 60216456, de fecha 23/08/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin"); 74)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 60216457, de fecha 23/08/12, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin p/ Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 75)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 60216472, de fecha 30/09/12 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Hermano Erbin" y cobrado por Cangelosi César DNI 31611430); 76)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66388980, de fecha 17/10/12, por la suma de $600,00 (recibido por "Molina" y cobrado por López Daniel, DNI 8397007); 77)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66388986, de fecha 29/10/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Grupo Argos Bahía SA - Casajuana Jorge); 78)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66388995, de fecha 16/11/12, abonó la suma de $600,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 79)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 66389005, de fecha 05/12/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 80)- cheque del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Nº 73210343, de fecha 27/12/12, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin y herm" y cobrado por Erbin Sandro, DNI 20903741); 81)- cheque del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Nº 73210344, de fecha 27/12/12, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin p/Molina"); 82)- cheque del

Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253482, de fecha 06/02/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 83)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253483, de fecha 06/02/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Esteban Guillermo, DNI 11343112); 84)- cheque

del Banco de la Provincia de Buenos Aires Nº 71253489, de fecha 28/02/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 85)- cheque Nº 71253490 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 28/02/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 86)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253508, de fecha 05/04/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Packaging Argentina SA); 87)- cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nº 71253509, de fecha 05/04/13 por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 88)- cheque N.º 72532429, de fecha 11/05/13 por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin"); 89)- cheque Nº 72532430 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 11/05/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 90)- cheque Nº 72532447 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 04/06/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 91)- cheque Nº 72532448, de fecha

04/06/13, por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin"); 92)- cheque N.º 72532455, del Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 29/06/13, por la suma de $1.900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 93)- cheque Nº 72532456 del Banco de la Prov. de Bs. As, de fecha 29/06/13 por la suma de $600,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112 según informe del Banco de la Prov. de Bs. As); 94)- cheque Nº 72532459, de fecha 15/07/13, por la suma de $500,00 (recibido por "Gonzalez"); 95)- cheque Nº 75517084, de fecha 23/07/13, por la suma de $3.500,00 (recibido por "Gonzalez"); 96)- cheque Nº 78340137, de fecha 31/07/13, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina"); 97)- cheque Nº 78340143 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 06/08/13, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Cangelosi César, DNI 31611430); 98)- cheque Nº 81664411 del Banco de la Prov. de Bs. As, de fecha 11/09/13 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 99)- cheque Nº 81664412, de fecha 11/09/13, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin hno medio"); 100)- cheque Nº 81664412, de fecha 24/10/2013, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 101)- cheque Nº 81664426 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 30/10/13, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 102)- cheque Nº 81664427 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 17/10/13, por la suma de $450,00 (recibido por "17 de

Octubre" y cobrado por Tévez Marcos, DNI 25947799); 103)- cheque N.º 81664433 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 22/11/13, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl DNI 14595367); 104)- cheque Nº 81664443, de fecha 30/11/13, por la suma de $800,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 105)- cheque N.º 82995898, en el mes de diciembre de 2013, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 106)- pago de fecha 17/12/13 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina"); 107)- Mediante cheque Nº 88179735 del Banco de la Provinicia de Buenos Aires, de fecha 20/01/14, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 108)- cheque N.º 88179774 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 21/02/14, por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Gili y Cia. SRL); 109)- pago en efectivo, de fecha 25/02/14 por la suma de $1.700,00 (recibido por "Marcos (Gerardo)"); 110)- cheque Nº 89216988 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 27/02/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 111)- cheque Nº 89217010, de fecha 28/03/14 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina"); 112)- pago de fecha 03/04/14 por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 113)- cheque Nº 90560859 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 09/04/14, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Gerardo" y cobrado por Martínez Héctor J., DNI 27407959); 114)- cheque

Nº 90560866 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 21/04/14 por la suma de $800,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 115)- cheque Nº 90560873 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/05/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 116)- cheque Nº 90560875, de fecha 09/05/14, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Gerardo"); 117)- cheque Nº 90560877 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 03/06/14, por la suma de $800,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 118)- cheque Nº 90560885 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 05/06/14, por la suma de $1.700,00 (recibido por "Gerardo" y cobrado por Genchi Rodrigo, DNI 35101779); 119)- cheque Nº 90560886 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/06/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Taegu Automotores SA); 120)- cheque Nº 92779370 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 02/07/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Hermano Erbin" y cobrado por Erbin Raúl, DNI 14595367); 121)- cheque Nº 92779399, de fecha 16/07/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina"); 122)- pago de fecha 15/07/14, por la suma de $1.000,00 "Viaje de suelo a pedio UOCRA" (recibido por "Gerardo"); 123)- cheque Nº 96762603 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 06/08/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Hermano Erbin" y cobrado por Erbin Raúl DNI 14595367); 124)- cheque Nº 96762625 del Banco de la

Provincia de Buenos Aires, de fecha 11/08/14, por la suma de $4.000,00 (recibido por "Mario Gonzalez"); 125)- cheque Nº 9733476, de fecha 14/08/14, por la suma de $1.500,00 (recibido por "Gerardo"); 126)- cheque Nº 97334793 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 23/09/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 127)- cheque Nº 79347506 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 27/08/14, por la suma de $900,00 (recibido por "Erbin"); 128)- cheque Nº 98654261 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 23/09/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 129)- cheque Nº 325972 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/11/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Erbin" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 130) cheque Nº 325973 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/11/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Gonzalez, DNI 22670556); 131)- cheque Nº 326000, de fecha 09/12/14, por la suma de $1.000,00 (recibido por "Erbin"); 132)- cheque Nº 2216842, de fecha 29/12/14 por la suma de $1.000,00 (recibido por "Molina"); 133)- cheque Nº 5394822 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 05/02/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 134)- cheque Nº 5808343, de fecha 18/03/15 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 135)- cheque Nº 81491012

del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 27/04/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 136)- cheque Nº 11260101 del Banco Provincia de Buenos Aires, de fecha 18/06/15 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 137)- cheque N.º 11260119 del Banco Provincia de Buenos Aires, de fecha 27/07/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 138)- cheque Nº 14701341, de fecha 28/08/15, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 139)- cheque N.º 17137990 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 04/11/15, por la suma de $6.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 140)- cheque N.º 18698792, de fecha de 10/12/15 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 141)- cheque Nº 18698820, de fecha 14/01/16, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 142)- cheque Nº 86007799 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 11/03/16 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 143)- cheque Nº 23507842 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 04/04/16, por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo DNI 11343112); 144)- cheque Nº 23507872, de fecha 26/04/16 por la suma de $3.000,00 (recibido por "Molina"); 145)- cheque Nº 13849736, de fecha 06/06/16 por la suma de $2.900,00 (recibido por "Molina"); 146)- pago en efectivo, de fecha 06/06/16 por la suma de $600,00

(recibido por "Molina"); 147)- cheque Nº 24855139 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 01/07/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 148)- cheque N.º 88492705 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 02/08/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 149)- cheque Nº 89238220 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 30/09/16, por la suma de $3.300,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 150)- cheque Nº 89763969 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 30/10/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban DNI 11343112); 151)- cheque Nº 29059353 del Banco de la Prov. de Bs. As, de fecha 25/11/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 152)- cheque N.º 90481688 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 27/12/16 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Guillermo Esteban, DNI 11343112); 153)- cheque N.º 35827717 del Banco de la Prov. de Bs. As., de fecha 09/02/17, por la suma de $3.500,00 (cobrado por Molina Guillermo, DNI 11343112); 154)- cheque Nº 39058335 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 03/04/17, por la suma de $7.000,00 (recibido por "Molina" y cobrado por Molina Bazan DNI 28068181); 155)- cheque Nº 30538613, de fecha 31/05/17, por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina"); 156)- cheque N.º 31135246 del Banco

Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 04/07/17 por la suma de $3.500,00 (recibido por "Molina"); 157)- cheque Nº 32428763 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, de fecha 19/09/17, por la suma de $11.000,00 (hecho número 22).

También se ha demostrado que en el año 2017, con motivo de una obra que la empresa Obras Abedul S.R.L. estaba ejecutando en la ciudad de Bahía Blanca, consistente en la pavimentación de 21 cuadras en calles Tres Sargentos, entre Pilmayquen y Fragata Sarmiento, Charcas entre Fragata Sarmiento y Fortazleza Protectora Argentina, San Lorenzo entre Necochea y Misioneros, al menos una persona, que revestía la condición de dirigente sindical del gremio UOCRA, le exigió al señor Luis Medús, directivo de la empresa mencionada, el pago de una suma correspondiente al 3 por ciento del valor de la obra, bajo intimidación de entorpecer la actividad normal de su empresa y paralizar la ejecución de la obra. Por el temor generado por estas conductas, los directivos de la empresa Obras Abedul S.R.L. abonaron sumas de dinero, a saber: 12.000 pesos, mediante cheque Banco Provincia de Buenos Aires número 41640077, de fecha 04/08/2017; la suma de 10.000 pesos, mediante cheque Banco Provincia de Buenos Aires número 41640099, de fecha 10/08/2017; la suma de 11.000 pesos, mediante cheque cargo Banco Provincia de Buenos Aires n° 44684883, de fecha 14/09/2017 y la suma de

11.000 pesos, mediante cheque Banco Credicoop n° 32428764, de fecha 19/09/2017 (hecho número 23).

Por otro lado se ha demostrado que en circunstancias en que la empresa "OBRAS ABEDUL S.R.L." se encontraba realizando la obra "PAVIMENTACIÓN CALLES DE PUNTA ALTA ETAPA 1" del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, en julio del 2017, al menos una persona, que revestía la condición de dirigente sindical del gremio UOCRA, le exigió al señor Luis Medús, directivo de la empresa mencionada, el pago de una suma de 15.000 pesos por mes mientras durara la ejecución de la obra, bajo intimidación de entorpecer la actividad normal de su empresa y paralizar la ejecución de la obra. Por el temor generado por estas conductas, los directivos de la empresa Obras Abedul S.R.L. abonaron 6.000 pesos mediante cheque Banco Provincia de Buenos Aires número 44684867, de fecha 14/09/2017 (hecho número 24).

Considero acreditado que durante el año 2016, en circunstancias en que se desarrollaba la obra "INTERVENCIÓN URBANA EN AVENIDA GUILLERMO TORRES DE INGENIERO WHITE - 1ra. ETAPA", la cual estaba a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por "SCHLOSSER INGENIERÍA" y "OBRAS ABEDUL S.R.L.", al menos una persona, que revestía la condición de dirigente sindical del gremio UOCRA, le exigió al señor Carlos Schlosser, directivo de una de las empresas integrantes de la UTE, el pago de una suma de 7.500 pesos por

mes, bajo intimidación de entorpecer la actividad normal de su empresa y paralizar la ejecución de la obra. Por el temor generado por estas conductas, los directivos de la UTE abonaron sumas de dinero durante ocho meses, mediante entrega de dinero en efectivo o cheques correspondientes a la cuenta corriente en pesos n° 053497/0 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 6229: 1)- número 026994902, de fecha 10/06/16, por la suma de $7.500; 2)- número 026994914, de fecha 02/08/16, por la suma de $7.500; 3)- número 026994941, de fecha 23/08/16, por la suma de $7.500; 4)- número 026994978, de fecha 27/10/16, por la suma de $7.500; 5)- número 026994999, de fecha 02/12/16, por la suma de $7.500; 6)- número 034590851, de fecha 30/12/16, por la suma de $7.500 (hecho número 30).

Recordemos ahora el hecho 25 acusado por el Ministerio Público Fiscal: entre fines del año 2016 y principios del año 2017, cuando la empresa "KARPA S.A." se encontraba realizando una obra contratada por la firma "Pampa Energía S.A." (ex Petrobrás), consistente en la COLOCACIÓN DE POLIDUCTOS QUE CONECTAN EL DEPÓSITO DE DICHA EMPRESA PETROLERA Y EL "SITIO 7" DE PUERTO GALVÁN, el señor WALTER RAFAEL PAIZ (Tercer Vocal Titular y Secretario de Organización y Asuntos Gremiales de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca), se presentó en el lugar y, luego de realizar una inspección, requirió a los representantes de la firma que se constituyan en la sede del gremio (ubicada en calle Saavedra n" 470 de esta ciudad).

En la sede gremial, el señor PAIZ, invocando directivas del Secretario General HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, le EXIGIÓ a MARTÍN DARIO SÁNCHEZ -en su carácter de presidente de la empresa constructora- una suma equivalente al TRES POR CIENTO DEL VALOR DE LA OBRA que estaban realizando, como condición para poder continuar la misma sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la UOCRA. Posteriormente, ante la insistencia de PAIZ, el empresario acordó abonar la suma total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, que sería abonada en pagos parciales, en forma mensual, durante la ejecución de la obra.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor SÁNCHEZ ABONÓ las sumas exigidas en dinero efectivo, en cinco mensualidades, que fueron recibidas por WALTER RAFAEL PAIZ (las dos primeras) y por una persona que se identificó como un hermano de éste (las tres restantes).

Para lograr la indebida disposición patrimonial, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidó al empresario con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la

realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

Con relación a estos hechos tengo en consideración lo expuesto por el testigo Martín Dario Sanchez quien contó que es Ingeniero y empresario, socio de Karpa, dedicada a obras de infraestructura en todo el país. Señaló que a Paiz lo conoció en el sindicado, a donde fueron citados por una obra que empezaba en Galván para la empresa Petrobras, una obra de cambio de ductos hacia el sitio 7; que ahí se hizo presente gente del sindicato y les dijo que llevaran documentación a la sede, a donde fueron con la documentación y ahí conoció a Paiz.

Que les dejaron la notificación en la obra, era documentación laboral referida a los empleados, la juntaron y la llevaron al sindicato en calle Saavedra sede de la UOCRA. Dijo que ahí siempre hay gente afuera, que preguntó por Walter Paiz y estaba en su oficina con más gente que hizo salir y lo hizo pasar a él, observando un escritorio grande en el medio y fotos en las paredes. Que Paiz le comentó que para poder seguir con la obra ellos pedían un 3 por ciento del monto de obra, lo cual es muchísimo, dado que a veces ellos no ganan un 3 por ciento en la obra, que esto depende de muchos factores, y por eso ese pedido era imposible de cumplir; que le dijo que no podía y Paiz le dijo que lo iba a charlar con el superior, porque eso no era para él sino para su superior, que el testigo supone que era

Monteros. Que Paiz le dijo que volviese en otro momento y así fue varias veces hasta que le pidió entregar 50 mil pesos en 5 cuotas mensuales, haciendo un total de 250 mil, por el tiempo que duró la obra, que más o menos fue ese tiempo la parte principal.

Refirió que estos pagos se los llevaba a la sede de la UOCRA, que ha ido él un par de veces y se lo dejó a Walter Paiz, y otras veces lo pasaron a buscar por la empresa, que ahí él lo dejaba en portería y lo pasaba a retirar alguien, no recuerda quien.

Dijo que los 250.000 era una suma muy importante, que esto fue en el 2016 o 2017 y pagó porque sino no podían hacer la obra, que “la versión era pagar o no hacer la obra”, y evaluaron muy seriamente no hacer la obra, porque les costaba más a ellos hacer la obra por este pedido que por lo que iban a ganar, dado que también había un pedido de descuento de la empresa Petrobrás y eran muchas cosas a evaluar.

Mencionó que pagó los 5 meses y no tuvo inconvenientes. Que no le hicieron planteo por la situación de los empleados, solo tuvo algún reclamo del personal por falta de hielo y cosas menores de ese tipo que se subsanan inmediatamente.

Que la documentación laboral la tomó Walter Paiz y no comentó nada, no recordando si la revisó.

Indicó que le dieron algo de cemento para el predio que estaban construyendo. Que esto se lo pidió Walter, y era un palet o menos que les pidió el mencionado, era un sobrante y lo fueron a retirar de la empresa algo así como De la Torre, que Walter Paiz le dijo por mensaje de texto que iba a ir este señor a retirarlo.

Exhibido por el señor Fiscal el legajo J, hojas 10 y 8, señaló que los dos últimos mensajes se los mandó Walter y la respuesta es suya -hoja 10-, y que el último mensaje de la hoja 8 él no estaba en la empresa, que él no vio a las personas que allí se mencionan, que el mensaje dice “están en la empresa los de la contra, sacalos cagando, no les des el listado de personal”. Que el mensaje es para él, pero el declarante no estaba en la empresa en ese momento.

Expresó que supone que las bolsas fueron para el centro recreativo, pero él no lo vio al destino que le dieron.

Al doctor Jara le respondió que el móvil sanitario de la UOCRA estuvo en la obra, que él no estaba en ese momento pero le pidieron un día para llevar el móvil, que no sabe qué hacía.

Al doctor Zorzano le indicó que el pago por supuesto no era voluntario, que había una ecuación económica, eso no lo esperaban, y lo pagó porque sino no podía continuar trabajando.

A la doctora Sager le contestó que Paiz no lo amenazó, que fue cordial el trato con Paiz.

Al doctor Martinez le dijo que esta reunión ocurrió con la obra recién iniciada, que no había tenido conflictos y luego no los tuvo. Que Walter se lo decía todo cordialmente, los tratos eran cordiales, pero el contenido no, decían que paraban la obra.

Por este testimonio, con más las restante prueba antes analizada, entiendo probado que entre fines del año 2.016 y principio del año 2.017, en circunstancias que la empresa Karpa S.A. se encontraba realizando una obra contratada por la firma Pampa Energía S.A., consistente en la colocación de poliductos en el sitio 7 de Puerto Galván, al menos una persona, que revestía la condición de dirigente gremial del sindicato UOCRA, le exigió al señor Martín Sanchez, titular de Karpa S.A., el pago de una suma correspondiente al 3% del valor de la obra, bajo intimidación de paralizar la ejecución de la misma y afectar el normal funcionamiento de la empresa. Por el temor generado por esta conducta, el señor Sanchez abonó la suma de 250.000 pesos, pagados en 5 cuotas de 50.000 pesos cada una (hecho número 25).

Abordaré ahora los hechos acusados como números 26, 27, 28 y 29. Paso a reiterarlos: HECHO 26): Con posterioridad a que el dirigente Humberto Arnaldo Monteros asumiera como Secretario General de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la

República Argentina, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Segundo Vocal y Secretario General Adjunto del sindicato), EXIGIO a los representantes legales de la firma "CERRA Y MORO S.R.L.", el pago de sumas de dinero que debían abonarse en forma mensual, para que la citada empresa pudiera ejecutar las obras a su cargo sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la U.O.C.R.A.

Por decisión del señor JOSÉ BERNARDO BURGOS, a partir del año 2010, dicho monto era actualizado todos los años hasta alcanzar la suma de CINCO MIL PESOS MENSUALES que fue abonada durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Como consecuencia de la extorsiva imposición, dichas sumas eran abonadas en dinero efectivo, aproximadamente entre los días 15 a 20 de cada mes, al señor JOSÉ BERNARDO BURGOS o al señor CARLOS ARIEL CARRILLO (Segundo Congresal Suplente y Delegado Gremial), en la sede de la empresa damnificada (sita en Ruta Nacional N° 3 Norte, kilómetro 678, del partido de Bahía Blanca).

El dinero fue exigido por Burgos con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General de la UOCRA).

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades

laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

HECHO 27): A partir del año 2014, con posterioridad al inicio de la obra de CONSTRUCCIÓN DE LA ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE AVENIDA CABRERA Y CALLE PILMAYQUEN DE ESTA CIUDAD, cuyo comitente era la Municipalidad de Bahía Blanca (y tramitó bajo expediente administrativo n° 417R N° 2952/2014), el señor DIEGO MARTÍN CERRA, apoderado de la firma "CERRA Y MORO S.R.L." a cargo de dicho emprendimiento, fue citado por una persona identificada como NÉSTOR "Cucha" RIVAS (colaborador de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca), a una reunión en la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de las avenidas Cabrera y Pilmayquen de esta ciudad, oportunidad en que Rivas le exigió la suma de TREINTA MIL PESOS POR MES, durante el lapso que durara la realización de la citada obra vial. Días más tarde, al no cumplir la víctima con la exigencia, el señor Rivas se constituyó en la obra y dispuso la paralización de la misma a través de una supuesta "asamblea",

comunicándole al damnificado -por intermedio del jefe de obra Raúl Porras- de manera prepotente e intimidante: "acá, hasta que no arreglemos no trabaja nadie".

En virtud de la exigencia coactiva de RIVAS, se acordó finalmente el pago de la suma de QUINCE MIL PESOS POR MES para poder continuar las tareas sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la UOCRA. En cumplimiento de dicha imposición, el señor DIEGO CERRA ABONÓ a RIVAS las sumas exigidas, en dinero efectivo, durante el periodo de seis meses -aproximadamente- que demandó la construcción de la obra.

El dinero fue exigido y percibido por Rivas con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente).

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaron a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la

realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

HECHO 28): Así también, en los años 2014 y 2015, durante la construcción de la ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS CABRERA Y PILMAYQUÉN DE LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA (cuyo comitente era la Municipalidad de Bahía Blanca, tramitando la respectiva contratación en expediente administrativo número 417R N° 2952/2014), el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS EXIGIÓ al señor DIEGO MARTÍN CERRA, como condición para que la obra pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la UOCRA, que la firma "CERRA Y MORO S.R.L." contrate los baños químicos que ofrecía la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." (con domicilio en calle Río Atuel 780 de esta ciudad), debiendo abonar el empresario como consecuencia de dicha imposición un valor superior al que por ese servicio ofrecían reconocidas empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y

personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

HECHO 29): En el año 2016, el señor JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General Adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional Bahía Blanca), EXIGIÓ al señor DIEGO MARTÍN CERRA (apoderado de la firma "CERRA Y MORO S.R.L.") las sumas de QUINCE MIL PESOS y de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, que -según le indicó el requirente- serían destinadas a FINANCIAR LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LA LISTA QUE INTEGRABAN HUMBERTO ARNALDO MONTEROS Y EL CITADO BURGOS EN LAS ELECCIONES A AUTORIDADES DE LA U.O.C.R.A., SECCIONAL BAHÍA BLANCA.

En cumplimiento de dicha imposición, el señor DIEGO MARTÍN CERRA abonó las sumas exigidas mediante los cheques del Banco Provincia de Buenos Aires, correspondientes a la cuenta corriente número 6202-03974/1 de titularidad de "Cerra y Moro S.R.L.", número 23264786, de fecha 25/04/2016, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.910,50), y número 31380627, de fecha 11/11/2016, por la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS

NOVENTA CON NUEVE CENTAVOS ($14.690,09). Este último cartular fue endosado en primer término por "LAURA BURGOS - ACQUA SERVICIOS S.R.L." y finalmente por IGNACIO IGLESIAS en su carácter de presidente de "LOGÍSTICA ALFREDITO S.A.".

Para ocultar el carácter espurio de dichos pagos, BURGOS dispuso la emisión de las facturas número 00000130 de fecha 19/04/2016 y número 00000188 de fecha 11/11/2016, correspondientes a la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." con domicilio en calle Río Atuel 780 de esta ciudad (vinculada a José Bernardo Burgos y a su familia), documentando de esta manera servicios que nunca fueron prestados a la empresa damnificada. El dinero fue exigido y percibido por BURGOS con el conocimiento y la connivencia de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, Secretario General de la UOCRA, Seccional Bahía Blanca.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su

calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

Entiendo que se ha producido por parte del Ministerio Público Fiscal prueba suficiente para tener por debidamente demostrados estos hechos, y en este sentido valoro especialmente lo expuesto en la audiencia de debate por el señor Diego Martín Cerra, quien contó que conoce a los señores Molina, Burgos y Monteros. Que es apoderado de la empresa Cerra y Moro, empresa que hace 50 años se dedica a la construcción, integrando diferentes cargos en la misma desde el 2005 hasta la actualidad.

Relató que hasta el año 2010, 2011 se trabajaba normalmente, que luego “empiezan a realizar pedidos de dinero mensuales a cambio de nada, de poder trabajar”.

Contó que se los citó personalmente a la delegación de la UOCRA, que los citó José Burgos, y se realizó una reunión en su oficina donde dijo que “…había que ponerla, nos pidió un monto colaboración y terminamos arreglando por 3.000 pesos que le pagaba mensualmente, que luego se fue actualizando anualmente hasta llegar a los 5.000 pesos…”, que esto no era colaboración había que pagar, sino te volvían loco, como le pasó a Carcereny que no lo dejaban trabajar.

Refirió que por ejemplo, con el asfalto, si te paran un camión cargado, se enfría y no sirve para trabajar, si hacen una asamblea con el

camión cargado se genera un perjuicio económico muy grande, y por eso era mayor el perjuicio que pagar esa suma, por ello se pagaba esa suma y trabajaba. Que la suma era el jornal quincena de un oficial especializado, eso se lo daban a Burgos mensualmente. Que se pagó desde el 2010 hasta el 2017 cuando empezó todo este tema y se pagaba mensualmente.

Señaló que en dos oportunidades se lo entregó personalmente a Burgos y sino concurría Carlos Carrillo a retirarlo de la oficina. Que una vez se lo llevó al gremio, salió afuera y no le gustó que le pasara el sobre así desde el auto; que otra vez le pidió que fuese a calle Alvarado entre 19 de mayo y 11 de abril y ahí lo estaba esperando y le entregó el sobre desde el auto.

Refirió que si además la empresa tenía un trabajo o una obra más grande o en una UTE había que hacer otro aporte extraordinario.

Que el sobre que le entregaba tenía dinero en efectivo. Que él lo preparaba, le ponía el dinero, le escribía Burgos, Carrillo o UOCRA, y luego su empleado Adriano se lo entregaba cuando iban a la oficina. Que Carrillo llamaba preguntando si estaba la documentación y lo pasaban a retirar. Que si se atrasaban recibían los llamados, que por eso no se atrasaban porque conocían las consecuencias.

Refirió que Burgos fue empleado de la empresa, trabajó uno o dos años con ellos, pero no tenía trato con él y luego pasó a la actividad sindical.

Que su empresa integró una UTE junto con Coince, Abedul, Arquitectura e Ingeniería y Carreteras 2000, para ejecutar una obra de la provincia en la ruta tres vieja y otras obras de bacheo, y ahí les pidieron 100 mil pesos y el Ingeniero Tepliz consiguió negociar en 40 mil que es lo que terminaron pagando, que hacían un aporte cada empresa a la UTE para poder pagarlo. Que esto era muchísimo dinero y era una obra que duró unos 10 meses, durante los cuales se abonó esa cifra, por lo que son 400 mil pesos que incluso hoy en día es un montón si se tiene en cuenta que esto ocurrió en el 2014 aproximadamente.

Dijo que el señor Tepliz es de la empresa Coince, que la UTE la administraba Carreteras 2000 y Tepliz era el encargado de tratar con el gremio.

Contó que él estuvo en la reunión con Burgos en su oficina, que estaba Ferrero, Tepliz, cree que Medús de Abedul y ahí se les hizo el pedido de 100 mil pesos, que ellos le contestaron que no porque era una locura imposible de pagar, sobre todo porque la provincia paga a los 6 meses. Que ellos sabían lo que sucedía si no pagaban, no tenían que apretarlos porque sabían que tenían que arreglar, que esto "…no fue voluntario, jamás fue voluntario, por favor…". Que luego el señor Tepliz les

dijo que había llegado a 40 mil, y lo festejaron, entre comillas acotó, porque al lado del pedido inicial se consideraba un buen arreglo. Que posteriormente ellos le llevaban el dinero a Tepliz, la parte de su empresa, y el mencionado entregaba el dinero. Que esto fue durante lo que duró toda la obra, unos 6/8 meses por lo menos entre el 2014 y 2015.

Recordó que Burgos decía siempre la frase "…el que avisa no traiciona…", eso para referirse a las consecuencias que uno podía tener. Que esto se lo dijo varias veces.

Expresó que un una obra de la rotonda de calle Pilmayquen, pagaban la mensualidad a Burgos, y como eso era una obra municipal tendría que estar cubierta; pero igual lo llamó un señor Rivas, alias Cucha, que lo citó en la estación de servicio y apareció junto con otro hombre grandote y ahí le pidió por el tamaño de la obra 30 mil pesos, que él le contestó que no iba a pagar por eso, y Rivas le dijo que eran 30 mil mensuales, que hablara con Burgos. Que más tarde lo llamó el señor Porras, jefe de la obra y le avisó que les habían parado la obra, que uno de los sujetos que fue se subió y apagó una máquina y que les dijo que hasta que no arreglaran no trabajaba nadie. Que ante esto lo llamó a Rivas y accedió al pago de 15 mil mensuales para seguir la obra, la que duró 7 u 8 meses. Que ese dinero se dejaba en un sobre, que no recuerda si le escribía al sobre Rivas, pero que sí lo iba retirar él a la oficina.

Expuso que luego de terminada la obra, al tiempo, Burgos lo llamó para avisarle que Rivas no manejaba más esa zona, que la manejaba Gutierrez y que se lo iba a presentar, pero como su empresa no tomó ningún trabajo más en esa zona, no le presentaron a Gutierrez.

Que fue Porras, su empleado y jefe de obra, quien le contó que estaba parada la obra, que estuvo parada una hora más o menos hasta que habló con Rivas y arregló. Que el declarante trataba de solucionar el problema lo antes posible por los perjuicios de tener la obra parada, ya que se le generan problemas como apuntó con el asfalto que se seca, y otros perjuicios.

Señaló que le exigieron contratar en esa obra los baños de Acqua, que fue la única vez, cree que se tuvieron un mes o mes y medio y hubo problemas con la limpieza, se lo manifestó a Rivas que los empleados no estaban contentos y luego los cambiaron. Que fue Rivas quien le exigió esos baños, que la empresa Acqua era de la hija de Burgos, y esto lo sabe por la facturación, porque antes de ser Acqua facturaba como Estefanía Burgos.

Contó que en otra oportunidad les pidieron un aporte extraordinario para la campaña de reelección de Burgos y Monteros, que le pidieron la suma de 15 mil pesos y él se negó porque era mucho dinero y no lo podía tener en efectivo y sacarlo de la empresa; que ahí Burgos le dijo que le podía hacer un cheque y él le daba una factura, y entonces les

mandaron una factura de Acqua y la empresa le hizo el cheque, que la factura era para justificar esa salida de dinero. Que al principio además se negó para ver si podía zafar, pero ellos insistieron y le dijeron que le mandaban una factura y los tuvo que pagar porque sabían las consecuencias que se venían si no pagaba. Fue una factura de la empresa Acqua contra entrega de un cheque.

Exhibido que le fue el legajo fiscal H, hojas 29/30, señaló el testigo que observa la factura y el cheque al que hiciera referencia, que el monto del cheque es un poco menor por las retenciones de ganancias e ingresos brutos. Que por esa época un baño costaba mucho menos, se pagaba 1.500 por mes por un baño con el servicio de limpieza. Que los 15 mil del cheque no respondían al concepto de la factura.

Relató que varias veces les pedían equipos para tareas en el predio de la UOCRA, para hacer movimiento de suelo, cosas que hacían los fines de semana, y esto era un gran costo, dado que una máquina cuesta más o menos 5.000 pesos por hora y si se trabajaba unas 10 horas el costo era de 50 mil; que esto no se hacía de buena gana ni de voluntad, había que hacerlo. Lo mismo cuando pidieron el asfalto, y ahí hubo varias empresas involucradas, se realizó una reunión en la CGT, donde estaba Vial Agro, Ingeniería y Arquitectura, Cerra y Moro, Abedul y cree que CB 1. Que estaban en una mesa rodeados de gente de la UOCRA y se les pidió colaborar con el asfalto, que era una obra muy grande y cara. Que era

"…una clásica que te rodeaban con una cantidad de gente que te asustaba, no porque te dijeran nada, la situación era intimidante de por sí…". Que se les pidió colaborar, dijeron que sí, pasó el tiempo y como la colaboración no se hizo efectiva lo volvían loco a Evangelista, lo apretaban y por eso luego hicieron el trabajo. Que se hizo movimiento de suelo y carpeta asfáltica, obra de mucho dinero si se tiene en cuenta el costo en la actualidad de una cuadra de 100 metros es 1.7 millón o 1.8 y eso han sido unos 200 metros o más, que por eso es un monto elevado. Que su empresa mandó bateas y algunos viajes de piedras para hacer la carpeta asfáltica, Vial Agro puso los equipos, Carreteras la mezcla, que colaboraron todas las empresas entre sí para hacerlo. Que no sabe quién aportó el asfalto, puede ser Ingeniería y Arquitectura o Carreteras 2000, que Evangelista fue el que administró esa obra y debe tener más precisiones. Que la gente de la UOCRA no se hizo cargo de ningún costo de esto. Que en la reunión en la CGT estaba Burgos y muchos más, que no recuerda bien con precisión quienes estaban. Que ha participado de otras reuniones con la misma gente.

Dijo que Monteros y Burgos era la lista oficial para esa campaña que aportó. Que Burgos lo llamó por teléfono diciéndole que había que colaborar, y como los tenían amenazados, accedieron a los pedidos porque sabían las consecuencias, una parada de una obra era un problema, por eso accedían. Que no recuerda quien llevó el cheque, supone que él, y

no sabe quién acercó la factura a la empresa, que pudo haber llegado por mail.

Expresó que cuando los veían trabajando en algún lado les pedían que mandasen alguna máquina, tosca para una calle, que recuerda de una vez que le indicaron algo para un terrero en calle Suiza, que Burgos se lo dio en una tarjetita que entregó en la Fiscalía. Que han sido varios los pedidos cuando los veían trabajando cerca.

Contó que para la época de las elecciones les exigieron el pago de un premio, que los citaron a la CGT un jueves por la tarde, que ahí estaba Gurrado, gente de Abedul, Tepliz y les pidieron 8.000 pesos como bono de fin de año, que ellos contestaron que no, que ofrecieron 2000 y no se pusieron de acuerdo. Que más tarde los llamaron y les pidieron de ir al Ministerio de Trabajo al día siguiente, y cuando llegó al Ministerio lo llama el delegado que le habían avisado que tenían la orden de parar las obras, que no cargara los camiones, y por eso negociaron con todas las obras paradas, y ahí Paiz les dice que arreglaran ahora porque luego ellos se juntaban con las empresas de afuera y si se acordaba más ése iba a ser el piso; que por eso se arregló por 4 mil, que en ese momento su empresa estaba sin trabajos importantes y fue un gran perjuicio económico, pero tuvieron que arreglar igual para conservar ese poquito trabajo.

Refirió que ellos pagan los sueldos, aguinaldos, horas extras, distancia, plus cuando es hormigón, pero no tenían previsto premio de fin de

año, que no se pagaba eso habitualmente. Que en este caso lo tuvieron que hacer porque la obra estaba parada, los costos que eso implicaba ya los comentó. Que en ese momento estaban haciendo un cordón cuneta muy chico y manteniendo a toda la planta, que por eso necesitaba 4 empleados pero estaba manteniendo los 20, por lo que cargar con el premio se les hacía muy difícil.

Reiteró que fue Paiz quien les dijo de arreglar antes de acordar con las empresas de afuera, que en la reunión también estaba Molina y José Burgos, Evangelista, el abogado de esa firma, Roberto Gaveglio y Andrés Medús, Mauricio Chicon y el declarante de Cerra y Moro, que esta reunión fue en el Ministerio de Trabajo. Que en la reunión del día anterior en la CGT estaban Paiz y Burgos. Que Paiz habló cuando entraron a la reunión, dijo que luego tenían la reunión con las empresas de afuera y ahí se cerró en 4000 y tuvieron que afrontar el gasto. Que luego del arreglo volvieron a trabajar normalmente, su delegado recibió el llamado de volver a trabajar. Que les habían comentado que tenían que pagar los aguinaldos, que les ofrecieron pagar los 2.000 antes del aguinaldo, pero no accedieron, y tuvieron que pagar las empresas los 4.000.

Al doctor Jara le contestó que en el Ministerio de Trabajo el delegado estaba, no entró a la reunión, que sólo ingresó después para firmar el acta, y no le manifestaron nada al delegado. Que él no fue con

abogado, que fue con su socio, que había un abogado de Ingeniería y Arquitectura pero no recuerda si dijo algo en la reunión.

Que la UOCRA tenía un móvil sanitario que fue a la obra una vez para aplicar vacunas, pero no le pidieron a él dinero para eso.

Que el dinero mensual no le dijeron para qué era, que no sabía que hacían con el dinero.

A la doctora Stacco le respondió respecto del arreglo de la UTE que no observó cuando Tepliz entregaba la plata.

Corrobora parte de los dichos del señor Cerra, lo declarado en la audiencia por el señor Raúl Alberto Porras, persona que al declarar como testigo indicó que conoce al señor Burgos porque trabajó como empleado y él es encargado.

Expresó que trabajó como encargado de obra en la rotonda de Pilmayquen. Que de ahí recuerda un episodio donde aparecieron un día, dirigidos por una persona que él no lo conocía pero que le dijeron que le decían Cucha y era de apellido Rivas, quien les paró un tractor y les dijo que tenían que parar las máquinas y que la obra no seguía adelante hasta que recibieran una llamada. Que a él le dio bronca pero acató. Que le avisó de esto a Diego Cerra y él se comunicó con estas personas. Que luego que hablaron la cosa se normalizó y volvieron a las tareas. Que él hace 28 años que trabaja en las obras y siempre se dice lo mismo, que el declarante no lo

presenció, pero le dijeron que se pagó lo que había que pagar y siguieron las cosas.

Sostuvo que siempre tenían contratada a la empresa Bassani para la provisión de baños, pero en esa obra tuvieron otro servicio, algo como Eco, que eran baños plásticos químicos pero de menor nivel que Bassani, más simples y su mantenimiento era escaso, por ejemplo en Bassani pasan una vez por semana y acá pasaban una vez cada 15 días o más y casi no se limpiaban. Que este cambio de servicios de baño fue cuando empezaron a trabajar en la rotonda.

Al doctor Martinez le respondió que no le consta el pago, que él se termina enterando por otra persona, el dueño de la empresa, que es quien dice que se paga, pero que él no lo sabe. También señaló que luego de ese paro no pasó más que eso en la obra.

También con relación a estos hechos debe tenerse en consideración, para reconstruir la existencia de los mismos, lo señalado por el testigo Adriano Giusti, quien contó que trabaja en la empresa Cerra y Moro en tareas administrativas, contables y de facturación. Que conoce al señor Burgos por haber trabajado en esa empresa.

Dijo que le entregó sobres a la gente de la UOCRA; que su jefe Diego Cerra le daba un sobre y le decía que iba a ir gente de la UOCRA y que se lo entregara, que generalmente le decía que venía Carrillo. Que le

consulté a la persona que se presentó si era Carrillo y le hizo entrega del sobre. Que en alguna oportunidad apareció con la campera con el logo estampado de la UOCRA, que sabía que había dinero por comentarios de su jefe, pero los sobres los preparaba Diego Cerra y esto era una vez al mes.

Al doctor Martinez le indicó que esto era una vez al mes por un año, entre el 2015 o 2016, por ahí. Que puede ser que no haya sido la entrega en algún mes y luego eran dos veces en el mismo mes. Que la empresa tiene obras durante todo el período, no eran obras específicas.

Con estos testimonios, y la demás prueba analizada con relación al hecho uno, entiendo probado que en esta ciudad de Bahía Blanca, con posterioridad al año 2010, al menos dos personas, que revestían la calidad de dirigentes del gremio UOCRA, le exigieron a los titulares de la firma Cerra y Moro S.R.L., en particular al señor Diego Cerra, la entrega de una suma mensual, que comenzó siendo de 3.000 pesos, hasta llegar a la cifra de 5.000 en el año 2017, bajo intimidación de entorpecer la normal actividad de la empresa, en las obras que ejecutasen en esta ciudad de la zona. Resultado del temor generado por estas conductas, los encargados de la empresa abonaron mensualmente las sumas que les eran exigidas, hasta el año 2017 (hecho número 26).

También se ha demostrado que a esta misma empresa Cerra y Moro S.R.L., en una obra ejecutada a partir del año 2014, consistente en la

construcción de la rotonda en la intersección de la avenida Cabrera y la calle Pilmayquen, de Bahía Blanca, a su titular, el señor Diego Cerra, se le exigió el pago de 30.000 pesos por mes, bajo intimidación de paralizar la ejecución de la obra y afectar el normal desenvolvimiento de la empresa. Por el temor generado por la situación, los titulares de la firma abonaron la suma de 15.000 pesos por mes durante el plazo de ejecución de la obra, unos seis meses (hecho número 27).

Por otro lado se acreditó que entre los años 2014 al 2015, durante la concreción de la obra de la rotonda de calles Cabrera y Pilmayquen de Bahía Blanca, al menos una persona, dirigente del gremio UOCRA, le exigió al señor Diego Cerra, titular de la empresa Cerra y Moro S.R.L., la contratación de los baños químicos que ofrecía la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L." (con domicilio en calle Río Atuel 780 de esta ciudad), bajo intimidación de que se vería entorpecido el normal desarrollo de la obra de no accederse a ello; siendo por eso contratado este servicio por parte de la empresa durante un par de meses (hecho número 28).

Probado está además que en el año 2016, en esta ciudad de Bahía Blanca, una persona, dirigente gremial de la UOCRA, le exigió al señor Diego Cerra, integrante de la firma Cerra y Moro S.R.L., la entrega de una suma de dinero, unos 15.000 pesos, como aporte para la campaña por las elecciones que se llevarían a cabo, bajo intimidación de entorpecer la normal actividad de la empresa. Como resultado del temor ocasionado al

señor Cerra, la empresa a la que pertenece libró el cheque número 31380627, de fecha 11/11/2016, por la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON NUEVE CENTAVOS ($14.690,09), cartular que fue endosado en primer término por "LAURA BURGOS - ACQUA SERVICIOS S.R.L." (hecho número 29).

Pasando al análisis de los hechos 32 y 33, corresponde recordar la descripción que de los mismos formuló la acusación del Ministerio Público Fiscal. Se sostuvo por esa parte: HECHO 31): En el año 2015 -aproximadamente-, cuando la empresa "ENTEGRO S.U.R.L.S.E." se encontraba realizando las tareas de REPARACIÓN DE LA TURBINA 29 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA LUIS PIEDRABUENA de INGENIERO WHITE -obra que comenzó durante el mes de septiembre de 2015 y finalizó a comienzos del año 2016-, los señores HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y SERGIO DANIEL VÁZQUEZ (Secretario General y Primer Vocal Titular de la UOCRA Bahía Blanca, respectivamente), EXIGIERON a los señores MIGUEL IWANYNIUK y RUBÉN EDGARDO ALMADA (representante legal y administrador de la firma "Entegro S.U.R.L.S.E."), la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, como condición para que la obra pudiera continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la U.O.C.R.A.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor MIGUEL IWANYNIUK PAGÓ al señor VAZQUEZ la suma exigida en dinero efectivo,

mediante dos entregas, una de las cuales se concretó en la estación de servicio YPF, sita en calle en calle Buenos Aires número 1423 de la ciudad de Bahía Blanca.

Asimismo, MONTEROS y VÁZQUEZ (Secretario General y Primer Vocal Titular de la UOCRA Bahía Blanca, respectivamente) EXIGIERON a MIGUEL IWANYNIUK (representante legal de "ENTEGRO S.U.R.L.S.E.") ajustar los salarios de los empleados de dicha empresa que se encontraban realizando tareas reparación de la TURBINA 29 DE LA CENTRAL PIEDRABUENA DE INGENIERO WHITE, a las escalas salariales del acuerdo marco que había suscripto la UOCRA (representada por Guillermo Molina y Sergio Vásquez) con otras empresas, imponiendo de esta manera un indebido aumento de las remuneraciones de los empleados, las cuales de esta manera superaban las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaron a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedír que la empresa cumpla con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la

realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

HECHO 32): Posteriormente, en circunstancias en que la firma "ENTEGRO S.U.R.L.S.E." se encontraba realizando las tareas de REPARACIÓN DE LA TURBINA 30 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA LUIS PIEDRABUENA de INGENIERO WHITE (obra que comenzó a mediados del año 2016 y finalizó a comienzos del año 2017), los señores MARIO MATÍAS GONZÁLEZ y PABLO DAVID GUTIERREZ (Delegado Gremial y Colaborador Gremial y Secretario de Difusión y Actas de la U.O.C.R.A., respectivamente), quienes invocaban la representación y órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General del sindicato), EXIGIERON a los señores MIGUEL IWANYNIUK y RUBÉN EDGARDO ALMADA (representante legal y administrador de la firma "Entegro S.U.R.L.S.E.", respectivamente) la suma total de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000), para que la obra se desarrollara sin inconvenientes ni planteos por parte de los dirigentes de la U.O.C.R.A. La espuria exigencia de los sindicalistas se concretó en reuniones que se realizaron en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) - Seccional Bahía Blanca, oportunidad en que ALMADA pidió que aceptaran el pago en cuotas para evitar a la citada compañía perjuicios patrimoniales aún mayores.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor MIGUEL IWANYNIUK (representante legal de "Entegro S.U.R.L.S.E."), abonó la suma exigida mediante tres entregas de dinero efectivo: la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000) en la sede de UOCRA QUILMES y, posteriormente, las sumas de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) y DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000) en Bahía Blanca, las cuales fueron recibidas durante el desarrollo de la obra por GONZÁLEZ y GUTIERREZ. Así también, MARIO MATÍAS GONZALEZ y PABLO DAVID GUTIERREZ (Delegado Gremial y Colaborador Gremial - Secretario de Difusión y Actas de la U.O.C.R.A., respectivamente), siguiendo directivas de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, EXIGIERON a RUBÉN EDGARDO ALMADA, que ajustara los sueldos de los trabajadores de la firma "ENTEGRO S.U.R.L.S.E.", que por entonces realizaban tareas de reparación de la turbina 30 de la CENTRAL PIEDRABUENA, a las pautas de dicho acuerdo, imponiendo nuevamente un indebido aumento salarial. Durante la reparación de la referida turbina 30, los citados imputados exigieron a ALMADA la contratación de trabajadores que no contaban con la capacitación técnica necesaria para realizar las obras que "ENTEGRO SURLSE" se encontraba desarrollando en la central termoeléctrica.-

HECHO 33): Finalmente, durante la obra indicada y relativa a la reparación de la turbina 30 en la TERMOELÉCTRICA LUIS

PIEDRABUENA, MARIO MATÍAS GONZÁLEZ y PABLO GUTIERREZ GUTIERREZ (Delegado Gremial y Secretario de Difusión y Actas -respectivamente), quienes actuaban siguiendo órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General de la U.O.C.R.A.), EXIGIERON a MIGUEL IWANYNIUK y RUBÉN EDGARDO ALMADA, que la firma "Entegro S.U.R.L.S.E." contrate el servicio de transporte para los empleados a la empresa "FLOR DE LIRIO S.R.L.", y el servicio de viandas a la empresa "STRADI VIANDAS S.A." y, posteriormente, a "ZABALLA ARIEL EDGARDO".

Dichos servicios fueron impuestos como condición para que la obra pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos de parte de los dirigentes de la U.O.C.R.A., debiendo en razón de ello, abonar la firma damnificada un costo superior al valor que por esos servicios ofrecían otras empresas de la plaza comercial de Bahía Blanca.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (quema de cubiertas, daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos

previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

Tengo en consideración para tener por debidamente demostrados estos hechos lo expuesto por el testigo Rubén Edgardo Almada en cuanto dijo que conoce al señor Molina un poco y al señor Gonzalez, y que es administrador de Entegro SRL, empresa griega que reparaba las turbinas 29 y 30 de la central Piedra Buena.

Expuso que esas obras se hicieron entre el 2015 y el 2017. Primero la turbina 29 a fines del 2015, obra que se hizo hasta finales del 2016; y a los dos o tres meses comenzó la reparación de la turbina 30. Que las reparaciones eran para cambiar los componentes, el eje y varias partes, todo lo cual requiere personal especializado, dado que los planos están en ruso y los empleados son especializados, siendo el personal ruso convocado porque así estaba dentro de la garantía. Que había unos 40 extranjeros y unos 100 empleados argentinos, y había que desmantelar y volver a armar con componentes nuevos.

Relató que en el 2.015 no hubo trato con la UOCRA, que cuando arrancaron con los trabajos en la turbina 29 se contactó el director de la empresa y luego el declarante se enteró que aportaron 400.000 en dos cuotas, que esto era un canon como para trabajar tranquilo, que el sindicato no los moleste. Que esto se le requirió a Miguel Iwanyniuk y se lo pidió

Monteros, y fueron dos cuotas de 200.000 cada una. Que el pago se efectuó en la estación de servicio que está en calles Maldonado y Don Bosco al señor Sergio Vazquez autorizado por el señor Monteros.

Refirió el testigo que estaba en la camioneta y por eso lo observó; y en el segundo pago también fueron los dos, junto a Iwanyniuk y se le hizo la entrega a Sergio Vazquez. Que esos pagos se acordaron con el señor Monteros, fueron a requerimiento de él.

Expuso que además les solicitaron utilizar el comedor, el transporte y la ropa de empresas que ellos les indicaron. Que para el comedor compraban en calle Charlone, que ropa no acordaron porque ya estaba contratado con una empresa de Buenos Aires, y en el transporte se contrató a Flor de Lirio. Que Monteros fue quien pidió que se contratara eso, que les impuso las empresas, no se podía contratar en otro lado, aun cuando se habían evaluado varias empresas de transporte de costo menor. Pero igual no se podía había que usar esas empresas.

Comentó que el costo de las viandas y del transporte eran un 200 por ciento arriba de lo que cotizaban otras empresas, que Flor de Lirio cotizaba a 1500 cuando otras lo hacían a 500, y las viandas eran 120 el costo afuera de la planta, pero había otro problema que era que la concesión era dentro de la central, si se quería comprar viandas afuera no se podía, había que usar el servicio de adentro. Estos servicios eran obligatorios por el gremio y les salían aproximadamente 250 pesos dentro

de la planta, cuando afuera salía unos 100 pesos, más el costo de un local acondicionado para comedor.

Expuso que a Sergio Vazquez le dicen Queco, que él acompañó a Iwanyniuk a la estación de servicio, vio la suma de dinero porque la retiró el declarante del banco a pedido de Iwanyniuk, y éste la llevó en un sobre o bolsa de papel madera de los grandes, envuelto.

Le dijo al Fiscal que cuando comenzó la reparación de la turbina 30 el trato fue con Pablo Gutierrez y Mario Gonzalez. Que antes se produjo una reunión en el sindicato con Monteros, se habían convocado a todas las empresas, no solo a ellos, y tenían un turno para ir a la reunión que era individual, donde les plantearon que el canon era de 750.000 por inicio de obra, porque los anteriores 400.000 no los habían pagado; y ahí ellos dijeron que sí lo habían pagado y hubo como un enojo diciendo que no habían recibido nada y que por eso ahora el canon era 750.000 pesos. Que además les dieron una lista de personal argentino para tomar en la obra. Que ellos se opusieron porque tenían el personal adecuado y no podían conseguir de esa lista operarios en tecnología pesada.

Expuso que luego de esta reunión él le comentó al personal de la empresa lo que les habían pedido, que los echaran, y ahí uno lo comentó en el sindicato y luego le impidieron al testigo entrar a la planta y lo amenazaron en su casa particular.

Que por este motivo la empresa le alquiló una oficina en calle Fitz Roy porque tenía prohibido el acceso a planta y además por eso luego fueron a negociar, coordinaron una reunión en la CGT en calles Mitre y Rodríguez con Gutierrez y Gonzalez donde se negociaba el dinero y la dotación, y llegaron a un punto que el dinero se pagaba en tres cuotas de 250.000 cada una, que el personal lo podían mantener pero que había que ingresar a 20 personas de un listado que les daba la UOCRA, y que luego acordaron que ellos contrataban a 10 o 15 y otros 10 la central termoeléctrica.

Que por esto tomaron 10 personas, que sólo un par trabajó en la obra y el resto hacía quehaceres sindicales. Que luego tuvieron muchos inconvenientes porque les pedían que acomodaran los sueldos muy por encima del convenio y ellos ya pagaban por arriba del convenio, no obstante lo cual querían más aumento, a un valor que no sabe si gana un oficial de convenio al día de hoy. Que por esto hubo rispideces porque eran valores que excedían el presupuesto de la obra.

Apuntó que como han reflejado las noticias se sabe que tuvieron piquetes en el acceso a planta, donde cortaban unas 50 o 60 personas, de las cuales cree que sólo un 10 por ciento era personal propio.

Que se fue avanzando en la obra, tuvieron muchos parates, pararon varias veces, se terminó más o menos, la empresa tuvo inconvenientes con la Central Piedra Buena, se dio de baja al personal y por

la certificación que quedaba la empresa dejó que lo pagara la Central Piedra Buena.

Indicó que contrató trabajadores indicados por el gremio, que el declarante trataba con Gonzalez y Gutierrez, que ellos eran los que les decían las pautas que tenían que seguir para poder continuar con las tareas normalmente, sino les paraban la obra, no los dejaban trabajar. Que ese personal que se contrató no era especializado, no conocía de turbinas, no sabía ruso. Que unas cuantas personas de esas directamente no iban a la planta, hacían trabajos en un predio del sindicato, y esto está demostrado por la ficha magnética de personal la que indica que no iban, y a estas personas le pagaban una quincena con horas normales básicas.

Relató que en la reunión de la CGT cuando le piden 750.000 estaban Gonzalez y Gutierrez, que primero el pedido fue solo de Monteros a quien le dijeron que lo iban a estudiar porque era excesivo y luego acordaron el pago de tres cuotas de 250.000 cada una. Que en esa primera oportunidad la reunión fue solo con Monteros y esa vez, a las empresas que habían sido citadas al gremio, las hacían pasar de a una a la oficina de Monteros. Que a ellos los recibieron Gonzalez y Gutierrez y luego los hicieron pasar con Monteros.

Refirió que a la segunda reunión fue invitado por Gonzalez y Gutierrez porque habían pedido una reunión para hacer una contrapropuesta y había que dar respuesta al pedido que habían recibido.

Que la empresa no quería pagar nada, pero la presión era tal que tenían que llegar a un arreglo para poder trabajar, que como le pagaban en dólares a los extranjeros mientras estaba la planta parada las pérdidas eran importantes.

Contó que a Gonzalez y Gutierrez le pidieron pagar menos, que estos consultaron con Monteros y luego dijeron que lo único que podían hacer era mantener el monto pero que fuera en cuotas, que el monto no se modificaba.

Relató que mientras la empresa estaba parada no podían iniciar tareas porque no se los permitía el sindicato, que pagaron horas caídas al personal argentino para que vaya y cumpla horario.

Dijo que las cuotas de 250.000 las pagó Iwaninuk y él no tuvo participación, desconoce quien las recibió, aunque por comentarios cree que fue Monteros, pero no lo puede afirmar.

Que cuando le alquilaron una oficina en el centro de la ciudad fue porque no le permitían ingresar a la planta, el motivo era porque querían querer hacer un cambio de personal, echar al contratado y poner los que acercaba la UOCRA, y además, para entorpecer las negociaciones, porque el declarante se lo había comentado al personal cuando yo les explicó lo que ocurría y fue ahí que lo filmó uno que lo acercó a la UOCRA.

Apuntó que luego de esto le hicieron un piquete en su vivienda, por lo cual hizo una exposición, fue a denunciar y en la comisaría sexta le tomaron una exposición por amenazas. Que el día del piquete no estaba el testigo en su casa, sino su señora y sus hijos, y hasta ahí se acercaron unas 40 o 50 personas reclamando su presencia y haciendo reclamos por diferencias de haberes que la empresa no había pagado. Que esto no era verdad y no era un reclamo legítimo. Que según comentarios varios de los sujetos tenían la campera del sindicato y alguno era gente conocida del gremio.

Refirió que al personal contratado por imposición del gremio y que no iba a trabajar le dejaban los recibos con el dinero en el sindicato al señor Gutierrez. Que cree que a Gonzalez no le ha dejado dinero.

Relató que un montón de veces lo han llamado Gonzalez y Gutierrez para reclamarle el pago de los 250.000 pesos, pero como los pagos los hacía Iwanyniuk que vivía en Lanús, se demoraban y el declarante coordinaba para que cuando viniese a Bahía los efectuase. Reiteró que no los presenció, aunque sí le dio el dinero a Iwanyniuk dado que él lo retiró del banco.

Que también hacía los pagos a los proveedores, entre ellos Flor de Lirio y por el comedor.

Indicó que en los primeros pagos por la reparación de la turbina 29 sí acompañó a Iwanyniuk porque el mencionado no conocía la ciudad, además de que el declarante conocía a Vazquez de otras obras, y en la segunda oportunidad lo acompañó porque estaba utilizando un vehículo de la empresa y por eso lo llevó a realizar el pago y luego a donde se alojaba Iwanyniuk.

Al doctor Jara le respondió que no le dijeron para que era esa plata; que no preguntó para que era; que el pago lo entregó Iwanyniuk y él sólo lo acompañó en las dos primeras veces de la turbina 29.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que en la primer reunión con Monteros, dónde éste les dijo que le tenían que entregar 750.000, fue que Monteros les manifestó que no había cobrado los 400.000 anteriores. Acotó que ahí luego estaba el rumor que Vazquez se había quedado con ese dinero; pero en definitiva el aumento de la cuota era por la falta de pago que les adjudicaban a la empresa. Que en esa primera reunión estaban en la oficina Monteros, Iwanyniuk y el declarante, que hasta ese despacho los llevaron Gonzalez y Gutierrez. Que no dieron respuesta en esa primera reunión. Que la exigencia de los 750.000 fue de Monteros y no sabe a quien le hizo los pagos Iwanyniuk.

Al doctor Zorzano le dijo que contraprestación del gremio o de las personas que pidieron el dinero no se recibía, la contraprestación era

trabajar tranquilo y que no paren la obra, “era o pagás o no trabajás, que se manifestaban de esa manera”.

Corrobora lo relatado por el testigo Almada lo expuesto por la señora Sandra Lucía Dolabaras, quien contó que es la esposa del señor Almada, quien trabaja para la empresa Entrego. Expuso que era habitual escuchar comentarios y ver en la televisión que la gente de la UOCRA hacía piquetes en la planta, pero no tuvieron problemas hasta un hecho puntual, cuando se presentó un grupo de la UOCRA en su casa a reclamar por unos pagos.

Indicó que eran unas cuantas personas en la puerta a los gritos, por lo que luego su marido hizo una exposición en la comisaría sexta de Villa Rosas. Que serían entre 20 a 30 personas o más y tenían las camperas que los identificaban como de la UOCRA, que estaban exaltados por unos pagos porque decían que no eran lo que habían arreglado; habiéndole generado temor la situación.

A partir de estas declaraciones testimoniales, con más lo que se desprende de la prueba ya detallada y analizada en relación al hecho uno, entiendo demostrado que cuando la empresa Entegro S.R.L. estaba ejecutando la reparación de la turbina número 30 de la central termoeléctrica Piedra Buena, a partir de mediados del año 2016, al menos tres personas, integrantes del gremio UOCRA, le exigieron a los señores Miguel Iwanyniuk y Rubén Edgardo Almada, integrantes de la firma mencionada, el pago de

750.000 pesos, bajo intimidación de paralizar las obras y entorpecer la normal actividad de la empresa en la ejecución de la misma. Producto del temor generado por la situación, el señor Iwanyniuk abonó la suma requerida (hecho número 32).

Por otro lado, se encuentra acreditado que durante los trabajos de reparación de la turbina número 30, al menos tres personas dirigentes del gremio UOCRA, le exigieron a los señores Miguel Iwanyniuk y Rubén Edgardo Almada, integrantes de la firma Entegro S.R.L., la contratación de la empresa de servicio de transporte para los empleados denominada Flor de Lirio S.R.L. y el servicio de viandas a las empresas Stradi Viandas S.A. y Zaballa, Ariel Edgardo, bajo intimidación de paralizar las obras y entorpecer la normal actividad de la empresa en la ejecución de la misma. Producto del temor generado por la situación, los mencionados contrataron los servicios de las empresas Flor de Lirio S.,R.L. y Stradi Viandas y Zaballa Ariel (hecho número 33).

Paso ahora a analizar el hecho número 34, descripto por la acusación de la siguiente forma: HECHO 34): Durante el año 2017, cuando la empresa "GEOMAC S.A." se encontraba realizando la obra "DESAGÜES PLUVIALES EN CALLE ROSALES ENTRE HAITÍ Y RAWSON DE VILLA AMADUCCI" (expediente N° 417R-3501-2016, contratada por la Municipalidad de Bahía Blanca), se presentaron en dicha obra dos personas que se identificaron como integrantes de la Unión Obrera de la Construcción

de la República Argentina, quienes le manifestaron al señor ALEJANDRO CÉSAR COWPER -apoderado y representante técnico de la citada empresa constructora- que la obra estaba paralizada hasta que se constituya en la sede del sindicato.

Cumpliendo con el requerimiento, durante esa jornada, el ingeniero Cowper se presentó en la sede de Seccional Bahía Blanca de la UOCRA (sita en calle Saavedra n° 470 de esta ciudad), donde fue recibido por el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA (Secretario de Finanzas del sindicato), quien le EXIGIÓ el pago de la suma de ONCE MIL PESOS POR MES, durante el tiempo que durara la obra, como condición para que ésta pudiera continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos de integrantes de la U.O.C.R.A.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor COWPER ABONÓ al señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA las sumas exigidas en dinero efectivo, los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2017, en que se realizó la obra.

El dinero fue exigido y percibido por el señor GUILLERMO ESTEBAN MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto), quienes eran los jefes de la Delegación.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros dirigentes sindicales-, intimidó al empresario con la paralización de la obra o la imposición de más trabajadores en la misma y la consiguiente designación de un delegado gremial, circunstancias que afectaban el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y ocasionaban costos no presupuestados.-

Computo con relación a estos hechos lo expuesto por el señor Alejandro César Cowper, quien manifestó ante el Tribunal que es Ingeniero civil, representante técnico de Geomac SA desde hace unos años, empresa que siempre ha tenido unos 8 operarios, que es la cantidad de gente que requieren para las obras que contratan. Que siempre han trabajado en Bahía Blanca contratados por la municipalidad o Absa en alguna ocasión.

Relató que en el año 2017 hicieron una obra de desagües pluviales en calle Rosales al 1900, consistente en la colocación de caños de hormigón por el eje de la calle, que era una obra de 300 metros de longitud y la misma inició en el mes de mayo.

Que el contrato era con la municipalidad, la obra comenzó normalmente y duró el plazo del contrato sin ningún inconveniente por 4 meses de obra.

Expuso que al segundo día de trabajo llegaron dos personas en auto, cuando su empresa estaba en el trabajo preliminar; que no los

conocía, ni recuerda que se presentaran, pero que sí representaban a la UOCRA, y consultaron al personal por el encargado. Que el declarante se presentó y ahí le comentaron que tenía que parar la obra porque las condiciones no estaban para poder seguir trabajando; que consultó el motivo y le dijeron que tenía que conversar. Que le manifestaron que no podían seguir, que había asamblea, y él les explicó que los empleados no estaban afiliados a la UOCRA, que ninguno de los 8 empleados de su empresa eran de la UOCRA. Que estas personas no le decían cuáles eran las objeciones, ya que estaba todo en regla, estaba el baño químico, las medidas de seguridad, tenían la comida en la obra, el personal en blanco y en regla, todo lo de la ART y servicios cubiertos, y ahí estos sujetos le dijeron que tenía que presentarse en el gremio en calle Saavedra, ante lo cual el testigo les dijo que iría por la tarde.

Continuó relatando que por la tarde, tipo 5 horas, fue al gremio sede de la UOCRA, y ahí había gente afuera, y luego aparecieron esos sujetos que habían estado en la obra y le dijeron que tenía que preguntar por Guillermo Molina, y así lo hizo. Que lo recibió alguien en la puerta, le dijo el nombre y este señor le dijo que esperara unos minutos y luego lo hizo pasar a una oficina que está entrando a la sede a mano derecha, la última oficina y ahí lo recibió Guillermo Molina y le planteó los problemas que tenía dado que no veía razón por la cual querían paralizar la obra, no estaba cometiendo ninguna irregularidad, y Molina no sabía decirle el motivo.

Que Molina le dijo que tenían que conversar, que le hizo un comentario con respecto a la continuación de la obra, concretamente quería que tomara dos personas de la bolsa de trabajo de la UOCRA. Que el declarante le indicó que eso no era necesario, que tenía la gente justa para la obra; y Molina le decía que era condición imprescindible que tomara esa gente. Que el declarante le dijo que no, porque no podía pagar esos costos, no tenía necesidad y Molina le insistía con eso. Que fue categórico el pedido y él no accedió a tomar más gente de “prepo”, porque no era necesario.

Acotó que además, como tenía 8 empleados, si tomaba los dos que le exigían, se convertía esto en un problema para la empresa, porque al ser una empresa chica en caso de 10 empleados automáticamente se exige un delegado en la obra que es un costo improductivo, porque generalmente los delegados no realizan funciones operativas. Que al menos en ese momento era de esa forma.

Dijo que el delegado por lo general trabaja de una forma distinta, más leve y trata de hacer lo menos posible en una obra y al ser delegado es como un elemento que trabaja un 50 por ciento o en algunos casos no se puede contar con él porque presenta excusas para no ir a trabajar. Que en ese momento era un tema muy complicado, de mucho costo asumir un delegado y dos personas más.

Refirió que luego de la exigencia y ante su negativa, le propone que si no accedía al pedido por lo menos que haga un aporte de una plata

equivalente a un jornal de sueldo de un oficial mensual. Que esto era juntar todos los meses el equivalente al sueldo de un oficial, que serían unos 11.200 pesos en ese entonces, y ese dinero le contó Molina que estaba destinado a uno de los operarios de la bolsa de trabajo que estaría sin trabajo.

Contó que tuvo que pagar y la primera vez fue a la sede y le entregó la plata personalmente a Molina en sede de la UOCRA. Que esto fue durante los meses que duró la obra y el segundo pago se lo hizo a Molina en la esquina del Automovil Club, en calle Chiclana y Fitz Roy, luego en otra oportunidad frente a donde estaba la CGT en calle Mitre y Rodríguez, en otra en la calle San Martin al 500. Que esto fue siempre en forma personal, que en un sobre le entregaba ese dinero y fueron 4 veces.

Relató que el pedido que Molina le hizo en esa primera charla fue que tenía que aportar eso mensualmente para evitar tener inconvenientes de presencia y objeciones en cuanto al avance de la obra. Que el temor del declarante era que la obra se parara, que tenía miedo que le pararan la obra porque esto le generaba problemas en el plazo de la misma que eran solo 4 meses y había que aprovechar día por día, no se podía perder tiempo, era fundamental cumplir con el plazo.

Indicó que no había ningún motivo para hacer esa contribución dado que en la obra estaba todo en regla, no había que cubrir ningún inconveniente de falta de documentación, comida, ropa o algo a la gente,

estaba todo en regla, el transporte también, con los elementos de seguridad y todo; que esto era un adicional no previsto y no había motivos para poder solicitar ese dinero para poder cubrir algún faltante en que hubiese incurrido la empresa.

Señaló que la municipalidad manda inspectores, la ART inspecciona la obra y estaba todo en regla, tenían además una Ingeniera en seguridad y estaba todo cubierto. Que no se entregaba el dinero por faltante o falencia de la empresa.

A la doctora Stacco le contestó que tiene entendido que si una empresa llega a 10 empleados se designa delegado, que al menos esa era su sensación, que uno llegaba a los 10 y la UOCRA podía pedir un delegado, que puede estar incluido ese delegado dentro de los nombrados o te pueden incorporar uno más, pero como nunca tuvo ese problema, nunca llegó a los 10 operarios, no está seguro.

Que cuando tenés un delegado este operario no se cuenta en la empresa como empleado fiel, porque tiene otras reuniones o situaciones que disminuyen su tiempo de trabajo. Que si el delegado es maquinista, por ejemplo, se para la obra cuando él no está.

Le indicó a la letrada que lo que pagó no estaba en el contrato con la municipalidad, que como era una obra pública licitada a principios del 2017, ellos calcularon que con los 8 empleados cubrían la obra

perfectamente, de acuerdo a la capacidad técnica de su empresa, por lo que no contaron con tomar mayor personal.

Dijo que el dinero que pagó no estaba dentro del presupuesto porque cuando se hace el ítem para la licitación no hay un renglón que diga “aporte de la UOCRA”.

Al doctor Jara le contestó que cuando aparecen en la obra las personas del gremio le dicen que no podían seguir con los trabajos porque había asamblea. Que al comienzo de la obra había una plaza, llegó un auto, se bajan dos personas que no sabe quienes eran y empiezan a hablar con el personal, diciéndoles que no se trabajaba más. Que ante eso, el personal por temor se empieza a arrimar hacia donde estaba el declarante, para consultar que hacer, por los motivos por los cuales no se podía trabajar; y luego ahí se acerca la gente de la UOCRA para hablar con el deponente como jefe de la obra. Que él conversó con estas personas, quienes le dijeron que no podía seguir trabajando, que tenía que ir a hablar a la sede. Que les explicó que estaba todo en orden, les mostró la carpeta con el plan de seguridad que se le muestra a la Secretaria de Trabajo y a la UOCRA cuando pasan a inspeccionar, les ofreció la documentación de la ART, las relacionadas con cuestiones de seguridad, que si querían podían consultar al personal si tenían la comida, el agua, el baño químico –que también se los mostró-. Que les volvió a mostrar que estaba todo como correspondía y que si tenían duda la plantearan, dado que no había argumento o motivo

para parar la obra, estaba todo en orden; y estos sujetos insistieron en que tenía que ir a hablar.

Le contestó al letrado que cuando fue a la UOCRA llevó una carpeta con la documentación.

Ante la consulta del Dr. Jara en cuanto a que si había pagado esa suma que era como un salario por qué no contrató a una persona, le respondió que no necesitaba una persona más, que pagó porque necesitaba continuar con la obra. Que el dinero que entregaba, esto es unos 11.200 pesos, cree que es lo que cobraría de bolsillo un oficial, que ese fue el pedido. Que no recuerda precisamente si tenía oficiales trabajando en la obra que ganaran el equivalente a eso.

También le señaló -respondiendo las consultas del letrado- que los aportes patronales los paga la empresa todos los meses, que si hubiese contratado a un trabajador es más lo que hubiese pagado, a grandes rasgos es un 100 por 100 o más que se paga por aporte patronal, art, seguro y otras cosas.

Reiteró que fue categórico con Molina y que le dijo que con los 8 operarios bastaba y eran necesarios todos para participar en la obra, que no necesitaba más personal, que no conversó con Molina con respecto al nombramiento de un delegado.

También le contestó al letrado que no recuerda que Molina le haya dicho que tenía una denuncia por empleados en negro.

Ante nuevas consultas del señor Fiscal dijo que el salario de oficial de obra al día de hoy, una quincena sería más o menos por 88 horas que es la jornada normal de la quincena, y cree que está entre 15 y 20 mil pesos neto de bolsillo. Que ninguno de sus empleados está afiliado a la UOCRA.

Reiteró que las personas de la UOCRA que fueron a la obra, ni Molina posteriormente, le dieron explicación de por qué paraban la obra. Que “entiendo que es una forma de presión, si no hubiese estado yo capaz que era un golpe mayor para la empresa, es una forma de presencia y presión hacia la empresa y los operarios tienen temor a seguir trabajando cuando llega alguien de la UOCRA y da la orden de parar; que por lo general cuando llega gente de la UOCRA los empleados dejan de trabajar y esperan la decisión del jefe de obra o que la UOCRA se retire. En ese momento cuando llegó esta gente los operarios dejaron de trabajar y quedaron a la expectativa de las directivas, por eso se reunieron con estos dos y luego intervine. Esa fue la forma de presionar para evitar que se siga trabajando” –así sus palabras-.

Consultado nuevamente por el Dr. Jara dijo que lo de las cargas sociales, art, y otros rubros, se sigue dando ese 100 o más que tiene que pagar el empleador.

Que la plata que le dio a Molina era suya y la destinó para ese fin, la retiró de sus haberes y le pagaba con su plata buscando la manera de continuar la obra. Que él tiene contrato con Geomac, que es quien le paga y de ahí destinó esa plata que le entregaba a Molina y no tiene factura ni nada. No había un asiento contable que dijese esto va para tal lado, era plata de sus honorarios que cobró y se la entregó a Molina. No está registrado contablemente porque no había respaldo, factura, ni nada. Que él le pagaba para destrabar el problema.

Que en la empresa no se hace nada sin respaldo documental, todo va con factura A y así se registra.

A partir de este testimonio, y la prueba ya analizada anteriormente, entiendo demostrado que en el año 2017, cuando la empresa GEOMAC S.A. se encontraba realizando la obra de desagües pluviales en calle Rosales entre Haití y Rawson de Bahía Blanca, al menos una persona que integraba el gremio UOCRA, le exigió al señor Alejandro César Cowper el pago de una suma mensual de 11.000 pesos, durante el tiempo de unos 4 meses que duró la obra, bajo intimidación de paralizar la misma y entorpecer la normal actividad de la empresa en la ejecución de la obra. Producto del

temor generado por la situación, el señor Cowper abonó 11.000 pesos mensuales durante 4 meses (hecho que se identifica como número 34).

Analizaremos ahora los hechos acusados por el Ministerio Público y señalados como números 35, 36 y 37, al inicio de la audiencia de debate. Los mismos han sido descriptos así: HECHO 35): A partir del mes de febrero de 2017 -aproximadamente-, en circunstancias en que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por "PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F" y "TECMA S.A.", se encontraba abocada a la construcción de la planta de "TRATAMIENTO BIOLÓGICO SECUNDARIO CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES - PLANTA DEPURADORA CLOACAL. 1° CUENCA - BAHÍA BLANCA", PERTENECIENTE A LA EMPRESA PROVINCIAL "AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANÓNIMA" (ABSA), ubicada sobre la Ruta Provincial N° 252 (en cercanías de Ingeniero White), el señor HUGO ALBERTO DRAGONETTI -presidente de "Panedile Argentina S.A.I.C.F."-, fue extorsionado por los integrantes de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, señores HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General), PABLO DAVID GUTIÉRREZ (Secretario de Difusión y Actas) y MARIO MATÍAS GONZÁLEZ (Delegado gremial y Colaborador Gremial), quienes le EXIGIERON que abonara a los operarios que trabajaban en la obra, UN AUMENTO DEL VEINTE POR CIENTO DEL SALARIO QUE PERCIBÍAN DICHOS

TRABAJADORES según el convenio salarial vigente aplicable al sector (C.C.T. 76/75 y sus modificatorias).

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los dirigentes sindicales paralizaron la obra en reiteradas oportunidades, mediante supuestas "asambleas", las cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la UTE cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.

Ante la coactiva exigencia, en fecha 29 de mayo de 2017, los directivos de la empresa constructora debieron suscribir un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires- Delegación Regional Bahía Blanca, en el marco del expediente administrativo n° 21507-711-17-00, aceptando el pago de las sumas indebidamente demandadas.

Como consecuencia de la imposición, los directivos de las empresas constructoras pagaron a cada trabajador las sumas indicadas junto a la liquidación de los respectivos salarios.-

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

HECHO 36): En el texto del convenio suscripto el día 29 de mayo de 2017 en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires -Delegación Regional Bahía Blanca-, en el marco del expediente administrativo número 21507-711-17-00, el representante de la UOCRA, en forma unilateral y arbitraria, dispuso la inclusión de la prestación a favor de los trabajadores de la U.T.E. integrada por "PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.I." y "TECMA S.A.", que se desempeñaban en la obra ubicada sobre la Ruta Provincial N° 252, denominada "TRATAMIENTO BIOLÓGICO SECUNDARIO CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES - PLANTA DEPURADORA CLOACAL 1° CUENCA - BAHÍA BLANCA, perteneciente a la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), de los SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL y GASTRONÓMICO (viandas).

Luego de ello, HUMBERTO ARNALDO MONTEROS, como condición para que la obra pueda continuar desarrollándose sin inconvenientes ni planteos por parte de los integrantes de la U.O.C.R.A., EXIGIÓ al señor HUGO ALBERTO DRAGONETTI (presidente de "PANEDILE S.A.I.C.F.I."), que contrate el servicio de transporte a la empresa "FLOR DE LIRIO S.R.L." y el servicio gastronómico a "ZABALLA ARIEL EDGARDO", debiendo abonar como consecuencia de dichas imposiciones un costo superior al valor que por esos servicios ofrecían otras

empresas de Bahía Blanca, circunstancia que generó a la constructora un perjuicio económico.

Así también, le exigió la contratación del servicio de baños químicos a la empresa "ACQUA SERVICIOS S.R.L.", el cual era absolutamente deficiente, circunstancia que obligó a la contratación de otro servicio sanitario (Empresa "Basani"), para poder atender las necesidades de los empleados, generando de esta manera un injustificado perjuicio económico.-

HECHO 37): Luego de la firma del CONVENIO entre el representante de la Unión Transitoria de Empresas integrada por "PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.I. - TECMA S.A." y dirigentes de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, reconociendo un incremento salarial a favor de los trabajadores abocados a la construcción de la obra denominada "TRATAMIENTO BIOLÓGICO SECUNDARIO CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES - PLANTA DEPURADORA CLOACAL 1° CUENCA - BAHÍA BLANCA (perteneciente a la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima), que fue suscripto con fecha 29 de mayo de 2017 en la Delegación Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el señor HUMBERTO ARNALDO MONTEROS (Secretario General del citado gremio) EXIGIÓ al señor HUGO ALBERTO DRAGONETTI (presidente de "Panedile Argentina S.A.I.C.F."), la suma total

de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) para que la unión de empresas constructoras que representaba, pudiera trabajar sin inconvenientes durante el tiempo que demandaran las obras.

Dicho monto debía abonarse de la siguiente manera: a)- nueve millones de pesos ($9.000.000) en dinero en efectivo, de los cuales tres millones cincuenta mil pesos (3.050.000) debían cancelarse en un plazo inicial de tres meses y el saldo ($5.950.000), en diecisiete pagos mensuales de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000); b)- El millón de pesos restante ($1.000.000), mediante la adquisición y entrega de materiales de construcción.

En cumplimiento de la coactiva imposición, la U.T.E. damnificada ABONÓ a HUMBERTO ARNALDO MONTEROS la suma inicial y las siguientes mensualidades, mediante el libramiento de cheques y transferencias bancarias a favor de las firmas "Flor de Lirio S.R.L.", "SGT Soluciones en Grupos de Trabajo S.A." (ambas vinculadas a familiares de Humberto Arnaldo Monteros) y "ZABALLA, ARIEL EDGARDO", que fueron documentados contablemente por disposición de Lucía Sanabria y Ariel Edgardo Zaballa (respectivamente), como pagos de facturas por operaciones comerciales ficticias, consistentes en ventas de mercaderías y servicios de transporte y gastronomía que nunca fueron realizados.

Así también, respondiendo a la exigencia de Monteros y cumpliendo directivas de Lucia Teresa Sanabria, los representantes de

"Panedile Argentina S.A. y Tecma S.A." ADQUIRIERON LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN en la firma "CODIMAT S.A.", los cuales fueron entregados en la obra en construcción ubicada en calle Donado n° 1958 de esta ciudad (expediente municipal número 421-S-2016), perteneciente a la empresa "SGT Soluciones en Grupos de Trabajo S.A." y en el domicilio de calle Saavedra número 1647 de Bahía Blanca.

Las mercaderías adquiridas en virtud de la coactiva exigencia alcanzaron un monto total de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($338.810,47), según las siguientes facturas y recibos de pago correspondientes, emitidos por la firma "Codimat S.A.": 1)- factura número 0044-00077693, de fecha 18/05/2017, abonada según recibo número 0066-21505 de fecha 24/06/2017, por la suma de $120.375,86; 2)- factura número 0044-00089021 de fecha 19/07/2017 y número 0044-00089023 de fecha 19/07/2017, abonadas según recibo número 0066-24243 de fecha 2/08/2017, por la suma de $59.300,00; 3)- facturas número 0044-88429, número 0044-88993 y número 0044-89029 de fecha 19/07/2017, abonadas según recibo número 066-24492 de fecha 28/08/2017, por la suma de $41.698,58; 4)- factura número 0044-00089026 de fecha 19/07/2017 y factura número 0044-00091351 de fecha 01/08/2017, abonadas según recibo número 0066-24896 de fecha 05/09/2017; 5)- facturas número 0044-94855, número 0044-94856, 0044-95887 y número 0044-95888,

abonadas según recibo 0066-26435 de fecha 07/10/2017, por la suma de $41.758,77; 6)- facturas número 0055-00010885 de fecha 25/08/2017, número 0055-00010884 de fecha 25/08/2017, número 44-96869 y número 0044-00096896 de fecha 30/08/2017, abonadas según recibo número 0066-26608 de fecha 11/10/2017, por un total de $53.077,72; 7)- factura número 0055-00011097 de fecha 06/09/2017, número 0044-99988, número 0044-100438, número 0044-100768, número 0044-101842, número 0044-102734 y número 0044-102735, abonadas según recibo número 0066-27829 de fecha 07/11/2017, por un total de $156.613,08. Dichos insumos fueron entregados por Codimat S.A. en el domicilio de calle Donado 1970 de Bahía Blanca y en calle Saavedra número 1647 de esta ciudad (una entrega), según consta en los remitos número: 0002/01571638; 0002/01584887; 0002/01584889; 0002/01584892; 0002/01584895; 0002/01587634; 0002/01587635; 0002/01592900; 0002/01592901; 0008/00131861; 0008/00131860; 0002/01594051 y 0008/00132068, respectivamente.

Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, el imputado -junto a otros integrantes de la UOCRA- intimidaron a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas "asambleas" y otros métodos coactivos (daños a las maquinarias, etc.), los cuales sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal

desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir a la empresa cumplir con el plan de tareas y respetar los plazos previstos para la realización de las obras, circunstancia que afectaba su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte de los comitentes.-

Con relación a estos hechos materia de acusación, como primera cuestión, corresponde señalar que en el transcurso del debate, en definitiva, el señor Agente Fiscal sólo ha formulado acusación con relación al hecho número 35, señalando que en el mismo ha tenido intervención el señor Mario Gonzalez (entre los sujetos acusados en esta audiencia de juicio).

A diferencia de la conclusión a la que ha arribado el señor Agente Fiscal, entiendo que la prueba no ha resultado suficiente para tener por debidamente probado este hecho, y sí los restantes, pero no los estamos aquí juzgando en este momento.

Veamos que han dicho los testigos, prueba fundamental, que debe ser relacionada con la otra ya analizada, como es, por ejemplo la documental comentada anteriormente.

El señor Hugo Alberto Dragonetti, quien declaró a través del sistema informático Microsoft Teams, dijo que conoce al señor Monteros por haber tenido trato con él. Que en el 2016 era presidente de la empresa

Panedile –que ahora no lo es-, la que se dedica a la construcción. Que hizo una obra en una UTE junto a Tecma en Bahía Blanca para la construcción de una planta de tratamiento de efluentes, cuyo comitente era ABSA.

Expresó que la obra empezó en julio del 2016, que la primera etapa es de carácter intelectual, poco trabajo, y la obra va creciendo a medida que empiezan las tareas físicas, y ahí se tomaba personal. Que en el primer tiempo no hubo inconvenientes y luego, cuando la obra tenía un movimiento importante, empezaron a sufrir presiones y si no las aceptaban habían dificultades en la obra, como paradas, asambleas, amenazas, todo lo cual dificultó el avance, hasta que luego se presentó una situación difícil, que Monteros los llevó a una situación extrema y tuvieron que aceptar algunas cosas para poder continuar el trabajo.

Apuntó que en el primer momento la exigencia se centró en algo que parecía normal, que era una mejora salarial, que dado el convenio colectivo que se aprueba nacionalmente, había exigencias para mejorar ese convenio, lo cual si bien no era normal porque para eso está el convenio, igual podía tomarse como algo propio de la actividad sindical.

Expresó que luego los pedidos de este señor ya fueron luego en su interés personal, no para los obreros, y eran varios pedidos de materiales para entregar, o contratar a las empresas que ellos les dijeran,

las que cotizaban por encima del valor de mercado, pero que igual había que contratar.

Indicó que las empresas eran Flor de Liz, otra no recuerda el nombre, una de transporte y otra de comida. Que los valores de estas empresas eran más caros. Que normalmente en su empresa hacían concurso de precios, se averiguan los proveedores y se lo daban a la oferta más conveniente; pero en este caso había un pedido para dárselo al que ellos decían.

Expresó que esto no fue una sola vez, que transcurrió durante un plazo largo.

Dijo que primero fue lo que señaló como lógico por el valor del jornal, luego contratar empresas a mayor valor y posteriormente los pedidos de dinero que eran para Monteros. Que en la empresa le pedían que trajera alguna factura porque no tenían dinero en negro para darle, y ahí este señor les mandaba una factura de alguna de estas empresas y luego ellos hacían la transferencia. Que en su opinión seguramente tenía algún contacto con estas empresas.

Recordó que Ariel Savalla era la empresa encargada de la comida.

Refirió que él autorizaba el pago a la empresa Flor de Liz o Savalla, que el declarante le decía a su personal “pagale un adicional de

tantos pesos que está autorizado” y el empleado obedecía lo que él le decía, que no hubo un solo empleado a cargo de esa tarea, pero uno fue Ale Herrera. Que el recién mencionado era el que tenía el contacto con la gente de la UOCRA, que desde la presidencia de la empresa el declarante sólo lo había conocido a Monteros.

Que al día de hoy no recuerda los nombres de la gente del gremio que se presentaba o contactaba con la empresa, que en su momento, cuando fue a declarar a la fiscalía sí los recordaba y los aportó, pero ahora pasó mucho tiempo.

Expuso que los materiales eran pedidos por Monteros, que eran para una construcción, y como ellos tenían una cuenta corriente el declarante le daba la orden al jefe de obra para que entregara lo que fuese, que se anotaba en la cuenta corriente y luego la empresa lo pagaba. Que no recuerda hoy el monto que se abonó por los materiales, que cuando declaró en la fiscalía los mencionó porque fue preparado para eso, que eran cifras importantes, y por eso generaron esta crisis, y ellos en su momento perdieron fuerza por el estado público del tema.

Refirió que esta gente tuvo temor de que se conociera lo que hacían. Que este modus operandi no era solo en Bahía Blanca, que en otros lugares del país estaba sucediendo, y cuando se informó esto periodísticamente se fueron retrayendo teniendo temor de que se conociera

lo que ellos hacían. Que tomó estado público el tema en La Plata, donde tenía más repercusión.

Manifestó que todo derivó que les dijeron a las empresas que no querían sus servicios salvo que adecuaran los precios a los de mercado, que les mostraron las ofertas que tenían de otras empresas, y ahí hubo un tironeo y aceptaron hacer las notas de crédito, y luego en las facturas que quedaban aceptaron el precio de mercado, y más tarde rescindieron el contrato.

Dijo que no recuerda bien cuando fue, pero acompañaron las notas de crédito que les hicieron estas empresas porque sino no cobraban, que adjuntó en fiscalía la documentación.

En el mismo sentido computo lo que contó en la audiencia de debate el señor Héctor Orlando Alé Herrera, quien comenzó señalando que entre los acusados conoce al señor Mario Gonzalez.

Narró el testigo que se desempeñó en Bahía Blanca entre el 2.017 al 2019, como jefe administrativo y apoderado de la UTE Panedile-Tecma, dedicada a la construcción, la cual estaba ejecutando una obra de tratamiento de líquidos cloacales, siendo el comitente la empresa ABSA.

Refirió que tenían una relación de gremio empresa, que ellos manejaban lo que es la bolsa de empleados que iban a tener que contratar en la obra.

Indicó que de la UOCRA trataba con Pablo Gutierrez o Mario Gonzalez.

Que en cuanto a salarios en la empresa se manejaban por el convenio nacional más un acuerdo impuesto por UOCRA Bahía Blanca por sobre el salario, un aumento del 20 por ciento. Mencionó que dijo “impuesto” porque normalmente no firmaban acuerdos por encima del convenio, pero acá era una de las condiciones con las cuales venían a Bahía Blanca.

Refirió que no se podían continuar los trabajos si no se firmaba el convenio; y fue Humberto Monteros el que impuso ese aumento. Que en su caso trataba con Pablo y Mario, pero todas las órdenes eran impuestas por Monteros, ellos les trasladaban cual era la petición.

Que ese 20 por ciento se firmó el acuerdo por un año y luego se volvía a negociar si se incrementaba o seguía el mismo porcentaje. Que por el tema de la firma del acuerdo no pararon la obra, se aceptó y tuvieron que firmarlo, pero por otros conflictos han tenido asambleas y demás, se frenaba la obra directamente.

Señaló que a través de los delegados se bajaba línea y se paraba la obra en caso de que la empresa no aceptara lo que ellos pedían.

Dijo que en la obra que él representaba no hubo otro pedido, pero no sabe a nivel directivos de la empresa. Que requerimiento dinerario sabe que le pidieron a otro representante y consistían en un porcentaje de la obra, pero desconoce cuánto era. Que eso se abonó a través de facturaciones, les daban los proveedores a los cuales deberían transferirles por diversos servicios o trabajos. Que tenían un par de razones sociales que emitían la facturación, como Flor de Lirio, y había que transferirle a ellos, a una casa de catering y una casa de elementos de seguridad, cree que de nombre SGT. Que era su tarea cancelar esas facturas, que en realidad eran para justificar las salidas de dinero, porque la empresa no puede emitir dinero si no existe un comprobante. Que estas empresas emitían facturas y se pagaban.

Apuntó que las empresas pertenecían a Humberto Monteros. Que a la empresa de catering Savalla también se le pagó. Que ellos recibían la directiva de transferir y como los tenían dados de alto como proveedores, cuando los autorizaban transferían a esas cuentas.

Expuso que como en la empresa tenían que contratar el traslado de personal, comida, baños químicos y no recuerda si algo más, desde la UOCRA les indicaron cuales eran los proveedores que iban a ejecutar esos servicios, que no se podía contratar a otros.

Dijo que no se podía llamar a licitación y por eso no era negociable el precio por lo que se contrataba.

Que les impusieron a Flor de Lirio para el transporte. Que esta empresa ya estaba contratada cuando él arribó a la obra, pero sabe que siempre fue bajo la directiva de Humberto Monteros.

Que de la empresa de baños químicos cree que el propietario era Burgos, dado que el declarante tenía contacto con las hijas del mencionado.

En cuanto a la empresa de catering Savalla refirió que se contactaba con el señor Savalla, que era quien les facturaba. Apuntó que desconoce si Savalla sabía que su empresa era impuesta por la UOCRA. Reiteró que él llegó un año después a la obra y estos servicios ya estaban contratados.

Le indicó al Fiscal, ante sus consultas, que tenían la obligación de sí o sí manejarse con la bolsa de empleados de la UOCRA; que el gremio imponía la contratación, y el declarante siempre conversaba a través de Pablo o Mario.

Relató que no tuvieron inconvenientes con despidos de personal, porque tomaban a los que ellos les decían. Que el pedido era ahí, sobre a quienes debían tomar.

Refirió que a la sede de la MUOCRA lo citaron a una reunión cuando fue la intervención del gremio de la UOCRA; y que les dijeron que era para seguir el lineamiento de Humberto Monteros.

Que fue solo a la sede de la MUOCRA y ahí estaban Pablo Gutierrez, Mario Gonzalez y Sabino Ríos, se reunió con ellos y le dijeron que debían seguir el lineamiento de la agrupación que respondía a Humberto Monteros y que la bolsa de trabajo la iban a seguir manejando ellos, que no debían depender del gremio intervenido, y que eso lo dijo Sabino Ríos.

Indicó que les informó que no se pueden manejar como empresa bajo las condiciones de una agrupación, que ellos interactúan con el gremio, por lo que les dijeron que tenían que manejarse con el gremio intervenido, no con una agrupación. Que la respuesta de Sabino Ríos fue que iba a estar a cargo de la agrupación, y exigió no de una manera muy amable, que el lineamiento bajaba desde ellos sí o sí, que “se calentó e impuso eso” –así sus palabras-, y que se lo trasladó al comité directivo de la empresa.

Manifestó que el dinero lo transferían desde casa central, que se transfería de la cuenta de la UTE a los proveedores.

Dijo que el primer problema fue cuando arrestan a Humberto Monteros, que ese día tomaron la obra y no podía entrar ni salir gente de la

misma, por lo que se expuso esa situación en el Ministerio porque estaban en pleno conflicto.

Indicó que el presidente de la empresa Panedile era Dragonetti. Que no sabe si alguien de la UOCRA lo llamó para pedirle dinero o por la contratación de las empresas. Que SGT era una empresa de venta de elementos de protección personal.

Relató que los servicios los tuvieron contratados hasta el día del arresto de Humberto Monteros, luego llamaron a licitación en esos tres rubros y siguieron con otras empresas.

Al doctor Gomez Talamoni le contestó que asistió a varios asados con gente de la UOCRA, que no recuerda si en la casa de Mario puntualmente; y que ha compartido partidos de futbol con la gente de la UOCRA.

Que a nivel personal de Mario Gonzalez no recibió ninguna exigencia; que venía bajada de línea de Humberto Monteros, porque ellos le decían que no hacían nada que no lo dispusiese Monteros.

Refirió que siempre la exigencia fue de tomar gente de la bolsa de trabajo y a los proveedores a los que se debían dirigir.

Expresó que no le dijo Gonzalez que le ocurriría algo si no tomaba gente de esa bolsa, porque siempre lo que ellos les dijeron lo

hicieron. Que no le dijo Mario que iba a tener consecuencias si no tomaba gente de la bolsa.

Que sí Monteros cuando fue a la obra les dijo que si no tomaban gente de la bolsa les paraban la obra.

Al señor Agente Fiscal le contestó que esa vez que fue Monteros a la obra sólo se refirió a eso de la toma del personal, esa vez Monteros estaba acompañado de otras personas pero no las conoce.

Refirió que una vez les pidieron comprar materiales y dejarlos en la sede de la UOCRA por indicación de Monteros, o en su casa. Que les hacían llegar un listado de materiales a la obra, se lo daban los delegados a esos listados, ellos lo compraban en Codimat y lo dejaban en la casa de Humberto Monteros de la cual no recuerda la dirección. Aclaró que el transporte lo hacía Codimat. Que en su momento compraron mercaderías por cerca de 400.000 pesos. Que no recuerda bien el monto, pero cree que había que comprar cerca de un millón de pesos en materiales.

Sostuvo que en el caso de la empresa Flor de Lirio hablaba con la esposa de Monteros, y que si no recuerda mal había una persona que atendía la parte de logística, pero todo se manejaba mucho por mail.

Que Lucía Sanabria es la esposa, que sólo tenía contacto telefónico por el tema de SGT y a veces de transporte, y han cruzado un par de whatsapp por el tema de SGT.

Refirió que presentó en la fiscalía el registro de esas comunicaciones y documentación que acreditaba los pagos, y la copia de las facturas porque las tenían identificadas.

Contestó que no recuerda que le hayan hecho una nota de crédito luego de la detención de Monteros.

Ante una nueva consulta del doctor Gomez Talamoni indicó que cuando asumió la intervención de la UOCRA siguieron con los mismos acuerdos.

El testigo Cristian Viveros, quien declaró a través de la plataforma Microsoft Teams, convocado por la doctora Sager y el doctor Gomez Talamoni, contó que conoce a todos los acusados por el gremio, por ser delegados. Que en entre los años 2016 al 2017 trabajaba para la empresa Panedile en la depuradora de residuos cloacales, siendo oficial armador.

Comentó que se hizo una asamblea, a donde fueron los delegados e informaron que había que llegar a un acuerdo por una mejora salarial. Que los delegados de Panedile eran Paiz y otro que no recuerda el nombre, cree que de apellido Castro.

Dijo que este acuerdo se concretó y luego los invitaron a los operarios, gente de la empresa y de la UOCRA a una cena en el predio de UOCRA.

Señaló que tiene entendido que Monteros y Salguizuri firmaron el acuerdo, que el último mencionado era el dueño de la empresa.

Que la cena se hizo para notificarles a todos del aumento salarial por el cual se había peleado. Que estaba el dueño de la empresa o jefe de obra, Salquizuri, en la cena, la que fue normal, agradable, y no se sentía hostilidad ni nada.

Indicó que Paiz es de nombre César, el hermano de Walter.

El testigo Martín Eduardo Tevez (propuesto por la defensa del doctor Gomez Talamoni y la doctora Sager), refirió que conoce a todos los acusados del gremio. Que durante los años 2016 al 2017 trabajó como oficial carpintero en Panedile, en la obra de la planta de líquidos cloacales.

Señaló que la empresa firmó un convenio con UOCRA, por un aumento de un 20 por ciento sobre el convenio nacional en el sueldo, y además temas como ropa, transporte y comida.

Indicó que según les comentaron el convenio lo firmó Monteros en Capital con el dueño de la empresa; y a ellos les fueron informando a través de varias asambleas informativas, las que llevaba adelante Pablo Gutierrez y el grupo de delegados.

Contó que en junio del 2017 se hizo un almuerzo en UOCRA, y ahí estaban Monteros y Salguizuri, jefe del proyecto en Bahía Blanca. Que el

declarante estuvo en la comida y se lo notaba contento y alegre a Salguizuri, alegre porque se había conseguido un aumento salarial para los trabajadores, porque él era un trabajador de la misma empresa.

Observó que estos convenios se hacen habitualmente. Que luego de que se intervino el gremio se hicieron elecciones, él fue elegido como vocal y llevaron el convenio a 25 por ciento, y un premio por fin de obra para todos los trabajadores, por lo que del 20 que había conseguido Monteros se amplió a 25 por ciento. Dijo que por la empresa participó Héctor Alé, que era el delegado, e hicieron las negociaciones junto con el interventor Boer, que es el actual.

Como se podrá advertir de la prueba antes mencionada, resulta fundamental tener en consideración lo expuesto por el señor Hugo Dragonetti, ya que el señor Ale Herrera no participó de la reunión del testigo recién mencionado con los dirigentes de la UOCRA, porque, según refirió, vino a trabajar a la ciudad de Bahía Blanca cuando esa obra ya estaba iniciada.

El señor Dragonetti contó que el pedido de mejora salarial le parecía normal, a pesar de que impactase en la economía de la empresa por estar por encima del convenio colectivo nacional, habiendo tomado y considerado como propio de la actividad sindical este pedido de mejora salarial, el cual luego fue firmado por su empresa.

Aclaró el testigo que no fue lo mismo con otros pedidos que hizo Humberto Monteros, los que mencionó eran en beneficio personal del mismo, ya que lo obligó a contratar determinadas empresas de servicios para el transporte del personal, para brindar alimentos y para ropa de trabajo, las empresas Flor de Lirio, Acqua y Zaballa; y lo obligó además a entregarle sumas de dinero (facturadas por las empresas antes señaladas por prestaciones que no brindaban) y a adquirirle materiales de construcción, los que fueron entregados en distintos lugares, según requerimientos del señor Monteros o de la señora Sanabria.

El testimonio antes comentado resulta de suma importancia y decisivo para arribar a la conclusión de que este supuesto fáctico identificado como número 35 no se encuentra probado. La demás prueba también corrobora lo expuesto, ya que ningún otro testigo ha indicado que la persona que tomó la decisión de firmar el convenio salarial no lo haya efectuado libremente.

Por lo expuesto, entiendo que no se ha demostrado en debida forma el hecho acusado como número 35, por lo que, conforme la normativa legal, corresponde absolver en este hecho al único acusado en esta audiencia de juicio, el señor Mario Matías Gonzalez, según lo dispuesto por los artículos 1, 209, 210, 371 y cc. del Código Procesal Penal.

Ahora analizaremos los hechos 38 y 40, dejándose constancia que respecto del hecho 39, imputado en esta audiencia de juicio al señor

Burgos como co-autor, el señor Agente Fiscal desistió de acusar. Los hechos fueron descriptos por la acusación de la siguiente forma: HECHO 38): A principios del mes de noviembre del año 2016, en circunstancias en que el ingeniero JUAN MANUEL MORENO se encontraba realizando -con personal a su cargo- la obra de colocación y reparación de veredas en calle Mitre -entre calles Rodriguez y Sarmiento- del ejido urbano de esta ciudad (tareas contratadas por Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima -ABSA-), se presentó en la misma personal de la Seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, EXIGIENDO la presentación en esa sede de documentación relativa a la obra.

Posteriormente, cuando el ingeniero MORENO se apersonó en la sede local de la UOCRA (sita en calle Saavedra número 470 de esta ciudad), a fin de acompañar la documentación requerida por representantes del sindicato, fue recibido por el señor SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Segundo Vocal Titular del sindicato). En esa oportunidad, CANALES le EXIGIÓ que suscribiera un convenio a través del cual el empresario se obligaba a abonar a sus dependientes una suma mensual que equivalía a un aumento de un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) DEL SALARIO que percibían los trabajadores de acuerdo al convenio salarial vigente.

Así también, le EXIGIÓ al damnificado la prestación a sus operarios del servicio de transporte hasta la obra, la entrega de viandas, el pago de un bono a fin de año de SEIS MIL PESOS por trabajador y la

contratación de una determinada cantidad de empleados de la bolsa de trabajo de la referida entidad sindical. Ante la negativa de MORENO a suscribir el convenio y aceptar las imposiciones de CANALES, el imputado junto a otros integrantes de la UOCRA, dispusieron arbitrariamente el día 02 de noviembre de 2016 la paralización de las referidas obras a cargo del citado profesional, intimándolo a que se constituyera en la sede local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para suscribir aquel convenio. Al reunirse en la delegación Ministerial el día 04 de noviembre de 2016 y ante la negativa de JUAN MANUEL MORENO a suscribir dicho convenio en los términos abusivos en que le habían sido impuestos, SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES ordenó telefónicamente que representantes del sindicato paralizaran las obras. Estas circunstancias obligaron al damnificado a cesar su actividad laboral en esa obra.

Con posterioridad, al retomar la actividad en esa obra a fin de cumplir con lo convenido contractualmente con la empresa ABSA, se constituyó nuevamente en la obra personal de la referida organización sindical, advirtiéndole de que si quería continuar sus tareas en esa obra con normalidad, debía suscribir el convenio que le fuera indicado por CANALES.

Así las cosas, ante las amenazas recibidas, el señor JUAN MANUEL MORENO se vio obligado a suscribir con fecha 20 de enero de 2017 el convenio en cuestión, en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (interviniendo en representación de la UOCRA el

señor Walter Rafael Paiz), ello como única posibilidad de poder continuar las tareas y evitar mayores perjuicios económicos.

En el referido acuerdo se documentó de manera arbitraria que JUAN MANUEL MORENO debía abonar una suma equivalente a un incremento del treinta y cinco por ciento del salario a favor de sus trabajadores y brindarles los servicios de gastronomía (viandas) y transporte.

Para lograr dichas disposiciones patrimoniales, el damnificado fue presionado por el imputado y otros integrantes del sindicato, quienes en caso de que no cumpliera con el pago de la suma exigida, paralizaban las obras o disponían la realización de supuestas "asambleas informativas", que sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir que la empresa pueda cumplir con el plan de tareas y plazos previstos para la realización de las obras, circunstancias que afectaban su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte del comitente.-

HECHO 39): Con posterioridad al día 20 de enero de 2017, en circunstancias en que el ingeniero JUAN MANUEL MORENO se encontraba realizando -con personal a su cargo- la obra de colocación y reparación de veredas en calle Mitre -entre calles Rodriguez y Sarmiento- del ejido urbano de esta ciudad y cuyo comitente era la empresa ABSA, el señor SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES convocó a MORENO a una reunión en la

sede de la UOCRA Seccional Bahía Blanca, oportunidad en la que le EXIGIÓ al ingeniero MORENO la suma de VEINTE MIL PESOS, para que la obra individualizada anteriormente pudiera continuar desarrollándose sin inconvenientes.

Como consecuencia de dicha imposición, el señor MORENO ABONÓ a CANALES la suma exigida en dinero efectivo, en circunstancias en que ambos se encontraban en la vía pública.

El dinero fue exigido y percibido por el señor CANALES con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente).

Para lograr dichas disposiciones patrimoniales, el damnificado fue presionado por el imputado y otros integrantes del sindicato, quienes en caso de que no cumpliera con el pago de la suma exigida, paralizaban las obras o disponían la realización de supuestas "asambleas informativas", que sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir que la empresa pueda cumplir con el plan de tareas y plazos previstos para la realización de las obras, circunstancias que afectaban su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte del comitente.-

HECHO 40): Durante el transcurso del mes de mayo del año 2017, en circunstancias en que el ingeniero JUAN MANUEL MORENO se encontraba realizando -con personal a su cargo- una obra de recambio de cañerías en la zona comprendida por las calles Lavalle, España, Villarino y General Paz -todas de Bahía Blanca- y cuyo comitente era la empresa ABSA, los señores GUILLERMO ESTEBAN MOLINA y SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES (Secretario de Finanzas y Segundo vocal titular (respectivamente) de la Seccional Bahía Blanca de la UOCRA) convocaron a JUAN MANUEL MORENO a una reunión en ese organismo sindical. En esa oportunidad, MOLINA EXIGIÓ al damnificado la suscripción de un convenio abusivo y de similares características al que le fuera obligado a suscribir el día 20 de enero de 2017 en relación a la obra de reparación de veredas que Moreno se encontraba realizando en calle Mitre -entre calles Sarmiento y Rodriguez- de Bahía Blanca; mientras que CANALES le EXIGIÓ el pago de una suma dineraria de entre veinte mil y veinticinco mil pesos mensuales, durante todo el plazo que durara la obra de recambio de cañerías y para provecho de aquellos.

A partir de las exigencias recibidas, JUAN MANUEL MORENO efectuó a GUILLERMO ESTEBAN MOLINA, en la vía pública, un sólo pago de la suma exigida, en dinero en efectivo.

El dinero fue exigido por CANALES y percibido por MOLINA con conocimiento y bajo las órdenes de HUMBERTO ARNALDO

MONTEROS y JOSÉ BERNARDO BURGOS (Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente).

Para lograr dichas disposiciones patrimoniales, el damnificado fue presionado por el imputado y otros integrantes del sindicato, quienes en caso de que no cumpliera con el pago de la suma exigida, paralizaban las obras o disponían la realización de supuestas "asambleas infomativas", que sólo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal, el normal desenvolvimiento de las tareas laborales y, en general, impedir que la empresa pueda cumplir con el plan de tareas y plazos previstos para la realización de las obras, circunstancias que afectaban su calificación, ocasionaba costos no presupuestados y generaba la imposición de multas por parte del comitente.-

De fundamental importancia para tener por constatados estos hechos resulta lo expuesto en la audiencia de juicio por el señor Juan Manuel Moreno quien indicó ser Ingeniero civil, y estar trabajando en Bahía Blanca desde el 2006, realizando obras a partir de las cuales se vinculó con gente de la UOCRA.

Mencionó que realizaba obras para ABSA, en el 2.016, fines del año, en reparación de veredas en el centro, y ahí se acercó personal de UOCRA solicitando documentación y que fuera al sindicato para presentar

documentación. Refirió que a esa gente de la UOCRA no la conocía, que sí luego conoció a Sebastián Canales.

Indicó que pedían documentación de rutina, recibos de sueldo, pagos 931, por lo que fue al sindicato a calle Saavedra, llevó la documentación y a partir de ahí en la reunión Canales le dijo que estaba bien, pero que para poder realizar esas tareas tenía que firmar un convenio que ya habían firmado otras empresas, pero con ciertos requisitos.

Le señaló al señor Fiscal que esa reunión fue con Canales en el sindicato en calle Saavedra, en una oficina; que previo a eso lo hicieron esperar en una sala y luego lo hicieron pasar a una oficina separada donde estaban los dos solos.

Que con relación a la documentación Canales no dijo nada, ya que estaba todo como correspondía. Que lo primero que le dijo era que hacía falta que firme un convenio que otra empresa lo había firmado, y en el que pedían un sobresueldo del 35 por ciento más en el recibo por sobre el convenio colectivo, que además pedían viandas, darles medio de transporte y pagarles a fin de año o al final de la obra un monto de 6.000 pesos a cada trabajador. Que esto era mucha plata. Que le pareció una exageración, un despropósito, que no estaban contemplados esos gastos extras. Que se fue de la reunión y ahí quedó el tema, pero luego Canales lo llamaba y lo presionaba con la amenaza de que si no se firmaba se paraba la obra. Que

en una oportunidad fue Canales a la obra y le dijo que si no firmaba se paraba la obra.

Relató que era Canales quien hablaba con él, pero cuando iba a la obra lo hacía acompañado con algunos más, a los que no conoce; que en el sindicato la reunión sí fue solo con Canales. Que le dijo que si no se firmaba el convenio en el Ministerio de Trabajo no podía seguir trabajando.

Agregó que luego coordinaron una cita en el Ministerio y antes de entrar a la sala se pusieron a charlar y ahí Canales le dijo que se firmaba así o no se hacía nada, y acto seguido llamó por teléfono y le dijo a uno que fuesen a la obra y parasen todo porque no se iba a firmar nada.

Contó que hizo una denuncia con su abogado, presentaron una nota en el Ministerio de Trabajo para que fueran a ver la obra ya que estaba todo en orden. Que fueron al obrador varios de la UOCRA y les dijeron a sus empleados que estaban en asamblea, que tenían que parar todas las actividades, y al llegar la gente del Ministerio sus empleados les comentaron que estaban en ese paro contra su voluntad.

Relató que por este motivo levantó todo y no siguió con ese trabajo, que esto fue a fines del 2016, y luego ABSA le pidió como comitente que concluyera las tareas, por lo que en enero volvió a retomar la reparación de las veredas y al día siguiente se apareció esta gente de la UOCRA para que frenara, diciendo que no podía trabajar sin explicar el motivo.

Refirió que fueron a los tres días al Ministerio “bajo obligación era una extorsión que quede claro, me obligaban que si no firmaba no trabajaba, era una extorsión” –así sus expresiones-, y firmó en enero del 2.017. Que como estaba Canales de vacaciones fue Paiz a firmar el convenio en representación de la UOCRA.

Dijo que la obra duró un mes y medio, y en la mitad de la misma, cuando volvió Canales, lo citó al sindicato y le pidió dinero, le dijo que si quería seguir trabajando tenía que poner una suma importante, y luego de eso tuvo que pagar 20 mil pesos por una obra corta, a la que le quedaba un mes. Que se encontraron en la vía pública y le dio el dinero en mano a Canales.

Señaló que la obra era en calle Mitre, entre Sarmiento e Irigoyen, en pleno centro, donde pasan todos los micros por el lugar y el convenio decía que tenía que haber transporte, pero no se podía negociar nada aun cuando los empleados podían ir por transporte público y llevar su propia vianda, cosa que tampoco permitía el convenio. Reiteró que no se podía negociar nada, que había que firmar así el convenio, obligados.

Mencionó que el aumento del 35 por ciento era mucho dinero, que la tarea de reparación de obras es de mano de obra importante, por lo que 35 por ciento más es significativo. Que además los 6.000 pesos a cada operario al finalizar la obra, que serían como 60.000 mil pesos de ahora a

cada uno, sin importar la categoría del empleado, era una erogación muy importante que no se tenía contemplada.

Indicó que en esa obra tendría entre 8 y 9 empleados y le exigieron que tomara dos empleados más de una bolsa de trabajo que le informaron; y esto era perjudicial porque estos dos empleados tenían beneficios, ya que faltaban, Canales mandaba mensajes diciendo que no iban a ir a trabajar, pero que no le descuente nada, ni presentismo, ni salario, porque los necesitaba para una movilización o para hacer otra cosa.

Contó que una empresa tiene que tener 10 empleados para nombrar un delegado. Que cuando se hace un plan se calcula la cantidad de gente, si necesitaba 8 empleados, entiende que no tiene por que tomar a la fuerza dos o tres más.

Que cuando se firmó el convenio los dejaron trabajar y la obra duró un mes más. Que luego le adjudicaron un recambio de cañería para ABSA en calles Lavalle y España, y Brandsen, Villarino y General Paz, y al empezar la obra volvieron a visitarlos los de la UOCRA, pidiéndole que fuera al sindicato. Que fue a la sede y en la reunión estaban Canales y Guillermo Molina; que ellos tenían dividido por sectores como manejaban geográficamente la ciudad, cada persona de la UOCRA tenía un sector y en este caso parte de la obra era de Canales y el otro sector de Molina, y por eso estaban los dos en la reunión. Que en la reunión le pidieron que firmara el convenio porque esta era otra obra y Canales le dijo del tema del dinero,

le volvió a pedir dinero, entre 20.000 y 25.000 pesos por mes mientras durara la obra.

Que el dinero se lo dio a Guillermo Molina, que coordinaron y en la vía pública le dio el dinero a Molina, no a Canales. Cree si no recuerda mal que fue una sola entrega de dinero en el mes de mayo del 2.017.

Que antes de eso todos los meses lo llamaban para que les alcance el dinero; que luego de esa entrega pasó el tiempo y no lo llamaron, porque por ese tiempo fue que comenzó esta investigación de este juicio y no lo volvieron a llamar y tampoco llegó a firmar el convenio.

Reiteró que la entrega del dinero no fue en la sede de la UOCRA, que no recuerda bien si Molina vivía en calle San Martín o cerca y le dio en la vía pública, en la calle, y fue dinero en efectivo. Que no habló nada con Molina esa vez.

Dijo que en sede de la fiscalía adjuntó el convenio que le hicieron firmar en la primera obra y el acta del Ministerio de Trabajo.

Que en la segunda obra la reunión fue en sede de la UOCRA, y ahí estaban Molina y Canales. Que le dijeron que tenía que suscribir el convenio. Que esto “era una exigencia, no era voluntario, no daban posibilidad de que fuera voluntario, era una condición que te imponen para que puedas trabajar, además tenía el antecedente que ya me habían parado la anterior obra” –así sus palabras-.

Que ahí también le pidieron la entrega del dinero, que eso lo pidió Canales, aunque no recuerda si fue de forma verbal, porque tenían como práctica común que los montos los escribían en un papel, que supone que lo hacían por si uno estaba grabando algo porque ellos estaban pidiendo dinero. Que ese dinero fue luego lo que le dio a Molina en la vía pública.

Al señor Fiscal le contestó que ninguno de los dos dijo que el convenio fuese incorrecto o ilegal.

Al doctor Jara le respondió que la documentación que llevó a la fiscalía fue para corroborar lo que estaba diciendo, que llevó copia del convenio que le hicieron firmar y la inspección que hizo el Ministerio de Trabajo.

Que el dinero le dijeron que era como colaboración, pero “lo exigieron, que quede claro” –así sus palabras-, aunque no recuerda cual de los dos. Acotó que “no sabe para quien era el dinero, no sabe que hacían con eso, si se lo quedaban ellos, lo repartían adentro de la UOCRA o lo regalaban” –esos sus términos-. Que los 20 o 25 mil pesos que le pidieron los sacó de su trabajo, que era dinero para gastos de él, y contablemente era plata que “yo me metía en el bolsillo para la Afip, y por esos gastos tuve que tributar”. Que para la Afip queda registrado como que la sacó para él, dado que “no se puede diferenciar en la Afip la plata que le di a Molina de la

que sacaba para mí, para la Afip fue ganancia mía y yo tuve que pagar impuestos sobre eso" –sus expresiones-.

Le contestó al Dr. Jara que el motivo por el cual firmó y pagó era porque le paraban la obra si no lo hacía, que el único incumplimiento que ellos le decían era que no firmaba el convenio.

Ante las consultas del Dr. Gomez Talamoni señaló que cuando fue a firmar al Ministerio de Trabajo el convenio ya estaba impreso, que antes se lo adelantaban por correo electrónico diciendo que eso era lo que hay que firmar. Ya estaban escritos y no se podía modificar ni una coma. Que al señor Paiz solo lo vio al firmar el convenio.

Ante nuevas consultas del señor Fiscal dijo que no se podía discutir nada del convenio en el Ministerio de Trabajo. Que cuando uno iba a la sede de la UOCRA el ambiente era bastante intimidante, que él no tenía experiencia en esas situaciones y era intimidante porque uno iba solo y tenías unos patovicas en la entrada o adentro, y te hacían anunciar, esperar y pasar a otra sala adentro, y luego más tarde a una oficina, y no era grato en lo más mínimo.

Le reiteró al Fiscal que la entrega del dinero y la firma del convenio no era voluntaria, que si no pagabas te hacían problemas.

Sumo a lo expuesto por este testigo que del legajo Fiscal identificado como K, víctima Juan Manuel Moreno, surge que la inspectora

Daiana Mónica Astrada del Ministerio de Trabajo se constituyó en la obra a cargo del señor Moreno y labró un acta, en la que dejó constancia que: "... El personal manifiesta querer seguir trabajando y continuar con las tareas, sin problemas, aduciendo no querer perder el empleo y manifestando que se encuentran en estado de asamblea porque UOCRA se los pidió, no por voluntad propia".

Este documento, junto con los otros analizadas en el hecho uno, corroboran lo mencionado por el señor Moreno al prestar declaración en la audiencia de juicio.

Con esta prueba, entiendo plenamente demostrado que en el mes de noviembre del año 2016, cuando el señor Juan Manuel Moreno se encontraba ejecutando con su empresa una obra de colocación y reparación de veredas en calle Mitre -entre calles Rodriguez y Sarmiento- del centro de Bahía Blanca, al menos dos personas, dirigentes del gremio UOCRA, le exigieron la suscripción de un convenio de aumento salarial de un 35% para sus empleados por encima del convenio colectivo nacional, como así también, brindarles a los obreros los servicios de viandas para el almuerzo y transporte hacia y desde el lugar de trabajo, bajo intimidación de paralizar las obras y afectar el normal desenvolvimiento de la empresa. Producto del temor generado por la situación, con fecha 20 de enero de 2017, el señor Moreno firmó el convenio y abonó los aumentos salariales y contrató las

empresas de servicios que le fueron informadas para el transporte y la provisión de las viandas (hecho número 38).

También se encuentra demostrado que durante el transcurso del mes de mayo del año 2017, en circunstancias en que el ingeniero JUAN MANUEL MORENO se encontraba realizando una obra de recambio de cañerías en la zona comprendida por las calles Lavalle, España, Villarino y General Paz -todas de Bahía Blanca- y cuyo comitente era la empresa ABSA, al menos dos dirigentes del gremio UOCRA le exigieron la suscripción de un convenio de aumento salarial de un 35% para sus empleados por encima del convenio colectivo nacional, como así también, brindarles a los obreros los servicios de viandas para el almuerzo y transporte hacia y desde el lugar de trabajo, y abonar la suma de 20.000 pesos mensuales mientras durase la ejecución de los trabajos, bajo intimidación de paralizar las obras y afectar el normal desenvolvimiento de la empresa. Producto del temor generado por la situación, el señor Moreno abonó la suma de 20.000 pesos en una sola oportunidad (hecho número 40).

Como ya se apuntó al inicio, al momento de describir los hechos identificados como números 42, 43, 44 y 45, el señor Agente Fiscal lo hizo en una redacción conjunta y de la siguiente forma:

En la ciudad de Bahía Blanca, el día 21 de marzo de 2017, entre las 09:00 y las 09:30 horas -aproximadamente-, en circunstancias en

que se realizaba una inspección de la obra a cargo de la empresa "COINCE BAHIA S.A.", ubicada en avenida Alem a la altura catastral del 5.000 -aproximadamente- de la ciudad de Bahía Blanca, a cargo de los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires: LUIS ALBERTO DIEZ (legajo 260537) y ALEJANDRA NORA MOLINA (legajo 601152), junto a una comitiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, integrada por los Delegados Coordinadores: Martín Ariel Parada, Benjamín César Unibaso, Cristian Adrián García, Walter Mario Soules, Jorge Cuevas y Damián Mayor; se constituyeron en el lugar un grupo de dirigentes y colaboradores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, que empezaron a agredir a los presentes.

Entre esas personas se encontraba el señor MARCOS TEVEZ -delegado de obra-, quien en esas circunstancias le manifestó al señor CRISTIAN ADRIÁN GARCÍA, los siguientes términos amenazantes: "con vos, voy a hablar en el barrio", "no se te olvide que andás siempre con los pibes en la moto".

Posteriormente, durante esa misma jornada, entre las 09:30 y las 10:30 horas -aproximadamente-, los citados inspectores del Ministerio de Trabajo y los representantes del SITRAIC nombrados anteriormente, se trasladaron a otra obra a cargo de la empresa "COINCE BAHIA S.A.", ubicada en la intersección de las calles Carmen Ledesma y Sargento Iturra

de la ciudad de Bahía Blanca, y en circunstancias que los funcionarios iniciaban la diligencia de inspección, se hicieron presentes en dicho lugar los señores: JORGE DÍAZ, MARCELO ORTÍZ, WALTER RAFAEL PAIZ, SEBASTIAN OCTAVIO CANALES, ROBERTO SABINO RÍOS y MARIO MATÍAS GONZÁLEZ, junto a MARCOS TEVEZ (que había convocado telefónicamente a los nombrados), todos dirigentes, colaboradores y delegados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, quienes junto a un grupo de aproximadamente cincuenta personas no identificadas, mediante la colocación de los rodados en que se transportaban obstruyendo el paso, impidieron que las víctimas se retiraran del lugar en los vehículos en que se habían trasladado (pertenecientes a Walter Mario Soules y a Benjamín César Unibaso).

En esas circunstancias, los señores JORGE DÍAZ, MARCELO ORTÍZ y WALTER RAFAEL PAIZ, golpearon la camioneta marca Toyota, Modelo Hilux, dominio INQ-698, de propiedad de Walter Mario Soules, ocasionándole los siguientes daños: hundimiento del lateral derecho de la caja y de la superficie de la chapa de la puerta de la caja de la camioneta.

Asimismo, en las mismas condiciones descriptas, el señor JORGE DÍAZ -siguiendo la indicación de SEBASTIÁN OCTAVIO CANALES- arrancó con sus manos el espejo retrovisor externo de la puerta del conductor de la camioneta marca Chevrolet, modelo S10, dominio BUU-152, que conducía Benjamín César Unibaso.

Acto seguido, el señor JORGE DÍAZ arrinconó contra un alambrado a BENJAMÍN CÉSAR UNIBASO, a quien tomándolo del cuello le profirió los siguientes dichos amenazantes: "esto lo va a pagar tu hermano Gerardo y tu padre, ya sabemos todo sobre vos", causándole gran temor por lo que le pudiera ocurrir a su persona y familia.

La conducta amenazante de los imputados y los hechos indicados anteriormente, fueron concretados con el propósito de amedrentar a los presentes y evitar que se realicen las inspecciones que estaban programadas en dichas obras de construcción.

Como consecuencia de los actos de violencia, de las manifestaciones intimidantes advirtiendo que no podían realizar la diligencia y de las agresiones indicadas precedentemente por parte de los representantes de la UOCRA, los inspectores del Ministerio de Trabajo -Luis Alberto Diez y Alejandra Nora Molina- debieron suspender la realización del acto funcional que estaban desarrollando, pues no estaban garantizadas las condiciones mínimas de seguridad para los presentes y sus bienes.

En virtud de ello, se trasladaron junto a los representantes del SITRAIC indicados precedentemente, a la sede de la Delegación Regional Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (sita en calle O'Higgins Nº 247 de esta ciudad). Cuando arribaron a dicho lugar, JORGE DÍAZ, ROBERTO SABINO RÍOS, MARCELO ORTIZ y el masculino no identificado que fue individualizado como "Diego" (todos de la UOCRA),

abordaron a Martín Parada y a Cristian Adrián García (delegados del SITRAIC), a quienes amenazaron de muerte.

Más tarde, dentro de las dependencias del Ministerio de Trabajo, cuando Martín Parada y Cristian Adrián García estaban con el titular de la Delegación Bahía Blanca del referido organismo -señor Sergio Bozzi- los señores ROBERTO SABINO RÍOS y JORGE DÍAZ amenazaron nuevamente a los presentes, refiriendo RÍOS a viva voz: "de acá nos vamos, pero estos dos de acá no salen, y vos vas a ser el responsable" (en referencia a Bozzi), tras lo cual se retiraron del lugar ante la presencia policial.

De esta descripción corresponde separar del análisis en este momento a la primera porción de los hechos, en los que aparecería una persona mencionada como Marcos Tevez, quien habría amenazado al señor Cristian García (sería el hecho 42 de la acusación fiscal), dado que no se trata de uno de los hechos imputados a las personas en este debate.

De los hechos 43, 44 y 45, debemos observar que el señor Agente Fiscal ha calificado a los mismos como daño en los términos del artículo 183 del Código Penal –hecho 43-, atentado agravado a la autoridad según lo prescripto en el artículo 238 inciso 2 del Código Penal –hecho 44- y amenaza en los términos del artículo 149 bis primer párrafo del Código Penal.

Reseñado esto, corresponde apuntar que resulta doctrina legal de nuestra Corte Suprema de la Nación, establecida a partir de Fallos: 186:289, que la prescripción en materia penal es de orden público y que, en consecuencia debe ser declarada de oficio por el tribunal correspondiente, que se produce de pleno derecho, que debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo y que debe declararse en cualquier instancia del juicio y por cualquier tribunal.

Que se debe considerar que los mencionados delitos tienen como máximo de pena previsto el término de dos años de prisión, por lo que el plazo de prescripción de la acción penal sería de dos años, según lo estipula el artículo 62 inciso segundo del Código Penal, y no habiendo operado alguna causal de interrupción de la acción penal desde la citación a juicio de los acusados, acontecida el día 21 de agosto del 2.019, ni surgiendo de los antecedentes penales acompañados por el Ministerio Público Fiscal la comisión de nuevo delito, corresponde declarar extinguida la acción penal en estos hechos y disponer la absolución de los señores Walter Paiz (hechos 43 y 44), Mario Gonzalez (hecho 44) y Roberto Ríos (hechos 44 y 45) (arts. 1, 209, 371 y cc. del C.P.P., arts. 62, 67 y cc. del C.P.).

Veamos ahora lo que han declarado en la audiencia los acusados.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

Al prestar declaración el día 16 de junio el señor José Burgos comenzó señalando que iba a hablar de tres hechos o ítems fundamentales de lo que viene viendo del juicio. Dijo en primer lugar que con el señor Medús, de la empresa Abedul, tuvo reuniones pero siempre globalmente, también con la comisión de la UOCRA; que con Medús en forma personal nunca estuvo reunido, que nunca estuvo en ninguna oficina con él solamente, o en alguna obra de él y nunca le pidió nada al señor Medús, que, como dijo, sí ha estado con él en otras reuniones.

Como segundo punto dijo respecto del premio o gratificación de fin de año para los obreros que él estaba a cargo de Coronel Suarez y de las empresas viales en Suarez y en zona de influencia, como Carhué, Pigué, Villa Iris y toda la zona de rutas, y en las primeras reuniones por el premio fue en la central de la UOCRA en calle Saavedra de Bahía Blanca.

Indicó que él con la secretaría le hicieron una notificación a cada empresa para que concurriesen a la sede a una reunión donde les iban a informar el procedimiento de reunión; que esto fue a las empresas viales, y a la reunión fueron las de Bahía Blanca porque las otras estaban haciendo rutas en otros lugares como Pigué, Carhué, Coronel Suarez o Puan. Que fueron las 6 de Bahía Blanca y CV1 que estaba trabajando en bacheo de la ruta 3.

Que en la primera reunión que se hizo en la sede durante la mañana o mediodía, asistieron por cada empresa personal administrativo,

no gerencial, ni ingenieros de obra, eran administrativos que venían a ver para qué era la reunión. Que ahí estuvieron los integrantes de la secretaría, todos los secretarios menos el Secretario General que estaba enfermo y algunos otros colaboradores. Que cuando dice Secretarios habla de adjunto, finanzas, tesorería, gremial.

Señaló que en la reunión se le informa de que iba a venir una comitiva del central para fin de año y tenían que hacer un trabajo en el ingreso al predio para hacer movimiento de suelo y carpeta asfáltica. Que ahí, estos señores que concurrieron dijeron que no podían tomar decisión, que solo venían a escuchar y no podían decidir por el trabajo que le pedían desde el gremio a las empresas. Que se retiraron y quedaron que concurriera algún otro día alguien que pudiese tener decisión y contestación, como algún ingeniero o algo directivo de la empresa.

Refirió que el pedido de trabajos era algo normal para el gremio, porque siempre pedían durante el año para el inicio de clases útiles escolares, para el día 22 de abril para la fiesta del obrero de la construcción, para el día del niño, para la fiesta de fin de año, y las empresas colaboraban con ellos. Que, por ejemplo, la canasta navideña fue algo que quedó y no se pidió más porque todos los años lo entregaba cada empresa.

Continuó su relato diciendo que luego que se retiraron los que vinieron de las empresas, a los dos o tres días se volvieron a juntar y ahí concurrieron los directivos, apoderados o ingeniero que tenía función en la

empresa y poder de decisión, que ya venían sabiendo y querían saber qué les estaban pidiendo. Que ellos les indicaron que el trabajado era mover el suelo en la entrada del predio, 100 o 150 metros, entoscado, carpeta asfáltica y cordón cuneta, que no hicieron salida de agua porque era muy costoso.

Manifestó que charlaron de todo esto y cuando estaban hablando del asfalto les hacen referencia a que tenían a su personal trabajando en cada obra, y ante eso desde el gremio les dijeron que tenían personal desocupado que estaba trabajando en el predio y podía darles una mano en esto. Que el declarante les propuso a las empresas que le daban una mano con la gente desocupada que hacía trabajos en el predio. Que fue una charla amena y el señor Evangelista les pide un cuarto intermedio, por lo que se retiraron de la sala para que ellos pudiesen hablar, salieron los de la comisión y a la media hora volvieron a ingresar a la sala de conferencia de la UOCRA y ahí les comenta que “les iban a dar una mano, que era muy difícil, que las empresas estaban trabajando pero que iban a dar una mano” –así sus palabras-.

Refirió que las empresas designaron a Evangelista de Ingeniería y Arquitectura como vocero, y él quedó que iba a ser el interlocutor entre las empresas y quien dialogaba con el sindicato.

Apuntó que estaba por finalizar el tiempo y venía la comitiva del central a visitar la seccional, por lo que lo llamaba a Evangelista para ver

cuando iban a empezar la obra, porque tenían gente ya en el predio que podía colaborar. Que igual empezaron a hacer obras en el predio los que estaban ahí, que eran personas desocupadas que iban al predio y trabajaban voluntariamente.

Dijo que en su momento las empresas no las aceptaron a estas personas porque para trabajar decían que los tenían que poner en blanco. Que ante esto ellos les dijeron que los tenían en el gremio con un seguro, y ahí las empresas no querían porque iban a trabajar con las empresas y si pasaba algún accidente iban a tener problemas; ante lo cual les dijeron “que no, que nosotros nos hacíamos cargo de los empleados desocupados” –sus términos-.

Apuntó que pasaron 15 a 20 días desde la reunión hasta que lo llamó porque no hacían la obra; que lo llamó para saber si se iba a hacer la obra o no, dado que sino iban a hacer una limpieza ellos, y luego lo llamó Evangelista.

Señaló que la obra era de 150 metros de carpeta asfáltica, que no era una obra de costo excesivo; que lo que se hizo no es de gran poder adquisitivo para lo que es una ruta.

Que el primer trabajo se hizo con los chicos desocupados que fue de limpieza de los dos accesos, lo hicieron a pulmón y luego cuando

empezó la obra, que no duró mucho, habrán sido unos 30 a 35 días de trabajo.

Manifestó que cuando lo llamó Evangelista le dijo que se habían puesto de acuerdo entre ellos, que no lo había llamado antes porque estaban hablando quien ponía el asfalto, la piedra, la máquina y le dijo que a la semana empezaban. Que esto fue así, a la semana empezaron con el movimiento de suelo, cree que Cerra y Moro con las máquinas motoniveladora y retropala, y entoscado, se levantó parte del material, se entoscó, compactó y luego trajeron el asfalto de Ingeniería y Arquitectura que estaba haciendo obra en el aeropuerto. Que el cordón cuneta no recuerda quien lo hizo, que los adoquines de los costados los hizo Abedul. Que todo lo hicieron entre 6 empresas.

Expresó que con respecto al premio o gratificación de fin de año esto se hizo en la seccional no sólo con las empresas viales, sino en todas, en el polo, en obras civiles, en el parque industrial. Que esto fue un pedido del gremio. Que el año anterior, en el 2.015 se pagó el premio de fin de año a nivel nacional, y en el 2016 se les venían las fiestas encima y a nivel nacional no tenían el aviso de que se iba a pagar el premio de fin de año. Que Humberto Monteros se puso en comunicación con la central y le informaron que lo estaban hablando entre la Cámara industrial argentina y los sindicatos nacionales; y entonces ellos para anticiparse llamaron a una reunión, se les hizo una presentación a cada empresa para hablar del

premio de fin de año. Que se hizo una reunión en el sindicato y después se trasladaron a la CGT, porque ahí había reuniones, y ahí juntaron a todas las empresas viales.

Dijo que hubo otras reuniones con otras empresas que no eran viales, que en algunas participó pero no firmó los acuerdos con el gremio, recordando acuerdo con Skanka, en el parque industrial con la Petroquímica Bahiense; y hasta el día de hoy cree que se pagan los premios.

Relató que se juntaron con las empresas en la CGT y les comentaron de llevar adelante el premio de fin de año y que las empresas les dicen que a nivel nacional no había salido nada, que ellos iban a dar cuando dieran el ok a nivel nacional, ante lo cual desde el gremio les decían que se venían las fiestas y la gente necesitaba el premio para pasar las fiestas, que ya se había otorgado el año anterior. Que ahí las empresas les dicen que lo iban a pensar, pero nunca les dijeron que no. Que para esto pasa el tiempo y hacen la presentación para presentar esta moción en el Ministerio de Trabajo y hacer la reunión ahí como debía hacerse, porque si se firmaba algo luego debía ser homologado como corresponde.

Indicó que este premio no tenía carácter remunerativo, en este caso era una suma fija que se iba a pedir. Que ese año venían con muchos problemas sindicales, los aumentos que daban eran a nivel paritarias y la inflación es tanta que lo que gana uno al otro día es nada, que en el sector

de ellos venían muy mal, los obreros de la construcción de obra civil no llegaban a fin de quincena.

Le contestó al doctor Martínez que puede ser que este premio fuese un aumento salarial encubierto.

Expresó que la reunión en el Ministerio la hacen para darle legalidad al pedido, que no había ningún conflicto, la hacen por mesa de entrada y expusieron que era para el premio o gratificación de fin de año, lo presentaron y el Ministerio cita a cada empresa a la sede para que ellos como conciliadores estén presentes y vean lo que se habla.

Que luego de la presentación los citan al Ministerio de Trabajo al sindicato y a cada empresa a la que ellos le habían pedido el premio y eran 5 o 6 locales y otras foráneas como Centro construcciones, Esuco, Mansalva y alguna más.

Que cuando se presentan está el abogado o delegado del Ministerio quien le pidió a cada representante ir con el representante legal o apoderado del sindicato para que tenga valor cuando se firma el convenio o el acta, que a la empresa se le pide que vaya el dueño o apoderado, y por lo general las empresa van con abogado.

Refirió que estaba el delegado o abogado del Ministerio que encabeza el acta de por qué venían, que iban a tratar de consensuar, de llegar al pedido que estaban haciendo, que lo habían hablado en el ámbito

de la CGT. Dijo que en la reunión estaba toda la secretaría, que asistió el declarante con los otros secretarios y el abogado sindical apoderado del sindicato; y que cada empresa para entrar a una reunión de charla o conciliatoria tiene que concurrir el apoderado o dueño de la empresa con el poder de decisión, que por lo general no va el empresario y manda al abogado.

Que la reunión fue en la sala de reuniones del Ministerio, que eran unas 6 o 7 empresas, siendo en total unas 15 personas aproximadamente. Que él por lo general suele llevar un delegado para que vea como es el ámbito de negociación.

Expuso que empezaron a hablar de la gratificación o premio de fin de año, que la deliberación llegó en que dijeron las empresas locales que tenían poco trabajo, que era mucho el monto de 8.000 pesos, que ese monto ya se había hablado en el CGT, y ahí las empresas hicieron una contraoferta, que esto lo hicieron las empresas locales porque las foráneas dijeron que no había problema, y las locales ofrecieron 1000 pesos, y empezaron a charlar, se hizo un cuarto intermedio, salieron todos y quedaron algunos empresarios adentro charlando, pasaron a un cuarto intermedio y luego se concretó en 4.000 pesos las locales y 8.000 las foráneas.

Apuntó que dieron el sí por 4.000 porque las locales exponían que eran de la ciudad, que tenían gente de Bahía y gastaban la plata acá y

pagaban impuestos acá y no podían pagar lo mismo que las foráneas que traen gente de afuera, toman algunos locales y se llevan todo. Que les dijeron que sí, y luego volvieron a presentar otra inquietud de pagarla en dos quincenas separadas en dos meses, en las del 20 porque para ellos era mejor, y a eso también dijeron que sí y firmaron el acta acuerdo con todas las empresas locales.

Expresó que pagaron el premio en dos quincenas y las foráneas, como Centro construcciones, Esuco y la otra empresa de Carhué con esas hizo el acta en Suarez y fue por 8.000 pesos.

Volvió a reiterar que no tuvo reuniones en privado en su oficina, o en obra con el señor Medús, nunca habló con él solo, ni le pidió nada a él, ni para el día del niño, ni para el móvil sanitario.

Al doctor Zorzano le contestó que en la reunión por el tema del predio estaban los tres secretarios, Molina, Paiz y Gutierrez, que no estaba Monteros en la reunión.

Dijo que el pedido se lo hacían por notas por intermedio del delegado de obra, así se le hacía saber al empresario, se le trasladaba la inquietud por juguetes para el día del niño o útiles escolares, lo que estuviesen pidiendo. Que el delegado hablaba con la empresa y le llevaba la inquietud del gremio. Las notas las entregaba al empresario el delegado.

Expresó que los que concurrieron a la reunión no eran dueños ni apoderados y no tienen poder de decisión, por eso hicieron la presentación de la nota a la empresa para que fuese alguien con sello y firma, y de un sí o un no y se pudiese charlar. Que en un caso fue un ingeniero pero no tenía el poder de decisión del pedido.

Le indicó al señor Fiscal que en el predio tenían un seguro contra terceros, no son una empresa, pero en caso de accidente era eso. Que se trata de personas desocupadas que por voluntad propia iban a dar una mano al predio para hacer los trabajos, eran desocupados, se hacía por intermedio de un seguro contra terceros, no recuerda la empresa de seguros porque no es personal administrativo.

Que esos trabajadores estaban por voluntad propia dentro del predio y no fueron puestos en ninguna nómina de ninguna empresa; que no se firmó nada con las empresas sobre esos trabajadores para deslindar responsabilidad.

Que cuando empezaron a hacer el primer trabajo, todavía no habían ingresado las empresa, desmalezaron a pulmón; y cuando llegaron las empresas las obras las hicieron los operadores de las máquinas. Que lo que hicieron al principio las empresas se hace con una máquina y un operador. Que para el cordón cuneta se forma una cuadrilla de 4 operadores, se ponen los moldes, traen el hormigón y se pone en los

moldes. Esos operarios eran de las empresas. Reiteró que los desocupados no se los afectaron a las empresas.

Reiteró que en el año 2015 dieron premio o gratificación de fin de año y estaban llegando a fin de año y la cámara a nivel nacional y el sindicado a nivel nacional estaban tratando de juntarse, que no sabe bien de esas reuniones, no las puede confirmar. Que de la UOCRA Bahía se comunican con nación. Que es el secretario general el que habla con la central y en esa época era Monteros, él era el que se comunicaba a nivel nacional, que ellos eso no lo hacían. Que su puesto era secretario general adjunto, que se podría decir que es el que sigue si el general está convaleciente, siempre y cuando la nacional lo ponga en el cargo.

Dijo que se podía charlar con Monteros pero había cosas que a nivel nacional ellos no hacían hincapié porque tenían inconvenientes a nivel local, que se pasaban en las obras de la seccional y cree que para ese entonces estaba en Coronel Suarez.

Al doctor Jara le contestó que a nivel seccional local lo que es obra civil pagaron un premio de mucho menos dinero, cree que de 2.000 pesos; pero no estuvo en esas reuniones, y a nivel polo petroquímico sí sabe que se pagó, pero tampoco estuvo en esa reunión. Que nadie se ha negado a pagar el premio, que siempre se trató de consensuar, charlar, hablar para llegar a un monto.

Al formular su segunda declaración en las audiencias de juicio, el día 20 de agosto, el señor Burgos manifestó que en el año 2010, el 6 de enero, el señor Monteros le pidió ser colaborador de la Secretaría, por lo que ahí ingresó a la comisión directiva de UOCRA Bahía Blanca. Que luego, en el año 2012 se realizaron las elecciones a nivel local, y con la lista blanca ganaron, asumiendo el declarante como secretario adjunto de Bahía Blanca el día 22 de abril del 2013, junto con Monteros, Paredes, Gonzalez alias Chuky, Riffo y Villegas.

Contó que en el 2010 empezó a hacer relevamientos para Monteros y para formar la sexta sección, logrando que la UOCRA central les alquile un local en Irigoyen al 700 de Coronel Suarez para hacer la delegación de la sexta sección. Indicó que se eligió Coronel Suarez porque ahí había una delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde estaba como jefe Rodolfo Fruet y desde ahí se hacían todas las inspecciones a la sexta sección.

Mencionó que eso no incluía Villarino y Patagones porque para allá que era otro distrito que también pertenecía a Bahía Blanca. Dijo que las denuncias se realizaban en Suarez y los inspectores de seguridad e higiene se traían de Tres Arroyos; que Bahía Blanca era parte del Ministerio de Trabajo de esa ciudad y todo para el sur.

Contó que desde el año 2013, que asume como secretario adjunto él estaba en Suarez y la zona de influencia, y en Patagones y

Villarino estaba Molina, y en Bahía Monteros y dos secretarios que asumieron junto con ellos. Que Molina y el declarante no se metían en la zona del otro, ya que cada uno tenía un sector, aunque podía ser que alguna empresa estuviese trabajando en las dos zonas con obras distintas; pero cada uno tenía su zona y manejaba las denuncias y todo eso, y los requerimientos de inspección en cada zona; que los empresarios se relacionaban según cada zona.

Reiteró que su tarea empezó en el 2.010 por el pedido de Monteros, quien le dijo que tenían que hacer una delegación en la zona de Suarez de la sexta. Que por eso iba periódicamente a Suarez hasta que tuvieron la delegación, y eran muchas las obras de gran infraestructura que se estaban realizando.

Relató que empezaron a hacer inspecciones y con el requerimiento de documentación, que empezaron por los edificios y por los monotributistas que eran los que más trabajo hacían en la zona, tenían dos o tres personas a cargo, había muchos monotributistas con trabajadores en negro, hicieron muchas denuncias, y todas las denuncias iban firmadas por el declarante ya que era el único autorizado por el estatuto para formularlas.

Señaló que ha denunciado a muchas empresas y el Ministerio de Trabajo las ha infraccionada; que en barrios de viviendas encontró hasta más de 60 personas en negro.

Que luego se habló con las empresas y se fue acomodando, no tanto con los monotributistas, para que pusieran en blanco a la gente. Que a algunos no le daban los costos y no podían poner a la gente en blanco y menos darle los beneficios que corresponden a un trabajador.

Refirió que Víctor Allende es monotributista y no menos de 10 denuncias le habrá hecho, y nunca regularizó su situación, le ha constatado falta de aportes, trabajo en negro y ni hablar del 911 que es seguridad.

Apuntó que “lo más cómico es que no lo conozco”, que lo denuncia cuando le traen las infracciones los delegados en la obra, cuando se le deja una documentación para que regularicen.

Reiteró que no lo conoce personalmente, lo ha visto en la televisión. Que a las obras, con el cymac que es una documentación interna de la UOCRA donde se detallan las condiciones laborales, van los delegados y ellos hablan con los empresarios. Que puntualmente recuerda que Allende no tenía ni los permisos municipales para hacer la obra.

Dijo que en el cymac, una copia, se le entrega al empresario para que regularice la situación en 72 horas. Que con el tiempo muchos monotributistas han cumplido incluso les han dado prórrogas.

Contó que el señor Allende tenía construcciones de viviendas, refacciones de viviendas y tenía dos o tres muchachos trabajando. Que lo ha denunciado y cuando iba el inspector del Ministerio de Trabajo lo hacía

con un inspector laboral que puede hacer inspecciones pero no clausurar la obra, dado que los que están facultados para clausurar son los de seguridad e higiene laboral; que es por esto que Allende seguía trabajando.

Apuntó que ha despedido a su gente y luego estas personas les reclamaban porque los habían echado por hacer inspecciones.

Expresó que los inconvenientes con Allende fueron en el 2015 o 2016, cuando empezaron las campañas para la elección de intendente y presidente, y ahí Allende empezó a agraviarlo por los medios televisivos, porque le había hecho muchas inspecciones y pagar muchas multas, y en una o dos ocasiones le clausuraron las obras. Que Allende le hizo una denuncia penal y el declarante luego le hizo una querella con el abogado Cerniesky.

Expuso que escuchó a Allende al declarar en el juicio y “él miente en decir que yo le pedía dinero, nunca le pedí ni nunca me dio” –así sus palabras-. Dijo incluso que a muchos monotributistas le han pedido cosas para el día del niño, 22 de abril, para el móvil sanitario, la fiesta de fin de año y campañas que hicieron en Suarez para congresos para evitar accidentes y Allende nunca aportó, cosa que sí hicieron otros empresarios.

Sostuvo de Allende que la versión de él siempre fue de agraviar, y esto fue porque era una campaña política y un pariente de Allende o alguien cercano estaba postulado para el partido del pro. Que

Allende nunca respetó nada, siempre fue de agraviar, hasta incluso en esa campaña llamó a la ciudadanía a que lo denuncien y esto está gravado, llamó a todos los empresarios y fueron 10 monotributistas amigos de él, cuando en Suarez hay más de 100 empresarios.

Señaló que con el hijo de Carcereny nunca se trató ni tuvo reunión, con Manuel Carcereny sí, cuando estaban en Suarez radicados fue a hacer tres obras, dos escuelas y un jardín de infantes, tuvieron reuniones, las primeras en Bahía Blanca para poner las condiciones como tenían que ser. Era una obra muy grande y las reuniones eran para pedirle que ingresara con todas las condiciones laborales como tenía que ser; que se pusieron de acuerdo en muchas cosas, como el artículo 9 que dice que tiene que tomar gente del lugar donde se va a realizar la obra. Que ese artículo 9 está en el convenio del 75 76 que sigue vigente y dice que toda infraestructura de media o grande capacidad el 70 por ciento de la gente tiene que ser de la localidad y el 30 puede ser foránea pero con calificación de oficios que no se tengan en el lugar.

Apuntó que en el gremio tenían la bolsa de trabajo y ahí se anotaban todos los compañeros.

Dijo que no se le pidió dinero, al menos él no, ni porcentaje de la obra, ni nada. Sí luego, cuando se empezaron a realizar las obras,

colaboraciones para su personal para el día del niño y otras fiestas para el personal de él.

Expresó que nunca se reunió con el hijo de Carcereny, ni con otra persona de la empresa.

Que existieron conflictos en las obras, que los primeros fueron en los movimientos de suelo y como él toma mucho personal, casi el 70 fue de Suarez, se pusieron de acuerdo porque él quería tratar de acomodar el costo de una obra provincial que sabía que iba a tener certificaciones que iban a tardar en cobrarse, y por eso se dispuso un corte de 12 a 1 y la gente no comía en el trabajo ni recibía viandas; que eso ya fue charlas de los delegados, dado que el declarante no iba a las obras.

Que luego tuvieron conflictos que le comentaron los delegados y charlaba con él y si no lo solucionaban hacía las denuncias ante el Ministerio de Trabajo.

Contó que una vez despidió a todos porque no les llegaban los certificados, echó a todos, lo hizo de forma abrupta porque no les podía pagar, pero no les avisó a ellos en el sindicato, como ha pasado con otras empresas; y por eso ahí tuvieron que hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo con Fruet y se llamó a una conciliación obligatoria, para que en 20 días se acomode la situación, todos ingresan de nuevo a la empresa y en 20 días se tiene que solucionar la cuestión, y luego firmaron un acta acuerdo en

la cual él se comprometía a pagar lo que debía y todos volvieron a trabajar. Que durante ese tiempo hicieron un acampe frente a la municipalidad, luego en Bahía Blanca frente al depósito o las oficinas de Carcereny porque habían despedido a todos y no les habían pagado. Que luego de esta conciliación se comprometió a pagarles pero no les pagó, despidió a muchos y luego quedaron desafectadas las obras y terminó en juicios laborales en los que los delegados terminaron haciendo acciones legales y le ganaron el juicio.

Expuso que un monotributista tiene una camioneta, una hormigonera, una carretilla y un baño, y no pueden impedir que entren a la obra, y menos podían hacer cosas como daños a los vehículos, dado que no tenían infraestructura. Que sí quizás una empresa vial tiene maquinarias y vehículos, pero los monotributistas no. Que por esto sostiene que lo que dijo Allende son todas mentiras.

Mencionó que con Block, Schro y Simón no tuvo relación. Que nunca les pidió dinero, ni se reunió con ellos. Que las cosas que le acusan no las hizo, que lo que hablan de los delegados es cuestión de lo que ellos hablaron con los delegados. Que a él nunca le dieron dinero.

Apuntó que a Evangelista lo conoce, que cuando asumió como secretario adjunto la empresa Ingeniería y arquitectura va a hacer una obra en Suarez, 6 u 8 cuadras de asfalto en un sector donde estaba ABSA y ahí lo conoció. Que antes había tenido relación con otros ingenieros, quienes le

transmiten que el que manejaba era Evangelista y por eso se pone en contacto para que respete las normas, porque había llevado gente de Bahía a Suarez, que respete el art 9 y contrate gente de Suarez y lleve maquinistas de Bahía porque no tenían en Suarez, pero sí tractoristas y llegaron a un acuerdo y tomó gente de Suarez.

Expuso que lo conoce en el 2.012; que Evangelista dice que lo conoce desde el 2.005 y el declarante en esa época trabajaba en una empresa como maquinista.

Comentó que en Suarez había más de 100 empresarios y monotributistas, más los que están en Pigué, Puán, Carhué, y por eso le resulta extraño que 7 hablan de él, cuando ha hablado con TGS, o con Talmosqui a quien lo enganchó con más de 50 personas fuera del 911 y se acomodó y siguió tratando bien con UOCRA.

Apuntó que quiere pensar en que se metieron en una situación en política en el gremio y todo esto fue manejado con la primera denuncia de Allende que hacía campaña por el Pro; y lo mismo se hizo en Bahía Blanca, con las cámaras industriales.

Refirió que a Gurrado lo conoció en el 2.016, antes nunca lo había visto, que los invitó a un acto a la cámara que cree que fue para la asunción del mencionado. Que nunca le pidió dinero, ni le dio dinero al declarante.

Expresó que en la ruta hacia Villa Iris, que arranca en la rotonda con la 35, es un trabajo que tomó Vial Agro y por eso tuvo muchos conflictos con Quantín, por la forma que tiene de trabajar, dado que no tomaba gente de la localidad de Villa Iris; que por eso tuvieron denuncias y conflictos laborales y también 911, tuvieron casi un año y luego se regularizó, la equipó a la gente, llegaron a buenos acuerdos, los maquinistas eran especializados y los ponía Vial agro, pero la gente que trabajaba en ruta era de Villa Iris.

Contó que no le proveía comida a la gente y le pagaba un viático en el recibo de sueldo, y esto no es así, el convenio dice que tiene que dar comida cuando empiezan en un horario y terminan en otro, y desde el gremio reclamaban que le dieran comida, que tuvieran baño, asistencia de comedores y casillas en los frentes de trabajo, seguridad, tambores, banderilleros. Que todos estos conflictos fueron con Vial Agro, y con ingenieros de él y con él en una denuncia que pasó lo mismo que con Carcereny, en Tres Arroyos en el Ministerio de Trabajo y se dispuso conciliación obligatoria y luego se acomodó todo, él empezó a darle comida y transporte al personal.

Señaló que al señor Quantin, presidente de la Cámara industrial, nunca le pidió dinero, ni le dio él dinero.

Consultado por su defensa respecto de la cuestión de los acuerdos de salarios por encima del convenio, respondió que cuando se

asume en una secretaría lo primero que se aprende es el convenio y ahí dice que tiene que darle beneficios a sus representados. Que hoy el estatuto social dice que no pueden dejar pagar menos, pero dice que pueden conseguir beneficios para sus trabajadores. Que por eso empezaron a gestionar en toda obra, por ejemplo en la ruta 35 que era de 300 millones el presupuesto, y los beneficios en ganancias son para los empresarios, y es por eso que se pidió pero no excesivamente.

Comentó que hoy, en el polo petroquímico, los premios que consiguieron desde el gremio están vigentes, se siguen pagando y fueron firmados y acordados en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Señaló que le extraña lo que está surgiendo porque la Cámara de la construcción que es vial y a la cual le hizo muchas denuncias son los que están en el juicio, pero no encuentra denuncias de más de 60/70 empresarios y hay una cámara del polo petroquímico, ni tampoco del parque industrial, o la cámara de construcción de edificios, y en esos casos no hay una sola denuncia; como tampoco de las pymes, donde hay más de mil empresas; que es por eso que quiere pensar que es político, nada más.

Al doctor Zorzano le contestó que no sabe quien era el pariente de Allende que iba de candidato, que era lo que se comentaba, le parece que era para concejal, pero no lo sabe porque eso pasó en el 2015 y el declarante no se vincula en política. Que saca sus conclusiones porque ha

visto que Allende citó a toda la población a que lo denuncie, lo difame y hasta dijo que lo metieran preso, y esto lo hizo en el Concejo Deliberante de Suarez con varios asistentes que eran concejales en ese momento por el partido del Pro.

Que con respecto a los señores Schro y Simón, dijo que calcula que cuando él llama a que lo denuncien, cuando fueron al Concejo Deliberante estos amigos monotributistas fue porque los denunció por las condiciones laborales.

Le indicó al señor Agente Fiscal que no participó en la MUOCRA, que esta es una agrupación que lleva adelante en las elecciones a la lista blanca a nivel nacional y ellos eran lista blanca en esta seccional, que en esa lista estaban los que se postularon en el 2.012.

Dijo que la Asociación Mutual Construcción Solidaria, que aparece en el cartel de la MUOCRA, es una parte de la MUOCRA, es un ente que da beneficios hacia los afiliados de UOCRA, los que pueden ser de vacaciones, vínculos recreativos y beneficios para los obreros de la construcción. Que no sabe donde funcionaba, ni estaba a cargo de eso.

A la doctora Busteros le contestó que a Julián Allende lo conoce, que es el hijo de Víctor Allende. Que la querella la inició con Cerniesky como abogado, pero no recuerda la fecha.

Podemos observar en esta declaración que el señor Burgos dio su explicación sobre las reuniones mantenidas por la cuestión del premio de fin de año y por las obras en el predio del gremio. Expuso como fueron para él los hechos, pero esta versión no se corresponde con la realidad de lo acontecido. Conforme surge de la abundante prueba testimonial relacionada con cada una de estas situaciones (la que ya ha sido analizada de manera extensa), lo que ocurrió fue la ejecución de una conducta intimidatoria para generar temor y forzar así la voluntad de los sujetos que tuvieron que realizar las disposiciones patrimoniales.

Desconoció el señor Burgos haber mantenido reuniones con los señores Medús (en forma personal), Víctor Allende, Manuel Carcereny, Block y Simón. Sostuvo que a ninguno de ellos les solicitó la entrega de dinero.

La prueba choca contra sus dichos. No existe motivo alguno para dudar de lo expuesto por los distintos testigos, incluso existe una grabación de una de las situaciones que fueran comentadas por Allende y García en la audiencia de debate.

El señor Víctor Allende, al igual que su hijo, contó que había mantenido charlas con el señor Burgos en distintas oportunidades, y es por esto, al ver lo que acontecía con su hijo, que decidió hacer pública la cuestión.

Si bien la reunión a la que convocó Allende se realizó en el Concejo Deliberante, no existe dato alguno para corroborar que la finalidad de esto y de la denuncia que luego le formuló al señor Burgos, fuese por cuestiones políticas, tal como indica el acusado al tratar de explicar que todos declaran en contra de él porque deben haber tocado intereses políticos.

El único vínculo que se advirtió entre las personas de la localidad de Suarez y las de Bahía Blanca que vinieron a deponer en estas audiencias fue que se dedican a la construcción; pero de ninguna manera se pudo apreciar la existencia de una confabulación para tratar de mentir y perjudicar al aquí acusado.

Por su parte, el señor Guillermo Molina, con la asistencia del doctor Jara, conectado de forma remota a través de la plataforma Microsoft Teams, indicó al prestar declaración el día 23 de agosto, y al referirse al hecho 12 materia de acusación, que se trata de una obra de Ingeniería y arquitectura, realizada en Patagones, por el asfalto del boulevard, de la cual se enteró por compañeros y por eso lo llamó a Gustavo Evangelista, se reunió y le consultó por la obra, por si iba a tomar gente porque siempre la oferta de mano de obra supera a la demanda. Que le dijo que quería saber si iba a tomar gente de Patagones y que le contestó que tenía la cuadrilla completa y que no sabía si no la iba a subcontratar, por lo que le dijo que no

iba a necesitar más empleados y que si lo hacía un subcontratista él no podía hablar por ese tercero.

Refirió que le comentó el declarante que tenía un problema con Ulloa, un compañero con un hijo enfermo adolescente, que debía viajar al hospital de La Plata y el municipio, acción social, solo le reconocía pasajes y este compañero estaba necesitado de trabajar, para ver si lo podía incorporar o ayudar con los gastos que tenía, porque además de este hijo tenía familia numerosa y la situación económica era mala. Que le pidió que le de una mano con este muchacho si no lo podía tomar, y ahí Evangelista le pidió un par de días, para ver los números de la obra, para ver si subcontrataba y que si podía lo iba a hacer, que iba a ayudar con ese muchacho mientras dure la obra.

Manifestó que a los dos o tres días lo llamó porque había pasado tiempo y luego se encontraron y ahí Evangelista le dijo que podía aportar una suma de 8 a 10 mil pesos por mes para que se los haga llegar a Hernán Ulloa. Que el deponente le dijo que si quería le pasaba el número de Ulloa para que él le entregue el dinero y que le contestó que no, porque era en Patagones y que él se los acercase. Apuntó que se lo acercaba a través de Roberto Limpiante que es el líder de los trabajadores en Patagones y él hacía efectiva la entrega de ese dinero, o cuando el declarante viajaba a Patagones es que le ha llevado este aporte que le hacía llegar Evangelista a Ulloa, a quien llamaba a la agrupación y se lo entregaba.

Expuso que esa ayuda inició en 8.000 o 10.000 pesos y luego Ingeniería y arquitectura se adjudica otra obra en ruta de una duración de tres meses, por lo que vuelve a hablar con Evangelista y le dijo que prolongaba la ayuda a Ulloa y ese valor llegó a 11 o 12 mil pesos porque había aumentado el salario de los trabajadores.

Comentó que a la actividad sindical se dedica desde el año 1986, porque era docente, y en el 88 le dieron forma a la primera comisión del sindicato de trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, SUTEBA.

Que en el año 1997 se titularizó el cargo provisional en docencia que él ocupaba, por lo que quedó desocupado en docencia, y en el 97 se comienza a ir al balde la economía, y como tenía tres hijos, con otro muchacho empezaron a tomar trabajo de pintura de obras de vivienda, y con eso iban tirando hasta que llegaron al año 1.999, donde conoció al abogado Diego Cerniesky y ahí se arrimó a una agrupación vinculada a la industria y construcción de Bahía Blanca, y luego le dieron forma con Cerniesky a un proyecto de ley que se llamó ley de emergencia ocupacional, dado que Bahía y Mar del Plata tenían el mayor índice de desocupación del país, el cual tuvo tratamiento parlamentario, pero quedó ahí. Que en ese momento consiguieron más de 10 mil firmas apoyando el proyecto, y además consiguieron tramitar DNI para desocupados y bolsas de comida. Que en el 2003 entró a trabajar formalmente, se alejó de la agrupación, y entró a

trabajar en la federación de clínicas por el convenio con PAMI, en su función de trabajador social, ahí trabajó con los centros de jubilados y para explicar el alcance del convenio para su utilización óptima. Que recorrió los centros de jubilados de Bahía y la zona para explicar esto a los jubilados, y luchar contra el cobro del plus de los médicos a la gente en el PAMI. Que en el 2005 lo despiden en la federación de clínicas porque el nuevo gobierno cerró el acuerdo, por lo que no tenía objeto su permanencia ahí.

Manifestó que en agosto del 2005 se cruzó con Monteros en la calle, charlaron y le comentó que estaban formando una lista para las elecciones, y que estaría bueno si le podía dar una mano para armar los listados de compañeros para ir a visitar y hacer proselitismo por la lista. Que como estaba desocupado y había vuelto a ver la posibilidad de volver a la pintura, empezó en la agrupación que funcionaba en calle Berutti, y trabajó en eso y en las elecciones de diciembre 2005, donde ganó la lista azul y blanca que encabezaba Monteros. Que la asunción es el día 22 de abril del 2006.

Comentó que durante el mandato de esa comisión el deponente era ayudante en la empresa Maike construcciones que se dedica a hacer placas radiográficas de gasoductos y oleoductos. Que en la UOCRA no hacía nada, era un compañero de la MUOCRA, no tenía ningún cargo en esa comisión. Que sí fue elegido delegado en la empresa y el cuerpo de delegados es una instancia formal del gremio, con lo cual empezó a

participar de los plenarios de delegados y se empezó a interiorizar de las funciones de delegado en obra y luego es convocado por la comisión ejecutiva para que a través del artículo 100 desarrollara tareas gremiales, como es la emprolijar todo lo que había para tratar de armar un plan de viviendas de afiliados de UOCRA, dado que lo único que se tenía era un terreno que le habían dado al gremio y las autoridades anteriores se lo habían pasado a espectáculos públicos. Que por esto se conectó en provincia y les hizo llegar un acta firmada por Filiberto Vallejos que hablaba de esos lotes y luego se termina con la cesión de esas tierras por parte de Scioli que era gobernador.

Expuso que realizó gestiones en provincia para el análisis del proyecto de viviendas, los planos, y también acciones que pedía el municipio, reuniéndose con Revale quien los fue guiando en los pasos para poder concretar el proyecto, que era conseguir las autorizaciones de los servicios para ese territorio, agua, luz, gas y demás. Que gestionaron el plan federal dos del Ministerio de Obras de la nación, subsecretaría de viviendas a cargo de Bontempo, y presentaron los papeles para obtener el dinero para construir 72 viviendas.

Contó que la parcela es usurpada mientras se hacía el trámite, un esquinero por parte del club Villa Mitre y por el otro el municipio había abierto la prolongación de la calle Santa fe que pasaba por la parcela, por lo que se reunieron las partes y luego acordaron un plazo para poder recuperar

toda la superficie del terreno para poder construir el barrio. Que esta obra se licitó y quedó vacante, se fijó una nueva fecha y se adjudica en el 2015 a la empresa Arkinjam pero no se le otorgan los anticipos financieros para comenzar las obras y luego la empresa pide redeterminación de costos y el 23 de marzo del 2016 la obra es adjudicada a esta empresa.

Expuso que durante el año 2015 al 2017 fue secretario de finanzas en UOCRA, explicando que es un gremio que es verticalista, no es un sindicato donde las seccionales tienen cierta independencia; que acá son comisiones ejecutivas, ejecutan lo que dice Gerardo Martinez, y esto se reproducía en las seccionales en la figura del secretario general que era Humberto Monteros. Comentó que la seccional es la más extensa de toda la provincia de Buenos Aires.

Comentó que Monteros priorizó los recursos con los que contaba para que la legislación laboral se controlase de la mejor forma posible. Que la tarea asignada al declarante por Monteros fue hacerse responsable de los distritos de Patagones y Villarino; y además, como son 5 secretarías, incluyendo la general, se dividió en cuatro partes la ciudad de Bahía Blanca y se le dio la responsabilidad de esa cuarta parte de la ciudad.

Relató que su tarea era comprobar, auditar y garantizar la legalidad de la actividad, que era seguridad en la obra y en la parte laboral que ningún trabajador cobrase menos de lo establecido en paritarias, que eran 88 horas en recibo de sueldo mínimo y ese era el piso, dado que en

algunas obras había un acuerdo mayor. Que además de lo legal se ocupaba de todo aquello que se pudiese mejorar en el transcurso de la obra o en la persona del trabajador concretamente. Que para ello contaba con la legitimidad de su cargo de dirigente sindical y un par de compañeros delegados de obra que como habían recorrido con él, los que por el artículo 100 eran convocados a desarrollar tareas gremiales en lugar de estar en obras; que estos compañeros recorrían el territorio y cuando se detectaba una obra le informaban. Que a veces concurría solo el empresario si era más responsable y se charlaba la posibilidad de mejorar la paritaria. Otros iniciaban la obra y cuando se enteraban en el gremio, la gente que trabajaba con él iba a la obra, hablaba con el capataz o el dueño y con el cymat, que era un cuadernillo de 6 hojas que decía toda la documentación necesaria para llevar adelante una obra, altas tempranas de los trabajadores para acceder a la obra social, permiso municipal, programa o nombre de la empresa de seguridad e higiene y dos o tres cosas más, que era la documentación que los empresarios tenían que presentar para realizar la obra, y tenían por ley 24 horas para presentar los papeles, por lo que se les daba una copia del acta y alguien firmaba una copia, y luego en segunda etapa se detallaba las características de la empresa, nombre, si era sociedad, monotributista, contratista, si era subcontratada, nombre del comitente, nombre del técnico en seguridad e higiene, cantidad de operarios, después venían dos hojas múltiples choice donde se marcaba si

cumplían plenamente, a medias o no, y luego una planilla donde se registraban los datos de los trabajadores, sueldo, especialidad, horas de trabajo, la firmaba el capataz y luego otra hoja en blanco en donde quien hacía la inspección hacía un informe de la visita a la obra y era para también un eventual seguimiento de la obra, para hacer actualizaciones cuando se visitaba la obra. Que se sacaban fotos de las cosas que estaban de forma incorrecta en la obra, sobre todo en seguridad.

Explicó que ante incumplimiento ocurrían dos cosas, una de menor escala por cuestiones a acomodar y se charlaba con la empresa para un plazo lógico para poner en orden su obra, las cosas mínimas como matafuego, una red en una zanja, cartelería de obra, el afiche de la empresa de seguridad e higiene por línea de vida ante un accidente donde llevarlo y llamar, y algún problema como cables en el suelo en la obra, y eso se consensuaba con el empresario, para ver el plazo que necesitaba para solucionar ese tipo de cuestiones y luego se volvía a la obra para corroborar que cumplía.

Que luego a través de una copia del cymac se denunciaba en el Ministerio de Trabajo al efecto de informar a la unidad de aplicación que en tal lado se estaba construyendo una obra con estas falencias, por interés por los compañeros, para informar al Ministerio que la obra no se llevaba a cabo como debe ser, para que lo corroboren porque la UOCRA no tiene

poder de policía, no puede ingresar a la obra si no es autorizado por quien está al frente de la obra, pero el Ministerio de Trabajo sí.

Apuntó que la obra se para cuando hay riesgo de vida, como el trabajo en altura sin pantallas de protección o hay aberturas de ascensores sin vallado, alguna cuestión muy objetiva y concreta de riesgo de vida.

Consultado por el doctor Jara si por falta de pago de salarios se para la obra, contestó que se agota administrativamente la posibilidad de que la empresa normalice, no se para la obra por el atraso de un día, la empresa tiene 5 días luego de terminada la quincena para abonar el valor, pasado el quinto día entra en infracción, al sexto se le dice y consulta, y luego pasados 3, 4 o 5 días de advertencias y no solucionar el problema, se hace asamblea permanente, que no es paro de la obra, pero hasta que no reciban el sueldo no continúan con los trabajos.

Recordó que con Atkinton estuvieron medio día detenidos porque se había atrasado varios días, y se detuvo el trabajo entre las 8 y las 9 de la mañana, y a las 12 el empresario avisó que estaba en las cuentas. Y también otro problema con Carcereny en Luro, en la escuela secundaria que hacían en Pedro Luro, por falta de pagos de certificados de obra que según decía Carcereny y además que estaba infraccionada por el Ministerio, él decidió abandonar la obra sin pagar los salarios y se le impidió retirarse con sus cosas hasta que pague porque los trabajadores no tenían de donde cobrar. Comentó que Carcereny fue citado al Ministerio por estos salarios

caídos y se hizo un acuerdo (que puede estar en manos del fiscal luego de allanar el gremio), donde Carcereny se compromete a pagar los salarios caídos y esto se informa a los compañeros de Luro y ellos liberan el paso para que Carcereny se lleve sus herramientas a donde quería.

Manifestó que le solicitaba a los empresarios si podía tomar a algún compañero de la plantilla, y frente a esto ha recibido respuestas que sí, de una ayudante o dos que han incorporado, y otros que le han dicho que no, que no podían contratar más gente porque los valores no le daban para blanquear otro trabajador, porque es un doble gasto casi, es un doble sueldo.

Apuntó que cuando tenía conocimiento de un compañero que estaba en situación acuciante, demostrable y objetiva, le solicitaba si podía colaborar con ese compañero en lo que pudiera, y algunos le han dicho que sí y otros que no, y otros que iban a ver más adelante, pero el declarante siempre, luego de dejar en claro toda la parte legal, le pedía la posibilidad de incorporar más personal y a veces lo hacían y luego se controlaba la obra con las inspecciones normales; y sino le podían tomar gente y tenía alguna dificultad concreta de algún compañero le solicitaba ayuda específicamente para ese compañero, “como conté lo de Ulloa, y le dije a Evangelista que él le haga llegar la ayuda, cosa que él no quiso hacer y me la daba a mí” –así sus palabras-.

Expuso que no se negociaba lo que era legal, bajo ningún punto de vista se negociaba la legalidad de la actividad. Que esto significa con el artículo 9 que las obras deben ser llevadas adelante por los trabajadores del lugar y se hace mención a la seccional, y la dificultad es que nuestra seccional es inmensa territorialmente y la responsabilidad sindical es sobre todos los trabajadores, no solamente los que viven en el lugar y no le interesa la nacionalidad, lo tiene que defender esté o no afiliado, es una decisión voluntaria la afiliación del trabajador. Que su visión es que el dirigente debe tratar de solucionar la problemática de todos los trabajadores de la construcción, no solo de algunos.

Refirió que en obras de Carcereny construcciones, empresa que hoy cambió de nombre o razón social, llamaba la atención la cantidad de obras adjudicadas, porque había accedido a la construcción de un jardín y una escuela en Luro, y otras adjudicaciones más, y esto era curioso porque había abandonado un jardín en Patagones.

Dijo que tomó contacto con él y le dijo que tenía la cuadrilla completa, que le preguntó quienes eran y le pasó una lista de 4 trabajadores de nacionalidad paraguaya y le dijo que eran de la zona, que no vivían en Luro pero eran de Villarino y tomó como válida esta declaración. Que aceptó el dato que le brindaba, y luego le hizo notar que eran dos obras y tenía gente desocupada en Luro que iba a ver trabajar esa gente que no era de Luro, y si bien no incumplía el artículo 9 porque eran de la sección, le pidió

una ayuda para dos compañeros en situación acuciante, que uno era Ernesto Arias que tenía un hijo con cáncer y estaba sin trabajo. Que no le pidió que echara a dos ayudantes, sino que tomara a otros dos más, y él le contestó que ya tenía su cuadrilla de 4 y no podía tomar más gente. Que le insistió por los compañeros que estaban en mala situación, el hijo con cáncer de Ernesto Arias, quien no tenía ni trabajo ni obra social, y el otro compañero Julián Reina que hacía un tiempo que estaba sin trabajar y tenía una familia numerosa de 4 hijos.

Señaló que ante su pedido Carcereny les dijo que los tendría en cuenta, que si necesitaba más gente los convocaría, o si tomaba una nueva obra, y que hasta tanto eso ocurra iba a cumplir con alguna colaboración, para que se les solucionase de alguna forma la problemática económica, por lo que mientras duró la obra ofreció y cumplió –acotó el señor Molina- aportando 10.000 pesos para cada uno de estos trabajadores.

Dijo Molina que uno de ellos contó aquí en el debate que todos los meses se le proveía de mercadería para cubrir todo el mes y además se le daba 5.000 pesos en mano, que él destinaba a la compra de medicamentos o para la vivienda y familia.

Sostuvo que con Reina se hacía lo mismo, se le hacía un pedido de mercadería no perecedera cuando Gustavo Carcereny le avisaba

que estaba el recurso para retirarlo y se le entregaban 5.000 pesos en la mano.

Expuso que el dinero que aportaba Carcereny era una colaboración, que en ningún caso de colaboración existe una amenaza, ni ningún tipo de exigencia, que es una colaboración que no tiene otra forma de ser que no sea voluntaria.

Señaló que Evangelista y Carcereny mintieron, que fueron funcionales a algo que le gustaría explicar luego de las preguntas de la defensa y la fiscalía.

Comentó que algunos han colaborado y otros no, que es un pedido o solicitud de colaboración que se hacía de acuerdo a las características de la obra y de la empresa, y ellos hacían o no lugar a eso.

Apuntó que hay una situación más estructural por la que hay una predisposición a la colaboración de las empresas. Que suponiendo que en Bahía sean 500 empresas, el declarante está denunciado por 5 empresas, es decir, por el 1 por ciento, en una situación que describió bien el doctor Cerniesky, donde todo aquel que se sentía estafado iba, denunciaba y dejaba de colaborar, pero únicamente el 1 por ciento de las empresas que son proveedores del municipio y se quedaron con toda la obra municipal, y llevaron adelante juntas la misma obra y se quedaron con las obras de la zona son las que han denunciado.

Que está convencido que no son representativos de la norma, sino de la excepción, la gran mayoría de los empresarios colaboran y cree que colaboran porque en la construcción se da una situación en la que la obra mediana o para arriba mueve valores, se lleva adelante con dos variables, la empresa y los trabajadores, uno no puede trabajar sin el otro; pero cuando las obras terminan la ganancia se la lleva la empresa, y no se produce lo más lógico que sería que la ganancia que debería ser el 50 para la empresa y el 50 para los trabajadores; pero como esto no ocurre, es por eso que la empresa que no tiene otras segundas intenciones como las denunciantes, no tienen ningún inconveniente en colaborar cuando las características de las obras se lo permiten y en la medida que ellos consideran justo y necesario.

Apuntó que en la prensa se habló mucho de las mafias, que está la CECIL que nuclea a las empresas del parque industrial y ninguna de esas empresas se sumó a esas ridículas denuncias de extorsión, por el contrario, los señores Pellegrina y Arrieta concurrieron al debate convocados por la defensa.

Expresó que con relación al hecho 17, de la empresa Coince, la obra de desagüez pluviales en Luro, se trata de la empresa de Tepliz, que trabaja en Villarino, es paisano de ahí, y que no sabe si esto tiene que ver con la cantidad de obras que hacen por la zona. Que la obra de Luro duró unos 7 meses, y que ahí se juntó con Salguero y le preguntó por la cantidad

de gente que iba a necesitar, le dijo que tenía desocupados de la bolsa y le tomó dos personas, entran en la obra Leandro Martínez y José Sanchez.

Que habló de las cuestiones de seguridad e higiene, y de lo laboral; y que no había posibilidad de incrementar las paritarias; que sí iba a incorporar más personas.

Señaló que en ese momento no tenía razón para solicitarle colaboración. Que al mes y medio, Fabián Martínez, compañero de Luro que conoce a los trabajadores, le comentó que Navarrete, un muchacho de 24 años, con experiencia de vida traumática, mayor de 8 hermanos, que dejó la escolaridad y perdió a su madre, necesitaba trabajo, por lo que lo volvió a convocar a Salguero para plantearle la situación, diciéndole que era una familia que vivía hacinada, varios hermanos que a su vez eran ya padres, una hermana con pareja y una criatura, y le pidió si podía tomar a este compañero, ante lo cual, Coince que siempre tuvo amplia disposición con este tipo de cuestiones se ofreció a colaborar de la misma forma, y a tenerlo presente por si lo necesitaba en alguna obra a futuro y mientras tanto iba a colaborar, que no le dijo una cifra pero que le iba a avisar para como hacer la ayuda.

Comentó que la obra se desarrolló sin inconvenientes, terminó en tiempo y forma, y durante 5 meses Salguero colaboró mensualmente con un dinero de entre 8 a 10 mil pesos que se le hacían llegar a Navarrete. Dijo

que le ofreció que lo haga él a la entrega, pero que le dijo que no, que lo llamaba cuando lo tenía, para que el declarante se lo acercara.

Ante la consulta del doctor Jara para que explique por qué Salguero dice que fue obligado, contestó que no fue obligado, que la colaboración no resiste la obligación, ni la amenaza. Que además también colaboraban con el día del niño, con un par de bicicletas, y el deponente con eso no ha tenido nada que ver, pero la situación demuestra que querían colaborar.

Acotó que cree que sabe por qué cambia Salguero el discurso de colaboración a obligación, que lo va a explicar después, porque la situación engloba a todos los denunciantes de sus causas.

Con respecto al hecho 21 referido a una obra de mantenimiento de la ruta 3 por parte de la empresa Abedul, dijo que cuando se le asigna en el año 2012 la zona de Patagones y Villarino, una de las obras que había era la de mantenimiento de las banquinas de la ruta 3, y que por eso se contactó con Luis Medús, se presentó y charlaron de la tarea que llevaba a cabo.

Señaló que le solicitó a Medús incorporar a una persona más a la plantilla, y que él le dijo que no porque era subcontratista, dado que la empresa adjudicada era Panedile, por lo que el margen de las ganancias se le reducía considerablemente, pero le dijo que iba a colaborar con el gremio

como venía haciendo desde hacía tiempo, con los señores Cortez, Riffo, Peralta y otros que el declarante no conocía. Que él le contestó que colaborara con lo necesario, que Medús le dijo que empezaba con 300 pesos, y así fue que comenzó a colaborar, siempre con un cheque, nunca con dinero en efectivo, que los cheques eran mensuales, y a veces cuando pasaban dos o tres meses que se desencontraban, sumaba los meses en un cheque de mayor valor.

Expuso que tenía un buen diálogo con Medús, que lo ha visto en la municipalidad, se han encontrado en el Boston y tomado un café, que ahí le alcanzó el cheque de la mensualidad y como estaban cerca las elecciones del 2015 y él tenía posición tomada sobre el gobierno de cambiemos, le dijo que se iba a arrepentir, pero Medús le comentó que tenía una prima que trabajaba con Prat gay.

Agregó que esa fue la historia de los aportes de Medús y la ruta 3, los que al ser un ingreso fijo destinó para el móvil sanitario.

Apuntó que para esa época, con Mario Gonzalez, charlando de la obra social, y estando preocupados porque los trabajadores no llegaban a ser atendidos en los consultorios externos, dado que los mismos cerraban a las 8 de la tarde y los trabajadores salían a las 5 de trabajar, por lo que les quedaba poco margen para ir al médico, fue que surgió la idea de darle

forma al móvil sanitario, para ir con algún recurso preventivo a las obras y luego derivar a los consultorios externos o al hospital.

Que le presentaron el proyecto al secretario general, quien estuvo de acuerdo y ahí empezaron a trabajar con una ambulancia colorada de 1980, una Ford, que les servía para llegar a las obras. Que esto fue antes de la obra de Medús, por lo que, cuando el mencionado hace esta colaboración, destinó todo ese dinero a este móvil sanitario, que medía la presión, la diabetes, luego incorporaron a un enfermero que enseñaba rcp; y una enfermera que no era de la obra social y contrataron con la colaboración de las empresas.

Aseveró que los gastos del móvil sanitario no se cubrían con dinero de la obra social, porque ese aporte de los afiliados no se puede tocar; que es por esto que los aportes de Medús eran destinados a ese móvil sanitario. Que ese dinero de Medús no alcanzaba para cubrir los gastos del móvil, que con las contribuciones de otras empresas que no se han presentado a este proceso se completaba el costo final del funcionamiento del móvil sanitario.

Consultado por la existencia de un audio donde le reclama por un cheque vencido al señor Medús, dijo que en esa oportunidad, fue a modo de excepción, dado que había un compañero de apellido Medina al que le habían retirado el medidor de gas, y era época invernal y el valor de la reposición era mayor al valor del cheque, y como era un cheque al portador

se lo pasó para que completara el costo de la reposición del medidor de gas. Que se le venció el cheque a este compañero, no sabe por qué, y como Medina vivía por el barrio noroeste, se lo dio al declarante porque tenía contacto con Medús, a quien le explicó la situación para ver si le actualizaba el cheque y con la nueva fecha se lo entregó a Medina.

Consultado por el audio donde pregunta que hago Luis? Respondió que por esta escucha telefónica están llegando al 2017, cerca del inicio de la investigación de oficio del fiscal Fernandez donde Abedul comenzaba una obra de asfaltado de la calle Tres Sargentos y por eso se reunió con Medús en la estación de servicio, a donde el mencionado lo convocó porque tenía Medús una suerte de paranoia de ir al gremio porque había gente “negra, fea, grandota”; acotó que no le importaba que era gente que quería trabajar. Que se juntaron en la estación de servicio de 9 de julio y Brown para tomar un café y charlar. Que conversaron por la gente que iba a necesitar, por la posibilidad de mejorar el salario, apuntando que siempre su respuesta era no, y que le dijo que días anteriores se había informado de un compañero de apellido Vinet que estaba desocupado y pasando por una situación complicada con una hija y que se le hacía oneroso el tratamiento de la patología, y además mantener el hogar y no conseguía trabajo, y que por eso le dijo que necesitaba al menos un puesto de trabajo para esta persona. Que Medús le dijo que estaba justo, que lo iba a pensar, y luego le consultó por cuándo y que Medús le pidió que le diera un par de días y le

contestaba. Que dejó pasar ese par de días y lo llamaba y no le contestaba, y ahí fue que le mandó un audio diciéndole esto de “decime Luis qué hago?”, como diciéndole “le digo a este compañero que va a tener trabajo o no”.

Indicó que luego se encontraron en el centro y le dijo que iba a colaborar cuando pudiera, y fue lo que hizo, aportó tres o cuatro cheques que no cobró el deponente, porque era etapa proselitista y viajaba a Buenos Aires, y entonces fue que le pidió a Omar Roca, que trabajaba en el Pena en una empresa y tenía su cuenta sueldo, y era conocido de Vinet, que depositara esos cheques y le alcanzara ese dinero al declarante o si no estaba en la ciudad se los alcanzara a Vinet.

Sostuvo luego que en la obra de calle Tres Sargentos, a fines del 2017, existieron dos o tres cheques porque luego vino la denuncia armada por el Fiscal General Fernandez y el poder político de ese momento; y fue por esto que se pusieron a disposición de la justicia para que investigue y con la promesa del secretario general que los iban a restituir en los cargos, que fue por eso que firmaron el acta para renunciar.

Consultado por el hecho 34, obra de desagües pluviales realizados por la empresa Geomac en el año 2017, en la que el testigo Cowper habría señalado que Molina le pidió 12.000 pesos por mes, respondió que Cowper miente. Que el derrotero de la obra comenzó con mala fe por parte de Cowper porque cuando ellos se hacen de la

información de la obra, la misma ya iba por la mitad, por lo que no tuvo la buena fe de ponerse en contacto con el sindicato y poner en claro la forma de trabajo y tomar gente de la bolsa, no el personal especializado que se respetaba el de la empresa.

Contó que fue el compañero con el cymac a la obra y constata fallas en seguridad e higiene y el capataz –no Cowper- consulta por cómo podían arreglar esto, y su compañero le dice que tenían que hablar con el secretario gremial y poner en regla todo lo que faltaba.

Dijo que al otro día tipo 7 de la tarde fue Cowper al gremio para ver cómo podía arreglar lo problemático, se presentó y ahí el deponente le dijo que era el responsable del cuadrante de la ciudad donde estaba la obra y que según el informe las fallas en seguridad que había que acomodar eran varios, por lo que ahí Cowper pidió 4 días para resolver la situación. Que como era un jueves, le dio hasta el miércoles de la semana siguiente y luego visitarían la obra para ver como estaba acomodado.

Comentó que como siempre le pidió trabajo porque tenía dos compañeros con mucha dificultad, Vicente Rubén Darío que tiene 50 años con algún inconveniente por lo que solo está apto para tareas muy simples, y vivía en la calle y con 6 hijos; que le propuso que lo tomara y le contestó que no le daban los números, que entonces le pidió una mano y le dijo que no, que no podía, que no tenía un peso. Que entonces el declarante le dijo

que duerma bien, coma bien, mientras su compañero duerme en algún lado y se tapa con papeles de diario, que le dijo “gracias por ser tan solidario”.

Contó que al miércoles fue su gente a la obra y estaba en regla, pero como no le agradó en nada la falta de solidaridad, una vez por mes mandaba a visitar la obra, constatándose que estaba en condiciones y finalizó.

Mencionó que la obra no se paró en ningún momento, no se hizo represalia de ningún tipo; que solo le había pedido una colaboración que no le impone la ley, que en su opinión no es un mal empresario dado que cumplía con la ley, pero es persona insensible.

Consultado por el hecho 40, la obra del señor Moreno consistente en un recambio de cañerías, sobre la suscripción de un convenio y si solicitó dinero, contestó que una parte es verdad y otra parte mentira. Que lo que es verdad es que no quería suscribir el acuerdo que se había firmado, era una obra de ABSA que se hizo en toda la ciudad, y la primera empresa fue Conectar, empresa cordobesa que firmó el 35 por sobre paritarias, y luego la comida también y no recuerda si algún otro beneficio. Que luego vino Pose S.A. que hizo el mismo trabajo, lo mismo hizo la empresa Miadaza y Ecosur. Que esto es lo que le comentó a Moreno en el gremio cuando fue a hablar, porque no estaba dispuesto a abonar por encima de la paritaria nacional. Que Moreno no quería firmar ese acuerdo y le dijo que ese acuerdo se había transformado en ley al haberse

homologado en el Ministerio y que el 14 bis dice a igual tarea igual remuneración; que le dijo que estaba en él suscribir el acuerdo y desarrollar las tareas o no estar de acuerdo; que Moreno le mencionó que lo iba a consultar con los abogados, por lo que le dijo que le parecía bien, y fue todo lo que charló. Que después tiene entendido que suscribió el acuerdo e hizo la tarea.

Mencionó que lo de la plata es mentira, que no le pidió colaboración porque no quería suscribir el acuerdo que era lo que correspondía, que si le pedía una colaboración le tiraba una silla por la cabeza. Que no recuerda en ese tiempo de haber tenido alguna urgencia con algún compañero, porque sino se lo hubiese pedido igual.

Consultado por el doctor Jara respecto de la acusación descripta como hecho uno, contestó “me parece que hay un asociación ilícita, pero no era nuestra”.

Dijo que un acuerdo no puede ser el resultado de un apriete, una colaboración tampoco, si hay acuerdo es porque las partes acuerdan algo, para que no se pueda cuestionar ese acuerdo está la unidad de aplicación que es el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires donde se firma junto al delegado del ministerio. Que si allanó el gremio el fiscal debe tener varias copias de estos acuerdos.

Que queja de los empresarios no hubo, han discutido, cada uno defendía lo suyo, que una cosa es discusión y otra amenaza, y no fueron obligados a firmar esto. Que si hubiese sido que el empresario se sintió intimidado por el lugar al ir al gremio donde hay gente fea, grandota y gorda, si eso fuese así, en el Ministerio, con la policía presente y la posibilidad de pedir la conciliación obligatoria se podría revertir la posibilidad de ese acuerdo.

Consultado por los premios de fin de año, dijo que ahí se está hablando de las empresas que denunciaron y no estaban de acuerdo con el premio; que hay empresas que lo pagaron, incluso más, estas empresas negociaron en menos, y si no hay acuerdo no participo de la negociación. Que en el Ministerio estas empresas hacen contraoferta de 4.000 pesos, y entre Paiz, Burgos y el deponente lo conversaron y decidieron aceptar la propuesta de 4.000 y se firmó el acta en esos términos. Que en ese momento podrían haber exigido la conciliación obligatoria y retrotraer la situación al inicio y no pagar nada, y sin embargo accedieron a la firma del acuerdo.

Apuntó que todo fue absolutamente voluntario, nadie hizo mención a que se sentía intimidado, apretado o lo que fuese, que él recuerde. Que si hacían mención a la discrecionalidad de por que el premio era para todos los trabajadores y no dejar elegir a la empresa a quien le correspondía o no. Y la respuesta es porque el trabajador mantuvo esa

condición y por haber concurrido y no fueron echados les corresponde a todos los trabajadores, que no es jardín de infantes que se le da un chupetín al que hizo el mejor dibujo.

Preguntado por lo mencionado de haber obligado a contratar servicios como viandas, baños o transporte, contestó que jamás le pidió a ninguna empresa la contratación de alguna empresa; que esto no quiere decir que haya exigido la prestación de algo que por ley correspondía como es un baño químico cada 10 operarios o agua fresca en verano o casilla para merendar o comer que por ley la empresa tiene que cumplir.

Que nunca mencionó a ninguna empresa de servicios en particular, que el empresario sabe a quien contrata.

Expuso que del 2015 al 2017 no cobró lo mismo, que la situación financiera a partir de fines del 2015 fue desastrosa, el dólar pasó de 11 a 14 pesos en un día, los servicios se incrementaron en un 400 por ciento y la inflación era descabellada, que por eso el último sueldo fue 35 a 40 mil pesos. Que no tiene vivienda, alquilaba un funcional en calle San Martín al 500, desde hacía 8 años, le quedaba cerca del gremio, al que iba caminando.

Que ha ido a Junín de los Andes una semana y 24 horas a Chile. Que sus hijos tienen cada uno su casa en barrios de vivienda, que le

dejó a su hija la casa del Rosendo Lopez, su hijo mayor tiene una del plan mi casita y el menor una que fue pagando en viajante del sur.

Expuso que el gremio es como una secretaría de acción social, porque históricamente el municipio no llega a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de la población de Bahía Blanca, no alcanza al presupuesto y mucha gente de la construcción, que son unos 8.000 trabajadores, cuando concurrían al municipio y no tenían respuestas, solían ir al gremio y pedir ayuda para el pago de un servicio, medicación o algo que le faltaba para el alquiler; que han pagado remises para ir a un velorio, coronas, garrafas, alimentos, y que todo eso se hacía con las colaboraciones.

Indicó que varias veces fue a la municipalidad a plantear esto, 3 veces se reunió con Gay. Que a fines del 2015 había 1.500 puestos perdidos y llegaron a 2.000 en marzo, por lo que convocaron a la CGT, en la cual estaba al frente Monteros, e hicieron una reunión en la CGT preocupados por la pérdida de fuentes de trabajo en la construcción con todos los que podían aportar algo, como eran el Concejo Deliberante, la municipalidad, empresas, intendente, legisladores de la ciudad (Feliu, Linares), la UOCRA, UECARA -que nuclea personal administrativo de construcción-, el gremio de ladrilleros y vialidad nacionalidad, se trataron los temas, se prometieron gestiones y una tercera reunión que se iba a hacer en el municipio pero que nunca se convocó.

Sostuvo que se puede ver la falsedad porque era principio del 2016 y durante ese tiempo los presupuestos para educación fueron derivados a la Sapem para el boleto escolar, quitando posibilidad a obreros de la construcción de trabajar en obras; que el intendente derivaba los fondos para otros fines. Que no tiene nada contra el boleto escolar pero no lo tienen que pagar los obreros de la construcción.

Manifestó que Caspe es del gobierno de Gay, era el secretario de acción social y en una de las reuniones con Gay, las que fueron en buenos términos, lo derivó a la secretaría de acción social para tratar de solucionar los temas más urgentes de los desocupados, y por eso elaboraron un listado de 100 trabajadores con mayor problemática socioeconómica, con los datos de las personas, número de documento, dato de relación laboral, de tarjeta; y con esa planilla fue a acción social y habló con Caspe y le dejó el detalle para ver que podía hacer desde la secretaría.

Apuntó que los recursos que liberó el municipio fueron muy pocos, solucionó un 10 por ciento de esa urgente problemática, y además con certificación de pobres que hacen las asistentes sociales y por eso luego deciden la utilización de los recursos.

Preguntado por el señor Agente Fiscal los motivos por los cuales se realizó una asamblea permanente en la obra de Carcereny, respondió que es de práctica cuando la situación lo amerita, cuando hay riesgo de vida o incumplimiento legal como la falta de pago del salario en

forma excesiva, cuando ya se ha reclamado varias veces y por todas las vías legales, y ahí los trabajadores se constituyen en asamblea permanente, que esas son las únicas dos instancias.

Que en la asamblea permanecen reunidos hasta que se solucione el conflicto, cuando la empresa puede cumplir con lo que está faltando; que no pueden accionar contra la empresa o los bienes, la asamblea es cuando algo no está siendo cumplido, el personal cumple las horas en el lugar y se retira a su domicilio. Que estas asambleas se comunican a la empleadora.

Le contestó al representante del Ministerio Público que no se toman medidas de hecho, no se atacan los bienes de la empresa, dado que eso es un delito. Que no se les impide transitar a los dueños de la empresa, no hay inconvenientes, no tiene que ver con el reclamo.

Manifestó que a Carcereny no lo dejaron sacar los bienes porque tenía salarios sin abonar, no se le permitía a la empresa, no a Gustavo (hoy Brixe), retirar las cosas porque es el capital social básico de la obra ante los salarios caídos, la garantía que iba a pagar los salarios era que no podía retirar lo que era suyo.

Sostuvo que Carcereny no cumplía con los pagos y por eso se constituye la asamblea en peramente, y la prueba es el acta que firmó

Carcereny y en la que reconoció la deuda, y la debe tener el fiscal que allanó la UOCRA.

Consultado por las colaboraciones del señor Medús, dijo que empezó con 300 pesos y fue cambiando el monto a medida que la inflación destruía la capacidad del salario, con el aumento de los insumos y por decisión propia de Luis Medús de 300 pasó a 600, y la última colaboración de Medús por la obra de la ruta 3 fue de 800 pesos. Que esto ocurrió desde el 2012 hasta mediados del 2017 cuando empezó todo este lío.

Que nunca le dio Luis Medús dinero en efectivo, lo único el café que pagó en Boston. Que los cheques los retiraba el declarante, o a veces se encontraban en el centro o pasaba por la empresa, o en distintos lugares, habiendo también pasado por el gremio, pero esto fue las menos de las veces por esto de la paranoia que Medús tenía con el gremio.

Apuntó que la gestión de cobro siempre fue suya, salvo el caso de Omar Roca en la obra de Tres Sargentos; y el retiro puede ser que en alguna oportunidad lo haya efectuado algún compañero suyo, pero en un 95 por ciento lo hacía él.

Que como había veces que no se encontraban, y se juntaban dos o tres meses, en esas ocasiones ha librado un cheque por la suma total, por ejemplo por 3 meses a 900 pesos, y nunca hubo inconveniente ni reclamo, era colaboración que Medús hacía.

Consultado por el Agente Fiscal como explica estos 5 años de colaboración de Medús con lo de ser fóbico con la gente del gremio, contestó que dijo que la paranoia era ingresar al gremio de la UOCRA, que no dijo que tenía aversión hacia la gente de la UOCRA. Que Medús dijo que se sentía intimidado cuando iba al gremio en su declaración. Que durante los 5 años la colaboración fue con su persona con la que tenía un diálogo excelente.

Comentó que hablando de su caso, era por las colaboraciones de empresas que se sostenía ese gasto acción social que hacía el gremio con gente que iba a pedir ayuda, que esas colaboraciones eran de empresas relacionadas con la construcción. Que sobre esto ha declarado recién a donde fueron a parar las colaboraciones de las empresas, indicó a donde fue la plata en cada hecho concreto, que no dijo que pidiese plata para hacer lo que él quisiera.

Señaló que esto no tiene que ver con la actividad del gremio, son desocupados de la construcción, no se registraba en el gremio estas ayudas.

Que en su momento se cruzó con Vinet y ahí se enteró de sus dificultades económicas y con la hija, y esto fue en paralelo a la obra de Medús de Tres Sargentos, por eso con Medús en la estación de servicio le pide si le puede tomar a Vinet, a quien previamente, sin mencionarle a la empresa Abedul, le había dicho que capaz que existía la posibilidad de

entrar a trabajar. Que a Medús le dijo si podía tomar un trabajador, no le nombró a Vinet y él no me dijo ni que sí ni que no, que iba a ver, haría números, pero que algo iba a hacer.

Señaló que Vinet fue el que denunció, pero dijo en el debate que estaba esa denuncia escrita y firmada por él pero que lo que decía él no lo había dicho, que solo firmó.

Comentó que conoce a la empresa Flor de Lirio, que sabe que pertenece a la familia de Humberto Monteros y cree que el titular es su hijo mayor Matías, y se trata de una empresa que se dedica al transporte.

Que SGT es una empresa o comercio de provisión de elementos de protección personal y ropa de trabajo y pertenece a la esposa de Monteros, Lucía Sanabria.

Que Acqua es una empresa de prestación de baños químicos y tiene entendido que pertenece a la familia de su compañero José Burgos.

Sostuvo que desconoce si el gremio contrató a alguna de esas empresas, que no le consta por no haberlo él contratado o haber estado presente cuando esto se hacía. Que puede ser que en alguna actividad masiva se haya contratado a alguien y el que lo contrata en ese caso es el gremio.

Que no le consta que por sugerencia de la UOCRA alguna empresa haya contratado a una de esas empresas.

Señaló que el declarante es dirigente sindical de UOCRA desde el 2012, que a fines del 2015 se ganaron las elecciones y el padrón era de 8000 afiliados.

Dijo que la MUOCRA es una agrupación de las tantas que hay dentro de los trabajadores de la construcción, no es un ente como el gremio, es una ong porque tiene personería jurídica pero no tiene personería gremial, ni posibilidad de llevar adelante la adquisición de bienes y ese tipo de cuestiones, nuclea a trabajadores de la construcción con una idea de proyecto sindical, son las incubadoras de las futuras listas. Que la MUOCRA es la lista blanca, y es la agrupación a la que pertenece la comisión directiva nacional de Gerardo Martinez, como lo explicó Rodríguez el compañero interventor.

Expuso en relación a los empleados de la UOCRA que hay dos rubros, los de la conducción, que son 5 secretarios más colaboradores, lo que es relativo según las dimensiones y cantidad de afiliados de la seccional, teniendo Bahía Blanca dos colaboradores en relación de dependencia con UOCRA; y por otro lado el personal administrativo y de limpieza del gremio, donde hay una empleada para limpieza y 3 o 4 administrativos a lo sumo que llevaban adelante la tarea.

Comentó que la MUOCRA no tiene empleados, tiene una serie de compañeros que van variando según la actividad de cada uno, son militantes, y es un manejo sui generis.

Le indicó al señor Agente Fiscal que la Asociación Mutual Construcción Solidaria, es una mutual creada por él, no para él, siendo el compañero que tramitó frente al INAES y el Colegio de Escribanos las gestiones para hacer una mutual y brindar servicios que no se podían hacer ni por parte del gremio, ni de la obra social, porque el patrimonio de cada uno de esos entes es de los asociados, y no se puede disponer de UOCRA u OSPECOM para otro fin que para los afiliados.

Que la mutual le permitía completar los beneficios que por ahí no se podían brindar desde las dos anteriores. Por ejemplo, en la medicación que por obra social se subsidiaba el 30 por ciento por OSPECOM, con la mutual se quería cubrir el resto del valor del medicamento.

Que además la figura de la mutual puede recibir donaciones, colaboraciones y subsidios que no puede percibir el gremio, que tiene la falta de libre regalías. Dijo que una empresa no puede donarle al gremio y el gremio recibirlo y dar recibo.

Manifestó que nunca llegó a funcionar la mutual, nunca llegó a brindar un servicio, que tenían un padrón de afiliados dado por sus

familiares, amigos y compañeros para empezar hasta tener servicios para ofrecer, y luego sí ofrecer a terceros. Que no tenían servicios pero si la matrícula y eso se utilizó para intermediar entre el Ministerio de Trabajo de Nación y la CGT Bahía Blanca para hacer cursos de capacitación en distintas áreas. Que esto fue por un monto de 2 millones y pico de pesos, y eso se canalizaba a través de la cuenta que posee la mutual en el banco Nación de la cual es el titular por ser el presidente y desde que están detenidos no tiene actividad la mutual.

Refirió que el Ministerio envió unos 700.000 pesos y se utilizaron algo más de la mitad para la compra de herramientas e insumos para llevar adelante parte de esos cursos. Que ese material está inventariado y está en la CGT de Mitre y Rodriguez, existiendo herramientas y escritorios. Que el resto del dinero quedó depositado en la cuenta del banco Nación de la mutual, y desde el Ministerio no se volvió a enviar otra partida porque no se pudo poner en marcha ninguno de los cursos producto de la debacle que hubo en el país.

Indicó que la cuenta es de la mutual y a la misma tenían acceso el declarante como presidente y Martinez como tesorero. Que el resto del dinero de los 700.000 quedó depositado ahí, no sabe que pasó, que el otro dinero está facturado en función de lo que se adquirió y cuando se demostró que no se iban a poder realizar los cursos, habló en provincia para explicarles la situación, para devolver lo que ellos habían enviado y se

le dijo que iban a averiguar y nunca más recibió ninguna data, ni información. Que se habló de que eso se iba a pasar a otra organización de la ciudad para hacer cursos pero no se llevó a cabo.

Dijo que empleados en relación de dependencia la mutual nunca tuvo. Que en una oportunidad hicieron un viaje con los afiliados de ese momento, al que él no fue, y cree que el viaje lo hizo Flor de lirio; que puede ser que haya una factura por un viaje a Buenos Aires.

Exhibido por el doctor Zorzano el efecto 198, contratos de locación de servicios suscriptos por la mutual con la empresa SGT por transporte de personas, firmado por quien se identifica como Molina con firma legalizada por el escribano Daniel Pie de Bahía Blanca, contestó que reconocía la firma, que era de él, pero que desconocía el texto, y que además no advertía de la lectura del documento que apareciese la matrícula de la mutual, por lo que puede ser un papel firmado por el deponente e impreso más tarde.

Reiteró que es su firma pero no está representada la mutual, porque no tiene número de matrícula, que el texto es real, la firma es suya, pero no está representada la mutual porque no figura la matrícula de la misma. Que el nombre no le da identidad a la institución, sino la matrícula, que la da el INAES y no figura la matricula en ese contrato, por lo que sí

reconoce dos firmas suyas, pero no el contenido de lo que dice el cuadernillo, ni la legalización del escribano de su firma.

Que él no firmó ese documento, que no sabe qué habrá firmado, que no sabe de donde salió la firma.

Reiteró que la Asociación Mutual Construcción Solidaria no está representada en ese contrato.

Que la firma es suya o de alguien que sabe copiar su firma muy bien, pero no reconoce haber firmado como presidente de la mutual en esos términos.

Expresó que la única mutual de la que es autoridad es esa. Que tendría que ver las fechas porque los plazos de los cargos estaban vencidos y requería una asamblea para ratificar los cargos, por lo que esa firma podría ser fuera de las funciones de presidente. Que tenía cuit la mutual pero no recuerda el número dado que son 14 números.

Ante una nueva consulta del doctor Jara para que explique por qué denuncian las empresas, contestó que es muy simple, que tiene que ver con lo que iba a relatar finalizadas las preguntas de fiscalía y defensa.

Que no se puede con el dinero construir un predio como el que tiene el gremio con los ingresos de los sueldos de los 7 del sindicato, y además tener el móvil sanitario abonándole una retribución –no sueldo, acotó- a la gente que trabajaba en el móvil; o realizar una fiesta con 300

bicicletas sorteadas, 20 juegos inflables; que la única posibilidad de llevar adelante esas y más actividades, la única forma, es con colaboraciones voluntarias. Y las únicas empresas que cambiaron el discurso y lo dijo Carcereny, fue algunas luego de que la gobernadora sale públicamente a denunciar al gremio de la construcción.

Expresó que el gremio de la construcción es madre de industrias, y por eso lo considera un golpe institucional contra el gremio de la construcción, para intereses espurios como los parques eólicos, ya que asume y decreta la emergencia eléctrica y tenían terminada la termoeléctrica Guillermo Brown y daba trabajo a 1500 compañeros, y en lugar de eso se larga a armar en la seccional de UOCRA, con la comisión presa, a hacer 7 parques industriales de los cuales no se conoce el costo final de megawats.

Que lo mismo pasó con Vidal que declara la emergencia en infraestructura y había escuelas que se caían a pedazos, pero las obras que ella priorizaba eran las que a ella le interesaban.

Sostuvo que por eso hay un interés espurio, por parte de la Brújula y Germán Sasso, que hay una demonización de la gente del gremio, diciendo “mirá que cara”, “cuidá la billetera”; pero ni Germán Sasso, ni Nardeli, ni Vidal se refirieron a una obra en particular, a un ilícito en particular y nunca agregaron pruebas de esto que estaban diciendo.

Se dirigió al señor Agente Fiscal indicándole que tampoco él agregó una sola prueba de esto que al declarante se le hace, ni audio, fotos o testigo. Que les dijo que los trabajadores no les importaban, que era una excusa para ir a cazar empresarios para extorsionarlos. No trajo al debate a uno solo de los trabajadores que afirme eso. Por el contrario la defensa trajo trabajadores y empresas que desdicen las denuncias de las empresas que denuncian en esta causa. Que trajeron a dos de las empresas de la CECIL que son más importantes que las 5 o 6 cartelizadas, únicos proveedores de la obra pública del municipio y el intendente que se junto con el Ministro de Trabajo e hizo de la casa del pueblo un lugar para robar.

Refirió que hasta el día de hoy no ha visto una sola prueba fehaciente, y es por eso que interpreta que todo esto es una causa armada. Que además la AFI de Bahía Blanca tiene que ver.

Que es por esto que quiere denunciar a esta causa como armada en términos políticos e involucra a Macri, Vidal, Nardeli, Gustavo Arrivas, Noaiz a cargo de la AFI de Bahía Blanca, Pablo Quantín, Gabriel Gurrado, Gustavo Carcereny, Juan Pablo Fernandez Fiscal General de Bahía Blanca y Marisa Prome Jueza de Garantías.

Señaló que se ha presentado como querellante de este tema de las bases ilegales ante el Juez Federal de Dolores, a cargo de Baba, y le contestaron que momentáneamente no hacían lugar.

Por último pidió permiso para cerrar su declaración con una efeméride, indicando que un día como hoy de 1956, luego de varios años de gestión, de 25 hoteles y complejos de rendimientos deportivos, escuelas, colegios, asilos, hospitales, bibliotecas, vacunatorios, barrios obreros, rutas, caminos, puentes, fallece Juan Pistarini, ministro de Perón, abandonado en Ushuaia sin medicamentos y torturado detenido por los Irurzun, Stornelli y Bonadío de la época.

La extensa versión brindada por el señor Molina no se corresponde con la totalidad de las constancias probatorias analizadas.

Así, si bien algunas personas declararon haber recibido dinero entregado por él, o ayuda en bolsas de comida, o para el pago del alquiler de una oficina de la delegación, o la realización de un evento por el día del niño; no obstante ello, los señores Evangelista, Medús, Salguero, Cowper y Moreno fueron contundentes al indicar que fueron obligados a entregar las sumas de dinero, que no realizaron esa entrega por libre voluntad.

Además coincidieron los testigos que no colaboraron voluntariamente para ayudar a alguna persona en particular (desconocían y no se expresaron sobre estos sujetos que les habría mencionado Molina en su versión), sino que pagaron para poder trabajar sin inconvenientes, por temor a que se paralizaran las obras.

Nada de la prueba indica que estos testigos hayan inventado estas situaciones para perjudicar al señor Molina por su condición de dirigente sindical, o por indicación de algún político.

Como ya se señaló, los propios testigos aportados por la Defensa de Molina (a excepción del doctor Cerniesky) descartaron conocer la existencia de una persecución política con relación al acusado; y ninguna prueba se ha producido en el debate para demostrar una intervención irregular de la AFI, o de algún dirigente político en particular, o funcionario judicial, en contra de los intereses del señor Molina.

Efectivamente, como apuntó Molina, el dinero para cubrir algunas de las cuestiones por él señaladas, al menos durante la última etapa de la administración previa a la renuncia de los dirigentes, del gremio no salía; así lo indicó Rodriguez, el interventor quien contó que cuando se hizo la auditoría le llamó la atención que no se había utilizado el presupuesto asignado para el movimiento normal de la seccional, acotando incluso que llegó a comprar un automotor 0 kilómetro con las sumas que había asignadas y no ejecutadas.

Y esto demuestra que parte de lo recaudado era destinado a ayuda social, a la realización de eventos infantiles u obras en el predio del gremio.

Ahora bien, no descarta este uso de parte del dinero con esos fines, que otro parte lo haya sido en beneficio personal de quienes lo requerían; y lo que mucho menos demuestra, es que al menos en lo que respecta a los testigos que se han presentado como víctimas de los hechos, estas entregas hayan sido voluntariamente realizadas.

El destino que se le pudo dar al provecho de lo ilícito no convierte en lícita la conducta ilegal.

En lo que respecta a las reiteradas veces en que tanto el acusado Molina, como el doctor Jara, hicieron referencia a que toda esta causa se trata de una denuncia armada por las 5 empresas viales de Bahía Blanca, que han sido las beneficiarias de todas las licitaciones que se adjudicaron en esta ciudad, en lo que denominaron cartelización, corresponde traer aquí a comentario lo que surge del testimonio del señor Paoletti, propuesto por los mencionados, quien bien ha explicado esta situación cuando le contestó al doctor Jara que era difícil entrar en Bahía a participar de licitaciones de obra pública porque hay una ley en la cual le dan prioridad al compre local, que implica un beneficio de hasta un cinco por ciento para poder ser adjudicado, y en algún tipo de obra esto es un número muy grande y por eso se tornaba más difícil; además, porque había más competencia, más empresas interesadas, y esto no ocurría en Villarino, donde no estaba esto del compre local y no había tantas empresas

participando, por lo cual fue que con su empresa fueron a licitar obras públicas de esa zona.

Además de este testimonio que aporta claridad sobre la cuestión, la prueba testimonial y la documentación agregada al debate, bien permite establecer que estas 5 o 6 empresas no han sido las únicas beneficiarias de las licitaciones, que además no se trataba solo de licitaciones locales, sino que también había obras provinciales y nacionales; y que además estas empresas normalmente competían entre sí, habiendo en algunos casos conformado alguna UTE.

Por otra parte, como se observó, no a sólo cinco empresas corresponden las distintas personas que han declarado en la audiencia. Se advierte que se han expresado sobre estos hechos delictivos aquí analizados personas que revisten la condición de monotributistas al ser pequeños constructores, empresas de mayor movimiento económico, empresas viales, empresas constructoras tanto con sede en esta ciudad de Bahía Blanca, como con sede en otras localidades y que ocasionalmente estaban ejecutando obras por esta sección.

En su afán por desvincularse de los hechos y adjudicar la culpa a otros, el señor Molina niega hasta lo que no podía negar, hasta la actividad que él mismo dejó documentada con valor de fe pública en un contrato con firmas certificadas; y ante ese documento exhibido por el Agente Fiscal en la audiencia, se quedó sin palabras, salvo negar el contenido, dado que no

podía decir, como señaló en las otras situaciones, que los testigos mentían, que eran colaboradores voluntarios que por algún extraño motivo se habían decidido a mentir para perjudicarlo.

Por otra parte, sabido es que la ley no establece normas generales o específicas para tener por demostrados los hechos ilícitos materia de acusación, ya que no dispone un determinado valor o peso para un tipo de prueba en especial, y no efectúa distingo alguno en ese sentido con relación a los distintos elementos de prueba que se pueden admitir en el juicio.

De lo producido en la audiencia por las partes el Juez tiene la obligación, luego de considerar integra y totalmente las distintas constancias probatorias, de hacer uso y mención para fundar la resolución y explicar las conclusiones a las que ha arribado, de la que resultara útil y conducente a los fines de ese proceso, explicando cuales utiliza y porque le ha dado valor para tener por demostradas las distintas cuestiones esenciales que se deben analizar al emitir el pronunciamiento.

Al apreciar la prueba, conforme las reglas impuestas por el legislador, he decidido volcar en detalle la que ha llevado a formar mi convicción, los elementos de los cuales he extraído las conclusiones que aquí estoy exponiendo.

También, como se podrá advertir, he detallado con precisión prueba testimonial producida en la audiencia que si bien no he considerado

útil y conducente (en la totalidad del testimonio) para despejar cuestiones vinculadas a los hechos y participación de personas analizados en el proceso, y sólo pueden haber servido para considerar otras cuestiones (como atenuantes, por ejemplo), se ha efectuado esta relación pormenorizada para permitir, eventualmente ante un recurso de alguna de las partes, lograr un revisión integral de la resolución y su ajuste o no a lo acontecido en el debate. Esto se ha efectuado así porque se ha producido mucha prueba por parte de la defensa para sustentar su posición, y se han dejado innumerables constancias en actas de palabras, frases u oraciones parciales de los testimonios, los que, analizados fuera del contexto en el cual fueron expuestas, no permitirían una cabal comprensión de los dichos de un testigo.

Las distintas personas que han concurrido al debate han dejado en claro con sus testimonios, que si bien muchos de ellos han mencionado la palabra “colaboración”, que es la que utilizaban desde el gremio cuando solicitaban el pago de una suma determinada por obra, tal entrega de dinero no era voluntaria, querida por ellos, o aceptada libremente, sino que era el resultado de la situación que ya habían vivido o experimentaban en ese momento -según los casos-, de tener las obras paralizadas sin motivo, con asambleas denominadas informativas que duraban horas o días sin que los trabajadores pudiesen desempeñar su labor, los camiones cargados con material que se volvía inutilizable si se

esperaba, u otros tipos de actos más violentos como subirse a una máquina y apagarla, cruzar autos ante un camión, señalar que se iba a pasar las fiestas con su familia, hacer piquetes en el domicilio de la empresa impidiendo el ingreso de las personas, movilizar un gran grupo de gente hasta viviendas particulares de la familia del trabajador, empresario o comitente, o ser amenazados con que no iban a poder trabajar porque se los iba a inspeccionar constantemente y se les iban a pedir más cuestiones, o se iban a realizar denuncias ante el Ministerio de Trabajo aún cuando en la obra estuviese todo en regla y en debida forma.

Por ello no entiendo que pueda prosperar la posición del doctor Martinez en cuanto sostuvo que no se podía condenar por algunos hechos, dado que sólo existían los dichos de una sola persona, con el argumento de que si la sola denuncia no basta para detener, tampoco basta para condenar; o la posición del doctor Jara, en cuanto a que la pluralidad de personas que han declarado a favor del señor Molina probaría que los hechos no existieron.

No se trata de contar los testigos, según declaren a proposición de una u otra de las partes (y aun cuando ni siquiera se correspondan o sirvan para intentar demostrar las teorías del caso de las partes), y adoptar la decisión según cual sea el que tenga mayor cantidad a favor.

Tampoco un solo testimonio impediría una condena.

Todo testimonio, aún el de una sola persona, puede resultar perfectamente válido para alcanzar el estado de certeza necesario para arribar a un pronunciamiento condenatorio.

A los dichos de cada persona hay que darle su correspondiente dimensión, ponderándolo dentro del contexto por él vivenciado, y según lo que recuerda al exponer sobre los hechos, valorarlo por cómo es su relato, los detalles que aporta, el énfasis que le pone a las cosas que comenta, para poder así apreciar su coherencia, su sensatez, su veracidad, relacionándolo además con el restante material probatorio incorporado al proceso, para ver si se corresponde con el mismo, si resulta conteste, y si con ello se logra brindar una explicación razonable para poder establecer que ese relato tiene o no un alto valor probatorio.

Como reiteradamente se señala: “el aforismo latino "testis unus, testis nullus" no tiene cabida en el actual proceso penal de la Provincia, de allí que no carece de fuerza probatoria la declaración de un testigo único por esa sola circunstancia, siempre que dicho testimonio resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador que explica sus razones, y las conclusiones a que se arribe en las sentencias sean el fruto racional de las pruebas, con el único pero infranqueable límite del respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, es decir las leyes de la lógica.” (Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luis

María Mancini y Carlos Alberto Mahiques, causa nº 40.784 del registro de esta Sala, caratulada “P., A. D. s/Rec. de Casación”, sentencia del 5 de octubre del 2.010, entre muchas otras).

Por otro lado, corresponde aclarar que no se está juzgando a los imputados por su conducta de vida, su actividad laboral o gremial, incluso pueden existir trabajadores que consideren que dignamente han sido representados por ellos, que han conseguido grandes logros para sus representados.

Simplemente estamos analizando aquí los hechos que han sido materia de acusación, y, a partir de esto que venimos estudiando, es que se puede afirmar que, al menos en estas situaciones, hicieron todo lo contrario a lo que debían hacer como dirigentes sindicales. Abandonaron a sus representados por sumas de dinero cuyo fin se desconoce, aunque podría ser en beneficio personal; y digo abandonaron porque no volvieron a esas obras, algunas supuestamente con gente no registrada, con inconvenientes en seguridad o higiene, a peticionar y verificar que las condiciones se cumpliesen, como relataron los testigos que hemos escuchado en la audiencia.

Como se mencionó, cuando se entregaba el sobre con dinero, las asambleas no se hacían, nadie pasaba por la obra, nada más se les exigía.

Los defensores señalaron que se trataba de medidas gremiales, del ejercicio de derechos sindicales y que se estaba persiguiendo a sus asistidos por desempeñar esa actividad.

Esto no es así, entiendo que no se trataba de una huelga o medida de fuerza motivada en un reclamo o defensa de los intereses de los trabajadores; su conducta lo demuestra, dado que se pagaba a la persona que reclamaba una suma de dinero determinada y se podía seguir trabajando.

No existe el derecho a huelga para reclamar un pago ilegal hacia un tercero; la huelga u otro tipo de medidas de fuerza es para reclamar para los trabajadores.

Puede ser que en otros casos se hiciesen medidas de fuerza legítimas y se reclamase por derechos, pero en estos supuestos que aquí hemos analizado no lo eran, se trataba de medidas que se utilizaban para amedrentar, para doblegar la voluntad y lograr o intentar la disposición patrimonial.

Como parte del resultado de las maniobras puede ser que se obtuviese un beneficio para los trabajadores (premio, aumento de salario), más allá de los que los ejecutores obtenían para su beneficio personal, pero esto no convierte en lícita una conducta que afectó la libertad de las

personas, al habérseles causado temor que los llevó a obrar contra su voluntad, ni tampoco en legal lo en definitiva inexigible legalmente.

Las supuestas asambleas, paro de actividades, paro de máquinas, corte de acceso de salida o ingreso de vehículos, y otras más relatadas por los distintas víctimas de estos hechos, eran dispuestas intempestivamente por los aquí acusados, sin siquiera informar a los trabajadores los motivos de ellas, sin contar con la libre decisión de ellos para concretar esa medida.

Obsérvese por ejemplo que cuando se firmó en el Ministerio de Trabajo por la cuestión de los premios, conforme relataron todos los damnificados, habían sido convocados a reunión en el gremio, de ahí salieron para analizar la cuestión y luego fueron llamados directamente al Ministerio de Trabajo, no a una reunión para conciliar la cuestión, sino para firmar el convenio; pero no fue esto lo grave, sino que mientras estaban por ingresar al Ministerio fueron avisados desde sus distintas obras que se había parado todo, que los camiones con concreto o asfalto no podían salir, los obreros no podían trabajar y las obras estaban así paralizadas.

No se estaba ante una huelga o medida de fuerza adoptada por decisión libre de la mayoría de los trabajadores de un gremio o de una empresa en su caso, para defender sus intereses; ni siquiera sabían el porqué de la medida, y tampoco se habían agotado las vías conciliatorias

que establece la ley para que pueda solucionarse una determinada cuestión laboral.

Sin duda alguna se pueden reclamar aumentos de salarios, premios, beneficios, mejores condiciones de trabajo en cuanto a seguridad, higiene, momentos de descanso, cantidad de horas de labor, vacaciones, etc., etc., etc., esto está consagrado en nuestra Constitución Nacional, como también lo está el derecho a huelga; pero no se está juzgando aquí ni siquiera la legalidad de una medida de fuerza (eso es competencia del Ministerio de Trabajo), sino conductas ejecutadas por varios sujetos –muchos de ellos con rol sindical- que con el disfraz de una medida gremial, en realidad buscaban intimidar a otras personas indicándoles que no iban a poder seguir trabajando, sino no cumplían con lo que les era requerido. No se reclamaba por un derecho para el trabajador, sino por una contraprestación dineraria para una o varias de las personas que la requerían.

Reitero que la prueba que se viene valorando permite señalar que el Ministerio Público Fiscal logró probar que durante un largo período temporal que comenzó con posterioridad al año 2005, existió un grupo de personas integrado por al menos 14 miembros que tenían por fin desarrollar actividades tendientes a exigir y percibir de manera indebida dinero u otros objetos materiales o la firma de documentos que producen efectos jurídicos, mediando el común acuerdo de este grupo, con la idea de dividirse las

tareas y actividades a ejecutar para concretar ese tipo de hechos ilícitos, en un número indeterminado de eventos.

Conforme lo indicaron los testigos, cuando empezaban una obra nueva aparecían para pedir dinero o la contratación de servicios, lo que indica que esa idea criminal, de intervenir en distintos hechos ilícitos según se fuesen presentando las circunstancias, estaba presente en los integrantes de la organización.

Con los elementos probatorios que se han mencionado en este considerando se puede arribar al estado de certeza necesario para un pronunciamiento que afirme la existencia de este hecho, de la constitución de esta sociedad con fines ilícitos, la que, además, durante el largo transcurso de su duración, llevó efectivamente adelante y concretó distintos hechos delictivos, siendo esto una clara evidencia de esta organización plural de individuos agrupada de común acuerdo para la eventual concreción de los delitos que fuesen decidiéndose a cometer, circunstancia que demuestra que la voluntad de estos sujetos al conformar esa asociación produjo una concreta afectación del bien jurídico tranquilidad pública protegido por esta norma penal.

Los distintos hechos que se han tenido también por comprobados y ejecutados por esa organización o al menos parte de sus miembros, pero siempre dentro del plan de la misma, demuestran la división de tareas, la organización y coordinación entre sus miembros, el rol de jefes

de alguno de ellos, la pluralidad de miembros, la permanencia en el tiempo y la idea y fin de la asociación.

La prueba también permitió establecer que la organización, desde aproximadamente el año 2010, tenía como jefes a un triunvirato, dado que había tres personas a cargo de la asociación, con clara división de tareas y zonas asignadas para ver donde podían cometer nuevos delitos.

Coincido con el señor Agente Fiscal –lo expuso así en el alegato final- que el señor Molina, junto con Monteros y Burgos, fue uno de los jefes de la organización criminal, aun cuando por ausencia de acusación sobre el particular, para no afectar el principio de congruencia, no puede ser condenado por tal rol.

Ha quedado debidamente comprobado que las directivas las daban Monteros, Burgos y Molina. De la prueba testimonial producida en el debate se puede establecer que incluso Burgos y Molina tomaron un fuerte protagonismo ante la situación de salud del señor Monteros, quien por distintas cuestiones de grave afectación de su salud se encontraba durante algunos momentos en la ciudad de Buenos Aires.

También se evidenció con la prueba producida que Monteros y Burgos, por sí, familiares o terceras personas, crearon empresas que utilizaron en algunos casos para la comisión de estos delitos que se han tenido por demostrados.

Por su parte Molina, creó una mutual, la que extrañamente no ha tenido actividad alguna a excepción de la firma de un par de contratos con una de las empresas de Monteros y/o sus familiares.

El señor Molina reconoció la firma pero no el contenido de los contratos, la firma está certificada, está puesta por ante un escribano, y sabido es que los escribanos no certifican firmas insertas en documentos en blanco.

Como se apuntó, estos contratos son muy particulares, y conviene aquí recordarlos, dado que se efectuaron en los años 2012 y 2013, entre la Asociación Mutual Construcción Solidaria y la empresa SGT, Soluciones en grupos de trabajo, para el traslado durante el plazo de 24 meses del personal de la Asociación Mutual, y para el traslados a la obra del personal de la Asociación Mutual.

De interés resulta destacar aquí que el señor Molina al prestar declaración dijo que la Asociación Mutual no había tenido actividad, que iban a dictar unos cursos con una partida de dinero que se le asignó desde el gobierno nacional pero que no llegaron a concretar; y que además no tenía personal la Asociación Mutual, la que estaba integrada, según refirió Molina, por familiares y amigos (José Burgos y Estefanía Burgos aparecen como socios, según ya vimos en el informe contable y la documentación en el cual el mismo se basa).

Si la mutual no tenía personal, si además no estaban ejecutando ninguna obra, para qué contratar una empresa de traslado de personal?, la respuesta resulta obvia y no hace más que acreditar el vínculo de relación y de pertenencia de los acusados con la organización criminal.

Recordemos aquí que del informe de ARBA de fs. 652/653 se puede extraer que el señor José Burgos es titular de la partida 59746 de Bahía Blanca, Río Atuel 780 y Río Atuel 784; la empresa SGT Soluciones en grupo de trabajo S.A. es titular de la partida 49061 de la calle Donado 1958 de Bahía Blanca, el señor Humberto Monteros de la partida n° 291 de Monte Hermoso y la empresa Flor de Lirio S.R.L. con domicilio en Donado 1970, es titular de las partidas 12548, 12549, 12550, 12551, 12552, 12553, 12554, 12555, 12565, 12566, 12567, 12568, 12569, 125790, 12571, 12572 del partido de Monter Hermoso.

De la documentación agregada a fs. 656/658 surge que el vehículo dominio OMS840 que aparece en la fotografía frente al local de la MUOCRA pertenece al señor Pablo David Gutierrez, tratándose de una camioneta Toyota Hilus 4x4 c/d pack eléctrico 2.5 tdi.

Del informe de Cesvi Argentina surge que el señor José Bernardo Burgos ha tenido asegurados a su nombre una camioneta VW Amarok patente KIB305, una Ford Ranger xl 3.0 dominio KXC625, un Kia Cerato dominio NAO671 y un VW Gol dominio HTP866; la empresa Acqua servicios una Chevrolet Silverado BOG 741 y un Kia K dominio OZR 701; la

señora Lucía Sanabria una Gilera 228kkx, un Panther 599JPV, y una VW Amarok OJJ 182; el señor Humberto Monteros una Peugeot 208 dominio PGK 365, un Peugeot 307 dominio GOO 090, una VW Amarok dominio JHR 281; y la empresa Flor de Lirio S.R.L. M. Benz Sprinter dominios HST 057, IYD 249, JJN 160, KAN 673, KGI 000, KRR 670, LHN 501, LSM 695, NPZ 104 y MAF 999, y un Fiat Doblo NVO 412.

Del informe del municipio de Bahía Blanca de fs. 23 de noviembre del 2017, obrante a fs. 663/666 surge que el señor Humberto Monteros participó del plan Jefes de Hogar desde el período Agosto del 2.002 hasta Agosto del 2.008 donde recibió la baja, por un importe que va desde los 150 a los 160 pesos mensuales (a fs. 722/727 obra la resolución que crea el programa Jefes de Hogar y para quienes está destinado).

Que del informe de la perito Contadora María Agustina Tennina, quien analizó la información remitida por la AFIP y pudo establecer, entre otras cuestiones de interés, que el señor José Burgos tiene domicilio fiscal en calle Rio Atuel 780 de Bahía Blanca y que es integrante de la Asociación Mutual Construcción Solidaria; que la señora Estefanía Burgos tiene domicilio fiscal en Rio Atuel 780, integra la sociedad Acqua Servicios SRL y además es socia de la Asociación Mutual Construcción Solidaria y ha sido dependiente de la UOCRA desde el 07/2001 al 10/2013; que la señora María Laura Burgos tiene domicilio legal en calle Rio Atuel 780 y está en relación de dependencia de la UOCRA desde el 06/2010 al

01/2017; que la señora Analía Belen Burgos tiene domicilio legal en Rio Atuel 780 e integra la sociedad Acqua SRL; que el señor Nahuel Eduardo Burgos tiene domicilio legal en Rio Atuel 780 e integra la sociedad Acqua SRL; que la empresa Acqua Servicios SRL tiene domicilio legal en calle Rio Atuel 780 encontrándose relacionado el CUIT de la sociedad con el de las señoras Estefanía, María Laura y Analía Burgos y con el señor Nahuel Burgos.

Del informe contable surge también que la señora Lucía Teresa Sanabria tiene domicilio legal en calle Teniente Farias 2947 de Bahía Blanca e integra las sociedades SGT Soluciones en Grupos de Trabajo SA y Flor de Lirio SRL. Luego se encuentran detallados que informó dos lotes de terreno, 3 casas, un automóvil, un cuatriciclo y dos furgones marca Mercedes Benz.

Se detalla que respecto de la sociedad Flor de Lirio SRL surgen como integrantes la señora Lucía Teresa Sanabria, el señor Raúl Agustín Sanabria y el señor Matías Juan Monteros, siendo la misma titular de 15 vehículos.

En relación a la empresa SGT Soluciones en grupos de trabajo SA se menciona que tiene el mismo domicilio fiscal que Flor de Lirio SRL en calle Donado 1970, estando integrada por los mismos tres socios que integran Flor de Lirio SRL, con más el señor Víctor Roman Sosa Rivero; siendo titular la sociedad de 14 vehículos.

Que al momento de su detención, el señor Humberto Monteros fue encontrado con más de 5.000.000 de pesos y más de 500.000 dólares en dinero en efectivo en su poder, y esto aconteció en el año 2018.

Si relacionamos esta información de la situación y movimiento económico de estas personas se puede advertir que evidentemente el provecho económico que obtenían de los delitos que cometían era ingresado a sus arcas personales; tanto así que hasta tenían una máquina para contar billetes.

La situación económica no se correspondía con la de una persona que estuvo cobrando hasta el año 2008 el plan jefe de hogar, o que ganase para la época de la detención la suma cercana a los 34.000 pesos (ingresos aproximados de los dirigentes sindicales), los que serían al día de hoy, conforme relató el testigo Rodriguez, quien fuera interventor del gremio UOCRA y desempeña ese cargo en otra seccional en la actualidad, unos 71.000 pesos con los 45 años de antigüedad que tiene en el cargo, cifra que casi se acerca a la línea de pobreza, ubicada hoy en 67.000 pesos.

Volvamos a observar la conversación telefónica entre Sergio Vázquez –otro de los acusados, y quien sería, por dichos de los testigos, quien se quedó con una suma de dinero muy importante de 400.000 pesos que Monteros dijo no haber recibido- y una persona identificada como "Tato", conversación del 27 de septiembre de 2017, en la que se señala:

Tato: "Hipocrecía en el estado mas puro. ¿Por qué no sale el sr Humberto Montero a hablar? ¿Por qué no cuenta como se hace siendo un 'simple obrero' para adquirir una flota de combis (todas 0 km) las cuales trabajan en su empresa Flor de Lirio, por qué no cuenta como se hace para poner una casa de venta de ropa para trabajo en calle Donado, por qué no cuenta como hizo para adquirir los baños químicos, por qué no cuenta como arregló con Eys y Stradivarius por la comida que dan en las obras, por qué no cuenta como generó el ingreso para adquirir los camiones, por qué no cuenta como logró construir cinco casas en Monte Hermoso, por qué no cuenta sr Montero?".

Sergio Vásquez: "porque no cuenta la casa de calle Honduras o la de Corrientes o la de 9 de Julio o la de Charlone o la de Viajantes del sur o la de Quilmes o la de Donado 1960 el caserón de Spurr o el local de calle Matheu o el terreno en calle Paraná".

Tato: "mas todavía, el Pata es un poroto".

Entiendo así, por todo lo señalado, que la paz social se ha visto afectada a partir de la conformación de la asociación, dado que el derecho constitucional a agruparse (art. 14 de la C.N.) ha sido irregularmente ejercido, ya que lo ha sido con fines ilícitos, y esto ya de por sí, independientemente de los delitos luego concretados y que aquí se han tenido por debidamente probados, genera intranquilidad en la población, la

que puede considerar en riesgo su vida, su libertad, su propiedad y su seguridad en general.

Por lo expuesto, es mi sincera y razonada convicción que se encuentra plenamente demostrada la existencia de los hechos en su exteriorización material, conformes los alcances indicados, a excepción, como se señaló, el hecho número 35 (arts. 209, 210, 371 inc. 1° y 373 del Código Procesal Penal).

Segundo:

Se encuentra probado y ésa es mi sincera convicción que a partir de todos los elementos incorporados en la cuestión anterior, deben ser considerados co-autores del hecho identificado como número uno los cinco acusados, revistiendo el señor José Burgos el carácter de jefe de la asociación ilícita.

Tanto la prueba testimonial, como la documental, dictámenes periciales, fotografías y grabaciones resultan suficientes para efectuar la afirmación que antecede.

En la audiencia de debate han prestado declaración los señores José Burgos y Guillermo Molina.

El primero de los mencionados lo hizo en dos oportunidades (y también en la etapa de instrucción), y el segundo al finalizar la producción de la prueba testimonial.

Sobre las mismas ya nos hemos expresado en el punto anterior, y ya indicamos que no se advierten elementos que, analizados con el resto de la prueba, lleven a desvincularlos de su intervención en el hecho uno.

Lo mismo ocurre con los señores Paiz, Gonzalez y Ríos. Lo que han declarado en su momento durante la investigación penal preparatoria, en la que se han explayado sobre su actuación en lo que respecta a la actividad sindical, no los excluye de su participación en esta otra organización, la cual, utilizando a la actividad sindical como escudo protector, como ya se apuntó, tenía un evidente fin ilícito.

El imputado Roberto Sabino Ríos explicó su intervención en los hechos que se suscitaron en el barrio Los Chañares, en una inspección realizada por el Ministerio de Trabajo y miembros del sindicato SITRAIC, y luego lo que hizo en la sede del Ministerio.

Reconoció ante ambas situaciones que obró en contra de la actividad del sindicato SITRAIC.

Respecto de esto, como así también, del resto de la prueba que lo ubica dirigiendo la MUOCRA y anunciando que se seguirían los

lineamientos de Monteros, lo único que corresponde decir aquí es que demuestran efectivamente su pertenencia a la organización de fines criminales, ya que su conducta lo indica compartiendo los fines de la asociación, esto es, cometer delitos para continuar con el poder, excluyendo de la actividad gremial a otras personas que no integraban su sindicato, o queriendo decidir sobre el manejo de la bolsa de trabajadores dejando de la lado al gremio UOCRA y su intervención, para manejarlo los integrantes de la organización a través de la MUOCRA.

Por su parte, el señor Paiz al declarar expresó que sólo firmó un convenio por ser representante del sindicato, o intervino en alguna reunión ante empresarios por su actividad gremial, pero que no tomó parte en ninguna situación irregular. Que le requirió al señor Martín Sanchez el aporte de bolsas de cemento que le sobrasen, pero que sólo se trató de un pedido de colaboración. Desconoció haber solicitado dinero al señor Sanchez o al señor Schlosser, y que lo que ha realizado en las obras han sido inspecciones en el desempeño de su función sindical, labrando en su caso las actas cymac cuando así correspondía.

El señor Mario Gonzalez, también refirió que sus visitas a las obras eran en su condición de colaborador gremial, labrando actas cymat ante las falencias que detectaba. Habiendo limitado su actuación a la tarea sindical.

La prueba no acompaña las versiones de los acusados. Si bien existen constancias agregadas al debate relacionadas con su actuación como dirigentes sindicales, y esto está fuera de discusión, lo cierto es que también existen los elementos probatorios antes analizados, los que permiten afirmar que está acreditada su intervención en los hechos por los que vienen acusados (a excepción de la aclaración que se efectuará con relación al señor Burgos en los hechos 6 y 7), habiéndose probado que esa actuación que han tenido en los mismos, la que pudo haber consistido en retirar sobres con dinero o cheques, entrevistarse con personas, firmar documentos, presentarse en las obras, y en las demás ya detalladas, eran parte del reparto funcional de tareas que en los casos concretos se efectuaban para poder ejecutar los hechos.

Los dichos del acusado Muñoz al prestar declaración en los términos del artículo 308 del código procesal, en cuanto afirmó que era el único delegado gremial en Coronel Suárez durante el año 2013, abriendo y cerrando la delegación, mencionados por el señor Defensor, Dr. Martinez, para justificar la no intervención de su asistido Burgos en los hechos acontecidos en la localidad de Suarez, carecen de entidad para contrarrestar el cuadro probatorio que lleva a señalar al señor Burgos como co-autor en varias situaciones, conforme se verá, e incluso no se corresponden con los propios términos en los que se ha pronunciado el imputado, quien indicó que a partir del 2010, por indicación de Monteros, se

dedicó a formar la delegación de Suarez, viajando en reiteradas oportunidades a esa localidad, la cual luego quedó bajo su jurisdicción gremial.

Por ello, teniendo en consideración el resultado del análisis de los elementos probatorios que han sido abordados en extenso en la cuestión anterior, voy a mencionar aquí, para recordar la prueba, los testimonios que resultan más significativos para tener por demostrada la intervención de los distintos acusados en los hechos en los que vienen imputados.

En lo que respecta al hecho identificado como número dos considero demostrada la co-autoría del señor José Burgos, a partir de los dichos de los señores Allende y de la señora García.

Por el contrario, en lo que respecta a los hechos 6 y 7, si bien se han demostrado los mismos, no encuentro probada la co-autoría adjudicada al señor José Burgos, dado que nada lo indica (más allá de su condición de delegado zonal), ni lo vincula puntualmente a estos pedidos de dinero, ni se ha demostrado que se hayan ejecutado estas acciones por orden del señor Burgos.

En el hecho 8 la co-autoría del señor Burgos surge del testimonio del señor Simón.

En lo que respecta a los hechos 9, 10 y 11 la co-autoría del señor Burgos se demuestra principalmente con los testimonios de los

señores Evangelista y Gurrado. En el hecho 9, ha intervenido como co-autor también el señor Paiz, quien ha firmado el convenio que se corresponde con el expediente administrativo n° 21507-1001-17-00 del Ministerio de Trabajo.

En lo que respecta al hecho 12, surge probada la co-autoría del señor Molina a partir de los dichos del señor Evangelista.

Con relación a los hechos 13, 14 y 15, resultan ser los testimonios de los señores Carcereny los fundamentales para probar la co-autoría del señor Burgos con respecto a los indicados como números 13 y 14, y la co-autoría del señor Molina con relación al individualizado como número 15.

En el hecho 16 tenemos probada la co-autoría del señor Gonzalez a partir de lo expuesto por los señores Gaveglio y Teplitz.

Con relación al hecho 17, las declaraciones testimoniales de los señores Gaveglio, Salguero y Teplitz permiten demostrar la co-autoría del señor Molina.

En lo que respecta al hecho indicado como número 18, la co-autoría del señor Burgos se prueba con los testimonios de los señores Gaveglio, Teplitz, Medús y Ferrero.

Como co-autor del hecho 19 se ha demostrado al señor Burgos, cuya intervención surge de los dichos del señor Ferrero.

En lo concerniente a los hechos 20 y 21, las testimoniales de los señores Gurrado, Evangelista, Teplitz, Medús, Ferrero y Sanchez, son las que permiten afirmar la intervención como co-autores de los señores Burgos y Paiz en el hecho 20, y de los señores Burgos, Paiz y Molina en el hecho 21.

Con la declaración del testigo Medús y la demás prueba analizada en el considerando anterior, se demuestra la intervención como co-autores de los señores Gonzalez y Molina en el hecho 22, y el rol de co-autor de Molina en el hecho 23.

En lo que respecta al hecho número 25, la intervención como co-autor del señor Paiz surge de lo relatado por el señor Sanchez.

Entre toda la prueba analizada, la declaración del señor Cerra es contundente para acreditar la intervención en grado de co-autor del señor Burgos en los hechos 26, 27, 28 y 29.

En el hecho 30 está demostrada la co-autoría del señor Paiz, principalmente con el testimonio del señor Schlosser.

En lo que respecta a los hechos 32 y 33, le son atribuibles como co-autor al señor Gonzalez, conforme lo testimoniado por el señor Almada.

El hecho 34 tiene como co-autor al señor Molina, mencionado por el testigo Cowper.

Por último, como prueba principal en relación a los hechos 38 y 40, debe computarse la declaración testimonial del señor Moreno, a partir de la cual se puede establecer la co-autoria del señor Paiz en el identificado como número 38, y del señor Molina en el hecho 40.

Reitero entonces que por la prueba que se viene analizando, y conforme las conclusiones que se pueden establecer a partir de la misma, además de los hechos puntuales en los que cada acusado ha sido señalado como co-autor en los párrafos precedentes, entiendo que los 5 aquí juzgados resultan también co-autores del hecho identificado como número uno, junto con otras personas más cuya conducta no está siendo analizada en este debate. Queda claro con la prueba producida en las audiencias de juicio que los señores Burgos, Molina, Gonzalez, Paiz y Ríos tomaron intervención en esa organización constituida con fines criminales.

Por todo lo dicho, tengo por debidamente probada la intervención atribuida a cada imputado en los hechos descriptos en la cuestión anterior, con el alcance antes indicado (arts. 209, 210, 371 inc. 2 del Código Procesal Penal).

Tercero:

Se planteó por los defensores que la conducta de sus asistidos se trataba del cumplimiento de una obligación legal indicada por el ejercicio de su actividad como dirigente gremial, y que esto no llevaba a constituir como ilícito al acto.

De ninguna manera puede esto compartirse, al menos en los casos que estamos analizando (reitero, puede ser que en muchos otros se hayan comportado de otra forma al momento de efectuar sus peticiones en representación de sus afiliados y del resto de los trabajadores; así lo ha demostrado, como ya señalé, parte de la prueba producida).

Sabido por todos es que nuestros constituyentes, en el artículo 14 bis, establecieron específicamente que quedaba garantizado a los gremios la posibilidad de concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, y el derecho a huelga.

Se estableció así la tutela constitucional del derecho de huelga, siempre, como todo derecho constitucional, según las leyes que reglamentan su ejercicio, las que en modo alguno pueden alterarlo (art. 28 de la Constitución Nacional).

Ahora bien, no estamos aquí ante ese ejercicio particular que puede llevar hasta a la generación de un daño para el empleador provocado por la abstención de trabajar y la paralización total o parcial que ello puede producir en la empresa y en definitiva en su rendimiento; ya que la finalidad

de las medidas que adoptaban no era para reclamar por derechos de los trabajadores, sino para que se cumpliese con cuestiones no exigibles por ley.

No hay duda alguna que no se cumplía con el preaviso, con la obligación de recurrir a los procedimientos de conciliación, mediación, o los que establece la legislación, para tratar de encontrar una solución al conflicto, como instancia previa a la declaración de huelga. Nunca se realizó una votación para decidir la huelga, ni se informó al empleador o al Ministerio de Trabajo de tales medidas (al menos en los casos aquí analizados); y no se lo hizo de esa forma porque claramente la prueba ha demostrado que las paralizaciones de las obras, tenían por finalidad generar temor, intranquilidad para el dueño de la obra acerca de su posible concreción normal y en tiempo, para así obligarlo a hacer algo contra su voluntad, como era entregar dinero para ganancia personal para alguno de los integrantes de la asociación, y en otros casos, para terceros.

Los procedimientos utilizados en algunos casos, como ha sido detener las máquinas, presentarse en una obra y señalar que no trabajaba nadie hasta que se recibiese un llamado, impedir el ingreso o egreso de camiones de un predio, convocar a asambleas supuestamente informativas que no tenían tema alguno y en las cuales lo único que se hacía era no trabajar, y la relación que la ejecución de estos actos tenían con los que se producían luego o de forma simultánea en los que se efectuaba una petición

de algo que no era exigible legalmente, no constituyen el ejercicio del derecho de huelga, previsto en nuestra Constitución Nacional.

La prueba demostró que no se actuaba en cumplimiento de la ley, no se buscaba en estos casos una conquista de derechos o beneficios laborales, sino otros fines, principalmente el beneficio económico personal de alguno o algunos de los intervinientes.

No se desconoce que pueden reclamar por beneficios, sueldos, mejoras, lo que se cuestiona es la forma, dado que nunca un delito puede ser utilizado para obtener un beneficio, por más loable y productivo que sea el resultado, y por más que ese resultado se acerque a la idea de una relación laboral adecuada.

No se los criminaliza por ir a la huelga, dado que esto no lo era, ni por ejercer su actividad sindical, dado que la misma no comprende la comisión de delitos.

Tanto afecta la libertad sindical quien no permite la existencia de los gremios, como quien no permite a los trabajadores que se afilien a tal o cual sindicato (conforme lo demuestran los testimonios de Parada, García, Mayor, Ale Herrera, entre otros), o utiliza a estas organizaciones para fines distintos a los que motivaran su creación.

La violencia, la comisión de un delito, no son conductas que tengan el respaldo del derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis

de nuestra carta magna, ni sean derivación del ejercicio legal de la actividad sindical.

Por lo expuesto, no se advierten eximentes de responsabilidad penal (art. 34 del Código Penal y arts. 209, 210, 371 inc. 3° y 373 del Código Procesal Penal).

Cuarto:

Entiendo que se presentan como circunstancias atenuantes respecto de todos los acusados la carencia de antecedentes penales, según se desprende de los informes del Registro Nacional de Reincidencia agregados al debate.

En relación a los señores Burgos y Molina también debe prosperar el buen concepto que surge demostrado de los informes sociales agregados a los incidentes y, en particular respecto del señor Molina, por los testigos que han declarado en la audiencia y han señalado tenerlo en buena estima.

Por lo expuesto, deben tenerse en consideración las circunstancias atenuantes antes apuntadas (arts. 40 y 41 del Código Penal y arts. 209, 210, 371 inc. 4° y 373 del Código Procesal Penal).

Quinto:

Considero que deben prosperar respecto de todos los encartados los agravantes postulados por el señor Agente Fiscal y relacionados con la extensión en el tiempo que duró la organización delictiva y la cantidad de miembros que integraban la misma.

A contrario de lo sostenido por las Defensas, el tipo penal no establece ni regula ninguna cuestión temporal en lo que debe ser la vida de la asociación ilícita; y en este caso puntual, como bien indicó el doctor Zorzano, su actuación ha sido durante el transcurso de más de una década.

Por otra parte, la cantidad de integrantes, más de 14 miembros, resulta una situación muy significativa, que aporta mayor confianza a los integrantes y facilita las eventuales decisiones ilícitas que se decidan concretar.

En relación a lo expuesto por el Dr. Jara en cuanto a que no se ha probado la intervención de los otros sujetos ya que no se han incorporado al debate las sentencias condenatorias dictadas respecto de los otros acusados, debo decir que esta opinión no resulta correcta. Así, si bien he decidido no aceptar como prueba para este debate la incorporación de las sentencias condenatorias dictadas por distintos Jueces en trámites de juicio abreviado respecto de los otros imputados propuesta por el Ministerio Fiscal, porque estas resoluciones contienen valoración por parte de otros Jueces de elementos probatorios que se debían analizar en este proceso, a un lado ello, la cantidad de integrantes de la organización se ha demostrado

debidamente con la prueba producida en este debate, habiéndose reflejado a partir de las distintas declaraciones testimoniales y la demás prueba analizada, la pluralidad de sujetos –además de los aquí acusados-, que integraban la asociación.

Por otro lado, en modo alguno puede prosperar la objeción formulada por el Dr. Martinez con base en el artículo 210 bis del Código Penal, que señaló debió ser aplicado en todo caso por el Agente Fiscal, dado que esta norma, que efectivamente contempla una cantidad de miembros superior a los 10, está tipificando otro delito, esto es, la conformación de una organización militar destinada a cometer delitos que puedan contribuir a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, no siendo esta la conducta analizada en este proceso.

La utilización de su función de dirigentes sindicales y de las instalaciones y atribuciones que les posibilitaba estar a cargo de dirigir el gremio UOCRA seccional Bahía Blanca, resulta sin duda una circunstancia agravante, demostrativa del mayor peligro de su conducta al aprovecharse de una organización lícita para otros fines.

Con relación al señor Burgos, también deben computarse como agravante la mezquindad puesta de manifiesto por la contratación de empresas a nombre de hijos del acusado, logrando así beneficios económicos de suma importancia.

En lo que respecta al señor Molina entiendo computable como agravante, tal cual lo propuesto por el señor Agente Fiscal, la formación profesional, Licenciado en Trabajo Social, docente, y Concejal electo en la ciudad de Bahía Blanca, formación que le daba herramientas para evitar incurrir en los delitos y no obstante ello los concretó.

No puede prosperar el agravante en cuanto al papel protagónico del señor Molina dentro de la asociación ilícita, dado que si bien he coincidido con el representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que al menos durante un tiempo la asociación de fines criminales tuvo tres jefes, que conformaban un triunvirato, y uno de ellos era el mencionado, tal extremo no fue materia de acusación, en los términos previstos por el artículo 210 en su segundo párrafo y por ende no puede ser trasladado como agravante genérico, ante la omisión incurrida.

Entiendo además que no resulta computable respecto de ninguno de los acusados la agravante de proclividad delictiva por la pluralidad de hechos que habrían cometido cada uno, porque el análisis de esos hechos en este momento se está realizando conforme las reglas del concurso previsto por el código de fondo; analizándose el disvalor de cada injusto en cada caso concreto, y aplicándose –en su caso- la pena única que en definitiva corresponda, según lo establece la ley.

Por todo lo expuesto, con los alcances indicados, deben computarse los agravantes antes mencionados como probados (arts.40 y 41

del Código Penal y arts. 209, 210, 371 inc. 5° y 373 del Código Procesal Penal).

VEREDICTO

Por todo lo manifestado y lo prescripto en los arts. 209, 210 y concordantes del ordenamiento de forma; arts. 40 y 41 del Código Penal, el veredicto en esta causa resulta condenatorio respecto de todos los acusados en lo que respecta al hecho uno.

Que resulta condenatorio el veredicto con relación al señor Burgos también respecto de los hechos 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29.

Que no habiéndose podido determinar la co-autoría penalmente responsable del señor Burgos en los hechos números 6 y 7 el veredicto con relación a los mismos resulta absolutorio, por lo que se lo declara libre de responsabilidad y se dispone su absolución (arts. 1, 209, 371 inciso 2 y cc. del C.P.P.).

Que resulta condenatorio el veredicto con relación al señor Molina también respecto de los hechos 12, 15, 17, 21, 22, 23, 34 y 40.

Que resulta condenatorio el veredicto con relación al señor Paiz también con respecto de los hechos 9, 20, 21, 25, 30 y 38.

Que resulta condenatorio el veredicto con relación al señor Gonzalez también con respecto a los hechos 16, 22, 32 y 33.

Que no habiéndose probado el hecho número 35, acusado al señor Gonzalez, el veredicto en este caso resulta absolutorio, por lo que se lo declara libre de responsabilidad y se dispone su absolución (arts. 1, 209, 371 inciso 1 y cc. del C.P.P.).

Que la acción penal se encuentra prescripta en el caso de los hechos 43, 44 y 45, acusados a los señores Paiz, Gonzalez y Ríos, resultando así el veredicto absolutorio, por lo que se los declara libres de responsabilidad y se dispone su absolución (arts. 1, 209, 371 y cc. del C.P.P.).

Que no hay eximentes.

Que deben valorarse atenuantes.

Que deben computarse agravantes.

Todo lo expuesto de conformidad con los fundamentos ya detallados.

S E N T E N C I A

Por lo expuesto, lo resuelto en los considerandos anteriores y lo dispuesto en el art. 375 del Código Procesal Penal, entiendo:

Primero:

Entiendo que el hecho identificado como número uno debe ser calificado como asociación ilícita, en los términos previstos por el artículo 210 del Código Penal, esto respecto para todos los acusados, a excepción del señor José Burgos, al cual le corresponde la calidad de jefe de la asociación, según lo regula el segundo párrafo de la norma mencionada.

Se pudo establecer que efectivamente varias personas realizaron aportes concretos dirigidos a conformar ese grupo de individuos que luego pretendían cometer delitos.

Las conductas de los sujetos aquí acusados han sido tendientes a integrar la asociación, algunos desde sus orígenes y otros ingresando con posterioridad, dado que como se acreditó han llevado adelante conductas (reuniones, división de tareas, conversaciones, aportes materiales) en pos de ese grupo con fines delictivos que deseaban integrar, habiendo respetado las reglas y decisiones impuestas por los jefes, y permaneciendo en el tiempo durante la vida de la organización.

Está probado que los aquí acusados se juntaron para concretar a futuro distintos hechos, no sólo para cometer uno, dos o tres delitos determinados; sino para concretarlos cada vez que lo querían, pero siempre como parte de esa organización, dentro de ese vínculo especial.

Como bien cita Ziffer “de la existencia de ese plan de cometer “varios delitos” surge no ya un mayor peligro de la acción conjunta de una

pluralidad de agentes, sino, antes bien, un peligro de “latencia”, consistente en la disposición constante de la asociación para la comisión de delitos, sin que cada vez deba renovarse el acuerdo entre los miembros. La “permanencia”, por lo tanto, se refleja en la subsistencia de la amenaza derivada de la expresión activa de la disposición de la voluntad de sus integrantes de colaborar en los hechos delictivos cada vez que la asociación lo requiera, y frente a cuya manifestación ya no existe razón para confiar en que sus integrantes habrán de atenerse a la norma.” (conforme Patricia S. Ziffer, Código Penal Comentado, tomo 9, Baigún Zaffaroni, pag. 390).

Al conformarse esta organización para llevar adelante delitos indeterminados, se afectó la seguridad y tranquilidad pública durante un extenso período de tiempo, en el cual, además, se concretaron una gran cantidad de conductas delictivas, lesionándose así de forma constante y perdurable en el tiempo esa tranquilidad pública que el legislador pretende proteger al regular este delito.

Por otro lado, uno de los aquí acusados, el señor José Burgos, debe ser considerado uno de los jefes de la organización, porque se ha establecido que era uno de los líderes del grupo y así era reconocido por los demás miembros. Estuvo a cargo del mando de la organización delictiva de forma compartida con otros jefes, y así ha obrado en consecuencia.

En relación a los restantes hechos también coincido con el señor Agente Fiscal, ya que de la prueba analizada resulta claro que las

conductas utilizadas por los distintos sujetos que han intervenido en los hechos en los que se concretaron o no disposiciones patrimoniales o la firma de convenios o contratos de servicios, tuvieron por fin afectar la formación de la voluntad, lesionando el derecho de las personas a decidir libremente.

Los medios utilizados han llevado a generar el temor en las distintas víctimas, venciendo así la resistencia que pudiesen oponer y constriñéndolos de esa forma a realizar algo que los afectaba patrimonialmente (Conforme Carlos S. Caramuti, pag. 516, Código Penal Comentado, Baigún Zaffaroni, tomo 6).

La intimidación puede lograrse mediante la amenaza de realizar ciertos actos que pueden ser ejecutados lícitamente, como sería dar intervención al Ministerio de Trabajo ante irregularidades en una obra. Pero lo que torna ilícito y extorsivo el hecho es que con la amenaza de realizar ese acto, que puede ser una facultad jurídica, se persiga un beneficio al cual no se tiene ningún derecho. Cualquiera puede denunciar un hecho, pero es ilícito exigir dinero por la abstención (Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, tomo IV, pag. 315; CNCrim. Y Corr. Sala I, 31-05-05, causa 25.936, “Perez, Carlos A.”, Código Penal Comentado, Baigún Zaffaroni, pag. 606).

Las conductas intimidantes generaron temor en las distintas víctimas, y eso las llevó, en muchos casos, a realizar la disposición

patrimonial o a rubricar los documentos con efectos jurídicos, cuando esas cuestiones no eran exigibles legalmente. Como ha señalado la jurisprudencia constituye "…un requisito típico el relativo a la ilegitimidad de la exigencia, esto es, que no debe existir en el autor un derecho a solicitar la prestación económica ni encontrarse el sujeto pasivo obligado a cumplirla (Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Sala II, 11-04-06, "J.C.R." causa 13161).

Por otro lado, como ya se señaló, a excepción de los hechos 2 y 8, que han quedado en grado de tentativa al no haberse producido la disposición patrimonial, el resto se ha consumado, y todos estos hechos concurren de forma real con el delito de asociación ilícita.

Se trata de un concurso real de delitos, no ideal, entre la asociación ilícita y los distintos hechos que se han tenido por acreditados, porque el tipo penal previsto en el artículo 210 del Código Penal se configura independientemente de que se concrete o intente un hecho delictivo.

Como señala la doctrina, los delitos cometidos por la asociación no se imputan a ésta y, por ende, puede no alcanzar cada delito a todos los integrantes de la asociación, sino a los que efectivamente participaron en el mismo, rigiendo en esto las reglas generales de la imputación personal (conforme Patricia S. Ziffer, Código Penal Comentado, tomo 9, Baigún Zaffaroni, pag. 388).

Que la naturaleza de los delitos que luego se cometieran por los integrantes de la asociación fuese similar, no lleva a poder afirmar que los delitos estuviesen determinados desde un inicio en su tipo, características y cantidad, ni que haya sido todo una única conducta configurativa de un concurso ideal. Obsérvese que incluso había empresas o particulares que quizás no existían al momento de conformarse la asociación, por lo que mal podía tenerse en vista a la misma como sujeto pasivo de un delito determinado, pensado y diagramado en el origen de la organización.

En ese sentido Jorge E. Buompadre sostiene respecto de la asociación ilícita que: "...Se trata de una figura autónoma que funciona independientemente de los delitos que cometen sus miembros. Es una infracción de pura actividad, de peligro abstracto y se consuma, insistimos, por el simple hecho de formar parte de la asociación criminal" (Derecho Penal, Parte Especial, T II, pág. 370).

Por otro lado, la pena de inhabilitación para desempeñar funciones gremiales propuestas por el señor Agente Fiscal resulta adecuada, dado que ha quedado comprobado con la prueba producida que los condenados utilizaron a la institución gremial como pantalla para cometer los delitos.

Se advierte de las constancias colectadas y las conclusiones que se pueden extraer de ellas que no sólo cometieron delitos utilizando las

posibilidades que les brindaba el gremio (tanto por el cargo, como por las dependencias y logística administrativa), sino que además no ejercieron sus funciones, dado que no defendían a sus afiliados y a los demás trabajadores (como surge de las declaraciones que indican que no les importaba si había personal no registrado, falta de seguridad o higiene).

De otra parte, cuando también pudieron aportar una mejor situación laboral para las personas, cuando se encontraban en el rol de empresarios, manejando por sí, familiares o gente vinculada distintas empresas que prestaban servicios a los trabajadores (Acqua, Flor de Lirio, SGT, de viandas), no lo hicieron en debida forma, ya que, como señalaron los testigos, los baños de Acqua estaban sucios, no los limpiaban con la frecuencia necesaria, y el traslado del personal o las viandas de comida eran mucho más caras, según se comentó en la audiencia, pero no por tener una mejor calidad o cantidad de comida, solamente eran más caras que otras empresas, cuestión que demuestra la actitud adoptada desde el rol empresario por parte de ellos (más ganancia, menos servicios, para sus propios compañeros trabajadores).

De ninguna manera puede sostenerse, como lo han indicado alguno de los acusados y algún defensor, que esto se trata de un ataque a la actividad gremial, a los gremios, todo lo contrario, esta inhabilitación se impone en defensa de esa actividad, la cual resulta fundamental en aras de las protección de los derechos de los trabajadores.

Algunas veces escuchamos opiniones de que tal secretario general hace muchos años que está, se hizo rico, dueño de empresas y arregla con algún gobierno, por lo cual los gremios deberían desaparecer.

No comparto esa posición, la actividad gremial es fundamental, hace a la defensa de los intereses comunes de un grupo de trabajadores de una misma actividad, procurando un salario justo y las debidas condiciones laborales; por lo que bien ejercida no puede resultar más que provechosa.

Si existe algún dirigente sindical que no cumpla con su cometido y se enriquezca de forma ilícita cometiendo delitos invocando o utilizando su función gremial, debe ser denunciado y apartado de la función; pero no debe caerse en la posición de proponer eliminar los gremios, actividad que está consagrada por nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis.

Con la inhabilitación que aquí se impone no se pretende atacar a la actividad gremial, todo lo contrario, se la defiende de personas que, escudadas en la misma, descuidaban a sus afiliados y a los trabajadores en general, y se enriquecían cometiendo delitos que en su mayoría procuraban beneficios económicos.

Por ello, corresponde hacer lugar a la inhabilitación especial para el desempeño de actividades gremiales peticionada por el Ministerio

Público Fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 bis del Código Penal.

En cuanto a las multas solicitadas en base a lo estipulado en el artículo 22 bis del Código Penal, entiendo que las mismas resultan procedentes, ya que ha quedado demostrado el ánimo de lucro en la actuación de los acusados, conforme lo postulado por el señor Agente Fiscal.

Por todo lo señalado, las indicadas resultan las calificaciones legales que corresponden a los hechos, debiendo prosperar también las penas de inhabilitación especial y multa peticionadas por la representación del Ministerio Público Fiscal (arts. 5, 20 bis, 22 bis, 42, 55, 168, 210 y cc. del Código Penal, y arts. 375 inciso 1 y cc. del Código Procesal Penal).

Segundo:

Que por todo lo expuesto se **CONDENA** al Sr. **JOSÉ BERNARDO BURGOS**, D.N.I. 14.748.443, nacido el día 26 de febrero de 1962, hijo de Daniel Burgos (f) y de Robertina Medina Silva (f), como **co-autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe –hecho 1-, extorsión en grado de tentativa –hechos 2 y 8-, y extorsión –hechos 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29-, en concurso real de delitos, a la pena de 15 años y 6 meses de prisión, 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades**

gremiales, 90.000 pesos de multa, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 20 bis, 22 bis, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 45, 55, 168, 210 y cc. del Código Penal, y arts. 375 y cc. del Código Procesal Penal).

Se **CONDENA** al Sr. **GUILLERMO ESTEBAN MOLINA**, D.N.I. 11.343.112, nacido el día 19 de octubre de 1953, hijo de Oscar Orestes Molina (f) y de Liria Beatríz Leroy (f), **como co-autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita y extorsión –hechos 12, 15, 17, 21, 22, 23, 34 y 40-, en concurso real de delitos, a la pena de 13 años y 8 meses de prisión, 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades gremiales, 80.000 pesos de multa**, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 20 bis, 22 bis, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 168, 210 y cc. del Código Penal, y arts. 375 y cc. del Código Procesal Penal).

Se **CONDENA** al Sr. **WALTER RAFAEL PAIZ**, D.N.I. 26.333.688, nacido el día 22 de agosto de 1977, hijo de Osvaldo Cesar Paiz (f) y de Zallago Norma (v), **como co-autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita y extorsión –hechos 9, 20, 21, 25, 30 y 38-, en concurso real de delitos, a la pena de 8 años de prisión, 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades gremiales, 70.000 pesos de multa**, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 20 bis, 22 bis, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 168, 210 y cc. del Código Penal, y arts. 375 y cc. del Código Procesal Penal).

Se **CONDENA** al Sr. **MARIO MATÍAS GONZALEZ**, D.N.I. 30.191.194, nacido el día 19 de febrero de 1983, hijo de Alberto Inocencio Gonzalez (v) y de Alba Dina Matus (v), como **co-autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita y extorsión – hechos 16, 22, 32 y 33-, en concurso real de delitos, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión, 7 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades gremiales, 60.000 pesos de multa**, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 20 bis, 22 bis, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 168, 210 y cc. del Código Penal, y arts. 375 y cc. del Código Procesal Penal).

Se **CONDENA** al Sr**. ROBERTO SABINO RÍOS**, D.N.I 24.505.602, nacido el 09 de abril de 1975, hijo de Carlos Roberto Ríos (v) y de Lucía González (v), **como co-autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, a la pena de 4 años de prisión, y 6 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades gremiales**, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 20 bis, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 210 y cc. del Código Penal, y arts. 375 y cc. del Código Procesal Penal).

Tercero:

En lo que respecta al decomiso solicitado por el señor Agente Fiscal corresponde efectuar una aclaración.

Si bien la prueba aquí analizada permitiría advertir la vinculación del dinero secuestrado al momento de la detención del señor

Humberto Monteros con el resultado de parte de los delitos juzgados, como así también aparecerían vinculadas a estas maniobras delictivas las empresas y bienes de las mismas que se han mencionado y relacionadas con Monteros, lo cierto es que el decomiso, según lo dispone el artículo 23 del Código Penal, solo puede disponerse en sentencia respecto del sujeto que resultara condenado, pudiéndoselo extender en ese caso a las personas de existencia ideal o a los terceros beneficiados.

No es esta la situación legal que aquí se presenta, porque no ha resultado condenado aquí el señor Monteros.

Entiendo que estos bienes que se encuentran secuestrados por pedido del Ministerio Público Fiscal deben continuar en ese estado, a la espera de la resolución que se adopte en la investigación penal preparatoria que el Ministerio Público tiene en trámite respecto de la intervención de otras personas que habrían participado en los hechos, siendo este el proceso donde deberá resolverse sobre el particular.

Por otro lado, no surgiendo de las constancias de este proceso la formación de causa por la posible comisión del delito previsto en el artículo 303, 304 y cc. del Código Penal, y en el que podrían haber intervenido personas físicas y jurídicas como Flor de Lirio SRL, SGT Soluciones en grupo de trabajo SRL, ACQUA Servicios SRL, y la Asociación Mutual Construcción Solidaria, dese intervención al señor Agente Fiscal para

que, en su caso y de no haberse ya formado actuaciones, extraiga las constancias necesarias y disponga en consecuencia.

En lo que respecta al decomiso solicitado con relación a los bienes del señor Burgos, quien sí resultara condenado en este proceso, se dispone el decomiso de la camioneta Volkswagen Amarok 2.0, dominio KIB 305, modelo 2011, adquirida el 29/08/2011, fecha de titularidad: 04/01/2016. Los demás bienes que tendrían relación con la empresa Acqua SRL deben continuar secuestrados a disposición de la investigación penal en la que se investigan a los otros intervinientes.

Cuarto:

Habiendo mencionado el señor Guillermo Molina al momento de declarar en la audiencia que quería denunciar al ex presidente Mauricio Macri, a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al Fiscal General Juan Pablo Fernandez, al señor Gustavo Arribas, al señor Noaiz de la AFI Bahía Blanca, y a otras personas más, líbrese oficio a la Unidad Funcional de Instrucción en turno a fin de poner en conocimiento esta situación, a efecto de que en su caso se convoque a audiencia al detenido Guillermo Molina para que pueda concretar la misma.

Quinto:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

Regúlense los honorarios profesionales del Dr. Leonardo Gomez Talamoni, y de la Dra. Bárbara Sager, por su rol como defensores, en la cifra de 100 jus para cada uno, por cada acusado (Art. 9 ley 14967).

Regúlense los honorarios profesionales del Dr. Mariano Jara, por su rol como defensor, en la cifra de 100 jus (Art. 9 ley 14967).

Regúlense los honorarios profesionales del Dr. Sebastián Martinez y de la doctora Virginia Stacco, por su rol como defensores, en la cifra de 100 jus para cada uno (Art. 9 ley 14967).

Regúlense los honorarios profesionales de la Dra. Alicia Busteros, por su rol como letrada del particular damnificado, en la cifra de 100 jus (Art. 9 ley 14967).

Notifíquese la presente sentencia condenatoria a las víctimas del hecho con transcripción de los artículos 5 y 12 de la ley 27.372 y del art. 11 bis de la ley 24.660 (art. 83 del C.P.P.).

Regístrese y comuníquese. Notifíquese y una vez firme, dese intervención al Señor Juez de Ejecución Penal de este Departamento Judicial (artículos 25 y 374, último párrafo del Código Procesal Penal –Ley 11.922).

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 05/10/2021 11:38:45 - CASAS Eugenio - JUEZ

Funcionario Firmante: 05/10/2021 11:40:28 - SCHAMBER Paola Lilian - AUXILIAR LETRADO

239401354003273528

TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 2 - BAHIA BLANCA

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS